Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 201.-

NOMBRAMIENTOS - RENUNCIAS - CESANTIAS - EXONERACIONES

Buenos Aires, 8 de agosto de 1956.-

MEMORANDUM PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA

Por memorándum Nº 235 de fecha 27 de julio ppdo., remitido por esa Secretaría de Estado, se solicita el procedimiento a seguir en materia de reincorporación, nombramientos, cesantías, renuncias y exoneración de personal; en el sentido de si es procedente proyectar en un mismo acto la reincorporación o nombramiento de un agente y la cesantía, renuncia o exoneración de otro, en mérito a las prescripciones del Artículo 13º del Decreto-Ley Nº 7.104/55, modificado parcialmente por el Artículo 1º del Nº 1.635/56.

Sobre el particular debe señalarse que este Departamento sustenta el criterio de que todos los actos que configuren cesantías, renuncias o exoneraciones, competen exclusivamente al Ministerio u Organismo bajo cuya jurisdicción se halle el agente respectivo. En cuanto a nombramientos o sea, la habilitación de vacantes, deben ser dispuestos por separado, de acuerdo a las normas legales que rigen la materia y acompañando en cada caso los elementos de juicio que permitan determinar la necesidad de tal rehabilitación en concordancia con las prescripciones del ya citado Artículo 13º del Decreto-Ley Nº 7.104/55 (modificado por el Nº 1.635/56).-

Fdo. JULIO BROIDE

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 202.-

FERIADOS NACIONALES

Buenos Aires, 4 de julio de 1956.-

CONSIDERANDO:

Que el hecho de que los feriados locales no sean obligatorios para el personal civil de la Nación que presta servicios en el interior del país, impide a los empleados nacionales asociarse a los acontecimientos de significación local, no obstante hallarse ligados por vínculos afectivos a las tradiciones del lugar;

Que, por razones de armonía y convivencia, es de alto interés social que esos servidores del Estado se aúnen con el resto de los pobladores de la zona en sus nobles manifestaciones vernáculas,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO
DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Las Dependencias Nacionales con asiento en el interior del país, observarán los feriados locales que rijan en el lugar de sus funciones.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, Ejército, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Laureano Landaburu - Arturo Osorio Arana - Teodoro Hartung - Julio C.Krause.-

DECRETO-LEY Nº 11.908.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Buenos Aires, 25 de octubre de 1955.-

CONSIDERANDO:

Que es propósito del Gobierno Revolucionario dotar a los cuerpos municipales del país de una creciente autonomía, ya que el régimen depuesto había subvertido totalmente los principios republicanos vinculados a aquéllas;

Que esa situación era particularmente grave en el Municipio de la Ciudad Capital de la República en razón de la complejidad e importancia de sus funciones;

Que asimismo resulta conveniente, de acuerdo a nuestros antecedentes institucionales, determinar la dependencia de la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires a la Presidencia de la República;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- La Administración de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, estará a cargo de un delegado del Poder Ejecutivo con el título de "Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires", quien dependerá directamente de la Presidencia de la Nación. Los actos del Presidente, relacionados con aquel organismo, serán refrendados por el Ministro del Poder Ejecutivo que corresponda según la naturaleza de cada asunto.

ARTICULO 2º.- El Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, ejercerá todas las facultades necesarias para el gobierno y la administración municipal de la Capital de la Nación, con la excepción de la aprobación, reforma o derogación de las disposiciones que reglan las siguientes materias:

a) Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.

b) Ordenanza General Impositiva y Recursos.

c) Planes de urbanización, de ensanche y apertura de calles y avenidas y de formación de plazas, parques y paseos.

d) Planes anuales de ejecución de obras, trabajos y servicios públicos cuya financiación se atiende con recursos extraordinarios.

e) Código de Edificación. La Intendencia podrá autorizar en casos justificados, la subsistencia o realización de obras que por circunstancias excepcionales no pueden ajustarse estrictamente a las normas del Código de la Edificación siempre que con la franquicia no se desvirtúen los fines esenciales del mencionado ordenamiento.

f) Código Municipal de Faltas.

g) Regímenes básicos para el personal municipal en materia de retribuciones y previsión social.

ARTICULO 3º.- De las resoluciones del Intendente que concier nan directamente a materias regladas por leyes, decretos, ordenanzas o disposiciones generales del mismo Intendente, podrá solicitarse reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles de notificadas y recurrirse en subsidio dentro del mismo término para ante el Poder Ejecutivo, por vía del Ministerio de Interior y Justicia. Si el recurso fuere denegado o hubieren transcurrido sesenta (60) días corridos desde la fecha de su interposición, el interesado podrá recurrir de hecho.

Cuando por la índole o urgencia de la medida recurrida sea indispensable para el interés público que ella se haga efectiva sin dilación, lo que deberá hacerse constar en la resolución respectiva, el recurso interpuesto no interrumpirá su cum

plimiento, salvo la facultad del Poder Ejecutivo para disponer su suspensión.

ARTICULO 4º.- Quedan derogados el Decreto Nº 17.687/954, con excepción de los Artículos 1º al 3º y 8º del mismo, y el Decreto Nº 3.378/955.-

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

LONARDI - E. B. Busso.-

DECRETO Nº 1.760.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
Departamento General

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 204.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Buenos Aires, 25 de octubre de 1955.-

Visto lo dispuesto por el Decreto Nº 1.760, y

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente modificar algunas disposiciones de la Ley Nº 14.396, aprobatoria del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para los ejercicios de los años 1955 y 1956, con el objeto de facilitar la gestión administrativa de la Intedencia Municipal;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Delégase en la Intendencia Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por los Artículos 6º,14º,19º y 21º de la Ley Nº 14.396 referentes, respectivamente, a la compensación de créditos presupuestarios, destino de los superávit de ejercicios clausurados de la Dirección General de Obras Municipales, reducción de las emisiones del empréstito municipal vigente y a la distribución de los créditos principales del presupuesto aprobado por dicha Ley.

ARTICULO 2º.- Delégase, además, en la Intendencia Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, en la forma en que para cada caso se establece, el ejercicio de las facultades previstas en los

Artículos 7º, 8º y 9º de la Ley Nº 14.396:

a) Utilización de los créditos adicionales para reforzar las asignaciones previstas por el presupuesto. (Artículo 7º).

b) Ajuste de créditos dentro del presupuesto parcial de cada Secretaría para contemplar reestructuraciones de organismos creación de nuevos o refundición de los existentes. (Artículo 8º).

c) Ajuste del presupuesto y cálculo de recursos de las cuentas especiales. (Artículo 9º).

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

LONARDI - E. B. Busso.-

DECRETO-LEY Nº 1.761.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 205.-

PAGOS - DEUDAS - FACILIDADES

Buenos Aires, 8 de julio de 1953.-

VISTOS y CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 7.271 del 26 de marzo de 1949 se autorizó al Ministerio de Hacienda para resolver de por sí, en los términos del Decreto de 12 de junio de 1928, los pedidos de facilidades de pago por déficit, multas u otros conceptos que se presenten antes los distintos Departamentos de Estado;

Que, con vistas a agilitar el trámite de las respectivas actuaciones, es conveniente delegar dicha función en la Contaduría General de la Nación, ya que es el organismo más indicado para conocer en esta clase de gestiones, directamente vinculadas con la ejecución de los presupuestos de los distintos Ministerios y con el contralor que sobre ellos debe ejercer,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Delégase en la Contaduría General de la Nación la facultad de resolver los pedidos de facilidades de pago que se presenten ante los distintos Departamentos de Estado, con arreglo a lo dispuesto por el Decreto de 12 de junio de 1928.

ARTICULO 2º.- Derógánse las disposiciones que se opongan al presente.

ARTICULO 3º.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

DECRETO Nº 12.433.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 206.-

JUBILACIONES - SUPLEMENTO VARIABLE - BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Expediente Nº 163.562/53.-

///nos Aires, marzo 14 de 1956.-

Vuelvan las presente actuaciones al Ministerio del Interior para manifestarle, con referencia a la consulta formulada a fojas 112 de los obrados adjuntos, que la bonificación por antigüedad no integra el sueldo del agente en actividad a los efectos del cálculo de los beneficios del suplemento variable para el personal en pasividad (Ley Nº 14.378 y Decreto Nº 3.670/49, Artículo 5º).

La norma que caracteriza el otorgamiento de mejoras o beneficios, en todos los casos, es la de tomar como punto de referencia el "sueldo" o "haber básico" de los agentes tanto sean de actividad como de pasividad. Los casos en que la Ley o el Poder Ejecutivo consideran que debe tomarse como base a los efectos del cáculo otros conceptos, así lo indican expresamente.

La expresión utilizada por el Poder Ejecutivo en el primer párrafo del Artículo 5º del Decreto Nº 3.670/49, ha sido la de mantener un equilibrio entre el beneficio que acuerda la Ley Nº 14.378 y el sueldo del agente cuyo haber mensual ha fluctuado considerablemente como consecuencia de las oscilaciones operadas en el costo de la vida.

Por lo expuesto, este Departamento entiende que la liquidación practicada por la Contaduría General de la Nación a fojas 106 del expediente del epígrafe interpreta correctamente las disposiciones en vigor y en consecuencia en el caso en consulta no debe entenderse que la bonificación por antigüedad integra el sueldo básico del agente para calcular el suplemento variable.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. JULIO BROIDE

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 207.-

SUELDO - DIFERENCIA DE HABERES - REEMPLAZOS - PRESUPUESTO

Expediente Nº 7.777/55.-

///nos Aires, marzo 14 de 1956.-

Con lo dictaminado por la Contaduría General de la Nación a fs. 6 de las presentes actuaciones, temperamento que es compartido por este Ministerio, vuelva al Ministerio de Finanzas (Banco Industrial de la República Argentina).

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. JULIO BROIDE

Informe Nº 1.-. Expediente Nº 7777/55-MH

///mo señor Ministro de Hacienda:

Con respecto a la consulta formulada por el Banco Industrial de la República Argentina, esta Contaduría General debe manifestar que el Decreto Nº 10.542/46 establece categóricamente en su artículo 2º que el derecho a reclamar diferencias de sueldos no podrá invocarse cuando se trate de cargos que no figuren en el presupuesto con especificación de tareas y en el artículo 3º se considera esa situación, estableciendo que en tales casos, las diferencias serán procedentes únicamente cuando por decreto del Poder Ejecutivo y resolución de autoridad competente de las Reparticiones Autárquicas, se disponga la designación en el cargo superior dejando establecido el derecho del reemplazante al cobro del sueldo mayor, debiendo concurrir además en el caso, los extremos exigidos en el artículo 1º que dispone que el cargo superior debe hallarse vacante, que el período de reemplazo sea superior a 30 días y que el reemplazo sea legal o reglamentario.

En consecuencia, las situaciones de hecho que se presen-

ten, al no encontrarse compredidas en las prescripciones del referido decreto, sólo pueden ser resueltas por el Poder Ejecutivo al margen del citado régimen.

Sin perjuicio de lo expuesto, esta Repartición reitera aquí lo señalado en otras oportunidades en el sentido de que en materia de reemplazos de cargos superiores deben cumplirse los requisitos que establece el régimen del Decreto Nº 10.542/46, con el objeto de evitar que se sometan al Poder Ejecutivo situaciones de hecho para su regularización, puesto que en tal forma no se cumple con las normas del decreto, que precisamente, tiende a evitarlas.

En cuanto al Decreto Nº 22.485/54, sobre economías, ha sido derogado por el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 7.104 dictado el 28 de diciembre de 1955, a partir del 1º de enero del corriente año.

Con lo expuesto, tengo el honor de elevar a V.E. lo actuado.-

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, febrero 16 de 1956.-

Fdo. Rodolfo J. Tarelli

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 208.-

PROHIBICIONES - NORMAS - ACTIVIDADES COMERCIALES

Buenos Aires, 15 de abril de 1957.-

Visto lo informado por la Dirección General de Obra Social, con respecto a las gestiones que firmas comerciales realizan ante la misma para que se les autorice a desarrollar un plan de ventas en forma directa en las dependencias de este Ministerio, mediante la utilización del sistema de créditos aprobado por las resoluciones ministeriales números 8.263 y 8.336 de 1956, para ser ejecutado por la Obra Social, y

CONSIDERANDO:

Que como lo señala la repartición citada el referido régimen crediticio debe ser administrado con sentido restrictivo, en beneficio del propio afiliado y en concordancia con los fines que lo inspiran;

Que en ese sentido debe evitarse la realización de gestiones por parte de las firmas comerciales que guiadas exclusivamente por fines de lucro, desvirtúan el objeto de la medida;

Que, por otra parte, el ejercicio de tales actividades conspira contra el interés y la dedicación que el agente debe consagrar a sus tareas específicas;

Que en consecuencia, es necesario adoptar los recaudos pertinentes para que las funciones encomendadas a los agentes de este Departamento se cumplan dentro de elementales normas de ética administrativa;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º.- Prohíbese terminantemente a los particulares que concurren a este Ministerio y sus reparticiones, promover ventas al personal o desarrollar actividades comerciales dirigidas a aquel fin.

2º.- Comuníquese, publíquese en el Digesto Ministerial y archívese.-

ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 7.110.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 209.-

LICENCIAS

Expediente Nº 43.591/56 Fs.7
Ref. Modif. art. 35º del Decreto nº 12.720/53, suprimiendo intervención del Gabinete.

///nos Aires, 10 de abril de 1957.-

Vuelva a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación manifestándole que la disposición contenida por el artículo 35º del decreto nº 13.800/56, ha sido confirmada por el decreto-ley nº 23.573 de 31 de diciembre de 1956 (art.37), que fija el Presupuesto General de la Nación y establece al mismo tiempo las normas de economía a que deberá ceñirse su ejecución.

Atento a ello y teniendo en cuenta que la medida de que se trata está orientada con criterio restrictivo, a cuyo fin se ha contemplado la intervención de una nueva instancia previa al pronunciamiento del P.E. que, al gravitar en el diligenciamiento de las actuaciones, limite a lo indispensable la concesión de las respectivas franquicias, no se estima conveniente en las actuales circunstancias la aplicación de un procedimiento más liberal cuya sanción, se advierte, por intermedio de un decreto-ley, vendrá a modificar otro acto similar dictado recientemente.-

ADALBERT KRIEGER VASENA

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 210.-

PASAJES OFICIALES - ORDENES DE CARGA

Buenos Aires, 12 de julio de 1944.-

Visto lo expuesto precedentemente por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación acerca de la situación en que queda el empleado que por razones de servicio es trasladado a lugar distinto al de su residencia habitual, en los casos de jubilación del mismo, o a sus familiares cuando ocurre su fallecimiento;

Estimando equitativo aplicar para el personal del Departamento de Obras Públicas disposiciones semejantes a las que para circunstancias análogas existen en vigencia en otros Ministerios, y

Atento a lo propuesto por el señor Ministro en el expresado Departamento,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Cuando un empleado cese en sus funciones por haberse acogido a los beneficios de la jubilación mientras desempeñaba su cargo, en una localidad situada fuera del lugar de su residencia habitual, se le otorgará, sin cargo, las órdenes oficiales de pasaje de regreso necesarias para él y familiares a su cargo, y las de transporte indispensables para muebles y enseres domésticos, así como también se le reconocerá los gastos que correspondan, en las mismas condiciones establecidas para los casos de traslado.

ARTICULO 2º.- Cuando un empleado fallezca desempeñando funciones en una localidad situada fuera del lugar de su residencia habitual, a la cual haya sido destinado o destacado por razones de servicio, se autorizará la emisión, sin cargo, de la orden oficial para el transporte de sus restos a

ese último punto; igualmente se otorgará sin cargo órdenes oficiales de pasaje para el retorno a su residencia habitual de los familiares que hubiesen estado a cargo del extinto y para el transporte de los muebles y enseres domésticos de éstos, así como también se reconocerá los gastos que correspondan en las mismas condiciones establecidas para los casos de traslado.

ARTICULO 3º.- A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores considérase como lugar de residencia habitual la localidad donde el empleado haya tenido una permanencia en su funciones mayor de diez años, o en su defecto, aquella a que hubiese sido destinado al ingresar.

ARTICULO 4º.- Comuníquese y previo conocimiento de la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, archívese.-

FARELL - Juan Pistarini

DECRETO Nº 18.150/44.-

- - - - - - - - - - - - - - - -

Buenos Aires, 5 de mayo de 1945.-

Visto este expediente, en el que la Dirección General de Adunas solicita se haga extensivo para el personal de ésa Repartición los beneficios que acuerda el Decreto nº 18.150 de fecha Julio 12 de 1944, relativo a la concesión de órdenes oficiales de pasajes a favor de los empleados y familiares a su cargo, que se encuentran destacados en una localidad situada fuera de su residencia habitual; y hayan cesado en sus funciones por fallecimiento o por haberse acogido a los beneficios de la jubilación; como así también las de transporte indispensables para los muebles y enseres domésticos de su pertenencia; atento a lo actuado, y

CONSIDERANDO:

Que si bien por Decreto nº 86.285 de fecha julio 16 de 1936, se ha dispuesto por cuenta del Estado el transporte de los restos de empleados que hayan fallecido mientras desempeñaban sus

cargos; no se ha contemplado en el mismo la situación de los familiares, sus muebles y enseres, en los casos que debieron acompañar al empleado en misión oficial hasta la localidad donde se ha producido su deceso;

Que responde a principios de equidad disponer por cuenta del Estado, el retorno de los mismos hasta el lugar de donde partieron en oportunidad de haber sido designado para desempeñar el cargo de cuya función haya cesado el empleado por fallecimiento o jubilación.

Que por Decreto nº 18.150/44 de fecha Julio 12 de 1944, dictado por el Ministerio de Obras Públicas, se ha dispuesto la concesión de tales franquicias a los empleados de ese Departamento; por lo que correspondería hacerlas efectivas a todo el personal de la Administración Nacional, teniendo en cuenta que los traslados que se disponen para desempeñar funciones fuera de la residencia que les son habituales, obedecen a necesidades del servicio;

Por lo expuesto, y oída la Contaduría General de la Nación y Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Hágase extensivo a todo el personal de la Administración Nacional los beneficios acordados por el Decreto nº 18.150/44 de fecha Julio 12 de 1944 de referencia, dictado por intermedio del Ministerio de Obras Públicas.

ARTICULO 2º.- Los gastos que demande la atención de los servicios de que se trata, se imputarán en su oportunidad a las respectivas partidas del Presupuesto General de Gastos que corresponda.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.-

DECRETO Nº 10.189.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 211.-

CAJA CHICA - COMPRA-VENTA

Buenos Aires, 21 de marzo de 1955.-

Visto la consulta formulada en el Expediente Nº 150.207/55, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 41 del Decreto Nº 5.201/48, reglamentario de la Ley Nº 12.961, establece el procedimiento y régimen de los sistemas de "Caja Chica";

Que en su punto 28 el citado artículo indica como elemento indispensable para instituir tal régimen, la intervención de la respectiva Dirección de Administración, así como el pertinente informe previo de la Delegación de esta Contaduría General;

Que corresponde determinar, la autoridad en cuya jurisdicción se encuentra la facultad de autorizar el funcionamiento del régimen en cuestión ya que ni la Ley de Contabilidad, ni su reglamentación, han establecido en forma expresa cuales son los funcionarios que cuentan con esa atribución;

Que ante ello resulta conveniente y necesario dictar las normas de carácter general que evitando errores, pasibles de ocasionar reparos por parte de esta Contaduría General, indique en forma clara el procedimiento a seguir en cada oportunidad;

Que la situación a que se ha hecho referencia puede encontrar adecuada solución en la aplicación en forma subsidiaria de las facultades que por vía de reglamentación del Artículo 48º, de la Ley Nº 12.961, se ha fijado en cada jurisdicción;

Que, sin embargo lo propuesto en el párrafo anterior no debe entenderse como de carácter general, debiendo en consecuencia dejarse expresamente aclarado que la atribución reconcida

para establecer "Caja Chica", se encuentra en la órbita de los funcionarios que en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 17.906/47 ó del respectivo reglamento jurisdiccional que fija el Artículo 48º de la Ley Nº 12.961, se encuentran facultados para aprobar las licitaciones privadas;

Que en virtud de ello y de lo determinado por el Artículo 73º, inciso f) de la Ley Nº 12.961,

LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Dejar establecido que son competentes para disponer la institución de regímenes de "Caja Chica" los funcionarios que en virtud de lo prescripto por el Decreto Nº 17.906/47 ó del reglamento jurisdiccional a que alude el Artículo 48º de la Ley Nº 12.961, tienen la facultad de aprobar las licitaciones privadas hasta el monto que las disposiciones mencionadas fijan como máximo de la autorización competente.

ARTICULO 2º.- Dése al Digesto Administrativo, cumplido, archívese.-

Fdo. ANGEL B. VUOLO - Dino Dallatana - Rodolfo Tarelli - Juan M. Zanchetti - Aldo Chittaroni - Osvaldo F. Rosinganna.-

RESOLUCION Nº 435.- C.G.N.-



Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 212.-

INDEMNIZACIONES - ACCIDENTES DE TRABAJO

Expediente Nº 5.231/51 y agregados.-

///nos Aires, marzo 14 de 1956.-

Vuelvan las presentes actuaciones al Ministerio de Trabajo y previsión para manifestarle que, en opinión de este Departamento, no sería conveniente resolver de conformidad la situación planteada en las mismas.

En efecto, dar curso favorable y liquidar el importe de los siniestros en los casos de accidentes del trabajo en que no se cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley Nº 9.688 y sus modificatorias, sería caer en violación de lo dispuesto por la propia ley. No es factible, a juicio de este Ministerio, interpretar con larqueza la ley y reconocer derechos que ella no contempla por entenderse que un pequeño exceso en el límite del promedio de los jornales anuales no puede enervar el derecho de los agentes accidentados.

Si la ley ha fijado un límite y este constituye un impedimento para liquidar la indemnización, corresponde que por vía de otro pronunciamiento legislativo se determine dejar sin efecto esa traba.

Sentado el criterio de que no es posible resolver por vía administrativa la solución de los accidentados cuyos haberes promedios superen los $ 3.000.- anuales, debe manifestarse que también incide en la opinión de este Departamento el aspecto económico de la cuestión sometida a su consideración. En efecto, y como bien se deja señalado en el curso de las actuaciones, de aceptarse el criterio que sustentan algunas autoridades, se hallaría el Estado frente al problema de inúmeros casos de agentes que reclamarían por sus derechos la correspondiente liquidación y pago del siniestro que hayan sufrido. Además y al solo

título de antecedente, se recuerda que en todo el curso de este expediente donde se citan dictámenes o fallos ocurridos en la justicia, no se indica en cuanto debe o puede estimarse prudente el exceso del límite de $ 3.000.-

El desconocimiento de los casos que podrían presentarse y encontrarse en "situación de pago" no permite aventurar cálculo alguno que dé la pauta del monto necesario para hacer frente a esos compromisos. A ello debe agregarse que si en época normal siempre resulta de difícil financiación la resolución favorable de problemas de carácter general, como el que se enfoca en estas actuaciones, más lo es en los momentos actuales en que, como es del dominio público, el Poder Ejecutivo ha encarado la realización de fuertes economías en los gastos públicos e impartido expresas instrucciones en el sentido que la gestión administrativa debe llevar impresa el sello de una amplia mesura en la inversión como medio necesario para lograr el equilibrio financiero.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. EUGENIO A. BLANCO

RESOLUCION Nº 30.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 213.-

ADSCRIPCIONES

Buenos Aires, 15 de abril de 1957.-

Visto lo propuesto por la Comisión Interministerial creada por Decreto nª 23.652/56, con referencia a las adscripciones de personal entre las distintas jurisdicciones del Estado, y

CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento de las funciones encomendadas por el artículo 2ª, inciso d) del acto de gobierno recordado, la citada Comisión ha procedido a estudiar el régimen vigente en la materia de que se trata y en tal sentido concluye en la necesidad de suprimir, con carácter general, las adscripciones de agentes entre los Organismos Estatales;

Que en este orden de ideas estima el Organismo proponente que la práctica inveterada y discrecional de dicho procedimiento constituye un factor de anarquía tanto en los cuadros de personal cuanto en los ordenamientos presupuestarios de los respectivos Organismos;

Que el artículo 35ª del Decreto-Ley nª 23.573/56 que reitera normas de igual carácter dictadas en años anteriores persigue, en principio, iguales propósitos, pero admite sin embargo la realización de adscripciones tendientes a cubrir insuficiencias de los planteles necesarios para atender los servicios de las dependencias;

Que es evidente que la previsión contemplada con tan fin racional, se ve reiteradamente desvirtuada en la práctica por su uso indiscriminado y extraño generalmente al objetivo que anima la norma;

Que siendo ello así y atento la necesidad de asegurar el

fiel acatamiento a las normas en vigor, y, especialmente, ajustar los procedimientos administrativos a reglas eminentemente racionales, corresponde suprimir en forma general las adscripciones de personal, con la sola y expresa excepción de las que deban inevitablemente realizarse en aquellos organismos cuya naturaleza particular así lo justifique;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Sustituír a partir de la fecha el texto de los artículos 35º y 40º del Decreto-Ley nº 23.573, del 31 de diciembre de 1956, por los siguientes:

"Artículo 35º.- La situación de revista del personal dependiente de los Poderes Nacionales y Tribunal de Cuentas de la Nación, se ajustará a las siguientes normas:

"a) El personal Administrativo y Técnico, Obrero, de Maestranza, de Servicio o de cualquier otra clase, designado en la Administración Nacional, deberá desempeñarse en la función para cuyo fin ha sido prevista la partida con cargo a la cual se atiende su remuneración, quedando prohibida toda afectación a otros servicios;

"b) Prohíbense las adscripciones de agentes entre los distintos Organismos del Poder Ejecutivo (incluídas las entidades descentralizadas, autárquicas y Empresas del Estado), Poder Legislativo, Judicial y Tribunal de Cuentas de la Nación;

"c) Las jurisdicciones aludidas en el inciso b), adoptarán los recaudos pertinentes a fin de incorporar definitivamente a sus respectivos presupuestos a los agentes que a la fecha estuvieren prestando servicios en las mismas en calidad de adscriptos;

"d) En los casos en que imposibilidades presupuesta-
"rias o necesidades del servicio impidieran concretar lo
"dispuesto, por el inciso c), deberá procederse a la de-
"sascripción del agente antes del 31 de octubre de 1957,
"a los efectos del reintegro del mismo a la jurisdicción
"en la cual es titular;

"e) A partir de la fecha, las adscripciones existentes
"o a disponerse entre los organismos de la Administración
"Central de un mismo Ministerio del Poder Ejecutivo, Po-
"der Judicial, Poder Legislativo y Tribunal de Cuentas de
"la Nación, quedarán limitadas respectivamente al ejercicio
"en curso o a aquel en que sean dispuestas;

"f) Quedan exceptuadas de las disposiciones del presen
"te artículo, las adscripciones de personal a o de: Presi-
"dencia y Vice-Presidencia de la Nación, Intervenciones y
"Organismos de carácter transitorio. Dichas adscripciones
"deberán ser dispuestas en todos los casos por el Poder Eje
"cutivo;

"g) Quedan autorizados los señores Ministros Secreta-
"rios de Estado, los señores Presidentes de ambas Cámaras
"del Congreso de la Nación, el señor Presidente de la Su-
"prema Corte de Justicia de la Nación y el señor Presiden
"te del Tribunal de Cuentas de la Nación para que por reso
"lución interna dispongan la adscripción de personal en-
"tre organismos de su jurisdicción, de acuerdo con lo deter
"minado por el inciso e);

"Artículo 40º.- Las excepciones a lo dispuesto por los ar
"tículos 26º, 27º, 32º, 34º y 36º a 38º, solo podrán ser
"acordadas, frente a necesidades ineludibles de los servi
"cios debidamente documentadas, por Decreto del Poder Eje
"cutivo dictado con intervención del Departamento de Ha-
"cienda;

ARTICULO 2º.- El Tribunal de Cuentas de la Nación, vigilará el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el presente Decreto-Ley.-

ARTICULO 3º.- Incorpórase a la Ley nº 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto) las disposiciones del art. 35º del Decreto-Ley nº 23.573/56 con las modificaciones introducidas por el Art. 1º del presente Decreto-Ley.

ARTICULO 4º.- El presente Decreto-Ley será refrendado por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, Ejército, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Adalbert Krieger Vasena - Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung Eduardo Mc Loughlin.-

DECRETO-LEY Nº 3.891.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Despacho General -

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 214.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - OBRAS PUBLICAS

Buenos Aires, 17 de abril de 1957.-

Visto la consulta formulada en el Expediente Nº 122.801/956 relativa a la intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación y de sus delegaciones en los casos de aplicación de los artículos 35º y 40º de la Ley Nº 13.064, referente a la prórroga en los plazos de terminación de las obras cuando existan causas justificadas y a su recepción, respectivamente,y

CONSIDERANDO:

Que la validez del acto administrativo está subordinada al cumplimiento de requisitos esenciales como lo son la "competencia" y la "legalidad";

Que en la consideración de los casos a que se refiere el artículo 35º de la Ley 13.064 se dan argumentaciones de carácter técnico y también otras que no reúnen ese carácter y que son de juicio y que, complementándose con aquéllas permiten formarse un criterio sobre la validez legal del acto que ha de concretar luego la autoridad competente;

Que, por esos fundamentos, el Tribunal de Cuentas de la Nación en el Informe Nº 544/957 (Contratos y Trabajos Públicos), producido en las actuaciones arriba referidas, se expidió en el sentido de que en la intervención que le compete al Tribunal de Cuentas de la Nación y sus delegaciones en los casos de aplicación del artículo 35º de la Ley Nº 13.064, no se ponderarán las razones esencialmente técnicas que fundamenten la prórroga del plazo de ejecución de las obras, apreciadas bajo la responsabilidad del organismo o funcionario

que competentemente produzca la información;

Que, en cambio, se analizarán las razones que no reúnan ese carácter para apreciar su procedencia y legalidad;

Que igual criterio deberá seguirse en la intervención de las certificaciones de recepción de obras conforme al artículo 40ª de la Ley Nª 13.064;

Por ello, siendo conveniente hacer conocer ese criterio a sus dependencias;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E:

ARTICULO 1ª.- En la intervención que compete al Tribunal de Cuentas de la Nación y sus delegaciones en actuaciones en las que se tramite la prórroga en los plazos de ejecución de obras y su recepción, conforme a los artículos 35ª y 40ª, respectivamente, de la ley nª 13.064, no se ponderarán las razones esencialmente técnicas que fundamenten la prórroga del plazo de ejecución de las obras apreciadas bajo la responsabilidad del organismo o funcionario que competentemente produzca la información.

En cambio se analizarán las razones que no reúnan ese carácter para apreciar su procedencia y legalidad.

ARTICULO 2ª.- Comuníquese por Digesto Administrativo y archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J.Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nª 372.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 215.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - COMPROMISOS - PRESUPUESTO - INTERVENCION PREVIA

Buenos Aires, 17 de abril de 1957.-

Visto lo dispuesto por el artículo 27 de la ley de contabilidad, que prevé la contratación, en los casos que enumera, de obligaciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos a dictarse para ejercicios posteriores, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar establecido si en esos casos procede o no la intervención del Ministerio de Hacienda de la Nación;

Que el artículo 14 de la ley de contabilidad determina que en todo proyecto de ley del Poder Ejecutivo o de decreto que directa o indirectamente modifique la composición o contenido del presupuesto general tendrá intervención el mencionado departamento, sin perjuicio de la que le compete al ministerio correspondiente;

Que, de acuerdo al contenido de este artículo y frente a la incidencia de las contrataciones de que se trata en ejercicios futuros, el Tribunal de Cuentas de la Nación sostiene el criterio de la obligatoriedad de someterlas, en cada caso, a la pertinente intervención del ministerio citado;

Por ello, siendo conveniente ponerlo en conocimiento de sus dependencias,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- En todos los casos en que se contraigan obliga

ciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuesto a dictarse para ejercicio posteriores, el Tribunal de Cuentas de la Nación y sus delegaciones al tomar la intervención que les competa en las respectivas actuaciones sostendrán el criterio expuesto en los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO 2º.- Dése al Digesto Administrativo y archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - José M.Fernández Fariña - Aarón P. Bernardo - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 373.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMIN. NACION
Digesto General

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 216.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - RESPONSABLES - RENDICIONES DE CUENTAS

Buenos Aires, 24 de abril de 1957.-

Visto la necesidad de fijar un ordenamiento en los plazos de presentación de las rendiciones de cuentas por parte de los responsables, y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 98 de la Ley de Contabilidad establece que las rendiciones de cuentas deberán presentarse dentro de los plazos que reglamentariamente fije el Poder Ejecutivo;

Que, hasta tanto se sancione dicha disposición, razones de buen gobierno administrativo aconsejan dictar la norma a la cual deberán en tal aspecto, sujetarse los responsables;

Que, al respecto, resulta conveniente mantener en vigencia el plazo establecido por la reglamentación de la Ley 12.961, en el inciso 7) del articulo 87;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Establecer que hasta tanto el Poder Ejecutivo fije los plazos a que se refiere el 2º párrafo del articulo 98 de la Ley de Contabilidad los responsables deberán presentar sus rendiciones de cuentas dentro del término que fija el inciso 7) del articulo 87 del Decreto nº 5.201/48.

ARTICULO 2º.- Publiquese por Digesto Administrativo, cumplido, archívese.-

RESOLUCION Nº 403.- DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J.Tarelli - José M.Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M.Pérez Arango - César A. Legarreta - Secretario.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 217.-

COSTO DE VIDA

Expediente Nº 171.385/56.-

///nos Aires, octubre 8 de 1956.-

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para manifestarle con respecto al planteamiento formulado en las presentes actuaciones por la Dirección General de Administración Naval del Ministerio de Marina, que lo previsto por la Resolución Nº 73 del 4 de mayo de 1956, aclaratoria de lo dispuesto en el Apartado c) del Artículo 4º del Decreto Nº 3.019/56, concreta la intención de la expresión "o disposiciones similares", a que el mismo se refiere, debiendo ajustarse consecuentemente las liquidaciones efectuadas en contraposición a la misma.

En tal entendimiento y no correspondiendo aplicarse el beneficio del Decreto Nº 3.019/56 sobre lo que el agente percibe en concepto de "salario móvil" acordado por Decreto Nº 2.245/50, es de resorte de esa Contaduría General de la Nación dar el procedimiento a seguir para hacer más viable y económico dicho reajuste conforme el propósito expuesto por la Dirección General de Administración Naval del Ministerio de Marina sin que ello signifique desvirtuar tal pronunciamiento en cuanto al monto resultante que debe percibir cada beneficiario.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. EUGENIO A. BLANCO

RESOLUCION Nº 176.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Despacho General

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin Nº 218.-

TRANSPORTES AEREOS - PASAJES

///nos Aires, 20 de marzo de 1957.-

Visto el expediente nº 53.708 cde.1 (D.G.F.I.H.); Nº 5.053 cde. 1 (D.N.A.C.), lo propuesto por el Director General de Fomento, Instrucción y Habilitación, y

CONSIDERANDO:

Que son frecuentes y permanentes las solicitudes de prestacion de servicios aéreos con aeronaves y personal de esta Dirección Nacional para efectuar comisiones por parte de Organismos no dependientes del Ministerio de Aeronautica;

Que, la realizacion de dichas comisiones representan una importante inversion que esta Dirección Nacional no puede efectuar sin comprometer sus recursos económicos previstos;

Que es necesario por lo tanto determinar una escala de pago por parte de los usuarios para ordenar y sistematizar el transporte aéreo de que se trata,

EL DIRECTOR NACIONAL DE AVIACION CIVIL

D I S P O N E :

1º.- Establécese, ad referendum de la Superioridad la siguiente escala de derechos, que deberán abonar las Reparticiones ajenas al Ministerio de Aeronáutica, que requieran transportes aéreos con aeronaves y personal de esta Dirección Nacional:

a) Con aviones Cessna modelo 180: DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.- m/n.) el kilómetro volado.

b) Con aviones De Havilland Dove 104: CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.- m/n) el kilómetro volado.

c) Con helicóptero Sikorsky S-51: DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000.- m/n) cada SESENTA (60) minutos de operación.

2º.- Cuando se trate de transporte aéreo requerido por el Ministerio de Salud Pública para traslado de enfermos o heridos, se percibirá por cada uno de los traslados el valor del combustible y del lubricante, así como el del viático de los tripulantes de cada aeronave, exclusivamente.

3º.- Los derechos que se recauden en concepto de servicios de la naturaleza antes referida ingresarán a la Cuenta Especial "F.P.P.F.A.C.".

4º.- Formúlese al Ministerio de Aeronáutica proyecto de elevación recabando aprobación de las precedentes normas.

5º.- Publíquese en Boletín de Aviación Civil Público y siga a la Dirección General de Fomento, Instrucción y Habilitación (Base Oficial de Vuelo con Motor y Departamento Administrativo).-

DISPOSICION Nº 77 D.N.A.C.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD y ADMINISTRACION - Despacho General

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 219.-

AUTOMOTORES - PROHIBICIONES

Buenos Aires, 12 de junio de 1956.-

Visto las disposiciones contenidas en el articulo 23 del decreto-ley nº 7.104/55, y

CONSIDERANDO:

Que ante las posibles derivaciones a que podria dar lugar la aplicacion de dicho texto y especialmente con motivo del dictado del decreto nº 2.657/56, sobre reposicion de los automotores actualmente en servicio en la Administración Pública, procede fijar claramente su alcance y las normas básicas a que deben ajustarse las respectivas operaciones;

Por ello, de conformidad con lo informado por la Contaduría General de la Nación en expediente nº 111.350/56 y en uso de la facultad conferida por el articulo 27 del decreto-ley nº 7.104/55, modificado por el nº 1.635/56,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º.- Determínase las siguientes normas aclaratorias respecto a las operaciones que se realicen en la Administración Nacional, en orden a lo determinado por el artículo 23 del decreto-ley nº 7.104/55 y artículo 8º del decreto nº 2.657/56:

a) con el producido de la venta de automotores puede procederse a la adquisicion de un menor numero de unidades, debiendo éstas ser de las mismas características y con igual destino que el de las reemplazadas;

b) en ningún caso se podrá adquirir una mayor cantidad de automotores que los enajenados;

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin Nº 220.-

AUTOMOTORES - PROHIBICIONES

Expediente Nº 72.113/57.-
Mº de Comunicaciones s/autorización para adquirir automóviles en reemplazo de camionetas, con destino al transporte de personal.-

///nos Aires, 29 de abril de 1957.-

Vuelva a la Dirección General de Suministros del Estado, llevando a su conocimiento que este Departamento se abstiene de conceder la autorización gestionada por cuanto los fundamentos invocados por el Ministerio de Comunicaciones no configuran suficientes causales para conceder una excepción a las disposiciones de la resolución nº 8.090/56.

Por otra parte, procede señalar que en las presentes actuaciones no han sido tenidas en cuenta las prescripciones del artículo 8º del decreto nº 2.657/56, en cuanto determina que las unidades destinadas a reemplazar a las que se venden, deben ser adquiridas entre las existentes en plaza, a fin de evitar con ello el uso de divisas.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 7.133.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 221.-

PROHIBICIONES - DENOMINACIONES DEL REGIMEN DEPUESTO

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1956

Atento a la necesidad de ampliar las disposiciones del decreto-ley 4.161/56 que prohibe en todo el territorio de la Nación las expresiones vinculadas al régimen depuesto y a fin de evitar que las mismas sean reproducidas con motivo de la expedición de testimonios o certificados de documentos extendidos durante dicho período.

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Incorporase como párrafo tercero del artículo 2º del decreto-ley nº 4.161/56, el siguiente;

"Todo funcionario público que extienda testimonios o certificados de documentos que contengan nombres de provincias, partidos, distritos, ciudades, pueblos, calles, plazas, etc. y demás designaciones geográficas o de lugares, que habiendo sido establecidos por el régimen depuesto hayan sido cambiados por el Gobierno de la Revolución, así como nombres de instituciones u organismos, públicos o privados, que se encuentren en el mismo caso, deberá sustituirlos por las denominaciones actuales con el agregado entre paréntesis de la cita del presente decreto-ley".

ARTICULO 2º.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por todos los Ministros Secretarios de Estado en acuerdo general.
ARTICULO 3º.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

DECRETO-LEY Nº 22.490.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 222.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

MEMORANDUM Nº 733.-

Para información del señor Director General de Finanzas

Bonificación por antigüedad.- Exptes. 44.398/50 y 34.818/56 del Ministerio de Educación.-Referentes proyecto de decreto por el cual se suprime el inciso h) del art. 6º del D to.nº 16.239/49,que dispone: "el docente que goce de algún beneficio de carácter jubilatorio y se reintegre a la docencia,no acumulará esa antigüedad para la liquidación de la bonificación prevista en el art. 1º,inciso d) de la ley nº 12.914, salvo en el caso en que se acumule tiempo para completar el plazo máximo de veinticinco (25) años".-

Esta Dirección General ha analizado el proyecto de decreto adjunto y considera que el mismo ofrece dos aspectos observables:

I) La bonificación por antigüedad que instituye la ley número 12.914 y reglamenta el decreto nº 16.239/49,al igual que los regímenes similares que se aplican en los distintos Ministerios Nacionales, tiene por finalidad retribuir los servicios prestados por el agente al Estado. Es decir, que constituye un beneficio diri

gido a ponderar exclusivamente el tiempo que el emplea do ha dedicado al ejercicio de la función pública. La bonificación que de ello resulta representa un adicional al sueldo y, al igual que aquél, sufre descuentos jubilatorios.-

Ahora bien, si el agente obtiene su jubilación y esta constituye, en sentido estricto el instrumento a través del cual y a modo de recompensa, aquél obtiene determinado beneficio que es el resultante de la antigüedad acreditada en el empleo, no parece razonable que si el causante vuelve a la actividad, aquellos servicios ya ponderados y gratificados en los regímenes de previsión, sean nuevamente computados para acrecentar el monto de la bonificación de que se trata. Ello representaría abonar una doble retribución por un mismo concepto y a través de un mismo ente, y por lo tanto iría a desvirtuar la esencia misma del beneficio.-

II) Sin perjuicio de lo expresado en el punto I), cabe agregar que disposiciones como la contenida por el inciso h) del art. 6º del decreto nº 16.239/49, cuya supresión se procura, son comunes a los regímenes de bonificación por antigüedad vigentes en la Administración Pública Nacional y siendo ello así, no podrá resolverse favorablemente el caso planteado por el Ministerio de Educación, sin dar a la medida el carácter general que coloque a los restantes agentes del Estado en un mismo pié de igualdad.-

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 25-4-57.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General de
Contabilidad y Administración

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 223.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD - LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1956.-

Visto que por Ley 14.188 se dispuso que los hipódromos y agencias de sport y apuestas mutuas, pertenecientes a la ex Asociación Civil "Jockey Club", pasaran a depender del Ministerio de Hacienda y que por Decreto Nº 9.277/53, se encomendó a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos la administración de aquellos servicios, y

CONSIDERANDO:

Que como consecuencia de los actos de gobierno antes citados, el personal afectado a la explotación de los hipódromos de Palermo y San Isidro, ha pasado a depender directamente de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos;

Que por Decreto Nº 27.591 de 27 de diciembre de 1950, se declaró comprendido al personal de la citada repartición en el régimen de bonificaciones por antigüedad establecido para el Ministerio de Hacienda por Decreto Nº 19.203/48;

Que por Disposición Nº 267/54, la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos dictó las normas relacionadas con la incorporación al beneficio de que se trata del personal mensualizado dependiente de los hipódromos;

Que con tal motivo corresponde considerar el procedimiento a seguir sobre el particular en lo que hace a los agentes con retribución a jornal pertenecientes a la dependencias mencionada;

Que para ello debe tenerse en cuenta el régimen de bonificaciones que en concepto de antigüedad venía aplicándose a los mismos de acuerdo con los convenios celebrados con el ex "Jockey Club", como así también sus condiciones de trabajo y

y situacion de revista;

Que en ese sentido se destaca, que el personal jornalizado de los hipódromos percibía, a la fecha de su transferencia, una bonificación de dos pesos con cincuenta centavos ($ 2,50 m/n.) por cada cinco (5) años;

Que dada la naturaleza especial de sus funciones, gran parte del personal jornalizado sólo desempeña sus tareas los días de reuniones hípicas, alcanzando éstas, generalmente, un promedio de nueve (9) mensuales;

Que el régimen de bonificaciones por antigüedad, fijado por el Decreto número 19.203/48, que rige para el resto del personal del Ministerio de Hacienda -destinado especialmente al personal mensualizado o al jornalizado que actúa veinte o más días mensuales- discrimina el beneficio en varios sectores, de acuerdo con los sueldos y según ellos, el derecho a la percepción de la bonificación se acredita como mínimo con dos, cuatro, seis y ocho años de servicios;

Que con respecto a su personal jornalizado, el Ministerio de Hacienda ha dictado la Resolución número 1.977/53, por la cual se dispone, con carácter general, que a los fines de la bonificación será computado un ano de antigüedad para cada doscientos cuarenta (240) jornales trabajados;

Que en mérito a lo expresado no sería posible incorporar al personal de los hipodromos al régimen comentado, sin que el mismo se viera perjudicado en relación a su situación anterior, como consecuencia del prolongado lapso que debe transcurrir para hacerse acreedor a los beneficios establecidos por el Decreto Nº 19.203/48;

Que frente a tales circunstancias, cabe conceder al personal de hipódromos un régimen especial de bonificaciones por antigüedad, que contemple sus derechos ya adquiridos y se ajuste racionalmente a la naturaleza de los servicios que desempeña;

Que por otra parte y a los fines de determinar la anterioridad con que habrá de hacerse efectiva la medida en cuestión,

resulta equitativo contemplar el lapso transcurrido desde la incorporación de los agentes de que se trata a la planta del Ministerio de Hacienda, durante el cual los mismos estuvieron excluídos de los beneficios del régimen imperante para el resto del personal de dicha Secretaría de Estado, en razon de que el proyecto correspondiente había sido incluído entre las cláusulas del proyecto de renovación de sus convenios laborales y dichas actuaciones -expediente 76.445/53- recién fueron finalizadas el 13 de enero del año en curso, mediante el dictado de la Resolución Ministerial Nº 7.015/56;

Que en consecuencia y atento que las mejoras de sueldos, jornales y subsidios gestionadas en las convenciones aludidas fueron reconocidas por el Decreto número 6.010/56, a partir del 1º de marzo de 1954 -fecha en que vencieran los contratos anteriores- se estima que, por analogía, procede aplicar igual temperamento con el beneficio analizado en el presente;

Que el Decreto número 6.010/56 (Presupuesto 1956)establece la partida pertinente para atender la erogación que la citada bonificación implica;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Establécese, con anterioridad al 1º de marzo de 1954 para el personal con retribución por reunión de los hipódromos dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, una bonificación de tres pesos moneda nacional (m$n. 3.-) por jornal cada cuatro (4) años de antigüedad, la que a los fines de los descuentos jubilatorios, será considerada como adicional al sueldo.

ARTICULO 2º.- Queda comprendido en el presente régimen el personal que reviste con retribución a jornal en los hipódromos de Palermo y San Isidro dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, incluso los que estén cumpliendo servicio militar o fuera incorporados obligatoriamente a las Fuerzas Armadas de la Nación.

ARTICULO 3º.- El agente que se incorpore como conscripto percibirá el cincuenta por ciento del adicional por antigüedad

que le corresponda, en tanto que al incorporado como oficial o suboficial se le liquidarán sus haberes, incluso la bonificación por antigüedad, en orden a lo determinado por el Artículo 28º del Decreto 12.720/53.

ARTICULO 4º.- Se computará como antigüedad bonificable, exclusivamente, la que el agente acredite como empleado de los hipódromos a partir del 1º de enero de 1954.

ARTICULO 5º.- La bonificación por antigüedad del personal de que se trata, será independiente de la que los mismos perciban como titulares de otros cargos en la Administración Nacional, Provincial o Municipal.

ARTICULO 6º.- Los servicios prestados en la Administración Nacional, Fuerzas Armadas de la Nación y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, será computables a los fines de este régimen, con sujeción a lo determinado por el Artículo 8º del presente y siempre que el agente no desempeñe en forma simultánea un cargo en otro organismo en el cual dichas prestaciones sean bonificadas.

ARTICULO 7º.- Si el agente comprendido en el supuesto previsto en el Artículo 6º, ingresara luego a una jurisdicción en la cual se reconozcan algunos de los servicios a que se alude en el mismo, se reajustará su beneficio al cómputo exclusivo de la antigüedad que tuviere acreditada como empleado de los hipódromos y de la que no fuere bonificada en el otro cargo.

ARTICULO 8º.- A los fines previstos por el Artículo 6º establécese que no serán computables:

a) Los servicios prestados en la Administración Nacional, Fuerzas Armadas de la Nación y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que hayan originado pensión, jubilación o retiro;

b) Los servicios provinciales;

c) Los servicios prestados en empresas privadas, con anteoridad a la fecha en que los mismos hubieran pasado a formar parte del Patrimonio Nacional;

d) Los servicio prestados en empresas de capital mixto;

e) Los servicios prestados en calidad de becarios;

f) Los servicios honorarios por los cuales no se hubieran efectuado los aportes a la respectiva Caja de Previsión Social;

g) Los servicios docentes o auxiliares de la docencia que se cumplan simultáneamente con el ejercicio de un cargo en la Administración Nacional, Fuerzas Armadas de la Nacion o Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

ARTICULO 9º.- La bonificación por antigüedad que venia percibiendo el personal, por aplicacion del convenio con el ex "Jockey Club" y que fuera congelada por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos el 31 de diciembre de 1953, se mantendrá en esas condiciones, liquidándose como adicional al sueldo con los descuentos de ley correspondiente.

ARTICULO 10º.- Si al 31 de diciembre de 1953, existieran agentes con períodos de antigüedad sin completar, por aplicación del convenio anterior, se computarán por esta única vez dichos plazos como antigüedad bonificable en el presente régimen.

ARTICULO 11º.- A los efectos del cómputo de la antigüedad serán deducidas las inasistencias y las licencias otorgadas sin goce de sueldo, que excedan del veinticinco por ciento de las reuniones que le correspondiere laborar al agente.

ARTICULO 12º.- Los ajustes por adicionales de antigüedad, se efectuarán al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año, comprendiéndose en la primera fecha a los que estando en condiciones para ello, hubiesen cumplido los períodos de antigüedad entre el 1º de julio y el 31 de diciembre inclusive; y en la segunda, a los que lo hubiesen cumplido entre el 1º de enero y el 30 de junio inclusive. Las liquidaciones que correspondan por estos adicionales se harán efectivas con retroactividad al primer día del mes siguiente a aquél en que se hayan cumplido los períodos.

ARTICULO 13º.- Ratifícase la Disposición número 267/54 dictada por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos.
ARTICULO 14º.- Facúltase al Ministerio de Hacienda para dictar las normas complementarias y de interpretación que estime pertinentes para la mejor aplicación de estas disposiciones.
ARTICULO 15º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos.-

ARAMBURU - Eugenio A. Blanco

DECRETO Nº 21.218.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 224.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD - LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS

Buenos Aires, 9 de abril de 1957.-

Visto el decreto Nº 21.218/56, por el que se fijó el régimen de bonificaciones por antigüedad para el personal jornalizado de los Hipódromos dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4º de dicho decreto determina el cómputo de la antigüedad que acredite el personal, como empleado de los hipódromos, a partir del 1º de enero de 1954;

Que dicha disposición excluye expresamente la acumulación de los servicios prestados por dichos agentes en el ex-Jockey Club, cuyo cómputo fuera congelado por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos al 31 de diciembre de 1953;

Que si bien el artículo 9º admite que la bonificación devengada a la fecha precedentemente indicada permanezca estática y se continúe liquidando como adicional al sueldo, es evidente que carece de valor para acrecentar el beneficio instituído por el régimen que se comenta;

Que tal circunstancia va en detrimento de los intereses de los agentes, sobre todo aquellos más antiguos, ya que el nuevo sistema hace abstracción de las prestaciones acreditadas con anterioridad a la nacionalización de los Hipódromos, para tomar en cuenta únicamente las cumplidas a partir de esa circunstancia, aún cuando los servicios han sido cumplidos sin interrupción;

Que si ello es correcto desde un sentido netamente teórico, pues la bonificación establecida tiene por objeto pri

mordial compensar los servicios prestados en la Administración Nacional, y por otra parte, puede considerarse suficientemente cumplida la obligación del Estado para con dichos agentes, al mantener inalterables los beneficios existentes a la fecha en que se hizo cargo de los servicios de que se trata, resulta también cierto que la disolución de la Asociación Civil Jockey Club, operada en virtud de la Ley Nº 14.188, es un hecho totalmente ajeno a la voluntad del personal y por lo tanto es equitativo procurar que las consecuencias de este hecho, en cuanto pudieren afectar algunos de sus intereses, sean razonablemente compensadas;

Que en mérito a lo expuesto se estima procedente la modificación del régimen de bonificación instituído por el decreto Nº 21.218/56, en los aspectos relacionados con el problema planteado;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Substitúyense los artículos 4º y 9º del decreto Nº 21.218 de 22 de noviembre de 1956, por los que a continuación se indican:

"Artículo 4º: Se computará como antigüedad bonificable, exclusivamente, la que el agente acredite como empleado jornalizado de los hipódromos".

"Artículo 9º: La antigüedad acreditada en los hipódromos por el personal, con anterioridad a la fecha de su nacionalización que fuera congelada por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos al 31/XII/53, será computada a los efectos del presente régimen".

ARTICULO 2º.- Modifícase el inciso c) del artículo 8º del decreto citado, en la siguiente forma:

"c) Los servicio prestados en empresas privadas, con anterioridad a la fecha en que las mismas hubieran pasado a for

mar parte del Patrimonio Nacional, a excepción de las prestaciones aludidas en el artículo 9º".

ARTICULO 3º.- Suprímese el artículo 10º del decreto Nº 21.218/56.

ARTICULO 4º.- La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos procederá a liquidar las diferencias de adicionales que resulten de la aplicación del presente y los que venía percibiendo el personal.

ARTICULO 5º.- Las disposiciones de los artículos 1º, 2º y 3º, se aplicarán con anterioridad a la fecha de vigencia del régimen instituído por el decreto Nº 21.218/56.

ARTICULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda, a sus efectos.-

ARAMBURU.- Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nº 3.729.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletin Nº 225.-

SUELDO - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Expediente Nº 141.219/54.-

///nos Aires, noviembre 23 de 1956.-

Vuelva a la Contaduria General de la Nación para manifestarle que este Ministerio es de opinión que no corresponde liquidar el sueldo anual complementario gestionado por el señor SERAFIN S. PENEDO sobre sumas abonadas con cargo a partidas del rubro "Otros Gastos", por considerar que dicho beneficio, conforme lo establece el Articulo 2º de la Ley Nº 12.915, solamente debe ser liquidado sobre el total de las retribuciones que le fueron acordadas con imputación a partidas de sueldos, jornales y adicionales al sueldo y/o jornal.

Sirva la presente de atenta nota de envio.-

Fdo. EUGENIO A. BLANCO

RESOLUCION Nº 216.-



Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 226.-

PERSONAL - CIUDADANIA

Buenos Aires, 8 de agosto de 1956.-

VISTO:

El Decreto-Ley Nº 14.194 de la fecha, por el que se deroga la Ley Nº 14.354 de ciudadanía y naturalización, y se declara en vigencia en su reemplazo a la Ley Nº 346,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Derógase el Decreto Nº 7.604/55 y demás disposiciones reglamentarias de la Ley Nº 14.354.
ARTICULO 2º.- Declárase en vigor, en cuanto no contradiga lo establecido por el Decreto-Ley Nº 14.194 de la fecha, el decreto de 19 de diciembre de 1931 reglamentario de la Ley Nº 346.
ARTICULO 3º.- Quedan derogadas las disposiciones reglamentarias que exijan la naturalización a los agentes del personal civil de la Nación, en actividad, jubilados o por jubilarse.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Laureano Landaburu

DECRETO Nº 14.199.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 227.-

CONSTITUCION NACIONAL

Buenos Aires, 27 de abril de 1956.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que en la vida institucional de los Estados el acto de mayor trascendencia es el de adoptar su Constitución, o el de introducir en ella reformas sustanciales;

Que la facultad de decidir al respecto es un atributo esencial de la soberanía;

Que las naciones organizadas políticamente sobre principios democráticos y republicanos reconocen como exclusivo depositario de aquella a la totalidad de los ciudadanos, fundamento del que deriva para todos ellos el derecho de libre determinación;

Que este derecho exige para su efectivo ejercicio el goce de una auténtica y absoluta libertad;

Que el Gobierno depuesto se ha caracterizado, a través de todos sus actos, por la presión oficial con que los ha procedido, por la violencia material conque los ha impuesto, y en general, por el desconocimiento calculado y permanente del derecho de expresar ideas a importantes y vastos sectores de opinión y a ciudadanos que supieron mantenerse con abnegado sacrificio al margen del servilismo implantado como sistema;

Que solamente por la gravitación de estas circunstancias, fué posible la reforma constitucional de 1949, la que no ha sido en consecuencia el fiel resultado de una libre discución a la que haya tenido acceso el pueblo todo de la Nación;

Que la finalidad esencial de la reforma de 1949 fué obtener la reelección indefinida del entonces presidente de la República, finalidad probada fehacientemente por la representación opositora en la Convención Constituyente y reconcida por

los convencionales del régimen depuesto;

Que la Revolución Libertadora ha tenido su origen en la necidad de poner término al caos imperante y a las causas que lo originaron;

Que por lo tanto, el gobierno emanado de dicha revolución se considera, en cumplimiento de sus fines primordiales en el imperativo de devolver al pueblo de la República el pleno goce de las instituciones que fueron libremente escogidas y menguadamente alteradas;

Que a tal efecto y en ese orden de ideas corresponde en primer término, con carácter de deber impostergable, restablecer la carta fundamental que fué resultante de una libre auto-determinación requisito al que no se ajustó su reforma de 1949;

Que aún cuando la Constitución de 1853, en la hora actual requiera ciertas reformas, ellas deben ser objeto de un amplio debate público, previo a la Convención Constituyente que haya de sancionarlas;

Que en consecuencia corresponde restablecer, en su anterior vigencia, la Constitución de 1853 con las reformas anteriores al 11 de marzo de 1949 completando de este modo en el orden jurídico fundamental el acto revolucionario que tuvo por objeto abatir el régimen de la dictadura;

Que ha de resolverse también las situaciones de las provincias cuyas Constituciones fueron reformadas bajo el régimen depuesto de acuerdo con los principios consagrados en el orden nacional por la reforma de 1949;

Que igualmente debe contemplarse la situación de las nuevas provincias del Chaco, La Pampa y Misiones, cuyas Constituciones fueron sancionadas por la dictadura;

Por ello,

EL GOBIERNO PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA EN EJERCICIO DE SUS PODERES REVOLUCIONARIOS PROCLAMA CON FUERZA OBLIGATORIA:

ARTICULO 1º.- Declarar vigente la Constitución Nacional sancionada en 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898 y exclusión de la de 1949, sin perjuicio de los actos y procedimientos que hubiesen quedado definitivamente concluídos con anteriori-

dad al 16 de setiembre de 1955.

ARTICULO 2º.- El Gobierno Provisional de la Nación ajustará su acción a la Constitución que se declara vigente por el artículo 1º en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de la Revolución, enunciados en las directivas básicas del 7 de diciembre de 1955 y a las necesidades de la organización y conservación del Gobierno Provisional.

ARTICULO 3º.- Declárase vigentes las Constituciones provisionales anteriores al régimen depuesto sin perjuicio de los actos y procedimientos que hubiesen quedado definitivamente concluídos con anterioridad al 16 de setiembre de 1955.

ARTICULO 4º.- Déjanse sin efecto las Constituciones sancionadas para las provincias del Chaco, La Pampa y Misiones sin perjuicio de los actos y procedimientos que hubiesen quedado definitivamente concluídos a raíz de su aplicación.

ARTICULO 5º.- Hacen parte integrante de la presente proclama, las directivas básicas a que se refiere el artículo 2º y en consecuencia se agregan como anexo.

ARTICULO 6º.- La presente proclama será refrendada por el Excelentísimo señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en Acuerdo General.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

ARAMBURU - I. Rojas - E.B. Busso - A. O.Arana - T.Hartung - J.C.Krause - A. Mercier - L.Landaburu - J.Llamazares L.M.Igartúa - A.Dell'Oro Maini - J.Alizón García -E.A.Blanco - C.A. Alzogaray - P.Mendiondo - L.A. Podestá Costa - F. Martínez - R.C.Migone - S.E. Bonnet.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 228.-

CONSTITUCION NACIONAL

Buenos Aires, 12 de abril de 1957.-

CONSIDERANDO:

Que la vida institucional argentina desarrollada desde la sanción de la Constitución Nacional de 1853 y a través de los distintos períodos de su historia, muestra cómo la Nación logró su desenvolvimiento espiritual, intelectual y económico al amparo de sus sabias y prudentes disposiciones;

Que tal como ocurre en la hora en que vivimos, las cambiantes circunstancias y la necesidad de contemplar las reales exigencias del momento, hicieron convenientes las sucesivas reformas constitucionales de los años 1860, 1866 y 1898, que en nada modificaron la esencia y solidez de sus instituciones originales;

Que los principios fundamentales que consagra la Constitución deben permanecer incólumes, pues han merecido y merecen el respeto y el asentimiento de todas las generaciones, por lo que su custodia y preservación resumen el mejor homenaje que el país puede tributar a aquella auténtica obra de inspiración nacional;

Que la Revolución no sólo tuvo por objeto sustituir gobiernos y reemplazar mandatarios, sino retomar la línea histórica de sus grandes destinos iniciada en mayo y consolidada en Caseros. El derrocamiento del régimen de la dictadura se complementó con la progresiva desarticulación de sus estructuras totalitarias para restablecer el imperio de la moral, de la justicia, del derecho, de la libertad y de la democracia (Directivas básicas del 7 de diciembre de 1955);

Que en el acto mismo de la proclama del 27 de abril de 1956 se afirmó que el restablecimiento de la Constitución de 1853 no importaba desconocer la necesidad de ciertas reformas; pero se declaraba ya entonces que "ellas deben ser objeto de un

amplio debate público, previo a la Convención Constituyente que haya de sancionarlas";

Que el Gobierno de la Revolución Libertadora conceptúa que ha llegado el momento de que el pueblo de la Nación, tomando la intervención directa que le corresponde en la decisión, del orden constitucional, resuelva al respecto;

Que para ello es necesario convocar a una convención reformadora, cuyo temario debe fijarse de antemano para que el electorado conozca el sentido y los límites del mandato que ha de conferir;

Que dicho temario debe integrarse escogiendo como materia de consideración aquellos puntos fundamentales cuya deformación ha permitido desnaturalizar los principios en que reposan nuestros sistemas de gobierno, o que han sido objeto de preferente inobservancia a través de torcidas interpretaciones que conviene desterrar;

Que es propósito del Gobierno de la Revolución que la futura Convención Reformadora se expida en el más breve término compatible con la alta responsabilidad de la tarea que se le confía, a fin de facilitar la plena restauración institucional del país. En el supuesto de que la Convención no se haya pronunciado sobre el regímen electoral y la forma de elección de autoridades hasta el 1º de noviembre del corriente año, se tendrá por rechazada la reforma no sancionada, y la convocatoria para comicios generales a realizarse el 23 de febrero de 1958, se hará, en su caso, de acuerdo con el sistema electoral de lista incompleta y de conformidad con las disposiciones constitucionales no reformadas. Igual sistema se adoptará si la Convención Reformadora dejare librada a la ley la determinación del régimen electoral aplicable en cada elección;

Que se impone, por lo tanto, que el pueblo de la Nación decida por intermedio de sus representantes convencionales:

1º.- Si deben modificarse las bases del sistema electoral;

2º.- Si es necesario afianzar la libertad individual y de expresión y los derechos individuales y sociales; for

talecer el sistema federal y las autonomías municipales; establecer un mayor equilibrio interno entre los poderes del gobierno central, dando al Poder Legislativo independencia funcional y poder de contralor, y fijar las facultades del Poder Ejecutivo, inclusive en la designación y remoción de empleados públicos; propender a un robustecimiento integral del Poder Judicial; e imponer un régimen adecuado de dominio y explotación de las fuentes naturales de energía;

Que el sistema por el que se regirá la elección de esta Convención Reformadora será, como reiteradamente se ha enunciado, el de representación proporcional adoptando aquel que respete de mejor manera la opinión pública con el máximo de eficacia en cuanto a su resultado y tiempo de realización;

Que para integrar la Convención Reformadora, permitiendo la aplicación efectiva de la representación proporcional, es necesario determinar un número de convencionales que asegure una adecuada distribución, tomando en consideración los distritos menos poblados y evite, a la vez, la constitución de un organismo excesivamente numeroso;

Que para lograr aquellos propósitos, resulta conveniente aceptar el criterio combinado que propicia la Comisión de Estudios Constitucionales, adjudicando a cada distrito un número mínimo de dos representantes, más un convencional por cada cien mil habitantes o fracción no menor de cincuenta mil;

Que Santa Fe ha sido tradicionalmente la ciudad de la inspiración constitucional, en razón de que en ella tuvieron asiento la histórica Convención de 1853 y las de 1860 y 1866.

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DE LOS PODERES REVOLUCIONARIOS

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS, DECRETA:

ARTICULO 1º.- Declárase necesario considerar la reforma parcial de la Constitución de 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898.

ARTICULO 2º.- A tales efectos convócase una Convención que se

reunirá en la ciudad de Santa Fe y resolverá:

Si es necesaria la reforma de los artículos 4,5,6,14,16,18, 23,32,37,45,46,51,53,55,57,63,67 (incisos 1,2 y 26), 77,81,82, 83,84,85,86 (incisos 1,5,10,11,19 y 22), 87,94,99,100,101,108 y sus correlativos de forma, reordenando su texto si fuera necesario, con el fin de asegurar:

a) el establecimiento del régimen electoral más adecuado (artículos 37, 46,81, 82, 83, 84 y 85);

b) el afianzamiento del sistema federal de gobierno (artículos 4, 5, 6, 67 (incisos 1, 2 y 26) y 108);

c) el afianzamiento de la libertad individual y de expresión y de los derechos individuales y sociales (artículos 14, 16, 18, 23, 32, 53, 67(inciso 26 y 86 (inciso 19);

d) el fortalecimiento de las autonomías municipales (artículo 5)

e) el equilibrio interno entre los poderes del Gobierno Federal, dando al Poder Legislativo independencia funcional y poder de contralor, y fijando las facultades del Poder Ejecutivo, inclusive en la designación y remoción de los empleados públicos. El robustecimiento integral del Poder Judicial (artículos 45,51,55,57,63,77, 86 (incisos 1,5,10,11 y 22), 87,94,99,100,101);

f) el régimen adecuado de dominio y explotación de las fuentes naturales de energía.

ARTICULO 3º.- La Convención estará integrada por doscientos cinco miembros que serán elegidos por:

Capital Federal	32
Buenos Aires	45
Catamarca	3
Córdoba	17
Corrientes	7

Chaco	6
Chubut	3
Entre Ríos	10
Formosa	3
Jujuy	4
La Pámpa	4
La Rioja	3
Mendoza	8
Misiones	4
Neuquén	3
Río Negro	3
Salta	5
San Juan	5
San Luis	4
Santa Cruz	2
Santa Fe	19
Santiago del Estero	7
Tucumán	8

ARTICULO 4º.- Para ser convencional se requiere ser argentino nativo o por opción y reunir las demás condiciones exigidas para ser diputado.

ARTICULO 5º.- Las elecciones de convencionales se realizarán el domingo 28 de julio de 1957 y se aplicará el Decreto-Ley de Elecciones que se dictará, en cuanto no se oponga el presente decreto.

Dentro de los setenta y cinco días de publicada esta convocatoria, los partidos políticos reconocidos que deseen concurrir a la elección deberán oficializar, ante el Juez Electoral del respectivo distrito, una lista de candidatos a convencionales cuyo número será igual al de cargos a proveerse por cada distrito.

Los candidatos serán propuestos siguiendo la numeración ordinal.

ARTICULO 6º.- Cada elector tiene derecho a votar por una sola lista oficializada.

ARTICULO 7º.- Para establecer el resultado de la elección y el nombre de los candidatos elegidos, en cada distrito electo

ral, se procederá de la siguiente manera:

1ª.- Se practicará el escrutinio por listas;

2ª.- El total de votos de cada lista será dividido sucesivamente desde por uno hasta por el total de bancas a llenar;

3ª.- Los resultados obtenidos serán ordenados decrecientemente, cualquiera sea la lista de la que provengan, hasta llegar al número de orden que corresponda a la cantidad de bancas a llenar;

4ª.- La cantidad que corresponda a ese número de orden es la cifra repartidora, y determina, por el número de veces que esté comprendida en el total de votos de cada lista, el número de bancas que a ésta corresponde;

5ª.- Dentro de cada lista las bancas se asignarán de acuerdo con el orden en que los candidatos han sido propuestos, teniéndose por base la lista oficializada;

6ª.- En el supuesto de que una banca corresponda a candidatos de distintas listas, se atribuirá al candidato que pertenezca a la lista más votada y en caso de igualdad de votos se proveerá por sorteo.

ARTICULO 8ª.- La Junta Escrutadora, al proclamar los nombres de los convencionales electos, proclamará, también, el de los suplentes que corresponda a cada lista, para el caso de que el electo no tomara posesión del cargo en la oportunidad señalada por el Artículo 9ª.

ARTICULO 9ª.- La Convención iniciará su labor antes del 1ª de setiembre de 1957 y terminará su cometido antes del 1ª de octubre del mismo año, pudiendo la Convención misma prorrogar sus sesiones hasta el 14 de noviembre. Se tendrán por rechazadas las reformas no sancionadas y por vigentes las que hubieren sido aprobadas aunque quedaren pendientes mociones de reconsideración a esa fecha, con excepción de las reformas especificadas en el Artículo 2ª, letra a), cuya consideración ca-

duca, con igual alcance, el 1ª de noviembre.
ARTICULO 10ª.- Los convencionales gozarán de las prerrogativas e inmunidades inherentes a los miembros del Congreso de la Nación, desde el día de su elección y durante el tiempo que dure su mandato, y tendrán una única compensación de veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000.-)
ARTICULO 11ª.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se tomarán de rentas generales.
ARTICULO 12ª.- El presente decreto será refrendado por el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores ministros secretarios de Estado en acuerdo general.
ARTICULO 13ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Carlos R. S. Alconada Aramburú - Alfonso de Laferrere - Acdel E. Salas - Tristán E. Guevara - Francisco Martínez - Angel H. Cabral - Pedro Mendiondo - Sadi E. Bonnet - Adalbert Krieger Vasena - Alberto F. Mercier - Julio C. Cueto Rúa Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung Eduardo Mac Loughlin.-

DECRETO Nª 3.838.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 229.-

SUBSIDIO FAMILIAR - SUELDO

Expediente Nª 7.860/56.-

///nos Aires, octubre 25 de 1956.-

Vuelva al Ministerio de Trabajo y Previsión (Caja Nacional de Previsión para el personal de la Industria) para manifestarle con referencia a lo solicitado por el agente de esa jurisdicción don Dante Salvador Irigoyen, lo siguiente:

1ª) La Resolución M.H. Nª 55/54 por la que se establecen las normas para la aplicación del Decreto Nª 9.010/54, no deroga la similar Nª 128/52, debiendo en consecuencia liquidarse en la medida determinada por el punto 18 de la citada Resolución Nª 55/54, el beneficio del subsidio familiar.

2ª) Si el causante supera el tope de m$n. 1.500 fijado para las entradas mensuales normales y permanentes al hogar, deberán deducirse m$n. 100 por aplicación de la Resolución M.H. Nª 128/52, procedimiento por el cual se precisará el monto de las entradas al hogar y permitirá establecer si corresponde o nó, el pago de diferencia alguna en concepto de salario familiar, en concordancia con el ejemplo señalado en el punto 18 ya mencionado.

3ª) El temperamento adoptado por ese Organismo está en pugna con el criterio expresado, por lo que en definitiva corresponde el pago de cualquier diferencia que puede existir a favor del agente de que se trata, hasta el 31/1/56 inclusive, atento que el Decreto Nª 3.019/56 dictado el el día subsiguiente a la fecha indicada, dejó sin efecto la Resolución Nª 128/52.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo.JULIO BROIDE

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 230.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Buenos Aires, 6 de mayo de 1957.-

Visto que el decreto nº 19.203/48, por el cual se establece el régimen de bonificaciones por antigüedad para el personal del Ministerio de Hacienda, determina en su artículo 8º que los ajustes de los adicionales respectivos se efectuarán al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año,y

CONSIDERANDO:

Que dicho procedimiento de liquidación semestral tenía su razón de ser al momento de implantarse el régimen, en virtud del sistema de calificaciones periódicas a que se encontraba subordinada la concesión del beneficio;

Que, habiéndose suprimido por decreto 11.665/56 la calificación del agente como factor regulador del adicional mencionado y no existiendo, por otra parte, razones técnicas o administrativas que obliguen a postergar el ajuste del beneficio luego que el agente ha cumplido el nuevo ciclo de antigüedad, resulta razonable la modificación del sistema comentado, de manera que la liquidación respectiva se opere mensualmente,al igual que la del propio sueldo, conforme se vayan completando los distintos períodos;

Que con ello el agente podrá percibir inmediatamente de haber acreditado la antigüedad necesaria, la bonificación a que le dá derecho esa circunstancia, a diferencia de lo que ocurre por aplicación del régimen vigente, donde tales ajustes sólo se efectúan dos veces en el año;

Que, por otra parte, el procedimiento propuesto concilia perfectamente con las disposiciones establecidas por el artículo 1º de la Ley de Contabilidad aprobada por el decreto-ley nº 23.354/56, en cuanto determina las nuevas fechas de apertura

y cierre del ejercicio financiero, no así el sistema vigente, en el cual las operaciones correspondientes al último semestre -31 de diciembre- quedarían al mergen del citado ejercicio;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 8º del decreto nº 19.203/48, en la siguiente forma:

"Artículo 8º: Los ajustes de los adicionales por antigüe-
"dad se efectuarán mensualmente, compredíéndose en ellos
"a los agentes que hubieran completado el nuevo ciclo den
"tro del mes inmediato anterior".-

ARTICULO 2º.- La modificación establecida por el artículo 1º comenzará a regir a partir del 1º de julio de 1957.
ARTICULO 3º.- Las disposiciones contenidas por los artículos 1º y 2º del presente, serán de aplicación también con respecto al régimen que, sobre la misma base y a iguales fines, fué fijado para el personal de la Dirección General Impositiva por los decretos números 19.204/48 y 6.011/56.-
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nº 4.664.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 231.-

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - LEY DE CONTABILIDAD - RENDICION DE CUENTAS - RESPONSABLES

Buenos Aires, 6 de mayo de 1957.-

Visto el artículo 91 y los pertinentes de la ley de contabilidad, que tratan sobre las cuentas de los responsables y de las funciones privativas de este Tribunal para acordar descargos definitivos o declarar deudores del fisco a los diversos responsables, y

CONSIDERANDO:

Que, genéricamente, son responsables "los agentes de la administración nacional y los organismos o personal a quienes se les haya confiado el cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u otros bienes de pertenencia del Estado o puestos bajo su responsabilidad" (art. 91 de la ley de contabilidad);

Que no obstante ello, la citada ley admite una división de los responsables en dos grandes categorías:

a) los responsables directos que, normalmente, son jefes de los respectivos servicios administrativos, y que deben rendir cuenta periódica a este Tribunal (art. 98 de la ley de contabilidad),

b) los responsables que deben rendir cuenta de su gestión a los responsables directos a efectos de su incorporación en la rendición universal de éstos;

Que la centralización de las cuentas responde a la circunstancia apuntada de que son los responsables directos quienes deben rendir ante el Tribunal de Cuentas y que es por su conducto que aquél hace conocer la aprobación o los reparos que el examen de las cuentas le merezca;

Que, consecuentemente, los responsables directos deberán dejar constancia en las rendiciones de cuentas de los reparos que hubieren formulado a los responsables ante ellos y que no hubiesen sido sbsanados, ya que en caso contrario serán considerados únicos responsables de los actos que hayan sido objeto de reparo por el Tribunal de Cuentas;

Por todo lo expuesto y atento a las facultades que le otorga el artículo 84, inciso o) de la ley de contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los obligados a rendir cuenta universal ante este Tribunal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 98 de la ley de contabilidad, serán considerados únicos responsables de los reparos que como consecuencia del examen de las cuentas el mismo formule.

ARTICULO 2º.- En el caso de que dichos obligados hayan formulado reparo a las cuentas de los responsables ante ellos y éstos haya sido subsanado deberán reflejarlo en la cuenta universal.

Si el Tribunal compartiese tal reparo, la cuenta universal que lo contenga será objeto de descargo definitivo y en el mismo acto se formulará cargo al agente responsable, el que desde ese momento lo será en forma directa ante este Tribunal. Esta circunstancia se hará saber a la Contaduría General de la Nación para que se practiquen las operaciones contables pertinentes.

ARTICULO 3º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Wifredo Dedeu - José M.Fernández Fariña - Eusebio E. Villar Antonio M.Pérez Arango - César Aguirre Legarreta -Secretario-

RESOLUCION Nº 456.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 232.-

ESCALAFON - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Buenos Aires, 1º de agosto de 1956.-

Visto el Expediente Nº 113.380 del registro del Ministerio de Hacienda, por el que se ha tramitado la situación del personal dependiente de la Dirección General Impositiva, que presta servicios en otros Ministerios y/o reparticiones como adscriptos o en comisión, y

CONSIDERANDO:

Que el personal que se encuentra prestando servicios en las condiciones mencionadas, no reúne, en principio, los requisitos que establece el Decreto Nº 4.653 del 18 de marzo de 1953 y su modificatorio el 13.937 del 20 de agosto de 1954, para tener derecho a la promoción automática que ese decreto acuerda;

Que esa circunstancia, que enervaría el derecho de ese personal, se produce como consecuencia de que las planillas anexas a dichos decretos concretan las funciones que deben desempeñarse para tener derecho a los sueldos básicos que en cada caso, se señalan, funciones especiales y técnicas que, en términos generales, no pueden desempeñar quienes no prestan servicios en la Dirección General Impositiva;

Que la Contaduría General de la Nación, consultada sobre el particular, estima que la aplicación automática del escalafón sólo procede cuando se ha producido la efectiva prestación del servicio en las funciones que específicamente determinan las recordadas planillas anexas;

Que, frente a tales consideraciones es necesario dictar la medida relativa a aclarar la situación del personal referido, teniendo en cuenta para ello que las adscripciones y/o comisio

nes se concretan en función de superiores necesidades de la Administración y que, en general, no se resuelven con el consentimiento previo indispensable de los agentes, sino en la relación con las conveniencias y/o ventajas que la prestación de sus servicios en otras reparticiones, han de reportar;

Que, no resulta equitativo que ese personal, cuyos servicios especializados, son requeridos por otras reparticiones, se encuentra en distintas condiciones que el resto, en lo que se refiere a aplicación automática del escalafón;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- El personal que revistando en el presupuesto de la Dirección General Impositiva, se encuentre en Comisión o adscripto a otras dependencias de la Administración Nacional, deberá ser considerado a los efectos de la aplicación de los beneficios automáticos que acuerdan los Decretos Nros. 4.653/53 y su modificatorio 13.937/54, en las mismas condiciones que el que presta servicios en dependencias de dicha Dirección General.

ARTICULO 2º.- Exclúyese de lo dispuesto en el Artículo anterior al personal que reviste adscripto o en comisión en otras dependencias, cuando esa situación de revista se haya dispuesto a pedido del agente.

ARTICULO 3º.- Ratifícase las disposiciones que hasta la fecha hayan dictado por la Dirección General Impositiva, relativas a personal que se encontrara en las condiciones expuestas y en la que se haya resuelto en concordancia con las normas que se determinan por el presente decreto.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase, para su cumplimiento y efectos al Ministerio de Hacienda de la Nación.-

ARAMBURU - Eugenio A. Blanco

DECRETO Nº 13.804.-

ción ministerial, el original del mismo deberá acompañarse de dos copias autenticadas con destino al archivo del Tribunal.
ARTICULO 2º.- Cuando el Tribunal de Cuentas de la Nación intervenga en función de lo dispuesto en el artículo 85 de la ley de contabilidad, los originales o copias fotográficas de los decretos-leyes, decretos o resoluciones ministeriales, deberán acompañarse dos copias autenticadas.
ARTICULO 3º.- Si del acto en que interviene el Tribunal de Cuentas fuera necesario dar conocimiento a más de una delegación, deberán acompañarse los ejemplares autenticados necesarios para su cumplimiento.
ARTICULO 4º.- Los señores delegados deberán llevar la presente resolución a conocimiento de los ministerios y reparticiones u organismos ante los que están destacados.
ARTICULO 5º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos resposables y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Wifredo Dedeu - José M. Fernández Fariña - Eusebio E. Villar Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 476.-

ARTICULO 3º.- Dentro de las facultades que se le otorgan por el presente decreto-ley, la Comisión Interventora y Administradora designada por Decreto Nº 959 del 23 de enero de 1956, deberá requerir la previa conformidad del Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda, para comprar, enajenar, transferir bajo cualquier título o concepto, hipotecar, o realizar cualquier otro acto de disposición relativo a bienes de o para el Instituto Nacional de Acción Social.

ARTICULO 4º.- El presente Decreto-Ley será refrendado por el Excelentísimo señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Ejército, Marina, Aeronáutica, Interior, Hacienda y Asistencia Social y Salud Pública.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Eugenio A. Blanco - Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung - Julio C. Krause - Eduardo B. Busso - Francisco Martínez.-

DECRETO-LEY Nº 4.067.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 234.-

FACULTAD MINISTERIAL - NOMBRAMIENTOS - PROMOCIONES - RENUNCIAS - CESANTIAS - EXONERACIONES

Buenos Aires, 27 de abril de 1955.-

Visto lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Nº 14.395, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con dicha disposición, debe procederse a la revisión de las disposiciones legales y administrativas mediante las cuales se otorgan a los Ministerios y organismos del Estado, facultades para disponer por su sola autoridad, nombramientos, promociones y remociones del personal;

Que de acuerdo con el propósito perseguido por el citado artículo, de restituir al Poder Ejecutivo el ejercicio de dichas facultades, procede declarar la caducidad de las mismas; sin perjuicio de considerar por vía reglamentaria, previo los estudios necesarios y para casos debidamente justificados, la elasticidad indispensable para el normal desenvolvimiento de las actividades de los servicios;

Que el estudio de esas situaciones, demandará un lapso que exige adoptar desde ya las providencias necesarias para que la caducidad de las autorizaciones de que disponen actualmente los Ministerios y organismos del Estado para efectuar designaciones, promociones y remociones de personal, no se traduzca en un perjuicio para el desenvolvimiento de los servicios a su cargo;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- En función de lo dispuesto por el artículo 23

de la Ley Nª 14.395, declárase caducas, al vencimiento del término previsto por dicho artículo, todas las disposiciones legales y administrativas mediante las cuales se acuerdan a los Ministerios y Organismos del Estado, facultados para efectuar por su sola autoridad, nombramientos, promociones y remociones del personal de sus respectivas jurisdicciones.

ARTICULO 2ª.- Autorízase a los Ministerios y Organismos del Estado para continuar aplicando con carácter de reglamentación provisoria los regímenes existentes en sus respectivas jurisdicciones al 31/12/54 en materia de nombramientos, remociones y promociones de personal.

ARTICULO 3ª.- Los distintos Ministerios propondrán al Poder Ejecutivos con intervención del MINISTERIO DE HACIENDA, antes del 30 de JUNIO del corriente año, con los elementos de juicio que lo justifiquen acabadamente, los casos que exijan un régimen especial de excepción a lo dispuesto por el artículo 1ª de este decreto.

ARTICULO 4ª.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de HACIENDA.

ARTICULO 5ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación, a sus efectos.-

DECRETO Nª 6.129.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 235.-

JUBILACIONES - COSTO DE VIDA

Buenos Aires, 12 de julio de 1955.-

Visto el artículo 33 de la Ley Nº 14.370, modificatoria de regímenes nacionales de previsión social, en cuanto autoriza para establecer la computación de adicionales, bonificaciones, suplementos y complementos de asignaciones, sea cual fuera su denominación a los efectos de determinar el haber de pasividad de los agentes al servicio del Estado, y

CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo estima conveniente y oportuno disponer en uso de la facultad referida que, a partir de la fecha de este pronunciamiento, los servidores públicos incorporados a diversos regímenes provisionales del Instituto Nacional de Previsión Social, pueden adicionar a sus sueldos, con ese mismo carácter y a los fines antes enunciados, los importes percibidos en concepto de bonificación por costo de vida en virtud de lo reglado por los Decretos Nros. 7.025 de fecha 13 de abril de 1951 y Nros. 6.000 y 6.019 ambos de fecha 25 de marzo de 1952, como así también aquellas sumas que regular y habitualmente se liquidan a agentes al servicio de la Administración Nacional, como forma de compensarles los gastos inherentes al ejercicio del cargo que los mismos desempeñan;

Que, por razones de equidad y justicia, igual tratamiento debe acordarse, cuando así corresponda, en favor de todos aquellos beneficiarios de los mismos regímenes previsionales, que actualmente perciben haberes de pasividad en cuya determinación no han sido consideradas las bonificaciones por costo de vida y las compensaciones de gastos antes aludidos, en tanto las recomputaciones de que se trata resulten convenientes para los interesados por significar una incrementación de sus percepciones;

Que, asimismo, procede reglar todo lo inherente a los cargos que deben formularse en su momento a los agentes en actividad que en el futuro se beneficien con la medida en examen, como igualmente al propio Estado en su condición de patrono, por los importes que corresponda percibir al respectivo organismo de previsión en concepto de aportes personal y patronal en virtud de las nuevas computaciones que se autorizan a los fines jubilatorios;

Que en lo que atañe a los actuales beneficiarios de prestaciones de pasividad cuyos haberes se reajusten de conformidad con lo expresado en el segundo considerando, se estima procedente que tales reajustes se efectúen sin cargos para los jubilados y pensionistas y para el Estado, en razón de que las diferencias que resultan en favor de aquéllos pueden ser consideradas como una forma de las bonificaciones o suplementos que autoriza el artículo 1º de la Ley Nº 14.370;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- A partir de la fecha del presente decreto, los agentes comprendidos en regímenes previsionales del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL cuyos haberes de pasividad se determinen sobre la base de escalas de reducción, podrán optar -en el momento de acogerse a los beneficios jubilatorios- por la computación a su favor, como sueldo y a los efectos de la determinación del haber respectivo, de las bonificaciones percibidas en concepto de costo de vida por aplicación de los Decretos Nros. 7.025/51, 6.000/52 y 6.019/52 sobre las que no se hubieran efectuado aportes jubilatorios en razón de su propia naturaleza.

Dicha computación sólo podrá efectuarse por el período considerado para determinar el haber del beneficiario.

ARTICULO 2º.- Los afiliados a los regímenes de previsión a que se refiere el artículo anterior que al presente se hallaren gozando de prestaciones, tendrán derecho a solicitar la recompu

tación de sus haberes a los efectos de que se consideren en la determinación de los mismos las bonificaciones aludidas en dicho artículo y siempre que tal procedimiento resulte beneficioso para los interesados.

ARTICULO 3º.- Los cargos que en concepto de aportes y contribuciones correspondan a los afiliados y al Estado por las bonificaciones que se computen en favor de aquellos con arreglo a lo establecido por el artículo 1º, serán calculados sin intereses por el respectivo organismo previsional y su cancelación se operará, a partir de la fecha en que se acuerde el beneficio jubilatorio, de la siguiente forma:

Aporte del afiliado: CINCO POR CIENTO (5%) de deducción sobre su haber mensual de pasividad.-

Contribución del Estado: Total del cargo que le corresponda, abonado con imputación a la Ley Nº 13.654.-

ARTICULO 4º.- La recomputación que contempla el artículo 2º implica la supresión de las bonificaciones acordadas por los artículos 14 y 9º de los Decretos Nros. 7.025/51 y 6.000/52, respectivamente, y el mayor haber de pasividad resultante en favor de los beneficiarios será liquidado sin cargo por el organismo de previsión correspondiente, desde el mes en el curso del cual se hubiera solicitado aquella recomputación.

ARTICULO 5º.- Iguales procedimientos que los establecidos por los artículos precedentes y para los mismos regímenes previsionales a que esas disposiciones se refieren, serán de aplicación con respecto a los importes acordados a los agentes al servicio del Estado, en concepto de compensación por las erogaciones que les originen sus respectivas funciones, siempre que tales importes hayan sido liquidados en forma habitual y permanente y en razón de los cargos que aquellos hubieran desempeñado.

ARTICULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de TRABAJO Y PREVISION y de HACIENDA DE LA NACION.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

DECRETO Nº 11.001.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 236.-

PENSIONES GRACIABLES

Expediente Nº 160.409/47.-

///nos Aires, noviembre 29 de 1956.-

Vuelva al Ministerio de Trabajo y Previsión para manifestarle que este Departamento de Estado es de opinión que el Gobierno Provisional se arrogó la autoridad del Poder Legislativo con el fin de poder dictar exclusivamente las medidas necesarias para el desenvolvimiento de la Nación, pero que el otorgamiento de pensiones de carácter gracioso -que no constituye una exigencia para la vida de la Nación- debe ser reservado para proceder a su resolución una vez establecidas las autoridades constitucionales, limitándose el Gobierno Provisional a resolver aquellos casos que por circunstancias y características muy particulares y debidamente fundamentadas merezcan un tratamiento especial.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. EUGENIO A. BLANCO

RESOLUCION Nº 227.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 237.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - ASESORAMIENTO - INTERVENCION PREVIA - COMUNICACION DE ACTOS - NORMAS

Buenos Aires, 9 de mayo de 1957.-

Visto la necesidad de organizar el archivo de antecedentes relacionados con la intervención que compete a este Tribunal de Cuentas de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que es imprescindible contar con los elementos de juicio necesarios que posibiliten, a los distintos servicios que componen a este organismo, el desenvolvimiento normal de sus tareas, evitando así el entorpecimiento que dimana de la carencia de tales elementos;

Que en materia de anteproyectos o proyectos de decretos o decretos-leyes para los que se recaba la opinión del Tribunal de Cuentas es indispensable destinar al archivo de secretaría un ejemplar, al igual que otro debe ser entregado al servicio que interviene en el despacho del proyecto;

Que esta situación se torna aún más relevante cuando el Tribunal de Cuentas debe intervenir en función de lo dispuesto en el artículo 85 de la ley de contabilidad, circunstancia que hace indispensable, además, contar con los ejemplares que requiere la notificación de la resolución respectiva a la delegación pertinente;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1ª.- En los casos en que se requiera el asesoramiento previo sobre un proyecto de decreto-ley, decreto o resolu-

ción ministerial, el original del mismo deberá acompañarse de dos copias autenticadas con destino al archivo del Tribunal.
ARTICULO 2º.- Cuando el Tribunal de Cuentas de la Nación intervenga en función de lo dispuesto en el artículo 85 de la ley de contabilidad, los originales o copias fotográficas de los decretos-leyes, decretos o resoluciones ministeriales, deberán acompañarse dos copias autenticadas.
ARTICULO 3º.- Si del acto en que interviene el Tribunal de Cuentas fuera necesario dar conocimiento a más de una delegación, deberán acompañarse los ejemplares autenticados necesarios para su cumplimiento.
ARTICULO 4º.- Los señores delegados deberán llevar la presente resolución a conocimiento de los ministerios y reparticiones u organismos ante los que están destacados.
ARTICULO 5º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos resposables y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Wifredo Dedeu - José M. Fernández Fariña - Eusebio E. Villar Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 476.-

Boletín Nº 238.-

BONIFICACION COMPENSATORIA - LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS

Buenos Aires, 2 de agosto de 1956.-

Visto la Resolución M.H. Nº 7.097/56, ratificada por el Decreto Nº 6.010 de fecha 16 de marzo de 1956, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 2º de la precitada resolución se instituyó, a partir del 4 de febrero del año en curso, para todo el personal -excepto el de juego- que reviste en la Cuenta Especial "Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, Explotación de Salas de Entretenimientos" una bonificación equivalente al 13% del total de los fondos que ingresan anualmente a la denominada "Caja de Empleados", en sustitución de los beneficios que con cargo a la misma percibía hasta dicha fecha ese personal, temperamento que igualmente será de aplicación en lo sucesivo;

Que en virtud de lo dispuesto por el Artículo 5º de la Resolución M.H. Nº 7.097/56, se hace necesario dictar la reglamentación a que han de ajustarse la liquidación y el pago de la bonificación de referencia;

Por ello y atento lo determinado por el Artículo 27 del Decreto-Ley Nº 7.104/55 modificado por el Artículo 1º del Decreto-Ley Nº 1.635/56,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Denomínase Bonificación Compensatoria a la instituída por la Resolución del Ministerio de Hacienda de la Na

ción Nº 7.097/56, ratificada por el Artículo 10 del Decreto Nº 6.010 de fecha 16 de marzo de 1956.

ARTICULO 2º.- El otorgamiento de la bonificación mencionada se ajustará a las disposiciones de la presente reglamentación cuya aplicación regirá con efecto a partir del día 4 de febrero de 1956.

ARTICULO 3º.- Establécese que es acreedor a la Bonificación Compensatoria a que se refiere este decreto, todo el personal -excepto el de juego- que reviste en la Cuenta Especial "Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, Explotación de Salas de Entretenimientos" que, conforme lo contempla el Artículo 2º de la Resolución del Ministerio de Hacienda de la Nación Nº 7.097/56, deje de percibir el beneficio a que dicho artículo hace mención.

Igualmente gozará de aquella bonificación el personal que correspondiendo a otra jurisdicción presupuestaria, se desempeñara en calidad de adscripto a los casinos comprendidos en la Bonificación Compensatoria, por un lapso mayor de Treinta (30) días contínuos. Para la liquidación de los beneficios correspondientes a esta clase de personal serán de aplicación las escalas establecidas en los Artículos 10 y 11 según corresponda.

Facúltase a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos para establecer las funciones que se encuentran comprendidas dentro de la actividad del juego.

ARTICULO 4º.- Todo agente que fuera designado para prestar servicios en las condiciones que establece el Artículo 3º, percibirá el beneficio desde la fecha de alta efectiva.

ARTICULO 5º.- El personal que haga uso de francos hebdomadarios -aunque estos sean sin jornal- será acreedor de los beneficios de esta bonificación, siempre que los mismo coincidan con los días de funcionamiento de las Salas de Entretenimientos.

ARTICULO 6º .- Cuando existan vacantes en cualesquiera de

las escalas, o se operasen suspensiones, inasistencias o cualquier otro motivo que determine la no liquidación de la Bonificación Compensatoria, ésta se distribuirá proporcionalmente entre el resto de los beneficiarios.

ARTICULO 7º.- Cuando la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos disponga descuentos en los sueldos o jornales por falta de puntualidad, inasistencias, suspensiones, etc.,los agentes afectados no serán acreedores al beneficio en la proporción pertinente, aunque tales descuentos no coincidan con días de funcionamiento de las Salas de Entretenimientos. Los descuentos que se efectúen por tales conceptos se harán en base al promedio de días de funcionamiento de las citadas salas durante el mes en que se produce la falta.

En casos de situaciones administrativas o sumarios que determinen la suspensión provisional de algún agente, se retendrá la parte de Bonificación Compensatoria correspondiente al causante, mientras se aclare en definitiva su situación, no pudiendo hacerse uso de dichos fondos hasta esa oportunidad. Si el agente resultase sancionado, serán de aplicación las disposiciones del Artículo 6º.

ARTICULO 8º.- A los agentes que cumplen con el servicio militar obligatorio, se les liquidará el Cincuenta por ciento (50%) del beneficio que les hubiera correspondido por días de trabajo efectivo.

ARTICULO 9º.- La adjudicación de puntos se establecerá por la categoría de presupuesto y antigüedad de cada agente,con un máximo de Ochenta (80) puntos en la escala correspondiente hasta la categoría inmediata inferior a Subgerente. Para el personal de categorías superiores regirá lo dispuesto por el Artículo 11.

ARTICULO 10º.- A las categorías de presupuesto se les asignará un puntaje que no podrá ser inferior a Quince (15) ni superior a Cincuenta (50) de acuerdo con la siguiente escala:

a) Personal mensualizalo:

Hasta Oficial 9ª	15 puntos
de Oficial 8ª a Oficial 6ª	20 "
de Oficial 5ª a Oficial 3ª	25 "
de Oficial 2ª a Oficial Mayor	30 "
de Oficial Superior de 9ª a Oficial Superior de 5ª	40 "
categorías superiores	50 "

b) Personal jornalizado:

Para el personal jornalizado se considerará el monto de Veinticinco (25) jornales encuadrándolo en la categoría mensualizada de presupuesto consignada en el inciso a) precedente.

Para ello se considerará:

1ª) Cuando el importe resultante sea exactamente igual al de una categoría del mensualizado, se aplicará el puntaje correspondiente a esta última.

2ª) Cuando el importe resultante sea exactamente igual o superior al término medio entre dos categorías, se asimilará el puntaje correspondiente a la de la inmediata superior.

3ª) Cuando el importe resultante no llegue al término medio entre dos categorías, se asimilará al puntaje de la inmediata inferior.

ARTICULO 11ª.- A las siguientes jerarquías se les adjudicará como único puntaje permanente y fijo, mientras se desempeñen las respectivas funciones, el que en cada caso se consigna:

Gerente General	100 puntos
Gerentes (sin excepción)	90 "
Subgerentes (sin excepción)	80 "

Mediante dichos puntajes se distribuirá un fondo equivalente al Cuatro y Medio por Ciento (4 ½ %) del monto total de la Bonificación Compensatoria a que se refiere esta reglamentación. El valor de cada punto correspondiente a este fondo se determinará con arreglo al procedimiento establecido por el Artículo 19.

ARTICULO 12º.- A los efectos del cómputo para calcular la Bonificación Compensatoria, se considerará las promociones o asignación de funciones jerárquicas a partir de la fecha en que las mismas se dispongan.

ARTICULO 13º.- Los servicios a computarse para considerar la antigüedad serán los que el agente haya prestado realmente en las Salas de Entretenimientos dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, en las condiciones establecidas en la presente reglamentación.

ARTICULO 14º.- Fíjanse las siguientes normas para establecer la antigüedad, la que comenzará a computarse desde la fecha en que el Estado se hizo cargo de los Casinos:

a) Personal remunerado a sueldo: Se computará un año de antigüedad por cada año calendario de real prestación de servicios, acumulándose las jornadas extraordinarias para períodos futuros.

b) Personal remunerado a jornal: Se computará un año de antigüedad por cada 160 días de haberes liquidados. El excedente será acumulable para períodos posteriores.

ARTICULO 15º.- Se acreditarán Cinco (5) puntos por cada año cumplido de acuerdo a lo determinado en el Artículo 14, hasta totalizar un máximo de Treinta (30) puntos.

ARTICULO 16º.- El aumento de puntaje por antigüedad será acordado a partir del 1º de enero de cada año siguiente al que corresponda dicho aumento.

ARTICULO 17º.- Al agente que por cualquier circunstancia cesara de prestar servicios y posteriormente fuera reincorporado, le será computada la antigüedad anterior a los efectos de la liquidación de la Bonificación Compensatoria.

ARTICULO 18º.- La suma de los puntos obtenidos por aplicación de los Artículos 10,11 y 15 según corresponda, totalizará la cantidad de puntos que se adjudicará al personal beneficiario.
ARTICULO 19º.- El coeficiente obtenido de dividir el Trece por Ciento (13%) de lo recaudado en concepto de "Caja de Empleados de Juego de los Casinos" durante el período a liquidar, menos el Cuatro y Medio por Ciento (4 ½ %) del importe resultante, que se destina al personal superior, por la cantidad total de puntos asignada al personal que preste servicios durante ese lapso, dará el valor de cada punto.
ARTICULO 20º.- A los efectos de la liquidación del presente beneficio, se establecen Tres (3) jurisdicciones que comprenden:

a) Casinos Marítimos (Casinos Central, Anexo I y Anexo II de la Ciudad de Mar del Plata, y los de las Ciudades de Miramar y Necochea);

b) Casino Termas de Río Hondo y

c) Casino de San Carlos de Bariloche.

Cada jurisdicción efectuará las liquidaciones entre los beneficiarios comprendidos en éllas, de acuerdo con los puntajes establecidos en la presente reglamentación y conforme a la recaudación que corresponda a cada una.
ARTICULO 21º.- La liquidación de la Bonificación Compensatoria se efectuará por mes calendario vencido, a todo el personal que haya prestado servicios en dicho lapso, multiplicando el valor de cada punto obtenido de acuerdo con los Artículos 11 y 19, por el puntaje asignado a cada agente.
ARTICULO 22º.- Toda circunstancia especial que no estuviera contemplada en el presente decreto, será resuelta por el Ministerio de Hacienda de la Nación.
ARTICULO 23º.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4º de la Resolución del Ministerio de Hacienda de la Nación, Nº 7.097/56, la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos procederá a reintegrar a la "Caja de Empleados" con cargo a los créditos presupuestarios previstos para atender el presente be

neficio, el importe correspondiente al 11,03 % que desde el 4 de febrero de 1956 y hasta la fecha del presente decreto, ha venido percibiendo el personal alcanzado por la "Bonificación Compensatoria", debiendo considerarse como definitivas las liquidaciones efectuadas a cada agente durante dicho período, con imputación a la mencionada bonificación.

ARTICULO 24º.- Los subsidios por fallecimiento, que se hubieran abonado desde el 4 de febrero de 1956 hasta la fecha del presente decreto, de acuerdo con el Capítulo VII del Reglamento de la Caja de Empleados (porcentaje 11,03), serán reconocidos con cargo al total a distribuir del fondo compensatorio.

ARTICULO 25º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

ARTICULO 26º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

ARAMBURU - Eugenio A. Blanco.-

DECRETO Nº 13.950.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 239.-

AUTOMOTORES - SEGURO DE AUTOMOTORES - JUICIO DE RESPONSABILIDAD - LEY DE CONTABILIDAD

Buenos Aires, 7 de junio de 1954.-

Visto el presente Expediente Nª 150.999/53 (Nª 105.654/52 del registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación), motivado por el accidente sufrido por el camión S. 791 afectado a los servicios de la Dirección General de Sanidad Vegetal del aludido Departamento de Estado, automotor que se encontraba incorporado al régimen de seguros establecidos por los Decretos Nros. 5.162 y 12.369 del año 1949, motivo por el cual se efectuó la pertinente denuncia del siniestro ante los aseguradores, desconociéndose el resultado de tal gestión, y

CONSIDERANDO:

Que se torna necesario determinar el grado de influencia que ejerce dicho régimen de seguros de automóviles sobre el juicio de responsabilidad, toda vez que como se señalara en repetidas ocasiones esta Contaduría General es competente, por las vías de dicha acción, para determinar las responsabilidades que se pudieran derivar de los siniestros automovilísticos en que intervengan vehículos del Estado, y la introducción del susodicho instrumento de cobertura de riesgos viene a ampliar el número de obligados a resarcir dichos perjuicios;

Que, en efecto, como consecuencia del citado régimen, amén de los que están obligados a resarcirlos por su actuación directa en los hechos aparece actualmente el asegurador, en su carácter de obligado acontractualmente a ello, circunstancia por la cual debe determinarse el grado de intervención que cabe a la Caja Nacional de Ahorro Postal en su carácter de aseguradora y la intervención que compete a la Contaduría Ge

neral de la Nación frente a todo acto que al respecto realice la misma;

Que, ante todo, debe señalarse que los distintos órganos del Estado, ante todo siniestro automovilístico en que estén interesados, deben recurrir de inmediato y en cuanto proceda ante dicha Institución a los fines de que conforme el seguro pactado fije su posición al respecto, atento que ello es la única postura lógica dadas las características del contrato de marras;

Que todo acto que al respecto realice la Caja Nacional de Ahorro Postal queda desenfocado de la órbita de control dentro de la cual ejerce sus poderes esta Contaduría General, conforme lo dispuesto por el Artículo 124 de la Ley Nª 12.961 y las normas legales y reglamentarias dictadas en concordancia al mismo, por lo que la tutela de los fondos que se obtengan del comercio de seguros aludidos sólo puede efectuarse por las vías que fije su ley orgánica y demás disposiciones atingentes y no por las que establece la citada Ley de Contabilidad;

Que, asimismo, tampoco los fondos que invierta la Caja Nacional de Ahorro Postal en pago de las reparaciones de los vehículos y demás rubros relacionados con el siniestro y el seguro constituyen un perjuicio fiscal en el sentido que dá a tal expresión la Ley Nª 12.961, ya que así como tales fondos no caen bajo sus controles, su inversión no llega a constituir un perjuicio en el sentido lato del término toda vez que responde al cumplimiento de una obligación preconstituída, de origen contractual y a la cual se sometió el asegurador desde el mismo momento en que aceptó cubrir los riesgos;

Que conforme el resultado de los considerandos anteriores, fácil es afirmar que cuando la aseguradora se haga cargo de las reparaciones o abone las indemnizaciones a que dé lugar un siniestro, no habrá motivo para analizar los hechos en las vías del Juicio de Responsabilidad por haberse sufragado el perjuicio fiscal respectivo, ya que el organismo afectado no verá disminuído su patrimonio y en cuanto concierne al resarcimiento de los fondos que invierta la Caja Nacional de Ahorro Postal no cabe realizarlo por tal instrumento procesal, confor-

me lo dispuesto por el Artículo 124 de la Ley Nª 12.961 y demás argumentos expuestos precedentemente;

Que tales antecedentes sirven asimismo para objetar y considerar inaplicable en esta jurisdicción administrativa la disposición contenida en el Artículo 6ª -in fine- de las Condiciones Generales de la póliza, según la cual en determinados casos la Caja Nacional de Ahorro Postal puede abonar siempre y cuando la repartición correspondiente promueva contra su agente el respectivo Juicio de Responsabilidad, toda vez que no puede considerarse que en tal supuesto exista un perjuicio fiscal en el sentido que da a tal expresión la Ley Nª 12.961, amén de que tal acción en forma alguna es promovida a petición de parte interesada, ya que la intervención de la Contaduría General es de oficio, existiendo por parte de los organismos la obligación de denunciar todo perjuicio sufrido pero no teniendo ingerencia alguna en su actuación;

Que,por ello, es conveniente hacer conocer a la Caja Nacional de Ahorro Postal el temperamento sustentado por esta Contaduría General de la Nación en la presente resolución, respecto a la inaplicabilidad de la aludida disposición contractual, a los fines de que en la primera modificatoria que realice de las condiciones del régimen de seguros de automotores considere la posibilidad de eliminar a la misma;

Que en consecuencia y dado que corresponde reclamar en forma previa e independiente el pago de los daños ante el asegurador y la diversidad de casos existentes en los distintos seguros que se contratan, se torna necesario fijar un régimen procesal y especial para estos supuestos a los fines de lograr la obtención de un criterio uniforme en todos los organismos del Estado, con miras a una mayor economía procesal, y que establezca los casos, oportunidades y condiciones en que deben ser elevadas a esta Contaduría General las actuaciones que versan sobre accidentes automovilísticos;

Que a mérito de lo expuesto, vistas las opiniones emitidas por el señor Contador Fiscal "ad hoc" Luis J. Pérez Colman y la Fiscalía General que obran en los informes que anteceden y atento lo determinado por el Artículo 73, inciso f)

de la Ley Nº 12.961;

LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Declarar que a esta Contaduría General de la Nación no le corresponde intervenir ni pronunciarse por las vías del Juicio de Responsabilidad, respecto a las sumas que abone la Caja Nacional de Ahorro Postal en pago de daños sufridos por vehículos del Estado y demás indemnizaciones provenientes de siniestros automovilísticos en razón del seguro que los cubra, aún cuando tales pagos se realicen en los términos de lo dispuesto por la cláusula 6a. -in fine- de las Condiciones Generales de la póliza vigente. Las reparticiones afectadas deberán ocurrir previamente al asegurador cuando el riesgo producido se encuentre cubierto por el seguro referido, y archivar las actuaciones correspondientes sin elevarlas a esta Contaduría General, cuando el asegurador se haga cargo de los daños e indemnizaciones, comunicando únicamente dicha circunstancia.

ARTICULO 2º.- Cuando el asegurador no se haga cargo de la reparación de los daños y demás indemnizaciones o cuando el seguro no cubra el riesgo producido deberán elevarse a esta Contaduría General las actuaciones correspondientes, pero certificándose debidamente en las mismas la mediación de tales extremos. El procedimiento reglamentado por este artículo, como por el anterior, no implica dejar sin efecto la obligación impuesta a las reparticiones por el punto 8, de la reglamentación del Artículo 100 de la Ley de Contabilidad (Decreto Nº 15.756/51 - D.A. 251) la que deberá ser cumplida estrictamente.

ARTICULO 3º.- Publíquese en el Digesto Administrativo, comuníquese a quienes corresponda, remítase la nota acordada a la Caja Nacional de Ahorro Postal adjuntando copia autenticada de la presente, notifíquese al señor Contador Fiscal "ad hoc" D. Luis J. Pérez Colman y, cumplido, vuelvan estos actuados al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación a los fines de que se dé a los mismos el trámite regulado por esta resolución.-

RESOLUCION Nº 959.- C.G.N.

me lo dispuesto por el Artículo 124 de la Ley Nª 12.961 y demás argumentos expuestos precedentemente;

Que tales antecedentes sirven asimismo para objetar y considerar inaplicable en esta jurisdicción administrativa la disposición contenida en el Artículo 6ª -in fine- de las Condiciones Generales de la póliza, según la cual en determinados casos la Caja Nacional de Ahorro Postal puede abonar siempre y cuando la repartición correspondiente promueva contra su agente el respectivo Juicio de Responsabilidad, toda vez que no puede considerarse que en tal supuesto exista un perjuicio fiscal en el sentido que da a tal expresión la Ley Nª 12.961, amén de que tal acción en forma alguna es promovida a petición de parte interesada, ya que la intervención de la Contaduría General es de oficio, existiendo por parte de los organismos la obligación de denunciar todo perjuicio sufrido pero no teniendo ingerencia alguna en su actuación;

Que,por ello, es conveniente hacer conocer a la Caja Nacional de Ahorro Postal el temperamento sustentado por esta Contaduría General de la Nación en la presente resolución, respecto a la inaplicabilidad de la aludida disposición contractual, a los fines de que en la primera modificatoria que realice de las condiciones del régimen de seguros de automotores considere la posibilidad de eliminar a la misma;

Que en consecuencia y dado que corresponde reclamar en forma previa e independiente el pago de los daños ante el asegurador y la diversidad de casos existentes en los distintos seguros que se contratan, se torna necesario fijar un régimen procesal y especial para estos supuestos a los fines de lograr la obtención de un criterio uniforme en todos los organismos del Estado, con miras a una mayor economía procesal, y que establezca los casos, oportunidades y condiciones en que deben ser elevadas a esta Contaduría General las actuaciones que versan sobre accidentes automovilísticos;

Que a mérito de lo expuesto, vistas las opiniones emitidas por el señor Contador Fiscal "ad hoc" Luis J. Pérez Colman y la Fiscalía General que obran en los informes que anteceden y atento lo determinado por el Artículo 73, inciso f)

el procedimiento que, para cada caso, se indica a continuación:

a) Descargos que obedezcan a razones normales de uso y/o utilización de los elementos.- En tales casos, o sea cuando conste que el bien o bienes cuya baja se gestiona, han cumplido su vida útil estimada, de modo tal que quede debidamente establecido que la radiación del servicio de los mismos no ha sido producida por negligencia, uso indebido o inadecuada conservación por parte del o de los responsables a quienes les fueron confiados para su utilización, los precitados funcionarios prestarán directamente su conformidad a los descargos en gestión, cualquiera sea su monto.

b) Descargos que no respondan a razones normales de uso y/o utilización de los elementos.-

1) Determinado el responsable y producida la reparación del perjuicio fiscal.- No teniendo observaciones que formular y previa verificación de que el importe reintegrado por el responsable es el que corresponde (Artículo 57º del Reglamento de Fiscalía General- Resolución Nº 2.600/52 - D.A. Nº 280) los señores representantes de esta Contaduría General de la Nación, prestarán su aprobación a lo actuado cualquiera sea el monto de la baja gestionada, como así también al consiguiente descargo de inventario.

En todos los casos en que el resarcimiento se hubiera hecho en efectivo, las respectivas actuaciones serán agregadas a la rendición de cuentas correspondientes al mes en que el responsable se haya formulado cargo.

2) Determinado el responsable y no producido el resarcimiento del perjuicio fiscal.- El funcionario actuante de esta Contaduría General de la Nación o quien haga sus veces, prestará su conformidad al solo efecto de que la repartición recurrente practique el correspondiente descargo de inventario. Cumplido ese trámite, deberá remitirse el expediente, juntamente

con las actuaciones sumariales instruídas por la dependencia, a esta Contaduría General de la Nación (Fiscalía General)para su sustanciación ulterior, salvo los casos comprendidos en la reglamentación dictada por Resolución Nª 2.237/55 (D.A. Nª 371) en los cuales deberá estarse a lo en ella indicado.

3) No identificado el responsable.- Los precitados funcionarios prestarán su conformidad al solo efecto de que la repartición recurrente practique el correspondiente descargo de inventario. Cumplido ese trámite, deberá remitirse el expediente, juntamente con las actuaciones sumariales instruídas por la dependencia, a esta Contaduría General de la Nación (Fiscalía General) para su sustanciación ulterior, salvo los casos a que se refieren las Resoluciones Nros. 259/55 (D.A.Nª 355) y 2.237/55(D.A. Nª 371) en que se seguirá el procedimiento que ellos establecen.

c) Descargos fundados en razones de fuerza mayor o caso fortuito.- Cuando del examen de las actuaciones respectivas resultare que el perjuicio ocasionado al fisco es excusable por caso fortuito (imprevisible y/o inevitable) o de fuerza mayor, en su cabal acepción, y determinada que fuera esa circunstancia por autoridad competente, de acuerdo con las reglamentaciones que ellas hubieren dictado o dicten al respecto, los funcionarios de esta Contaduría General prestarán directamente su conformidad a lo actuado y al consiguiente descargo de inventario. Cumplido ese trámite, la repartición recurrente procederá al archivo de las actuaciones respectivas, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 69ª del Reglamento de Fiscalía General (Resolución Nª 2.600/52 - D.A. Nª 280).

ARTICULO 3ª.- Al prestar su conformidad a los descargos gestionados acorde con lo estatuído en el artículo anterior, los funcionarios actuantes de esta Contaduría General advertirán a la repartición recurrente, que de no significar los mismos la baja integral del bien o bienes correspondientes, deberán ser practicados, seguidamente, los pertinentes movimientos de

inventario, ingresando el material recuperado con el nuevo valor que se le hubiere asignado, debiendo estarse -en lo demás- al procedimiento indicado en la parte respectiva de la Ley Nº 12.961 y su reglamentación (Artículo 46º del Decreto Nº 5.201/48 y Artículos 90º al 96º del Decreto Nº 36.506/48) y con sujeción, en lo que corresponda, a lo dispuesto por el Decreto Nº 9.986/53 y resolución de esta Contaduría General Nº 2.024/53.

ARTICULO 4º.- Déjase establecido que los bienes cuya baja debe someterse a la previa intervención a que se alude en la presente resolución, son los que, en principio, se hallan determinados por las cuentas 4.0.0 a 5.3.7 y 7.5.0. a 8.7.0. del "Clasificador de los Bienes del Estado" y siempre que la baja de los mismos dé lugar a movimientos diferenciales del patrimonio (no compensativos).

Exceptúanse, por lo tanto, de esa intervención:

a) Efectos comprendidos en las cuentas 5.5.0 a 5.7.9, cuando dichas bajas respondan al uso y utilización de sus elementos.

b) Efectos comprendidos en las cuentas 5.8.0 a 5.9.0, cuando los descargos se produzcan:

1) Por mantener el normal funcionamiento de otros bienes (5.8.0 a 5.8.9).

2) Por su incorporación en las cuentas respectivas (5.9.0

c) Bienes denominados "de uso precario", cuyo control de uso, conservación y consumo se haya estimado conveniente descentralizar, atendiendo a la relativa corta duración, rápido desgaste o fácil deterioro de los mismos y siempre que las bajas se hayan producido por cualquiera de las razones puntualizadas en a).

d) Productos a que se refieren las cuentas 6.2.0 a 6.4.0, cuando su baja responda a procesos de elaboración o a su comercialización.

ARTICULO 5º.- Para la baja de los bienes fuera de uso y de los rezagos (cuentas 6.0.0 a 6.1.0) se seguirá el procedimiento establecido en la Ley Nº 12.961 (Artículos 39º, 46º y 50º) y su reglamentación.

ARTICULO 6º.- Con respecto a los bienes semovientes (cuentas 7.5.0 a 8.7.0) no será de aplicación la presente resolución cuando la baja de los mismos sea una consecuencia normal de la finalidad a que estén destinados (consumo, industrialización, enajenación, experimentación , etc.)

ARTICULO 7º.- A los fines de la intervención previa a que se refiere esta resolución, las actuaciones respectivas deberán ser remitidas a los señores representantes de esta Contaduría General de la Nación, en la siguiente forma: mensualmente, cuando se gestionen bajas fundadas en razones normales de uso y, de inmediato, cuando fuere de aplicación el procedimiento que estatuye el Artículo 100 de la Ley Nº 12.961 y concordante de su reglamentación.

ARTICULO 8º.- Déjanse sin efecto las Resoluciones Nros. 1.949/50 (D.A. Nº 225), 2.327/50 (D.A. Nº 230) y 1.510/52 (D.A.Nº 276).

ARTICULO 9º.- Dése al Digesto Administrativo, y por su intermedio, comuníquese a todos los responsables ante esta Contaduría General de la Nación; déjense las correspondientes constancias en las copias de las resoluciones indicadas en el artículo anterior; cumplido, archívese en Secretaría.-

ANGEL B. VUOLO - Dino Dallatana - Rodolfo J. Tarelli - Aldo V. Chittaroni - Juan M. Zanchetti - Damián Figueroa.-

RESOLUCION Nº 2.238.- C.G.N.

cienda.
ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

DECRETO Nº 1. 530.- ARAMBURU - R. Verrier

(+) D.M. nº 238.-

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- A partir del 1º de enero de 1957, la distribución de los fondos provenientes de la "Caja de Empleados" del Casino de Mendoza, se hará unicamente entre el personal de juego que actúa en el mismo.

ARTICULO 2º.- Incorpórase a partir del 1º de enero de 1957 en el régimen establecido por el decreto nº 13.950/56, al personal administrativo y técnico, obrero, de maestranza y de servicio que preste servicios en la citada Sala de Entretenimientos.

ARTICULO 3º.- Reemplázase el texto del artículo 20º del decreto nº 13.950/56, por el siguiente:

"A los efectos de la liquidación del presente beneficio "se establecen cuatro (4) jurisdicciones que comprenden:
" a) Casinos Marítimos (Casino Central, Anexo I y Anexo
" II de la ciudad de Mar del Plata y los de las ciu-
" dades de Miramar y Necochea);
" b) Casino Termas de Río Hondo;
" c) Casino Mendoza;
" d) Casino de San Carlos de Bariloche
"Cada jurisdicción efectuará las liquidaciones entre los "beneficiarios comprendidos en ellas, de acuerdo con los "puntajes determinados en la presente reglamentación y "conforme a la recaudación que corresponda a cada una".

ARTICULO 4º.- El Ministerio de Hacienda arbitrará los créditos presupuestarios que sean necesarios para atender las erogaciones que origine el cumplimiento del presente.

ARTICULO 5º.- Deróganse los decretos Nros. 5.290/52 y 5.091/56.

ARTICULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Ha-

cienda.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

DECRETO Nº 1. 530.- ARAMBURU - R. Verrier

(+) D.M. nº 238.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 242.-

PAGOS - DEUDAS - FACILIDADES

Buenos Aires, 24 de agosto de 1953.-

Visto el decreto Nº 12.433 de fecha 8 de julio de 1953, por el cual se faculta a esta repartición para resolver los pedidos de facilidades de pago que se presenten ante los distintos Departamentos de Estado, con arreglo al decreto del 12 de junio de 1928; y siendo necesario determinar las oficinas que han de entender en esos asuntos, así como las normas reglamentarias que deberán observarse al respecto;

LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- La Oficina de Causas Fiscales intervendrá, en el estudio, trámite y proyecto de las resoluciones que correspondan en todos los asuntos que en virtud del citado decreto Nº 12.433/53 sean pasados a resolución de la Contaduría General de la Nación, con excepción de aquellos relacionados con pasividades, en los cuales intervendrá, al mismo efecto, la IIa. División. Dichas oficinas observarán, a tales fines, las normas establecidas en los artículos siguientes.

ARTICULO 2º.- Cuando el solicitante de las facilidades de pago sea un estipendiario, el importe de las cuotas no podrá ser inferior al que resulte de aplicar la escala establecida en el artículo 2º de la ley Nº 9.511, de fecha 29 de setiembre de 1914.

En todos los demás casos, la determinación de dicho importe se hará en función de los bienes y/o rentas del deudor, así como de las demás circunstancias que singularicen la situación.

ARTICULO 3º.- Las dependencias y entidades descentralizadas de la Administración Nacional ante las cuales se interpongan di-

chos pedidos, con los requisitos enunciados en el artículo anterior, aceptarán de inmediato el ofrecimiento formulado por los peticionantes, con sujeción a las condiciones fijadas en los artículos 5º a 8º inclusive y "ad-referéndum" de lo que resuelva la Contaduría General de la Nación.

ARTICULO 4º.- En los casos en que lo considere necesario, para mejor resolver los pedidos de facilidades de pago de deudas que se formulen, esta Contaduría General podrá exigir la presentación de una declaración jurada de bienes e ingresos mensuales del interesado, con especificación de los gravámenes que los mismos reconozcan.

ARTICULO 5º.- Cuando el cargo sea imputable directamente a quien lo haya originado o resulte evidente mala fe de parte del responsable, se le exigirá un interés anual del siete por ciento (7 %) a partir de la fecha de pago de la primera cuota.

ARTICULO 6º.- El incumplimiento de dos cuotas, consecutivas o alternadas, sin causas plenamente justificadas, extinguirá el beneficio acordado y hará exigible el saldo de la deuda, a cuyo fin, si correspondiere, cada repartición deberá dar aviso inmediato a esta Contaduría General.

ARTICULO 7º.- Será aplicable el pago de deuda con facilidades, al régimen de la compensación consagrado por el artículo 819 y correlativos del Código Civil, con las salvedades previstas en los artículos 823 a 827 del mismo cuerpo legal.

ARTICULO 8º.- Déjase establecido que, salvo casos especiales en que expresa y fundadamente se determine de otro modo, las cuotas que deban satisfacer los deudores serán mensuales y deberán abonarse del 1 al 10 del mes en la tesorería o caja que se haya determinado.

ARTICULO 9º.- Respecto a las sumas percibidas en virtud del presente régimen, deberán observarse, si así correspondiere, las prescripciones del artículo 23 de la ley Nº 12.961 y su reglamentación.

ARTICULO 10º.- Cada repartición llevará un registro de las deudas que se satisfagan por medio de facilidades, en el que deberá constar el monto y titular de cada obligación, así co

mo la forma de pago acordada, y asentarse la fecha y el importe de las respectivas cuotas en oportunidad de cumplirse cada ingreso, debiendo pasar un estado mencual del movimiento operado con destino a la Dirección de Contabilidad de esta Contaduría General.

ARTICULO 11º.- En el caso previsto en el artículo 3º de esta resolución y una vez tomadas las medidas necesarias a los fines de la ulterior y sucesiva percepción de la cuota estipulada los ministerios y reparticiones oficiales que intervengan en las respectivas actuaciones, las remitirán a la Contaduría General por conducto de los Contadores Fiscales que tengan a su cargo la fiscalización pertinente, quienes observarán que se hayan reunido las condiciones establecidas en la presente reglamentación, requiriendo, o en su defecto, se subsanen las deficiencias de que adolecieran.

ARTICULO 12º.- A medida que se vayan produciendo casos relativos a cada organismo estatal, los señores Contadores Fiscales Delegados informarán a esta Contaduría General acerca del procedimiento de control adoptado por aquéllos para la mejor percepción de la deuda.

ARTICULO 13º.- En ocasión de practicar los arqueos mensuales que determina el artículo 81, punto 2º, inciso g), de la reglamentación de la ley Nº 12.961, los señores Contadores Fiscales Delegados verificarán el estado de las deudas conforme al registro a que se refiere el artículo 10 de la presente resolución, informando a esta Contaduría General cuando advirtieren alguna anormalidad en el cumplimiento de los pagos, en las anotaciones correspondientes, o en la comunicación a que se refiere dicho artículo.

ARTICULO 14º.- Al producirse la cancelación de una deuda, los ministerios y reparticiones oficiales remitirán las actuaciones a los señores Contadores Fiscales Delegados, quienes realizarán la verificación pertinente y, con la constancia de ello, las elevarán a esta Contaduría General para su trámite ulterior.

ARTICULO 15º.- En los casos en que la Contaduría General deniegare los pedidos que se sometan a su consideración o fijare otras

cuotas y plazos que los propuestos, fundará su resolución, devolviendo las actuaciones al organismo de origen, a fin de que éste exija del deudor se allane a la forma de pago que proceda, bajo apercibimiento de las acciones a que hubiere lugar por derecho, las cuales instarán cuando la gestión administrativa resulte infructuosa.

ARTICULO 16º.- Comuníquese por intermedio de la Oficina de Digesto Administrativo y solicítese la publicación en el Boletín del Ministerio de Hacienda y en el Boletín Oficial; cumplido, archívese en Secretaría.-

DINO DALLATANA - Pablo Fianaca - Rodolfo J. Tarelli - Juan María Zanchetti - Aldo V. Chittaroni.-

RESOLUCION Nº 1.818.-
C.G.N.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 243.-

PATRIMONIO DEL ESTADO

Buenos Aires, 7 de febrero de 1956.-

Visto lo establecido por las Leyes Nros. 12.961 (Artículo Nº 66º) y 14.179 (Artículo Nº 5º), y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Nº 2º del Decreto Nº 35.686/48, oportunamente se impartieron las normas para efectuar las periódicas actualizaciones de los valores arrojados por el censo de los bienes del Estado practicado al 31 de julio del año 1948, (Decreto Nº 10.005/48);

Que, siguiendo tal práctica y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Nº 87 (inciso 12) del Decreto Nº 5.201/48 reglamentario de la Ley Nº 12.961, se hace necesario realizar la actualización de los valores patrimoniales por las variaciones habidas en el año 1955, así también prever lo pertinente para los futuros ejercicios;

Que, a tal efecto, el Registro General de Bienes del Estado ha preparado, sobre la base de las existentes a la fecha, las normas de procedimiento para la actualización permanente del patrimonio estatal;

Que, para dar cumplimiento a lo exigido por las precitadas disposiciones legales es imprescindible contar, con la debida antelación, con los datos necesarios;

Por ello y atento las facultades que le otorga el Artículo Nº 73º (inciso f) de la citada Ley Nº 12.961,

LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Apruébanse las adjuntas "Normas de procedimien

to para la actualización permanente del patrimonio estatal", preparadas al efecto por el Registro General de Bienes del Estado.

ARTICULO 2º.- El 31 de marzo de 1956 deberá comunicarse al citado Registro General de Bienes del Estado de esta Contaduría General de la Nación, los movimientos operados en las respectivas jurisdicciones patrimoniales de cada Ministerio, Repartición descentralizada o Empresa del Estado, durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1955.

ARTICULO 3º.- Hasta tanto no se establezca otro procedimiento esa actualización patrimonial deberá ser cumplimentada por todos los organismos del Estado al 31 de diciembre de cada año y con sujeción a igual plazo de presentación (31 de marzo del año siguiente).

ARTICULO 4º.- Los organismos que actúen en el orden patrimonial como agentes centralizadores elevarán dicha documentación, debidamente diligenciada, al citado Registro General de Bienes del Estado, dentro del término fijado en los artículos precedentes, a cuyo efecto, a su vez establecerán los plazos que estimen necesarios para que los agentes inventariadores y jurisdiccionales den cumplimiento a la parte que, en su respectivo orden, les corresponde en el diligenciamiento de la aludida documentación.

ARTICULO 5º.- Todos los organismos del Estado, sin excepción deberán efectuar las requeridas comunicaciones ajustándose a lo establecido en las normas aprobadas por el Artículo 1º de la presente resolución. En consecuencia, todo inconveniente que impidiere el fiel cumplimiento en la forma indicada, deberá ser expuesto con la debida antelación, para consideración por parte de la Contaduría General de la Nación.

ARTICULO 6º.- El cumplimiento de la presente resolución involucra, asimismo, toda la documentación que hubiere quedado pendiente en anteriores actualizaciones.

ARTICULO 7º.- Todos los organismos que actúan en el orden patrimonial como agentes centralizadores, remitirán al Regis-

tro General de Bienes del Estado, antes del 20 de febrero de 1956, una nómina de sus reparticiones y ubicación geográfica de las dependencias que las integran, detalle al que deberán ajustarse al remitir la actualización de valores correspondientes al año 1955.

ARTICULO 8º.- El requisito puntualizado en el artículo anterior deberá ser cumplimentado, asimismo, en los futuros períodos de actualización patrimonial, con sujeción, también a igual plazo de presentación.

ARTICULO 9º.- Los señores Contadores Fiscales Delegados, Auditores, o en su caso; los funcionarios de igual clase que tengan a su cargo el despacho de las cuentas relativas a las reparticiones donde no existen Delegaciones Fiscalías, vigilarán directamente el estricto cumplimiento de la presente resolución por parte de las dependencias de sus respectivas jurisdicciones, comunicando cualquier inconveniente que se oponga a ello y aconsejando las medidas que tiendan a salvarlo. Constatarán, asimismo, si los servicios patrimoniales están en condiciones de realizar su cometido con los medios con que cuentan, recomendando en los casos que así no fuera, sean dispuestas las medidas tendientes a dotarlos de los recursos necesarios para su correcto desempeño, e informando de ello a esta Contaduría General.

ARTICULO 10º.- Dése al Digesto Administrativo y, por intermedio del Registro General de Bienes del Estado, comuníquese a los respectivos responsables en el orden patrimonial; cumplido, archívese por Secretaría.-

RODOLFO TARELLI - Dino Dallatana - Aldo Chittaroni - Damián Figueroa - Wifredo Dedeu.-

RESOLUCION Nº 329 C.G.N.-

PATRIMONIO DEL ESTADO

NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION PERMANENTE DEL PATRIMONIO ESTATAL

Principales antecedentes legales y reglamentarios en vigencia: Ley Nº 12.961 (Artículos Nros. 54º, 57º, 60º, 87º y concordantes de su Decreto reglamentario Nº 5.201/48); Decretos Nros. 10.005/48 y 35.686/48 y resoluciones correlacionadas de la Contaduría General de la Nación.

I) COMUNICACIONES QUE SE REQUIEREN

Deberán comunicarse las altas y bajas producidas durante el ejercicio que se denuncia, como así también las que sean necesarias efectuar para salvar errores u omisiones. Las dependencias que efectúen sus comunicaciones por primera vez deberán remitir un inventario integral de todos los bienes a su cargo, sobre cuya base practicarán, en los períodos subsiguientes, las correspondientes actualizaciones.

II) PLANILLAS A UTILIZARSE

Para el inventario y actualización de los bienes correspondientes a los grupos Muebles, Semovientes, y Valores Financieros se emplearán las planillas 821/822 (Cargos), 823/824 (Descargos) y, cuando así corresponda, la 825 (Transferencias). En lo que hace a este último formulario, se agregan al final las instrucciones especiales.

Para el grupo Inmuebles se utilizarán las planillas A-21/A 22 (Cargos), A-23 (Descargos), A-24 (Iniciación o terminación de obras construídas para terceros) y, cuando así corresponda, la A-25 (Transferencias) para el cual corren agregadas al final, las instrucciones especiales.

Para los balances y resúmenes se utilizarán las planillas Nº 4, 4a y 4b.

Se acompañan modelos de las citadas planillas a fin de que las distintas reparticiones dispongan la impresión de las mismas, acorde con sus necesidades.

III) ENCARGOS DE LA CONFECCION DE LAS PLANILLAS DE INVENTARIO Y DE ACTUALIZACION, CIDO A DARSE A LAS MISMAS, FECHA Y FORMA DE REMISION

Las planillas de actualización y sus respectivos resúmenes serán confeccionadas en cuadruplicado por los correspondientes responsables y remitidas, para su intervención a los agentes jurisdiccionales, los que -a su vez- las girarán a los centralizadores, a esos mismos fines, previo desglose -en cada caso- de las copias respectivas. El original de todo lo actuado será enviado, finalmente, a la Contaduría General de la Nación (Registro General de Bienes del Estado) dentro del plazo establecido por ella.

La remisión a la Contaduría General de la Nación (Registro General de Bienes del Estado) de la referida documentación, debe efectuarse en forma completa, entendiéndose por tal, al conjunto de las planillas de actualización y sus respectivos resúmenes, correspondientes a un Ministerio u Organismo Descentralizado.

Unicamente se aceptarán envíos parciales -por intermedio del Organismo Centralizador- cuando ellos se refieran a la documentación de una gran jurisdicción de un Ministerio. No obstante, recién se considerará complimentada la actualización patrimonial por parte del Organismo Centralizador, cuando este dé cumplimiento integramente a lo requerido en estas "Instrucciones Generales".

IV) FORMA DE EFECTUAR EL DETALLE DE LOS CARGOS Y DESCARGOS PARA LOS BIENES MUEBLES, SEMOVIENTES Y VALORES FINANCIEROS (Planillas Nº 821/824)

El detalle de las altas y bajas correspondientes a estos bienes se hará por elementos, los que se ordenarán alfabéticamente dentro de cada cuenta del "Clasificador de Bienes". Completada una cuenta, se obtendrá para ella un sub-total en cantidad de elementos y valores, continuándose seguidamente, en la forma indicada, con las otras cuentas por orden correlativo.

Solamente podrán agruparse en un mismo renglón los bienes idénticos (en sus características medidas y valores)y siempre que no tengan números de fábrica que los particularicen.

No obstante lo expuesto, aquellas Reparticiones que lleven registros analíticos de sus bienes, podrán consignar los cargos y descargos directamente por cuentas del "Clasificador de Bienes", con excepción de los sub-grupos "Maquinarias", "Aparatos e Instrumentos" y "Medios de Transporte" que, en todos los casos se comunicarán en forma analítica.

Respecto a los bienes en depósito y en los casos especiales (grandes almacenes) que no fuera posible anotar las altas y bajas reales dado el volumen de los movimientos producidos se podrán consignar los cargos o descargos por las diferencias que surjan comparando las existencias entre el ejercicio anterior y el que se denuncia.

V) MOVIMIENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS POR SEPARADO

Deberán formularse planillas y cargos y descargos (formularios Nº 821/824) separadamente, por los siguientes conceptos:

a) Por reajustes y transferencias, y

b) Por ingresos y egresos.

c) Reajustes y transferencias, comprende:

a-1) Errores y omisiones deslizados en actualizaciones anteriores.

a-2) Movimientos compensativos entre cuentas y/o juris

dicciones patrimoniales (para los casos que así corresponda deberá utilizarse el formulario 825 "Transferencias" cuyas instrucciones especiales corren insertas al final).

b) Ingresos y egresos, comprenden:

b-1) Ingresos: Por adquisición, construcción, donación, transformación, etc.

b-2) Egresos: Por inutilización, destrucción, pérdida, donación, transformación, consumición, etc.

VI) ACLARACIONES CON RESPECTO A DATOS QUE SON REQUERIDOS EN LAS PLANILLAS DE "CARGOS Y DESCARGOS"

Formularios 821 - 822 - 823 y 824

Para la correcta confección de los citados formularios deberán tenerse en consideración las siguientes aclaraciones, referidas al Columnado de las mencionadas planillas:

CARGOS - (Formularios Nros. 821 y 822).

1) Tachar lo que no corresponda. Confeccionar planillas por separado de cada grupo: Muebles, Semovientes, Valores Financieros (para inmuebles deben utilizarse los formularios A-21, A-22 y A-24.

2) Indicar en la columna "Actual" el título o cuenta del "Clasificador de Bienes" en que se incrementa el elemento que se da de alta. Cuando se trate de algún cargo por error de clasificación se indicará además en la columna "anterior" el título o cuenta en que figuraba cargado erróneamente.

3) Si la dependencia tiene numerado sus elementos, debe indicar -en lo posible- el número de cada uno de los mismos. Cuando se trate de un cargo por error de clasificación que altere la numeración, dejará -además- indicado el número que le correspondía anterior

mente.

4) Debe consignarse el bien que se carga, con sus características principales.

5) En esta columna se coloca la cantidad de elementos que se agrupan por su semejanza.

6) Indicar el valor de cada uno de ellos.

7) Indicar el valor global de todo lo semejante.

8) Manifestar la procedencia del elemento que se carga indicando si es por adquisición, transferencia o donación.

9) Estas columnas son para uso exclusivo del Registro general de Bienes del Estado.

DESCARGOS - (Formularios Nros. 823 y 824)

1) Tachar lo que no corresponda. Confeccionar planillas por separado de cada grupo: Muebles, Semovientes, Valores Financieros (para el grupo inmuebles deberán utilizarse los formularios A-23 y A-24).

2) Indicar el número de la cuenta del "Clasificador de Bienes" en que figuraba el elemento que ahora se descarga.

3) Si el elemento tiene número de inventario asignado por la dependencia de origen debe ésta indicarlo al darlo de baja.

4) Debe consignarse el bien que se descarga con las mismas características con que se dió de alta.

5) En esta columna se coloca la cantidad de elementos que se agrupan por su semejanza.

6) Indicar el valor de cada uno de ellos.

7) Indicar el valor global de todos los semejantes.

8/11) La dependencia de origen debe informar el motivo por el cual descarga el bien inventariado, indicando si es inutilización, pérdida, sustracción, o transferencia.

Para llenar tal requisito la dependencia de origen deberá mencionar en la columna, correspondiente la disposición que autorizó el descargo (Res.Nº 2.238/55) de la Contaduría General de la Nación -D.A.Nº 37-. De ser ellas varias y resultar, por tal causa, insuficiente el espacio reservado para esa anotación se consignará su detalle al final de la planilla mediante una llamada que se relacione con el renglón respectivo.

VII) INMUEBLES

Para el inventario y la actualización patrimonial correspondiente a los bienes inmuebles se utilizarán los formularios A-21/A-24, ajustándose al siguiente procedimiento:

a) Por reajustes y transferencias, que comprende:

a-1) Errores y omisiones deslizados en actualizaciones anteriores (se utilizará el formulario A-21 para Cargos y el formulario A-23 para Descargos).

a-2) Movimientos compensativos entre cuentas y/o jurisdicciones patrimoniales, para lo cual se emplearán los formularios A-21 o A-22 para Cargos y A-23 o A-24 para Descargos, (para los casos que así corresponda deberá utilizarse el formulario A-25 "Transferencias", cuyas instrucciones especiales corren insertas al final).

b) Por Ingresos y egresos, que comprende:

b-1) Ingresos: Por adquisiciones, donaciones y transformaciones (se empleará el formulario A-21);

Por prosecución de obras y hasta su terminación (se utilizará el formulario A-22); y

Por iniciación de obras (se empleará el formulario A-21 con excepción de las obras construídas para terceros en que se utilizará el formulario A-24).

b-2) Egresos: Por enajenaciones, donaciones y transformaciones (se utilizará el formulario A-23); y

Por terminación de obras construídas para terceros (se empleará el formulario A-24)

Cuando se consigne movimientos en los formularios A-22 y A-23 se indicará -en cada caso- la cuenta, el número individual, la ubicación y el valor con que el inmueble respectivo fué denunciado.

VIII) RESUMENES

a) Resúmenes a confeccionar por los responsables directos (Oficina o Servicio).

En la planilla Nº 4 los responsables directos practicarán un resumen por cuentas del "Clasificador de Bienes", en el que consignarán -siguiendo el orden de las columnas- lo siguiente:

1a. Columna (concepto): Nómina ordenada de las cuentas y subgrupos del "Clasificador de Bienes" afectadas por los bienes a su cargo, incluídas también aquellas que no hayan sufrido variantes en el período que se denuncia.

2a. Columna (Saldo anterior): Saldo denunciado en el período anterior para cada uno de los rubros indicados.

3a. Columna (cargos por reajustes y transferencias): Importe de los cargos formulados por esos conceptos (título V-inciso a) y título VII-inciso a).

4a. Columna (cargos por ingresos): Importes correspondientes a las altas producidas en el período que se denuncia (título V-inciso b)-apartado b-1 y título VII-inciso b)-apartado b-1).

5a. Columna (total de cargos): Se consignarán los importes por rubros, provenientes de la suma de las columnas 3a. y 4a.

6a. Columna (descargos por reajustes y transferencias): Anotarán los descargos producidos por los mismos conceptos indicados para la columna 3a.

7a. Columna (descargos por egresos): Se consignarán los importes de las bajas producidas en el período que se denuncia (título V-inciso b)-apartado b-2 y título VII-inciso b)-apartado b-2)

8a. Columna (total de descargo): Se asentarán los valores provenientes de la suma de las columnas 6a. y 7a.

9a. Columna (saldo resultante): Se obtendrá el nuevo saldo sumando al saldo anterior (columna 2a.) el total de cargos (columna 5a.) y restándole a ello el total de descargos (columna 8a.)

Estos resúmenes serán confeccionados por cuadruplicados y se les dará el mismo giro que lo indicado en el título III para las planillas de altas y bajas.

b) Resúmenes a confeccionar por los agentes jurisdiccionales: (dependencia o repartición centralizada).

En base a los resúmenes de los responsables directos, practicarán:

1) Resumen de movimientos y saldos de la jurisdicción administrativa: En planilla Nª 4 y en idéntica forma a lo indicado precedentemente en a) se resumirán los valores correspondientes a la jurisdicción.

2) Resumen de saldos por división política:(Detalle por Capital Federal y Provincias): En planillas del modelo 4b,

consignando en la columna inicial el detalle de las cuentas del "Clasificador de Bienes" y utilizando una columna para cada división política que abarque la jurisdicción, se resumirán -bajo ese ordenamiento- los saldos resultantes de los responsables directos, obteniéndose en la última columna el total general, que deberá coincidir con el correspondiente de la planilla Nº 4 mencionada en el apartado anterior. Para el caso de que la dependencia abarque una sola jurisdicción política hará esa aclaración en la planilla Nº 4 prescindiendo de este resumen.

c) Resúmenes a confeccionar por los organismos centralizadores: (Ministerio o ente autárquico).

A base de la documentación recibida de los agentes jurisdiccionales, los organismos centralizadores confeccionarán los siguientes resúmenes:

1) Resumen de movimientos y saldos de la jurisdicción administrativa: En la planilla Nº 4 y en la misma forma que ha quedado establecido, en a) y en b-1) totalizarán los movimientos operados en las distintas jurisdicciones del Ministerio o ente descentralizado respectivo.

2) Resúmenes de saldos: En las citadas planillas tabuladas (4a y 4b) consignando en la columna inicial el detalle de las cuentas del "Clasificador de Bienes" que corresponda, se practicarán los siguientes resúmenes de saldos resultantes:

2-a) Resumen por jurisdicciones administrativas del Ministerio o ente descentralizado (detalle por reparticiones o grandes dependencias) (formulario 4a.). Este resumen es optativo para los organismos autárquicos.

2-b) Resumen por división política del Ministerio o en

te descentralizado (detalle por Capital Federal y Provincias) (formulario 4b).

IX) VALORES A CONSIGNARSE

a) Cargos:

Se consignará el valor del costo, inversión o el que particularmente corresponda cuando se trate de bienes en depósito (almacenes), rezagos o valores financieros. Para los bienes ingresados a título gratuito, o de los cuales se carezca de antecedentes con respecto a su valor, se consignará el actual estimado.

b) Descargos:

Se consignará el valor con el que fueron denunciadas las altas respectivas.

Los bienes inventariados a la fecha del censo dispuesto por Decreto Nº 10.005/48, se descargarán por el valor de reposición (o estimado) asignado a esa fecha.-

Buenos Aires, Noviembre de 1955.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 244.-

BONIFICACION COMPENSATORIA - LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

MEMORANDUM Nª 417.-

Expediente Nª 71.149/57.- Consulta acerca de si la bonificación compensatoria del personal de Casinos debe tenerse en cuenta para el sueldo anual complementario.-

Señor Subsecretario:

La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos consulta en estas actuaciones acerca de la procedencia de computar la bonificación compensatoria que percibe el personal de los Casinos de su dependencia, a los efectos del sueldo anual complementario.

A fin de comprender claramente la naturaleza de la referida bonificación y determinar así su calificación a los efectos enunciados, procede hacer una breve historia de su origen. En efecto: el personal de los Casinos participaba de un beneficio al margen de los específicamente previstos en el Presupuesto, proveniente del producido de la llamada "Caja de Empleados", cuyos fondos se integra con la "propina" que deja el público asistente a las salas de juego. Estos fondos, recaudados y contabilizados por el organismo gremial que agrupa a dichos agentes, se distribuía de la siguiente manera: 90% aproximadamente, para el personal de juego y el resto para el administrativo, técnico, obrero, de maestranza y de servicio.- Por resolución nª 7.097/56, ratificada por el artículo 10ª del decreto nª 6.010/56, se dispuso que a partir del 4 de febrero

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 245.-

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL

Buenos Aires, 21 de mayo de 1957.-

Visto lo dispuesto por los artículos 9º y 16º del decreto-ley Nº 11.922 de fecha 4 de julio de 1956, y

CONSIDERANDO:

Que atento las disposiciones legales señaladas, la Comisión a la que se alude en el artículo 7º del decreto-ley Nº 11.922/56 está facultada para administrar los bienes del Instituo Nacional de Acción Social;

Que dichas facultades no están limitadas, posibilitándose por ello la más amplia gestión de administración tendiente al cumplimiento de los fines previstos en el decreto-ley citado, excepto la disposición de bienes a que se hace referencia en el artículo 9º;

Que es menester acelerar el proceso de liquidación, siendo indispensable para ello que la Comisión cuenta con las más amplias facultades de administración;

Que el Ministerio de Hacienda está autorizado por los artículos 9º y 16º para reglamentar las disposiciones señaladas y dictar las medidas de interpretación, aclaración y complementarias del decreto-ley Nº 11.922 que permita cumplir con los propósitos enunciados;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º) La Comisión liquidadora y Administradora del Instituto Nacional de Acción Social, dependiente del Ministerio de Ha

cienda, estará integrada por un Presidente y cuatro vocales, que designará el Ministro de Hacienda.

2ª) La Comisión sesionará con "quorum" de tres miembros y sus decisiones se adoptarán por mayoría, teniendo el Presidente doble voto en caso de empate. De las resoluciones dejará constancia en acta.

3ª) Son deberes y atribuciones de la Comisión:

I). Cumplir las finalidades del Decreto-Ley Nº 11.922/56 a cuyo efecto deberá:

a) Iniciar las gestiones tendientes a la registración e inscripción del dominio de los bienes, derechos y acciones incorporados al patrimonio estatal conforme con lo establecido en el Artículo 3º del Decreto-Ley 11.922/56;

b) Convenir con los Ministerios de Asistencia Social y Salud Pública y de Educación y Justicia de la Nación, la forma y oportunidad de las transferencias dispuestas por el Poder Ejecutivo de los establecimientos, dependencias y servicios en funcionamiento, a que se refiere el artículo 4º del mencionado Decreto-Ley;

c) Proponer al Ministerio de Hacienda la transferencia con o sin cargo, de los bienes mencionados en el artículo 6º a favor de las provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, acompañando los proyectos de decreto.

Las disposiciones precedentes deberán ser cumplimentadas dentro de los ciento veinte días.

II). Atender la administración y conservación de los establecimientos y bienes a que se refiere el Decreto-Ley Nº 11.922/56, hasta tanto se les dé destino..

A tales efectos queda facultada para:

a) Realizar las compras y contrataciones por trabajos y suministros de acuerdo con la Ley de Contabilidad y organización del Tribunal de Cuentas de la Nación.

b) Determinar los funcionarios facultados para autorizar las contrataciones, cualquiera sea su monto, y para probar las que no excedan de cien mil pesos;

c) Llevar cuenta y razón de las asignaciones que se hagan a favor del Organismo para la conservación y mantenimiento de las dependencias y servicios.

d) Disponer el cobro y percepción de las asignaciones y recaudaciones, como así también, aprobar las ordenes de pagos correspondientes;

e) Realizar los demás actos de gobierno, administración y disposición, con las más amplias facultades sin perjuicio de la limitación establecida en el artículo 9º del Decreto-Ley Nº 11.922/56.

4º) La Comisión no podrá delegar en el Presidente ninguna de las disposiciones enumeradas en el artículo anterior y que le son privativas.
5º) En caso de ausencia o impedimento del Presidente, la Comisión designará el Vocal que se hará cargo de la Presidencia.
6º) Comuníquese a quienes corresponda, tómese nota y archívese.

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 7.165.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 246.-

IMPORTACIONES OFICIALES

Sírvase citar: 730 N. 12.904.-

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Buenos Aires, 6 de mayo de 1957.-

Al Ministerio de Hacienda,
Hipólito Yrigoyen 250
CAPITAL

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con referencia a los abastecimientos externos que necesite requerir esa repartición.

Sobre el particular, destacamos a Uds. la preocupación que S.E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación acaba de transmitir a las diversas Secretarías de Estado a fin de que, frente a la actual situación de las disponibilidades en divisas, se adopten las medidas necesarias tendientes a disminuir los compromisos presentes en moneda extranjera y a restringir a lo estrictamente indispensable las compras a realizar en el exterior.

A tales fines y de conformidad con lo indicado por el señor Ministro, las reparticiones oficiales en el orden nacional, provincial, munidpaly entidades descentralizadas, deberán realizar las siguientes tramitaciones y estudios:

1 - Importación de bienes de capital:

a) Autorizada por el Banco Central de la República Argentina y amparadas por permisos actualmente válidos. En los casos en que no se hayan cerrado las operacio-

nes y/o los respectivos contratos no se hayan suscripto, corresponderá tratar de obtener financiaciones desde el exterior a los plazos más extensos que resulten posibles, aun cuando las operaciones deban liquidarse por el Mercado Libre de Cambios. Además, y de ser posible, deberá procurarse desviar las compras hacia países comprendidos en el área multilateral de Comercio y Pagos.

Las modificaciones que se obtengan deberán ser puestas en conocimiento de este Banco antes del 24 del corriente mediante solicitud de reemplazo en formulario nº 3033 acompañada del permiso respectivo las que serán consideradas dentro de la mayor brevedad y sin modificar el tratamiento cambiario asignado al permiso vigente por el actual plazo de validez.

b) Operaciones no autorizadas al presente:

En lo sucesivo este Banco sólo considerará la importación de bienes de capital con financiación a plazos desde el exterior y preferentemente desde países que no requieran dólares para el pago de sus exportaciones. A tal fin corresponderá que esa repartición acuerde especial consideración a la posibilidad y conveniencia de aceptar ofrecimientos de financiar a plazos importaciones hacia nuestro país.

Se recuerda que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 25.292/50, antes de efectuar adjudicaciones de compras de productos de origen extranjero deberá requerirse el acuerdo previo de esta Institución.

2 - Necesidades de importación para 1957:

A los efectos de su consideración por el Ministerio de Hacienda, corresponderá formular con criterio restrictivo y en planillas de acuerdo al modelo que se acompaña, un cálculo de importaciones a realizar sobre la base de nuevos permisos, con indicación de mercaderías, país

de origen, su valor en divisas y destino a dar al material, agrupadas por los siguientes conceptos:

Bienes de Capital
Otros artículos incluídos en el Mercado Libre
Artículos incluídos en el Mercado Oficial.

En el cálculo respectivo deberán incluirse también los abastecimientos programados con imputación a cupos aprobados por el Banco Central y que se encuentren aún en vigencia. Las respectivas informaciones deberán presentarse a esta Institución antes del 24 del corriente.

Una vez aprobados los planos respectivos, sólo se considerará la realización de importaciones sobre la base de esas previsiones.

Al estimar su preferente atención sobre el asunto expuesto, saludamos a Uds. muy atentamente.-

ANGEL P. MANTERO RODOLFO R. CAPRARA

Banco Central de la República Argentina	Cálculo de las Importaciones a Realizar en el Año 1957	Anexo a la nota 730- N 12.904

MINISTERIO:
Dependencia o Repartición:

Nº de la Tarifa de Avalúos	Designación comercial del artículo a importar	Unidad de Medida	Cantidad	Valor C. y F.			País de Origen (1)	Destino a dar al artículo	Observaciones
				Divisa	Importe	Equivalente m$n.			

(1) Indicar los países que podrían proveer el artículo, preferentemente desde el área del Sistema Multilateral de Comercio y Pagos.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 247.-

LEY DE CONTABILIDAD

Buenos Aires, 16 de mayo de 1957.-

Visto lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 23.354/56, de aprobación de la Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría General de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que su artículo 146 estatuye que el cierre del ejercicio de 1956 y la cuenta de inversión se regirán por la Ley Nº 12.961 y asimismo que a los efectos de determinar los residuos pasivos del citado ejercicio y de los anteriores que correspondiera, se considerarán los compromisos contraídos hasta el 31 de diciembre de cada año que, hasta el 28 de febrero de 1957, no hubieran sido incluídos en orden de pago;

Que el artículo 63 de la Ley Nº 12.961 establece que el 31 de marzo de cada año quedará cerrado, por imperio de la ley, el ejercicio del presupuesto del año anterior y el de los demás créditos incorporados al mismo por leyes especiales o disposiciones del Poder Ejecutivo;

Que el artículo 66 determina que la cuenta de inversión del ejercicio deberá ser presentada al Congreso por el Poder Ejecutivo antes del 30 de junio de cada año;

Que la excepción que consagra la nueva Ley de Contabilidad respecto al ejercicio de 1956, para hacer viable la liquidación de todos los compromisos pendientes hasta su cierre, ha demandado a los servicios administrativos una tarea extraordinaria a fin de determinar los respectivos residuos pasivos;

Que, por tal motivo, las órdenes de disposición con imputación a los mencionados residuos pasivos no han podido ser dictadas en su totalidad al 31 de marzo ppdo., fecha del cierre del ejercicio;

Que dada la situación excepcional señalada resulta necesario posibilitar la emisión de dichas órdenes mediante la ampliación del referido término a ese solo efecto;

Que, consecuentemente, y a fin de que la Contaduría General de la Nación pueda confeccionar la cuenta de inversión del ejercicio en base a las órdenes de disposición que se emitan, es preciso también modificar la fecha en que debe ser presentada la cuenta de inversión;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA,

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO, DECRETA

CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Las órdenes de disposición que, en función del artículo 146 de la Ley de Contabilidad aprobada por Decreto-Ley número 23.354/56 se dicten con imputación a los residuos pasivos, podrán ser emitidos hasta el 15 de junio de 1957.

ARTICULO 2º.- La cuenta de inversión del ejercicio de 1956 deberá ser presentada antes del 31 de agosto de 1957.

ARTICULO 3º.- El presente decreto-ley será refrendado por el Exemo.-señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, Ejército, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación, a sus efectos. Cumplido, archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Adalbert Krieger Vasena - Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung - Eduardo F. Mac. Loughlin-

DECRETO-LEY Nº 5.095.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 248.-

REINTEGRO DE GASTOS

Buenos Aires, 29 de mayo de 1957.-

Visto las consultas que se formulan en lo relativo al artículo 3º, apartado b) del Decreto Nº 18.989/56, que prohibe reintegrar gastos de movilidad a quienes gocen de movilidad fija, utilicen en las comisiones vehículos del Estado o perciban viáticos y, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13º del mismo en materia de normas aclaratorias y de interpretación que fueran necesarias para la mejor aplicación de todo cuanto dispone el aludido pronunciamiento,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Aclárase que cuando el personal, en cumplimiento de tareas encomendadas, deba desplazarse fuera de un centro urbano en el que se encuentra desempeñando sus funciones, las erogaciones motivadas por los traslados respectivos deben ser reconocidas mediante la vía del procedimiento habitual de reintegro de gastos, sin perjuicio de la asignación que le corresponde en concepto de viático conforme a lo determinado por el artículo 2º del Decreto Nº 18.989/56.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 105.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 249.-

HORAS EXTRAORDINARIAS - REINTEGRO POR GASTOS DE COMIDA

Buenos Aires, 17 de mayo de 1957.-

Atento las consultas formuladas por algunos organismos del Estado, respecto a la interpretación sobre el "Horario normal de labor" a que se refieren las disposiciones del Decreto Nª 18.989 de fecha 16 de octubre de 1956, vinculado con las normas para la liquidación de "Viáticos", "Movilidad", etc.,

CONSIDERANDO:

Que es conveniente determinar claramente el alcance del concepto "Horario normal de labor" a que alude el citado pronunciamiento del Poder Ejecutivo;

Que tal aclaración resulta indispensable a efectos de orientar en forma precisa el procedimiento a que deberán ajustarse los distintos organismos del Estado para la aplicación de las prescripciones sobre la materia que contiene el mencionado decreto;

Por ello y en uso de la facultad conferida por el artículo 13ª del Decreto Nª 18.989/56,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1ª.- Determínase que el "HORARIO NORMAL DE LABOR", a que se refieren las disposiciones del Decreto Nª 18.989 de fecha 16 de octubre de 1956, es el fijado por autoridad competente, para cada jurisdicción y clase de personal, de acuerdo con las disposiciones legales que rigen la materia.

ARTICULO 2ª.- La liquidación de "Horas Extraordinarias" se deberá realizar, en consecuencia, de conformidad con lo re

glado por el artículo precedente, debiendo ajustarse en todos los casos a las prescripciones emanadas del decreto precitado.
ARTICULO 3º.- Dése a la presente el carácter de Resolución Aclaratoria del Decreto Nº 18.989/56, de conformidad con lo estatuído por el artículo 13º del mismo.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y archívese.-

RESOLUCION Nº 93.- Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín nº 250.-

PROHIBICIONES - NORMAS - ENERGIA ELECTRICA

Buenos Aires, 10 de junio de 1957.-

Visto la nota S.G.P. nº 1735/57 de 30 de mayo último, - de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y - el memorandum S.S. I. nº 44/57 de fecha 4 de junio del co - rriente año, y

CONSIDERANDO:

Que a través de dichas comunicaciones se solicita la co laboración de este Ministerio en la campaña dirigida a lograr una efectiva reducción en el consumo de electricidad, y con ello la supresión de cortes de energía que vienen perturban do el desarrollo de las distintas actividades del país;

Que dicha gestión no sólo obliga a la total adhesión de los organismos oficiales, sino involucra también un llamado a los sentimientos de solidaridad de todos los habitantes - de la república;

Que con tal motivo, al disponer el dictado de las nor - mas pertinentes, este Ministerio desea también recabar la - más amplia cooperación de su personal para la consecución - de aquella finalidad;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E:

1º) La iluminación de los locales de trabajo, de las re particiones y dependencias de este Ministerio se limitará a lo indispensable y sólo ante la falta considerable de luz - natural, mientras que la correspondiente a patios, pasillos, salas de espera, etc., será reducida con carácter general -

al 30%.

2º) Salvo que razones especiales lo impidan, todas las tareas de limpieza que se ejecutan por la noche, pasarán a realizarse en horas de luz natural.

3º) Prohíbese en todos los edificios de este Ministerio que posean servicios centrales y durante su funcionamiento, el uso de artefactos eléctricos de calefacción, aireación e iluminación, suplementarios de aquellos.

4º) A partir de la fecha y hasta nueva orden, la instalación de aire acondicionado comensará y cesará su funcionamiento, quince (15) y treinta (30) minutos antes del horario oficial de entrada y salida del personal respectivamente.

5º) Prohíbese la apertura de ventanas durante el horario de funcionamiento del servicio de aire acondicionado, como así también la obstrucción con muebles, papeles, etc. de los orificios de entrada y salida de éste.

6º) Al finalizar la jornada de labor, el personal está obligado a desconectar la totalidad de artefactos eléctricos y apagar las luces de los locales en que presta servicios.

7º) Queda terminantemente prohibida la introducción y uso de todo artefacto eléctrico que no sea de propiedad oficial.

8º) Recomiéndase restringir la realización de tareas, de cualquier naturaleza, fuera del horario oficial, cuando ello obligue al uso de luz artificial.

9º) El incumplimiento de las normas establecidas por la presente dará lugar a la aplicación de severas sanciones disciplinarias.

10º) La División Intendencia, dependiente de la Dirección General de Contabilidad y Administración, procederá a controlar en el Palacio de este Ministerio, el estricto cumplimiento de las normas que anteceden. En los restantes edificios, los Jefes de las respectivas reparticiones procederán a designar el organismo responsable.

11º) Invítese a los organismos pertenecientes a otras jurisdicciones, que funcionan en el Palacio de este Ministe

//=

//-

rio, a adherir a la presente resolución.

12º) Comuníquese a los Bancos Oficiales, Superintendencia de Seguros, Instituto Nacional de Reaseguros, Instituto de Servicios Sociales Bancarios, Dirección General de - Obra Social, Caja Nacional de Ahorro Postal, Instituto Nacional de Acción Social, Comisión Liquidadora Decreto-Ley nº 11.843/56 e Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias (en liquidación) solicitándoles hagan extensivas a sus jurisdicciones las medidas dictadas por la presente, y remitan a este Ministerio copia de las respectivas resolucio - nes.

13º) Comuníquese, publíquese en el Digesto Ministerial y archívese.-

RESOLUCION Nº 7.200.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA
Ministro de Hacienda de la Nación

Boletín nº 251.-

LICENCIAS

Buenos Aires, 24 de mayo de 1957.-

Visto que durante el régimen depuesto diversos agentes de la Administración Nacional fueron separados de sus cargos en forma totalmente arbitraria, y

CONSIDERANDO:

Que con el advenimiento del gobierno surgido de la Revolución Libertadora, se procedió a rever todos aquellos casos, comprobándose que, en forma clara o encubierta, la verdadera razón que motivó dichas medidas fué la persecución por motivos políticos;

Que habiéndose reparado esa arbitrariedad en su aspecto económico, mediante la reincorporación de los perjudicados, resta salvar totalmente la injusticia cometida, computándoles, a los efectos de un mayor término de licencia por vacaciones, el período en que estuvieron alejados del servicio por las razones expuestas;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO
DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Al personal de la Administración Nacional reincorporado después de la revolución del 16 de setiembre de 1955, se le computará el período en que estuvo alejado del servicio por razones políticas, a los efectos de un mayor término de licencia por vacaciones.

ARTICULO 2º.- El presente decreto-ley será refrendado por el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señ

res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Obra Públicas, Ejército, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.

DECRETO LEY Nº 5.504.-

ARAMBURU- Isaac Rojas - Victor Majó - Teodoro Hartung - Eduardo McLoughlin Pedro Mendiondo.-

Boletín nº 252.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
RENDICIONES DE CUENTAS

Buenos Aires, 3 de junio de 1957.-

Vista la comunicación efectuada por la Contaduría General de la Nación en la que expresa haber formulado cargo en la contabilidad de responsables a este Tribunal de Cuentas, por sumas recibidas de la Tesorería General de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 89 de la ley de contabilidad establece un régimen especial para el control externo de la gestión administrativa de este Tribunal de Cuentas, determinando que el mismo será ejercido por un funcionario designado por el presidente del Senado y que el examen y juicio de las cuentas respectivas estará a cargo del H. Congreso a cuyo efecto deberán serle remitidas previa intervención del funcionario citado;

Que la comentada disposición ha creado la excepción lógica en relación con los demás responsables cuya gestión debe ser juzgada por este Tribunal de Cuentas conforme con las disposiciones pertinentes de la misma ley;

Que, en consecuencia, es indispensable fijar las normas de procedimiento que permitan a la Contaduría General de la Nación efectuar las operaciones en la contabilidad de responsables y el registro de las rendiciones de cuenta de acuerdo con el régimen establecido por el citado artículo 89,

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Las rendiciones de cuenta que deba presentar

este Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido por el art. 89 de la Ley de Contabilidad, serán remitidas por el servicio administrativo a la fiscalía general para su registro, cumplido el cual se girarán a la Contaduría General de la Nación a los fines de las operaciones provisionales que correspondan y una vez efectuadas, dichas rendiciones volverán al servicio administrativo mencionado para su posterior elevación al H. Congreso, previa intervención del funcionario delegado.

ARTICULO 2º.- Efectuado el juicio definitivo de las rendiciones de cuenta de que se trata por el H. Congreso, el Tribunal de Cuentas dispondrá las operaciones que como resulta do de ese juicio deba realizar la Contaduría General de la Nación en la contabilidad de responsables.

ARTICULO 3º.- Comuníquese a la Contaduría General de la Nación, dése al Digesto Administrativo y fecho, archívese.-

RESOLUCION nº 603/57.-

Fdo. DAMIAN FIGUEROA
Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernandes Fariña - Wilfredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - César Aguirre Legarreta -Secretario-

Boletín nº 253.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - COMPROMISOS - PRESUPUESTO - INTERVENCION PREVIA

Buenos Aires, 3 de junio de 1957.-

Vista que por resolución 373/57 (D.A. nº 39) de este Tribunal de Cuentas se fija la intervención que corresponde darle al Ministerio de Hacienda en función del artículo 14 de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde aclarar los alcances de dicha resolución frente a determinadas obligaciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos a dictarse en ejercicios posteriores que, por su naturaleza y características, no deben ajustarse a ese procedimiento;

Que, en esa situación, se encuentran los contratos de locación de inmuebles y de transporte de correspondencia, entre otros, cuyo perfeccionamiento está sujeto a la condición suspensiva de existencia de crédito legal, ya que en la determinación de éste interviene el Ministerio de Hacienda;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- La resolución nº 373/57 (D.A. nº 39) no será de aplicación en aquellas contrataciones cuyo perfeccionamiento esté sujeto a la condición suspensiva de existencia de crédito legal.

//-

ARTICULO 2º.- Dése al Digesto Administrativo y archívese.

RESOLUCION nº 609/57.-

DAMIAN FIGUEROA
Rodolfo J. Tarelli-José M.Fernandez Fariña-Wilfredo Dedeu
Antonio M. Perez Arango-Vocales
Juan Carlos Pastene
Secretario

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 254.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

Buenos Aires, 17 de junio de 1957.-

Visto el proyecto y exposición de motivos del "Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional" elevado por la Comisión creada por Decreto nº 6.131/56, y

CONSIDERANDO:

Que dicho Estatuto, con los ajustes que se ha estimado del caso introducirle, contiene las normas con arreglo a las cuales deberá ejercerse en lo sucesivo la función pública por el personal que presta servicios para el Estado, cuyos derechos y obligaciones recíprocas quedan determinados;

Que con dicho ordenamiento jurídico se dará término a los procedimientos discrecionales aplicados sin razón valedera, en una materia que evidentemente requiere sujeción legal para no afectarse legítimos derechos, tanto desde el punto de vista de la Administración como de sus servidores;

Que con esta importante medida de gobierno, la Revolución Libertadora concreta su reiterado propósito de lograr, de una vez por todas, la dignificación de la Administración Pública, y, con ello, la de quienes la integran y le dedican sus esfuerzos mediante el desempeño de una función que, al par de ennoblecedora, implica deberes de cumplimiento ineludible;

Que si bien la implantación de este Estatuto demandará erogaciones al erario público, originadas por el progreso que tendrá el personal en el curso de su carrera, se considera que el Estado debe atender a esta justa aspiración, sobre todo teniendo en cuenta que aquél deberá rendir las condiciones de eficiencia y dedicación que le incumben;

Que en orden a la estabilidad condicionada que se asegu-

ra al personal, cabe señalar que por constituir el núcleo central de este Estatuto, su cabal observancia es esencial para el éxito del sistema y a fin de que el Estado no se vea frente a la contingencia de gravosos compromisos que siempre provendrán de actos administrativos contrarios a las normas legales;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Apruébase el adjunto "Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional", que forma parte integrante del presente decreto-ley.

ARTICULO 2º.- El mecanismo escalafonario cuya institución dispone el "Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional", será aplicado en el curso del próximo ejercicio financiero, a cuyo efecto deberá programarse la pertinente estructura con arreglo a los principios básicos del referido Estatuto y su reglamentación, adecuándose los sistemas en vigencia.

ARTICULO 3º.- A partir de la fecha y hasta tanto se aplique el sistema escalafonario aludido por el artículo 2º, solamente podrá nombrarse personal en los cargos inferiores del presupuesto de cada organismo con sujeción a las disposiciones establecidas por el Decreto-ley nº 23.573/56. Facúltase al Ministerio de Hacienda para determinar, en casos de duda, cuáles son los cargos presupuestarios considerados como inferiores a los efectos de la aplicación del presente artículo.

ARTICULO 4º.- El Poder Ejecutivo determinará, mediante una reglamentación especial, las disposiciones que serán de aplicación para el personal que constituya el "Gabinete del Ministro y Secretaría de la Presidencia de la Nación", las que en ningún caso podrán acordar derechos a la estabilidad y al progreso en la carrera administrativa.

D.M. nº 254.-

ARTICULO 5º.- Establécese que el "Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional", comprende solamente a las personas cuyo desempeño sea de carácter permanente.

ARTICULO 6º.- Invítase al Poder Jedicial a implantar en su jurisdicción el Estatuto que se aprueba por el presente decreto-ley y declárase al mismo de aplicación para el personal del Congreso Nacional, esto último hasta tanto se constituya el Cuerpo Legislativo de la Nación.

ARTICULO 7º.- Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto-ley se tomarán de Rentas Generales con imputación al mismo, cuando correspondan a organismos y dependencias de la Administración Central del Estado.

ARTICULO 8º.- La igualdad de remuneración establecida en el artículo 8º (3er. párrafo) del Estatuto, se aplicará en forma paulatina y de acuerdo con las posibilidades del Tesoro.

ARTICULO 9º.- El Poder Ejecutivo dictará la reglamentación correspondiente dentro de los TREINTA (30) días de la fecha del presente decreto-ley.

ARTICULO 10º.- El presente Decreto-Ley será refrendado por el Excmo. señor VICEPRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de HACIENDA, GUERRA, MARINA y AERONAUTICA.

ARTICULO 11º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y archívese.-

ARAMBURU - Isaac F. Rojas - Adalbert Krieger Vasena - Víctor Majó - Teodoro Hartung - Eduardo McLoughlin.-

DECRETO- LEY Nº 6.666

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

ARTICULO 1º.- Este Estatuto comprende a todas las personas que, en virtud de nombramiento emanado de autoridad competente, prestan servicios remunerados en organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 2º.- Se exceptúan de lo establecido por el artículo anterior:

a) Las personas que desempeñen funciones por elección popular.
b) Las personas que desempeñen las funciones de: Ministros Secretarios de Estado, Subsecretarios, y Secretarios de la Presidencia de la Nación.
c) El personal integrante del Gabinete del Ministro y Secretaría de la Presidencia de la Nación, cuyos cargos figuren en tal carácter en los respectivos presupuestos.
d) Los miembros integrantes de los Cuerpos Colegiados que funcionen en la Administración Nacional.
e) El personal comprendido en la Ley de Servicio Exterior de la Nación (Ley nº 12.951).
f) El personal comprendido en la ley para el personal Militar (Ley nº 13.996).
g) El Clero Oficial.
h) El personal de seguridad y defensa.
i) El personal regido por contratos especiales.
j) El personal de las Empresas del Estado, como así también el de organismos regidos por convenios colectivos de trabajo.
k) El personal comprendido en el Estatuto del Docente (Decreto Ley nº 16.767/56).
l) El personal de organismos que por sus funciones propias exija un régimen especial, cuando así lo resuelva el Poder Ejecutivo.

//-

CAPITULO II

INGRESO

ARTICULO 3º.- El ingreso a la Administración Nacional se hará, previa acreditación de la idoneidad, por el puesto inferior de la carrera correspondiente, y en la forma que establezca la reglamentación, son, además, requisitos indispensables: ser argentino, salvo casos de excepción cuando determinado tipos de actividades así lo justifique; poseer condiciones morales y de conducta y aptitud física para la función a la cual se aspira ingresar.

ARTICULO 4º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, no podrán ingresar a la Administración Nacional:

a) el que hubiera sufrido condena por hecho doloso de naturaleza infamante.
b) El que hubiera sido condenado por delito peculiar al personal de la Administración Pública.
c) El fallido o concursado civilmente, hasta que no obtenga su rehabilitación.
d) El que tenga pendiente proceso criminal.
e) El que esté inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, durante el término de la inhabilitación.
f) El que hubiera sido exonerado, hasta tanto no fuera rehabilitado.
g) El que se encuentre en situación de inhabilidad o incompatibilidad, de las previstas en el artículo 7º.
h) El que padezca de enfermedad infecto-contagiosa.
i) El que tuviera actuación pública contraria a los principios de la libertad y de la democracia, de acuerdo con el régimen establecido por la Constitución Nacional y el respeto a las Instituciones fundamentales de la Nación Argentina.

ARTICULO 5º.- El nombramiento del personal tendrá carácter provisional durante los seis primeros meses, al término de los cuales se transformará en definitivo cuando haya demostrado idoneidad y condiciones para las funciones del cargo con-

ferido.

En caso contrario, no obstante el haber aprobado el examen de competencia o concurso de admisión, se prescindirá de sus servicios.

CAPITULO III
DEBERES

ARTICULO 6°.- Sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes, decretos y resoluciones especiales, el personal está obligado:

a) A la prestación personal del servicio con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma, que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes.

b) A observar, en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su estado oficial exige.

c) A conducirse con tacto y cortesía en sus relaciones de servicio con el público, conducta que deberá observar asimismo, respecto de sus superiores, compañeros y subordinados.

d) A obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico con atribuciones y competencia para darla, que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicios.

e) A rehusar dádivas, obsequios, recompensas o cualesquiera otras ventajas con motivo de sus funciones.

f) A guardar secreto de todo asunto del servicio que deba permanecer en reserva en razón de su naturaleza o de instrucciones especiales, obligación que subsistirá, aún después de cesar en sus funciones.

g) A promover las acciones judiciales que correspondan, cuando fuere objeto de imputaciones delictuosas.

h) A permanecer en el cargo, en caso de renuncia, por el término de treinta días, si antes no fuera reemplazado o aceptada su dimisión, o autorizado a cesar en sus funciones.

i) A declarar sus actividades de carácter profesional,- comercial, industrial, inclusive cooperativas,o de - algún modo lucrativas, a fin de establecer si son - compatibles con el ejercicio de sus funciones.-

j) A declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones ulteriores, en la forma y tiempo que se fije por reglamentación, proporcionando los informes y documentación que al respecto se le requiera.-

k) A declarar, las deudas contraídas con dependencias oficiales y servicios sociales, proporcionando la documentación que se establezca en cada oportunidad,en las condiciones y forma que se fije por reglamenta - ción.-

l) A excusarse de intervenir en todo aquello en que su actuación pueda originar interpretaciones de parcialidad y/o concurra incompatibilidad moral.-

ll) A encuadrarse en las disposiciones legales y regla - mentarias sobre incompatibilidad y acumulación de - cargos.-

ARTICULO 7º.- Queda prohibido al personal, sin perjuicio de lo que al respecto establezca la reglamentación pertinente:

a) Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se encuentren o no oficialmente a su cargo, hasta un año después del egreso.-

b) Prestar servicios, remunerados o nó, asociarse,dirigir, administrar, asesorar, patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas, que gestionen o exploten concesiones o privilegios de la Administra - ción, en el orden Nacional, Provincial o Municipal, o que sean proveedoras o contratistas de la misma.-

c) Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones celebrados u otorgados por la Administra - ción, en el orden Nacional, Provincial o Municipal.-

d) Mantener vinculaciones que les representen beneficios

u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por la repartición a que pertenezcan.-

e) Realizar propaganda o coacción política con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones, cualesquiera sea el ámbito donde se realicen las mismas.-

f) Realizar o propiciar actos incompatibles con las normas de moral, urbanidad y buenas costumbres.-

CAPITULO IV

DERECHOS

ARTICULO 8º.- El personal tendrá derecho a la retribución de sus servicios, con arreglo a las escalas que se establezcan en función de su categoría de revista y de las modalidades de su prestación.-

La retribución está integrada por el sueldo o jornal y las asignaciones complementarias que se establezcan eventualmente.-

A igualdad de situación de revista y de modalidades de la prestación de servicios, el personal gozará de las mismas remuneraciones que correspondan a la función, cualesquiera sea el organismo en que actúe.-

ARTICULO 9º.- La carrera administrativa es el progreso del personal dentro de las clases, grupos y categorías, en orden a las condiciones que se determinen.- El derecho a la carrera administrativa se refiere siempre a la clase, grupo y categoría y no a la función que se le haya asignado, si esta última no fuera inherente a aquéllos.-

Las clases y grupos estarán integrados por el personal que desempeñe funciones de naturaleza e importancia similares, respectivamente.-

Las categorías son los sucesivos grados en que se dividen las clases y grupos, debiendo fijarse en las previsiones presupuestarias la asignación que corresponda a cada una.-

El título habilitante o la especialidad que ad-

quiera el personal no será, por sí sola, condición suficiente para pertenecer a determinada clase y grupo, debiendo revistar en aquella función o tarea para la cual fuera nombrado, para cuyo fin ha sido prevista la partida con cargo a la cual se atiende su remuneración.-

ARTICULO 10º.- Para tener derecho al cambio de clase o grupo serán necesarios los siguientes requisitos:

a) Que exista vacante en otra clase o en el grupo superior y sea necesario cubrirla, a juicio de autoridad competente;

b) Que el aspirante pertenezca a cualesquiera de las clases y/o grupos inferiores, y reúna las calificaciones y demás condiciones que se fije por reglamentación.-

Al personal que no tuviere título habilitante, se le exigirá aprobación previa de cursos de capacitación en el grado y especialidad adecuados, o en su defecto examen de competencia o concurso.-

ARTICULO 11º.- El personal gozará de la estabilidad que le otorga este Estatuto y conservará su empleo en las condiciones que el mismo determina, después de tres años de servicios efectivos y contínuos o cinco años de servicios efectivos discontínuos, de su ingreso en la Administración Nacional.-

ARTICULO 12º.- El personal tiene derecho a ser promovido siguiendo el orden ascendente de la escala de categorías, según el orden de mérito que obtuviere.- A ese fin será calificado periódicamente y cuando menos, una vez al año.- Las promociones tendrán lugar -en lapsos no superiores a tres años- cuando las sumas de las calificaciones del personal alcance el módulo que determine la reglamentación.- La calificación periódica anual será el resultado de tres instancias jerárquicas.-

Si el agente no obtuviera un mínimo del 40% de la calificación máxima, durante dos años consecutivos, será pasible de retrogradación.- Si ello ocurriera durante

un año más, será pasible de cesantía.-

Esta promoción, al llegar a las categorías superiores que las reglamentaciones determinarán, deberá además supeditarse al requisito a que alude el artículo 10º "in fine".-

ARTICULO 13º.- El personal, que con retención de su categoría fuera nombrado para desempeñar funciones excluídas del ámbito de aplicación de este Estatuto, será promovido de categoría, de acuerdo con la última calificación obtenida y las modalidades de la clase a la cual pertenece, durante el lapso que ejerza dichas funciones.- A su término, se reintegrará, a la categoría, clase y grupo que le corresponda.-

ARTICULO 14º.- El personal que tuviera más de tres años en la Administración Nacional, que fuera elegido miembro de los Poderes Ejecutivo o Legislativo de la Nación o de las Provincias y de las Municipalidades y que hubiere cumplimentado lo dispuesto en el artículo 13º, quedará apartado del ejercicio de sus funciones sin percepción de haberes mientras dure su mandato.- A su término será reintegrado a su cargo de origen.

ARTICULO 15º.- El personal que con retención de su categoría, fuera nombrado y estuviere comprendido en el artículo 2º, incisos b), c) y d), tendrá derecho a la indemnización prevista en el artículo 29º, cuando no fuera reincorporado al cargo amparado por este Estatuto, al cesar en las funciones a que se alude anteriormente.-

ARTICULO 16º.- El personal tendrá derecho a menciones especiales a juicio de autoridad competente, las que serán bonificadas a efectos del ascenso, cuando hubiere realizado, proyectado y/o ejecutado tareas tendientes a mejorar, facilitar y/o perfeccionar los servicios de la Administración Nacional, calificadas de mérito extraordinario, en la forma y condiciones que fije la Reglamentación correspondiente.-

ARTICULO 17º.- El personal tendrá derecho, con arreglo a las reglamentaciones vigentes, a las siguientes licencias:

a) Ordinaria para descanso anual;

b) Especial para tratamiento de salud;

c) Extraordinaria para asuntos personales o de familia.

ARTICULO 18º.- El personal de la Administración Nacional tendrá derecho a jubilación ordinaria o extraordinaria y al retiro voluntario, de conformidad con la legislación vigente.

ARTICULO 19º.- El personal no podrá ser obligado a jubilarse, hasta transcurrido dos años de haber cumplido los extremos necesarios para obtener su jubilación ordinaria.

ARTICULO 20º.- El personal que fuera colocado en situación de jubilarse o solicitare su jubilación o retiro voluntario, no podrá cesar en la prestación de su servicio, por tal causa, hasta que se le acuerde el respectivo beneficio y por un término no mayor de 6 (seis) meses.

ARTICULO 21º.- El personal que hubiere obtenido los beneficios del retiro voluntario, no podrá reingresar a la Administración Nacional, salvo las circunstancias, excepciones, condiciones y forma que establezca la reglamentación pertinente.

ARTICULO 22º.- El personal que se encontrare en condiciones de obtener la jubilación ordinaria y fuera separado, no tendrá derecho a lo establecido en el artículo 29º.

ARTICULO 23º.- El personal tendrá derecho a interponer el reclamo correspondiente, fundado y documentado, por cuestiones relativas a calificaciones, ascensos, menciones y orden de mérito. Igual derecho le asistirá si sufriera sanciones disciplinarias que no requieran sumario.

El reclamo deberá ser interpuesto dentro de los 5 (cinco) días de haberse notificado de la medida en la forma y condiciones que fije la reglamentación.

ARTICULO 24º.- Contra los actos firmes del Poder Ejecutivo Nacional o de autoridades de la Administración Nacional, que dispongan la cesantía o la exoneración respecto del personal comprendido en el régimen de estabilidad previsto por este Estatuto, se podrá recurrir para ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal.

ARTICULO 25º.- El recurso deberá interponerse dentro de los 30

(treinta) días de haberse notificado de la censantía o de la exoneración, fundado en la ilegalidad de la medida aplicada, indicando las leyes, decretos y resoluciones especiales que justifiquen el mismo y/o los vicios incurridos en el sumario instruído.

Interpuesto el recurso, la autoridad administrativa deberá elevarlo al Tribunal dentro de los quince (15) días con los antecedentes que determinaron la medida, si no la revocare por contrario imperio.

El Tribunal, recibidos los antecedentes, correrá traslado por su orden por diez (10)días al apelante y a la autoridad administrativa.

Contestado el traslado, o vencido el término sin que las partes lo hubieran hecho, el Tribunal, cumplidas las medidas que para mejor proveer haya dispuesto, dictará la providencia de autos para sentencia.

ARTICULO 26º.- El Tribunal dictará sentencia dentro de los sesenta (60) días. Si su decisión fuese favorable al agente, considerándolo amparado por la estabilidad, hará lugar a su reincorporación con los derechos correspondientes determinados en este Estatuto.

ARTICULO 27º.- Cuando el fallo disponga la reincorporación del agente, ésta deberá efectuarse en distinta dependencia y en otras funciones de categoría, clase y grupo igual a la situación que precedió a la instrucción del sumario, con el reconocimiento de los haberes devengados desde la fecha que se dispuso el cese de la prestación de servicios.

ARTICULO 28º.- En todos los casos de recursos interpuestos para ante la justicia, se deberán tomar los recaudos presupuestarios correspondientes, conservando libre la vacante respectiva, hasta tanto el agente quede separado en forma definitiva, después de haber utilizado todos los recursos que determina este Estatuto.

ARTICULO 29º.- El personal tendrá derecho a su reincorporación cuando fuere separado del cargo por causas no determinadas en este Estatuto, pudiendo optar por hacer efectiva la in

demnización que le corresponda, de acuerdo con la aplicación de la escala siguiente:

más de 3 años y hasta 10 años: el 100% del último sueldo, por cada año de antigüedad;

más de 10 años y hasta 15 años: el 90% del último sueldo, por cada año de antigüedad que exceda de los 10 años;

más de 15 años y hasta 20 años: el 80% del último sueldo, por cada año de antigüedad que exceda de los 15 años.

La escala precedente es acumulativa y no será computada la antigüedad que exceda de los 20 años.

A los efectos de la aplicación de esta escala, se tendrá en cuenta el sueldo básico y bonificación por antigüedad, con exclusión de toda otra retribución. Para el cómputo correspondiente se considerará la antigüedad que se bonifique por tal concepto en el orden Nacional y que corresponda a cualquier momento de la carrera del personal. Las fracciones mayores de seis (6) meses se computarán como un (1) año y las menores serán despreciadas.

Entiéndese únicamente por sueldo básico los importes totales nominales que perciba el personal en concepto de:

a) Remuneración mensual básica determinada por presupuesto;

b) Adicional por función, cuando éste se liquide como diferencia entre la remuneración a que se refiere el inciso a) precedente y el valor total que se le hubiere asignado a una función, mediante un régimen instituído al efecto por el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 30º.- El agente tendrá derecho a reclamar ante la autoridad superior, el pago de la indemnización por la que hubiere optado, dentro de los treinta (30) días de haberse notificado de la sentencia que dispuso su reincorporación. La autoridad administrativa, recibido el reclamo asumirá la

responsabilidad del estricto cumplimiento de la aplicación de la escala determinada en el artículo anterior y el pago de la indemnización dentro de un plazo no mayor de quince (15) días.

ARTICULO 31º.- Se tendrá derecho a indemnización especial en los casos de traslado por cambio de destino, gastos y daños originados en o por actos del servicio, accidentes del trabajo y enfermedad profesional, y en otros supuestos que reglamentariamente puedan disponerse con fines de protección social y familiar.

En los casos de accidentes del trabajo o enfermedad profesional se aplicarán las indemnizaciones acordadas por la Ley Nº 9.688, sin perjuicio de los beneficios que el Poder Ejecutivo considere oportuno determinar en la reglamentación que al efecto dicte.

ARTICULO 32º.- El personal de la Administración Nacional tendrá derecho a asociarse con fines culturales y sociales, de acuerdo con el régimen establecido en la Constitución Nacional, las modalidades impuestas por la costumbre y las instituciones existentes en el país.

ARTICULO 33º.- El personal de la Administración Nacional obtendrá de los servicios sociales dependientes de los Ministerios y Organismos descentralizados los beneficios que reglamentariamente correspondan, para lo cual éstos con carácter obligatorio deberán:

a) Realizar la atención de asistencia médica integral, odontológica, farmacéutica, económica, social y cultural;

b) Prestar dicha atención en forma conjunta, siendo la prestación de servicios similares en todos los Ministerios y Organismos descentralizados;

c) Efectuar convenios para la ayuda mutua en la prestación de los distintos servicios sociales, cualesquiera sea el lugar, tiempo, forma y condiciones en que se realicen los mismos;

d) Coordinar las respectivas administraciones de los servicios sociales, con la participación activa y pasiva del personal perteneciente a los Ministerios y Organismos descentralizados del cual dependan.

El personal y sus familiares tendrán derecho a los beneficios que proporcionen los servicios sociales, cuando hayan hecho efectivo un aporte, el que será obligatorio y proporcional, en las condiciones y forma que determine la reglamentación correspondiente.

El aporte concurrente del Estado, será efectivo en la medida y condiciones que lo establezca la Ley de Presupuesto.

CAPITULO V

REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 34º.- El personal no podrá ser privado de su empleo ni objeto de medidas disciplinarias, sino por las causas y procedimientos que este Estatuto determina.

Se harán pasibles por las faltas o delitos que cometan, y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales fijadas por las leyes respectivas, de las siguientes sanciones:

a) apercibimiento;
b) suspensión, hasta de un mes;
c) postergación en el ascenso;
d) retrogradación de categoría en el empleo;
e) cesantía;
f) exoneración.

ARTICULO 35º.- El apercibimiento puede ser aplicado por los Jefes inmediatos y la suspensión hasta diez (10) días por los Jefes Superiores, a requerimiento de aquéllos. La suspensión mayor de diez (10) días y la postergación, serán dispuestas por los Ministros y autoridades superiores de los organismos, según corresponda.

La retrogradación de categoría, la cesantía y la exoneración

serán aplicadas exclusivamente por el Poder Ejecutivo o autoridad competente.

ARTICULO 36ª.- Son causas para aplicar las medidas disciplinarias enunciadas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 34ª según corresponda, las siguientes:

a) Incumplimiento reiterado del horario fijado por las leyes y reglamentos;

b) Inasistencias injustificadas que no excedan de diez (10) días en el año;

c) Falta de respeto a los superiores o al público;

d) Negligencia en el cumplimiento de sus funciones;

e) Calificación deficiente durante dos (2) años consecutivos.

ARTICULO 37ª.- Son causas para la cesantía:

a) Inasistencias injustificadas que excedan de diez (10) días en el año, contínuos o discontinuos;

b) Incurrir en nuevas faltas que den lugar a suspensión, cuando el inculpado haya sufrido, en los once meses anteriores, treinta (30) días de suspensión disciplinaria;

c) Abandono de servicio sin causa justificada;

d) Faltas reiteradas en el cumplimiento de sus tareas y falta grave respecto al superior en la oficina o en actos del servicio;

e) Ser declarado en concurso civil o quiebra, salvo caso debidamente justificado;

f) Inconducta notoria;

g) Calificación deficiente en el período posterior al de retrogradación de categoría en el empleo;

h) Incumplimiento de las obligaciones determinadas en el artículo 6ª y no sancionadas en el artículo 36ª;

i) Quebrantamiento de las prohibiciones especificadas en el artículo 7ª;

ARTICULO 38ª.- Son causas para la exoneración:

a) Delito que no se refiera a la Administración, cuando el hecho sea doloso y de naturaleza infamante;

b) Falta grave que perjudique material o moralmente a la Administración;

c) Delito contra la Administración:

d) Incumplimiento intencional de órdenes legales;

e) Indignidad moral;

Las causales enunciadas en este artículo y los dos anteriores no excluyen otras que importen violación de los deberes del personal.

ARTICULO 39ª.- El personal presuntivamente incurso en falta podrá ser suspendido, con carácter preventivo y por un término no mayor de treinta (30) días por la autoridad administrativa competente, cuando su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento de los hechos motivo de investigación o cuando su permanencia sea incompatible con el estado de autos.

Cumplido este término sin que se hubiere dictado resolución, el agente podrá seguir apartado de sus funciones si resultare necesario, pero tendrá derecho a partir de entonces a la percepción de sus haberes, salvo que la prueba acumulada autorizara a disponer lo contrario y siempre por un término no mayor de noventa (90) días. Si la sanción no fuera privativa de haberes, éstos le serán íntegramente abonados; en su defecto, le serán pagados en la proporción correspondiente.

ARTICULO 40ª.- Las suspensiones mayores de diez (10) días, la postergación en el ascenso, la retrogradación de categoría, la

cesantía y la exoneración, sólo podrán disponerse previa instrucción del sumario respectivo, salvo cuando medien las causales previstas en el artículo 36ª, incisos a), b) y c), y 37ª, incisos a), b) y g).

En los casos en que no se requiera formación de sumario, el personal será sancionado sin otra formalidad que la comunicación por escrito, con indicación de las causas determinantes de la medida.

ARTICULO 41ª.- El sumario será secreto hasta que el sumariante dé por terminada la prueba de cargo. En ese estado se dará vista de tres a diez días, al inculpado para que el mismo efectúe sus descargos y proponga las medidas que crea oportunas para su defensa.

El sumariado podrá hacerse asistir por un letrado en las actuaciones pertinentes.

ARTICULO 42ª.- Toda sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta o infracción, los antecedentes del agente y, en su caso, los perjuicios causados.

El personal no podrá ser sancionado sino una sola vez por una misma causa.

ARTICULO 43ª.- En cada Ministerio y Organismo no perteneciente a su administración central, funcionarán una o más Juntas de Disciplina y una Junta de Calificaciones. Cada Junta estará compuesta de cinco (5) miembros titulares y cinco (5) suplentes. Tres (3) titulares y tres (3) suplentes -uno de ellos, por lo menos, letrado- serán nombrados por el respectivo Ministerio o por la autoridad competente; y dos (2) titulares y dos (2) suplentes, representarán al personal y serán designados en la forma y tiempo que determine la respectiva reglamentación.

Para ser miembro de la Junta se requiere ser argentino, haber cumplido treinta (30) años de edad y diez (10), por lo menos, de antigüedad en la Administración Nacional.

Los miembros de la Junta durarán tres (3) años y se renovarán totalmente al finalizar el período. Si finalizado el período no se hubiese procedido a la renovación, los miembros

actuantes continuarán en funciones hasta la constitución de la nueva Junta.

ARTICULO 44º.- La Junta de Disciplina dictaminará necesariamente en todo sumario administrativo incoado por razones disciplinarias, a cuyo fin le serán remitidas las actuaciones dentro de los cinco (5) días de concluídas por el sumariante correspondiente. Se acompañará en todos los casos el legajo del sumariado.

La Junta debe pronunciarse dentro de los veinte (20) días, plazo prorrogable al doble si fuere necesario para mejor proveer.

ARTICULO 45º.- La Junta de Calificaciones, tendrá competencia y resolverá necesariamente en todo reclamo interpuesto por razones de calificaciones, ascensos, menciones y orden de mérito, a cuyo fin le serán remitidos los antecedentes, legajos, sumarios y todo cuanto la misma requiera o disponga, dentro de los cinco días de haberlos solicitado.

La Junta debe pronunciarse dentro de los diez (10) días, plazo prorrogable al doble si fuere necesario para mejor resolver.

CAPITULO VI

EGRESO

ARTICULO 46º.- El agente dejará de pertenecer a la Administración en los siguientes casos:

a) renuncia;

b) fallecimiento;

c) razones de salud que lo imposibilitan para la función, después de haber agotado los beneficios que corresponda;

d) incompatibilidad;

e) inhabilidad o violación de los deberes del cargo comprobada por sumario, que dé lugar a cesantía o exoneración;

f) otros casos que prevé este Estatuto.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 47º.- Es incompatible el desempeño de un cargo en la Administración Nacional con otro empleo Nacional, Provincial o Municipal, de acuerdo con el régimen establecido por las leyes y reglamentaciones en vigencia.

ARTICULO 48º.- Al personal que reingresara a la Administración y hubiera obtenido anteriormente indemnización por cesantía, no se le computará la antigüedad precedente a los efectos de ulterior separación, pero le será tenida en cuenta dicha antigüedad para los otros beneficios estatutarios provenientes del nuevo nombramiento.

ARTICULO 49º.- A solicitud del personal le será asignadas nuevas tareas cada decenio, con el fin de facilitarle un mejor desempeño y capacitación. Dicha rotación funcional se acordará preferentemente a aquellos con antecedentes meritorios.

ARTICULO 50º.- En todos los organismos de la Administración se llevará el legajo ordenado del personal, en el que constarán los antecedentes de su actuación. El personal podrá solicitar vista de su legajo.

Los servicios certificados por las distintas dependencias se irán acumulando de modo que la última pueda expedir la certificación completa necesaria para los trámites jubilatorios.

ARTICULO 51º.- El Poder Ejecutivo estructurará un régimen de préstamos hipotecarios, con el fin de asegurar la posibilidad de que el personal de la Administración Nacional y su núcleo familiar gocen del amparo de la vivienda propia, y promoverá las exenciones impositivas adecuadas al objeto perseguido por dichos préstamos, como así también, el sistema de seguros obligatorios de vida y contra incendios.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 255.-

INCOMPATIBILIDADES - JUBILACIONES

Buenos Aires, 28 de mayo de 1957.-

VISTO:

Las solicitaciones de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de la La Plata para que se exceptúe del régimen de incompatibilidades de la Ley 14.370/54 a los cargos directivos y docentes de las Universidades, atento la autorización del art. 26ª de esa ley,

CONSIDERANDO:

Que la necesaria reorganización de las Universidades ha requerido y puede requerir aún, la colaboración en cargos directivos y docentes de personas acogidas a los beneficios de la jubilación, pudiendo ocurrir igual situación si éstos son designados en los concursos que se abran para la provisión de las cátedras y otros cargos docentes o son más tarde designados, conforme a los Estatutos que se dicten, en los cargos directivos y docentes de las Universidades, Facultades e Institutos que de ellas dependan, una vez normalizada la vida de esas casas de altos estudios;

Que no podría exigirse esta colaboración, de mantenerse la incompatibilidad que determine el art. 26ª de la Ley 14.370/54, sin desmedro de principios elementales de equidad y justicia;

Que hay evidente interés nacional en asegurar la colaboración aludida, pues de otro modo no sería factible el proceso de reconstrucción de las Universidades, emprendida por el Gobierno de la Revolución Libertadora, en cumplimiento de una de las más importantes directivas básicas;

Que a la par que se satisface este interés, se cumple la obligación de hacer justicia, cuando se trata de profesores reincorporados conforme a lo previsto y autorizado por el De-

creto Nº 2.538/55;

Que establecer un régimen transitorio de compatibili es facultad delegada al Poder Ejecutivo, conforme al art. "in-fine" de la Ley 14.370/54, debiendo medirse la transi riedad a que esta delegación se refiere, en función de l necesidades de las Intervenciones decretadas después del 1 de septiembre de 1955 y de la reconstrucción de las Univer sidades, en su primer período de vida normal;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Declárase compatible el goce de la jubilación y el sueldo correspondiente a los cargos que desempeñen, en las Universidades Nacionales, Facultades e Institutos que de ellas dependan, las personas designadas por las intervenciones en aquéllas.

ARTICULO 2º.- Será igualmente compatible el goce de la jubilación y el sueldo correspondiente a cargos directivos y docentes, para los que fueran designados, conforme a lo previsto en los Decretos-Leyes 6.403/55 y 10.775/56 y disposiciones que se dicten en el futuro, durante un período de cinco años a partir del presente decreto.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Educación y Justicia.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Acdel E. Salas

DECRETO Nº 5.610.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 256.-

AUTOMOTORES - PROHIBICIONES

Buenos Aires, 17 de junio de 1957.-

Visto lo dispuesto por el artículo 38ª del decreto-ley nª 23.573/56, y

CONSIDERANDO:

Que dicho texto reproduce literalmente las prescripciones contenidas por el artículo 23ª del decreto-ley nª 7.104/55, derogado por el acto de gobierno antes referido;

Que a los efectos derivados de la comentada prescripción, relacionada con la compra y venta de automotores, y de conformidad con el informe que produjera la Contaduría General de la Nación en el expediente nª 111.350/56, este Ministerio dictó la resolución ministerial nª 8.090/56 (+), aclaratoria y complementaria de dicha medida;

Que frente al dictado del decreto-ley nª 23.573/56 que, como queda expresado, reitera el principio sustentado en la materia por su precedente, el nª 7.104/55, corresponde también mantener la aplicación de la correspondiente norma reglamentaria;

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 42ª del decreto-ley nª 23.573/56,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1ª.- Determínase las siguientes normas aclaratorias respecto a las operaciones que se realicen en la Administración Nacional, en orden a lo determinado por el artículo 38ª del decreto-ley nª 23.573/56:

a) con el producido de la venta de automotores puede procederse a la adquisición de un menor número de unidades, debiendo éstas ser de las mismas características y con igual destino que el de las reemplazadas;

b) en ningún caso se podrá adquirir una mayor cantidad de automotores que los enajenados;

c) cuando el importe recaudado por la venta de los vehículos sea superior al costo de las compras, la diferencia deberá ser ingresada a Rentas Generales o a la cuenta de recursos que proceda, si hubiesen sido adquiridos mediante financiación especial.

2º.- Comuníquese a todos los Ministerios y organismos del Estado, tome nota la Dirección General de Contabilidad y Administración y Dirección General de Suministros del Estado y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 7.209.-

(+) Ver D.M. nº 219.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 257.-

LICENCIAS

Expediente nº 37.209/57.- Mº de Agricultura y Ganadería solicita interpretación alcance art. 29º, apartado 2º, del decreto nº 12.720/53, modificado por decreto nº 17.609/56. "Cargo de representación gremial o sindical".-

///--nos Aires, junio 11 de 1957.-

Con referencia a la consulta formulada en estas actuaciones, vuelva al Ministerio de Agricultura y Ganadería significándole que a juicio de este Departamento de Estado la licencia prevista por el artículo 29º, apartado 2º del decreto nº 12.720/53, modificado por el decreto nº 17.609/56, comprende en esencia, a aquellos agentes que son elegidos para desempeñar un cargo de carácter gremial o sindical en representación de personal del Estado, es decir, para el ejercicio de mandatos electivos.

Ello no obstante y atento la necesidad de prever otras situaciones especiales relacionadas con el desenvolvimiento de los organismos gremiales y sindicales, puede aceptarse que, por extensión, se acuerde el beneficio comentado para desempeñar cargos de dirección o intervención, siempre que el nombramiento hubiera emanado de autoridad competente y la C.G.T. o el sindicato respectivo con personería gremial, efectúe la comunicación de práctica al Ministerio pertinente.

A través de lo expuesto precedentemente surge que el alcance de la frase "...en la medida necesaria mientras dure su mandato...", contenida en el texto comentado es el de circuns

cribir la licencia exclusivamente al lapso durante el cual se ejerza el cargo electivo (mandato), en el primer caso, y condicionar la licencia a los casos estrictamente indispensables y justificados en el supuesto de la segunda alternativa comentada en el párrafo anterior.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA
Ministro de Hacienda de la Nación

DIRECCION Gral. de CONTADURIA y ADMINISTRACION
Dirección General

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 258.-

DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL

Buenos Aires, 5 de junio de 1957.-

Visto el decreto nº 21.644/56, por el cual se reestructura y reglamenta el funcionamiento de la Dirección General de Obra Social del Ministerio de Hacienda, y

CONSIDERANDO:

Que por dicho acto quedaron transferidas a la Dirección General citada, las facultades ejecutivas que el decreto nº 8.854/49 concedía al ex-Consejo Consultivo y de Contralor, reservándose a este Cuerpo -denominado ahora Consejo Consultivo- la función de asesoramiento en las condiciones previstas por el artículo 7º;

Que ello no obstante, en la enumeración de los deberes y atribuciones que fija el nuevo estatuto al Director General de Obra Social, no se ha contemplado la autorización para designar personal transitorio por un período no mayor de seis (6) meses, que el recordado decreto nº 8.854/49 (artículo 7º, inc. c), concedía al ex-Consejo Consultivo y de Contralor;

Que el ejercicio de dicha facultad resulta indispensable para el eficaz desenvolvimiento de los servicios a cargo de la dependencia, toda vez que permite atender de inmediato sus necesidades, y además, constituye el procedimiento económicamente más adecuado para su sistema de explotación;

Que en consecuencia, procede ampliar las atribuciones de la Dirección General de Obra Social en el sentido señalado;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Substitúyese el inciso m) del artículo 5º del

decreto nº 21.644 de fecha 4 de diciembre de 1956, por el siguiente texto:

"Proponer al Ministerio de Hacienda la designación del per
"sonal permanente necesario, su promoción y remoción y nom
"brar personal jornalizado transitorio por un período no ma
"yor de seis (6) meses";

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Aldalbert Krieger Vasena

DECRETO Nº 5.924.-

Boletín Nº 259.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Buenos Aires, 21 de junio de 1957.-

Visto la disposición contenida en el inciso e) del artículo 3º de la resolución ministerial nº 478/49 (modificada por la resolución nº 1.977/53), reglamentaria del régimen de bonificaciones por antigüedad para el personal de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que en dicha medida se establece, con carácter general, que para el reconocimiento de la antigüedad declarada por el agente a los efectos del beneficio de referencia, será condición indispensable que el agente acredite haber efectuado los aportes correspondientes ante el Instituto Nacional de Previsión Social;

Que la norma antes citada no tuvo otro objeto que el de inducir al personal a regularizar el reconocimiento de sus prestaciones con ajuste a los regímenes previsionales, pero evidentemente, dicha circunstancia carece de relevancia a los efectos de la bonificación por antigüedad, toda vez que la certificación de los servicios expedida por la autoridad competente de la dependencia en la cual el agente se desempeñó, resulta suficiente probanza a esos fines, máxime si se tiene en cuenta que ese documento es el elemento de juicio que sirve a las respectivas Cajas de Previsión para efectuar el reconocimiento de servicios;

Que por otra parte, las Cajas de Previsión no se avienen a certificar las prestaciones del personal aún en actividad cuando éste las solicita al sólo efecto de hacerlas valer para su cómputo en el régimen de bonificaciones -como tampoco a los efectos del régimen de licencias-, en virtud de lo cual y de acuerdo con la comentada disposición de la resolución nº

478/49, el causante debe resignar su derecho a percibir el beneficio a que lo hace acreedor su real antigüedad;

Que, en consecuencia, se conceptúa justo modificar la disposición invocada al principio, de forma tal que, sin perjuicio de los resguardos de autenticidad que deben caracterizar toda documentación, puedan solucionarse los inconvenientes enunciados precedentemente;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º.- Substitúyese el inciso e) del artículo 3º de la resolución nº 478/49, según la modificación introducida por la resolución nº 1.977/53, por el siguiente:

"inciso e): Para ser acreedor a los beneficios de la boni"ficación por antigüedad, será condición indispensable, "con carácter general, que el agente presente la respecti"va certificación de los servicios prestados, expedida por "autoridad competente, salvo en los casos del Decreto nº "21.120/56".-

2º.- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Digesto Ministerial y archívese.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 7.223.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 260.-

VIATICOS

Buenos Aires, 7 de junio de 1957.-

Visto la consulta formulada por la Administración General de Vialidad Nacional en lo relativo al procedimiento a seguir para la liquidación de viáticos en orden a lo estatuído por el Decreto Nº 18.989 de fecha 16 de octubre de 1956 y, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13º del mismo en materia de normas aclaratorias y de interpretación que fueran necesarias para la mejor aplicación de todo cuanto dispone el mencionado pronunciamiento,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- El sueldo básico dá derecho a la percepción de un determinado viático reglado por el Poder Ejecutivo y, desde el momento en que éste dispone la promoción del agente, corresponde ajustar la pertinente liquidación a la nueva situación de revista.

ARTICULO 2º.- Si en el pronunciamiento que acuerda promociones se prevé una retroactividad, la misma no podrá ser considerada a los efectos de reconocer diferencias en concepto de viático atento a lo determinado expresamente por el Decreto Nº 19.989 (Artículo 2º, Punto II, Inciso 1).

ARTICULO 3º.- Cabe aplicar las escalas de viáticos respectivas, con arreglo al lapso en que rigió cada una de ellas, es decir, hasta el 31 de octubre de 1956 las disposiciones dictadas oportunamente en cuanto a la materia y, desde el 1º de Noviembre de 1956, las del Decreto Nº 18.989/56 que las sustituyó.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 127.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 261.-

SUELDO -- DIFERENCIA DE HABERES - REEMPLAZOS - PRESUPUESTO

INFORME Nª 72.-

Expediente nª 1.134/56 (Reservado)

///mo señor Ministro de Finanzas:

Por las presentes actuaciones, el doctor J... Martín de Lundo, gestiona el pago de las diferencias existentes entre los sueldos que percibió como Oficial Mayor y Subdirector General y el correspondiente a Director General de Asuntos Jurídicos, en razón de haber desempeñado esta función desde el 24 de julio de 1953 hasta el 14 de julio de 1955.

Esta Contaduría General, estima que el presente caso no es posible resolverlo de acuerdo a las disposiciones del decreto nª 10.542/46, por no concurrir en el particular, la circunstancia del reemplazo legal o reglamentario que el mismo determina, ni tampoco cumplirse la exigencia que establece dicho decreto en su artículo 2ª puesto que según lo informado a fs. 25, el cargo que invoca el recurrente, no figura en el presupuesto respectivo con especificación funcional, sin que se haya suplido ese aspecto por el acto competente que para tales situaciones establece el artículo 3ª del referido decreto.

En consecuencia, no estando comprendido en las prescripciones del mencionado decreto, considera esta Repartición, que la situación de hecho que se presenta sólo puede ser resuelta por el Poder Ejecutivo al margen del citado régimen.

Con lo expuesto, tengo el honor de elevar a V.E. el presente.-

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, abril 18 de 1956.-

Fdo. RODOLFO J. TARELLI
Presidente

Expediente 310 - 1956. Dr.José Antonio Martín de Lúndo. Ref. actuación en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio.-
MINISTERIO DE FINANZAS DE LA NACION

Señor Ministro de Hacienda:

I. El Dr. José Antonio Martín de Lúndo revistaba, en oportunidad de las circunstancias que motivan las presentes actuaciones, como Oficial Mayor y luego como Subdirector General en ese Departamento de Estado.

El funcionario de referencia fué encargado por la Superioridad para atender la Dirección General de Asuntos Jurídicos y es con motivo del cometido que cumpliera en la misma, que solicita le sean abonadas las diferencias de sueldos, aguinaldos y compensaciones por mayor costo de vida y movilidad correspondientes al cargo de Director General de Asuntos Jurídicos durante el tiempo que estuvo a cargo de dicha dependencia.

La Contaduría General de la Nación sostiene que en la situación del recurrente no concurren los presupuestos que exige el decreto nº 10.542/46.

II. Comparto el criterio de la referida Repartición, en cuanto el precitado exige como requisito fundamental para que la suplencia o interinidad traigan aparejadas el derecho a la diferencia de sueldos entre el correspondiente al cargo de que es titular y el del cargo que desempeña como suplente o interino, que ella constituya una obligación legal o reglamentaria (art. 1º, 1er. apartado, inc. c).

Dado que de las constancias subexamen no surge que al recurrente le correspondiera, por imperativo legal o reglamentario, ocupar la Dirección General de Asuntos Jurídicos al no haber un titular a su frente, convengo que de interpretar aquella disposición textualmente el recurrente quedaría excluído de la misma. Sin embargo, hay que admitir que si se reconoce el derecho al cobro de diferencias a quienes, entre las funciones de su cargo, se encuentra la de tener que sustituir a sus su-

periores en caso de ausencia o vacancia, con mayor razón deberá corresponder igual derecho a aquéllos que sin detentar una obligación legal o reglamentaria les es confiado el ejercicio de un cargo superior.

Si a esto se añade que el principio a atender es el de retribuir por las funciones realmente prestadas, la situación en ambos casos es exactamente la misma. El decreto invocado no ha hecho otra cosa entonces que prever las situaciones corrientes; pero esto no significa que por sólo ello deberán quedar excluídos de la justa solución los funcionarios que en el hecho (y con mayor razón, como lo dejo expresado) se encuentran en condiciones análogas a la reglamentada.

III. Por los argumentos anotados, que respetan los principios de equidad (art. 16 Cod.Civil), considero que corresponde acceder a lo solicitado.

Junio 27 de 1956

Fdo. FAUSTO ENRIQUE CORTES
Sub-Procurador del Tesoro de la Nación

Expediente nº 73.180/56.-

SEÑOR MINISTRO:

El doctor José A.M. De Lúndo gestiona por las presentes actuaciones el reconocimiento y pago de las diferencias existentes entre los sueldos que percibió como Oficial Mayor y Subdirector General y los correspondientes a Director General de Asuntos Jurídicos, en razón de haber desempeñado estas funciones desde el 24 de julio de 1953 hasta el 14 de julio de 1955.

A fs. 30, la Contaduría General de la Nación expresa que el caso en cuestión no es posible resolverlo en orden a las dis

posiciones del decreto nº 10.542/46 por no ocurrir en la especie la causal del reemplazo legal o reglamentario que prevé el artículo 1º de dicha norma, ni cumplirse tampoco el recaudo de su artículo 2º, ya que el cargo que invoca el recurrente no figura en el respectivo presupuesto con especificación funcional, sin que dichas circunstancias hubieran sido superadas mediante el acto que a tales efectos establece el artículo 3º del mismo decreto. Considera por ello la repartición "que la situación de hecho que se presenta sólo puede ser resuelta por el Poder Ejecutivo al margen del citado régimen".

El señor Sub-Procurador del Tesoro conviene con la Contaduría General de la Nación en que tomada "textualmente la norma dada por el decreto nº 10.542/46, el causante quedaría excluído del reconocimiento pretendido". Ello no obstante interpreta que si se reconoce el derecho al pago de las diferencias de haberes a quienes tienen obligación reglamentaria de suplir a sus superiores en caso de ausencia, "con mayor razón deberá corresponder igual derecho a aquellos que sin detentar una obligación legal o reglamentaria es confiado al ejercicio de un cargo superior". Añade, en apoyo de esta posición, que si se pretende retribuir funciones realmente prestadas, la situación es la misma en ambos casos. Considera así que las disposiciones del decreto normativo no ha hecho otra cosa que atender situaciones corrientes, pero ello no significa que deban quedar excluídos de una justa solución otros funcionarios que se encuentran en situaciones análogas.

La situación planteada en estas actuaciones ha sido frecuentemente analizada por esta Dirección General, y en tales oportunidades ha sostenido invariablemente la improcedencia del reconocimiento cuando no hubieran verificado los extremos previstos en los artículos 1º, 2º y 3º del decreto nº 10.542/46, esto es, a) que el reemplazo sea legal o reglamentario; b) que el cargo respectivo tuviera especificación funcional en

el presupuesto correspondiente o, en su defecto, c) que existiera el acto competente que al asignar las funciones, determinará el derecho a percibir la diferencia de haberes. Dichas opiniones fueron corroboradas por sendos pronunciamientos ministeriales (se acompaña copias).

En ese sentido y con respecto al derecho que asiste al recurrente para percibir la diferencia de haberes que reclama, resulta oportuno recordar lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro de la Nación en el expediente nº 43.917/47-Ministerio de Salud Pública. En dichas actuaciones el doctor Héctor M. Piñero que revistaba como Oficial 8º -Médico Jefe del Hospicio de las Mercedes- reclamaba diferencia de haberes con motivo de haber sido designado Director Interino del Hospicio, por resolución ministerial. En tal oportunidad, dijo el señor Procurador: "La situación del Doctor Piñero no se halla encuadrada en el decreto nº 10.542/46, que reglamenta la liquidación y pago de diferencia de haberes al personal de la Administración que desempeña cargos superiores". Luego de enumerar cuales son los requisitos que el decreto citado exige en sus artículos 1º, 2º y 3º, sigue: "Por consiguiente, para que pudiese funcionar la autorización contenida en el artículo 5º del citado decreto -liquidación automática de la diferencia de sueldos en favor de los beneficiarios- no solamente habría sido necesario que el Poder Ejecutivo hubiese designado al recurrente para desempeñar interinamente o en carácter de suplente el cargo de Director del Hospicio, estableciendo expresamente que tendría derecho a la diferencia de sueldos, sino también que se contara con el crédito de presupuesto que permitiera la imputación respectiva, No habiendo ocurrido así, el funcionario en tales condiciones carece de un derecho subjetivo para pretender la liquidación y pago de diferencia de haberes por haber cumplido funciones de un cargo de jarárquia superior", Y más adelante dice: "El presente, es un caso en que, sino por derecho, ya que como lo hemos visto, el recurrente carece de él, si por razones de equidad, el Poder Ejecutivo puede, si lo desea, reconocer la diferencia de sueldos reclamada".

Sirve también como antecedente para el caso en estudio, los siguientes fallos judiciales: Corte Suprema de Justicia de la Nación: Torres B. Gobierno Nacional. En sentencia que confirma resolución recurrida, por la cual se rechazó la demanda instaurada sobre cobro de pesos por diferencia de sueldos, la Corte expresó: "Que si el señor Torres ha demostrado el desempeño de funciones de subcomisario, de conformidad con las reglamentaciones vigentes, no ocurre lo mismo con el título en virtud del cual desempeño esas funciones, que compete expedir dolamente al Poder Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 86, inc. 10 de la Constitución Nacional, atribución que no consta que fuera delegada ni puede ser delegada. Tampoco el Poder Ejecutivo aprobó los servicios prestados por el auxiliar Torres en carácter de subcomisario. Que, como se expresa en la sentencia de la. instancia y lo ha consagrado la jurisprudencia constante de esta Corte, las relaciones jurídicas derivadas de la condición de empleado público, su nombramiento, remoción y sus retribuciones, etc., no están regidos por el derecho común, en conceptos de locación de servicios (art. 1627 y concordantes del C.C.) sino por el derecho administrativo, y el Estado procede en ellos como poder público y no como persona jurídica (Fallos: Tº 11, pág. 476; Tº 22, pág. 37; Tº 99, pág. 309; Tº 121, pág. 65; Tº 146, pág. 393)." Ver fallos de la Corte: Tº 160, pág. 166; J.A. Tº 35, pág. 529, Cámara Federal de la Capital, J.A. Tº 72, pág. 320. En el juicio "Mercado Roque vs. la Nación", la Corte Suprema, expresó: "La circunstancia de que el actor, ayudante idóneo de farmacia de la Cárcel Nacional de Encausados, haya reemplazado al farmacéutico Jefe en numerosas oportunidades, no basta para crear entre el primero y la Nación una relación jurídica que obligue a ésta a retribuirle los servicios extraordinarios que pretende haber prestado, pues aquella no podría originarse sin la correspondiente decisión del Poder Ejecutivo. (Fallos Tº 181, pág. 436)."

Por otra parte, en el caso plantea ..f el señor Raúl Uzal, en expediente nº 112.023/54, al analizar la aplicación del insistido decreto nº 10.542/46 y ante la posiblidad de resolver el reconocimiento cuestionado por vía de excepción, esta Dirección General manifestó: "Aceptado ya que la ortodoxia del texto legal citado (Dto. 10.542/46) no permite a este Ministerio la posibilidad de resolver favorablemente el caso planteado, veamos si como lo propone la Contaduría General de la Nación en su informe de fs. 2, prevé la Dirección General de Asuntos Jurídicos a fs. 12/13, debe el Poder Ejecutivo autorizar excepcionalmente, a mérito de equidad, el reconocimiento impetrado... En primer lugar y en lo que hace a si el caso en cuestión estaría o no contemplado en el "espíritu de equidad que habría inspirado las normas que reglamentan el reconocimiento del derecho a la diferencia de haberes, esta repartición considera necesario señalar que, contrariamente a lo que se supone, dicho texto legal no debe ser interpretado en forma amplia e ilimitada, sino que, siendo su objeto reprimir lo discrecional en el reconocimiento de haberes por reemplazo, su carácter es netamente restrictivo. En efecto, el párrafo inicial del segundo considerando del referido decreto, determina expresamente: "Que es indispensable precisar las situaciones en que es procedente liquidar y abonar la diferencia de sueldos correspondientes ...". Esto es, que si el régimen de que se trata prevé taxativamente las causas en que es viable el reconocimiento, por contrario imperio surge que los no contemplados en él, no podrían prosperar".

"Por otra parte, es evidente que el rigorismo del texto tiene por fundamento no consentir la delegación de facultades privativas del Poder Ejecutivo (art. 86 C.N.) y en tal sentido determina que no es suficiente la legalidad del reemplazo si no existe al mismo tiempo la especificación funcional en el presupuesto respectivo (art. 2º y 3º del decreto nº 10.542/46). Este criterio sirvió de fundamentoo a esta Dirección General para sostener su oposición al intento de proponer al Poder Ejecutivo el reconocimiento con carácter de excepción de situaciones como la que se analiza, por cuanto un pronunciamiento de esa naturaleza, dictado a posteriori, aún cuando fuera por vía de decreto, entraña apartarse del

régimen general citado en el artículo 3º, según el cual la intervención de aquella jerarquía es precisamente a los efectos de asignar funciones (nombrar), siendo evidente entonces que ese acto, en un orden de acatamiento legal, debe ser previo o a lo sumo, contemporáneo a la puesta en actividad del interesado. Ensayar un procedimiento contrario a esa norma configura un riesgoso precedente que no se justifica a mérito de dejar regularizada una situación de hecho, Así también lo ha entendido en otras oportunidades la Contaduría General de la Nación, quien en memorándum de fecha 17 de marzo de 1948, elevado a la Presidencia de la Nación, dijo textualmente: "desde luego, que en los casos regidos por el decreto nº 10.542/46, en que no resulten cumplidas las condiciones expresas que el decreto exige, esta Contaduría General, reiterando su opinión ya expuesta sobre el particular, estima que no corresponde acceder a tales reconocimientos pues el Poder Ejecutivo ha implantado un régimen cuyo cumplimiento debe exigirse integralmente, no siendo aconsejable establecer excepciones al mismo, por las razones que previamente determinaron su implantación y que se destacan en los considerandos del mismo.

El decreto nº 15.296/56, dictado con el expediente referido, al no hacer lugar al reclamo formulado por el señor Uzal, por no hallarse encuadrado en las normas de los artículos 2º y 3º del decreto nº 10.542/46, señala en su último considerando: "Que habiéndose precisado taxativamente en el texto de referencia (Dto. 10.542) los casos en los cuales procede la liquidación y pago de las diferencias de haberes por el desempeño de un cargo superior y contando en esta forma los respectivos organismos del Estado con los medios legales necesarios para asegurar en su oportunidad, el justo reconocimiento de los derechos acreditados, no se estima conveniente considerar por vía de excepción otras situaciones producidas al márgen de ese régimen".

De lo expuesto precedentemente se considera: a) que el Doctor José A.M. DE MUNDO carece de un derecho subjetivo para pre-

tender el reconocimiento instaurado; b) que sólo puede ser resuelto favorablemente este caso si el Poder Ejecutivo, por razones de equidad, así lo desea. Atento ello y teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo en el último considerando del decreto nº 15.296/56, ha expresado su opinión contraria a la consideración por vía de excepción, de situaciones no comprendidas en el decreto nº 10.542/46, se estima que corresponde desestimar la reclamación planteada. Ello no obstante y a fin de mejor proveer, se estima oportuna la consulta del señor Procurador General de la Nación.-

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 29-8-956.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General
de Contabilidad y Administración

Expediente nº 73.180/56.-

//—nos Aires, 3 de septiembre de 1956.-

De conformidad con lo manifestado por la Dirección General de Contabilidad y Administración, pase al señor Procurador General de la Nación encareciéndole quiera emitir su dictámen en la cuestión planteada en estas actuaciones.

Dése a la presente carácter de atenta nota.-

Fdo. EUGENIO A. BLANCO
Ministro de Hacienda de la Nación

PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Buenos Aires, 7 de noviembre de 19

SEÑOR MINISTRO:

El Dr. J.A.M. De Mundo, que revistara en presupuesto con jerarquía de Oficial Mayor y luego de Sub-Director General en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ex-Ministerio de Finanzas de la Nación, gestiona la liquidación y pago de diferencias de haberes, correspondientes al período durante el cual desempeñó interinamente el cargo de Director General de la citada dependencia.

El artículado del decreto 10.542/46 contempla dos supuestos para la procedencia del pago de diferencia de haberes, con motivo del desempeño accidental de tareas en un cargo de superior jararquía: a) cuando el respectivo presupuesto de gasto especifica las funciones correspondientes al cargo que el agente desempeña en propiedad y al cargo que vino a ejercer en calidad de sustituto; b) cuando falta tal especificación; para este último supuesto reza la exigencia de que ha de mediar decreto expreso del P.E. reconociendo el derecho al cobro de la diferencia.

Los dos supuestos mencionados corresponden a la doble situación que registran comúnmente los presupuestos de los organismos administrativos, en lo que atañe a remuneración de su personal de funcionarios y empleados. Tal dualismo no es otra cosa que el correlato de la realidad funcional de dichos organismos, en los que se advierte, por un lado, la existencia de un sector reducido de agentes en las jerarquías superiores del escalafón administrativo cuyas funciones se especifican expresamente, y, por otra parte, el común del personal -que puede revistar en distintas categorías, y de hecho lo está generalmente- pero sin discriminación específica de tareas.

En atención a estas situaciones, se explica el criterio dualista consagrado por el decreto nº 10.542/46.

Para el primer supuesto, cargos en grados de superior jerarquía con especificación de tareas, el derecho a la liquidación y pago de diferencias de haberes por desempeño accidental o interino de funciones en empleo de grado superior, nace

"ipso facto", esto es, por el hecho mismo de tal desempeño, llenadas que sean las demás condiciones requeridas por el citado decreto para su procedencia, tiempo mínimo, vacancia del cargo superior, etc.

Para el segundo supuesto, en cambio, o sea empleos comunes sin discriminación de tareas y en los que no se exige una idoneidad específica, el desempeño de un cargo superior con mayor jerarquía presupuestaria sólo da derecho al cobro de la diferencia de haberes cuando medie un acto positivo y expreso del Poder Ejecutivo en tal sentido.

Pienso que tal ha sido el concepto que presidió a la redacción del decreto nº 10.542/46, y para la cual se ha tomado en cuenta la estructura de aquellos presupuestos que registran esa doble condición del personal en el elenco de cargos que incluyen.

Pero cuando, como ocurre en el presupuesto del ex-Ministerio de Finanzas, no aparece en las categorías superiores la especificación de tareas, no ha de concluirse, sin más, que sea de necesaria aplicación el art. 3º del decreto nº 10.542/46.

Opino, por el contrario, que debe examinarse previamente la realidad funcional del departamento administrativo de que se trate, para determinar si, en los hechos, se daba o no tal especificación de tareas, en relación tanto al cargo del cual es titular el agente cuanto al que desempeñe interinamente.

En el presente caso la especialidad de las funciones está, a mi juicio, debidamente acreditada. Lo prueba el hecho de que no obstante la denominación de "Oficial mayor" de su primitivo cargo, y de "Sub-Director General" después, expresivas en abstracto -si así puede decirse- de determinado grado en el escalafón administrativo, en concreto el ejercicio de las funciones desempeñadas exigía una especial idoneidad jurídica, como lo prueba la circunstancia de haber producido dictámenes legales en tal carácter.

En estas condiciones, el reemplazo del superior jerárquico en la línea de una misma especialización profesional reviste, sin lugar a dudas, el carácter de una sustitución funcional,

aunque la realidad de este estado de cosas no aparezca reflejada en el ordenamiento presupuestario de la repartición. El inferior resulta ser así también, llegado el caso, sustituto natural del superior en razón de las tareas específicas cumplidas por ambas.

En las presentes actuaciones se encuentra acreditada la vacancia del cargo superior (fs. 20) y el ejercicio efectivo de las funciones inherentes al mismo por parte del recurrente (fs. 5/8 y 58/62), como encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ex- Ministerio de Finanzas de la Nación desde el 24/7/53 hasta el 14/7/55.-

A mérito de ello y de las consideraciones expuestas precedentemente, soy de opinión, en definitiva, que corresponde hacer lugar a lo solicitado por el peticionante.

Saludo al Sr. Ministro con mi más distinguida consideración.-

Fdo. SEBASTIAN SOLER

//nos Aires, noviembre 13 de 1956.-

Atento lo actuado con posterioridad al informe producido por la Contaduría General de la Nación a fs. 30 y la interpretación que el señor Procurador General de la Nación hace respecto al alcance del decreto número 10.542/46, vuelva a la repartición citada en primer término encareciéndole quiera hacer conocer nuevamente su opinión sobre el caso de autos.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General
de Contabilidad y Administración

Expediente nº 1.134/56 CGN-Reservado - 73.180/56 MH.-
PROVIDENCIA Nº 39.-

/// nos Aires, 4 de diciembre de 1956.-

Vuelva al presente a la Dirección General de Contabilidad y Administración del Ministerio de Hacienda de la Nación, para manifestarle que esta Repartición mantiene el criterio sustentado en su informe de fs. 30 en el sentido de que sólo por vía de un decreto del Poder Ejecutivo, puede reconocerse el derecho a la percepción del mayor sueldo.

Sirva la presente de atenta nota de envío .-

Fdo. RODOLFO J. TARELLI
Presidente

Expediente nº 73.180/56.-

///—nos Aires, abril 2 de 1957.-

Pase al Tribunal de Cuentas de la Nación pidiéndole opinión si corresponde o no hacer lugar al reclamo formulado por el Dr. José A.M. De Mundo.

Dése a la presente carácter de atenta nota.-

Fdo. CESAR A. DEYLDONNAZ
Subsecretario de Hacienda de la Nación

Expediente nº 1.134/56 - Reservado
Providencia nº 4.552/57.-
Presupesto e Incompatibilidad.-

///—nos Aires, 25 de abril de 1957.-

Tratan las presentes actuaciones del reclamo interpuesto por el Dr. José A.M. De Mundo sobre diferencias de sueldo.

Este Tribunal de Cuentas, por los fundamentos del informe producido oportunamente por la Contaduría General de la Nación agregado a fs. 30 y mantenido en la Providencia de fs.69, conceptúa que no procede la liquidación automática del beneficio que acuerda el decreto nº 10.542/46, porque el caso parti

cular de que se trata no reúne los requisitos que el mismo impone.

En cuanto a si corresponde o no hacer lugar al reclamo formulado por el recurrente, este Tribunal de Cuentas no se expide por tratarse de una facultad privativa del Poder Ejecutivo.

Con lo expuesto, vuelva al Ministerio de Hacienda de la Nación a sus efectos, sirviendo la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. DALMAN FIGUEROA
Presidente

Buenos Aires, 28 de mayo de 1957.-

Visto el expediente nº 73.180/56, por el cual el Doctor JOSE A. M. DE MUNDO, gestiona el reconocimiento y pago de la diferencia existente entre los sueldos que percibió como Oficial Mayor y Subdirector General y los correspondientes a Director General de Asuntos Jurídicos del ex-Ministerio de Finanzas, en razón de haber desempeñado estas funciones desde el 24 de julio del año 1953 hasta el 14 de julio de 1955; y

CONSIDERANDO:

Que según surge de las presentes actuaciones y de lo manifestado por el causante, las funciones respectivas le fueron asignadas en la forma siguiente: I) encontrándose acéfala la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Finanzas, y revistando el interesado en la categoría de Oficial Mayor, el entonces Subsecretario de dicho Departamento de Estado le indicó verbalmente el día 24 de julio de 1953, que debería hacerse cargo de dicha repartición (fojas 2); II) el 1º de diciembre de 1953, el nombrado funcionario dictó la resolución nº 65, encomendándole "el despacho de los asuntos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (fojas 9); III) luego de pro

movido al cargo de Subdirector General por decreto nª 22.276 del 28/12/54 (fojas 26), el Ministerio de Finanzas, en fecha 14 de julio de 1955 -resolución nª 941/55- le asignó interinamente funciones de Director General, con derecho a la percepción de la diferencia de haberes correspondientes (fojas 17);

Que el decreto nª 10.542/46, que fijó las normas para toda la Administración Nacional en materia de reconocimiento de diferencia de haberes para el desempeño de un cargo superior, determina que el derecho aludido estará subordinado al cumplimiento de las siguientes reglas: Artículo 1ª, inciso b): "Que el reemplazo sea legal o reglamentario"; Artículo 2ª: "Las disposiciones del artículo 1ª, no podrán invocarse por los empleados o funcionarios, cuyos cargos no figuren en el presupuesto respectivo con especificación de tareas, ni por aquellos que se desempeñen como Jefes de las Oficinas o Secciones que integren la repartición donde prestan servicios..."; Artículo 3ª: "Cuando se trate de funcionarios o empleados cuyos cargos no contengan por presupuesto especificación de tareas, el derecho a la diferencia será procedente únicamente cuando por decreto del Poder Ejecutivo o resolución de autoridad competente de las Reparticiones Autárquicas, se los haya designado expresamente para el desempeño del cargo superior y establecido en tal designación que tendrán derecho a percibir tal diferencia, debiendo además en estos casos, concurrir los extremos que establece el artículo 1ª del presente decreto, en sus apartados a), b) y c)";

Que frente a la situación de revista del recurrente y tal como lo advierte a fojas 30 la Contaduría General de la Nación, no es procedente resolver el reconocimiento cuestionado en orden a las disposiciones del decreto nª 10.542/46, por no ocurrir en la especie la causal de reemplazo legal o reglamentario que prevé su artículo 1ª, ni cumplirse tampoco el recaudo del artículo 2ª ya que los cargos desempeñados por el causante no figuraban en el presupuesto del ex-Ministerio de Finanzas con especificación funcional, sin que esas circunstancias

hubieran sido superadas mediante pertinente pronunciamiento del Poder Ejecutivo, que a esos efectos establece el artículo 3º de la recordada norma;

Que si bien el régimen instituído por el decreto nº 10.542/46 tiende a retribuir las funciones realmente prestadas, como lo expresa el señor Subprocurador del Tesoro a fojas 36, es evidente que dicha finalidad ha de entenderse subordinada al cumplimiento de los principios y circunstancias establecidos por el mismo;

Que en tal sentido cabe destacar que la regla en consideración no debe ser interpretada en forma amplia e ilimitada, pues su objeto ha sido suprimir lo discrecional y ajustar los reconocimientos a un criterio netamente estricto, tal como lo enuncia el párrafo inicial de su segundo considerando, cuando expresa: "Que es indispensable precisar las situaciones en que es procedente liquidar y abonar la diferencia de sueldos...";

Que ello tiene por finalidad no consentir la delegación de facultades privativas del Poder Ejecutivo (artículo 86º de la Constitución Nacional), como lo demuestra el hecho de que tales reconocimientos sólo resultan procedentes cuando tienen origen en una autorización previa —presupuesto, reglamento o asignación de funciones— dada por el Poder Administrador;

Que conceder reconocimiento a posteriori con carácter de excepción, cuando no se hubieren cumplido los requisitos previstos por el decreto nº 10.542/46, aún por vía de un decreto del P.E., entraña apartarse del principio general citado en el artículo 3º, según el cual la intervención de dicha jerarquía es precisamente a los efectos de asignar funciones, y ese acto, evidentemente, debe ser previo o a lo sumo contemporáneo a la puesta en actividad del interesado;

Que conforme lo señala la Dirección General de Contabilidad y Administración a fojas 44, "ensayar un procedimiento distinto, configura un riesgoso precedente, que no se justi

fica a mérito de dejar regularizada una situación de hecho";

Que por otra parte, tampoco puede sostenerse que si el reemplazo del superior jerárquico se cumple dentro de una misma línea de especialización profesional, el inferior resulta ser así también, llegado el caso y ante la falta de normas expresas, sustituto natural del superior en razón de las tareas específicas cumplidas por ambos;

Que tal principio es inaplicable para los fines comentados, por cuanto aún dentro de una misma línea de especialización profesional, la ausencia de un régimen reglamentario permite que el sustituto del superior sea elegido entre cualquier candidato -ya sea el agente de mayor jerarquía de la repartición donde se produzca la vacante, u otro de distinta jurisdicción pero considerado más capaz, etc.- que la autoridad competente designe en uso de sus facultades, es decir, que ello entra ya en el campo de lo discrecional y en tales circunstancias, es obvio, no se pueden fundar o lesionar derechos;

Que, además, en situaciones semejantes y careciendo los cargos, como en el caso que nos ocupa, de la especificación funcional en el respectivo presupuesto, la función puede proveerse incluso con una jerarquía de presupuesto inferior a la que poseía el reemplazado, según lo demuestra una serie de antecedentes;

Que finalmente, es dable consignar el propósito de estricto acatamiento a las normas expresas fijadas por el decreto número 10.542/46, señalado reiteradamente por el P.E., y en especial con el dictado del decreto nº 15.296/56, cuyo último considerando expresa: "Que habiéndose precisado taxativamente en el texto de referencia (decreto nº 10.542/46) los casos en los cuales procede la liquidación y pago de las diferencias de haberes por el desempeño de un cargo superior y contando en esta forma los respectivos organismos del Estado con los medios legales necesarios para asegurar en su oportunidad el justo reconocimiento de los derechos acreditados, no se estima conveniente considerar por vía de excepción otras situaciones producidas al márgen de ese régimen";

Por todo lo expuesto y atento la jurisprudencia administrativa existente sobre el particular en este Departamento,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º.- No ha lugar al reclamo formulado en estas actuaciones por el Doctor JOSE A.M.DE MUNDO.

2º.- Tome nota la Dirección General de Contabilidad y Administración y notifíquese al interesado; cumplido, archívese.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 7.175.-

Buenos Aires, 24 de junio de 1957.-

Visto la presentación efectuada a fojas 79 del presente expediente nº 73.180/56, por el Doctor José A.M. De Mundo, por la cual solicita pronunciamiento del Poder Ejecutivo ratificando o rectificando la resolución del Ministerio de Hacienda nº 7.175 de 28 de mayo de 1957 (fojas 75) que dispone no hacer lugar a su reclamo por el pago de la diferencia existente entre los sueldos que percibió como Oficial Mayor y Subdirector General y las correspondientes a Director General de Asuntos Jurídicos del ex-Ministerio de Finanzas, durante el período comprendido entre el 24 de julio de 1953 hasta el 14 de julio de 1955, y

CONSIDERANDO:

Que este Poder Ejecutivo comparte en todos sus términos los fundamentos en que se apoya la denegatoria resultá por el aludido pronunciamiento del Ministerio de Hacienda (Res.nº 7.175/56), ya que los mismos interpretan fielmente el alcance del de-

creto nº 10.542/46, cuyas normas rigen la materia;
Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Ratifícase la resolución de Ministerio de Hacienda nº 7.175 del 28 de mayo de 1957 -cuyo original corre agregado a fojas 75/77 del expediente nº 73.180/56, por la cual no se hace lugar al reclamo por diferencia de haberes formulado en dichos actuados por el doctor José A. M. De MUNDO.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Ministeric de Hacienda a sus efectos.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nº 6.869.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 262.-

AUTOMOTORES - PROHIBICIONES

Buenos Aires, 1 de julio de 1957.-

Visto las presentes actuaciones -expediente nº 960.529/57- por las cuales la Dirección Nacional de Estadística y Censos gestiona la adquisición de un jeep con el producido de la venta de dos camionetas pertenecientes a la repartición, y

CONSIDERANDO:

Que frente a las disposiciones de la resolución ministerial nº 7.209/57, aclaratoria y complementaria del artículo 38º del decreto-ley nº 23.573/56, cuyo punto 1º, inciso a) determina que las unidades a adquirir deben ser de las mismas características de las que van a reemplazar, la repartición recurrente a instancias de la Dirección General de Suministros del Estado, solicita ser eximida en este caso del cumplimiento de dicho requisito;

Que ante tal requerimiento, este Ministerio considera necesario detenerse en el espíritu que animó el dictado de la norma en cuestión, como instrumento regulador de las operaciones de compra y venta de automotores que realizan los organismos del Estado;

Que, evidentemente, la expresión "de las mismas características" contenida por el texto citado no puede ser interpretada sino con sujeción a los propósitos de economía que caracterizan el régimen;

Que esos objetivos no se ven contrariados en este caso, tanto porque en reemplazo de dos camionetas en deficiente estado de funcionamiento y conservación, cuyo precio estimado de venta alcanzará aproximadamente la suma total de m$n. 100.000.--, se propone adquirir un jeep nuevo, por un importe que oscila entre los m$n. 80.000.— y m$n. 90.000.—; cuan

to porque existe verdadera similitud en las características y servicios que están en condiciones de prestar dichos automotores;

Por ello y en uso de la facultad otorgada por el artículo 42ª del decreto-ley nº 23.573/56,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E:

1ª.- Interprétase que la adquisición del vehículo del tipo jeep, con el producido de la venta de camionetas, concuerda con el sentido de la disposición contenida en el punto 1ª, inc. a) de la resolución ministerial nº 7.209/57, en cuanto a la exigencia que las unidades reemplazantes sean de las mismas características de las reemplazadas.

2ª.- Comuníquese, publíquese en el Digesto Ministerial, tome nota la Dirección General de Contabilidad y Administración y pase a la Dirección Nacional de Estadística y Censos, a sus efectos.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 7.244.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 263.-

VIATICOS - INDEMNIZACIONES - HORAS EXTRAORDINARIAS

Buenos Aires, 24 de junio de 1957.-

Visto el adjunto expediente Nº 5.396/57 (M.de H.)en el que la Junta Nacional de Granos plantea el problema creado respecto de la liquidación de viáticos a su personal escalafonado con arreglo a lo dispuesto por el Decreto Nº 18.989/56,que regla la materia, y

CONSIDERANDO:

Que si bien dicho pronunciamiento en su artículo 2º I - determina que el viático será liquidado en función del sueldo o jornal básico mensaal del agente (categoría de presupuesto)de acuerdo con la escala que al efecto establece, el caso planteado merece una consideración diferencial a la aplicada en otros organimos del Estado toda vez que, la circunstancia de hallarse los haberes del personal de la aludida Junta Nacional sujetos a un escalafón con sueldos básicos ponderados con adicionales jerárquicos, hace que la liquidación de dicho viático para personal en esas condiciones pueda ser igual o inferior al que corresponda a agentes de análoga o menor retribución;

Que por otra parte, teniendo en cuenta que el tope máximo del citado escalafón alcanza a m$n. 2100, importa considerar que el personal jerárquico logre grados de hasta Jefe de Departamento con sueldos básicos inferiores a m$n. 2.000 -límite establecido por el artículo 7º del Decreto Nº 18.989/56 para la percepción de reintegros por servicios extraordinarios-, y por consiguiente corresponde a tales funcionarios el pago de sumas por éste concepto, no obstante que la retribución real total supere a m$n. 3.000 por aplicación del adicional aludi-

do, valorado en m$n. 1.400 para la mencionada categoría;

Que, por la naturaleza de la cuestión que se plantea en el Organismo recurrente, corresponde en el caso acordar un tratamiento especial, a cuyo fin procede establecer, a los efectos de la liquidación de viáticos, indemnización por traslados y reintegros por servicios extraordinarios, que la remuneración básica prevista en el escalafón sea incrementada con el importe fijado en concepto de adicional jerárquico.

Por todo ello, y en uso de la facultad conferida por el artículo 13 del Decreto Nº 18.989/56,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- La liquidación del viático, indemnización por traslado y reintegro por servicios extraordinarios a que se refieren los artículos 2º, 5º y 7º del Decreto Nº 18.989/56, en cuanto respecta al personal de la JUNTA NACIONAL DE GRANOS sujeto al escalafón aprobado por Decreto Nº 23.471/56, se efectuará sobre los haberes que resulten de la suma de las remuneraciones básicas más el adicional jerárquico previstos en los artículos 3º y 8º del pronunciamiento citado en último término.

ARTICULO 2º.- Dése a la presente carácter de Resolución aclaratoria en orden a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto número 18.989/56.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 139.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 264.-

LEY DE CONTABILIDAD - OBRAS PUBLICAS

Buenos Aires, 28 de mayo de 1957.-

Visto lo solicitado por el Ministerio de Obras Públicas en el Expediente Nº 5.214/57 (R.M.N.) en el sentido de que se suspenda la aplicación durante el ejercicio de 1957 de las disposiciones del artículo 3º apartado 2 inciso b) del decreto-ley 23.354/56 que establece la prohibición de llevar al Plan de Trabajos Públicos, los gastos en personal o gastos generales de oficinas permanentes de la Administración Nacional, aunque se destinen al estudio de obras, trabajos y planes de referencia; y

CONSIDERANDO:

Que según surge de los informes producidos por la DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACION DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS a fs. 6, la preparación y ajuste del plan analítico de trabajos públicos dentro de esas disposiciones impondría una revisión integral de los proyectos a someter a consideración del Poder Ejecutivo, dilatándose considerablemente la aprobación definitiva de los mismos con los perjuicios que lógicamente derivaría esa situación;

Que además debe aclararse que la planificación analítica de las realizaciones previstas para el ejercicio de 1957 abarcará el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de octubre, de conformidad con el artículo 35º del decreto-ley nº 23.354/56;

Que el artículo 22º del decreto-ley nº 23.573/56 faculta al Ministerio de Hacienda para establecer, dentro de los principios administrativos y contables que inspiran los

los artículos 144ª y 145ª de la nueva Ley de Contabilidad, normas sobre presupuestos y demás planes de erogaciones que rijan en 1957;

Que resulta necesario dictar en la materia las medidas que permitan facilitar a los distintos Ministerios la formulación de los planes que regirán en el ejercicio de 1957, sin perjuicio de la oportuna adecuación a las nuevas normas en la medida que pueda realizarse sin tropiezos para la continuidad de los planes;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1ª.- Los planes analíticos de obras públicas para el ejercicio de 1957 se formularán dentro de los créditos autorizados por el decreto-ley nº 23.573/56, para el período comprendido entre el 1ª de enero y el 31 de octubre de dicho año, manteniendo la misma estructura vigente en 1956 para los planes de trabajos públicos aprobados para ese año.

En consecuencia, queda suspendida transitoriamente la aplicación de las normas contenidas en el artículo 3ª, segunda parte de la Ley de Contabilidad (decreto-ley nº 23.354/56) referente a los gastos de estudio, proyectos, dirección, inspección y fiscalización de los trabajos públicos, sin perjuicio de que oportunamente se estructuren los planes de acuerdo a lo prescripto en la última parte del artículo 145ª de la citada Ley de Contabilidad.

ARTICULO 2ª.- Comuníquese y archívese en la DIRECCION GENERAL DE FINANZAS (Departamento Movimiento de Fondos y Deuda Pública).-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 99.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 265.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - FISCALIZACION - LIQUIDACION DE PASIVIDADES

Buenos Aires, 27 de junio de 1957.-

Visto que por resolución nº 645/57 (D.A.55), se da competencia a las delegaciones para intervenir directamente en toda liquidación relativa a pasividades que produzcan los organismos de su fiscalización, y siendo conveniente fijar con carácter uniforme normas de procedimiento a las que ajustarán su cometido;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- El control y análisis de las liquidaciones relativas a retiros, jubilaciones, pensiones, indemnizaciones, derecho a sueldo de retiro y adelantos que produzcan los distintos organismos específicos de la Administración Nacional, de conformidad con las disposiciones vigentes en materia de pasividades, será efectuado por las respectivas delegaciones ajustándose a las normas de procedimiento que se aprueban como anexo a la presente resolución.

ARTICULO 2º.- El estudio de las actuaciones por las que tramite el otorgamiento de dichos beneficios -excepto pensiones y adelantos- será realizado por las citadas dependencias, las que prestarán directamente su conformidad y sólo las remitirán al Tribunal de Cuentas de la Nación cuando consideren que el acto ha sido dictado en contravención o violación de las disposiciones legales o reglamentarias que fueran de aplicación, siguiendo a tal efecto el trámite que señalan las resoluciones Nros. 217/57 (D.A.29) y 227/57 (D.A. 32)

ARTICULO 3º.- El servicio de Pasividades tendrá a su cargo el análisis de las actuaciones relacionadas con el otorgamiento de pensiones y el despacho de aquellas que sobre la materia de su competencia sometan a la consideración definitiva del Tribunal de Cuentas, las respectivas delegaciones.
ARTICULO 4º.- Dése al Digesto Administrativo, previa toma de conocimiento del servicio de Pasividades y delegaciones: Interior, Gendarmería Nacional, Hacienda y Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la Policía Federal, y cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene.-

RESOLUCION Nº 731.-

- . - . - . - . -

NORMAS DE PROCEDIMIENTO A LAS QUE DEBERAN AJUSTAR SU INTERVENCION LAS DELEGACIONES EN MATERIA DE PASIVIDADES

A) LIQUIDACIONES RELATIVAS A: RETIROS, JUBILACIONES, PENSIONES, INDEMNIZACIONES, DERECHO A SUELDO DE RETIRO Y ADELANTOS.-

1) Despacho de los expedientes.-

Se procederá al estudio definitivo del expediente para establecer si de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación, corresponde el beneficio cuyo otorgamiento se dispone.

En caso afirmativo se prestará la correspondiente conformidad y en su defecto, si se estimara que el acto resulta observable, se remitirán las actuaciones al servicio de Pasividades siguiendo el procedimiento que señalan las resoluciones Nros. 217/57 (D.A.29) y 227/57 (D.A.32).

2) Fichaje.-

Una vez determinada la procedencia del beneficio a llevarse a cabo procedería su fichaje en base a los antecedentes respectivos.

Se harán los siguientes registros:

a) Disposición y antecedentes por los que se acuerda el beneficio.

b) Nombre del titular.

c) Años de servicio.

d) Sueldos, porcentaje y haber, con especificación del básico y bonificaciones, si los hubiera y con constancia de las sumas que deberá ingresar en el caso al Instituto Nacional de Previsión Social de acuerdo con las disposiciones de los respectivos estatutos orgánicos.

3) Control de las liquidaciones.-

Se efectuará el análisis de los ajustes mensuales y planillas complementarias en base a las constancias que arrojen las fichas a que alude el punto 2), controlando al mismo tiempo si la imputación es correcta de acuerdo con el presupuesto respectivo.

B) LIQUIDACIONES RELATIVAS A PENSIONES.-

1) Despacho de expedientes.-

El estudio y despacho de las actuaciones por las

que tramite el otorgamiento de pensiones y adelantos corresponde al servicio de Pasividades de conformidad con el artículo 3ª de la resolución aprobatoria delas presentes normas.

2) Fichaje.-

Recibido el expediente original con el despacho del Tribunal de Cuentas, se procederá a la apertura de una ficha,por cada pensión,en la que se hará constar:

a) Nombre del o los beneficiarios y del causante con el grado y porcentaje de retiro y fecha de fallecimiento de éste.

b) Fecha de mayoría de edad de los copartícipes.

c) Haber básico de la pensión.

d) Bonificaciones.

e) Vencimiento de toda liquidación previa efectuada en función de los dispuesto por el Decreto 10.297/43.

En cada ficha se dejará margen suficiente para establecer en su oportunidad el importe de la remuneración anual complementaria y de todo otro dato necesario para el mejor control.

3) Control de las liquidaciones.-

Se verificarán las sumas expresadas en los respectivos ajustes, se efectuará el control con los datos consignados en las fichas a que hace referencia el punto a) y se establecerán las imputaciones que correspondan a las liquidaciones practicadas.-

4) Liquidaciones suplementarias.-

Las liquidaciones suplementarias deberán formularse siempre agotando los recaudos con el fin de evitar que puedan efectuarse con duplicidad, a cuyo efecto de

berán consultarse previamente las fichas donde se asientan tales liquidaciones y solicitarse previamente la constancia de los ingresos de los haberes a reliquidarse.

5) Registro de cargos.-

Previo al registro en el libro correspondiente, a efectos de asignarle número, las mesas liquidadoras abrirán una ficha por cada cargo que se formule a las pensionistas y llevarán el control de las amortizaciones que se efectúen, en el caso de acordárseles facilidades de pago, hasta la total cancelación de los mismos. En este último caso, deberán requerir el expediente original y mediante un trazo dejar constancia de su cancelación en la planilla de cargos.

6) Disposiciones varias.-

a) Las novedades que deban reflejarse en el mes posterior al de su registro, como todo dato ilustrativo, deberá ser asentado con tinta, debiendo responder siempre a órdenes existentes en los expedientes antecedentes, de las que se hará también mención.

b) Los auxiliares que tengan a su cargo el despacho de los ajustes no podrán dar de alta o baja un beneficiario, ni introducir modificaciones de ninguna naturaleza en los mismos debiendo, en caso de observar errores, salvarlos al final o devolver las planillas a la repartición de origen. Las deducciones y los aumentos se harán al final de cada ajuste.

c) Los vencimientos o novedades que se produzcan en los pagos de una pensión se asentarán mediante el trazo de un signo con tinta roja en el casillero del mes correspondiente. Al pie de la ficha se dejará constancia de los hechos a que se refiere el signo conjuntamente con la inicial del empleado interviniente.

d) De toda devolución, nueva liquidación, disminución o aumento de pensión que se produzca, se dejará constancia en la cuenta ficha.

e) No se conformará ninguna liquidación si el Tribunal de Cuentas no ha tomado intervención en el respectivo expediente o no obren en su poder constancias que indiquen la procedencia de la suma a liquidarse.

f) El ejemplar "Archivo" de los ajustes será firmado por el auxiliar que produjo el despacho y por el que verifique la cuenta ficha, siendo ambos responsables de los errores que cometieran en su intervención.

En los casos que un empleado estimara que la modificación introducida por el jefe a un informe o liquidación por él efectuada no es procedente, podrá abstenerse de firmar dicho ejemplar poniendo en conocimiento del superior los motivos que determinan su actitud.-

-.-.-.-.-.-.-.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 266.-

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - VIATICOS - ESCALAFON TECNICO

Buenos Aires, 3 de julio de 1957.-

Visto lo dispuesto por el artículo 2º, punto I, del decreto Nº 18.989/56, en lo que respecta a la determinación de la asignación en función de la cual se liquidará el viático a los agentes de la Administración Nacional destacados en comisión de servicio, y

CONSIDERANDO:

Que dicha reglamentación dispone que el viático será liquidado en función del sueldo o jornal básico mensual del agente (categoría de presupuesto);

Que el Poder Ejecutivo, al aprobar con posterioridad para distintos organismos de la Administración Nacional regímenes de escalafonamiento técnico, dejó establecido: "que dichos adicionales serán considerados como parte integrante de la remuneración básica mensual a todos los efectos establecidos por las disposiciones en vigor";

Que, en consecuencia, corresponde interpretar que la asignación por el concepto mencionado debe ser adicionada al sueldo o jornal básico mensual del agente a los fines de la determinación y liquidación del viático respectivo;

Que es conveniente que el criterio expuesto sea llevado a conocimiento de los señores delegados y fiscales ante los distintos organismos de la administración pública, a efectos de su ulterior aplicación;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los distintos servicios del Tribunal de Cuentas de la Nación, al tomar la intervención que les compete, en actuaciones relacionadas con la liquidación de viáticos, en las que resulte de aplicación la reglamentación que aprueba el artículo 2º del decreto nº 18.989/56 (D.A.430), sostendrán el criterio expuesto en los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO 2º.- Dése al Digesto Administrativo y archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J.Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M.Peréz Arango - Juan Carlos Pastene.-

RESOLUCION Nº 770.-

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS

Buenos Aires, 3 de julio de 1957.-

Visto que los estudios practicados hasta el presente aconsejan, en principio, la conveniencia de autorizar la integración del patrimonio del Instituto de Servicios Sociales Bancarios, con la contribución a que se refería el inciso h) del artículo 12 de la Ley Nª 13.987, modificada por la Ley Nª 14.171, y

CONSIDERANDO:

Que con el propósito de no perturbar la buena atención de los servicios que presta el Instituto de referencia al gremio bancario, es procedente disponer que continúe aquella contribución a cargo de los bancos oficiales, mixtos, etcétera en la misma forma y proporción que lo establecían las normas legales antes citadas, cuyo ingreso a los Servicios Sociales Bancarios había sido suspendido provisionalmente por el Decreto-Ley Nª 20.714 de 19 de noviembre de 1956;

Que tal temperamento puede ser adoptado sin perjuicio de que los organismos competentes prosigan y finalicen los estudios encomendados sobre el particular por el citado decreto-ley, para decidir definitivamente al respecto;

Por todo ello y atento a lo propuesto por el Ministro de Hacienda de la Nación,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO
DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1ª.- Incorpórase como inciso i) del artículo 12 del

Decreto-Ley Nª 20.714 del 19 de noviembre de 1956, y con vigencia a partir del 1ª de julio de 1957 el texto siguiente:

"i) La contribución anual de dos por ciento (2%) sobre el total percibido en concepto de intereses y comisiones por las entidades comprendidas en el inciso e), apartados 1ª, 2ª y 3ª. Tal contribución será efectuada por dichas entidades mediante anticipos trimestrales sobre la base de los balances de los respectivos trimestres, y deberá ingresarse dentro de los treinta (30) días del cierre de cada período. En la oportunidad de hacer efectivo el aporte correspondiente al último trimestre del ejercicio, se practicará el ajuste definitivo".

ARTICULO 2ª.- El Ministerio de Hacienda de la Nación finalizará los estudios invocados en el segundo considerando de este decreto-ley e informará documentalmente al Poder Ejecutivo de las conclusiones a que arribe, dentro de los sesenta (60) días de la fecha de promulgación del mismo.

Cuando en definitiva se resuelva sobre la cuantía de la contribución de que se trata deberá disponerse que, con efecto al 1ª de julio de 1957, se efectuará la reliquidación y ajuste de los importes ingresados por las respectivas entidades bancarias.

ARTICULO 3ª.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, de Guerra, de Marina y de Aeronáutica.

ARTICULO 4ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Adalbert Krieger Vasena - Víctor J. Majó - Teodoro Hartung Eduardo F. McLoughlin.-

DECRETO-LEY Nª 7.555.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 268.-

ORGANIZACION DE LOS MINISTERIOS NACIONALES

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1955.

VISTOS:

a) el decreto-ley Nº 2.811/55 que ordena separar en departamentos independientes los ramos de Interior y Justicia;

b) las disposiciones de la Ley Nº 14.303, orgánica de los ministerios nacionales, en cuanto disocia la total atención, conducción y responsabilidad de una materia al encomendar partes esenciales de la misma a más de un ministerio, tal como sucede con los temas de migraciones y policía de la navegación (artículo 4º: apartado I, inciso 15, y apartado II, inciso 11; y apartado II, inciso 17, y apartado XV, inciso 14 y 15);y

CONSIDERANDO:

Que es necesario encarar la reforma de la Ley Nº 14.303, para determinar con precisión las materias que han de constituir el despacho de los ministerios de Interior y Justicia;

Que, al mismo tiempo, debe corregirse la anomalía que importa asignar funciones concurrentes a más de un organismo, manteniendo la unidad de gestión administrativa en todo lo relativo a migraciones y policía de la navegación;

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 14.303 por el siguiente:

"ARTICULO 1º.- El despacho de los negocios de la Nación es-

"tará a cargo de los siguientes Ministerios Secretarías d
"Estado:

I	Interior
II	Relaciones Exteriores y Culto
III	Justicia
IV	Trabajo y Previsión
V	Educación
VI	Asistencia Social y Salud Pública
VII	Comunicaciones
VIII	Obras Públicas
IX	Transportes
X	Hacienda
XI	Agricultura y Ganadería
XII	Industria
XIII	Comercio
XIV	Finanzas
XV	Ejército
XVI	Marina
XVII	Aeronáutica

ARTICULO 2º.- En virtud de lo establecido en el artículo prec
dente, modifícase la enumeración de los apartados que contie
el artículo 4º de la Ley Nº 14.303 de manera que las materias
que integren el despacho del Ministerio del Interior constitu
yan el apartado I, las del Ministerio de Relaciones Exteriore
y Culto el II, las de Justicia el III, las del Ministerio d
Trabajo y Previsión el IV, y así correlativamente con el rest
de los ministerios conforme al orden establecido en el artícu
lo 1º del presente decreto-ley.
ARTICULO 3º.- Establécese como apartado I, del artículo 4º d
la Ley Nº 14.303 el siguiente texto:

"I - Ministerio del Interior

Corresponde al Ministerio del Interior asistir al Presiden
te de la Nación en el ejercicio del gobierno político interno,
la seguridad y el orden público, y en particular lo inherente
a:

1.- Las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo del Gobierno Federal.

2.- Las relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de las provincias y con los gobernadores en su carácter de agentes naturales del Gobierno Federal.

3.- Las relaciones interprovinciales. La admisión de nuevas provincias y la reunión y división de las existentes. Los límites de las provincias y de los territorios federales.

4.- La intervención del Gobierno Federal en las provincias.

5.- El gobierno de la Capital de la Nación.

6.- La convocatoria y prórroga de las sesiones del Congreso.

7.- La reforma de la Constitución y las relaciones con las convenciones que se reúnan en consecuencia.

8.- La población y en particular, migraciones, naturalización, extranjería y nacionalidad.

9.- Los derechos constitucionales de reunión, petición, asociación y expresión de ideas. Prensa.

10.- Las amnistías.

11.- Los estados de sitios y de prevención y alarma.

12.- El registro del estado civil de las personas.

13.- El servicio de policía de seguridad interior y los servicios de vigilancia en las fronteras terrestres y aeródromos.

14.- La coordinación de las funciones y de las jurisdicciones de las policías nacionales y provinciales.

15.- La represión del agio.

16.- Las leyes electorales y el empadronamiento, la identificación y el Registro de las Personas.

17.- La autorización para la erección de monumentos y la determinación de su emplazamiento.

18.- Las normas que reglamenten lo relativo a los actos patrióticos en general; las efemérides, los feriados nacionales, el uso y custodia de símbolos y emblemas nacionales, así como el uso de emblemas y símbolos extranjeros.

19.- El poder de policía y ejercicio de las facultades respectivas.

20.- El Archivo General de la Nación.

ARTICULO 4º.- Sustitúyese el inciso 15 del apartado II (anteriormente i) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, del artículo 4º de la Ley Nº 14.303, por el siguiente:

"15.- La legalización de documentos de carácter internacional".

ARTICULO 5º.- Establécese como apartado III - Ministerio de Justicia, del Art. 4º de la Ley Nº 14.303 el siguiente texto:

"III - Ministerio de Justicia

Corresponde al Ministerio de Justicia asistir al Presidente de la Nación en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, y en particular lo inherente a:

1.- Las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial del Gobierno Federal.

2.- El ministerio público, su organización, funcionamiento, dirección y las designaciones en cuanto concierne al Poder Ejecutivo.

3.- El nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los demás tribunales de la Nación, así como el trámite de los respectivos acuerdos del Senado.

4.- Los indultos y las conmutaciones de penas.

5.- El otorgamiento y retiro de personería jurídica y la fiscalización del funcionamiento de las personas de existencia ideal.

6.- El régimen notarial, su dirección y fiscalización.

7.- El registro de la propiedad inmobiliaria y de hipoteca.

8.- La publicación del texto oficial de las leyes y decretos nacionales, del Boletín Judicial y de los fallos judiciales de interés público.

9.- La promoción de las reformas legales de la Nación y su coordinación con las legislaciones provinciales.

10.- El asesoramiento jurídico y la coordinación de las actividades del Estado en la materia.

11.- La organización, el régimen y la dirección de la representación y defensa del Estado en juicio.

12.- Los institutos penales y preventivos de la delincuencia.

13.- La actividad de los profesionales directamente vinculados con la justicia y de sus asociaciones representativas".

ARTICULO 6º.- Sustitúyense los Incisos 14 y 15, Apartado XVI (anteriormente XV) - Ministerio de Marina del Artículo 4º de la Ley número 14.303, por los que a continuación se transcriben:

"14.- El servicio de policía de seguridad y judicial, en forma exclusiva y excluyente, en las aguas navegables y sus costas y puertos de la Nación".

"15.- El servicio de policía de seguridad de la navegación y la jurisdicción marítima administrativa; formación, capacitación y habilitación del personal de la marina mercante, régimen de los buques y embarcaciones, registro de matrícula y de propiedad naval; asistencia y salvamento marítimo; policía sobre cumplimiento de convenios internacionales sobre navegación y

de las leyes de pesca y caza marítima".

ARTICULO 7º.- Oportunamente y con intervención de los ministerios correspondientes, se adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el presente decreto-ley.

ARTICULO 8º.- Deróganse las disposiciones legales que se opongan al presente decreto-ley.

ARTICULO 9º.- El presente decreto-ley será refrendado por los señores Vicepresidente de la Nación y Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior, Relaciones Exteriores y Culto, Justicia, Ejército, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 10º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Eduardo B.Busso - Luis A. Podestá Costa - Laureano Landaburu - Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung - Ramón A. Abrahín.-

DECRETO-LEY Nº 5.600.-

DIRECCION Gral de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
Despacho General

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 269.-

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA - INMUEBLES DEL ESTADO

ARTICULO 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo para proceder a la venta de los bienes inmuebles del dominio privado del Estado que no sean necesarios para la ejecución de obras y/o mantenimiento de servicios públicos.
ARTICULO 2º.- Las ventas a que se refiere el artículo anterior podrán efectuarse en forma directa o en remate público, según convenga, debiendo el Poder Ejecutivo fijar su precio básico con el asesoramiento del Tribunal de Tasaciones creado por el artículo 74 del decreto 33.405/44, ratificado por ley 12.922; integrado, a este solo efecto, por un representante del Ministerio de Obras Públicas y otro del Ministerio de Transportes de la Nación.
ARTICULO 3º.- Cuando se adopte la forma directa se publicarán avisos por cinco días por lo menos en el Boletín Oficial y en dos diarios de la zona en que se encuentre el inmueble, haciendo saber que el mismo está en venta y que se reciben propuestas, en pliego cerrado, por el término de treinta días.
ARTICULO 4º.- Quedan excluídos del régimen establecido por el artículo 2º los inmuebles cuya disposición está autorizada por leyes especiales.
ARTICULO 5º.- No podrán comprar los bienes a que se refiere esta ley los legisladores y las personas indicadas en el artículo 1.361 del Código Civil, en los casos que él contempla, los cónyuges de los mismos y sus parientes hasta el tercer grado inclusive.
ARTICULO 6º.- El Poder Ejecutivo aplicará los recursos que se obtengan del cumplimiento de la presente ley, como así también el producido de las ventas de bienes inmuebles ya autorizadas por otras leyes y que no tengan un destino especial, a

la cancelación de obligaciones derivadas de la adquisición de servicios públicos, bienes de capital y elementos destinados al funcionamiento de los servicios del Estado.

ARTICULO 7º.- El Poder Ejecutivo dará cuenta al Honorable Congreso de las operaciones que se realicen en virtud de lo dispuesto por la presente ley.

ARTICULO 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 28 de julio de 1949.-

LEY Nº 13.539.-

DIRECCION Gral de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Despacho General

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 270.-

DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA - INMUEBLES DEL ESTADO

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1956.-

Visto que el Ministerio de Hacienda de la Nación propone la reglamentación necesaria para poner en ejecución inmediata, por parte de la Dirección General Inmobiliaria, creada por el Decreto-Ley Nª 7.688 del 25 de abril ppdo., las ventas a que se refiere la Ley Nª 13.539, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de dicho Decreto-Ley quedan a cargo de la nombrada Dirección General las enajenaciones referidas, las que anteriormente se disponían por la Comisión Especial creada por el Decreto Nª 15.054/50, cuyas funciones fueron reglamentadas por el Decreto citado y las normas fijadas y aprobadas por el Decreto Nª 8.866/51;

Que, en consecuencia, corresponde adaptar las normas y disposiciones reglamentarias de la Ley Nª 13.539 y fijar las que competen a la Dirección General Inmobiliaria en las funciones que le han sido encomendadas.

Por tanto,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1ª.- Apruébase la adjunta reglamentación, la que forma parte integrante del presente decreto, a la que deberá ajustar su cometido la DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA, para la ejecución de las ventas a que se refiere la Ley Nª 13.539.

ARTICULO 2ª.- Derógánse los Decretos Nos. 15.054/50 y 8.866/51 en todo cuanto se opongan a esta reglamentación.

ARTICULO 3ª.- El presente decreto será refrendado por el se-

ñor MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTAMENTO DE HACIENDA.

ARTICULO 4º.- Publíquese, comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y archívese.-

ARAMBURU - Eugenio A.Blanco

DECRETO Nº 17.512.-

ANEXO DEL DECRETO Nª 17.512

NORMAS REGLAMENTARIAS PARA LA APLICACION Y EJECUCION DE LA LEY Nª 13.539 POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA

CAPITULO I

FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL

ARTICULO 1ª.- LA DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA tendrá a su cargo la aplicación y ejecución de las ventas regidas por la Ley Nª 13.539, de acuerdo con lo previsto por el Decreto-Ley Nª 7.688/56, a cuyo efecto, le compete:

1ª) Estudiar las nóminas de inmuebles incluídas en los Decretos Nos. 15.054/50, 10.419/52, 2.256/55, 5.962/55, 6.525/55, 6.918/55 y 8.091/55 y las que en lo sucesivo queden incorporadas al régimen de ventas de la ley por expresa disposición del Poder Ejecutivo;

2ª) Intervenir y dictaminar en toda situación que se plantee con relación a inmuebles comprendidos en la ley o que deban ser incorporados a su régimen o se solicite fundadamente su desafectación por ser indispensables para la ejecución de obras o mantenimiento de servicios públicos de las entidades centralizadas o descentralizadas de la administración nacional;

3ª) Disponer y ejecutar la venta de los inmuebles cuya afectación al régimen de la Ley Nª 13.539 haya sido dispuesta por el Poder Ejecutivo, debiendo, con cuyo motivo, proceder a:

a) La clasificación de los inmuebles atendiendo a sus características, condiciones y posible destino en el dominio privado de los particulares;

b) La determinación de la oportunidad y conveniencia de cada una de las ventas, según la situación del mercado inmobiliario;

c) La adopción de los recaudos técnicos, administrativos, legales y procesales para que pueda operarse la tradición de los bienes vendidos, deslindados y amojonados, libres de intrusos, en lo posible sin ocupantes y con títulos sin vicios o defectos que hagan a su perfectibilidad;

d) La fijación del precio base de los remates o concursos, según las formas a que se refieren los artículos 2ª y 3ª de la Ley Nª 13.539 con el asesoramiento del Tribunal de Tasaciones, integrado a ese solo efecto en la forma establecida por el referido artículo 2ª de dicha ley. Los precios base no podrán ser inferiores a las dos terceras partes de la valuación fijada. No habiendo postores en un primer remate, podrá la Dirección General ordenar una nueva subasta, reduciendo la base hasta en un 25% de la primitiva. A falta de interesados en la compra, la Dirección General determinará la oportunidad en que deba ser sacado a la venta el inmueble, previo un nuevo asesoramiento del Tribunal de Tasaciones;

e) La determinación, en cada caso, de las condiciones de pago del precio de venta, a cuyo efecto podrá acordar el pago en cuotas en plazos que no excederán de cinco (5) años, para hacer efectivo hasta el 75% del mismo, cuando las circunstancias así lo aconsejan;

f) La determinación del sistema a emplearse en cada venta, con sujeción a lo que prescribe la Ley Nª 13.539;

g) La promoción por conducto de la Procuración del Tesoro de la Nación, de los juicios de desalojo, rectifi

cación de rumbos, mensuras, medidas, linderos, deslindes, rescisión de contrato, escrituración, posesión treintañal, división de condominio y cuantas otros fueren necesarios para la obtención y rectificación de títulos y el mejor cumplimiento de su misión. Para la promoción de estos juicios, la Dirección General de Inmobiliaria, requerirá directamente y sin necesidad de formalidad previa, la intervención de la Procuración del Tesoro.

Todas las facultades que se acuerdan a la Dirección General Inmobiliaria en lo que se refiere especialmente a la operación de venta se cumplirán conforme a las normas determinadas con el asesoramiento de la Comisión Coordinadora para la venta de inmuebles del Estado.

ARTICULO 2º.- EL DIRECTOR GENERAL y sus reemplazantes naturales o los funcionarios a quienes aquéllos autoricen expresamente por resolución, intervendrán en todos los actos y contratos que corresponda y suscribirán, en nombre del Estado Nacional Argentino, los documentos privados y escrituras públicas traslativas de dominio, constitución de hipotecas en garantía del saldo de precio y sus cancelaciones, constitución y cancelación de servidumbres, y cualesquiera otros derechos reales, como asimismo las escrituras de cesión y libramiento al servicio público nacional, provincial o municipal, trazado de plazas, reservas fiscales, calles y ochavas, en los inmuebles que se subdividan o en los casos en que resulte necesaria la cesión de esos espacios al dominio público y, en general, cualquier otra forma de instrumentación de actos y contratos, para el mejor desempeño de su cometido y cumplimiento de la Ley Nº 13.539.

CAPITULO II

DE LOS INMUEBLES COMPRENDIDOS EN EL REGIMEN DE LA LEY Nº 13.539

ARTICULO 3º .- Los MINISTERIOS y sus dependencias centralizadas, descentralizadas y empresas, deben denunciar a la Dirección General Inmobiliaria los bienes inmuebles del dominio privado del ESTADO que no resulten necesarios, de inmediato, para su gestión específica.

ARTICULO 4º.- Las dependencias y organismos citados deben remitir a la Dirección General nombrada, por conducto de sus respectivos Ministerios, un detalle de los inmuebles que se hallen en la situación referida, dentro de los sesenta (60) días de la fecha.

ARTICULO 5º.- En el mismo plazo deben, asimismo, remitir otra nómina de todos los inmuebles del ESTADO NACIONAL ARGENTINO que se encuentren arrendados, concedidos o cedidos en uso a particulares (Asociaciones, sindicatos, clubes, etc.), obras sociales de ministerios civiles y de todos aquéllos que hubieran sido donados por el Estado Nacional con cargo.

ARTICULO 6º.- La Dirección General Inmobiliaria hará conocer a los demás Ministerios la existencia de inmuebles disponibles que le fueren denunciados, a fin de que expresen, dentro de los treinta (30) días, si algunos de los bienes que se incluyen en las nóminas respectivas les son necesarios para la ejecusión de obras y/o mantenimiento de servicios públicos, la falta de contestación en el plazo expresado, significará que no les resultan necesarios los inmuebles en disponibilidad.

ARTICULO 7º.- Transcurrido el referido plazo de los treinta (30) días, la DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA procederá de la siguiente manera:

a) Confeccionará un detalle de los inmuebles que no le han sido requeridos, sometiéndolo a consideración del PODER EJECUTIVO, por conducto del MINISTERIO DE HACIENDA, a fin de ordenar la venta de aquéllos, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.539;

b) Requerirá de los Ministerios interesados en la utilización de inmuebles para servicios públicos y obras, una

memoria detallada del futuro destino o aplicación que incluya los planes trazadados, créditos disponibles y demás elementos con que se cuenta para su ejecución,y

c) Incluirá, en actuaciones separadas, los inmuebles solicitados por los Ministerios, bienes que quedarán bajo la administración provisional de la DIRECCION GENERAL hasta tanto se afecten a los servicios públicos para los que fueron pedidos y/o se inicien las obras que motivaron la exclusión de su venta.

Si transcurrido un año el Ministerio que pidiera la exclusión no hubiere iniciado la obra o afectado el bien directamente al servicio, la DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA solicitará del PODER EJECUTIVO autorización para dar por terminada la exclusión, disponiendo su venta.

ARTICULO 8º.- La DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA convendrá con los organismos que actualmente tienen asignados en uso bienes inmuebles que se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 3º y 5º, los detalles para su transferencia patrimonial que comprendará la documentación correspondiente como así también los créditos presupuestarios, personal, muebles, semovientes, etc. afectados a su administración y conservación.

ARTICULO 9º.- A partir de los noventa (90) días de la fecha, la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y sus Delegaciones no darán curso a actuaciones por las que se tramite el arrendamiento, concesión o cesión a particulares de bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL ARGENTINO, cuando se realicen sin intervención de la DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA.

ARTICULO 10º.- La DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA llevará un Registro Real de Propiedades que contenga antecedentes completos acerca del estado de dominio y de ocupación de cada uno de los bienes que los distintos Ministerios incluyan en las nóminas que deben remitir.

CAPITULO III

DE LA SUBDIVISION Y MENSURA DE LOS INMUEBLES

ARTICULO 11º.- Simultáneamente con el estudio de la documentación de dominio y antecedentes de ocupación, la Dirección General Inmobiliaria dispondrá la inspección técnica de los inmuebles y el estudio sobre el terreno, acerca del destino que racionalmente proceda dar a cada uno de ellos.

ARTICULO 12º.- En posesión de los antecedentes e informes a que alude el artículo anterior la Dirección General Inmobiliaria resolverá en cada caso, si procede realizar la venta en "block" o hacer subdividir el inmueble en lotes a ese objeto, y en este último supuesto fijará el plan de la subdivisión que deberá realizarse.

ARTICULO 13º.- Cuando no se cuente con planos de mensura o de mensura y subdivisión, según corresponda, debidamente aprobados por la autoridad jurisdiccional pertinente, sobre cuya base puedan efectuarse las ventas, la Dirección General Inmobiliaria, hará practicar la mensura y amojonamiento por contratación de profesionales inscriptos o matriculados en las oficinas catastrales, topográficas o de geodesia de cada jurisdicción.

CAPITULO IV

URBANIZACIONES Y MEJORAS

ARTICULO 14º.- En el caso en que resultare necesario ejecutar trabajos de urbanización y mejoras con miras a la obtención de un mayor producido en las ventas o como consecuencia de exigencias de las autoridades competentes, como condición previa a la aprobación de planos o subdivisiones, la Dirección General Inmobiliaria autorizará las erogaciones respectivas o propondrá su aprobación al Poder Ejecutivo conforme a las disposiciones de la Ley de Contabilidad y sus reglamentaciones. Las inversiones que se realicen por tales conceptos,

se deducirán del producido de cada venta para la determinación del balance de resultados de la operación correspondiente.

CAPITULO V

FORMAS DE VENTA

ARTICULO 15ª.- Delimitado el inmueble a ser vendido, la Dirección General Inmobiliaria resolverá, atendiendo a la importancia de la operación de venta y a los fines que racionalmente se adecúe la propiedad o los lotes formados en ella, si la enajenación se realizará mediante el remate público o la venta directa que prevé la Ley Nª 13.539 y si la misma será al contado o con facilidades de pago, fijando la forma de éstas, en un todo de acuerdo con las facultades acordadas por el Artículo 1ª.

CAPITULO VI

DE LA VENTA EN REMATE PUBLICO

ARTICULO 16ª.- Cuando disponga la venta en remate público, la Dirección General Inmobiliaria adoptará las siguientes providencias:

a) Fijará el lugar, día y hora del acto;

b) Nombrará martillero entre los inscriptos en el Registro de Rematadores, quien como única retribución por el acto del remate percibirá del comprador una comisión del 3% (tres por ciento) sobre el precio de venta, y tendrá, además, a su cargo las tareas y gastos que la reglamentación determine;

c) Organizará y mandará realizar la publicidad correspondiente, de manera que tengan difusión las siguientes especificaciones:

   1) Lugar, día y hora del remate;

   2) Que la venta se efectuará de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nª 13.539;

3) Ubicación, dimensiones y detalles de la propiedad;

4) Precio base y condiciones de pago;

5) Forma y oportunidad en que se otorgará la posesión y escritura traslativa de dominio;

6) Obligación, a cargo del comprador, de abonar en efectivo en el acto del remate y al firmarse el Boleto de Compra-Venta, el 3% (tres por ciento) de comisión y el 10% (diez por ciento) de seña, sobre el precio de venta como así los gastos de sellado que corresponda; y

7) Obligación del comprador de perfeccionar la compra en la forma convenida, concurriendo a firmar la escritura traslativa de dominio el día y hora que le señale el Escribano autorizante, quien le cursará la correspondiente notificación con una anticipación mínima de ocho (8) días.

d) Colocará o hará colocar en la propiedad y/o lugares apropiados, carteles en los que se anunciará el lugar, día y hora del remate y condiciones de venta; y

e) Hará realizar el remate en el lugar y hora señalados en los avisos, no pudiendo introducirse modificaciones de naturaleza alguna.

ARTICULO 17ª.- El martillero actuante procederá del siguiente modo:

a) Expondrá las condiciones del remate, proporcionando al público las explicaciones e informes aclaratorios que le requiera;

b) Advertirá el impedimento para comprar en que se encuentran las personas comprendidas en el artículo 5ª de la Ley Nª 13.539;

c) Ajustará su cometido a las disposiciones del artículo 116ª del Código de Comercio, así como también a las normas de práctica en los actos de esta naturaleza, en cuanto al procedimiento de la venta y adjudicación del inmueble al mejor postor;

d) Cuando la compra se efectúe en comisión, el adquirente contrae la obligación de indicar el nombre de la persona o personas por cuenta de quienes efectúa la adquisición, por telegrama colacionado o notificación fehaciente;

e) El Boleto de Compra-Venta será extendido "ad-referendum" del Poder Ejecutivo, por triplicado, debiendo ser suscripto por el rematador, el comprador y el delegado representante de la Dirección General Inmobiliaria, y

f) Finalizado el remate labrará un acta en la que se dejará constancia de su resultado, la que será suscripta por el rematador y el mencionado delegado.

CAPITULO VII

DE LA VENTA DIRECTA

ARTICULO 18ª.- Cuando la venta se realice en forma directa, la Dirección General Inmobiliaria procederá de la siguiente manera, mediante concurso de oferentes:

a) Realizará la publicidad especial que estime conveniente, sin perjuicio de lo prescripto en el artículo 3ª de la Ley nª 13.359, en la que se consignará el lugar, día y hora del acto y se determinará, además que las ofertas deben presentarse en pliegos cerrados dentro del término de treinta (30) días en el lugar que se determine y hasta el día y hora que se fije para la apertura. En la publicidad deberán insertarse en forma expresa las condiciones de venta respectivas;

b) Procederá a la apertura de la ofertas en el lugar, día y hora fijado, en acto público al que podrán concurrir los oferentes, labrándose el acta correspondiente, que será firmada por los funcionarios que determine la Dirección General y los concurrentes que lo deseen;

c) Exigirá a los oferentes acompañen sus ofertas con una boleta de depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina por el 5% (cinco por ciento) base, a la orden de la Direccion General Inmobiliaria. Dicho depósito hará las veces de seña por la oferta que resulta adjudicatoria y se devolverá automáticamente a los interesados cuyas ofertas fueren desestimadas;

d) Adjudicará la venta "ad-referendum" del Poder Ejecutivo, a favor de la oferta que, ajustándose a las bases y condiciones del concurso, resulte ser la de mayor precio. En caso de igualdad de ofertas se invitará a los interesados a mejorar el precio, mediante oferta en sobre cerrado, con apertura en el lugar, día y hora que se fijará y de subsistir el empate, se dará preferencia al oferente que fuera ocupante o bien se decidirá por sorteo. Cuando se trate de tierra destinada a vivienda familiar la preferencia en este último supuesto, se otorgará en el siguiente orden:

1) Al locatario o concesionario;

2) Al que no posea otros bienes inmuebles;

3) Al que tenga mayor número de hijos o persona a su cargo;

4) Si no se resolviera por cualquiera de los incisos anteriores se realizará un sorteo en presencia de los interesados; y

e) Dictado el decreto aprobatorio, suscribirá el boleto de Compra-Venta elevando el adjudicatario, al 10% la seña del punto c).

CAPITULO VIII

APROBACION DE LAS VENTAS Y SU NOTIFICACION

ARTICULO 19ª.- Realizado el remate o, en su caso, el concurso de oferentes para la venta directa, previa intervención de la Contaduría General de la Nación, la Dirección General Inmobiliaria, por conducto del Ministerio de Hacienda de la Nación, someterá al Poder Ejecutivo para la aprobación, las actuaciones producidas, a las que acompañará su dictamen fundado sobre el resultado obtenido en la operación.

ARTICULO 20ª.- Cuando la adjudicación hecha en el remate o en el concurso de oferentes deba anularse por causas imputables al comprador, éste perderá el importe de la seña y comisión de venta o depósito de garantía en su caso. Si en cambio, la adjudicación debe dejarse sin efecto por error de procedimiento que haga anulable el acto, sin culpa del comprador, se le devolverá a éste únicamente el depósito de garantía, o seña y comisión de venta pagada, procediéndose a establecer la responsabilidad administrativa correspondiente, frente a los gastos ocasionados.

ARTICULO 21ª.- Es facultad del Poder Ejecutivo, antes de la aprobación de los remates o concurso de oferentes, dejar sin efecto los actos realizados sin que ello dé otro derecho a los interesados intervinientes que la devolución de las señas y comisiones de venta y los depósitos de garantía, según corresponda. En este supuesto las comisiones correrán por cuenta del Estado Nacional Argentino.

ARTICULO 22ª.- Aprobado el remate o el concurso de oferentes, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, la Dirección General Inmobiliaria acreditará a cuenta del precio de venta el importe recibido como seña de la operación y dispondrá en ambas situaciones el perfeccionamiento de la transferencia de dominio.

ARTICULO 23ª.- Para el perfeccionamiento de la transferencia de dominio la Dirección General Inmobiliaria notificará fehacientemente al comprador la aprobación del remate o la adjudicación directa por concurso de oferentes, según corresponda,

haciéndole saber:

a) Que corre el término fijado para escriturar, según el respectivo boleto de Compra-Venta;

b) Que la entrega de la posesión se hará previo pago del precio de venta o parte del mismo según lo pactado, en el día y hora consignado al efecto, y

c) Que ha sido designado el Escribano autorizante de la escritura traslativa de dominio cuyo nombre y domicilio le informará, quien le fijará día y hora para la escrituración citándole al efecto con una anticipación mínima de ocho (8) días.

CAPITULO IX

DEL PAGO DE PRECIO DE VENTA

ARTICULO 24º.- El pago del saldo del precio de venta, ya sea la suma que deba oblarse al contado o los importes que correspondan a las facilidades acordadas más los intereses respectivos, deberá ser efectuado en la Tesorería de la Dirección General Inmobiliaria o en las instituciones u oficinas públicas que ésta determine.

CAPITULO X

DE LA ENTREGA DE LA POSESION

ARTICULO 25º.- La posesión de los inmuebles será dada por la Dirección General Inmobiliaria en todos los casos como acto previo a la escrituración y de ella se dejará constancia en acta labrada al efecto con intervención de los funcionarios que determine la repartición y el o los adquirentes o sus apoderados o representantes expresamente designados. En la escrituración traslativa de dominio se hará constar al acto de toma de posesión efectuado en la forma antedicha. Por ningún concepto será dada la posesión sin haberse acreditado el pago íntegro en dinero efectivo, del importe pactado al contado.

CAPITULO XI

DE LOS ACTOS NOTARIALES

ARTICULO 26º.- Sin perjuicio de la colaboración que solicitará a la Escribanía General de Gobierno, cuando así proceda, la Dirección General Inmobiliaria realizará el estudio de los antecedentes de dominio de los inmuebles que sean afectados al régimen de la Ley Nº 13.539, encomendando esas tareas a profesionales inscriptos en el registro de Escribanos Referencistas que llevará por jurisdicciones provinciales y de la Capital Federal.

ARTICULO 27º.- Las escrituras traslativas de dominio y constitución de hipotecas por saldo de precio y sus cancelaciones serán autorizadas por los Escribanos del Registro de la jurisdicción que corresponda según la ubicación del inmueble, cuya designación se hará por la Dirección General Inmobiliaria entre los profesionales inscriptos en el Registro de Escribanos Autorizantes que llevará al efecto.

ARTICULO 28º.- Designado el escribano autorizante, la Dirección General Inmobiliaria le hará llegar la orden de escrituración acompañada por las actuaciones de la venta.

ARTICULO 29º.- La firma de las escrituras tendrá lugar en la sede de la Dirección General Inmobiliaria si se celebra en la Capital Federal y en los despachos de los escribanos autorizantes cuando se realicen en el Interior.

ARTICULO 30º.- Firmadas las escrituras la Dirección General Inmobiliaria comunicará las enajenaciones e hipotecas constituídas, a la Contaduría General de la Nación, manteniendo en custodia los testimonios de los inmuebles sobre los que se hubiera constituído gravámenes hipotecarios, hasta la oportunidad de su cancelación.

CAPITULO XII

DE LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES

ARTICULO 31º.- A los efectos de la contratación de profesiona

nales la Dirección General Inmobiliaria procederá como sigue:

a) AGRIMENSURA: Organizará un Registro de Agrimensura en el que, sin limitación en el número de profesionales, inscribirá por primera vez, mediante público llamado, a los profesionales con títulos habilitantes que así lo soliciten y que se encuentren matriculados o inscriptos en las oficinas catastrales, topográficas, de geodesia o en las que llenen funciones similares en las respectivas jurisdicciones provinciales y la Capital Federal, en lo sucesivo, las nuevas inscripciones se efectuarán a medida que lo soliciten los interesados y sea resuelta su admisión. Las condiciones de inscripción, admisibilidad, exclusiones, etc. serán fijadas por el Ministerio de Hacienda de la Nación, a propuesta de la Dirección General Inmobiliaria.

Los trabajos ejecutados por los profesionales inscriptos en el Registro de Agrimensura serán retribuídos en la forma que establecen los respectivos aranceles profesionales.

Los trabajos serán adjudicados por sorteo;

b) MARTILLEROS: Organizará un Registro de Martilleros, sin limitación de número y en el que se anotarán por primera vez los interesados que concurran mediante público llamado. La inscripción se hará por listado según las jurisdicciones provinciales y de la Capital Federal, y las nóminas serán integradas con los martilleros que así lo soliciten y cumplan con los requisitos de admisibilidad y demás condiciones que establezca la reglamentación especial que fije el Ministerio de Hacienda de la Nación, a propuesta de la Dirección General Inmobiliaria.

Dicha reglamentación proveerá para la mejor defensa de los intereses del Estado y como requisitos básicos, entre otros, antecedentes de conducta y honorabilidad

probadas, antigüedad en el ejercicio de la función, monto mínimo y número de subastas efectuadas, con exclusión de remates judiciales y oficiales, y forma de realización de los sorteos, así como los actos de publicidad y demás contrataciones que estarán a exclusivo cargo de los martilleros, salvo el caso de fracaso total de la venta;

c) NOTORIAL: Organizará registros de carácter notorial por jurisdicciones provinciales y de la Capital Federal en la siguiente forma:

I) Registro de Escribanos Referencistas: Por primera vez mediante público llamado, serán integradas las listas de profesionales con los abogados, no matriculados como tales o como procuradores, y escribanos con título universitario nacional que así lo soliciten. No habrá limitación del número de profesionales y en lo sucesivo las nuevas inscripciones se efectuarán a medida de su requerimiento por los interesados.

II) Registro de Escribanos Autorizantes: Salvo renuncia expresa de los interesados, las listas de escribanos autorizantes se integrarán con los escribanos públicos, titulares y adscriptos, de los Registros de Contratos de la Capital Federal y las Provincias.

El Ministerio de Hacienda de la Nación, a propuesta de la Dirección General Inmobiliaria, reglamentará los procedimientos de inscripción, exclusiones, etc. que regirán para ambos registros.

Los trabajos de estudios de títulos y otorgamiento de escrituras serán retribuídos conforme a los respectivos aranceles de cada jurisdicción y se adjudicarán por sorteo en la forma que prevé la reglamentación a dictarse por el Ministerio de Hacienda de la Nación, a propuesta de la Dirección General Inmo-

biliaria.

CAPITULO XIII

COLABORACION DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

ARTICULO 32º.- Queda facultada la Dirección General Inmobiliaria para requerir de todos los organismos de la Administración Nacional la colaboración que le fuera necesaria para el mejor cumplimiento de su cometido así como también, solicitar directamente de las Municipalidades y Dependencias de catastro, geodesia o similares el más rápido diligenciamiento de sus tramitaciones. Solicitará, igualmente en forma directa, el auxilio de la fuerza pública en cualquier jurisdicción del territorio de la República, para todo lo atinente a la guarda, custodia, seguridad e integridad de los bienes bajo su administración.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
Delegación General

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 271.-

PROCURACION DEL TESORO

Buenos Aires, 16 de julio de 1957.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que las altas funciones de asesoramiento jurídico general y de representación especial en juicio que cumple el señor Procurador del Tesoro -Decreto número 14.546/43, modificado por Decreto número 4.369/55-, como así también las que desempeña como Director General del Cuerpo de Abogados del Estado, exigen que dicho funcionario y las Reparticiones a su cargo se encuentren bajo la dependencia jerárquica directa de la Presidencia de la Nación;

Que además debe restablecerse la plena vigencia del artículo 5ª del citado Decreto Nª 14.546/43 y aclararse su artículo 12ª;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1ª.- El señor Procurador del Tesoro y Director General del Cuerpo de Abogados del Estado y Reparticiones a su cargo pasan a depender jerárquicamente en forma directa del Presidente de la Nación.

ARTICULO 2ª.- El personal de la Procuración del Tesoro y Dirección General del Cuerpo de Abogados del Estado, así como sus fondos, créditos, recursos y patrimonio, serán transferidos al presupuesto del Ministerio de Hacienda.

ARTICULO 3ª.- El Procurador del Tesoro podrá delegar determinadas funciones, representaciones o asuntos, en el Subprocurador, comunicando su resolución a la Presidencia de la Nación.

ARTICULO 4º.- Derógase toda disposición legal o reglamentaria en cuanto se oponga al presente.
ARTICULO 5º.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excelentísimo señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Guerra, Marina, Aeronáutica, Hacienda y Educación y Justicia.
ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Tribunal de Cuentas y Contaduría General de la Nación, a sus efectos.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Acdel E.Salas - Víctor J. Majó - Teodoro Hartung - Eduardo F. McLoughlin - Adalbert Krieger Vasena.-

DECRETO-LEY Nº 8.013.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 272.-

OBLIGACIONES FISCALES - DIAS INHABILES

Buenos Aires, 23 de julio de 1957.-

Visto el Decreto-Ley nº 2.446 del 9 de febrero de 1956, que establece los días feriados nacionales, para los cuales rigen las normas legales sobre el descanso dominical, y determina los no laborables, de cumplimiento obligatorio para la Administración Pública Nacional, Bancos, Seguros y actividades afines, y solamente optativo para la actividad industrial, comercial y civil en general, y

CONSIDERANDO:

Que para el cómputo de los términos legales, es procedente además, establecer el criterio a seguir con respecto a otros días que por leyes nacionales o provinciales o decretos del Poder Ejecutivo Nacional o de los Poderes Ejecutivos Provinciales, se declaren inhábiles, de asueto administrativo o no laborables, por cuanto la suspensión de actividades resuelta por la autoridad administrativa nacional o provincial, tanto de aplicación en el orden oficial cuanto en la esfera privada, puede originar la imposibilidad de ejercer acto alguno ante los organismos administrativos por parte de los contribuyentes y demás responsables;

Que por su parte, el Decreto-Ley nº 11.908 del 4 de julio de 1956, dispone que las dependencias nacionales con asiento en el interior del país, observarán los feriados locales que rijan en el lugar de sus funciones, para así asociar al personal civil de la Nación a los acontecimientos de significación local;

Que igualmente debe aclararse que las disposiciones del Decreto-Ley nº 2.446/56 no afectan las del nº 18.749 del 7 de septiembre de 1950, en lo atinente a la declaratoria de

inhabilidad de los días sábados para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como también lo dispuesto por el decreto nº 38.846/48, que declara inhábil el día 31 de diciembre de cada año para el cómputo de los términos que establece el artículo 3º, incisos b), c), d) y e) del decreto reglamentario de la ley de sellos, quedando también subsistente el decreto nº 24.879/53, que declara feriado bancario en todo el territorio del país, el día 31 de diciembre o el último día hábil de cada año;

Que corresponde en consecuencia establecer como debe efectuarse el cómputo de los días hábiles para el cumplimiento de las obligaciones impositivas con términos perentorios, tanto en jurisdicción nacional como provincial;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1º.- A fin de evitar dudas en la interpretación del Decreto nº 18.749/50 y decretos-leyes nros. 2.446/56 y 11.908/56, se consideran inhábiles a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y demás responsables de los gravámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de dependencias de este Departamento de Estado:

a) Los días sábados;

b) Los días feriados nacionales y además, para las dependencias de este Ministerio ubicadas en las Provincias, los feriados que rijan en el lugar donde tengan su asiento;

c) Los días no laborables establecidos por leyes nacionales o decretos del Poder Ejecutivo Nacional, de carácter obligatorio para la Administración Pública y optativo para las actividades industriales, comerciales y

civiles; y los establecidos con igual carácter por leyes provinciales o decretos de los Poderes Ejecutivos Provinciales, para los lugares en que tengan asiento las respectivas dependencia del Ministerio;

d) Los días en que el Poder Ejecutivo Nacional acordare asueto administrativo; y los que acordaren los Poderes Ejecutivos Provinciales en sus respectivas jurisdicciones;

e) El día 31 de diciembre o el último día hábil de cada año, declarado feriado bancario en todo el territorio del país, por Decreto nº 24.879/53 del Poder Ejecutivo Nacional.

2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 7.284.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 273.-

RECURSO JERARQUICO - CAUSAS FISCALES - JUICIOS DE RESPONSABILIDAD

Buenos Aires, 10 de julio de 1957.-

Vista nuevamente en despacho la presente causa fiscal seguida contra **don Angel Guido, y**

CONSIDERANDO:

Que por providencia de fecha 16 de enero de 1957, obrante a fs. 72, se notificó al causante el decreto 22.709/56,por el cual el Poder Ejecutivo ratificó la resolución definitiva 1.888 de fecha 26 de septiembre de 1955, intimándoselo para que en el término de diez días efectuara el ingreso de la suma de $ 14.335,35 m/n. cuyo pago le fuera intimado;

Que frente á ese emplazamiento se presenta por escrito el causante a fs. 75,75 vta. y 76 interponiendo recurso jerárquico conforme las disposiciones reglamentadas por el Decreto 7.520/44, invocando para ello la existencia de un interés fundado de orden administrativo (artículo 13ª del citado decreto);

Que la ley 12.961, de Contabilidad y Organización de la Contaduría General de la Nación, fijaba a este organismo jurisdicción y competencia exclusiva y excluyente para la substanciación de los juicios de cuentas y de responsabilidad, conforme las disposiciones de sus artículos 76ª y 100ª,regla ba el procedimiento de estos juicios (artículos 94ª y siguientes) y determinaba los alcances y efectos jurídicos de las resoluciones definitivas dictadas con arreglo a aquellas disposiciones (artículo 103ª a 107ª);

Que en la substanciación de esta causa fiscal el causante hizo uso de todos los derechos acordados por dicha ley para garantizar la defensa de los responsables, sin que en momento alguno haya puesto objeción alguna a la amplitud de su ejercicio;

Que asimismo interpuso el recurso de apelación autorizado por el artículo 104º de dichà ley, con el resultado de que informa el decreto 22.709/56 (fs. 71);

Que en consecuencia la resolución 1.888/55 ha quedado firme y pasado en autoridad de cosa juzgada en la esfera administrativa, conforme lo establecido por el artículo 106º de dicha ley;

Que resulta evidente entonces la improcedencia del recurso jerárquico que interpone el causante, fundado en la supuesta aplicación del caso en examen de las disposiciones del decreto 7.520/44, por cuanto este remedio jurisdiccional no tiene cabida en el procedimiento de los juicios de cuentas y de responsabilidad legislados por la ley 12.961;

Que en consecuencia corresponde su rechazo y la fijación de un término perentorio de cinco días al causante para que efectúe el ingreso reclamado, bajo apercibimiento de ejecutar el título definitivo de deuda a pesar de cualquier recurso dilatorio que se interponga;

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 3º del decreto-ley 23.354/56,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Rechazar por improcedente el recurso jerárquico interpuesto por don Angel Guido, en razón de la inaplicabilidad del decreto 7.520/44 contra las resoluciones definitivas de la Contaduría General de la Nación confirmadas por Poder Ejecutivo.

ARTICULO 2º.- Intimar al interesado para que dentro del quinto día hábil de notificado de la presente ingrese la suma reclamada, previniéndole que este plazo no será interrumpido por la presentación de recurso dilatorio alguno y bajo apercibimiento de mandar iniciar las pertinentes acciones ejecutivas de cobro en caso de incumplimiento.

ARTICULO 3º.- Notifíquese al causante en legal forma, a cuyo efecto se dirigirá la nota acordada al señor Director Nacional de Correos y Telecomunicaciones.
ARTICULO 4º.- Publíquese en Digesto Administrativo, cumplido resérvese en Causas Fiscales por treinta días.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 801.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 274.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - EMPRESAS DEL ESTADO - AUDITORIAS - FISCALIZACIÓN

Buenos Aires, 16 de julio de 1957.-

Visto lo dispuesto por el artículo 84, inciso f), de la ley de contabilidad en el que se establece que corresponderá al Tribunal de Cuentas fiscalizar las empresas del Estado por medio de auditores o síndicos, y

CONSIDERANDO:

Que conforme al artículo 137 del mismo cuerpo legal, el funcionamiento de las citadas empresas se ajustará a las disposiciones prescriptas por la ley nº 13.653 (t.o.), la cual, juntamente con su decreto reglamentario nº 5.883/55, precisa además las normas de fiscalización sobre cuya base deberá efectuarse su contralor económico, financiero, patrimonial y de explotación por parte de este Tribunal;

Que por decreto nº 5.388/57 del 22 de mayo último, el Poder Ejecutivo ha aprobado el presupuesto general de la Institución, en el que ha incluído los créditos necesarios que posibilitan concretar el cometido de que se trata;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTA DE LA NACION

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Las funciones de fiscalización prescriptas por la ley nº 13.653 y sus normas reglamentarias que la ley de contabilidad pone a cargo del Tribunal de Cuentas, serán ejercidas por su Servicio de Auditoría General y por las audito-

rías contables destacadas en cada una de las empresas que se indican en las planillas agregadas que forman parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2º.- El cumplimiento de las tareas a que se refiere el artículo que antecede, se ajustará a las disposiciones legales y reglamentarias de aplicación en la materia y a las normas que a tal efecto dicte este Tribunal en uso de sus facultades.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, dése al Digesto Administrativo y cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - Antonio M. Pérez Arango - Wifredo Dedeu - José M. Fernández Fariña - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 882.-

SERVICIO DE AUDITORIA GENERAL

Ministerio de Transportes

EMPRESAS

Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino - E.F.E.A.

Ferrocarril General San Martín - F.C.G.S.M.

Ferrocarril General Belgrano - F.C.G.B.

Ferrocarril General Urquiza - F.C.G.U.

Ferrocarril General Bmé. Mitre - F.C.G.B.M.

Ferrocarril General Roca - F.C.G.R.

Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento - F.C.D.F.S.

Ferrocarril Provincial - F.C.P.B.A.

Ferrocarril Patagónico - F.C.P.

Expreso Villalonga - E.V.

Empresa Nacional de Transportes - E.N.T.

Transportes de Buenos Aires - T.B.A.

Administración Gral.de la Flota Mercante del Estado - F.M.E.

Administración Gral.de Transporte Fluvial - T.F.

Flota Argentina de Navegación de Ultramar - F.A.N.U.

Flota Argentina de Navegación Fluvial - F.A.N.F.

Administración Gral.de Transportes Automotores. T.A.

Administración Gral.de Puertos - A.G.P.

Ministerio de Marina

Astilleros y Fábricas Navales del Estado - A.F.N.E.

Ministerio de Comunicaciones

Empresa Nacional de Telecomunicaciones - E.N.Tel.

Ministerio de Comercio e Industria

Yacimiento Petrolíferos Fiscales - Y.P.F.

Gas del Estado - G.E.

Agua y Energía Eléctrica - A. y E.E.

Combustibles Sólidos - C.S.

Industria Metalúrgica y Plástica Argentina - I.M.P.A.

Corporación Argentina de Tejeduría Doméstica

Fábricas Argentinas de Envases Textiles - F.A.N.D.E.T.

Hilanderías y Tejedurías

Fábrica Argentina de Productos Químicos

Destilería de Alcohol Anhidro

Petroquímica

Comercial Inmobiliaria y Financiera - C.I.F.E.N.

Distribuidora de Frutas Argentinas

Ministerio de Aeronáutica

Aerolíneas Argentinas - A.A.

Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas Di.N.F.I.A.

Ministerio de Hacienda

Comisión Administradora Bienes Ley 14.122 - C.A.B.Ley 14.122 (Organismo Central)

Manufactura Algodonera Argentina

Santa Rosa Estancias

Sociedad Auxiliar,Fabril,Agrícola y Comercial - S.A.F.A.C.

Compañía Argentina Industrial Olivícola

Comercial e Inmobiliaria Financiera Argentina - C.I.F.A.

Malteria Argentina

Gascarbo

Gráfica Argentina

Cervecería Palermo

Cervecería Buenos Aires

Compañía Argentina de Levaduras

Cervecería del Norte

Nueva Cervecería Argentina

Cervecería Quilmes

Maltería y Cervecería de Cuyo

Cervecería Schlau

Cervecería Córdoba

Cervecería Santa Fe

Bilz-Fábrica de Bebidas sin Alcohol

Malterías Hudson y Bella Vista

Instituto Nacional de Reaseguros - I.N.de R.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 275.-

PASAJES OFICIALES - MISIONES AL EXTERIOR

Buenos Aires, 18 de julio de 1957.-

Señor Jefe:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Jefe, llevando a su conocimiento la opinión sustentada por el Tribunal de Cuentas de la Nación, al expedirse en la consulta formulada con respecto al otorgamiento de pasaje oficial a la señora esposa de un agente del Estado destacado en misión oficial, transcribiendo, a tal efecto, el texto del memorándum producido en el Expediente 30.821/957 - Tribunal de Cuentas de la Nación de fecha 21/6/957:

MEMORANDUM: "A tenor de la consulta formulada con respecto al "otorgamiento de pasajes a familiares de personas designadas por "el Poder Ejecutivo Nacional para el cumplimiento de misiones "especiales en el exterior, este Tribunal de Cuentas de la Nación debe manifestar que, de acuerdo con lo dispuesto por el "artículo 53 de la ley 12.951, corresponde el dictado de un "decreto que determine expresamente ese derecho.- Fdo. DAMIAN "FIGUEROA -Presidente-".-

Saludo al señor Jefe muy atentamente.-

Fdo. JUAN CARLOS PASTENE
Secretario

DIRECC. GRAL. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Despacho General -

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 276.-

COEFICIENTES

Buenos Aires, 5 de junio de 1957.-

Visto el Decreto número 22.610 de fecha 19 de diciembre de 1956, por el que se modificó el coeficiente a aplicarse a las retribuciones y gastos del personal que presta servicios en España, como así también a las remesas de carácter oficial, y

CONSIDERANDO:

Que la Embajada de la República en España, informa que el coeficiente vigente de cinco con ochenta y cuatro (5,84) establecido por el citado decreto para dicho país, resulta en la actualidad insuficiente a las necesidades de los funcionarios allí destinados como consecuencia del aumento experimentado en el costo de vida y a la modificación de la cotización nominal de la peseta en el Mercado Oficial efectuada por el Banco Central de la República Argentina;

Que en consecuencia procede reajustar dicho coeficiente a fin de asegurar a los funcionarios un nivel de vida acorde con la importancia de su cargo y de la representación que invisten;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 1º del Decreto número 22.610 del 19 de diciembre de 1956, dejándose establecido que, a partir del 1º de julio de 1957, regirá para España, el coeficiente de siete con quince (7,15).

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto, Hacienda, Comercio e Industria, Guerra, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase a sus efectos al Tribunal de Cuentas de la Nación.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Alfonso de Laferrére - Adalbert Krieger Vasena Julio C. Cueto Rúa - Víctor J. Majó Teodoro Hartung - Eduardo F. MacLoughlin.-

DECRETO Nº 5.911.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 277.-

COMISIONES INTERMINISTERIALES E INTERNAS

Buenos Aires, 18 de junio de 1957.-

Visto lo propuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y

CONSIDERANDO:

Que en la actualidad tienen establecidas en la ciudad de Buenos Aires sus oficinas locales o regionales distintos organismos de las Naciones Unidas, como así también otras organizaciones internacionales asociadas a la misma;

Que en un futuro próximo se prevé, como consecuencia del desarrollo cada vez mayor de los programas de asistencia técnica, y de otras actividades internacionales, una ampliación e instalación de nuevas dependencias de los respectivos organismos internacionales;

Que el hecho de tener en la actualidad sus oficinas y locales ubicados en distintos lugares de la Capital crea serios inconvenientes derivados de la dificultad de contacto y coordinación entre esos organismos y de la confusión suscitada en el público que debe dirigirse a ellos; originando asimismo duplicidad en los gastos generales de mantenimiento de esas dependencias;

Que resulta evidente que la solución de los problemas e inconvenientes que se han puesto de manifiesto, estaría dada por la centralización de esas distintas oficinas y locales, en un solo edificio convenientemente ubicado, lo que permitiría asimismo, contar con un lugar adecuado para las reuniones de carácter internacional que se celebren en la República;

Que finalmente, como es notorio el Gobierno se encuentra vivamente interesado en participar cada vez más activamente en la vida de la comunidad internacional, y la solución de los problemas mencionados no sólo significaría la eliminación de inconvenientes prácticos y funcionales, sino también la creación de un gran centro de cooperación internacional;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Desígnase una comisión encargada de efectuar los estudios y trabajos necesarios con el fin de proporcionar a los distintos organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales asociadas a la misma, un edificio adecuado para el establecimiento de sus respectivas oficinas y servicios de informaciones.

ARTICULO 2º.- La mencionada comisión estará integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante del Ministerio de Obras Públicas, un representante de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y dos representantes de los organismos internacionales interesados. El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ejercerá la presidencia de dicha comisión, actuando como secretario de la misma un funcionario designado por la mencionada Secretaría de Estado.

ARTICULO 3º.- La comisión deberá, en un plazo de noventa (90) días, a contar desde su constitución, presentar las conclusiones de sus estudios, como así también un plan de financiación por parte de los organismos internacionales interesados, con relación a la locación del inmueble que se destine para sede de los mismos.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Relacio-

nes Exteriores y Culto, Hacienda, Obras Públicas e Interior.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Alfonso de Leferrére - Adalbert Krieger Vasena - Pedro Mendiondo Carlos R.S. Alconada Aramburú.-

DECRETO Nº 6.772.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 278.-

CASA DE MONEDA - TRABAJO INCENTIVADO

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1956.-

Visto la necesidad de dotar a la Casa de Moneda de la Nación, de un sistema que permita la determinación y liquidación de primas a la mayor producción a su personal, y

CONSIDERANDO:

Que el presupuesto de la cuenta especial "Ministerio de Hacienda - Casa de Moneda - Trabajos por cuenta de Terceros", cuenta con el crédito necesario para solventar la aplicación del régimen de que se trata;

Que la vastedad y variedad de las operaciones que se cumplen en la planta fabril de la Casa de Moneda de la Nación, exigen un estudio minucioso que permita la ponderación en particular de las distintas tareas que concurren a la producción final;

Que sin embargo, la urgente necesidad que existe de proporcionar al mencionado Organismo el medio que le permita no solo impulsar de inmediato su producción, sino, esencialmente, despertar en su personal un mayor ahinco en la realización de los trabajos que le son propios, con el propósito de obtener mejoras rendimientos tanto en el aspecto individual como colectivo, hace necesario arribar a soluciones de emergencia, de carácter provisorio difiriendo transitoriamente y por un lapso determinado los análisis de tiempos y tipificación de las operaciones necesarias para llegar a la estandarización de tareas;

Que el medio transitorio elegido a los fines de que se trata, cumple en general el propósito que se persigue, al

clasificar y armonizar las operaciones de conjunto, para formar seguidamente equipos o grupos de operarios en un solo estandard promediando los trabajos netos registrados;

Que el método citado habrá de alcanzar resultados positivos sin entorpecer los planes organizativos de la Casa de Moneda que, por sus características, deben realizarse en estrecha colaboración entre las distintas sectores aplicados a un mismo tipo de producción y rara vez responden a operaciones aisladas y únicas, sino que, por el contrario, están intimamente ligadas hasta la producción final, donde recién se acusa la cantidad y calidad de los trabajos ejecutados por el grupo o equipo;

Por ello y atento lo determinado por el artículo 27 del Decreto-Ley Nº 7.104/55 modificado por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 1.635/56,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Institúyese, a partir del 1º de noviembre de 1956, para todo el personal que preste servicios efectivos en la Casa de Moneda de la Nación, primas especiales destinadas a incentivar la producción.

ARTICULO 2º.- La liquidación de primas a la producción, provisionalmente, se efectuará de acuerdo a las normas que se determinan por el presente decreto, debiendo la Casa de Moneda proyectar un sistema de estímulo a la producción a regir definitivamente, luego de transcurrido un semestre de labor incentivada y formulado en base a los resultados obtenidos en el curso del mismo.

ARTICULO 3º.- La Casa de Moneda de la Nación liquidará en concepto de "primas a la producción" a cada agente que preste servicios efectivos en dicho organismo, el importe de hasta un sueldo básico por bimestre, según la categoría en que aquel revista en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.

ARTICULO 4ª.- A los efectos de la aplicación del sistema de "primas a la producción", instituído por el presente decreto, la organización del trabajo por equipo se dividirá en cinco (5) series de operaciones, a saber:

1) Impresiones Calcográficas, integrada por los talleres o secciones de: a) Dibujos y Grabados. Transferencia y Guillochés; b) Fotograbado y Fotomecánica; c) Galvanoplastía; d) Cilindros Calcográficos; e) Talleres Auxiliares (Mecánica de Precisión y Fabricación de Numeradores); f) Taller de Máquinas Calcográficas, Tipográficas y Estampado en Acero; g) Elaboración de Tintas y h) Encuadernación.

2) Impresiones Tipográficas, integrada por los talleres o secciones de: a) Dibujo; b) Fotograbados; c) Galvanoplastía; d) Composición; e) Talleres Auxiliares (Mecánica de Precisión y Fabricación de Numeradores); f) Taller de Máquinas Tipográficas A y B; g) Elaboración de Tintas y h) Encuadernación.

3) Impresiones Litográficas, integrada por los talleres o secciones de: a) Dibujo; b) Fotograbado y Fotomecánica; c) Taller de Máquinas de Impresiones "Offsot"; d) Elaboración de Tintas y e) Encuadernación.

4) Impresiones en Huecograbado, integrada por los talleres o secciones de: a) Dibujo; b) Fotograbado de Cilindros y Planchas; c) Galvanoplastía; d) Taller de Máquinas; e) Elaboración de Tintas y f) Encuadernación.

5) Acuñación de Monedas, integrada por los talleres o secciones de: a) Dibujo y Grabado; b) Talleres Auxiliares (Tornería y Templado) y c) Taller de Máquinas.

ARTICULO 5ª.- El personal acreedor al beneficio a que se refiere el presente decreto se dividirá en tres grupos;

I - PERSONAL DIRECTO

II - PERSONAL INDIRECTO

III - PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES

I - Se entiende por personal directo a todo aquel que aporte mano de obra activa en cada una de las series de operaciones establecidas. También debe incluirse dentro de este grupo a todos los demás operarios de oficio: Mecánicos, electricistas, carpinteros, albañiles, pintores, cañistas, etc., que arreglen o acondicionen equipos para el regular rendimiento de máquinas e instalaciones.

II - Debe comprenderse dentro del personal indirecto a aquel que desarrolla tareas directivas y administrativas en cada uno de los talleres o secciones pertenecientes a cada serie de operaciones. Este personal se subdividirá en dos clases:

1ª) Personal indirecto de supervisión, que tiene mando y responsabilidad sobre la calidad y cantidad de los trabajos, en base a las series de operaciones enumeradas en el artículo 4ª. Estarán comprendidas dentro de esta clasificación las siguientes funciones:

a) Supervisor General Técnico.

b) Jefe y 2ª Jefe de los Departamentos de Producción, Contralor, Laboratorio Químico y Talleres Auxiliares.

c) Jefes y 2dos. Jefes de secciones y talleres pertenecientes a cada uno de los Departamentos precitados en el apartado b).

d) Encargados de cada uno de los talleres o secciones que intervienen en el procese de las series de operaciones finales de producción.

2ª) Personal auxiliar, que cumple funciones atinentes al proceso fabril que se ejecuta en cada una de las series establecidas.

III - Se considera incluído dentro del personal administrativo a aquél que no esté comprendido en los apartados 1º y 2º del presente artículo y, dentro del personal de servicios generales, al que realice tareas acordes con dicha denominación.

ARTICULO 6º.- La adjudicación de las primas a la producción a los agentes que intervengan en cualquiera de las series de operaciones a que se hace referencia en el artículo 4º y en las tareas mencionadas en el artículo 7º "in-fine" se efectuará en la siguiente forma:

PERSONAL DIRECTO: CIEN POR CIENTO (100%).-

PERSONAL INDIRECTO: Comprendidos en los apartados 1º) y 2º)del artículo 5º: NOVENTA POR CIENTO (90%) y OCHENTA POR CIENTO (80%), respectivamente.

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES: CINCUENTA POR CIENTO (50%), del promedio general resultante de relacionar el rendimiento de todas las series de operaciones estipuladas en el artículo 4º.

ARTICULO 7º.- El monto de cada prima a otorgarse estará de acuerdo con la cantidad de trabajos realizados bimestralmente por cada grupo o equipo formado según las series de operaciones para llegar a la operación final, establecidas en el artículo 4º del presente decreto. Dicha cantidad de trabajo será medida de acuerdo con las tablas de rendimiento horario que para cada grupo han sido fijadas en las planillas anexas que forman parte integrante del presente decreto y condicionada a lo establecido en el artículo 8º.

El coeficiente resultante de la aplicación de la tabla de rendimiento se multiplicará por el sueldo básico que tenga asignado en el Presupuesto General de Gastos de la Nación cada agente que preste servicios en la Casa de Moneda de la Nación, el que determinará el monto a cobrar.

Cuando un taller tuviera asignadas tareas aplicadas a dos o más series de operaciones y que por sus características no

pudiera determinarse la sección o personal que trabajó en esas tareas, los agentes directos o indirectos participarán en las primas en una cantidad que será igual al promedio de los rendimientos totales de la serie de operaciones en que hubieran participado.

ARTICULO 8º.- El personal del Departamento de Contralor percibirá como prima a la producción el CIEN POR CIENTO (100%) del promedio a que se refiere el artículo 6º para el personal administrativo y de servicios generales.

Queda establecido que para el reconocimiento de las primas de que trata el presente decreto solamente se considerará la producción terminada y una vez cumplida las funciones de contralor correspondientes.

ARTICULO 9º.- Por las inasistencias de cada día-hombre incurridas por el personal que preste servicios en la Casa de Moneda, excepto las relativas a vacaciones reglamentarias, se descontará el TRES POR CIENTO (3%) de las primas a la producción que le hubiera correspondido durante el período bimestral.

ARTICULO 10º.- Facúltase a la Casa de Moneda de la Nación para que dicte las normas generales a que deberá ajustarse el personal a que se hace mención en el artículo 5º, incisos I y II, y Art. 8º del presente decreto, concernientes al cumplimiento de la calidad y cantidad de la producción, como así también a la forma, disciplina, vigilancia y responsabilidad de los agentes mencionados en el desempeño de la función específica.

Igualmente confeccionará y remitirá al Ministerio de Hacienda de la Nación un balance en forma cuatrimestral, donde se reflejen los resultados obtenidos con la producción incentivada.

ARTICULO 11º.- Toda circunstancia especial que no estuviera contemplada en el presente decreto, será resuelta por el MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION.

ARTICULO 12º.- Los gastos que demande la aplicación de este decreto se imputarán al ANEXO 10 - B - 2 - MINISTERIO DE HACIENDA - Item 6 - CASA DE MONEDA - "TRABAJOS POR CUENTA DE TERCEROS" - c) BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS Y OTROS CONCEPTOS ANALOGOS - PARTIDA PRINCIPAL 11, PARCIAL 4, del Presupuesto General de la Nación.

ARTICULO 13º.- La liquidación y pago de las primas se efectuarán dentro de los TREINTA (30) días a partir del vencimiento bimestral.

ARTICULO 14º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el DEPARTAMENTO DE HACIENDA.

ARTICULO 15º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y pase a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos.-

ARAMBURU - Eugenio A. Blanco

DECRETO Nº 21.640.-

TABLA DE RENDIMIENTO PARA "MAQUINAS CALCOGRAFICAS"

IMPRESION DE BILLETES DE BANCO

Promedio de rendimiento por hora de trabajo y por pliego (1)		Coeficientes que debe aplicarse al sueldo básico de cada agente directo para determinar la bonificación.-
Desde	Hasta	
1	800	----
801	850	0,05
851	900	0,10
901	950	0,15
951	1000	0,25
1001	1050	0,40
1051	1100	0,55
1101	1150	0,75
1151	1200	1,—

(1) Para las 8 máquinas.-

D.M. nº 278.-

TABLA DE RENDIMIENTO PARA LAS MAQUINAS QUE FUNCIONAN EN LOS TALLERES DE IMPRESIONES TIPOGRAFICAS "A" Y "B"

Promedio de rendimiento por hora de trabajo y por pliego (1)		Coeficiente que debe aplicarse al sueldo básico de cada agente directo para determinar la bonificación.-
Desde	Hasta	
1	700	——
701	750	0,05
751	800	0,10
801	850	0,15
851	900	0,25
901	950	0,40
951	1000	0,55
1001	1050	0,75
1051	1100	1.—

(1) Para 19 máquinas tipográficas

D.M. nº 278

TABLA DE RENDIMIENTO PARA MAQUINA "DE LA RUE"

IMPRESION DE BILLETES DE BANCO

Promedio de rendimiento por hora de trabajo y por pliego		Coeficiente que debe aplicarse al sueldo básico de cada agente directo para determinar la bonificación.-
Desde	Hasta	
1	400	----
401	425	0,05
426	450	0,10
451	475	0,15
476	500	0,25
501	525	0,40
526	550	0,55
551	575	0,75
576	600	1,—

TABLA DE RENDIMIENTO PARA "MAQUINAS TIPOGRAFICAS"

IMPRESION DE FONDOS DE BILLETES DE BANCOS

TALLER DE IMPRESIONES CALCOGRAFICAS

Promedio de rendimiento por hora de trabajo y por pliego (1)		Coeficiente que debe aplicarse al sueldo básico de cada agente directo para determinar la bonificación.-
Desde	Hasta	
1	800	——
801	850	0,05
851	900	0,10
901	950	0;15
951	1000	0;25
1001	1050	0;40
1051	1100	0;55
1101	1150	0;75
1151	1200	1,—

(1) Para 4 máquinas tipográficas.-

TABLA DE RENDIMIENTO PARA MAQUINAS DE FIRMA Y NUMERACION

TALLER DE IMPRESIONES CALCOGRAFICAS

Promedio de rendimiento por hora de trabajo y por pliego (1)		Coeficiente que debe aplicarse al sueldo básico de cada agente directo para determinar la bonificación.-
Desde	Hasta	
0	800	——
801	850	0,05
851	900	0,10
901	950	0,15
951	1000	0,20
1101	1150	0,40
1151	1200	0,55
1201	1250	0,75
1251	1300	1,—

(1) Para 5 máquinas tipográficas.-

TABLA DE RENDIMIENTO PARA LAS MAQUINAS QUE FUNCIONAN EN EL TALLER DE IMPRESIONES LITOGRAFICAS

(Impresiones Offset)

Promedio de rendimiento por hora de trabajo y por pliego (1)		Coeficiente que debe aplicarse al sueldo básico de cada agente directo para determinar la bonificación.-
Desde	Hasta	
1	1000	——
1001	1100	0,05
1101	1200	0,10
1201	1300	0,15
1301	1400	0,20
1401	1500	0,30
1501	1600	0,40
1601	1700	0,55
1701	1800	0,70
1801	1900	0,85
1901	2000	1,—

(1) Para 10 máquinas litográficas.-

TABLA DE RENDIMIENTO PARA LA MAQUINA "MAHILANDER"

IMPRESION EN HUECOGRABADO

Promedio de rendimiento por hora de trabajo y por pliego (1)		Coeficiente que debe aplicarse al sueldo básico de cada agente directo para determinar la bonificación.-
Desde	Hasta	
1	700	——
701	750	0,05
751	800	0,10
801	850	0,15
851	900	0,25
901	950	0,35
951	1000	0,50
1001	1050	0,70
1051	1100	1,—

TABLA DE RENDIMIENTO PARA "MAQUINAS CALCOGRAFICAS"

IMPRESION DE ESTAMPILLAS POSTALES

Promedio de rendimiento por hora de trabajo y por pliego (1)		Coeficiente que debe aplicarse al sueldo básico de cada agente directo para determinar la bonificación.-
Desde	Hasta	
1	250	——
251	275	0,05
276	300	0,10
301	325	0,15
326	350	0,20
351	375	0,25
376	400	0,35
401	425	0,50
426	450	0,70
451	500	1,—

(1) Para 1 máquina.-

TABLA DE RENDIMIENTO PARA LAS MAQUINAS ACUÑADORAS

TALLER DE ACUÑACION DE MONEDA METALICA

Promedio de rendimiento por hora y por monedas acuñadas (1)		Coeficiente que debe aplicarse al sueldo básico de cada agente directo para determinar la bonificación.-
Desde	Hasta	
1	5000	———
5001	5100	0,05
5101	5200	0,10
5201	5300	0,15
5301	5400	0,20
5401	5500	0,30
5501	5600	0,40
5601	5700	0,50
5701	5800	0,65
5801	5900	0,80
5901	6000	1,--

(1) Para 15 máquinas acuñadoras.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 279.-

CASA DE MONEDA - TRABAJO INCENTIVADO

Buenos Aires, 16 de mayo de 1957.-

Visto el Decreto número 21.640 de fecha 4 de diciembre de 1956, por el cual se instituye para todo el personal que preste servicios efectivos en la Casa de Moneda de la Nación, primas especiales destinadas a incentivar la producción, y

CONSIDERANDO:

Que en la Tabla de Rendimiento para Máquinas de Firma y Numeración - Taller de Impresiones Calcográficas de las planillas anexas al artículo 7ª de dicho decreto, se ha omitido la interpolación de valores que corresponden a la producción de pliegos comprendidos en los rangos de 1.001 a 1.050 y 1.051 a 1.100;

Que es menester completar el ordenamiento de los valores considerados en la tabla de rendimiento aludida, incorporando la interpolación de los rangos señalados con el coeficiente correspondiente,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1ª.- Modifícase en la forma que se indica en planilla anexa, la Tabla de Rendimiento para Máquinas de Firma y Numeración - Taller de Impresiones Calcográficas, anexa al artículo 7ª del Decreto número 21.640 de fecha 4 de diciembre de 1956

ARTICULO 2ª.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

ARTICULO 3ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

DECRETO Nª 5.119.- ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

TABLA DE RENDIMIENTO PARA MAQUINAS DE FIRMA Y NUMERACION

TALLER DE IMPRESIONES CALCOGRAFICAS

Promedio de rendimiento por hora de trabajo y por pliego (1)		Coeficiente que debe aplicarse al sueldo básico de cada agente directo para determinar la bonificación.-
Desde	Hasta	
0	800	——
801	850	0,05
851	900	0,10
901	950	0,15
951	1000	0,20
1001	1050	0,25
1051	1100	0,30
1101	1150	0,40
1151	1200	0,55
1201	1250	0,75
1251	1300	1,—

1) Para 5 máquinas tipográficas.-

CASA DE MONEDA - TRABAJO INCENTIVADO

Buenos Aires, 24 de junio de 1957.-

Visto el Decreto nª 21.640 de fecha 4 de diciembre de 1956, modificado parcialmente por el Nª 5.119 del 16 de mayo último, mediante el que se instituyen primas especiales destinadas a incentivar la producción para todo el personal que preste servicios efectivos en la Casa de Moneda de la Nación,y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el dictamen de la Dirección General de Finanzas del Ministerio de Hacienda de la Nación, que obra a fojas 1/5 del expediente Nª 5.992/57, resulta procedente imputar a la partida específica el aporte patronal correspondiente a las primas de producción, ya sea de las liquidaciones bimestrales como del sueldo anual complementario;

Que como consecuencia de ello, surge la necesidad de ajustar las imputaciones registradas por las primas de producción liquidadas hasta el día de la fecha, en cuanto atañe al concepto de que se trata;

Que por otra parte, y de acuerdo con la solicitud interpuesta por la Casa de Moneda de la Nación, fundamentada en el estudio sistemático que debe realizar para valorar los múltiples factores que inciden en el rendimiento horario de las máquinas impresoras, es menester ampliar el plazo fijado en el artículo 2ª del referido Decreto nª 21.640/56;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A:

ARTICULO 1ª.- Modifícase el texto del artículo 12ª del De-

creto Nª 21.640 de fecha 4 de diciembre de 1956, por el siguiente:

"Artículo 12ª.- Los gastos que demande la aplicación de este decreto "se imputarán al Anexo 10-B-2 - Ministerio de Hacienda - Casa de Moneda - "Trabajos por Cuenta de Terceros" - c) Bonificaciones, suplementos y otros conceptos análogos - Partida Principal 11 - Parcial 4, excepto el correspondiente al aporte patronal a la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado, que deberá afectarse al rubro e) Aporte Patronal - Partida Principal 11 - Parcial 1 del presupuesto de la mencionada Cuenta Especial".

ARTICULO 2ª.- Las sumas que en concepto de aporte patronal, por las liquidaciones practicadas durante el año 1957, se hubieran imputado hasta la fecha, se ajustarán conforme a lo determinado en el artículo 1ª precedente.

ARTICULO 3ª.- Amplíase a doce meses el plazo de seis, acordado a la Casa de Moneda de la Nación por el artículo 2ª del Decreto Nª 21.640/56, para proyectar el sistema de estímulo a la producción a regir definitivamente.

ARTICULO 4ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nª 6.870.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 281.-

MINISTERIO - SUBSECRETARIA DE FINANZAS - DIRECCION NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y FINANCIERA - INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS - BANCOS - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS - INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS

Buenos Aires, 6 de agosto de 1957.-

Visto la necesidad de posibilitar una mejor gestión administrativa en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Hacienda de la Nación, permitiendo al propio tiempo agilitar la tramitación técnica de los asuntos que competen al citado Departamento de Estado, y

CONSIDERANDO:

Que la integración del citado Ministerio con las funciones inherentes a las materias hacendarias y financieras del Estado, resultante de la reestructuración ministerial dispuesta por el Decreto-Ley Nª 10.351 de fecha 8 de junio de 1956, ha mostrado la conveniencia de desdoblar su organización funcional en dos ramas perfectamente definidas a cargo de esa Secretaría de Estado;

Que en ese orden de ideas se estima procedente disponer el ordenamiento de las tareas del Ministerio de que se trata, sobre la base de dos Subsecretarías, por cada una de las cuales canalizarán los asuntos propios de las materias específicas mencionadas en el considerando precedente;

Que esa forma más racional de distribución del trabajo en exclusivo beneficio de la eficiencia con que deben diligenciarse los problemas estatales, conforma un temperamento abonado en la actualidad por casos tales como los de las Subsecretarías de Culto y de Relaciones Exteriores, en la Cancillería; las de Educación y de Justicia, en el Departamento del ramo; y las de Comercio, de Industria y de Minería, en el Ministerio de Comer-

cio e Industria;

Por todo ello y atento lo propuesto por el señor Ministro de Hacienda de la Nación,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- En lo sucesivo la actual Subsecretaría existente en el Ministerio de Hacienda de la Nación funcionará como "Subsecretaría de Hacienda", creándose a partir de la fecha, como integrante de la estructura orgánico-funcional del mencionado Departamento de Estado y con dependencia directa del titular del mismo, la "Subsecretaría de Finanzas".

ARTICULO 2º.- La Subsecretaría de Finanzas, bajo cuya dependencia funcionará la Dirección Nacional de Política Económica y Financiera, entenderá en todo lo que corrrespondiere a las tareas específicas de los organismos integrantes del Sistema Bancario Oficial, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Instituto Nacional de Reaseguros y el Instituto de Servicios Sociales Bancarios, como así también los demás organismos o reparticiones que se le agreguen o transfieran en el futuro.

ARTICULO 3º.- La Subsecretaría de Hacienda conservará en su órbita jurisdiccional las reparticiones, organismos y funciones restantes del Ministerio de Hacienda de la Nación.

ARTICULO 4º.- En caso de ausencia temporaria del Subsecretario de Finanzas, el Director Nacional de Política Económica y Financiera procederá a atender directamente el despacho de los asuntos correspondientes a las materias de su dependencia.

ARTICULO 5º.- Todo gasto que demande la creación, reestructura y funcionamiento a que se refiere el presente decreto, será atendido con los créditos presupuestarios asignados al Ministerio de Hacienda por el Presupuesto General de la Nacion correspondiente al año 1957, a cuyo efecto, mediante

las compensaciones de partidas que fueren menester y que autorizan las disposiciones en vigor, el citado Departamento proyectará y propondrá al Poder Ejecutivo el reajuste del Anexo 10.

ARTICULO 6ª.- Derógase toda disposición en cuanto se oponga a lo que establece este Decreto.

ARTICULO 7ª.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

ARTICULO 8ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de Hacienda de la Nación a sus efectos.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nª 9.103.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 282.-

SUBSIDIO FAMILIAR

Expediente Nº 113.231/56.-

///nos Aires, diciembre 28 de 1956.-

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para manifestarle, respecto al planteamiento al que se refieren los adjuntos actuados, que la liquidación del subsidio familiar al personal que integra el sistema bancario oficial debe disponerse -en cuanto al monto de las asignaciones a liquidar y límites del beneficio- con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 8º del Decreto Nº 15.797/56, quedando supeditada su aplicación a las normas aclaratorias y de interpretación a los Decretos Nros. 24.816/45 y 29.912/45 dictadas por este Departamento.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 19º del Decreto Nº 15.797/56 dése a la presente el carácter de resolución aclaratoria a sus disposiciones.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. EUGENIO A. BLANCO

RESOLUCION Nº 270.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 283.-

HORARIO ADMINISTRATIVO - BANCOS

Buenos Aires, 31 de julio de 1957.-

Visto que por Decreto número 25.588/53 se acordó al ex-Ministerio de Finanzas de la Nación la facultad de autorizar, con carácter de excepción y en casos plenamente justificados, a determinados Bancos o algunas de sus filiales para que desarrollen operaciones con horario distinto al establecido por el Decreto número 12.116/50 y el informe número 220, del 23 de enero de 1957, del Banco Central de la República Argentina, en el que se considera la conveniencia de delegar en dicha institución la autorización pertinente a fin de permitir la implantación de horarios especiales para atender los pagos de jubilaciones y pensiones dentro de la jornada legal de 7,30 horas que cumple el personal bancario, y

CONSIDERANDO:

Que ha de resultar más expeditivo para la buena organización de los servicios bancarios que el Banco Central de la República Argentina autorice directamente la implantación de horarios especiales;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Delégase en el Banco Central de la República Argentina la autorización conferida por el Decreto número 25.588/53 al ex-Ministerio de Finanzas de la Nación para que se permita, con carácter de excepción y en casos plenamentes justificados, a algunos Bancos o sus filiales a que desarro-

llen todas o algunas de sus operaciones con horarios especiales de personal y de atención al público.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nº 8.811.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 284.-

IMPUESTO A LOS REDITOS - AGENTES DE RETENCION

Buenos Aires, 12 de junio de 1957.-

Visto que el artículo 38 de la Ley nª 11.682 (texto ordenado en 1956) establece que la percepción del impuesto a los réditos se realizará mediante la retención en la fuente en los casos y en la forma que disponga esta Dirección General, y que el artículo 29 de la Ley nª 11.683 (t.o. en 1956) la facultad para disponer qué personas y en qué casos intervendrán como agentes de retención, y

CONSIDERANDO:

Que la práctica ha demostrado la conveniencia de perfeccionar el régimen de retenciones actualmente en vigencia, de manera tal que se asegure el ingreso del impuesto y se faciliten las tareas de verificación y fiscalización;

Que la generalización del régimen de retenciones en la fuente ha de redundar en definitivo en beneficio de los contribuyentes, al permitir que el gravamen se vaya ingresando paulatinamente;

Que a tales efectos y como primera etapa, es conveniente limitar a determinados sectores la obligación de actuar como agentes de retención, sin perjuicio de su oportuna ampliación si las circunstancias lo hacen aconsejable;

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 8ª de la Ley nª 11.683 (t.o. en 1956);

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GRAL. IMPOSITIVA

R E S U E L V E :

1ª.- Sin perjuicio de las retenciones que corresponda practicar de conformidad con las disposiciones vigentes, los responsables que se indican seguidamente actuarán como agentes de

retención del impuesto a los réditos en los casos y en la forma que se establece en la presente resolución.

A) COMERCIANTES, ENTIDADES CIVILES O COMERCIALES (PUBLICAS O PRIVADAS):

Actuarán como agentes de retención aplicando la tasa del 7 por ciento -sin deducciones por mínimo no imponible ni cargas de familia- sobre cada pago o acreditación de m$n. 1.000 o más que efectúen directamente a personas residentes en el país, por los siguientes conceptos:

1) Intereses de capitales recibidos en préstamos o depósito, cualesquiera sean sus denominaciones o formas de pago, excepto los intereses de depósitos en Caja de Ahorro (Art. 19, inc. h) de la Ley nº 11.682 (t.o. en 1956);

2) Réditos de la locación de derechos;

3) Derechos amparados por la Ley Nº 11.723 (sólo cuando el gravamen no recaiga directamente sobre los autores o las respectivas obras no estén debidamente inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual);

4) Regalías, subsidios periódicos y transferencias temporarias o definitivas de derechos de patentes, regalías y similares;

En estos casos, la retención se efectuará sólo sobre el 75 por ciento de la suma pagada y siempre que el importe que resulte de aplicar dicho porcentaje ascienda a $ 1.000.- ó más, salvo que el bien cedido para su explotación fuere de naturaleza tal (derechos, marcas u otros activos intangibles) que no sufriera con ese motivo desgaste o merma en su valor, y, consiguientemente, no proceda la aludida deducción;

5) Rentas vitalicias;

En estos casos, la retención se efectuará sólo sobre el 50 por ciento de la suma pagada o acreditada, y siempre que el importe que resulte de aplicar dicho porcentaje sea de $ 1.000.- o más;

6) Beneficios o participaciones en seguros sobre la vida;

7) Sumas abonadas por obligaciones de no hacer, o por el abandono o no ejercicio de una actividad;

8) Utilidades que bajo cualquier denominación (retorno, interés accionario, etc.) distribuyan entre sus socios las cooperativas, excepto las de consumo, incluído los pagos que las cooperativas de trabajo efectúen a los socios que trabajen en la explotación, en retribución de servicios personales prestados por los mismos;

9) Honorarios u otras remuneraciones por el ejercicio de profesiones liberales y oficios, por la prestación de servicios y ocupaciones lucrativas de cualquier naturaleza y por el desempeño de funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, administrador de bienes, director de sociedades anónimas y de otras actividades similares;

En los casos en que se efectúen pagos o acreditaciones a contratistas de obra, de trabajos a destajo, de trabajo agrícola-ganaderos, capataces de cuadrillas, empresarios de cuadrillas, empresarios de orquestas y bandas de música, contratistas de reparto de mercaderías, y similares, la retención se efectuará sobre el 10 por ciento de las sumas pagadas o acreditadas y siempre que el importe que resulte de aplicar este último porcentaje sea igual o superior a $ 1.000.-;

10) Comisiones u otras retribuciones análogas abonadas a particulares, corredores o viajantes de comercio, mar

tilleros y despachantes de aduana, en tanto estas actividades no sean ejercidas en relación de dependencia.

B) INTERMEDIARIOS:

Los bancos, comerciantes e entidades civiles o comerciales, públicas o privadas, que en su carácter de intermediarios, administradores, agentes financieros o mandatarios, abonen o pongan a disposición, por cuenta de terceros, sumas sujetas a retención conforme con las normas del apartado A), y ésta no se hubiera hecho efectiva, deberán actuar como agentes de retención subsidiarios en la forma y términos fijados en la presente resolución.

Las clínicas, sanatorios e instituciones similares que no puedan dar cumplimiento a las disposiciones de este apartado, por no haber actuado en el cobro de las remuneraciones, deberán suministrar anualmente a esta Dirección General antes del 1º de abril, un detalle que contenga el nombre, apellido y domicilio de cada paciente y el de los profesionales que intervinieron en los casos en que durante el año anterior no fué posible practicar la retención del impuesto.

2º.- Si los pagos o acreditaciones parciales computables a los efectos de la retención no hubieran alcanzado al límite que para cada caso se prevé en el artículo anterior, pero en su conjunto en el curso del año calendario, sumaren o excedieren la cantidad de m$n. 5.000.- corresponderá retener la tasa del 7 por ciento sobre el total pagado o acreditado desde el 1º de enero, en el momento en que tal hecho ocurra. En igual forma se procederá cuando alguno de los importes parciales, por exceder del límite establecido, haya sufrido la pertinente retención, en cuyo supuesto, ésta será deducida del total a retener conforme a lo dispuesto precedentemente.

Los pagos o acreditaciones que se realicen en adelante,

hasta la finalización del año en curso, estarán sujetos a retención cualquiera fuese su monto.

3º.- Las disposiciones de los artículos anteriores no serán de aplicación cuando el beneficiario del rédito sea un Banco de Depósitos y Descuentos, una entidad exenta del gravamen o cuando se trate de pagos a trabajadores jornalizados (obreros, capataces, encargados, apuntadores, etc.) comúnmente llamados "changarines".

4º.- Las sumas retenidas de acuerdo con las normas precedentes, se ingresarán a la orden de la Dirección General Impositiva dentro de los cinco (5) días hábiles de pagado o acreditado el rédito, debiendo en todos los casos entregarse a los interesados una constancia de la retención practicada indicando importe de la misma y concepto, nombre, apellido y domicilio del beneficiario y fecha y forma de pago. Si el ingreso se efectúa mediante depósito bancario, éste deberá ser individual y un ejemplar de la respectiva boleta (Nº 94 A) servirá como comprobante de la retención para el beneficiario.

Cuando el ingreso de las retenciones se realice mediante cheque remitido a la Dirección General, deberá individualizarse por carta a los contribuyentes por cuya cuenta se efectúan los pagos de impuesto y en el comprobante a entregar a los beneficiarios se indicará el número, fecha e importe global del cheque y el nombre del Banco girado.

5º.- La obligación de actuar como agente de retención en los casos y en la forma indicados precedentemente, excluye la de actuar como agente de información, excepto por el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio del corriente año, a cuyo respecto deberán suministrarse las informaciones requeridas por el Artículo 40 de la Reglamentación General del impuesto a los réditos (t.o. 1956), antes del vencimiento del plazo fijado en el mismo.

6º.- Cualquier emisión o retención inexacta hará pasible a

los responsables de las penalidades que determina la Ley nª 11.683 (t.o. en 1956), sin perjuicio de su responsabilidad por el gravamen que hubieren emitido retener o ingresar y dará lugar, en su caso, a la impugnación del gasto sobre el que se hubiere emitido retener (Art. 39 de la Ley nª 11.682, t.o. 1956).

7ª.- Las presentes disposiciones se aplicarán a partir del 1ª de julio de 1957, sin perjuicio de las contenidas en los artículo 29 a 41 y 140 a 151 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a los réditos (texto ordenado 1956) en tanto no se opongan a esta resolución.

8ª.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.-

Fdo. ISAAC RECHTER

RESOLUCION GENERAL D.G.I. Nª 478.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 285.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - RENDICIONES DE CUENTAS - RESPONSABLES

Buenos Aires, 22 de julio de 1957.-

Visto lo dispuesto por el artículo 83, inciso e) de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que en uso de la facultad acordada por la citada disposición legal, es conveniente establecer una reglamentación que reúna en un solo cuerpo las distintas normas que han de regir la presentación, documentación, balances, plazos, condiciones y requisitos que deben integrar toda rendición de cuenta;

Que ello permitirá que la gestión de los responsables se ajuste de inmediato a los principios que el nuevo ordenamiento de la ley de contabilidad consagra;

Que la fijación de dicha normas facilitará al propio tiempo su presentación por los servicios administrativos, como así también, el posterior examen a los fines de su aprobación;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Apruébase el adjunto reglamento, que forma parte integrante de la presente resolución, por el que se fijan las normas a las cuales deberán ajustarse las rendiciones de cuenta que deben ser elevadas a este Tribunal de Cuentas de la Nación en virtud de la ley de contabilidad.

ARTICULO 2º.- Los señores contadores fiscales remitirán la información a que se refiere el artículo 32 del reglamento, a partir del 1º de agosto próximo y en lo sucesivo tales comunicaciones deberán presentarse del 1 a 5 de cada mes.
ARTICULO 3º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - César Aguirre Legarreta -Secretario-

RESOLUCION Nº 947.-

CAPITULO I

DE LAS CUENTAS Y SU CLASIFICACION

ARTICULO 1º.- Las cuentas que deben presentar los responsables en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 91 de la ley de contabilidad serán universales y se ajustarán a las disposiciones que se establecen por la presente reglamentación.

ARTICULO 2º.- Por su naturaleza y circunstancias las rendiciones de cuenta se clasificarán en:

a) de gestión permanente:

Corresponde su presentación a los responsables a que se refiere el artículo 96 de la ley de contabilidad y deberán abarcar todos los ingresos y egresos que correspondan a la gestión administrativa de la jurisdicción a su cargo.

b) de recaudación:

Estarán a cargo de los organismos legalmente facultados para efectuar la recaudación de las rentas generales. Acusarán los ingresos por tal concepto y como descargo las constancias de los depósitos que deban efectuar en los organismos habilitados para ello, con excepción de las afectaciones legales respectivas debidamente documentadas.

c) de tesorerías en el exterior:

Corresponde al movimiento de fondos relativo a la gestión que cumplen como agentes financieros del Gobierno Nacional las representaciones del país en el exterior.

d) de comisiones especiales:

Son las que deben presentar los titulares de misiones o comisiones de servicios especiales, de carácter accidental o transitorio. Deberán ajustarse a todos los requisitos exigibles para las cuentas de los responsa-

bles de gestión permanente con la sola excepción que señala la ley de contabilidad en el artículo 98, último párrafo.

e) de las provincias:

Son las que deben presentar los gobiernos provinciales que reciban fondos del Gobierno Nacional para un fin determinado y se ajustarán al procedimiento que fija en el capítulo respectivo.

f) de subsidios:

Las entidades, instituciones o personas que reciban ayuda del Estado para su sostenimiento, para el fomento de actividades especiales o para cumplir una finalidad determinada deberán rendir cuenta de la inversión del subsidio o contribución en la forma que se indicará en el respectivo capítulo.

g) de carácter secreto o reservado:

Las reparticiones que tengan a su cargo la administración de fondos asignados en el presupuesto en calidad de reservados o secretos, presentarán sus cuentas conforme con la reglamentación pertinente.

CAPITULO II

DE LA PRESENTACION DE LAS CUENTAS

ARTICULO 3º.- Las rendiciones de cuenta deberán ser presentadas directamente al Tribunal de Cuentas de la Nación mediante nota dirigida al Presidente del cuerpo, la que deberá contener los requisitos que siguen:

a) apellido y nombre del o de los responsables de la gestión que se rinde.

b) período que abarca la rendición.

c) relación de los balances que se acompañan.

d) indicación de cualquier circunstancia particular que haga el análisis de la cuenta.

e) origen, concepto y destino de los fondos que se rindan, cuando se trate de contribuciones o subsidios.

f) aclaración de las causas que impidan la presentación por los responsables que a ello estén obligados en virtud de la ley de contabilidad.

g) firma y aclaración de la firma y cargo del funcionario que rinda la cuenta.

ARTICULO 4º.- Los balances de la rendición de cuenta se confeccionarán por separado según correspondan al movimiento "efectivo" o de "otros valores". Se ajustarán al modelo que forma parte integrante del presente artículo e incluirán todos los cargos y descargos que por cualquier concepto se rinda en la cuenta. Además de los funcionarios responsables de la contabilidad, deberán ser suscriptos por los jefes de los servicios administrativos o por los jefes superiores de los organismos cuando se trata de entidades descentralizadas administrativa o burocráticamente.

ARTICULO 5º.- Los contadores fiscales destacados en los distintos servicios deberán certificar los balances en lo que a recaudación se refiere de acuerdo a la siguiente fórmula:

"Certifico que las sumas denunciadas en el presente balance en concepto de recaudación concuerdan con las registradas en la contabilidad del servicio administrativo".

Además vigilarán que los fondos que reciban los responsables se rindan en forma regular en relación con los cargos a que correspondan.

ARTICULO 6º.- Los responsables entregarán a la fiscalía que tenga asignado el despacho de sus cuentas, la documentación correspondiente a las mismas y si por razones de espacio aque-

llas no se pudieran recibir se entregarán directamente al Archivo General de la Administración con conocimiento del contador fiscal. En ambos casos las dependencias respectivas deberán otorgar un recibo por duplicado cuyo original será acompañado a la cuenta.

ARTICULO 7º.- Formada la rendición de cuenta con los recaudos y documentación establecidos en los artículo que anteceden, la misma será presentada a la Fiscalía General del Tribunal de Cuentas de la Nación. No se recibirá ni registrará cuando se omitan las formalidades o las constancias exigidas por la presente reglamentación.

ARTICULO 8º.- La documentación se acondicionará en carpetas cuyo tamaño y características determine la Contaduría General de la Nación. Deberá ordenarse por legajos separando los comprobantes correspondientes a "sueldos y jornales", de los de "otros gastos" y tanto los legajos como los comprobantes estarán numerados para permitir su individualización.

ARTICULO 9º.- En los servicios en que no haya sido implantado el régimen de revisión diaria de la documentación de inversión, así como en las rendiciones de los responsables dependientes de los servicios administrativos principales, la documentación se acompañara con planillas cuyo modelo forma parte integrante del presente artículo.

ARTICULO 10º.- Los servicios administrativos principales presentarán sus rendiciones de cuenta en los plazos que establezca la reglamentación del artículo 98 de la ley de contabilidad, con la documentación que al término de dichos plazos tengan en su poder.

CAPITULO III

DE LA DOCUMENTACION

ARTICULO 11º.- Los comprobantes relativos a sueldos y jornales deberán llevar el Vº Bº del funcionario que conforme con las reglamentaciones jurisdiccionales esté facultado para certificar la real prestación del servicio y la autenticidad de

la firma. Si se utilizare el procedimiento del pago por planilla firmada, el Vª Bº del citado funcionario deberá constar al pie de las mismas.

ARTICULO 12º.- La documentación que corresponda a inversiones de "otros gastos" deberá contener como requisitos mínimos:

a) expediente o antecedente de la contratación del gasto o la indicación del número que lo individualice cuando habiendo sido intervenido por el Tribunal de Cuentas de la Nación no fuera posible su agregación.

b) fecha y constancia de la recepción conforme de la mercadería.

c) comprobante de pago suscripto por la persona facultada para ello debiendo ser extendido en tinta o lápiz tinta y firmado por el funcionario pagador quien se responsabiliza por la personería del que recibe su importe, con indicación de la imputación con que se ha registrado el egreso.

d) sellado de ley cuando se trate de pagos en jurisdicción nacional.

e) las facturas y comprobantes que se acompañen a la rendición de cuenta deberán ser los originales y extenderse a máquina o manuscritos en tinta o lápiz tinta con mención del importe en letras y números redactados en forma clara y sin presentar enmiendas ni raspaduras. Si se tratare de compras o gastos en el extranjero se acompañará la traducción de dichos documentos certificada por funcionario competente. La factura deberá indicar en forma expresa la fecha de su presentación. En caso de extravío o pérdida de la factura original deberá dejarse constancia fehaciente del hecho y de los resguardos adoptados para evitar la duplicación de pago.

f) cuando se trate de sueldos o jornales bastará la constancia de la conformidad del Tribunal de Cuentas de la Nación sobre la respectiva liquidación.

g) Orden de compra original.

ARTICULO 13º.- Cuando se trate de pagos que correspondan a compras que deban cumplirse en sucesivas entregas se acompañarán los antecedentes requeridos por el artículo 12 al primer pago que se efectúe, dejándose constnacia de ello en los pagos sucesivos.

ARTICULO 14º.- Los servicios administrativos que en virtud de disposición legal o reglamentaria dispongan entregas anticipadas a organismos o entidades que no estén obligados a rendir cuenta en función de la ley de contabilidad, no podrán descargarse de esas entregas por no constituir las mismas documentación definitiva de inversión. Si el que recibe el anticipo es entidad o persona sujeta al régimen de los artículos 91 y 98 de la ley de contabilidad, el recibo que otorgue aquel constituye documento definitivo de pago.

ARTICULO 15º.- La documentación de pagos que corresponda a la ejecución de obras y trabajos públicos estará integrada con los certificados de obras que establezcan las disposiciones pertinentes.

ARTICULO 16º.- Las cuentas de recaudación estarán integradas por un estado que comprenda la totalidad del movimiento de fondos respectivos, el que se dividirá por rubros demostrativos de la discriminación de los ingresos registrados e igualmente de los importes a clasificar. Tales estados deberán ser acompañados de los documentos justificativos de los ingresos efectuados directamente a la Tesorería General de la Nación, de las devoluciones a terceros por percepciones indebidas y de todo otro antecedente que compruebe cargos o descargos especiales legalmente autorizados. Los rubros del referido balance serán complementados por planillados anexos suficientemente analíticos a los efectos de su correlación con las registraciones contables de la repartición recaudadora y con las de la contabilidad central a cargo de la Contaduría General de la Nación.

ARTICULO 17º.- Las tesorerías en el exterior rendirán cuenta de los gastos propios de la gestión que desarrollan como

agentes financieros del Gobierno Nacional. A esos fines remitirán los balances con los respectivos comprobantes de inversión para ser caratulados como rendición de cuenta. La Contaduría General de la Nación registrará los cargos respectivos en la contabilidad de responsables sobre la base de dichas rendiciones de cuenta.

ARTICULO 18º.- Las cuentas de comisiones especiales se regirán conforme a las disposiciones del artículo 98 -tercer párrafo- de la ley de contabilidad en cuanto a su presentación y seguirán el mismo régimen general establecido por la presente. Si en los períodos señalados por el citado artículo no se hubiera registrado movimiento de fondos, igualmente deberán elevar los balances respectivos y acompañar la certificación bancaria demostrativa del saldo en poder de la comisión.

ARTICULO 19º.- Los fondos que se entreguen a provincias y municipalidades, deberán rendirse a este Tribunal de Cuentas de la Nación mediante balances, estados y planillas demostrativas de la correcta aplicación de los mismos, legalizados por las autoridades u organismos reglamentariamente facultados para ejercer la pertinente fiscalización en dichas jurisdicciones. Si al otorgarse los fondos se estableciere expresamente que la rendición deba ser documentada o se encomendare a este Tribunal de Cuentas de la Nación la fiscalización de la inversión, deberá acompañarse la documentación justificativa pertinente.

ARTICULO 20º.- Las entidades de derecho público o privado que reciban subsidios o subvenciones para fines determinados, deberán rendir cuenta documentada en la forma prescripta por la presente reglamentación. Si tales subsidios se acuerdan en concepto de ayuda o contribución al sostenimiento de esas instituciones confundiéndose con la masa común de sus bienes propios la rendición se efectuará mediante balances y memorias anuales con los demás antecedentes probatorios de que la inversión se ajustó a la finalidad para la que se otorgó la contribución. Dicha documentación será suscripta por las autorida-

des competentes de esas entidades. Cuando se trate de instituciones con personería jurídica deberá acreditarse la aprobación de la inversión por las asambleas respectivas.

ARTICULO 21º.- Los subsidios y subvenciones que se destinen para realizar congresos, giras, competencias, etc., deberán rendirse en forma documentada conforme con las prescripciones de la presente reglamentación.

ARTICULO 22º.- Las entidades privadas que financien total o parcialmente con subvenciones del Estado la adquisición o construcción de inmuebles, deberán justificar haber cumplimentado el requisito legal de declarar, mediante escritura pública en la respectiva matriz de dominio del bien inmueble, el compromiso de que hasta tanto el Poder Ejecutivo dé su conformidad, no podrá disponer libremente de aquél. En los casos de subvenciones en las que los fondos sean entregados a la orden conjunta de la entidad beneficiaria y del técnico que designe el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, corresponde a éste último la elevación formal de la cuenta, sin que ello enerve la responsabilidad del co-titular de la cuenta.

CAPITULO IV

DE LA REVISION DIARIA

ARTICULO 23º.- Los servicios administrativos que tengan implantado el sistema de revisión diaria de la documentación de cargos y descargos, entregarán a la Delegación-Fiscalía o Fiscalía de este Tribunal de Cuentas un parte diario por duplicado del movimiento de efectivo y otros valores -uno por cada concepto- junto con la documentación que haya servido de base a cada uno de los asientos registrados. Dichos partes diarios se ajustarán a un modelo establecido con intervención de la Delegación Fiscal jurisdiccional y deberá ser aprobado por este Tribunal de Cuentas. El parte diario deberá contener las siguientes especificaciones:

En el débito:

1) saldo anterior de Caja y Bancos.

2) ingresos del día conforme con la documentación que se acompañe indicando importes parciales y sub-total.

En el crédito:

1) inversiones y gastos por imputación indicando importes parciales y sub-total.

2) otros egresos con indicación de parciales y subtotal.

3) saldo de Caja y Banco.

El parte diario consignará al pie un resumen analítico de las partidas que hayan tenido movimiento en el día en el que se indicará para cada una de ellas:

a) al saldo anterior con mención del parte que haya registrado el último movimiento.

b) lo pagado en el día.

c) el saldo disponible.

ARTICULO 24º.- Los partes diarios a que se hace referencia en el artículo anterior se resumirán mensualmente en un detalle que expresará:

En el débito:

1) saldo anterior discriminado por ejercicio.

2) detalle de los ingresos del mes clasificados por concepto.

En el crédito:

1) detalle de los pagos del mes clasificados por imputación.

2) saldo que pasa al mes siguiente discriminado por ejercicio.

Estos partes serán remitidos a la delegación-fiscalía o fiscalía dentro de los diez primeros días del mes siguiente al que los mismos correspondan.

ARTICULO 25ª.- Los partes diarios y la documentación deberán remitirse indefectiblemente por los servicios administrativos el primer día hábil siguiente al que se haya registrado el movimiento de tesorería.

ARTICULO 26ª.- Revisada y verificada la correcta registración de la documentación que se adjunta a los partes, el original de éstos y aquélla serán sellados y retenidos por la fiscalía hasta tanto sea despachada la rendición de cuenta mensual en la que hayan sido incluídas, en cuya oportunidad los remitirá al Archivo General de la Administración.

ARTICULO 27ª.- En ningún caso las tesorerías o cajas pagadoras deberán mantener en su poder documentación de pagos, giros, transferencias, entregas, etc., que hayan realizado, aún cuando se trate de comprobantes que no sean considerados de descargo definitivo por este Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 28ª.- Las observaciones de forma que recayeran en la documentación rendida, serán tramitadas directamente por la fiscalía a objeto de obtener su regularización. Respecto a las que se formulen sobre el fondo de las inversiones se dejará constancia de ellas al pie del parte diario, reteniendo la documentación respectiva hasta que las observaciones sean resueltas conforme con la ley de contabilidad. En estos casos, en el balance de la rendición, el responsable incluirá los importes correspondientes a dicha documentación en el rubro "documentación observada" y por separado acompañará el detalle de toda la que se encuentra en dicha situación, el que será verificado por el contador fiscal sobre la base de sus anotaciones dejando constancia de ello en el despacho de la cuenta.

CAPITULO V

NORMAS INHERENTES AL CONTENIDO DE LOS BALANCES

ARTICULO 29º.- Los balances no deberán reflejar ninguna operación que no representa cargos reales y definitivos.

ARTICULO 30º.- En el rubro "transferencias" tanto en el crédito como en el débito sólo se considerarán las entradas o salidas efectuadas de y a otros servicios administrativos.

ARTICULO 31º.- Los contrasientos que se efectúen como consecuencia de errores deslizados en balances anteriores deberán ser consignados por su importe total, es decir, que no deberán efectuarse compensaciones de cifras para determinar las diferencias.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 32º.- Los señores contadores fiscales vigilarán el estricto cumplimiento de los plazos establecidos para la presentación de las cuentas, debiendo informar al Tribunal de Cuentas por intermedio de la Fiscalía General las demoras o transgresiones que se comprueben y las causas que las motive solicitando las medidas que a su juicio deban adoptarse conforme con la ley de contabilidad.

ARTICULO 33º.- A los fines de lo dispuesto en el artículo anterior los señores contadores fiscales llevarán una planilla de las rendiciones de cuenta pendientes, correspondientes a los servicios administrativos ante los cuales estén destacados y consignarán en él las cuentas presentadas, la aprobación de las mismas y los saldos sin rendir.

ARTICULO 34º.- En el despacho de las cuentas los señores contadores fiscales, al pedir la aprobación o al formular reparos deberán indicar a los responsables reales de la inversión, precisando si se trata del responsable que eleva la rendición o en su caso del que accidentalmente tuvo ese cometido. Igualmente indicará los responsables dependientes de los servicios

administrativos principales.

ARTICULO 35º.- La Fiscalía General al proponer el despacho de las rendiciones de cuenta proyectará las comunicaciones respectivas para las autoridades que las rindan, y para los responsables a quienes se les aprueba la rendición o se les formule reparo.

ARTICULO 36º.- Requiérase a los servicios administrativos que adopten las medidas pertinentes para ajustar las rendiciones de cuenta de su jurisdicción a las normas que se implantan por la presente reglamentación.

ARTICULO 37º.- Quedan derogas todas las resoluciones o disposiciones dictadas con anterioridad que se opongan a lo establecido en la presente reglamentación.-

-.-.-.-.-.-.-.-

(Planilla anexa al artículo 9º)

RELACION DE COMPROBANTES DE GASTOS

MINISTERIO .....

REPARTICION .....

Relación nº ..... de la rendición de cuentas del mes de .....
.... año ..... de los comprobantes de inversión de fondos con imputación ...
..... (nombre de la partida)
Inc. Item. Partida

Nº de Orden de colocación del comprobante	Acreedor	Concepto	Importe

Importa la suma de .....

.....

Lugar y fecha

Sello y Firma

(Aclaración de firma)

ha.	D E B E	Importes Parciales	Importes Totales	H A B E R	Importes Parciales	Tot
	Saldo anterior (Por ejercicios)		$	Gastos en personal	$	
	Discriminación del saldo precedente:			Otros gastos	$	
	En efectivo			Devoluciones	$	
	Caja	$		Gtía. Efectivo (global)	$	.....
	Banco	$				
	En poder de responsables	$		**Otros conceptos**		
				Fondos de Terceros	$	
	En documentación a rendir			Transferencias	$	.....
	Administración central	$				
	Responsables	$	.....	Documentación observada en caso de intervención previa		.....
	Garantía efectivo					
	Fondo de terceros		.....			
	Total no adicionable			**Devolución Tesorería Gral. de la Nación** (Detalle: fecha, importe, etc.)		.....
	C A R G O S					
	Recibido de Tesorería General (Fecha, importe, etc.)	$	.....			
	Recaudaciones			**Contrasientos**		.....
	Efectivo	$	.....	**Saldo a rendir** (Por ejercicios)		
	Gtía. Efectivo					
	Global		.....			
	Otros conceptos					
	Fondos de terceros	$				
	Transferencia	$	.....			
	Contrasientos		.....			
	Jefe del Servicio Administrativo o Jefe Superior de la Entidad Autárquica			Contador General		

(Planilla anexa al artículo 9º)

MINISTERIO DE .....

REPARTICION .....

Relación general de comprobantes de inversión de fondos correspondiente a la rendición de cuenta del mes ..... año ..

º de orden	Nº de Legajo	Nº de Docum.	Imputac. Varia nº Renglón	Responsable	Imputación	Verificación Fiscal	Importe Imputado		To+ Eje
							Parcial	Total	

Asciende la presente relación a la suma de:

Sello

Firma

(Aclaración de firma)

(Planilla anexa al artículo 9a)

MINISTERIO .....

REPARTICION .....

Relación de comprobantes de pago de varias imputaciones, cuyos parciales se distribuyen en la relación general a los efectos del Balance correspondiente al mes de ..... de 19 ....-

Nº de Orden	Docum. Nº	Legajo Nº	D e s c r i p c i ó n	Imputación	Parcial de cada Imputación en el documento	Total por documento	Llevado a lación g Renglón

Importa la presente relación ..... que se lleva a la relación general de comprobantes de inversión.-

Buenos Aires, ... de 19 ....-

Firma

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 286.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - ORDENES DE DISPOSICION - LIBRAMIENTOS - ENTREGA DE FONDOS

Buenos Aires, 25 de julio de 1957.-

Visto lo dispuesto por los artículos 30 y correlativos de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que hasta tanto se dicte la reglamentación de la citada Ley es necesario encarar los problemas que su aplicación ha originado en la práctica y procurar su adecuada solución;

Que el artículo 30 establece que una vez promulgado el presupuesto general o producida su prórroga automática, el Poder Ejecutivo dictará una orden de disposición de fondos para cada jurisdicción hasta el importe de los créditos acordados a favor de los jefes de los servicios administrativos;

Que en los siguientes artículos se fija la oportunidad en que caducan dichas órdenes en cuanto a su disponibilidad, así como también los requisitos y régimen a que deben ajustarse los libramientos que con imputación a las mismas se emitan;

Que el Poder Ejecutivo dispone, además, la entrega de fondos a favor de personas físicas y jurídicas con cargo a créditos que no emanan de autorizaciones presupuestarias y que responden a devoluciones de multas e importes indebidamente percibidos, anticipos a las provincias y obras sociales, etc.;

Que si bien la ley de contabilidad sólo se refiere a las órdenes de disposición que por créditos del presupuesto general se dicten a favor de los jefes de los servicios administrativos nada obsta para que se caractericen de igual manera todas las entregas de fondos por el Poder Ejecutivo, cualquiera sea su beneficiario;

Que cuando en las circunstancias referidas no corresponda emitir libramientos, las respectivas ordenes de disposición deberán contener los requisitos esenciales que resulten de la aplicación del artículo 33 de la ley de contabilidad;

Que en esta forma se dará uniformidad a los actos administrativos de disposición de fondos con las ventajas derivadas de su más facil individualización y control;

Por ello y en uso de la facultad acordada por el artículo 84, inciso o) de la ley de contabilidad;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Las entregas de fondos dispuestas por el Poder Ejecutivo, cualquiera sea su origen y beneficiario, deberán ser caracterizadas como órdenes de disposición, pero habrán de contener, cuando con cargo a las mismas no corresponda la emisión de libramientos, todos los requisitos que para éstos prescribe el artículo 33 de la ley de contabilidad.

ARTICULO 2º.- Hágase conocer esta resolución a los servicios administrativos; dése al Digesto Administrativo y cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli Antonio M. Pérez Arango - Wifredo Dedeu - José M. Fernández Fariña - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 997.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 288.-

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - INCOMPATIBILIDADES - FISCALIZACION

Buenos Aires, 7 de agosto de 1957.-

Vista la necesidad de ajustar la competencia de los distintos servicios, con el objeto de acelerar al máximo el trámite de las actuaciones sometidas a la fiscalización del Tribunal de Cuentas de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que, con tal finalidad, es conveniente modificar el actual procedimiento mediante el cual se ejerce la vigilancia que determina el régimen de incompatibilidades en vigor, acordando competencia a las representaciones destacadas ante los distintos organismos de la Administración Nacional, para recibir y analizar las declaraciones juradas de cargos; producir directamente el despacho en aquellos casos que resulten compatibles y advertir, para su regularización, de aquellas acumulaciones no comprendidas en las reglamentaciones vigentes;

Que, con la descentralización proyectada el servicio de Presupuesto e Incompatibilidades tendrá únicamente a su cargo la consideración de aquellas situaciones no regularizadas dentro de los plazos fijados y en las que corresponde disponer la suspensión de haberes del causante y su levantamiento y de aquellas actuaciones que sobre la materia le sean remitidas en consulta, lo que le permitirá agilitar el restante despacho que le fija la resolución nª 695/957 (D.A. 56);

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- A partir del 1º de septiembre próximo las representaciones del Tribunal de Cuentas de la Nación tendrán a su cargo el análisis de las declaraciones juradas sobre acumulación de cargos que, en cumplimiento de disposiciones en vigor, formulen los agentes de los organismos ante los que están destacadas y el despacho directo de aquellas en que la situación resulte compatible.

ARTICULO 2º.- Cuando la acumulación exceda de los autorizado por las reglamentaciones en vigor, advertirán de esa situación al organismo fiscalizado y solicitarán su inmediata regularización por la opción pertinente.

Si el interesado o el respectivo servicio administrativo contestaran el emplazamiento sosteniendo la procedencia de la acumulación, el contador fiscal a cargo de la representación interviniente examinará nuevamente el caso y dará curso favorable a las actuaciones si compartiera lo expuesto; si no obtuviera información dentro del plazo de quince (15) días o si la interpretación fuera dudosa o correspondiera dictar la incompatibilidad, remitirá lo actuado al servicio de Presupuesto e Incompatibilidades para que, previa intervención del mismo, el Tribunal de Cuentas ordene la suspensión de haberes y ponga en conocimiento de la repartición su observación para que ésta disponga el cese de funciones, en forma transitoria, del causante.

El levantamiento de la suspensión de haberes sólo podrá ser resuelto por el Tribunal de Cuentas de la Nación.

ARTICULO 3º.- Independientemente de lo señalado en el artículo anterior en todos los casos de dudosa interpretación, las representaciones formularán la correspondiente consulta por intermedio del mencionado servicio, antes de producir despacho definitivo.

ARTICULO 4º.- Para el inmediato cumplimiento de los artículos precedentes, las distintas representaciones iniciarán gestiones ante los respectivos organismos fiscalizados para obtener el envío directo de todas las actuaciones en trámite de substanciación vinculadas con el régimen de incompatibilidades en vigor.

ARTICULO 5º.- Tome conocimiento el servicio de Presupuesto e Incompatibilidades; dése al Digesto Administrativo y cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.160.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 287.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - FONDO PERMANENTE

Buenos Aires, 1º de agosto de 1957.-

Vista la nota nº 164/57, de la Contaduría General de la Nación, (Expte. Nº 30.917/57 T.C.N.), que hace mención a diversos problemas, entre los que se encuentra el relativo a la implantación y funcionamiento del régimen de "fondo permanente" a que se refiere el artículo 48 de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que, hasta tanto se dicte la reglamentación de la citada ley, se estima necesario dar a conocer instrucciones para la institución de dicho régimen, que permita un proceder común y uniforme y hagan posible obviar en el futuro las dificultades que en la práctica se presentan actualmente;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los señores contadores fiscales prestarán su conformidad a la institución de los "fondos permanentes"cuando se ajusten a las siguientes normas:

1) Deberán ser acordados por la autoridad superior de cada Poder, del Tribunal de Cuentas de la Nación o de entidad descentralizada.

2) Se constituirán mediante liquidación que se imputará a cuenta transitoria denominada "Anticipos-art.48 - Ley de Contabilidad".

3) Los montos serán determinados con relación a las necesidades a satisfacer. Cuando dichos fondos se mantengan sin aplicación durante un tiempo injustificado los contadores fiscales lo pondrán en conocimiento de este Tribunal de Cuentas de la Nación a los efectos del artículo 44 de la ley de contabilidad.

4) Se atenderán con ellos los pagos de gastos urgentes de cualquier naturaleza, que no permitan esperar la extracción de fondos mediante el libramiento respectivo.

5) No obstante ello, deberá respetarse en la tramitación del gasto todos los demás aspectos legales y reglamentarios que corresponda.

6) El reintegro de las sumas pagadas se hará mediante la emisión del libramiento de entrega respectivo.

ARTICULO 2º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M.Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.139.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 289.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - EMPRESAS DEL ESTADO - MEMORIA Y BALANCES - AUDITORIAS

Buenos Aires, 7 de agosto de 1957.-

Visto lo dispuesto por el inciso f) del artículo 84 de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que el decreto nª 5.883/955, reglamentario de la Ley 13.653 (t.o.), prescribe en el art. 6ª que los planes de cuentas de las empresas del Estado deben ser preparados en forma tal que permitan confeccionar los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de las entidades de acuerdo con la fórmula aprobada por decreto nª 9.795/954;

Que, salvo lo establecido en dicha norma, las disposiciones legales citadas no han previsto cuales son los requisitos formales que deben reunir la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas correspondiente al funcionamiento de las empresas en cada ejercicio, que procede someter a intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del decreto precitado;

Que, por consiguiente, resulta necesario dictar las normas uniformes aplicables al efecto con carácter general como así también establecer el alcance de los informes definitivos que produzca el Tribunal de Cuentas de la Nación con respecto a dichos instrumentos;

Que, asimismo, corresponde disponer lo atinente para la inclusión de dichas informaciones y detalles relativos al cumplimiento de las normas legales o reglamentarias aplicables, en la Memoria anual de este Cuerpo que debe remitir al H. Congreso de la Nación;

Por ello,

ARTICULO 3ª.- El Tribunal de Cuentas de la Nación se pronunciará sobre dicha documentación mediante el informe pertinente que remitirá el Ministerio del ramo, juntamente con la documentación original. El informe definitivo producido por el Tribunal significará dar por cumplida su intervención a los fines establecidos en el artículo 10 del decreto nª 5.883/55.

ARTICULO 4ª.- En la Memoria que el Tribunal de Cuentas de la Nación debe remitir anualmente al H. Congreso de la Nación, sin perjuicio de las informaciones que se disponga insertar especialmente, se consignará:

a) Transcripción de los informes producidos por el Tribunal de Cuentas de la Nación con respecto a la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas de las empresas del Estado;

b) Detalle de las entidades que no presentaran los instrumentos indicados en el plazo indicado por el artículo 10 del decreto nª 5.883/55.-

ARTICULO 5ª.- Las disposiciones de la presente resolución se aplicarán a la documentación que se presente a partir de la fecha y a la que se hallare en trámite ante el Tribunal de Cuentas de la Nación.

ARTICULO 6ª.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a las empresas del Estado y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu Antonio M. Pérez Arango - César Aguirre Legarreta -Secretario-

RESOLUCION Nª 1.195.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 290.-

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - DELEGACIONES - INTERVENCION PREVIA - CONTRATACIONES - COMPRA-VENTA - OBRAS PUBLICAS - DONACIONES

Buenos Aires, 8 de agosto de 1957.-

Vista la necesidad de introducir modificaciones en la competencia asignada a los distintos servicios, con el fin de agilitar el despacho de las actuaciones sometidas a la consideración del Tribunal de Cuentas de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que en tal sentido, la fiscalización que en materia de donaciones, sentencias judiciales y contrataciones directas está a cargo del servicio de Contratos y Trabajos Públicos puede ser transferida, sin que varíe la eficiencia del control actual, a las delegaciones destacadas ante los distintos organismos de la Administración Nacional;

Que esa descentralización, permitirá al citado servicio dar más rápido diligenciamiento a los asuntos que le sean sometidos en consulta y a los que constituyen el restante despacho de su jurisdicción;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1ª.- Las delegaciones destacadas ante los distintos organismos de la Administración Nacional serán competentes para intervenir en todas aquellas actuaciones vinculadas a compras o ventas por cuenta de la Nación, contratos sobre loca-

ciones, arrendamientos y trabajos o suministros que se realicen por licitación pública o por los procedimientos de licitación privada, remate público o contratación directa que contempla el artículo 56 de la ley de contabilidad.

ARTICULO 2º.- Los citados servicios intervendrán también en las licitaciones públicas y privadas y contrataciones directas para la ejecución de obras conforme a las prescripciones de la ley nº 13.064 y en las actuaciones relativas a donaciones y sentencias judiciales.

ARTICULO 3º.- En aquellos casos en que mediase impugnación, ya sea el acto licitario o a la adjudicación proyectada, como así cuando no existieran precedentes aplicables, o en situación dudosa, las delegaciones deberán remitir los antecedentes al Servicio de Contratos y Trabajos Públicos, produciendo la información pertinente que deje expresada su opinión.

Igual procedimiento adoptarán todas las actuaciones vinculadas con compromisos relacionados con inversiones de fondos o a consultas que se le formulen y, cuando estimaran que el acto analizado ha sido dictado en contravención o violación de las disposiciones legales o reglamentarias que fueran de aplicación, seguirán para su remisión las normas que señala la resolución nº 217/57 (D.A. 29).

ARTICULO 4º.- Las delegaciones procederán a comunicar la presente a los organismos ante los que se encuentran destacadas solicitando, a los efectos de la agilitación del trámite, que las pertinentes actuaciones les sean remitidas directamente.

ARTICULO 5º.- Tome conocimiento el Servicio de Contratos y Trabajos Públicos, déjese constancia en la resolución nº 695/57 (D.A. 56) y comuníquese por Digesto Administrativo.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.197.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 291.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - LIBRAMIENTOS - CONTADORES FISCALES

Buenos Aires, 14,de agosto de 1957.-

Vista la resolución nº 297/57 (D.M. 198), y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente incorporar a las normas que establece dicha resolución para el trámite de los libramientos, el plazo dentro del cual los contadores fiscales procederán a su intervención;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 2º de la resolución nº 297/57 (D.M. 198), en la siguiente forma: "Los contadores fiscales darán curso a los libramientos dentro de las 48 horas de ser sometidos a su intervención y los remitirán directamente y con recibo a la oficina de Ejecución de Presupuesto (Imputaciones) de la Contaduría General de la Nación, no admitiéndose -en ningún caso- su trámite oficioso".

ARTICULO 2º.- Déjese constancia en la resolución nº 297/57 (D.M. 198) y comuníquese por Digesto Administrativo.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.251.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 292.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - PRESUPUESTO - EJERCICIO

Buenos Aires, 14 de agosto de 1957.-

Vistas las normas prescriptas por la ley de contabilidad referentes a la clausura del ejercicio financiero y siendo conveniente aclarar, en uso de la facultad que le acuerda el artículo 84 inciso o), sus alcances con respecto a los créditos incluídos dentro del presupuesto general de la Nación,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1ª.- Déjase establecido que las normas contenidas en el artículo 35 de la ley de contabilidad, son de aplicación para los créditos incluídos dentro de las dos secciones del presupuesto general de la administración, conforme a la estructura fijada por el artículo 3 de la ley de contabilidad.
ARTICULO 2ª.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables, y cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nª 1.271.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 293.-

TASAS DE INTERES

Buenos Aires, 31 de julio de 1956.-

Visto lo actuado en el Expediente Nº 6.391/53, del registro del Ministerio de Hacienda y lo proyectado por la Contaduría General de la Nación,

CONSIDERANDO:

Que en forma casi general, en las sentencias judiciales en las que se condena al Estado al pago de intereses, se establece que los mismos lo serán al "estilo de los que cobra el Banco de la Nación Argentina";

Que a fin de evitar su consulta en cada caso, procedimiento seguido actualmente, resulta de conveniencia que el Banco de la Nación Argentina, periódicamente, dé a conocer por intermedio del Boletín Oficial de la Nación, las tasas de interés que cobra para los descuentos en general;

Que esas publicaciones facilitarán igualmente el trámite de aquellas actuaciones en las que administrativamente corresponda el reconocimiento de intereses al "estilo de los que cobra el Banco de la Nación Argentina" para los descuentos en general;

Que atento el reconocimiento de los intereses que se tramitan por mora en el pago de certificados de obras en virtud de lo dispuesto por el Artículo 48º de la Ley Nº 13.064, deberá incluirse en las publicaciones arriba referidas las tasas de interés fijadas por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre certificados de obras;

Que corresponde adoptar las normas de trámite para depositar en el más breve plazo, interrumpiendo así el curso de intereses, los importes que corresponda abonar para el pago de

sentencias judiciales firmes;

Que la reducción de trámites que importa el procedimiento señalado redundará en beneficios de orden económico por los menores importes que en concepto de intereses corresponderá reconocer;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- El Banco de la Nación Argentina dará a conocer por intermedio del Boletín Oficial de la Nación, las tasas de interés que cobra para los descuentos en general y para los descuentos sobre certificados de obras.

ARTICULO 2º.- Inmediatamente despupes de la notificación de las sentencias judiciales firmes, los señores Procuradores, Fiscales o representantes del Estado solicitarán y remitirán a los Ministerios y entidades descentralizadas que corresponda, sin perjuicio de la comunicación que por cuerda separada efectúen a la Procuración del Tesoro, los testimonios pertinentes para su inclusión en orden de pago, consignando los datos necesarios que permitan la verificación de las sumas a depositarse.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educación y Justicia y de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Carlos A. Adrogué
Eugenio A. Blanco.-

DECRETO Nº 13.477.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Buenos Aires, 23 de agosto de 1956.-

CONSIDERANDO:

Que la vigencia de la Constitución Nacional de 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898 declarada por el Gobierno de la Revolución, impone determinar qué normas legales han de regir la administración municipal de la Capital Federal, deformada y subalternizada por la tiranía;

Que dentro del marco constitucional restablecido, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, como lo tiene reiteradamente declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no puede ser confundida con una simple repartición administrativa nacional;

Que por otra parte, y como consta en las directivas básicas que son ley de la Revolución, es propósito fundamental del Gobierno Provisional fortalecer la autonomía municipal y propender a la descentralización administrativa;

Que en consecuencia, y hasta tanto se constituyan autoridades electivas, debe restablecerse el régimen de la Ley Orgánica nª 1.260 y correlativas, para el gobierno y administración del municipio de la Capital de la Nación, con las modificaciones que aconsejen aquellos principios de autonomía y descentralización y las más amplia garantía de los derechos de los administrados;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1ª.- Declárase en vigor el régimen municipal de la

Ciudad de Buenos Aires establecido por la Ley Orgánica Nª 1.260 y sus complementarias.

ARTICULO 2ª.- Hasta tanto se constituya el Consejo Deliberante, el gobierno municipal de la Ciudad de Buenos Aires estará a cargo del Intendente Municipal quien ejercerá las funciones que corresponden a los Departamentos Ejecutivo y Deliberante, con excepción de los siguientes:

a) Aprobar y modificar el presupuesto general de gastos;

b) Aprobar y modificar la ordenanza general impositiva;

c) Contratar empréstitos;

d) Dictar ordenanzas y disposiciones generales sobre faltas municipales;

e) Examinar, aprobar o rechazar las cuentas de inversión del presupuesto municipal;

f) Otorgar concesiones de servicios públicos, cualquiera sea su clase.

ARTICULO 3ª.- Las funciones mencionadas en los incisos a) a f) del artículo anterior corresponden exclusivamente al Poder Ejecutivo, quien las ejercerá en los casos de los incisos a), b), c) y e) por intermedio del Ministerio de Hacienda y con su único refrendo; en el caso del inciso d) por intermedio del Ministerio del Interior, con su único refrendo y en el inciso f), en Acuerdo General de Ministros.

ARTICULO 4ª.- De las Resoluciones del Intendente Municipal en asuntos de carácter contencioso administrativo corresponderá recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital, conforme a lo previsto en el Artículo 80, inciso 3 de la Ley Nª 1.893. A dicho Tribunal corresponderá conocer, igualmente, de los recursos interpuestos contra resoluciones del Intendente Municipal que se hallan actualmente en trámite ante el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 5ª.- Derógase el Decreto Nª 17.687/54 modificado por el Decreto Nª 1.760/55 y toda otra disposición que se oponga a la presente.

ARTICULO 6ª.- El presente decreto-ley será refrendado por el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Ejército, Marina, Aeronáutica, Interior, Hacienda y Educación y Justicia.

ARTICULO 7ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Laureano Landaburu - Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung - Julio C. Krause - Carlos A. Adrogué - Eugenio A. Blanco.-

DECRETO-LEY Nª 15.374.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 295.-

NOMBRAMIENTOS - REINCORPORACIONES

"..... en nuestra práctica administrativa no "pueden dictarse decretos de nombramientos que acuerdan rein "corporaciones con goce de sueldo por los períodos de cesan- "tía.

"Un decreto con semejante efecto, por cuanto importa el ejer "cicio de una facultad discrecional, arbitraria por el Poder "Ejecutivo, contraria a la ley de gastos y de contabilidad de "la Nación, sólo sería un acto administrativo viciado de nu- "lidad absoluta y por tanto inexistente".-

FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL 20 DE MAYO DE 1942

GACETA DEL FORO - TOMO 158 - PAG. 336.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 296.-

COMPRA-VENTA - REMATE PUBLICO - LEY DE CONTABILIDAD

Expediente Nº 31.025/57.-
Contratos y Trab.Públicos.-

//—nos Aires, 22 de julio de 1957.-

La Dirección General de Suministros del Estado requiere en las presentes actuaciones el asesoramiento del Tribunal de Cuentas de la Nación referente a sus facultades para realizar por sí remates públicos en los casos de elementos que pone en venta.

El artículo 56, inciso 2) de la ley de contabilidad establece que podrán contratarse directamente en remate público por intermedio de las oficinas del Estado Nacional, Provincial o Municipal especializadas en la materia, la venta de bienes de acuerdo con las reglamentaciones jurisdiccionales que se dicten al efecto.

Es decir, que la realización de las ventas por remate público deben ser efectuadas por intermedio de las oficinas del Estado Nacional, Provincial o Municipal especializadas en la materia y esa especialización se adquiere mediante una organización adecuada que les permita afrontar debidamente todo lo relacionada con ese sistema de ventas, tal el caso del Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, en materia de muebles y el Banco Hipotecario Nacional en materia de inmuebles.

Es indudable que esa cláusula legal no se refiere a las oficinas especializadas que existían en el momento de su sanción exclusivamente, lo que permitiría sostener que no pueden crearse otras nuevas. Por el contrario, una cabal interpretación de este artículo nos lleva a la conclusión de que

si el Poder Ejecutivo se encuentra frente a este problema y tiene que afrontar periódica y permanentemente esta clase de ventas puede por vía reglamentaria acordar a una nueva dependencia las facultades necesarias para cumplirlas, si considera que los organismos u oficinas existentes no son suficientes o adecuados.

En particular, si la Dirección General de Suministros del Estado ponderando la frecuencia, periodicidad y características de las ventas que deben efectuarse por su intermedio, estima necesario hacerlo, debería proyectar una reglamentación orgánica del servicio de ventas para someterla a la consideración del Poder Ejecutivo.

Remítase al Ministerio de Hacienda, dando a la presente carácter de atenta nota de envío.-

Fdo. DAMIAN FIGUEROA

Presidente del
Tribunal de Cuentas de la Nación

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
Biblioteca General

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 297.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - LIBRAMIENTOS - PAGOS - CONTADORES FISCALES

Buenos Aires, 26 de agosto de 1957.-

Vista la necesidad de fijar normas a las que deberán ajustar su intervención las representaciones del Tribunal de Cuentas de la Nación, en materia de devolución de fondos de reparos y depósitos de garantía, y

CONSIDERANDO:

Que el movimiento de tales fondos y depósitos puede registrarse en cuentas de terceros ya que el Estado los retiene o percibe en carácter de depositario;

Que los egresos, a su vez, pueden disponerse mediante libramientos contra dichas cuentas, los que deberán contener los requisitos del artículo 33 de la ley de contabilidad y ser tramitados siguiendo las normas pertinentes que señala la misma;

Por todo ello, y en uso de la facultad que le acuerda el inciso o), artículo 84 de la ley de contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los Contadores Fiscales, a cargo de las representaciones del Tribunal de Cuentas de la Nación, darán curso a los libramientos que se emitan en virtud de los considerandos de la presente resolución, cuando se ajusten al modelo anexo a la misma.

ARTICULO 2º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y, cumplido, archívese.-

RES.Nº 1.385.- DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J.Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Peréz Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

Anexo . . . . . .

LIBRAMIENTO Nª .....

A la Tesorería General de la Nación:

Páguese a .....
.....
la suma de m$n. .....
.....
por igual / parte del valor retenido en concepto de garantía en:
libramiento nª ..... orden de disposición nª ..... ejercicio .....
orden de pago nª ..... parcial ..... ejercicio .....
El presente pago ha sido dispuesto en liquidación nª .....
de conformidad con los antecedentes acumulados en el expediente nª .....

Lugar y fecha: .....

Firmas:

Contador Tesorero Jefe del servicio administrac.

Intervención de la delegación del Tribunal de Cuentas de la Nación:

Entró: (sello fechador) Salió: (sello fechador)

Se ha verificado la procedencia del pago precedente y se ha comprobado el saldo acreedor en la cuenta del titular, no teniendo observación que formular a la liquidación nª ..... expediente nª .....

Observaciones .....
.....

Fecha .....

.....
Firma del Contador Fiscal

Intervención de la Contaduría General de la Nación:

Entró: (Sello fechador) Salió: (sello fechador)

Se afecta la cuenta "Valores retenidos en garantía de obras y suministros", subcuenta .....
en la suma de m$n. .....
.....

Departamento de Contabilidad Financiera, ...

Se ha registrado el pago de la suma de m$n. .....
.....
.....

Movimiento de Fondos, ...
Fecha

Intervención de la Tesorería General de la Nación:

Entró: (Sello fechador) Salió: (Sello Fechado

RECIBO OFICIAL

Recibí de la Tesorería General de la Nación la suma de m$n. .....
.....
.....
en concepto de pago, de acuerdo con el detalle del presente libramiento.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 298.-

VIATICOS

Expediente Nª 9.398/56.-

//—nos Aires, diciembre 17 de 1956.-

Vuelva a la Junta Nacional de Granos para manifestarle que la aplicación de las disposiciones del Decreto Nª 18.989/56, en cuanto a la fijación de viáticos, debe sujetarse al concepto sueldo básico según categoría de presupuesto, conforme con lo determinado expresamente en el Artículo 2ª, acápite I, del pronunciamiento aludido.

La disposición contenida en el Decreto Nª 8.329/56 no sería de aplicación, toda vez que ha quedado sin efecto por virtud de lo establecido en el citado Artículo 2ª y derogado a su vez, tácitamente, por lo prescripto en el Artículo 14ª del nombrado Decreto Nª 18.989/56.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. LUIS PEDRO PICARDO
Director General de Finanzas

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 299.-

AUTOMOTORES

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1956.-

Visto que el artículo 4ª del Decreto Nª 2.235 de fecha 1ª de febrero de 1950 prescribe que todo automotor que entra al país, a partir del modelo 1948, ha de contar con un certificado extendido por la respectiva aduana despachante en donde conste que se ha cumplido con todas la formalidades legales y reglamentarias exigidas en dicha ocasión; atento a las consideraciones que sobre el particular formula la Dirección General de Suministros del Estado, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada disposición legal tiene por objeto evitar la radicación en el territorio nacional de vehículos automotores que hubieren entrado eludiendo las disposiciones legales y reglamentarias dictadas para la importación por particulares o concesionarios, de vehículos para su uso en el país;

Que la tenencia por parte del Estado de automotores a su servicio desde la introducción al país y su patentamiento, cumpliendo con la presentación del certificado aduanero antes mencionado, asegura la legitimidad de su procedencia;

Que como la presentación del certificado en cuestión revista carácter de imprescindible a los efectos de obtener la patente, ello puede incidir en el retraimiento de los compradores de vehículos pertenecientes al Estado en el supuesto de no disponer de los antecedentes requeridos;

Que ante la posibilidad de tal contingencia, la Dirección General de Suministros del Estado a fin de asegurar el éxito de las ventas de automotores que realiza y con el objeto de obtener una mayor rapidez en la operación, estima conveniente se

exima del cumplimiento de tal requisito, permitiéndose el patentamiento de vehículos que salen del patrimonio del Estado con la presentación de un certificado que extendería al efecto la Repartición vendedora, consignando el número de la orden de venta y características del automotor adjudicado;

Por tanto,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Exceptúase a los automotores de propiedad del Estado que sean vendidos por las diversas Reparticiones del mismo, del requisito exigido por el artículo 4º del Decreto Nº 2.235 del 1º de febrero de 1950, pudiendo ser patentados por los compradores con la presentación de un certificado que al efecto extenderán las dependencias vendedoras, consignando todos los antecedentes y características del vehículo enajenado.

ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda e Interior.

ARTICULO 3º.- Tómese nota, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de Hacienda de la Nación (Dirección General de Suministros del Estado) a sus efectos.-

ARAMBURU - Eugenio A. Blanco - Laureano Landaburu.-

DECRETO Nº 21.754.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 300.-

BANCOS (Escalafones)

Expediente Nº 845.880 - 1956.-

///—nos Aires, diciembre 11 de 1956.-

Vuelva al Banco Hipotecario Nacional para manifestarle que, a los efectos de la aplicación del Decreto Nº 15.797/56, deben ser reconocidos los años de prestación de servicios de aquellos agentes que se hayan desempeñado como empleados de organismos particulares absorbidos por instituciones bancarias nacionales. Sobre el particular cabe señalar que, del texto del mencionado decreto, no surge que solamente serán reconocidos los de aquellos que estaban prestando servicio en el momento de la liquidación de dichos organismos; en consecuencia, debe considerárseles a los recurrentes la antigüedad que acreditan en la Sociedad "O.P.A.L." de Crédito Recíproco.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. EUGENIO A. BLANCO
Ministro de Hacienda de la Nación

RESOLUCION Nº 240.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 301.-

BANCOS (Escalafones)

Expediente Nª 845.881 - 1956.-

///—nos Aires, diciembre 12 de 1956.-

Vuelva al Banco Hipotecario Nacional para manifestarle que, a los agentes que en calidad de "adscripto" se hayan desempeña do en la actividad bancaria nacional para pasar luego, termina da dicha adscripción, al plantel permanente de una institución nacional integrante del sistema Bancario Oficial, debe computársele la antigüedad que acrediten como tal.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19ª del De creto nª 15.797/56, dése a la presente carácter de resolución aclaratoria, sirviendo la misma de atenta nota de envío.-

Fdo. EUGENIO A. BLANCO
Ministro de Hacienda de la Nación

RESOLUCION Nª 248.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 302.-

BANCOS (Escalafones)

Expediente Nª 8.286 - 1956.-

///—nos Aires, diciembre 18 de 1956.-

Vuelva al Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias (en liquidación) para manifestarle que este Departamento en uso de la facultad de interpretación que le acuerda el Artículo 19ª del Decreto Nª 15.797/56, entiende que a ese organismo no le corresponde la aplicación del régimen de retribuciones fijado por el Decreto Nª 15.797/56 modificado por el Nª 17.909/56, pues el mismo comprende solamente al personal del

Banco Central de la República Argentina

Banco de la Nación Argentina

Banco Industrial de la República Argentina

Banco Hipotecario Nacional, y

Caja Nacional de Ahorro Postal

En consecuencia tal criterio se aparta del alcance del ya mencionado decreto.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. EUGENIO A. BLANCO
Ministro de Hacienda de la Nación

RESOLUCION Nª 251.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 303.-

VIATICOS

Expediente Nª 9.292 - 1956.-

///—nos Aires, diciembre 27 de 1956.-

Vuelva al Ministerio del Interior para manifestarle con respecto a la consulta sobre aplicación del nuevo régimen de viáticos y otras remuneraciones dispuestas por Decreto Nª 18.989 del 16 de octubre ppdo., que este Ministerio interpretando las disposiciones del mismo, entiende que para los casos de agentes regidos por sistemas más beneficiosos se mantendrán los mismos (Artículo 10ª - Decreto Nª 18.989/56), y para los restantes corresponde la aplicación del nuevo régimen aun a expensas de invalidar parcialmente la disposición que aprobaba escalas distintas, algunos superiores (que ahora se mantienen) y otras menores que por Decreto Nª 18.989/56 son mejoradas.

Con respecto al caso del Artículo 9ª del Decreto Nª 996/55 que fijó un viático único, considera que, sobre la base de la estimación que se tuvo en cuenta para asignar anteriormente esa cantidad, se proyecte por vía de modificación al citado artículo, un decreto donde se fije el nuevo importe que reemplazaría al vigente.

Finalmente y con referencia a declarar de no aplicación disposiciones que regulen el otorgamiento de viáticos y/o restringen la habilitación de horarios por servicios extraordinarios, tal como lo establecen los incisos g) y h) del Artículo 2ª y b) y c) del Artículo 7ª del Decreto Nª 18.989/56 antes mencionado, debe aclararse que las mismas fueron incluídas para reglamentar tareas comunes y no para casos como los que son motivos de consulta.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

RESOLUCION Nª 266.- Fdo. EUGENIO A.BLANCO

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 304.-

INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, 22 de agosto de 1956.-

Visto el Expediente Nª 150.352/54 de la Contaduría General de la Nación, relacionado con la liquidación de gastos de representación que en su carácter de Representante General en Europa del Instituto Nacional de Carnes, con sede en Londres, corresponde al ex-Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en Gran Bretaña, D. Domingo A. Derisi, y

Atento a que las mencionadas funciones fueron desempeñadas con carácter honorario por lo que -a juicio de la Contaduría General de la Nación- no existe incompatibilidad entre el ejercicio de las mismas y el cargo diplomático que investía el causante, y que el Procurador del Tesoro de la Nación se ha expedido en igual sentido al dictaminar que la percepción de gastos de representación no configura una remuneración de las prohibidas por el artículo 55 de la Ley 12.951.

Por todo ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Establecer que la incompatibilidad a que se refiere el artículo 55 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación entre la remuneración que perciben los funcionarios diplomáticos con cualquier otro sueldo, jubilación o retiro, ya sea nacional, provincial o comunal no alcanza a los gastos de representación que les asignen las reparticiones oficiales con motivo de funciones especiales que les encomienden y que sean desempeñadas honorariamente.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial, publíquese y archívese.-

ARAMBURU - Luis A. Podestá Costa

DECRETO Nª 15.315.-

Boletín Nº 305.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - ASESORAMIENTO

Buenos Aires, 29 de agosto de 1957.-

Visto lo dispuesto por el artículo 84, inc. p) de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario reglamentar el procedimiento a que se ha de ajustar dicho asesoramiento;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los servicios centrales del Tribunal de Cuentas intervendrán directamente y proyectarán despacho en los pedidos de asesoramiento que formulen los señores ministros del Poder Ejecutivo y los señores secretarios de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores, Corte Suprema de Justicia y Presidencia de la Nación.

ARTICULO 2º.- Los asesoramientos requeridos por otras autoridades que no sean las indicadas en el artículo anterior serán evacuadas directamente por las respectivas representaciones del Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 3º.- Deberá requerirse, en ambos casos, el envío de la documentación e informes que sean necesarios para producir despacho y cuando se trate de un proyecto de decreto o resolución dos copias del mismo para archivo del respectivo servicio central o representación del Tribunal de Cuentas, según corresponde.

ARTICULO 4º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos servicios administrativos y archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.414.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 306.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - JUICIOS DE RESPONSABILIDAD - CAUSAS FISCALES

Buenos Aires, 30 de agosto de 1957.-

Visto las disposiciones del artículo 116 y siguientes de la ley de contabilidad; y

CONSIDERANDO:

Que es facultad privativa del Tribunal de Cuentas de la Nación la instauración de juicio de responsabilidad en las circunstancias y condiciones que dicha ley determina.

Que constituye una obligación de los distintos organismos y reparticiones de la Administración, establecida expresamente en el artículo 119, proceder a la instrucción de sumario, y su posterior elevación a este Tribunal para su pronunciamiento definitivo en cuanto a las responsabilidades administrativo-pecuniarias que pudiere alcanzar a agentes del Estado, por hechos, actos u omisiones, capaces de generarlas.

Que, habiéndose centralizado en los servicios de Sumarios y Causas Fiscales el despacho en la materia, y siendo conveniente adoptar, en el orden interno, las medidas que aseguren el estricto cumplimiento de la ley;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- A los fines expuestos en los considerandos de la presente resolución, las delegaciones fiscales adoptarán el siguiente procedimiento:

a) Cuando le sean cursadas actuaciones en las cuales se dispongan liquidaciones de gastos o autorizaciones por cualquier concepto, en las que hubiere recaído decreto del Poder Ejecutivo o resolución de autoridad competente que establez-

can la procedencia de la intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación a los efectos del artículo 116 y concordantes de la Ley de Contabilidad o, en su defecto, exista constancia que el Tribunal se ha expedido, previamente, en igual sentido, procederán a la intervención reglamentaria de su competencia, solicitando la oportuna devolución de los expedientes que correspondan;

b) Cumplida la gestión anterior lo harán saber al servicio de Sumarios, acompañando copia autenticada de la información respectiva;

c) Una vez en su poder las referidas actuaciones, procederán a elevarlas a este Tribunal, por intermedio del servicio de Sumarios, haciendo constar el número de expediente asignado a la comunicación anteriormente mencionada;

d) La tramitación de la comunicación y elevación de antecedentes aludidos en a) y b), respectivamente, se cumplirá con intervención de la Mesa General de Entradas y Salidas;

e) Cuando en el desarrollo ordinario de sus tareas las delegaciones fiscales tengan conocimiento de situaciones comprendidas en el art. 116 y siguientes de la Ley de Contabilidad observarán, igualmente, el procedimiento que queda establecido.

ARTICULO 2º.- Los señores contadores fiscales a cargo de servicios de auditorías o despacho de cuentas observarán en la esfera de su cometido lo establecido por la presente resolución.

ARTICULO 3º.- El servicio de Sumarios, al obtener las actuaciones de que se trata, procederá a su registro y a proyectar despacho.

ARTICULO 4º.- Comuníquese a quienes corresponda, dése al Digesto Administrativo y archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J.Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan C. Pastene -Secretario-

RES. 1.428 (ms)

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 307.-

FONDO PERMANENTE

Buenos Aires, 27 de agosto de 1957.-

Visto la necesidad de instituir en distintos organismos del Ministerio de Hacienda, el régimen de "fondo permanente" a que se refiere el artículo 48ª de la Ley de Contabilidad aprobada por Decreto-Ley número 23.354/56, y

CONSIDERANDO:

Que el Tribunal de Cuentas de la Nación por Resolución número 1.139 de fecha 1ª de agosto del corriente año, ha establecido las normas de procedimiento a que debe ajustarse su funcionamiento;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1ª.- Institúyese un "fondo permanente" en las dependencias del Ministerio de Hacienda que se detallan a continuación y por los montos que en cada caso se indica:

	m$n.
Dirección General de Contabilidad y Administración	500.000
Dirección General Impositiva	500.000
Dirección General de Suministros del Estado	250.000
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos	36.000

ARTICULO 2ª.- El "fondo permanente" fijado por el artículo anterior, ajustará su funcionamiento a las siguientes normas:

a) Se constituirá mediante liquidación que se imputará a una cuenta transitoria denominada "Anticipos - Artículo 48ª - Ley de Contabilidad";

b) A los efectos que prevé el artículo 44ª de la Ley de Contabilidad, las reparticiones en cuya jurisdicción se implanta el "fondo permanente" y/o el Delegado del Tribunal de Cuentas de la Nación, gestionarán ante el Ministerio de Hacienda la conveniencia de su reducción en los casos en que conforme a sus necesidades se mantenga sin aplicación;

c) Siempre que se haya cumplimentado lo dispuesto en el punto d) del presente, se aplicará a la atención de pagos de gastos de cualquier naturaleza, cuya urgencia impone su cancelación con anterioridad a la emisión del libramiento respectivo;

d) En todos los casos la tramitación de cada gasto deberá ajustarse a los aspectos legales y reglamentarios que correspondan;

e) Las sumas abonadas con afectación al "fondo permanente", se reintegrarán en la oportunidad de percibirse los fondos correspondientes al libramiento de entrega respectivo.

ARTICULO 3ª.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

ARTICULO 4ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda de la Nación a sus efectos.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nª 10.077.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 308.-

LEY DE CONTABILIDAD - COMPRA-VENTA - CONTRATACIONES

Memorándum nª 501 - 1957.-
Cde.proyec.dec.10.462 (prov.)

M E M O R A N D U M

(Para la Presidencia de la Nación)

Se solicita opinión del Tribunal de Cuentas de la Nación en el asunto de que trata el adjunto proyecto de decreto, según el cual se dejaría establecido que el artículo 36ª del decreto-ley nª 23.573 del 31 de diciembre de 1956, no enerva las facultades que, con carácter de excepción otorga el decreto nª 22.657, del 20 de diciembre de 1956, a la Dirección General de Cultura dependiente del Ministerio de Educación y Justicia.

El artículo 36ª del decreto-ley nª 23.573 del 31 de diciembre de 1956 establece que no podrá disponerse en la Administración Nacional la contratación de agentes, cuando los mismos sean destinados a cumplir funciones o a realizar tareas comunes y permanentes que deban atenderse con cargos estables de prespuesto.

Dicha disposición legal dispone en su artículo 40ª modificado por el decreto-ley nª 3.891 del 15 de abril de 1957, que las excepciones a lo dispuesto en el artículo 36ª sólo podrán ser acordadas, frente a necesidades ineludibles de los servicios debidamente documentadas, por decreto del Poder Ejecutivo dictado con intervención del Ministerio de Hacienda.

El decreto nª 22.657 del 20 de diciembre de 1956, dictado durante la vigencia del decreto-ley nª 7.104 del 28 de diciembre de 1955, que fuera suplantado por el decreto-ley nª 23.573/56, faculta a la Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación y Justicia para contratar "ad-referendum" del Poder

Ejecutivo los servicios profesionales, de artistas, conferencistas, especialistas y otros similares, que sean necesarios para la atención de los planes artísticos a su cargo, estableciendo en su artículo 2º que elevará mensualmente para su aprobación por el Poder Ejecutivo las contrataciones que efectúe de acuerdo con la autorización referida.

Dicho decreto nº 22.657/56 argumenta en sus considerandos la excepción que establecía el artículo 47º, Inciso d) de la ley nº 12.961, vigente en la época en que fuera dictado, según el cual podría efectuarse la contratación directa de técnicos profesionales de reconocida capacidad.

La ley de contabilidad que suplante a las prescripciones de la ley nº 12.961, establece en su artículo 56 que podrán contratarse las obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución debe confiarse a empresas, personas o artistas especializadas.

El Tribunal de Cuentas de la Nación en el Memorándum nº 112/57 se expidió con fecha 14 de marzo de 1957 manifestando que la aludida prescripción legal no prevé la contratación de personal sino las obras que deben ser ejecutadas por empresas, personas o artistas especializadas y que tales empresas, personas o artistas no deben actuar en relación de dependencia sino ejecutar el trabajo bajo su exclusiva responsabilidad.

Concordantemente con el criterio sustentado en el Memorándum nº 112/57, por Providencia nº 511/57, el Tribunal de Cuentas de la Nación igualmente se expidió en tal sentido, frente a un proyecto de contratación de actores, libretistas, locutores, sonidistas, relatores, maquilladores, traspuntes y apuntadores para ser destinados al Departamento de Radioenseñanza y Cinematografía Escolar del Ministerio de Educación y Justicia, es decir, una situación similar a la de que tratan estos actuados.

Dijo el Tribunal de Cuentas de la Nación en esa oportunidad que si las contrataciones fueran concretadas para que los trabajos se efectuen sin relación de dependencia no existen in

convenientes en encuadrarlos en el artículo 56, inciso 3ª)apartado f) de la ley de contabilidad.

La reglamentación del capítulo VI - De las contrataciones- de la ley de contabilidad, aprobada por el decreto nª 9.400 del 12 de agosto de 1957, establece en su artículo 56, inciso 5) que las contraciones directas autorizadas por el apartado f) inciso 3ª, deberán fundamentarse con antecedentes que acrediten la capacidad científica, técnica o artísticas de las empresas, personas o artistas especializados a quienes se encomienda la ejecución de la obra o trabajo y que dichas contrataciones deberán establecer la responsabilidad propia y exclusiva del contratado, quien actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado.

De manera entonces que en función de las disposiciones arriba correlacionadas, el Tribunal de Cuentas de la Nación pone de manifiesto que en cuanto a la contratación de artistas, conferencistas y otras especialidades similares, no resulta necesario la suscripción del proyecto de decreto sobre el que se le pide opinión, ya que de efectuarse en las condiciones arriba indicadas, su autorización y aprobación puede ser resuelta según sea su monto por las autoridades que establecen los artículos 57 y 58 de la ley de contabilidad.

Es de hacer notar que por las razones expuestas, en los contratos pertinentes no corresponderá establecer en manera alguna cláusulas que pongan a cargo de la Administración aportes jubilatorios, sueldo anual complementario y otras bonificaciones o beneficios similares al que se acuerde al personal del Estado, dado que en tal supuesto,dejaría de ser un contratado para la ejecución de un trabajo u obra determinada encuadrado en el artículo 56 de la ley de contabilidad, para convertirse en una contratación de personal -asimilable a un nombramiento- y como tal comprendida entre las prohibiciones del artículo 36ª del decreto-ley nª 23.573/56, cuya resolución, corresponde ser motivo de un pronunciamiento expreso del Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido

en el artículo 40º del mismo.-

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, 29 de agosto de 1957.-

Fdo. DAMIAN FIGUEROA
Presidente del
Tribunal de Cuentas de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 309.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - EJERCICIO - PRESUPUESTO

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1957.-

Visto la necesidad de dictar normas para el cierre del ejercicio del presupuesto, en función de lo determinado por el artículo 35 de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que dicho cierre se produce por imperio de la expresada ley al 31 de octubre de cada año, por lo que se hace necesario establecer un plazo para finiquitar y registrar las operaciones propias de dicho cierre;

Que tales operaciones consisten fundamentalmente en:

a) la determinación de los compromisos legales;

b) la determinación de las economías de inversión, esto es la diferencia entre lo autorizado a gastar y lo realmente comprometido;

c) la determinación de los residuos pasivos, esto es la diferencia entre lo comprometido y lo librado, y

d) la devolución de las sumas sin aplicación a la Tesorería General de la Nación;

Que la fijación de dicho plazo servirá, además, para que los respectivos servicios administrativos, atendiendo a las modalidades propias de cada uno, dispongan lo pertinente para que la información correspondiente llegue a tiempo a la Contaduría General de la Nación;

Que es urgente dictar normas que hagan al objeto señalado, hasta tanto el Poder Ejecutivo reglamente la ley de contabilidad.

Por todo ello y sin perjuicio de las normas que dicte la Contaduría General de la Nación para las registraciones contables que sean del caso, y en uso de las facultades que le otorga el artículo 84, inciso c) de la citada ley,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Las operaciones de cierre de ejercicio a que se refieren los considerandos de la presente resolución y la documentación e información pertinentes, deberán hallarse concluídas y en poder de la Contaduría General de la Nación a más tardar el último día laborable del mes de noviembre de cada año.
ARTICULO 2º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos servicios administrativos y archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J.Tarelli
José M. Fernández Fariña - Antonio M. Pérez Arango - Eusebio Villar (Voc. acc.) - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.484.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 310.-

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL

Buenos Aires, 8 de octubre de 1955.-

Visto la necesidad de afianzar el integral desenvolvimiento de la acción social financiada y realizada por el Estado, y

CONSIDERANDO:

Que es deber del Estado asegurar no sólo la continuidad de los servicios de acción social prestados hasta el presente, sino que los mismos lleguen a todos los sectores necesitados de la población, de manera tal que sus beneficios les alcancen sin distingos ni preferencias;

Que es menester perfeccionar su organización donde sea necesario a fin de vigorizar su rendimiento.

Que para la mayor eficacia de la tarea a desarrollar, se hace necesario coordinar la acción de la institución con las obras sociales de los Ministerios;

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1ª.- Créase el Instituto Nacional de Acción Social.
ARTICULO 2ª.- La Institución creada el 19 de junio de 1948 y reconocida como persona jurídica por Decreto Nª 20.564 de fecha julio 8 de 1948, pasa a integrar con todo su personal y patrimonio el Organismo creado.
ARTICULO 3ª.- Nómbrase Director General del Instituto Nacional de Acción Social con amplias facultades de intervención y de administración, al señor Vicealmirante don Walter A. von Rentzell.
ARTICULO 4ª.- Para el cumplimiento de los fines del Instituto

y el mantenimiento de los actuales servicios que se prestan al público, el Director General podrá requerir la amplia colaboración de todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales.

ARTICULO 5º.- El Instituto que se crea por el presente, dependerá directamente del Excmo. señor Presidente Provisional de la Nación.

ARTICULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior y Justicia, Asistencia Social y Salud Pública, Marina y de Hacienda e interino de Finanzas.

ARTICULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

LONARDI - Eduardo B. Busso - Ernesto A. Rottjer - Teodoro Hartung - Eugenio J. Folcini.-

DECRETO Nº 556.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 311.-

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL

Buenos Aires, 23 de enero de 1956.-

Visto la conveniencia de adoptar las medidas conducentes al logro de la mayor eficacia en la acción social del Estado, y

CONSIDERANDO:

La complejidad de los organismos y tareas que integran el Instituto Nacional de Acción Social y la necesidad de su simplificación, así como las ventajas de descentralizar para su mejor prestación los servicios que se prestan,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1ª.- Desígnase una Comisión presidida por el Ingeniero D. Teodoro Carlos Argerich e integrada por las señoras Da. María Delfina Matilde Salomé Caprile de Ezcurra y Da. Lilian Emma Ahurie de Materi y los doctores D. Abraham del Azar Suaya, D. Eduardo Bonneu y Carlos Velasco Suárez, para que procedan con las más amplias facultades de intervención y administración a asumir la dirección de dicho Instituto.
ARTICULO 2ª.- La Comisión nombrada propondrá al Poder Ejecutivo, en el plazo de noventa días, las medidas que crea convenientes a los fines del cumplimiento de este Decreto-Ley y, a los efectos de la descentralización y mejor prestación de los servicios, contará asimismo con las facultades acordadas por el Decreto-Ley Nª 556, de fecha 8 de octubre de 1955, cuyas disposiciones, en cuanto no se opongan al presente, continuan en vigencia.

ARTICULO 3º.- El presente Decreto-Ley será refrendado por el señor Vicepresidente de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Ejército, Marina, Aeronáutica, Interior, Hacienda y Asistencia Social y Salud Pública.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Eduardo B.Busso Francisco Martínez - Eugenio A. Blanco - Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung - Julio C. Krause.-

DECRETO-LEY Nº 959.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 312.-

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL

Buenos Aires, 29 de junio de 1956.-

Visto los Decretos-Leyes números 556/55, 959/56, 4.067/56 y 4.817/56 relacionados con la creación y funcionamiento del Instituto Nacional de Acción Social, y

CONSIDERANDO:

Que la nueva estructura orgánico-funcional de la Presidencia de la Nación acordada por el Decreto-Ley número 10.351 del 8 de junio de 1956, determina la necesidad inmediata de acordar jurisdicción ministerial al referido instituto;

Que la circunstancia de resultar de vital importancia estudiar y analizar exhaustivamente la situación patrimonial y el estado económico financiero del organismo de que se trata a los fines de su disolución en el más breve plazo, hace prevalente la jurisdicción del Ministerio de Hacienda sobre el mismo, en virtud de que tal cometido le compete específicamente;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- El Instituto Nacional de Acción Social creado por el Decreto-Ley Nº 556/55 pasará a depender del Ministerio de Hacienda de la Nación, a los fines de su disolución en el más breve lapso.

ARTICULO 2º.- El presente decreto-ley será refrendado por el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los seño

res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, de Interior, de Ejército, de Marina y de Aeronáutica.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Laureano Landaburu - Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung - Julio C. Krause - Eugenio A. Blanco.-

DECRETO - LEY Nº 11.547.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 313.-

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL

Buenos Aires, 4 de julio de 1956.-

Visto el informe presentado por la Comisión Interventora y Administradora del Instituto Nacional de Acción Social, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto-Ley nº 959/56 sobre descentralización de los servicios a cargo de dicho Instituto, así como los demás antecedentes vinculados a la materia en cuestión, de los que resulta:

Que por los Decretos-Leyes números 556/56, 959/56, 4.067/56 y 4.817/56 se adoptaron las medidas necesarias con el propósito de regularizar el funcionamiento de los servicios asistenciales que se prestaban en realidad por el Estado, pero en forma enteramente anómala, a través de la Fundación que lleva el nombre de la esposa del ex mandatario;

Que con el fin de no entorpecer el desempeño de la referida Comisión y en vista de la necesidad de fijar transitoriamente el régimen legal de funcionamiento, administración y fiscalización de la entidad, hasta que esa Comisión cumpliera su cometido, se mantuvieron en vigencia el estatuto y los reglamentos que regían a aquella asociación, aclarándose que todo acto relativo a los inmuebles debería ser previamente sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda de la Nación;

Que corresponde resolver en definitiva sobre la forma en que deberán cumplirse en lo sucesivo las actividades hoy centralizadas en el Instituto Nacional de Acción Social, a los efectos de encauzar la acción social del Estado dentro de las finalidades y principios enunciados en el programa de gobierno de la Revolución Libertadora, puesto de manifesto el 7 de diciembre de 1955, y

CONSIDERANDO:

Que la citada Fundación gozaba de personería jurídica, concedida primero por el Decreto Nª 20.564/48 y luego por la Ley número 13.992;

Que el Decreto Nª 20.564/48 se fundó, entre otras consideraciones, en que la entidad "se inicia con patrimonio propio suficiente para garantizar el cumplimiento de los altos fines que la inspiran", afirmación cuya falsedad queda en evidencia por la mera confrontación de tales fines (prestar ayuda pecuniaria o en especie, facilitar elementos de trabajo, otorgar becas para estudios universitarios y especializados, construir viviendas y establecimientos educacionales, hospitalarios, recreativos o de descanso, benéficos de toda índole, etc.) y el aludido patrimonio inicial, sólo constituído por una donación de diez mil pesos moneda nacional, en abierta contradicción con la presuntuosa magnitud de aquellos objetivos;

Que por la Ley Nª 13.992 se declaró que las funciones de la Fundación eran de "orden público y de interés nacional"; se le encomendó la atención de los fines sociales enumerados en el artículo 49 del Decreto Nª 33.302/45; se ratificó la aprobación de su estatuto; se le concedió nuevamente personería jurídica, y se estableció expresamente que continuaría funcionando en su carácter de entidad de derecho privado y desenvolvería su acción en forma independiente del Estado;

Que esta delegación del poder público y su atribución a una asociación de derecho privado efectuada en los términos de la Ley Nª 13.992, no tiene precedente en la historia institucional del país, y sólo halla su explicación en el evidente propósito de permitir a quienes gobernaban a la Fundación -el ex mandatario y su esposa- el manejo discrecional de los cuantiosos recursos correspondientes al Estado que la entidad acumularía, utilizándolos con apariencia de ayuda social en actos de favoritismo y de corrupción política que constituyen la negación misma de todo sano concepto de justicia social y son típicos de los regímenes totalitarios;

Que es así como, en efecto, la Fundación gozó en forma continua y desmensurada del favor oficial, que el Estado negaba a sus propias instituciones, y recibió donaciones de toda clase, en dinero, en bienes muebles e inmuebles, en marcaderías, en el producido de impuestos y multas establecidos con ese solo fin, en las más variadas contribuciones forzosas que se pudiera imaginar y en muchas otras formas;

Que por el artículo 11 de la Ley Nª 13.992 se facultó a los organismos del Estado para que contribuyeran directamente en efectivo o en especie o tomarán a su cargo la habilitación y sostenimiento, total o parcial, de los establecimientos asistenciales de la Fundación, quedando ratificada asimismo cualquier contribución en efectivo o en especie o prestación de servicios que se hubiera efectuado con iguales propósitos. "En los casos -agrega tal disposición- que los créditos asignados para esos fines a los organismos correspondientes resulten insuficientes, queda autorizado el Poder Ejecutivo a incorporar las partidas indispensables para el cumplimiento de la presente ley, a cuyo efecto podrá hacer uso de los medios financieros que estime más conveniente";

Que con lo expuesto se evidencia que la Fundación no ha sido en realidad en ningún momento una verdadera asociación de derecho privado, con los caracteres que la legislación, la jurisprudencia y la doctrina señalan para las "fundaciones", puesto que se han violado abierta y reiteradamente las disposiciones del Código Civil (Art. 33) que exigen a tales asociaciones la posesión de un patrimonio propio y les imponen la obligación no subsistir de asignaciones del Estado. Se trata en verdad de un organismo del Estado, paro de naturaleza híbrida y especialísima, como creación característica del régimen depuesto, que lo puso fuera de la organización administrativa del Estado y de la fiscalización de las autoridades competentes -no obstante lo cuantioso de los bienes y fondos públicos que se invertían en él- para poder satisfacer ambiciones personales y cumplir finalidades políticas;

Que es indispensable regularizar la situación jurídica del patrimonio del actual Instituto Nacional de Acción Social como real patrimonio del Estado, ya que no existe razón para la subsistencia de un superorganismo de la naturaleza de la Fundación Eva Perón, verdadero "estado" dentro del Estado, provisto de facultades excepcionales, al margen del orden jurídico e institucional que se ha dado al país y que debe respetarse;

Que la acción social que debe realizar el Estado argentino, tanto por imperativo del progreso como por la necesidad de satisfacer las legítimas aspiraciones de mejoramiento de todos los sectores del pueblo que construyen la grandeza de la Nación, entronca por cierto con el histórico mandato constitucional de "promover el bienester general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino", y que tal acción puede cumplirse, racional, regular y coordinadamente -sin necesidad de centralizaciones de tipo totalitario en pugna con nuestro federalismo- a través de las instituciones propias y organismos técnicos del Estado en el orden nacional, provincial y municipal;

Que ello concuerda, por lo demás, con el programa de la Revolución Libertadora, en el sentido de "llevar a cabo una acción de gobierno que garantice la vigencia de una efectiva justicia social en un clima de libertad", "obtener un real progreso en las condiciones de vida de los sectores más necesitados de la población" y "fortalecer y afianzar el federalismo, las autonomías comunales y la descentralización administrativa, estableciendo las condiciones jurídicas, económicas y culturales que propendan a ello como límites a los excesos del poder central";

Que, en tal virtud, las disposiciones del estatuto aprobado por los Decretos Nros. 20.564/48 y 20.268/50, en cuanto hace a la imposibilidad de la Fundación para cumplir con sus fines y a la liquidación de sus bienes, cuyo producido pasaría a integrar el patrimonio del Instituto Nacional de Previsión Social resultan enteramente inadmisibles, pues no se concibe que el Estado pueda suprimir servicios asistenciales y enajenar es

tablecimientos de utilidad pública con el solo fin de acrecentar el patrimonio de otros organismos estatales que tienen su propio régimen patrimonial, económico y financiero, adecuado al normal cumplimiento de sus funciones específicas;

Que, además, tales disposiciones del estatuto mencionado no podrían de ningún modo prevalecer en las presentes circunstancias, en que resulta forzoso adoptar las medidas pertinentes para restablecer el orden jurídico vulnerado por la creación anormal y el irregular funcionamiento de la entidad de que se trata, a la que se dió un estatuto en cuyas disposiciones se trasluce el espurio propósito de servir incondicionalmente el interés político y el seudo doctrinarismo del régimen depuesto;

Que por tanto, frente a la situación creada por los hechos relacionados resulta indudable la conveniencia de que los bienes y servicios en cuestión sean transferidos a las instituciones nacionales, provinciales o municipales con la organización y competencia necesarias para la mejor satisfacción de los fines previstos, en forma tal que esa transformación pueda operarse de modo que aquellos bienes y servicios se apliquen siempre y sin interferencias de ninguna otra índole a una obra de verdadera utilidad social, y

Que, por último, resulta indispensable, por lo menos hasta que se vea la conveniencia de adoptar otras disposiciones sobre el particular, el mantenimiento de los recursos con que cuenta actualmente el Instituto Nacional de Acción Social a fin de poder atender en primer término cualquier perjuicio que pudiera ocasionarse a terceros y preservar la continuidad de los servicios aludidos sin inconvenientes de ninguna naturaleza, tanto en cuanto a los bienes afectados a los mismos como al personal dependiente de dicho Instituto;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1ª.- Derógase el Decreto Nª 20.564 del 8 de julio de 1948.

ARTICULO 2ª.- Deróganse las disposiciones de la Ley Nª 13.992 relativas a la personería jurídica de la Fundación mencionada en dicha Ley.

ARTICULO 3ª.- Téngase por incorporados al patrimonio del Estado Nacional todos los bienes, derechos y acciones que le correspondan o pudieran corresponderle a la persona jurídica que por Decreto-Ley Nª 556/55 pasó a integrar el Instituto Nacional de Acción Social, y procédase a efectuar las inscripciones pertinentes respecto del dominio de los inmuebles.

ARTICULO 4ª.- Los establecimientos, dependencias y servicios en funcionamiento que integran el Instituto Nacional de Acción Social, con todos sus bienes muebles e inmuebles, personal y demás elementos afectados pasarán a depender, según su carácter de asistenciales o educacionales, de los Ministerios de Asistencia Social y Salud Pública y de Educación y Justicia de la Nación, respectivamente, con excepción de aquellos que, con sujeción a lo previsto por los artículos 5ª y 6ª del presente decreto-ley fueran transferidos a otras jurisdicciones.

ARTICULO 5ª.- Los establecimientos, dependencias y servicios aún no habilitados o en construcción, cualquiera fuese su naturaleza o carácter, como asimismo los demás bienes muebles o inmuebles, elementos y personal del Instituto Nacional de Acción Social, no comprendidos en el artículo anterior, quedarán transitoriamente en la jurisdicción directa del Ministerio de Hacienda de la Nación.

ARTICULO 6ª.- Autorízase a transferir con o sin cargo a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires los bienes muebles e inmuebles que integran los establecimien

tos que por su ubicación, zona de influencia, etc., correspondan a las citadas jurisdicciones, en las condiciones que se convengan con las respectivas autoridades. En todos los casos las transferencias que se resuelvan serán dispuestas por decreto del Poder Ejecutivo dictado por conducto del Ministerio de Hacienda de la Nación.

ARTICULO 7ª.- El Instituto Nacional de Acción Social continuará funcionando hasta tanto se cumpla con las transferencias dispuestas precedentemente y su administración estará a cargo de una Comisión designada por el Ministerio de Hacienda.

ARTICULO 8ª.- La Comisión propondrá las medidas necesarias a los fines de las transferencias de los servicios que correspondan a las respectivas jurisdicciones, conforme con lo dispuesto en los artículo 4ª,5ª y 6ª, dentro del plazo que determine el Ministerio de Hacienda de la Nación.

ARTICULO 9ª.- Acuérdase a la Comisión las facultades necesarias para la administración y conservación de los establecimientos y bienes a que se refiere el presente decreto-ley, de acuerdo con la reglamentación que dicte el Ministerio de Hacienda, y hasta tanto se concreten las respectivas transferencias, no pudiendo realizar actos de disposición de bienes inmuebles.

ARTICULO 10ª.- La Comisión será integrada con funcionarios que dedicarán a la misma su total actividad administrativa.

En ningún caso el desempeño de los miembros de la Comisión de que se trata dará lugar al pago de emolumento alguno, salvo los reintegros de gastos que demande la función, los que serán autorizados por el Ministerio de Hacienda y en las condiciones establecidas en las disposiciones que rigen la materia.

ARTICULO 11ª.- La tarea de la Comisión será fiscalizada por un Contador Público Nacional, designado por la Contaduría General de la Nación del Cuerpo de Contadores Fiscales, que actuará con carácter permanente y cumplirá las siguientes funciones:

a) Examinar las registraciones y documentación de la gestión, cuando lo juzgue conveniente, y por lo menos una vez por mes;

b) Asistir a las reuniones de la Comisión con voto consultivo;

c) Verificar el estado de la Caja; la constancia de los títulos y valores de toda especie;

d) Velar por que la Comisión cumpla con las normas legales y reglamentarias vigentes.

De su gestión dará cuenta en cada caso, y como mínimo una vez por mes, al Ministerio de Hacienda, por intermedio de la Contaduría General de la Nación.

ARTICULO 12ª.- Los recursos atribuídos a la entidad a que se refiere el derogado Decreto Nª 20.564/48 y que por el presente se asignan al Instituto Nacional de Acción Social como asimismo los fondos con que cuenta, serán administrados por la Comisión, destiándolos exclusivamente al mantenimiento de los servicios que se cumplen en la actualidad y atención que demande el pasivo del mismo.

En cada oportunidad en que se asignen los créditos presupuestarios que posibiliten la adecuada atención de los gastos de funcionamiento de los establecimientos, dependencias y servicios cuyo cambio de jurisdicción establece el presente decreto-ley, aquellos recursos ingresarán en la proporción que se establezca directamente a las rentas generales del Tesoro Nacional.

A tal efecto autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al Presupuesto General de la Nación los créditos que resulten necesarios, como así a modificar el cálculo de recursos de Rentas Generales.

ARTICULO 13ª.- Todas las transferencias de bienes muebles, inmuebles, personal, etc. a que dé lugar la aplicación de este Decreto-Ley, serán dispuestas por el Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda de la Nación.

ARTICULO 14ª.- Las provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que resulten donatarias de los bienes a que se re

fiere el presente decreto-ley contraerán la obligación de mantener en funcionamiento los establecimientos, dependencias y servicios actualmente habilitados, prosiguiendo las obras de asistencia social, sanitarias y educativas que se desarrollan en los mismos.

ARTICULO 15ª.- El Ministerio de Hacienda de la Nación propondrá al Poder Ejecutivo el destino definitivo de los bienes muebles e inmuebles, elementos y personal que transitoriamiente queden bajo su dependencia de conformidad con lo que establece el artículo 5ª del presente decreto-ley.

Con respecto al destino definitivo de los servicios aún no habilitados y de los inmuebles en construcción y su programa de financiación, se constituirá una comisión integrada por los señores Ministros de Hacienda, Educación y Justicia y Asistencia Social y Salud Pública o sus representantes, la que por conducto del Ministerio de Hacienda propondrá al Poder Ejecutivo el temperamento a adoptar sobre los mismos.

ARTICULO 16ª.- Las aclaraciones, interpretaciones y medidas complementarias que se requieran para el total cumplimiento de lo dispuesto por el presente decreto-ley serán resueltas por el Ministerio de Hacienda de la Nación.

ARTICULO 17ª.- Derógase toda disposición que se oponga al presente decreto-ley.

ARTICULO 18ª.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, Educación y Justicia, Asistencia Social y Salud Pública, Interior, Ejército, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 19ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.

ARAMBURU - Isaac Rojas - Eugenio A. Blanco
Carlos A. Adrogué - Francisco Martínez
Laureano Landaburu - Arturo Ossorio Aran
Teodo Hartung - Julio C. Krause.-

DECRETO-LEY Nº 11.922.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Despacho General -

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 314.-

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL

Buenos Aires, 5 de octubre de 1956.-

Visto que la Comisión Administradora del Instituto Nacional de Acción Social da cuenta de la existencia de bienes muebles de carácter suntuario, que por sus características generales no son de aplicación en la Administración Pública, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto-Ley Nº 11.922 del 4 de julio de 1956, establece en su artículo 15º que el Ministerio de Hacienda de la Nación propondrá al Poder Ejecutivo, el destino definitivo de los elementos y demás bienes que componen el patrimonio del Instituto Nacional de Acción Social;

Que la Comisión Administradora debe hacer frente a las obligaciones contractuales por las obras en construcción de carácter asistencial y/o educacional que fueran oportunamente dispuestas, como asimismo el pago de acreedores, gastos en personal y otros de mantenimiento de las diversas dependencias del citado organismo;

Que en tales condiciones es evidente la conveniencia de vender en pública subasta todos aquellos bienes que por su naturaleza o características, revistan el carácter de suntuarios o no sean de uso común en la Administración,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Facúltase a la Comisión Administradora del Instituto Nacional de Acción Social para que, por intermedio del Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, proceda al rema

te de los bienes de carácter suntuario o cualesquiera otros de su propiedad que a juicio de la misma no sean de uso común o indispensable en la Administración Pública.

ARTICULO 2º.- Las Autoridades del Instituto Nacional de Acción Social adoptarán conjuntamente con las del Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, las medidas más convenientes a fin de asegurar la obtención de los mejores resultados en las subastas que se realicen, las que quedarán sujetas a la aprobación de la Comisión Administradora.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial, pase al Instituto Nacional de Acción Social para su cumplimiento y archívese.-

ARAMBURU - Eugenio A. Blanco

DECRETO Nº 18.573.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nº 315.-

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL

Buenos Aires, 16 de enero de 1957.-

Visto las disposiciones del Decreto-Ley Nº 11.922 de fecha 4 de julio de 1956, y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente dejar establecido con toda precisión que los bienes muebles y elementos del Instituto Nacional de Acción Social que no tengan una afectación específica a los servicios asistenciales y educacionales del referido Instituto, y que conforme con lo dispuesto por el artículo 5ª del antes mencionado Decreto-Ley Nº 11.922/56 han quedado transitoriamente en la jurisdicción directa del Ministerio de Hacienda de la Nación, podrán ser transferidos, con o sin cargo, a personas físicas o jurídicas siempre que los bienes así destinados tuvieren por objeto satisfacer necesidades de los beneficiarios en orden a lo social, asistencial o educacional;

Que tal temperamento condice con el espíritu del Decreto-Ley número 11.922/56 en cuanto el mismo propugna la transferencia definitiva de todos los bienes del Instituto Nacional de Acción Social, para que los mismos puedan ser aplicados a obras de verdadera utilidad social;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1ª.- Agréguese como párrafo segundo del artículo 15ª del Decreto-Ley número 11.922/56, el texto siguiente:

"Las transferencias de bienes muebles y de elementos que se propongan, con o sin cargo, podrán acordarse también a personas de existencia visible o jurídicas públicas y privadas, incluso instituciones particulares, cuando tales transferencias tuvieren por objeto satisfacer necesidades de orden social, asistencial y educacional".

En los casos de transferencias con cargo de bienes y elementos sin uso, el valor se determinará de acuerdo con su costo de adquisición; si por el contrario se tratara de bienes y elementos usados, los funcionarios técnicos del Instituto Nacional de Acción Social deberán estimar, mediante dictamen, el valor actual de los efectos a transferir.

ARTICULO 2º.- El presente Decreto-Ley será refrendado por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, de Ejército, de Marina y de Aeronáutica.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung Julio C. Krause - Eugenio A.Blanco.-

DECRETO-LEY Nº 385.-

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL

Buenos Aires, 24 de abril de 1957.-

Visto el Decreto-Ley Nº 11.922 del 4 de julio de 1956, por el que se autoriza la transferencia, con destino a distintos ministerios y organismos, de los establecimientos, dependencias y servicios en funcionamiento y los aún no habilitados o en construcción, como asimismo los demás bienes muebles o inmuebles y personal que integran el Instituto Nacional de Acción Social, y

CONSIDERANDO:

Que dicha medida ha tenido principio de ejecución;

Que mientras no se opere la incorporación de los créditos necesarios al Presupuesto General de la Nación y la modificación del cálculo de recursos de Rentas Generales, que autoriza el artículo 12 del citado decreto-ley, los gastos que demande el funcionamiento y mantenimiento de los mismos, deben ser atendidos por el Instituto Nacional de Acción Social;

Que es necesario dejar establecidas, hasta tanto se concreten en cada caso las pertinentes modificaciones presupuestarias, las obligaciones de los ministerios y organismos a favor de los que se disponen transferencias, para no entorpecer en dicho período el pago regular de los haberes del personal y la atención de los gastos normales de funcionamiento;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los ministerios y organismos de la Administración

Nacional a favor de los que se dispongan transferencias, en virtud de lo establecido por el Decreto-Ley Nª 11.922/56, que dan autorizados, hasta tanto se opere la incorporación de los créditos necesarios en sus respectivos presupuestos, para hacer frente por cuenta del Instituto Nacional de Acción Social, a las obligaciones emergentes del funcionamiento y mantenimiento de los establecimientos, dependencias y servicios que pasen a sus jurisdicciones.

ARTICULO 2ª.- La Comisión Administradora del Instituto Nacional de Acción Social, sobre la base de los compromisos efectivamente contraídos, pondrá a disposición de las Direcciones Generales de Administración o Servicios Administrativos, mediante transferencia bancaria, los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1ª.

ARTICULO 3ª.- El procedimiento que señalan los artículos precedentes será de aplicación en todos aquellos casos en que se disponga el cambio de jurisdicción de bienes que integran el Instituto Nacional de Acción Social y hasta tanto no se de cumplimiento a lo prescripto en el artículo 12ª del Decreto-Ley Nª 11.922/56.

ARTICULO 4ª.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

ARTICULO 5ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Instituto Nacional de Acción Social, para su cumplimiento y archívese.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nª 4.213.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD y ADMINISTRACION - Despacho General -

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 317.-

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL

Buenos Aires, 28 de junio de 1957.-

Visto lo dispuesto en el artículo 3ª del Decreto-Ley Nª 11.922/56, por el cual se incorporan al patrimonio del Estado Nacional, todos los bienes del Instituto Nacional de Acción Social, y

CONSIDERANDO:

Que dicho Instituto posee una apreciable cantidad de obras en construcción, cuyo proceso de terminación abarcará un período prolongado de tiempo;

Que en atención al estado de disolución en que se halla dicho organismo, es aconsejable liberarlo de esa tarea;

Que a tal fin es menester adoptar las disposiciones que permitan encomendar la prosecución de dichas obras al organismo competente;

Que dicho temperamento encuadra dentro del espíritu de los artículos 5ª y 15ª del citado Decreto-Ley número 11.922/56;

Que en consecuencia correspondería encomendar la prosecución de las obras al Ministerio de Obras Públicas de la Nación que es el que ya tiene, en virtud de convenios anteriores, intervención directa en un grupo de ellas;

Que una vez finiquitadas las obras, el Ministerio de Hacienda deberá proponer al Poder Ejecutivo el temperamento a adoptar con las mismas, tal como lo dispone el artículo 15ª del Decreto-Ley número 11.922 de fecha 4 de julio de 1956;

Que no obstante ello, puede fijarse el destino de las construcciones que ya han sido solicitadas;

Que asimismo se hace necesaria la derogación del Decreto

número 3.338/57, a efectos de que el Ministerio de Obras Públicas pueda concluir las obras en construcción del Hogar Escuela de Resistencia, Provincia del Chaco;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1ª.- El Ministerio de Obras Públicas de la Nación, tomará a su cargo las obras pertenecientes al Instituto Nacional de Acción Social, que se detallan en la planilla anexa que forma parte del presente decreto.

ARTICULO 2ª.- Transfiérese al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, todos los bienes muebles (maquinarias, materiales, etc.), afectados a las referidas obras, como así también la documentación correspondiente y los automotores del Departamento de Construcciones asignados a las obras señaladas.

ARTICULO 3ª.- Transfiérese, asimismo, el personal afectado a las obras a que se refiere el artículo 1ª, que se incorporará en número necesario para la prosecución normal de los trabajos, con la categoría y carácter que en cada caso fije el Ministerio de Obras Públicas. En iguales condiciones pasarán los empleados técnicos y administrativos del Departamento de Construcciones del Instituto Nacional de Acción Social, quedando exceptuados de esta transferencia los que en ambos casos sean de utilidad para la atención de los demás bienes con que cuenta el referido Instituto.

ARTICULO 4ª.- El Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Acción Social, adoptarán las medidas necesarias para que en un plazo no mayor de sesenta (60) días se de cumplimiento a lo dispuesto en los artículos precedentes.

ARTICULO 5ª.- El Instituto Nacional de Acción Social arbitrará los fondos necesarios para segurar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1ª y las obligaciones emergentes de los gastos correspondientes a sueldos y jornales del personal

que se transfiera y la liquidación de certificados y facturas, relacionados con dichas obras, hasta tanto se opere la incorporación de los créditos necesarios en el respectivo presupuesto del Ministerio de Obras Públicas.

ARTICULO 6º.- El Instituto Nacional de Acción Social, sobre la base de los compromisos efectivamente contraídos, pondrá a disposición de la Secretaría de Administración y Contabilidad del Ministerio de Obras Públicas, mediante transferencia bancaria, los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.

ARTICULO 7º.- El Ministerio de Obras Públicas procederá con suficiente antelación, a comunicar al Ministerio de Hacienda, la fecha de terminación de la construcción de cada establecimiento, a fin de que éste realice, de conformidad con los términos del Decreto-Ley número 11.922/56, las tratativas relacionadas con la transferencia de los mismos a los organismos a cuyo cargo quedarán en forma definitiva.

ARTICULO 8º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, los establecimientos en construcción que a continuación se mencionan, serán transferidos, una vez terminadas las obras, a la jurisdicción que en cada caso se especifica: al Ministerio de Educación y Justicia, el Hogar Escuela de Resistencia, Provincia del Chaco, con destino a la Universidad Nacional del Noreste; la Ciudad Universitaria de Córdoba ubicada en la Ciudad de Córdoba (Parque Sarmiento), con destino a la Universidad Nacional de Córdoba y a la Provincia de Salta, el Policlínico ubicado en la Capital de esa Provincia.

ARTICULO 9º.- La transferencia de la Ciudad Universitaria, dispuesta por el artículo anterior, incluíra también la fracción de terreno delimitada por las calles Vélez Sársfield, Ambrosio Olmos, Richardson, Ituzaingó, Bolivia, Chacabuco, Chile, Concepción Arenal, Ciudad de Valparaíso y Rogelio Martínez, con excepción de:

a) las parcelas correspondientes al Hogar Escuela de Córdoba de una superficie de 15 hectáreas, 6.581 m2. y 14 dm2;

b) del Hogar de Ancianos de Córdoba de una superficie de 6 hectáreas, 3.804 m2. y 86 dm2., según plano de conjunto obrante a fojas 21 y 22 del Expediente número 101.571/56 del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación y

c) de la fracción del Lote número 211 de 34.532 m2., que ocupa el Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

ARTICULO 10º.- Derógase el Decreto número 3.338/57 con anterioridad al 26 de marzo de 1957.

ARTICULO 11º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, Obras Públicas, Asistencia Social y Salud Pública y Educación y Justicia.

ARTICULO 12º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial, pase al Registro de Bienes del Estado a efectos de las anotaciones del cargo correspondiente, al Tribunal de Cuentas, a la Contaduría General de la Nación a sus efectos y al Instituto Nacional de Acción Social para su cumplimiento y archívese.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena
Pedro Mendiondo - Francisco Martínez - Acdel E. Salas.-

DECRETO Nº 7.330.-

A N E X O

PLANILLA DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCION PERTENECIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL QUE TOMARA A SU CARGO EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACION

Nª	OBRA	PROVINCIA	LOCALIDAD
1	Ciudad Universitaria	Córdoba	Córdoba - Parque Sarmiento
2	Comedor Universitario	Buenos Aires	La Plata
3	Escuela Nª 32	Santa Fe	La Sara
4	Escuela Nª 245	Tucumán	Aráoz
5	Hogar Escuela	Chaco	Resistencia
6	Hogar Escuela	La Rioja	La Rioja
7	Hogar Escuela	Chubut	Comodoro Rivadavia
8	Policlínico	Entre Ríos	Concordia
9	Policlínico	Corrientes	Paso de Los Libres
10	Policlínico	Corrientes	Corrientes
11	Policlínico	Salta	Salta
12	Policlínico	Jujuy	Jujuy
13	Policlínico	Santiago del Estero	Santiago del Estero
14	Policlínico	San Juan	San Juan

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 318.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Expediente nª 112.261 - 1956.- Juan D. Oliveto.- Bonificación por antigüedad.- Servicios prestados en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.-

///— ñor Ministro:

1.- Por decreto nª 19.203/48 se estableció para el personal del Ministerio de Hacienda un régimen de bonificaciones en concepto de antigüedad, sobre la base del sueldo que percibe cada agente y de acuerdo con su calificación (art. 1ª); considerándose "como antigüedad, el total de años de servicios prestados por los agentes de la Administración Pública Nacional, ya sea en forma ininterrumpida o alternada" (art. 5ª).

Este mismo artículo excluyó expresamente del cómputo de la antigüedad, los servicios prestados en la docencia y los que hubieran originado jubilación, pensión o retiro, así como el tiempo de las licencias sin goce de sueldo.

A su vez, la resolución nª 478 del 14 de marzo de 1949 precisó otras exclusiones, entre ellas, la relativa a los servicios prestados en las provincias y municipalidades, -exclusión que, sin duda, resultaba obvia-, pero que, como parece desprenderse del informe transcripto a fs. 8, fué invocada por el Ministerio para excluír del cómputo los servicios prestados en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se pretendió lo contrario; hasta que con fecha 6 de mayo de 1955, se dictó la resolución nª 3.764, que fundamentada en el cambio que en la situación político-jurídica de la citada Municipalidad habría producido la reforma constitucional de 1949 y el decreto 17.687/55. dispuso reconocer a partir del 1ª de enero de 1955,

los servicios prestados en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a los fines del régimen de bonificaciones por antigüedad.

2.- A juicio de esta Dirección, antes de la mencionada reforma, no había ninguna duda de que la Administración Pública Nacional y la Administración de la Municipalidad de Buenos Aires eran dos organizaciones inconfundibles y diferentes, como lo ha reconocido siempre la doctrina, la legislación y la jurisprudencia.

Después de la reforma de 1949, ha sido creencia generalizada que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires había pasado a ser una dependencia del Gobierno Nacional, vale decir de la Administración Pública Nacional. Sin embargo, la Corte Suprema opinó en 1950 "que el gobierno de la capital federal, de la que el Presidente de la Nación es el jefe inmediato, se halla organizado como uno de orden local, propio e independiente, a semejanza de las provincias, conforme a la legislación que dicte el Congreso. Así lo ha reconocido de antiguo la jurisprudencia de esta Corte Suprema durante la vigencia de la anterior Constitución Nacional (Fallos: 48, 71;119 , 291; 193,350; 199,475; 210,1044), y así es también con arreglo a la Constitución vigente que, además de conservar la respectiva atribución del Congreso (art. 68, inc. 26), ha reforzado la posición de las autoridades nacionales en el lugar de su instalación facultando al Poder Ejecutivo, como jefe inmediato y local de la Capital de la Nación, para delegar estas funciones en la forma que determinen los reglamentos administrativos (art. 83, inc. 3ª) y autorizando al Congreso para sancionar el régimen impositivo del distrito federal y fijar por un año o por períodos superiores hasta un máximo de tres años, a propuesta del Presidente de la República, el presupuesto de gastos de su administración (art. 68, inc. 28)" (Fallos: t.217, p.500). Por otra parte, el decreto 17.687/54, disponía en su art. 2ª que "en cuanto organismo político-administrativo descentralizado del Estado Nacional, la Capital de la Nación o Distrito Fede

ral se denominará Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y actuará como ente de derecho público y privado de existencia necesaria", y su art. 3ª establece que "los bienes del dominio público y privado de la Municipalidad constituyen su patrimonio propio inconfundible con el patrimonio del Estado Nacional".

Por lo demás, son notorias las diferencias que distinguen a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de las entidades u organismos autárquicos de la Administración Nacional. Estos -cuya creación no ha dejado de ser discutida desde el punto de vista constitucional- constituyen una creación legal a los efectos de la descentralización de determinados servicios, con poderes de autoadministración; en cambio, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires tiene su origen en la propia Constitución y sus poderes no se limitan a la simple autoadministración de las entidades autárquicas, sino que alcanzan categoría de autolegislación.

Por todo ello, considera esta Dirección que, aún después de la reforma constitucional de 1949, es insostenible la tesis de que la Administración de la Municipalidad de Buenos Aires forma parte de la Administración Pública Nacional. la distinción puede verse, también, en el mismo orden de ideas, a través de diversos ordenamientos legales , como la ley 4.349 y sus complementarias (de jubilaciones y pensiones del personal civil de la Nación), la ley 13.003 (de seguro obligatorio para el personal al servicio del Estado) etc., que no han comprendido en ningún momento a los agentes del municipio de la Capital Federal.

Pero reconoce esta Dirección, también, que la resolución nª 3.764/55 ha podido ser dictada por el Ministerio de Hacienda teniendo en cuenta los dictámenes de que la misma hace mérito.

Lo que es indudable es que después de haber sido derogada la reforma constitucional de 1949 (por la Proclama de 1ª de

mayo de 1956) y el decreto 17.687/54 (por el decreto-ley nº 15.374/56, la citada resolución ministerial no ha podido considerarse subsistente, puesto que por lo menos a partir de entonces el reconocimiento de servicios prestados en la Municipalidad de Buenos Aires a los efectos de determinar la antigüedad del agente, tiene el carácter de una ampliación y no de una aclaración del concepto "Administración Pública Nacional" incluído en el art. 5º del decreto 19.203/48.

Sin embargo, el decreto 12.439 del 11 de junio de 1956, importa una confirmación de la resolución 3.764/55, ya que establece, a partir del 1º de julio de 1956, "para todos los casos en que hasta el presente no eran considerados, la computación de los servicios prestados por los agentes en la Administración comunal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires".

3.- El interesado, que fué beneficiado oportunamente con la resolución 3.764/55, sostiene que el reconocimiento de los servicios prestados en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ha debido tener efecto retroactivo y no sólo a partir del 1º de enero de 1955 como lo dispone su art. 1º.

Esta Dirección considera que comportando la citada resolución -lo mismo que el decreto 12.439/56- una ampliación de los beneficios acordados por el decreto 19.203/48, y no una aclaración de sus conceptos, el derecho correspondiente debe entenderse circunscripto a los términos claros de la disposición que lo otorga y que, como se ha visto, excluye expresamente el efecto retroactivo.-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 7 de febrero de 1957.-

Fdo. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA
Director General de Asuntos Jurídicos

///—ÑOR MINISTRO:

Se gestiona por estas actuaciones la concesión de efecto retroactivo al reconocmiento de los servicios prestados en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, dispuesto por resolución ministerial nº 3.764 del 6/5/955 (fs.15), a los fines de la bonificación por antigüedad para el personal de este Ministerio.

De los considerandos que ilustran la medida citada surge evidentemente que la computación de tales servicios fué aceptada por este Departamento de Estado luego que varios pronunciamientos fueron modificando la naturaleza jurídica de la Comuna de la Capital hasta hacerla penetrar en el ámbito institucional de la Administración Nacional (ver decreto nº 17.689 del 15-10-954), si bien, posteriormente, distintos actos del actual Gobierno Provisional han ido restituyéndole su autonomía.

De lo expuesto resulta que la resolución comentada tiene carácter definitorio de los servicios municipales a los efectos del régimen de bonificaciones, o sea que a través de ella este Ministerio admitió la computación de aquellas prestaciones recién en el momento que las consideró válidas y, desde luego, a partir de la fecha indicada en la misma (1-1-955).

Cabe agregar finalmente, en cuanto a la opinión sostenida por la Contaduría General de la Nación a fs. 13/14, que el derecho adquirido por los agentes con servicios computables en el orden de que se trata, no se altera por el hecho de no abonárseles el adicional correspondiente a los mismos con efecto retroactivo, en razón de que tales prestaciones -y esto es lo fundamental- son reconocidas y acrecientan la antigüedad bonificable. Por otra parte no puede alegarse en este caso la existencia de un derecho sino a partir de la fecha en que éste es consagrado.-

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 12-2-957.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General de Contabilidad y Administración

Febrero 18 de 1957.-

Atento lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y lo manifestado por la Dirección General de Contabilidad y Administración, resuelvo: NO HA LUGAR.

Tome nota la repartición nombrada en último término y pase a la Contaduría General de la Nación para su conocimiento y notificación al interesado.-

Fdo. ROBERTO VERRIER
Ministro de Hacienda de la Nación

Expediente nº 30.066 - 1957.- Juan D. Oliveto s/bonificación por antigüedad
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION.-

Señor Presidente del Tribunal
de Cuentas de la Nación:

La Resolución nº 478/949 que reglamentó el régimen de bonificaciones por antigüedad establecido por decreto número 19.203/48, excluyó entre otras, la computación de los servicios prestados en jurisdicción provincial o munucipal. Posteriormente, y fundada en distintas decisiones que han definido la naturaleza jurídica de los servicios prestados en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se dictó la resolución nº 3764/955 por la que se reconoce, a partir del 1º de enero de 1955 los servicios prestados por los agentes del Ministerio de Hacienda, en la Municipalidad de referencia, a los efectos del decreto 19.203/948.

El interesado, a quien alcanzó lo dispuesto por la resolución Ministerial nº 3.764/55 aduce que la misma debe ser considerada con carácter retroactivo. Al respecto, coincido con

las conclusiones del dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda de fs. 26/27 en cuanto niega a la resolución nº 3.764/955 el pretendido efecto retroactivo, por no tratarse de una disposición aclaratoria, ya que sus normas constituyen una ampliación de beneficios acordados.-

Mayo 21 de 1957.-

Fdo. LUIS BOTET
Procurador del Tesoro de la Nación

///—nos Aires, 16 de setiembre de 1957.-

Visto el pedido de reconsideración interpuesto por el señor Juan D. Oliveto, funcionario del Tribunal de Cuentas de la Nación, respecto a la resolución ministerial de fecha 18 de febrero de 1957 (fs. 28) y atento lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro de la Nación (fs. 32): ESTESE A LO RESUELTO.

Tome nota la Dirección General de Contabilidad y Administración y vuelva al Tribunal de Cuentas para su notificación al causante, cumplido, archívese.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA
Ministro de Hacienda de la Nación

RESOLUCION Nº 7.380.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Despacho General

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 319.-

LEY DE CONTABILIDAD - EJERCICIO - BANCOS

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1957.-

Visto el artículo 37 de la Ley de Contabilidad -Decreto-Ley Número 23.354/56-, que faculta al Poder Ejecutivo para acordar excepciones a la norma según la cual los términos del ejercicio de las entidades descentralizadas se ajustarán al que establece el artículo 1ª de dicha Ley, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido por su Carta Orgánica, el ejercicio financiero del Banco Central de la República Argentina coincide con el año calendario, tal como ocurre con gran parte de las entidades bancarias centrales;

Que en relación con cada ejercicio dicho Banco debe publicar su Memoria, documento al que se le asigna dentro y fuera del país gran importancia como reseña de la actividad económica-financiera nacional;

Que las cifras de comercio exterior, producción, renta nacional y otras que se toman como base se refieren al período de doce meses universalmente aceptado -enero/diciembre-, cuya alteración podría ocasionar dificultades que en algunos casos llegarían eventualmente a impedir su ajuste;

Que, del mismo modo, las cifras de la situación monetaria y sobre todo el balance de pagos han de vincularse con el año calendario, y

Que existen, por lo tanto, diversas razones que aconsejan que también coincida con el año calendario el ejercicio financiero del Banco, las cifras de cuyos balances al 31 de diciembre se relacionan con las de la situación monetaria y el ba-

lance anual de pagos,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Acuérdase al Banco Central de la República Argentina la excepción prevista en el artículo 37 de la Ley de Contabilidad (decreto-Ley Nº 23.354/56).

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nº 10.453.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 320.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - FONDO PERMANENTE - CAJA CHICA

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1957.-

Visto lo dispuesto por el artículo 48ª de la ley de contabilidad, en lo que respecta a los regímenes llamados FONDO PERMANENTE y CAJA CHICA, y

CONSIDERANDO:

Que hasta tanto se dicte la reglamentación de la citada ley se hace necesario impartir, a los servicios dependientes del Tribunal de Cuentas, las instrucciones necesarias a los efectos de su intervención, en la institución de dichos regímenes;

Que la adopción, en base a dichas instrucciones, de procedimiento uniformes hará factible la eliminación de las dificultades que, en la práctica, se observan actualmente;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1ª.- Los señores contadores fiscales prestarán su conformidad a la institución de los denominados "FONDO PERMANENTE y/o CAJA CHICA", cuando se ajusten a las siguientes normas:

1) Deberán ser acordados por el Poder Ejecutivo o por la autoridad superior de los otros poderes y entidades descentralizadas.

2) Serán constituídos mediante una orden de disposición, que deberá contener los requisitos establecidos para los libramientos, suscripta por el ministro del ramo y el de Hacienda, previa intervención de la Contaduría General de la Nación; con imputación a una cuenta que se denominará ANTICIPO ARTICULO 48 LEY

DE CONTABILIDAD, con el aditamento de FONDO PERMANENTE o CAJA CHICA, según corresponda, la que permanecerá abierta hasta tanto sea modificada.

3) En lo concerniente a las dependencias del Poder Ejecutivo el acuerdo y la constitución del FONDO PERMANENTE y de la CAJA CHICA deberán concretarse en un solo acto, con sujeción a lo establecido en los incisos anteriores.

4) Los montos, serán determinados, en todos los casos, con relación a las necesidades a satisfacer, las que deberán quedar fehacientemente demostradas en las respectivas actuaciones. Cuando dichos fondos se mantengan sin aplicación durante un tiempo injustificado los contadores fiscales lo pondrán en conocimiento de este Tribunal de Cuentas a los efectos del artículo 44 de la ley de contabilidad.

5) Con el FONDO PERMANENTE se atenderá el pago de gastos de cualquier naturaleza, cuya urgencia no permita esperar la extracción de fondos mediante el libramiento respectivo.

6) No obstante lo anterior, en la tramitación del gasto, deberán respetarse todos los demás aspectos legales y reglamentarios que correspondan.

7) Con la CAJA CHICA se atenderá el pago de gastos menores, que no superen la cantidad de quinientos pesos moneda legal ($ 500.- m/l) y de gastos urgentes, cuando revistiendo este carácter no excedan de un mil pesos moneda legal ($ 1.000.- m/l).

8) El reintegro de las sumas pagadas por el régimen de FONDO PERMANENTE, se hará a medida que se produzcan los pagos; y el de las sumas pagadas por el régimen de CAJA CHICA cuando la inversión alcance al 70% de la cantidad asignada, previa rendición de cuenta del importe invertido. En ambos casos el reintegro se hará mediante la emisión de un libramiento de entrega, con imputación al crédito que corresponda según la inversión.

9) La imputación a la partida de EVENTUALES y MENORES só lo será admisible cuando no se cuente con crédito específico y siempre que la inversión no signifique aumento de patrimonio.

10) La designación del funcionario responsable del manejo de los fondos estará a cargo del jefe del respectivo servicio administrativo.

11) Los contadores fiscales al intervenir los libramientos de entrega para el reintegro de los fondos de CAJA CHICA, deberán limitarse a la verificación numérica de los importes pagados, postergando el análisis de la documentación para la oportunidad del juicio de la cuenta en que se incluya, salvo que reparen la existencia de posibles irregularidades, en cuyo caso lo pondrán en conocimiento del Tribunal de Cuentas.

12) Los contadores fiscales vigilarán que el último día laborable del mes de octubre de cada año se encuentren en la Tesorería General de la Nación, los libramientos de entrega para el reintegro de las sumas pagadas con cargo al "FONDO PERMANENTE y/o CAJA CHICA", aunque, en este último caso, los pagos efectuados no hubieran llegado al 70% de la suma asignada.

ARTICULO 2ª.- Derógánse las Resoluciones Nª 880/49 (D.A.CGN. 181), 958/54 (D.A. CGN. 324), 1.518/56 (D.A. CGN. 365) y 1.139 57 (D.A. 78).

ARTICULO 3ª.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña - Antonio M. Pérez Arango - Eusebio Villar (Vocal acc.) - Juan Carlos Pastene -Secretario

RESOLUCION Nª 1.530.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO MINISTERIAL

Boletín Nª 321.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - LIBROS RUBRICADOS

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1957.-

Visto el artículo 70 de la ley de contabilidad y

CONSIDERANDO:

Que siendo la rubricación de libros un acto de control externo, a cargo de este Tribunal de Cuentas, por imperio de la ley, es necesario adoptar con tiempo las medidas indispensables para que dicha función se cumpla antes de la iniciación del próximo ejercicio,

Por ello y en virtud de la facultad que le otorga el inciso o) del artículo 84 de la ley de contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- La rubricación de los libros de contabilidad, que deben llevar los respectivos servicios administrativos, estará a cargo de los representantes de este Tribunal o en su defecto del funcionario que se designe especialmente.
ARTICULO 2º.- Dése a Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos servicios administrativos y archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña - Antonio M. Pérez Arango - Eusebio Villar (Vocal acc.) - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nª 1.531.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 322.-

DIGESTO ADMINISTRATIVO

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1957.-

Visto y considerando:

Que es necesario asegurar la más amplia difusión de los actos administrativos de carácter interno o general, que resulten de interés común a los distintos organismos y dependencias que se desenvuelven en esta jurisdicción, tal como ya se procede con todo lo relacionado a los aspectos técnicos de competencia de este Ministerio (impositivo, aduanero, económico, financiero, inmobiliario, estadístico, etc.);

Que dicho imperativo resulta concurrente al mantenimiento de la legislación vigente en la materia, en forma permanente actualizada y ordenada;

Que ello constituye una importante contribución al efectivo cumplimiento de las respectivas disposiciones y garantiza una mayor eficiencia en el servicio;

Que en ese sentido, avala los puntos de vista expuestos los resultados ya obtenidos por la publicación que en forma experimental viene efectuando en la materia la Dirección General de Contabilidad y Administración a través del "Digesto Ministerial" cuya creciente demanda revela su utilidad;

Que ello ha permitido reemplazar con ventaja al sistema de notificación por notas, cuya circulación en cada organismo da lugar a la formación de expedientes, con las consiguientes providencias de trámite, registraciones y demás tareas tan inútiles como lentas, mientras que por intermedio de un boletín informativo, la difusión, además de ser simultánea entre todos los interesados, es sumamente ágil y económica;

Que de conformidad con lo expuesto y teniendo en cuenta que a los fines señalados resulta apropiada y eficiente la publicación de la Dirección General de Contabilidad y Administración, ya aludida, la que además, por su sistema de impresión en hojas sueltas, resulta de costo insignificante, se considera conveniente el dictado del pronunciamiento respectivo, prestando acuerdo formal a la misma e incorporándola como órgano oficial de este Ministerio;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

1ª) Créase el "Digesto Administrativo" de este Ministerio e incorpóranse al mismo los boletines publicados por la Dirección General de Contabilidad y Administración bajo la denominación de "Digesto Ministerial", hasta el nº 321, inclusive.

2ª) El "Digesto Administrativo" será editado por la Dirección General de Contabilidad y Administración y estará integrado por boletines numerados en orden correlativo, teniendo en cuenta a este efecto el número alcanzado por el ex-"Digesto Ministerial".

Se confeccionará un boletín por cada acto administrativo que deba publicarse.

3ª) En el "Digesto Administrativo" se publicarán exclusivamente aquellos actos emanados de autoridad competente y que se refieran a asuntos de interés común de los organismos de este Ministerio, incluso los descentralizados. A tal efecto, dichos organismos remitirán copia autenticada de los actos dictados por ellos e con su intervención, que participen de las características señaladas precedentemente, a la Dirección General de Contabilidad y Administración, quien previa selección y clasificación de los mismos, dispondrá, si

así procediera, su publicación.

4º) Cuando no se produjera otra forma de notificación oficial, los boletines del "Digesto Administrativo" servirán a esos fines, con respecto a los actos en ellos publicados, para todos los organismos del Ministerio de Hacienda, incluso los descentralizados.

5º) En todo acto publicado en los boletines del "Digesto Administrativo" deberá especificarse su número, características de registro, naturaleza, etc. y nombre y cargo de la autoridad que lo firma.

6º) Comuníquese, tome nota la Dirección General de Contabilidad y Administración y archívese.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 7.397.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 323.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - EMPRESAS DEL ESTADO - AUDITORIAS - OBSERVACIONES

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1957.-

Visto lo dispuesto por el inciso f) del artículo 84 de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario reglar la forma y el trámite de las observaciones que debe formular el Tribunal de Cuentas de la Nación a todo acto o procedimiento de las empresas del Estado que se oponga a las disposiciones legales y reglamentarias a que debe ajustarse la gestión de esas entidades (artículo 6ª, apartado b), ley nª 13.653 - t.o. - y artículo 14 del decreto nª 5.883/55);

Que, si bien el artículo 16, inciso 3) de dicha norma reglamentaria fija el procedimiento que debe cumplirse en la materia, resulta necesario complementarla determinando el trámite a seguir en el orden interno del Tribunal de Cuentas de la Nación a los efectos del más eficiente cumplimiento de la fiscalización a su cargo;

Que además procede disponer la inclusión en la Memoria anual de este Cuerpo del texto de las observaciones producidas juntamente con los pronunciamientos recaídos ante las mismas;

Que a los fines expresados, es conveniente destinar un capítulo especial en la Memoria de la Institución, para insertar dichos actos del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de tratar en otras secciones los demás problemas planteados si su naturaleza e importancia así lo aconsejan, consignando además las anotaciones y antecedentes que puedan aportar la mayor

ilustración al H. Congreso de la Nación;

Por todo ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los jefes de las auditorías constituídas ante las empresas del Estado, a los fines de su fiscalización conforme a lo establecido en el inciso f), artículo 84 de la ley de contabilidad, artículo 6º, ap. b) de la ley número 13.653 (t.o.) y artículo 14 del decreto nº 5.883/55, comunicarán al Tribunal de Cuentas todo acto o procedimiento, tan pronto tengan conocimiento de los mismos, que se opongan a las disposiciones legales y/o reglamentarias que deban cumplir las entidades auditadas, adjuntando los antecedentes necesarios para su consideración y la opinión que en cada caso le merezca la cuestión tratada.

ARTICULO 2º.- La Auditoría General practicará a su vez el análisis de las actuaciones y, con las conclusiones pertinentes, las someterá al dictamen definitivo del Tribunal de Cuentas. El pronunciamiento de este Cuerpo será comunicado a la empresa del Estado respectiva por conducto de la auditoría competente.

Cuando se trate de una empresa integrante de un organismo principal que agrupe distintas explotaciones, dicho pronunciamiento será puesto en conocimiento de la autoridad superior del organismo central y también se remitirá copia del mismo a la entidad fiscalizada.

ARTICULO 3º.- Si los actos o procedimientos observados por el Tribunal de Cuentas no hubieran sido modificados o dejados sin efecto por la empresa, dentro del tercer día laborable de comunicada la observación, o si las explicaciones dentro del mismo término no justificara suficientemente el acto, a juicio de este Cuerpo, o venciera el plazo sin producirse alguna de las eventualidades señaladas precedentemen

te, se dará traslado de la observación al Ministerio del ramo conforme a lo previsto en el apartado b), punto 3º, artículo 16 del decreto nº 5.883/55, estableciendo el plazo dentro del cual deberá recaer el pronunciamiento del titular del departamento de Estado respectivo, el cual se graduará en relación a la importancia del asunto. Si vencido el término establecido no llegara a conocimiento del Tribunal de Cuentas el pronunciamiento pertinente, se efectuará un segundo y último requerimiento fijándose un plazo perentorio. Transcurrido éste sin recibir contestación o si la misma no fuera considerada satisfactoria, se pondrá el hecho - manteniendo la observación en conocimiento del Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda a los fines de la resolución correspondiente, archivándose las actuaciones sesenta días después, si no se dictare en tal término. La decisión del Poder Ejecutivo se incluírá en la Memoria correspondiente a la fecha en que se tome conocimiento de la misma.

ARTICULO 4º.- El Tribunal de Cuentas no admitirá los pronunciamientos del Ministerio del ramo como contestación a las observaciones formuladas, sino cuando dichos actos sean suscriptos por el titular del Departamento de Estado respectivo y, en tal sentido, será suficiente que por la Subsecretaría correspondiente se remita copia autenticada de la resolución ministerial dictada.

ARTICULO 5º.- Todas las observaciones comprendidas en esta resolución se incluirán en la Memoria anual del Tribunal de Cuentas, conforme a las fechas en que las mismas han cesado de diligenciarse, de acuerdo a los términos establecidos en el decreto nº 5.883/55 o los que se fijen conforme con lo dispuesto en el artículo 3º de la presente, sin perjuicio de insertar en la misma Memoria las notas y aclaraciones al texto de las observaciones, que resulten convenientes para mayor ilustración.

ARTICULO 6º.- Reitérase a las empresas del Estado el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 7º del

decreto nº 5.883/55, relacionadas con los balances mensuales y estados e informes trimestrales sobre la marcha de las mismas, como así también la comunicación simultánea a la auditoría respectiva de los actos acordados por sus autoridades, de acuerdo y a los fines señalados por el artículo 14 del citado decreto. Los jefes de los respectivos servicios darán cuenta al Tribunal de toda omisión a lo prescripto en este artículo y de las diligencias producidas ante el organismo auditado recabando dichos instrumentos.

ARTICULO 7º.- Comuníquese a los ministerios y empresas del Estado, dése al Digesto Administrativo y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli
Antonio M. Pérez Arango - Wifredo Dedeu - José M. Fernández Fariña - César Aguirre Legarreta -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.536.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD y ADMINISTRACION - Despacho General -

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 324.-

DERECHO-HABIENTES - FIANZAS - SUELDO - PAGOS - LIQUIDACION DE HABERES

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1957.-

Visto el Expediente Nª 488/57 del registro del Ministerio de Transportes, en el cual ese Departamento de Estado propone modificar el artículo 1ª del Decreto Nª 78.911/40, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nª 16.800 dictado en Acuerdo de Ministros en fecha 7 de febrero de 1933, se establecieron normas tendientes a uniformar procedimientos en las diversas reparticiones y dependencias de la Administración Nacional con respecto al pago a los derecho-habientes de los haberes de empleados fallecidos;

Que el artículo 1ª inciso c) del precitado decreto estipula, entre otros requisitos, que a los derecho-habientes se les exigirá una fianza a satisfacción de la Repartición o Dependencia, por un monto equivalente al importe de haber a pagarse, al solo efecto de constituir garantía para el caso que se presenten terceros alegando derechos sobre los haberes del empleado fallecido;

Que, mediante el Decreto Nª 78.911 de fecha 7 de diciembre de 1940, fué ampliado el antes mencionado Decreto número 16.800 en el sentido de que cuando los haberes correspondientes a empleados de la Administración fallecidos no sean superiores a doscientos pesos moneda naciona ($ 200.- m/n.), se prescindirá de la fianza que se exige a los derecho-habientes de aquellos;

Que, con tal franquicia, el requisito de la fianza compren

día en la época en que fué dictado este último decreto a una proporción ínfima de los derecho-habientes del personal fallecido mientras que hoy, el requisito de entregar un documento avalado por una persona solvente, es de aplicación en la casi totalidad de los casos;

Que tal circunstancia ocasiona el consiguiente aumento de los trámites burocráticos en las diversas reparticiones y trastornos para las partes interesadas, siendo esto último precisamente lo que el decreto en cuestión tenía por objeto aminonar, en virtud de que en la mayoría de los casos los deudos de los empleados fallecidos son de condición económica muy modesta y no pueden contar con el concurso de personas solventes dispuestas a prestar la fianza requerida, lo que da origen así a un perjucio muy sensible que puede llegar hasta paralizar las gestiones de pago;

Que, con el fin de que el precitado decreto Nª 78.911,hoy prácticamente inoperante, recobre idénticos alcances de los que tenía cuando fué puesto en vigor, es necesario actualizar el monto de los haberes sujetos a fianza con una cifra actualizada, conforme con el valor del signo monetario y de los sueldos que rigen en la actualidad;

Por ello;

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1ª.- Modifícase el artículo 1ª del Decreto Nª 78.911, de fecha 7 de diciembre de 1940 en el sentido de que se prescindirá de la fianza a que se refiere el artículo 1ª, inciso c) del Decreto número 16.800 dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 7 de febrero de 1933, cuando los haberes a liquidarse a los derecho-habientes de empleados fallecidos de la Administración no sean superiores a dos mil pesos moneda nacional ($ 2.000 m/n.)

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Carlos R.S.Alconada Aramburú Alfonso de Laferrére - Acdel E. Salas - Tristán E. Guevara - Francisco Martínez Angel H. Cabral - Pedro Mendiondo - Sadi E. Bonnet - Adalbert Krieger Vasena Alberto F. Mercier - Julio C. Cueto Rúa Víctor J. Majó - Teodoro Hartung - Jorge H. Landaburu.-

DECRETO Nº 10.901.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 325.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1956.-

Visto el Expediente Nª 15.011/51 del registro del Ministerio de Transportes y la observación formulada a fs. 29/30 por la Contaduría General de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que la Procuración del Tesoro de la Nació. a fs. 35 y 35 vta., se ha pronunciado en reiteradas oportunidades y en la presente, en el sentido de que cuando el Estado nacionaliza un servicio público asumiendo la prestación de éste e incorporando a los cuadros de la administración al personal afectado que dependía del concesionario o permisionario, es razonable reconocer la antigüedad a los efectos del cómputo de las bonificaciones, para colocarlo en un pie de igualdad con el resto del personal de la administración;

Que por lo expuesto en el párrafo precedente, se hace necesario ampliar los términos del artículo 4ª del Decreto número 5.466/50, para lo cual corresponde ratificar las Resoluciones M.T. Nros. 844/51 y sus modificatorias 952/52 y 1.397/52, en la parte pertinente.

Que no correspondiendo computar los servicios provinciales y municipales de las provincias, debe excluirse su reconocimiento de los beneficios del Decreto Nª 5.466/50, a partir del 1ª de octubre de 1956, toda vez, que en cumplimiento de las Resoluciones aludidas, dichos beneficios fueron abonados hasta el 30 de setiembre de 1956, originándose de tal forma una situación de hecho;

Por ello, y atento a lo propuesto por el Señor Ministro de Transportes,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Ratifícanse las Resoluciones Nros. 844/51 y sus modificatorias 952/52 y 1.397/52 del Ministerio de Transportes, no siendo computables a partir del 1º de octubre de 1956 los servicios provinciales y municipales de las provincias.
ARTICULO 2º.- Amplíase el artículo 4º del Decreto Nº 5.466/50, en el sentido de incluir en el mismo, al personal especificado en las resoluciones citadas por el artículo precedente.
ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Transportes y de Hacienda.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Transportes a sus efectos.-

ARAMBURU - Sadi E. Bonnet
Eugenio A. Blanco.-

DECRETO Nº 23.141.-

Boletín Nº 326.-

LEY DE CONTABILIDAD - COMPRA-VENTA - CONTRATACIONES - GARANTIAS

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1957.-

Visto lo actuado en el Expediente Nº 181.871/55 y lo expuesto por la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones y la Contaduría General de la Nación (actual Tribunal de Cuentas de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que como se manifiesta se encuentran registrados en la contabilidad del Estado numerosos depósitos de garantía que responden a diversos conceptos tales como, garantía de licitaciones, adjudicaciones y obras, conducta de empleados, transporte de correspondencia, y de otra naturaleza, cuyos derechos a ser percibidos por los interesados están prescriptos;

Que por consiguiente y a fin de evitar que dichas cuentas permanezcan indefinidamente abiertas procede ingresar tales fondos en la Tesorería General de la Nación, sin perjuicio de que en caso de presentarse los interesados a reclamar su devolución, sea considerado por el Poder Ejecutivo concorde a la facultad que le acuerda el artículo 142 del Decreto-Ley número 23.354/56;

Que en igual situación han de encontrarse numerosos depósitos de garantía existentes en otros organismos del Estado;

Que es conveniente resolver el problema en forma integral;

Que dichos importes corresponden ser acreditados a Rentas Generales -Rentas Diversas - Varios- o a los recursos de las entidades descentralizadas, según proceda;

Por ello y atento lo propuesto por el Ministerio de Hacienda,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A:

ARTICULO 1º.- Las direcciones de administración o las oficinas que hicieran sus veces en las entidades descentralizadas procederán a efectuar los trámites pertinentes para ingresar en la Tesorería General de la Nación o en la tesorería que corresponda, el importe de los depósitos de garantía, por cualquier concepto, cuyo derecho a ser percibido por sus titulares sse encontrara prescripto.

ARTICULO 2º.- Autorízase a seguir igual procedimiento para los depósitos de garantía que prescriban en el futuro y en las oportunidades en que se operen las respectivas prescripciones.

ARTICULO 3º.- Los importes a que se refieren los artículos 1º y 2º se acreditarán a Rentas Generales -Rentas Diversas -Varios- o a los recursos de las entidades descentralizadas según corresponda.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación, a sus efectos.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nº 11.046.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 327.-

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1957.-

Vista la necesidad de dictar normas a las que se ajustarán los distintos servicios en los casos que requieran a organismos de la Administración Nacional, antecedentes para el trámite de las actuaciones sometidas a la intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que la práctica ha permitido comprobar que en muchos casos el trámite debe ser paralizado o reservado durante largos períodos por la demora con que son recibidos los antecedentes oportunamente solicitados para producir despacho;

Que tal situación no es generalmente imputable a los organismos a los que se los solicita, sino a las dificultades a que éstos deben hacer frente para obtener la localización de dichos antecedentes o bien por encontrarse los mismos en poder de otros organismos o poderes;

Que el desconocimiento de esa situación, por la falta de respuesta a las notas respectivas, obliga a efectuar sucesivas reiteraciones, con los lógicos inconvenientes y perjuicios que ello acarrea;

Que por esa circunstancia es conveniente fijar un procedimiento general que conocido por los distintos responsables permitiría eliminar los inconvenientes actuales y agilitar consecuentemente el despacho;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Todo pedido de antecedentes necesarios para el despacho de actuaciones sometidas a la intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación será dirigido al jefe del Servicio Administrativo de la jurisdicción que corresponda.
ARTICULO 2º.- La dependencia que lo formule o proyecte deberá efectuar su reiteración expirado el plazo considerado necesario para su cumplimiento por el organismo. Si el pedido se cursara por nota independiente, en la actuación retenida deberá hacerse la reserva del caso.
ARTICULO 3º.- Si vencido el nuevo plazo no se contara con los antecedentes requeridos o no se hubiera obtenido respuesta, el Tribunal de Cuentas de la Nación dictará resolución intimando al jefe del Servicio Administrativo que correspondiera a exponer las razones que impiden cumplimentar lo solicitado, bajo apercibimiento de la aplicación del inciso k), art. 84, de la ley de contabilidad.
ARTICULO 4º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Antonio M.Pérez Arango - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Eusebio E. Villar (Vocal acc.)
Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.643.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 328.-

CONTRATACIONES - COMPROMISOS - PRESUPUESTO - EJERCICIO - LEY DE CONTABILIDAD

Expediente Nº 31.245/57 TCN
Providencia Nº 10.245- 1957
(Presupuesto e Incomp.)

///—nos Aires, 19 de setiembre de 1957.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la delegación destacada ante el Ministerio de Hacienda (Dirección General de Contabilidad y Administración) para manifestarle que este Tribunal de Cuentas de la Nación estima, en relación a la consulta formulada, lo siguiente:

1) Los compromisos relativos a la contratación de servicios anuales cuyo pago debe atenderse en forma mensual, corresponde imputarlos a los créditos arbitrados para el ejercicio extraordinario que abarca el período del 1º de enero al 31 de octubre de 1957, es decir, por diez meses y consecuentemente deben limitarse los compromisos por noviembre y diciembre próximos, que serán atendidos con los créditos del presupuesto para 1957/1958.

2) En cuanto a los demás compromisos contraídos en base a las asignaciones del presupuesto de 1956 prorrogado para 1957 por decreto 23.573/56, deberán ser atendidos con los créditos arbitrados para el ejercicio de 1957, en función del artículo 145 de la ley de contabilidad.

De plantearse una insuficiencia de crédito, corresponderá que el organismo someta la consideración del problema al Ministerio de Hacienda para que éste adopte las medidas que juzgue pertinentes.

Fdo. DAMIAN FIGUEROA
Presidente del
Tribunal de Cuentas de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 329.-

CONTRATACIONES - LOCACION DE INMUEBLES

Expediente Nº 60.392 - 1957
Providencia Nº 1.101 - 1957
(Contrat. y Trabaj.Públicos)

///nos Aires, 4 de julio de 1957.-

Se cuestiona en estos actuados la realización de refecciones en un edificio alquilado por el Estado y ocupado por la Dirección General de Parques Nacionales.

El Tribunal de Cuentas de la Nación compartiendo lo precedentemente expuesto por su Delegación destacada ante la referida Dirección General, analizando el caso exclusivamente desde el punto de vista legal que le compete de acuerdo con las prescripciones de la Ley de Contabilidad, pone de manifiesto que no corresponde que el Estado tome a su cargo la realización de los trabajos de que se trata.

Para que imprima el trámite que corresponda, vuelva a la Delegación destacada ante la Dirección General de Parques Nacionales.-

Fdo: DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo Tarelli - Wifredo Dedeu.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Delegación General

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 330.-

BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD - SALARIO FAMILIAR

Buenos Aires, 31 de julio de 1957.-

Visto la consulta formulada por la Delegación de la Contaduría General de la Nación ante el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, referente a empleados del mismo que han renunciado a los beneficios del escalafón por antigüedad con el objeto de no perder la entrada superior que les significaba el salario familiar otorgado por el decreto nª 6.000/52 situación que luego fué regularizada al dictarse el decreto nª 9.010/54, y

CONSIDERANDO:

Que el propósito que ha inspirado a las autoridades gubernamentales, al disponer con carácter transitorio la aplicación de bonificaciones, fué aliviar en lo posible la situación económica de los más modestos servidores del Estado mientras subsistan los factores que constituyan el encarecimiento de la vida;

Que si bien la limitación en la percepción de tales beneficios motiva algunas situaciones especiales como la presente, derivadas de la aplicación de regímenes escalafonarios, la bonificación por antigüedad forma parte del sueldo y constituye una retribución regulada por el tiempo de prestación de servicios;

Que en consecuencia, no es posible renunciar a la percepción del beneficio aludido, total o parcialmente, para usufructar una situación que puede ser favorable, en casos muy especiales desvirtuándose con ello, normas de carácter general que rigen para el conjunto de agentes de la Administración Pública;

Que de acceder al temperamento excepcional propuesto por los propios interesados implicaría crear un privilegio en favor de un reducido sector y producir un estado de desigualdad con el resto de la Administración Pública;

Por todo ello, atento el dictamen producido por el señor Procurador del Tesoro de la Nación y en uso de las atribuciones que en materia de normas aclaratorias o complementarias para el mejor cumplimiento de los Dtos. nº 6.000/52 y nº 9.010/54 confieren los artículos 20 y 15 de los mismos respectivamente,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Aclárase que el personal de la Administración Pública en todas sus ramas, reglado por regímenes escalafonarios, en los cuales se contempla el otorgamiento de una bonificación por antigüedad en el servicio, no puede hacer renuncia a la percepción de este beneficio para continuar cobrando las sumas que en concepto de salario familiar han sido fijadas por los Dtos. Nros. 6.000/52 y 9.010/54, cuando el importe de dicha bonificación por antigüedad, adicionado a las entradas permanentes del hogar, supere el tope establecido en cada uno de los mencionados decretos.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 158.-

Boletín Nº 331.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - PRESUPUESTO - CONTRATACIONES - RESIDUOS PASIVOS - PAGOS - CRÉDITOS - EJERCICIO

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1957.-

Visto el artículo 144 de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que, como consecuencia de lo dispuesto en la citada prescripción legal, los respectivos presupuestos vigentes prevén autorizaciones totales para atender necesidades por sólo diez meses.

Que, no obstante ello, las partidas específicas han sido consignadas por doce meses, disponiéndose la afectación global del rubro "Otros Gastos" por dos duodécimos (noviembre y diciembre de 1957);

Que en algunos casos se han contratado servicios o suministros por doce meses;

Que de lo que antecede es posible la existencia de obligaciones que no tengan el correspondiente respaldo crediticio, atento a la afectación global referida, o bien, que dichos compromisos puedan ser cubiertos con el crédito de la partida específica, siempre que la reducción global impuesta pueda ser compensada con rebajas equivalentes en otros conceptos de erogación;

Que, por lo tanto, se hace necesario dictar normas transitorias para resolver la situación expuesta en los considerandos precedentes, derivadas de la aplicación inicial de la ley de contabilidad;

Que, al propio tiempo, es preciso que los diversos organismos adecúen las contrataciones futuras a los nuevos térmi

nos del año financiero, teniendo en cuenta, además, el concepto de compromiso fijado por la citada ley;

Por todo ello y atento a la facultad que le confiere el artículo 84, inciso o) del referido texto legal,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los organismos del Estado que hayan asumido compromisos por contrataciones de servicios o suministros de ejecución continuada por todo el año de 1957 y que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 144 de la ley de contabilidad, sólo tengan crédito para diez meses, imputarán los que correspondan a los meses de noviembre y diciembre próximos a los créditos respectivos del presupuesto 1957/58.

ARTICULO 2º.- En el caso que los referidos organismos cuenten en el presupuesto en vigencia con créditos específicos suficientes para atender los compromisos señalados en el artículo anterior, los imputarán directamente a los mismos, confeccionando el residuo pasivo correspondiente.

ARTICULO 3º.- En lo sucesivo, los organismos de la administración pública deberán contratar los servicios y suministros para atender sus necesidades, en función de los términos del ejercicio financiero que determina la ley de contabilidad.

ARTICULO 4º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Antonio M.Pérez Arango - José M. Fernández Fariña Wifredo Dedeu - Eusebio E. Villar (Vocal acc.) - Juan Carlos Pastone -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.665.-

DIRECC. Gral. de CONTABILIDAD y ADMINISTRACION
Despacho General

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 332.-

COSTO DE VIDA

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1957.-

Visto que el Decreto Nª 1.949 del 30 de enero de 1952 excluyó de los alcances previstos por el Decreto Nª 7.025/51 al personal de la Dirección Nacional de Aduanas en razón de la equiparación de sueldos, que por ese acto se efectuaba, con relación a los del personal de la Dirección Nacional de Puertos que cumplía funciones similares y tampoco percibía dicho adicional, y

CONSIDERANDO:

Que, con posterioridad, por Resolución Nª 766/56 de fecha 6 de noviembre de 1956 el Ministerio de Transportes extendió los beneficios del Decreto Nª 7.025/51 al personal de la Dirección Nacional de Puertos;

Que, ello implica respecto del personal de la Dirección Nacional de Aduanas un tratamiento desigual, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 24 del Decreto-Ley Nª 23.573/56 dispuso la unificación de los adicionales por costo de vida vigentes para el personal de la Administración Nacional;

Que, en consecuencia se conceptúa justo modificar el Decreto Nª 1.949 de fecha 30 de enero de 1952 e incluir en las previsiones del Decreto Nª 7.025/51 al personal de la Dirección Nacional de Aduanas para lo cual, por otra parte, dicha repartición ya cuenta a partir del 1º de enero del corriente año, con los créditos presupuestarios pertinentes en virtud de lo establecido por el Decreto Nª 5.387/57;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1ª.- Considérase comprendido en los beneficios del De

creto Nª 7.025/51 a partir del 1ª de enero de 1957 al personal de la Dirección Nacional de Aduanas y autorízase desde la fecha indicada la liquidación y pago de los adicionales respectivos.

ARTICULO 2ª.- Déjase sin efecto el artículo 2ª del Decreto número 1.949 de fecha 30 de enero de 1952 respecto de los alcances previstos en el artículo precedente.

ARTICULO 3ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nª 11.375.-

DIRECCION Gral de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Dirección General -

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 333.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - INCOBRABILIDAD DE DEUDAS - EJERCICIO - COMPROMISOS - CONTRATACIONES - GASTOS EN PERSONAL - OTROS GASTOS - CONTADORES FISCALES - FONDO PERMANENTE - ORGANIZACION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - HACIENDAS PARA ESTATALES - RESPONSABLES - JUICIO DE RESPONSABILIDAD

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1957.-

Visto la ley de contabilidad y organización de este Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario dictar normas para su mejor cumplimiento e interpretación.

Por ello y atento a la facultad que le otorga el artículo 84 inciso o) de la misma,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Apruébanse las siguientes normas de interpretación y cumplimiento de la ley de contabilidad para los artículos que en cada caso se señalan:

Artículo 22º.- Cuando se solicite previa audiencia de este Tribunal o de sus delegaciones en la declaración de incobrabilidad de deudas, el examen estará referido al cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios.

Artículo 25º.- Con carácter general, entiéndese comprendidos dentro de lo dispuesto por el artículo 25, último pá-

rrafo de la ley, los siguientes gastos:

a) los que deriven de diferencias a pagar, ocurridas con motivo de la variabilidad de precios legalmente consentida o que resulte como consecuencia de la rescisión de contratos por incumpliento del proveedor y su ulterior ejecución a cargo de éste, siempre que tales circunstancias se manifiesten después de cerrado el ejercicio en el que se asumió el compromiso original. En caso contrario, se estará a lo dispuesto por los párrafos 1 y 2 del referido artículo 25 de la ley;

b) los gastos en personal, originados en la situación de revista o actuación de un agente del Estado durante un ejercicio clausurado, siempre que se reunan los siguientes requisitos:

1) que se trate de agentes nombrados por autoridad competente al tiempo en que los mismo se hayan devengado;

2) que haya existido saldo suficiente en la pertinente partida principal del presupuesto del año en que tales gastos fueron devengados como asimismo en el de su liquidación;

3) que no se hayan incluído en el correspondiente residuo pasivo.

Si los gastos referidos no reunieran los requisitos señalados deberá solicitarse el correspondiente crédito al Honorable Congreso, siempre que no existiera una ley permanente para la atención de gastos de ejercicios vencidos.

En los casos de obras y trabajos por administración la pertinente aprobación de realización de la obra o trabajo determinará el compromiso.

Quedan excluídos del último párrafo del artículo 25 de la ley todas aquellas deudas por gastos realizados sin contar con la aprobación de autoridad competente. En tales casos,el

pronunciamiento de la referida autoridad reconociendo la deuda y declarando su pago de legítimo abono, determinará el compromiso que deberá satisfacerse con el crédito legal pertinente.

Artículo 44°.- los contadores fiscales a cargo de representaciones de este Tribunal cuando consideren que se hallan frente a casos como los señalados por el artículo 44 de la ley deberán comunicar tal circunstancia a la superioridad fundamentando debidamente su opinión al respecto.

Artículo 48°.- Los contadores fiscales a cargo de representaciones de este Tribunal vigilarán que los "fondos permanentes" instituídos en los diversos organismos de la administración nacional sean adecuados a las reales necesidades y no se mantengan ociosos injustificadamente, informando a la superioridad a los efectos dispuestos por el artículo 44 de la ley.

Artículo 78°.- Antes de prestar juramento, los vocales de este Tribunal deberán presentar una declaración jurada en la que conste que no se encuentran comprendidos en las situaciones a que se refiere el artículo 79 de la ley.

Artículo 80°.- La excusación de un vocal, fundada en las causales que determina el artículo 80 de la ley, será admitida sin más trámite.

En los casos de recusación, si el vocal afectado no reconociera la causa invocada y no se excusara, se requerirá del recusante la presentación de las pruebas de su aserto, dentro de un plazo no menor de cinco ni mayor de diez días.

Presentadas las pruebas o vencido el término fijado, este Tribunal, resolverá la recusación en el primer acuerdo plenario, integrado en la forma prevista por el artículo 82 de la ley,con audiencia del vocal recusado.

Artículo 81°.- Si este Tribunal resolviera nombrar contadores fiscales "ad-hoc",los candidatos deberán reunir los

requisitos exigidos por el artículo 81 de la ley.

Artículo 82º.- En el último acuerdo plenario que celebre este Tribunal, en el mes de octubre de cada año, deberá confeccionarse la lista de subrogantes a que se refiere el artículo 82º de la ley, para el año siguiente. El funcionario desinsaculado no podrá ser sorteado hasta que no lo hayan sido todos los restantes.

El sorteo será practicado por el secretario administrativo en presencia del presidente de este Tribunal.

Los subrogantes, antes de entrar en funciones por primera vez, deberán prestar el juramento a que se refiere el artículo 78º, sexto párrafo de la ley.

Artículo 83º.- Los pronunciamientos previos y las resoluciones adoptadas por mayoría de los miembros de este Tribunal o de sus salas no comprometen la responsabilidad del o de los vocales no intervinientes, quienes, en caso de discrepancia, podrán posteriormente hacer labrar acta, al solo efecto de dejar constancia de su opinión.

Los representantes de este Tribunal -contadores fiscales, auditores y sumariantes- quedan autorizados para solicitar directamente por sí a los organismos nacionales todos los antecedentes e informes que les sean necesarios para el cumplimiento de su cometido.

Artículo 86º.- En las causas que se sustancien de conformidad con el Código de la Justicia Militar la intervención de este Tribunal, de acuerdo con el artículo 86 de la ley, será al solo efecto de tomar conocimiento del monto del cargo o alcance establecido por los tribunales militares o bien para determinarlo sobre las bases que los mismos establezcan.

Artículo 138º.- En función de lo determinado por el artículo 138 de la ley, este Tribunal determinará, en cada caso, el régimen de fiscalización de las haciendas para estatales.

Artículo 149º.- Déjase establecido que los responsables a quienes se juzgare por las prescripciones de la ley nº 12.961, tendrán todos los derechos y obligaciones que ésta le acuerda, especialmente el recurso de apelación ante el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 2º.- Regístrese, dése a conocer por Digesto Administrativo y archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Antonio M. Pérez Arango - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Eusebio Villar (Vocal acc.) Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.636.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 334.-

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA - INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1957.-

Vistos los expedientes números 290.178 y 291.979 del año 957 elevados por la Dirección General Impositiva, relacionados con la situación del Oficial Superior de 4a. y del Auxiliar 3º de la misma, señores Lorenzo Anadón y José Ignacio Heras Abeleira; y

CONSIDERANDO:

Que los interesados en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto nº 19.108 del 11 de Noviembre de 1954, sobre incompatibilidades, presentaron oportunamente las correspondientes declaraciones juradas de acumulación de cargos, en las que consignaron que además del puesto de que son titulares en la aludida repartición se desempeñan en la actividad privada como redactores del matutino "La Nación" y del diario "La Gaceta" de Tucumán, respectivamente;

Que el Tribunal de Cuentas de la Nación al expedirse sobre el particular consideró, en mérito a lo preceptuado en el apartado 25º del Reglamento Anexo al artículo 9º del decreto número 5.387 del año 1957 (Escalafón para el Personal de la Dirección General Impositiva), que los nombrados se hallaban inhibidos para el ejercicio de la mencionada actividad privada, motivo por el cual el Departamento de Hacienda con fecha 11 y 18 de julio de 1957, declaró incompatibles las situaciones de los causantes;

Que la repartición del ramo -a raíz del recurso de reconsideración interpuesto por los aludidos agentes- estima en sus notas elevatorias obrantes a fs. 15 del expediente Nº 290.178/57 y fs. 24 del número 291.979/57, que podría autorizarse a

los señores Anadón y Heras Abeleira para que ejerzan la actividad privada que acumulan;

Que al respecto la Dirección General Impositiva destaca, que si bien la norma citada dice textualmente: "los cargos de la Dirección General Impositiva son incompatibles con el desempeño de otras funciones públicas o privadas remuneradas, salvo las docentes y las expresamente autorizadas por disposiciones legales o reglamentarias", de la interpretación de la última parte de la misma trasciende en forma explícita que además de las docentes, podrán ejercerse las funciones especialmente determinadas en la reglamentación pertinentes;

Que frente a lo expuesto y hasta tanto se dicte la reglamentación pertinente, procede -teniendo en cuenta la opinión sustentada por la mencionada dependencia- autorizar a los nombrados a ejercer la actividad periodística que desarrollan, como así también extender esta franquicia a todos aquellos agentes de la citada repartición que se hallaren en idéntica situación, siempre que a juicio de la misma ello no implique detrimento del servicio u otra causal inhibitoria prevista en las reglamentaciones vigentes sobre incompatibilidades;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Autorízase al Oficial Superior de 4a. y al Auxiliar 3º de la Dirección General Impositiva, señores Lorenzo ANADON (Cl.1893, D.M. 3, M. 353.345) y José Ignacio HERAS ABELEIRA (Cl.1930, D.M.57, M. 7.035.062), para ejercer las actividades privadas denunciadas en autos.

ARTICULO 2º.- Declárase no comprendidas -como excepción y hasta tanto se dicte la reglamentación pertinente- en las prescripciones del Apartado 25º del Reglamento Anexo al artículo 9º del decreto número 5.387 del 22 de Mayo de 1957, a las actividades periodísticas, siempre que las mismas, a juicio de la Dirección General Impositiva no impliquen detrimento del

servicio u otra causal inhibitoria prevista en las reglamentaciones vigentes sobre incompatibilidades.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda para su conocimiento y demás efectos.

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nª 11.527.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Despacho General

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 335.-

INSTITUTO NACIONAL DE ACCION SOCIAL - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Buenos Aires, 1ª de octubre de 1957.-

Visto que por el Decreto-Ley nª 11.922 de fecha 4 de julio de 1956 fueron incorporados al patrimonio del Estado Nacional todos los bienes, derechos y acciones de la Institución creada el 18 de junio de 1948 y reconocida como persona jurídica por Decreto nª 20.564 del 8 de julio de 1948, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado Decreto-Ley se dispone que dichos bienes sean transferidos a las instituciones nacionales, provinciales o municipales con la organización y competencia necesarias para que aquellos bienes se apliquen siempre y sin interferencias de ninguna índole a una obra de verdadera utilidad social;

Que para ello se ha encomendado al Ministerio de Hacienda de la Nación la designación de una Comisión que se haga cargo del Instituto Nacional de Acción Social creado por Decreto-Ley número 556 de fecha 8 de octubre de 1955,

Que en cumplimiento de los fines expresados en el Decreto-Ley nª 11.922/56 se dictaron -entre otros- los siguientes actos de gobierno:

Decreto-Ley nª 153/56, transfiriendo a la Universidad Nacional de Cuyo el Policlínico de la Provincia de Mendoza, para ser destinado a una Escuela Hospital;

Decreto nª 5433/56, transfiriendo al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, el uso de la Ciudad Infantil y de la Ciudad Estudiantil,con desti

no al Instituto Nacional de Rehabilitación del Lisiado;

Decreto nº 17.800/56, transfiriendo al Ministerio de Hacienda de la Nación -Dirección General Inmobiliaria- las Unidades Turísticas ubicadas en Chapadmalal (Provincia de Buenos Aires), de Embalse Río III (Provincia de Córdoba) y de Alta Montaña (Provincia de Mendoza), a fin de que dicho Organismo continúe con su explotación;

Decreto nº 21.353/56, transfiriendo al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, con destino a la Dirección de Servicios Sociales Especiales -Departamento de Ciegos-, el inmueble ubicado en la calle Lafinur nº 2986/88/94 y Gutiérrez nº 3926 de la Capital Federal, ex Hogar de Tránsito nº 2;

Decreto nº 21.641/56, reintegrando al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, el inmueble ubicado en la Avenida Callao nº 1218 de la Capital Federal;

Decreto nº 22.201/56, transfiriendo al Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, con destino a la Universidad Nacional del Litoral, el establecimiento sanitario ubicado en la localidad de Granadero Baigorria, Departamento de Rosario, Provincia de Santa Fe, sobre la Ruta Nacional nº 11;

Decreto nº 22.548/56, transfiriendo al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, el establecimiento denominado "Servicios Asistenciales de Urgencias", ubicado en la Avenida Callao nº 1387 de la Capital Federal;

Decreto nº 21.752/56 concediendo el uso al Ministerio del Interior, con destino a la Dirección Nacional de Migraciones, del edificio ubicado en la Avenida Paseo Colón nº 560/68 de la Capital Federal, con sus instalaciones, muebles, útiles y accesorios;

Decreto nº 21.056/56, transfiriendo sin cargo al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a todas las Provincias, la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE (2.575.379) prendas de vestir para hombres, señoras, niños y niñas, para su posterior distribución entre los sectores más necesitados de la población;

Decreto nº 223/57, transfiriendo sin cargo a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Educación y Justicia y a todas las Provincias, la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL (950.000) juguetes para su posterior distribución -con carácter gratuito- entre los sectores más necesitados de la población infantil;

Decreto nº 5117/57, transfiriendo sin cargo a todas las Provincias, para su posterior ubicación en lugares públicos, la cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES (143) Parques Infantiles;

Decreto nº 5118/57, transfiriendo sin cargo al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y a todos los Estados Provinciales, la cantidad de UN MILLON SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE (1.070.417) prendas y elementos deportivos para su otorgamiento a todas aquellas personas y asociaciones que propendan al fomento de las actividades deportivas;

Decreto nº 3903/57, transfiriendo al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, el Departamento de Asistencia Médica y sus dependencias: a) Policlínico de Avellaneda, ubicado en la Ciudad de Avellaneda, Partido del mismo nombre de la Provincia de Buenos Aires; b) Policlínico de Lanús, ubicado en la Ciudad de Lanús, Partido del mismo nombre de la Provincia de Buenos Aires; c)

Policlínico de San Martín ubicado en la Ciudad de San Martín, Partido del mismo nombre de la Provincia de Buenos Aires; d) Policlínico de Ezeiza, sito en el Barrio Esteban Echeverria, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires; e) policlínico de Niños de Catamarca, ubicado en la Ciudad de Catamarca de la Provincia del mismo nombre; y f) Instituto de Quemados-Cirugía Plástica y Recuperadora, sito en la calle Viamonte nº 2189 de la Capital Federal;

Decreto nº 5001/57, transfiriendo a la Provincia de Córdoba el establecimiento ubicado en la Ciudad de Córdoba, camino a la localidad de Alta Gracia, Km. 15, con destino a un Hogar para Ancianos;

Decreto-Ley nº 5285/57, transfiriendo al Hogar de Tránsito nº 1, ubicado en la calle Las Heras nº 1773 de la Capital Federal, al Ministerio de Educación y Justicia, con destino al Consejo Nacional del Menor;

Decreto nº 5289/57, transfiriendo a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las obras en construcción ubicadas en la intersección de las calles Warnes y Chorroarín de la Capital Federal;

Decreto nº 5422/57, transfiriendo a la Provincia de Tucumán y con destino a un Centro de Rehabilitación del Lisiado poliomelítico, el establecimiento denominado "Hogar Escuela de la Ciudad de San Miguel de Tucumán";

Decreto nº 5574/57, concediendo el uso -a título gratuito- a la persona jurídica "Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer" el inmueble ubicado en la calle Chorroarín nº 601/51 con frente a la de Tronador nº 38 y Baunes sin número de la Capital Federal, con destino al Hogar para Enfermos Crónicos Indigentes;

Decreto-Ley nº 5591/57, transfiriendo al Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, con destino al Consejo Na-

cional de Educación, los Hogares Escuelas ubicados en:Ezeiza, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires; Santa Rosa, Departamento Capital, Provincia de La Pampa; Corrientes, Departamento Capital, Provincia de Corrientes; Salta, Departamento Capital, Provincia de Salta; San Salvador de Jujuy, Departamento Capital, Provincia de Jujuy; Villa Krause, Departamento Rawson, Provincia de San Juan; Mendoza, Departamento Capital, Provincia de Mendoza; Villa Mercedes, Departamento General Pedernera, Provincia de San Luis; Santiago del Estero, Departamento Capital,Provincia de Santiago del Estero; Catamarca, Departamento Capital, Provincia de Catamarca; Granadero Baigorria, Departamento Rosario, Provincia de Santa Fe; y el Hogar Escuela próximo a habilitarse ubicado en Paraná, Departamento de Paraná, Provincia de Entre Ríos, y asimismo, con destino a la Universidad de Tucumán el inmueble ubicado en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, denominado "Hogar para Ancianos";

Decreto nº 5668/57, transfiriendo al Ministerio de Hacienda de la Nación - Dirección General de Suministros del Estado- todas las existencias de elementos -no utilizables para fines sociales- a efectos de proceder a su venta;

Decreto nº 5735/57, transfiriendo al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, los servicios de Conservación, Talleres y Depósitos y Administración de Obras Menores del Gran Buenos Aires, con todos sus bienes patrimoniales existentes en los mismos, reintegrándose,asimismo, a la citada Secretaría de Estado, el dominio perfecto del inmueble sito en la calle Súarez nº 2215 de la Capital Federal;

Decreto nº 5804/57, transfiriendo al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación -Dirección General de Reconocimiento Médico- el Servicio de Reconocimiento Mé

dico con todos sus bienes, muebles y personal;

Decreto nº 7330/57, encomendando al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, para su terminación y posterior transferencia a sus destinos definitivos, que se hará por conducto del Ministerio de Hacienda de la Nación, la prosecución de las obras que se mencionan a continuación: Ciudad Universitaria, ubicada en Parque Sarmiento de la Provincia de Córdoba; Comedor Universitario de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires; Escuela nº 32, Localidad La Sara, Provincia de Santa Fe; Escuela nº 245, Localidad de Aráoz, Provincia de Tucumán; Hogar Escuela de Resistencia, Provincia del Chaco; Hogar Escuela de La Rioja, Provincia de La Rioja, Hogar Escuela de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut; Policlínico de Concordia, Provincia de Entre Ríos; Policlínico de Paso de Los Libres, Provincia de Corrientes; Policlínico de Corrientes, Provincia de Corrientes, Policlínico de Salta, Provincia de Salta; Policlínico de Jujuy, Provincia de Jujuy; Policlínico de Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero, y Policlínico de San Juan, Provincia de San Juan;

Decreto nº 8272/57, transfiriendo al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, el establecimiento sanitario denominado "Clínica y Cirugía del Tórax", ubicado en la Ciudad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, previo su terminación por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación;

Decreto nº 13.575/57, transfiriendo al Ministerio de Marina, con destino a la Prefectura Nacional Marítima, el uso del edificio ubicado en la Avenida Paseo Colón nº 533 de la Capital Federal;

Decreto-Ley nº 6813/57, entregando a EMAUS, con carácter gratuito, el inmueble ubicado en la calle Cochabamba nº

466 de la Capital Federal, para ser destinado como Albergue de Tránsito;

Decreto-Ley nº 3205/57, concediendo el uso -a título gratuito al Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, del Templo "San Juan el Precursor" y casa anexa, ubicado entre las calles Rogelio Yrurtia, Miguel A. Camino, Alberto Williams y Alfonsina Storni, en el Barrio Cornelio Saavedra de la Capital Federal; y en las mismas condiciones al Obispado de Tucumán, la Capilla del Hogar Escuela ubicado en la Avenida Benjamín Aráoz nº 880 de la Ciudad de San Miguel de Tucumán;

Decreto nº 9693/57, transfiriendo al Hogar Escuela de Termas de Reyes de la Provincia de Jujuy, a dicho Estado Provincial;

Decreto nº 9899/57, transfiriendo el inmueble ubicado en la calle Almafuerte nº 340 de la Capital Federal al Ministerio de Educación y Justicia;

Que asimismo se han dispuesto, por el Poder Ejecutivo, numerosas transferencias a dependencias del Estado, de elementos no utilizables para fines sociales;

Que, con el objeto de satisfacer necesidades de orden social, cultural y educacional se han atendido importantes solicitudes de transferencias de bienes muebles y elementos que fueron distribuidos en todo el país, por entidades públicas y privadas, dictándose en cada caso el respectivo decreto del Poder Ejecutivo;

Que conforme a lo establecido en el artículo 51ª de la Ley de Contabilidad -Decreto-Ley nº 23.354/56- han pasado a jurisdicción del Ministerio de Hacienda de la Nación -Dirección General Inmobiliaria- los inmuebles no utilizados en los servicios del Instituto Nacional de Acción Social ubicados en: Moreno nº 711/17, Capital Federal; Cerrito nº 362/78, Capital

Federal; Paseo Colón nº 540, Capital Federal; Carlos Calvo nº 102 y Azopardo nº 1049, Capital Federal; Marcos Paz nº 3776, Capital Federal; calle Jujuy nº 1142, Capital Federal, calle Anatole France nº 905 esquina General Mansilla; General Mansilla nº 2385; General Mansilla nº 2375 y Anatole France nº 927, de la Ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires; Avenida de Mayo nº 589/99 y Perú nº 30 de la Capital Federal;

Que con ello las actividades del Instituto Nacional de Acción Social han quedado reducidas prácticamente a la liquidación del pasivo existente y a la atención de los fondos que requieren los organismos que recibieron las transferencias, hasta tanto incorporen en sus respectivos presupuestos las partidas necesarias para el mantenimiento de los servicios;

Que tales tareas, juntamente con la administración de algunos bienes -en número reducido- que, por razones especiales, no ha podido a la fecha dárseles el destino previsto en el Decreto-Ley nº 11.922, pueden ser atendidas por el Ministerio de Hacienda de la Nación, por intermedio de la Dirección General de Contabilidad y Administración;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Declárase disuelto el Instituto Nacional de Acción Social, creado por el decreto-ley nº 556 de fecha 8 de octubre de 1955.

ARTICULO 2º.- Los bienes muebles, inmuebles, personal y demás elementos a que alude el artículo 5º del decreto-ley nº 11.922/56, continuarán afectados transitoriamente al Ministerio de Hacienda de la Nación, hasta su total liquidación, realización y/o distribución.

ARTICULO 3º.- Transfiérense al Ministerio de Hacienda de la Nación las funciones que tenía asignada la Comisión Administradora del Instituto Nacional de Acción Social, a los efectos del cumplimiento de las disposiciones del decreto-ley nº 11.922/56, las que serán cumplidas por intermedio de la Dirección General de Contabilidad y Administración, con limitación a los aspectos vinculados con la realización del Activo y percepción de los derechos y créditos existentes, cancelación total del Pasivo y obligaciones a la fecha en que se haga efectiva la transferencia, como así también a todos aquellos actos que sean consecuencia natural o inmediata de dicho cometido.

ARTICULO 4º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, determínase que los reconocimientos y/o pagos de las obligaciones pendientes de aprobación, originadas en actos anteriores a la fecha de hacerse efectiva la transferencia de que se trata, serán aprobados por el Poder Ejecutivo. Los reconocimientos y/o pagos de obligaciones producidas por actos posteriores a dicha transferencia, serán substanciados y aprobados conforme al régimen de autorizaciones jurisdiccionales vigente en el Ministerio de Hacienda y las normas establecidas por la Ley de Contabilidad aprobada por decreto-ley nº 23.354/56.

ARTICULO 5º.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º acuérdase a la Dirección General de Contabilidad y Administración del Ministerio de Hacienda, las facultades necesarias para la realización de todos los actos de administración y de conservación, para el cumplimiento de las funciones que se le encomiendan por el presente decreto-ley, no pudiendo practicar actos de disposición de bienes inmuebles.

ARTICULO 6º.- El Ministerio de Hacienda de la Nación dispondrá la creación en su jurisdicción de una Cuenta Especial, directamente administrada por la Dirección General de Contabilidad y Administración. Dicha cuenta especial se acreditará con los recursos atribuídos al Instituto Nacional de Acción Social, que se asignan por el presente al Ministerio de

Hacienda de la Nación -Dirección General de Contabilidad y Administración- y se debitará por las erogaciones que se produzcan con motivo de las funciones que se encomiendan a la nombrada Repartición. Los saldos anuales de esta cuenta se transferirán al ejercicio siguiente.

ARTICULO 7º.- La Comisión Administradora del Instituto Nacional de Acción Social presentará un Estado Financiero conteniendo en detalle la totalidad de valores, créditos y obligaciones a cargo del organismo a la fecha de transferencia.

ARTICULO 8º.- Los inmuebles, mobiliario, mercaderías, bienes de uso y consumo, que por su naturaleza no integren el Estado Financiero a que se refiere el artículo precedente, serán entregados por la Comisión Administradora a la Dirección General de Contabilidad y Administración con inventarios parciales atendiendo a la transferencia de servicios, conforme a las previsiones del artículo 3º, labrándose en cada oportunidad las pertinentes actas de traspaso.

ARTICULO 9º.- Hasta tanto los distintos Departamento de Estado incorporen a sus respectivos presupuestos los créditos destinados a la afectación de los gastos de funcionamiento de las dependencia que oportunamente le fueran transferidas, se continuarán afrontando los mismo con los recursos previstos en el artículo 6º.

ARTICULO 10º.- Finalizada la liquidación, realización y/o distribución de los bienes, créditos y obligaciones transferidos del Instituto Nacional de Acción Social, los fondos sobrantes se ingresarán a Rentas Generales, practicándose en tal oportunidad la cancelación de la Cuenta Especial creada por el artículo 6º.

ARTICULO 11º.- Mantiénese en vigencia el decreto-ley nº 11.922/56 en todo cuanto no se oponga al presente y derógase toda disposición en contrario de ese u otro acto legal vigente.

ARTICULO 12º.- El presente decreto-ley será refrendado por el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, Guerra, Marina y Aeronáutica.-

ARTICULO 13º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de Hacienda de la Nación, a sus efectos.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Adalbert Krieger Vasena - Víctor J. Majó - Teodoro Hartung - Jorge H. Landaburu.-

DECRETO-LEY Nº 12.029.-

ACCIDENTES DEL TRABAJO

Buenos Aires, agosto 29 de 1956.

Visto el expediente Nº 4.502/56 del Ministerio de Trabajo y Previsión y de conformidad a los principios que sostiene este Gobierno Nacional en el sentido de resolver con urgencia los problemas que puedan plantearse en el campo de la previsión social, aunque ellos fueren circunstanciales, y

CONSIDERANDO:

Que el régimen de la Ley Nº 9.688 aún vigente -sujeto a revisión integral de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto-Ley Nº 5.005/56- estatuye el pago de las indemnizaciones derivadas de accidentes fatales o por incapacidades absolutas y permanentes en forma de renta (Artículo 9º y 105 del texto legal citado y de su reglamento, respectivamente;

Que la referida modalidad de pago, hasta la fecha de la última reforma de la ley que fija nuevos topes indemnizatorios (Decreto-Ley 650/55), trae como consecuencia que las rentas que se abonan fluctúen entre diez y sesenta pesos moneda nacional mensuales, hecho que se agrava en casos en que son varios los titulares de las mismas;

Que de ello resulta una situación absurda, y antieconómica que no concuerda con la alta finalidad de la seguridad social, en cuanto torna irrisorios sus beneficios;

Que por tanto es aconsejable liquidar a los titulares de rentas por accidentes del trabajo ocurridos con anterioridad al 10 de octubre de 1955, fecha del Decreto-Ley Nº 650/55, de una sola vez en forma de capital;

Que por otra parte la venta de títulos nacionales que es

menester realizar para hacer frente a los gastos consiguientes, no gravita sobre el erario público, por estar aquéllos ya afectados al pago de dichas indemnizaciones;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Las rentas pendientes de pago correspondientes a titulares por accidentes del trabajo ocurridos con anterioridad al 10 de octubre de 1955, se abonarán de una sola vez en forma de capital.

ARTICULO 2º.- Autorízase la enajenación de "Oblicaciones de Previsión Social", por un valor de quince millones de pesos moneda nacional (m$n. 15.000.000.-) con destino a cubrir la erogación que implica el Artículo 1º.

ARTICULO 3º.- El presente decreto-ley será refrendado por el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Trabajo y Previsión, Hacienda, Ejército, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Raúl C.Migone - Eugenio A. Blanco - Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung - Julio C. Krause.-

DECRETO-LEY Nº 15.783.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín 337.-

CIUDADANIA - NATURALIZACION

Buenos Aires, agosto 8 de 1956.-

Visto la necesidad imperiosa de proceder a la reforma de la legislación dictada por el régimen depuesto en materia de ciudadanía y naturalización; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 14.354 sobre ciudadanía y naturalización contiene principios contrarios a la Constitución de 1853, puesta en vigencia por el Gobierno Provisional en ejercicio de sus poderes revolucionarios;

Que aun cuando se encare con la premura que las circunstancias exigen, el estudio y sanción de un nuevo régimen de ciudadanía y naturalización, deben evitarse los perjuicios que la derogación de la Ley número 14.354 ocasionaría al elevado número de extranjeros que han solicitado la naturalización de acuerdo con las normas que aquélla contiene;

Que las razones que anteceden hacen aconsejable establecer normas de emergencia que remedien tal situación, hasta tanto sea promulgada la nueva legislación de la materia, para lo cual debe reimplantarse con algunas salvedades la tradicional Ley Nº 346 y su decreto reglamentario del 19 de diciembre de 1931;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Derógase la Ley Nº 14.354.

ARTICULO 2º.- El Poder Ejecutivo designará una comisión honoraria para que en el término de noventa días proyecte un nuevo régimen de ciudadanía y naturalización, acorde con los principios de la Constitución Nacional vigente y los supremos intereses de la República.

ARTICULO 3º.- Hasta tanto se sancione el nuevo régimen de ciudadanía y naturalización se aplicará con carácter de emergencia, la Ley número 346, de octubre 8 de 1869, con las salvedades que se especifican en el presente decreto-ley.

ARTICULO 4º.- Durante ese período, las funciones que la ley Nº 346 confiere a los jueces federales serán ejercidas, en la Capital Federal, por el Director General del Registro Nacional de las Personas y, en las provincias, por los secretarios electorales, en el carácter de delegados de aquél.

ARTICULO 5º.- Los pedidos de naturalización en trámite ante el Registro Nacional de las Personas o sus delegaciones regionales serán resueltos por dichos organismos, con apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones que corresponda, en la forma y términos que establecen las leyes procesales vigentes.

ARTICULO 6º.- En defecto de partida de nacimiento y previa justificación de la imposibilidad de presentarla, se admitirá la prueba supletoria de la edad y de la extranjería. Dicha prueba se producirá ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil que corresponda al domicilio del peticionante.

ARTICULO 7º.- Mientras rija el presente decreto-ley no se dará curso a nuevas solicitudes de naturalización.

Los hijos de argentinos nativos que, habiendo nacido en país extranjero, desearen optar por la ciudadanía de origen, podrán ejercer tal derecho ante el Registro Nacional de las Personas o sus delegados, según corresponda al domicilio del peticionante.

ARTICULO 8º.- Los recursos jerárquicos interpuestos ante el Ministerio del Interior contra resoluciones denegatorias del Registro Nacional de las Personas que no hayan sido resueltos

a la fecha del presente decreto-ley, serán girados por dicho Ministerio para su resolución a la Cámara Nacional de Apelaciones que corresponda a la jurisdicción en que tramitè la solicitud de naturalización.-

ARTICULO 9º.- La ciudadanía argentina no será exigida a los agentes del servicio civil de la Nación o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentren en actividad, jubilados o por jubilarse, a la fecha del presente decreto-ley. Por el Ministerio del Interior se impartirán instrucciones a los Interventores Federales en las provincias, a efectos de que idéntica previsión se adopte en sus respectivas jurisdicciones.

ARTICULO 10º.- El presente decreto-ley será refrendado por el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los departamentos de Interior, Ejército, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 11º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Laureano Landaburu - Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung - Julio C. Krause.-

DECRETO-LEY Nº 14.194.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 338.

JUBILACIONES

Buenos Aires, agosto 29 de 1956.-

Visto que es necesario actualizar las disposiciones de los Artículos 17º y 19º de la Ley Nº 14.236, referentes a las sanciones en que incurren los empleadores y afiliados de las Cajas Nacionales de Previsión por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los respectivos regímenes previsionales; y

CONSIDERANDO:

Que a los efectos de facilitar la reglamentación pertinente, dispuesta por el Artículo 21º de la citada ley, resulta indispensable contar con un adecuado texto de los Artículos 17º y 19º, que contemple las distintas clases de infracciones y las modalidades actuales y futuras de la previsión social;

Que posteriormente a la promulgación de la Ley Nº14.236 fueron establecidos otros estatutos legales, fijando obligaciones y derechos a personas que desarrollan actividades por cuenta propia, es decir, sin relación de dependencia, para las cuales no se establecen taxativamente las sanciones determinadas en el artículado de referencia;

Que, por otra parte, es innegable la necesidad de graduar las penalidades en razón directa de la importancia, antigüedad, monto, etc., de las infracciones, con el objeto de fortalecer el sentido cabal del cumplimiento de las obligaciones contraídas;

Que el Gobierno Provisional, consecuente con su política de recuperación nacional ha facilitado, previamente, por el Decreto-Ley Nº 5.146/56 las condiciones más amplias y có

modas para regularizar las situaciones de mora en que se encontraban los empleadores deudores delas Cajas, a fin de que no tuvieran entorpecimiento alguno en sus actividades por una posible ejecución compulsiva de sus deudas;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Substitúyense los textos de los Artículos 17º y 19º de la Ley Nº 14.236 por los siguientes:

Artículo 17º.- El incumplimiento por parte del empleador de las oblicaciones, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones; que se graduarán teniendo en cuenta el carácter y monto de la infracción, su antigüedad y demás circunstancias que hacen el caso:

a) de $ 1.000.- a $ 10.000.- por falta de inscripción;
b) de $ 100.- a $ 1.000.- por cada trabajador no denunciado, o que se encontrare en infracción respecto a las leyes de previsión social, o cuando no le efectuare la retención total de aportes;
c) Del 5 % al 50% del total adeudado, por incurrir en mora en el pago de las contribuciones y depósitos de los aportes sin perjuicio de los intereses moratorios previstos en las respectivas leyes. La misma sanción se aplicará a quienes se hallan legalmente obligados a efectuar cualquier otra contribución o depósito fijados por los distintos regímenes de previsión social y no los hicieren;
d) de $ 100.- a $ 10.000.- por la negativa infundada a suministrar los informes requeridos por la autoridad de aplicación o por falsa declaración o adulteración de datos referentes a los beneficiarios;
e) de $ 100.- a 1.000.- por la mora en la presentación de planillas o declaraciones juradas relativas al perso-

nal ocupado, dentro del plazo señalado por las disposiciones vigentes;

f) de $ 100.- a 1.000,- por violación de toda otra disposicion emergente de las leyes de previsión social o establecida por la autoridad de aplicación en uso de sus facultades y que no tuviera otra sanción.

Articulo 19º.- El incumplimiento por parte de los afiliados de las obligaciones que las leyes de previsión social ponen a su cargo, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:

1.- Afiliados que trabajan en relación de dependencia: incurrirán en multa de $ 50.- a $ 500.-

a) por la negativa infundada a suministrar los informes requeridos por la autoridad de aplicación;
b) por la violación de toda otra obligación emergente de las leyes de previsión o que fueran establecidas por la autoridad de aplicación en uso de sus facultades y que no tuvieran otra sanción.

2.- Afiliados que trabajan por cuenta propia: incurrirán en multa de $ 100,- a $ 10.000,-

a) por omitir su inscripción;
b) por mora en el pago de aportes y contribuciones, sin perjuicio de los intereses moratorios previstos en el respectivo régimen legal;
c) por la negativa infundada a suministrar cualquier informe requerido por la autoridad de aplicación o por falsa declaración, adulteración de datos referentes a la actividad que desempeña u ocultación de los ingresos realizados provenientes de su actividad;
d) por mora en la presentación de planillas o declaraciones juradas, de acuerdo con las normas vigentes en el régimen previsional que corresponda,

e) por violación de cualquier otra disposición que emane de la autoridad de aplicación y no tuviere sanción legal expresa.

Las personas que trabajen por cuenta propia y se afiliaren por opción, autorizada en un determinado régimen de previsión social, perderán esta afiliación voluntaria al incurrir en mora en el depósito de aportes y contribuciones y se considerarán automática e irrevocablemente incorporadas al régimen de la Ley Nº 14.397, salvo causa debidamente justificada a juicio del Directorio de la respectiva Caja.

ARTICULO 2º.- El presente Decreto-Ley será refrendado por el señor Vicepresidente Provisional y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Trabajo y Previsión, Hacienda, Ejército, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial, publíquese y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Raúl C. Migone - Eugenio A. Blanco - Arturo Ossorio Arana - Teodoro Hartung - Julio C. Krause.-

DECRETO-LEY Nº 15.782

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 339.-

MISIONES AL EXTERIOR

Buenos Aires, octubre 26 de 1956.

Tengo el agrado de dirigirme a V.S., a fin de exponerle algunas consideraciones que guardan relación con las misiones que pudieran enviarse al exterior por los distintos Ministerios.

En los casos en que le tocara actuar a la Cancillería, ésta informa a las Representaciones Diplomáticas acerca de su constitución y fines y, en lo posible, fecha de arribo o destino.

Cuando a este Ministerio no se le ha dado intervención, se presenta el caso -por cierto irregular-, de que el Jefe de Misión, en desconocimiento de ello, no pueda informar al Gobierno ante el cual está acreditado, como así ha ocurrido en casos concretos, acerca de la llegada de misiones argentinas de las que esos Gobiernos han tomado conocimiento por conducto ajeno a la Representación Diplomática.

La sugerencia que seguidamente se formula, obedece exclusivamente, al fin de coordinar el nombramiento de las misiones que se realicen por los Ministerios, con la comunicación de rigor que esta Cancillería debe hacer a sus funcionarios destacados en el exterior para que, en posesión de la misma puedan cumplir su cometido ante el Gobierno ante el cual están acreditados, al propio tiempo que iniciar los trámites inherentes a la llegada al país de los miembros que la componen.

Esta Cancillería estima, de ser tal el pensamiento de ese Ministerio que toda misión que deba salir al exterior sea comunicada, con copia autenticada del decreto respectivo, a esta Secretaría para que, de inmediato y por el Organis-

mo competente se efectúen las comunicaciones del caso.

Esta información debería ser posteriormente ampliada, con la comunicación de fecha de partida y medio de transporte a utilizarse para el desplazamiento de los miembros integrantes de la respectiva misión.-

En espera de que el temperamento propuesto cuenta con la aprobación de ese Ministerio y con la manifestación de que esta Cancillería agradecerá cualquier sugerencia que en vista al fin perseguido crea oportuno hacerle llegar, me es grato saludarlo con mi más distinguida consideración.-

Fdo. Luis S. Castiñeiras
Subsecretario de
Relaciones Exteriores

NOTA Nº 8.111.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín N°340.-

PASAPORTES

Buenos Aires, 20 de agosto de 1956.-

Visto la necesidad de modificar las disposiciones vigentes sobre pasaportes diplomáticos y oficiales,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.- El otorgamiento de pasaportes diplomáticos y oficiales se efectuará por intermedio del Ceremonial del Estado en las condiciones establecidas por el presente decreto.

ARTICULO 2°.- Los pasaportes diplomáticos serán acordados exclusivamente a:

a) funcionarios pertenecientes al Servicio Exterior de la Nación y Correos de Gabinete, cuando viajen en cumplimiento de la misión que se les haya asignado;
b) Delegados Plenipotenciarios en misión Especial ante Gobiernos extranjeros o a Conferencias u Organismos Internacionales, designados especialmente por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional;
c) Presidente del Honorable Senado de la Nación, Presidente Provisorio del Honorable Senado de la Nación; Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
d) Ministros del Poder Ejecutivo Nacional;
e) Cardenales;
f) Comandante en Jefe del Ejército, Comandante en Jefe de Operaciones Navales y Comandante en Jefe de la Fuer

za Aérea.

ARTICULO 3°.- Las esposas de las personas mencionadas en los incisos b), c), d) y f) del artículo 2°, las hijas solteras a cargo del mismo e hijos menores de edad serán incluídos en el pasaporte del titular.

ARTICULO 4°.- La esposa, las hijas solteras e hijos menores de edad, de los miembros del Servicio Exterior de la Nación recibirán pasaporte diplomático individual; los padres, hermanas solteras y hermanos menores, tendrán derecho al mismo pasaporte, siempre que se acredite fehacientemente que se encuentran a su cargo. En todos los casos se requerirá petición por escrito del funcionario.

ARTICULO 5°.- A la esposa extranjera de un funcionario del Servicio Exterior de la Nación recién le corresponde el pasaporte diplomático individual cuando haya cumplido con el requisito legal de obtener la ciudadanía argentina y la libreta cívica. Cuando el matrimonio se haya realizado en el exterior, con autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, podrá incluirse a la esposa en el pasaporte del marido.

ARTICULO 6°.- Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación y sus esposas devolverán sus pasaportes al Ceremonial del Estado al regresar a la República por haber terminado su misión en el exterior.

ARTICULO 7°.- Los pasaportes oficiales serán otorgados exclusivamente a:

a) Senadores y Diputados Nacionales, Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Procurador General de la Nación;
b) Gobernadores y Vicegobernadores de Provincias e Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires;
c) Generales, Almirantes y Brigadieres, cuando sean solicitados por los respectivos Ministerios;
d) Jueces de las Cámaras Nacionales de Apelaciones; Jueces Nacionales de Primera Instancia de competencia especial, y Jefe de la Policía Federal;

e) Arzobispos y Obispos;
f) Miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios civiles de la Administración Nacional y Provincial designados por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial, para desempeñar o integrar misiones temporales en el extranjero.

ARTICULO 8º.- Las esposas de las personas enumeradas en los incisos a) al f) del artículo precedente, las hijas solteras a cargo del mismo e hijos menores de edad, serán incluídos en el pasaporte del titular.

ARTICULO 9º.- La esposa del titular de un pasaporte oficial no puede, en ese carácter, ser titular, a su vez, de otro pasaporte oficial sino que, como acompañante, deberá ser incluída en el pasaporte de su esposo o bien viajar con pasaporte común, salvo que el mismo desempeñe funciones permanentes en el exterior.

ARTICULO 10º.- Todo pasaporte diplomático u oficial a emitir o renovar que se presente en las representaciones diplomáticas de la República en el exterior, deberá consultarse previamente al Ceremonial del Estado, haciendo constar, en el pasaporte, el número y fecha de la nota o telegrama otorgando la autorización.

ARTICULO 11º.- Derógase el Decreto Nº 18.799 de 21 de septiembre de 1951 y toda disposición que se oponga al presente Decreto.

ARTICULO 12º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial, publíquese y archívese.-

ARAMBURU - Luis A.Podestá Costa

DECRETO Nº 15.028.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 341.

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Buenos Aires, octubre 16 de 1957.-

Visto el decreto-ley Nº 12.029/57, por el cual se declara disuelto el Instituto Nacional de Acción Social y transfieren a esta Dirección General las funciones que el decreto-ley Nº 11.922/56 y sus complementarios, le asignara a la Comisión Administradora de dicha entidad, y

CONSIDERANDO:

Que la estructura interna de esta repartición contempla únicamente las necesidades de las funciones que le son específicas;

Que a fin de atender convenientemente las nuevas tareas encomendadas y especialmente con el propósito de no interrumpir la continuidad en los servicios a cargo del ex-Instituto, se estima oportuna la creación de un organismo destinado a atender el despacho de todo lo relacionado con dicha materia en cuanto ello no haga a la competencia de otras jurisdicciones;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

D I S P O N E :

1º.- Créase en esta Dirección General y bajo la dependencia directa del suscripto una Oficina encargada de atender todo lo relacionado con los servicios a cargo del ex-Instituto Nacional de Acción Social y su total liquidación, sin perjuicio de la intervención que, en lo específico, haga a la competencia de los restantes organismos de esta repartición.

2º.- La dependencia que se crea por el punto 1º se identi-

ficará con la denominación de "Oficina Decreto-Ley Nº 12.029/57" y funcionará con el personal que se encontrase afectado al Departamento Administrativo del ex Instituto Nacional de Acción Social.-

3º.- Comuníquese a quienes corresponda y archívese.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES

DISPOSICION Nº 7.430.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 342.

LEY DE CONTABILIDAD-RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS-SEGURO DE VIDA-FIANZAS-JUICIO DE RESPONSABILIDAD

Buenos Aires, octubre 2 de 1957.-

Visto en despacho el presente expediente originado en la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, y

CONSIDERANDO:

Que el señor Julio César Tobares, agente de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, fué dejado cesante con fecha 13 de enero de 1956, luego que la citada repartición hubo ingresado en la Caja Nacional de Ahorro Postal la suma de $ 26,70 m/n., en concepto de aporte del Estado para el seguro de vida obligatorio (leyes Nos. 13.003 y 14.003);

Que conforme lo dispone el decreto 37.950/48 las distintas dependencias deben efectuar el ingreso por año adelantado de los aportes individuales y patronales al citado seguro en oportunidad de la liquidación del sueldo anual complementario, circunstancia ésta susceptible de provocar como en el caso en examen, que se opere el aporte patronal y con posterioridad se produzca el alejamiento del agente;

Que para este caso ha previsto el artículo 4º, inciso c) del citado decreto que "en los casos de personal que se jubile, retire o por cualquier otra causa deje de pertenecer a la Administración, las Reparticiones procederán a deducir del último sueldo que se liquide al ex-empleado del importe de las sumas abonadas en concepto de aporte del Estado correspondientes a los meses que falten para completar el período anual del seguro";

Que asimismo el artículo 9º del precitado decreto esta

blece la competencia de la Contaduría General de la Nación para instaurar juicio de responsabilidad contra los funcionarios que omitieren el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las reparticiones por las normas vigentes en materia del seguro de vida obligatorio;

Que como consecuencia del juego de las disposiciones transcriptas resulta que de estas actuaciones surgen dos aspectos que corresponde examinar: en primer lugar, la situación del agente separado de la Administración en relación con el derecho que asiste al Estado de reintegrarse de su aporte; en segundo lugar, la existencia de posibles responsabilidades imputables a funcionarios que intervinieron en la liquidación de sueldos al nombrado;

Que en cuanto al primero de los aspectos señalados, resulta evidente que el inciso c) del artículo 4° del decreto N° 37.950/48 crea a favor del Estado el derecho a reintegrarse de su aporte al seguro de vida obligatorio del agente, lo que coloca al señor Tobares en la calidad de deudor del fisco por la suma arriba expresada;

Que en lo tocante al segundo de los aspectos mencionados, resulta del análisis de estas actuaciones que no hay responsabilidad imputable a agentes de Correos y Telecomunicaciones, en razón de que el ingreso del aporte se efectuó con anterioridad a la fecha de egreso del causante y de que, al producirse dicho egreso, no existía crédito alguno a su favor, en razón de encontrarse suspendido desde el 29 de diciembre de 1955 (fs. 8), por lo que no existió la posibilidad de proceder a su compensación;

Que por la naturaleza de la deuda no resulta posible afectar para su pago la fianza rendida a favor del causante por la Caja Nacional de Ahorro Postal, conforme lo peticiona a fs. 13 la repartición damnificada, habiéndose expedido en el mismo sentido en casos análogos la citada Institución y el señor Procurador del Tesoro;

Que en consecuencia, acreditado el carácter de deudor del causante y llenados los extremos exigidos por el decreto N°

7.013/55 en cuanto a la cancelación de deudas inferiores a $ 500 m/n., corresponde devolver estas actuaciones al origen a fin de que se sirva aplicar para la solución del presente caso y los similares que se le presenten, las normas del citado decreto;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION
R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Declarar que no surge de las presentes actuaciones responsabilidad imputable a agentes de Correos y Telecomunicaciones por incumplimiento de disposiciones sobre seguro de vida obligatorio.-

ARTICULO 2º.- Publíquese en Digesto Administrativo. Cumplido, remítase al Ministerio de Comunicaciones a los efectos de la aplicación de las disposiciones del decreto 7.013/55.-

DAMIAN FIGUEROA- Rodolfo J. Tarelli- José M. Fernández Fariña-Wifredo Dedau Antonio M. Pérez Arango-César Aguirre Legarreta-Secretario.-

RESOLUCION Nº 1.695.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 343.-

INCOMPATIBILIDADES - JUBILACIONES

Buenos Aires, 8 de octubre de 1957.-

Visto lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 26 de la ley 14.370 y los proyectos que sobre compatibilidad del goce de aquellos beneficios de retiro con el desempeño de actividades por cuenta ajena han sido formulados, y

CONSIDERANDO:

Que la disposición legal referida faculta al Poder Ejecutivo a establecer, por razones de interés nacional y por exigencias de las necesidades sociales o económicas, límites de compatibilidad por tiempo determinado;

Que, a la luz de las modernas orientaciones en materia de seguridad social deberá encararse oportunamente la reestructuración del sistema de previsión en vigor, a fin de que cubra todos los riesgos sobre bases financieras que aseguren su viabilidad;

Que la buena doctrina indica, sin duda, la conveniencia de establecer el principio de incompatibilidad absoluta entre remuneraciones provenientes de cualquier actividad y el goce de prestaciones jubilatorias, ya que el Estado debe asumir su misión tuitiva para los trabajadores en pasividad sólo en cuanto éstos cesen en su capacidad de trabajo;

Que esta norma general, teóricamente inobjetable, debe ceder, sin embargo, ante la realidad social, si ésta impone soluciones que contemplen la situación eventual de quienes, por motivos diversos, imputables las más de la veces a la defectuosa legislación vigente, se hallan en estado de pasividad con remuneraciones insuficientes y en condiciones físicas y mentales de prestar eficientes servicios;

Que la remoción temporaria de la restricción que la ley autoriza, además de solucionar la afligente situación de humildes trabajadores en retiro, permitiría recuperar, con evidente beneficio para el Estado y la comunidad, a eficaces y a veces eminentes servidores a quienes la presión de exigencias vejatorias obligó a alejarse de la administración nacional y de la enseñanza, cuando más útil puede ser la contribución de sus conocimientos y de su experiencia para la dignificación de la función pública y de la alta misión de la cátedra;

Que, sin embargo, esta liberalidad circunstancial que, como se ha dicho, no debe aceptarse como norma permanente, ha de limitarse a reparar injusticias manifiestas, para que no dé lugar a la industria del retirado en actividad que, a la vez que constituye una carga social, envilece el mercado de trabajo;

Que, ante la evidencia del proceso inflatorio que ha reducido el valor de las prestaciones, el retorno a la actividad debe brindar el incentivo necesario que compense en alguna medida el esfuerzo que reclama;

Que, asimismo, es razonable exigir a los beneficiarios de dicha compatibilidad un aporte sobre su haber jubilatorio como contribución a las exigencias del estado financiero de las Cajas de Previsión;

Por tanto,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Suspéndese por el término de dos (2) años, a partir de la fecha del presente decreto, la incompatibilidad establecida en el primer párrafo del artículo 26 de la Ley número 14.370, con arreglo a las normas que a continuación se determinan.

ARTICULO 2ª.- Los beneficiarios actuales o futuros que ejerzan el derecho acordado en el artículo anterior, podrán en su oportunidad reajustar y/o transformar su prestación, mediante la computación, a tales efectos, de las remuneraciones que perciban en el ejercicio de la función y hasta los límites y promedios que las disposiciones legales en vigencia autorizan. En ningún caso el reajuste a que se refiere el presente artículo podrá solicitarse sin haber desempeñado tareas retribuídas por un período superior a un año.

ARTICULO 3ª.- Quedan sujetas al pago de aportes las prestaciones jubilatorias de las personas a que se refiere el presente decreto, y a tal efecto la Caja o Instituto jubilador deberá descontar, al abonar los beneficios, el aporte personal sobre los mismos, que por su ley orgánica corresponda.

Entiéndese por prestación jubilatoria a todos los efectos del presente decreto-ley, el haber básico de los beneficios, con exclusión de las bonificaciones legales establecidas por cualquier concepto que no se liquidarán en ningún caso.

ARTICULO 4ª.- El jubilado reintegrado al servicio deberá denunciar a la Caja de que sea beneficiario, o al Instituto Nacional de Previsión Social, dentro de los 30 días hábiles de la fecha de vigencia del presente o de producirse cualquier modificación posterior, su vuelta a las tareas remuneradas. La omisión de la denuncia le privará automáticamente el derecho a cualquier reajuste futuro de su jubilación, pero no lo libera de efectuar los aportes previstos en el artículo 3ª de este decreto.

ARTICULO 5ª.- Las Cajas Nacionales de Previsión o el Instituto Municipal de Previsión Social no liquidarán, a los beneficiarios que se acojan a las disposiciones del presente decreto, prestaciones jubilatorias superiores a 3.000 pesos mensuales, quedando incorporado el excedente, si lo hubiere, al patrimonio del organismo jubilatorio respectivo.

ARTICULO 6ª.- El presente decreto-ley será suscripto por el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y refrendado por

los señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Trabajo y Previsión, de Hacienda, de Interior, de Guerra, de Marina y de Aeronáutica.

ARTICULO 7ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Tristán E.Guevara- Adalbert Krieger Vasena - Carlos R.S. Alconada Aramburú - Víctor J. Majó Teodoro Hartung - Jorge H. Landaburu.-

DECRETO-LEY Nª 12.458.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 344.-

AUTOMOTORES - PROHIBICIONES

Expediente Nº 74.183 - 1957-M.H. Informe nº 422/57.- Ref.Permuta dos automotores de la Dcción. General Impositiva, p/dos importados al Sur del Paralelo 42.-

SEÑOR PRESIDENTE:

Trata el presente expediente de la consulta formulada por la Dirección General Impositiva con respecto a la permuta de dos automotores de su propiedad, modelos 1937/8, libres de paralelo, por otros dos modelos 1955 importados al sur del paralelo 42, amparados en la franquicia del Decreto nº 10.991/56.

Es de hacer notar que dicha permuta sería sin desembolso alguno por parte de la entidad fiscalizada.

El Decreto-Ley nº 23.573/56 en su artículo 38 al prohibir las adquisiciones de automóviles, sean para asignarlos a funcionarios o para servicios generales, autoriza únicamente a la venta de automóviles en desuso o en deficientes condiciones de funcionamiento con el fin de adquirir unidades nuevas en su reemplazo, siempre que tal cambio resulte ventajoso y que en ningún caso la operación signifique invertir un importe mayor que el obtenido con la enajenación.

La operación propuesta por la Dirección General Impositiva no encuadraría en dicha disposición legal desde el momento que no se efectuaría una venta, como así tampoco las unidades a ingresar no reunirían el requisito de nuevas.

La única solución viable, es la aplicación del artículo 40 del Decreto-Ley nº 23.573/56 (Mod. por Decreto-Ley 3.891/57, el cual establece la excepción, entre otros, al artículo 38 de di

cha disposición, expresando que sólo podrá ser acordada, frente a necesidades ineludibles de los servicios debidamente documentadas, por Decreto del Poder Ejecutivo dictado con intervención del Departamento de Hacienda.

Por último, es del caso destacar que de acordarse la excepción, esos automotores deberán permanecer al Sur del Paralelo 42, tal como lo exige el Decreto-Ley nº 9.924/57.

Con lo expuesto, se remite el presente expediente a esa Superioridad a sus efectos.-

DELEGACION ANTE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, 5-9-57.-

Fdo. RAUL A. RONCHI
Contador Fiscal

Expediente Nº 31.474 - 1957.-
Providencia Nº 1.639 - 1957.-
(Contrat.y Trab. Públicos)

///nos Aires, 1 de octubre de 1957.-

Analizada la cuestión que se plantea en las presentes actuaciones, el Tribunal de Cuentas de la Nación pone de manifiesto que no procede la adopción del procedimiento que se propone en el presente, toda vez que la permuta no ha sido prevista en las disposiciones de la Ley de Contabilidad.

Por otra parte, el canje proyectado no se ajusta a lo establecido por el artículo 38º del Decreto-Ley Nº 23.573/56, dado que el mismo autoriza la venta y compra de automóviles procedimiento que deberá ajustarse al decreto nº 2.657 del 16 de febrero de 1956, y siempre adquiriendo unidades nuevas.

Remítase al Ministerio de Hacienda.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. DAMIAN FIGUEROA
Presidente

Boletín Nº 345.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - AUDITORIAS- EMPRESAS DEL ESTADO

Buenos Aires, 4 de octubre de 1957.-

Visto lo dispuesto por el inciso f) del artículo 84 de la ley de contabilidad y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 16 "in fine" del decreto Nº 5.883/55 establece la obligatoriedad de dar cuenta en la Memoria anual de este Cuerpo de las observaciones que formule por el incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias a que debe ajustarse la gestión de las empresas del Estado, debiendo incluirse en dicho documento los pronunciamientos recaídos sobre las mismas;

Que por resolución Nº 1.536/957 (D.A. Nº 94) esta Institucion ha dictado las normas de procedimiento para el trámite de tales observaciones y su inserción en la Memoria anual;

Que resulta necesario complementar lo dispuesto por la resolución precitada, estableciendo la forma de individualizar las observaciones; la dependencia competente ara registrar las mismas y dar conocimiento a las representaciones del Tribunal de Cuentas de los pronunciamientos de este Cuerpo, que constituirán la jurisprudencia aplicable;

Por todo ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Las observaciones que formule el Tribunal de Cuentas de la Nación, en ejercicio de las funciones de fisca-

lización de las empresas del Estado que prescribe la ley Nº 13.653 (t.o.), el decreto reglamentario Nº 5.883/55 y la ley de contabilidad (art. 84, inciso f) se individualizarán mediante una numeración correlativa dentro de cada año.-

ARTICULO 2º.- La Secretaría Técnica tendrá a su cargo la asignación del número correspondiente a cada observación y la registración en un libro especial copiador denominado "Empresas del Estado" -"Registro de Observaciones"- del texto del acta labrada con motivo de la reunión en acuerdo plenario del Tribunal de Cuentas, en la que se haya resuelto formular la observación. Asimismo, la Secretaría Técnica ordenará las actas, después de su registro, en cuadernos separados juntamente con los antecedentes e informes que se hayan tenido en cuenta para cada observación.-

ARTICULO 3º.- Los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas de la Nación en las observaciones que formule serán la jurisprudencia aplicable por las Auditorías contables destacadas ante las empresas del Estado. A tales efectos, la Auditoría General las comunicará en la forma y tiempo que considere procedente.-

ARTICULO 4º.- Dése al Digesto Administrativo y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Antonio M.Pérez Arango-José M. Fernández Fariña-Wifredo Dedeu-Eusebio E. Villar (Vocal acc.) César Aguirre Legarreta -Secretario.

RESOLUCION Nº 1.717.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS- COMUNICACIONES DE ACTOS

Buenos Aires, octubre 7 de 1957.-

Visto lo dispuesto por el artículo 85, inciso a) de la ley de contabilidad, y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario dictar normas que señalen el procedimiento mediante el cual los distintos organismos de la administración nacional comunicarán al Tribunal de Cuentas de la Nación los actos administrativos que se refieran a la hacienda pública;

Que se considera suficiente para el cumplimiento de la mencionada disposición legal el envío de la copia fotográfica de los decretos y resoluciones por los que se dispongan dichos actos, sin perjuicio de que puedan verificarse, cuando se juzgue necesario, los respectivos originales;

Que en aquellos casos en que no sea posible obtener el original o una copia fotográfica, por figurar la disposición respectiva en acta, corresponderá el envío de una copia del acto autenticada por el secretario de actas o funcionario que haga sus veces;

Por ello, y en uso de la facultad que le acuerda el inciso o) artículo 84 de la ley de contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Déjase establecido que a los fines de la comunicación a que hace referencia el artículo 85, inciso a) de la ley de contabilidad, los distintos organismos de la adminis-

tración nacional podrán enviar, en sustitución del original una copia fotográfica de los actos administrativos que deban ser sometidos a su intervención.-

ARTICULO 2°.- En aquellos casos en que no sea posible el envío del original o copia fotográfica por figurar la disposición en acta, la comunicación se efectuará mediante copia de aquélla autenticada por el secretario de actas o el funcionario que haga sus veces.-

ARTICULO 3°.- Sin perjuicio de lo determinado en los artículos anteriores, el Tribunal de Cuentas de la Nación verificará, cuando juzgue necesario, el original respectivo.-

ARTICULO 4°.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA- Antonio M. Pérez Arango-José M. Fernández Fariña-Wifredo Dedeu-Eusebio Villar (Vocal acc.)-Juan Carlos Pastene-Secretario-

RESOLUCION N° 1.732.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº347.-

LEY DE CONTABILIDAD-RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS-AUDITORIAS-EMPRESAS DEL ESTADO

Buenos Aires, octubre 7 de 1957.-

Visto lo dispuesto por el inciso f) del artículo 84 de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 6º de la ley 13.653 (t.o.) establece que las empresas del Estado serán fiscalizadas de acuerdo con el procedimiento de auditorías contable y en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo;

Que el artículo 6º del decreto Nº 5.883/955, reglamentario de la ley precitada, establece que los planes de cuentas de las empresas serán aprobados por las mismas, con intervención de esta Institución y preparados en forma tal que permitan confeccionar los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de las entidades de acuerdo con la fórmula aprobada por decreto Nº 9.795/54;

Que el artículo 14 del mismo decreto reglamentario reproduce lo establecido en el artículo 6º de la ley 13.653 (t.o.) y dispone en el inciso a) que en las funciones de contralor asignadas se vigilará la correcta aplicación del plan de cuentas;

Que, asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado decreto, los Auditores deben fiscalizar todos los actos y actividades de la empresa, ejerciendo su intervención, en general, con posterioridad a los hechos, no obstante lo cual podrán realizarla previa o simultáneamente cuando, a su juicio, así lo exigen las circunstancias;

Que, por lo tanto, las disposiciones del decreto número 14.834/55, dictado como consecuencia de la información producida en su oportunidad por la Contaduría General de la Nación, relativa a los defectos observados con carácter general en la preparación de los balances de las empresas del Estado, no pueden tener el alcance de asignar a las auditorías contables el estudio y preparación de los planes de cuentas de las empresas, pues ello estaría en pugna con las funciones de fiscalización que deben desempeñar las citadas representaciones del Tribunal de Cuentas y determinaría que las mismas se abocaran a tareas específicas de la administración de las empresas del Estado;

Que, en cambio, una vez elaborado el plan de cuentas por cada empresa, de conformidad con el artículo 6° del decreto N° 5.883/55, el Tribunal de Cuentas realizará la intervención a su cargo emitiendo la opinión pertinente;

Por todo ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Déjase establecido que en lo relativo a los planes de cuentas de las empresas del Estado comprendidas en el régimen de la ley 13.653 (t.o.), las auditorías destacadas ante las mismas, procederán conforme al criterio señalado en los considerandos de la presente resolución.-

ARTICULO 2°.- Dése al Digesto Administrativo y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA-Antonio M.Pérez Arango-José M. Fernández Fariña-Wifredo Dedeu-Eusebio E. Villar (Vocal acc.) Juan Carlos Pastene-Secretario-

RESOLUCION N°1.723.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº348.-

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS

Buenos Aires, septiembre 30 de 1957.-

Visto los Decretos-Leyes Nº 20.714 del 19 de noviembre de 1956 y Nº 7.555 del 3 de julio de 1957 en cuanto se relacionan con la contribución de las instituciones bancarias, determinada sobre lo que las mismas perciben en concepto de comisiones e intereses, en favor del Instituto de Servicios Sociales Bancarios, y

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Hacienda de la Nación ha finalizado los estudios encomendados por el artículo 2º del Decreto-Ley precedetemente citado en segundo término, de los cuales se ha arribado a la conclusión que para la adecuada e integral prestación de los servicios a cargo del referido Instituto, éste ha necesitado y necesita de aquel aporte;

Que, así como dichos estudios aconsejan establecer definitivamente en el 2% el monto de esa contribución, también señalan la necesidad de que la restitución del aporte se opere con efecto a partir de la fecha en qué se dispuso provisionalmente la suspensión de su aplicación (Decreto-Ley Nº 20.714/56);

Que para solucionar este último aspecto es conveniente establecer una contribución adicional, para el período julio-septiembre de 1957, procediendo respecto de ella la reliquidación y ajuste de los importes ingresados y que ingresen las respectivas entidades bancarias;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO
DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1º.- Fíjase definitivamente en el dos por ciento (2%) en favor del Instituto de Servicios Sociales Bancarios, la contribución a que se refiere el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 7.555 de fecha 3 de julio de 1957.-

ARTICULO 2º.- Sin perjuicio del aporte de que se trata el artículo precedente y con iguales alcance y forma de liquidación, establécese a favor del Instituto mencionado una contribución adicional del cuatro por ciento (4%) sobre los intereses y comisiones que se referirá, exclusivamente, al período 1º de julio al 30 de septiembre de 1957. Dicha contribución adicional será ingresada por las entidades bancarias juntamente con el aporte señalado en el artículo 1º que corresponda al mismo trimestre.-

ARTICULO 3º.- Antes del día 30 de noviembre de 1957 se efectuarán la reliquidación e ingreso definitivos de las contribuciones a cargo de los organismos responsables, las cuales serán reajustadas de conformidad con los principios en que se inspira este decreto-ley.-

ARTICULO 4º.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excelentísimo señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores ministros secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, de Guerra, de Marina y de Aeronáutica.-

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU-Isaac Rojas-Victor J.Majó-Teodoro Hartung-Jorge H.Landaburu-Adalbert Grieger Vasena.

DECRETO-LEY Nº 11.921.-

DIREC. GRAL. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Departamento Oficial

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 349.-

TRABAJO INCENTIVADO

Buenos Aires, 2 de octubre de 1957.-

Visto el decreto nª 824/57 por el que se dispuso prórrogar por el término de un año la vigencia de los convenios colectivos de trabajo renovados conforme a las disposiciones del Decreto-Ley Nª 2.739/56, y

CONSIDERANDO:

Que dicha prórroga obedeció al propósito de asegurar el cumplimiento eficaz de la política económica-financiera del Gobierno Provisional, tendiente a detener el proceso Inflacionario que aflige al país, cuya causa primordial radica en la incesante carrera entre salarios y precios que se viene operando de largo tiempo atrás;

Que la defensa del valor adquisitivo del salario sólo puede ser efectuada con la colaboración de trabajadores y empresarios mediante el consiguiente aumento de la productividad, como lo exigen los superiores intereses de la Nación;

Que es indudable que las fuerzas que integran el capital y el trabajo no han prestado todo el concurso necesario para obtener el restablecimiento económico del país;

Que no obstante, el Gobierno Provisional está firmemente dispuesto a proseguir esa política, en la convicción de que los aumentos salariales, sin el correlativo aumento de la productividad, implicarían un nuevo golpe inflacionista, cuyas consecuencias se harían sentir bien pronto no sólo en el nivel de vida de la colectividad, sino en el presupuesto familiar de los propios trabajadores a quienes se pretendiese beneficiar, los que, una vez más, serían victimas de una en-

gañosa ilusión que no tiene justificativo y que el Gobierno Provisional no está dispuesto a estimular;

Que, los índices de productividad no acusan el aumento que era dado esperar luego de la renovación de los últimos convenios colectivos de trabajo, y de las reiteradas exhórtaciones de la autoridad;

Que, ante esa realidad, es imperioso arbitrar de inmediato medidas de emergencia que, al incentivar la producción, permitan que los trabajadores obtengan, como resultado de su mayor rendimiento, superiores remuneraciones para hacer frente al mayor costo de la vida;

Que, a tal fin y con el carácter ya señalado de legislación de emergencia, se estima necesario brindar a ambos sectores la posibilidad de eliminar o reducir la incidencia de las cargas sociales y fiscales sobre los márgenes que por aplicación de los sistemas han de percibir los trabajadores, en la inteligencia de que ello ha de volcarse en un mejor ingreso para éstos;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Autorízase a empleados y empleadores, para que en los acuerdos que celebren a partir de la fecha para la implantación de sistemas de incentivación tendientes a una mayor productividad, puedan convenir que los mayores ingresos que obtengan los trabajadores como resultante de tales sistemas de incentivación, no se consideren parte integrante del salario, a los efectos de todas o de algunas de las siguientes cargas y beneficios sociales:

a) Aportes y contribuciones jubilatorias;

b) Enfermedad y accidentes inculpables del trabajo;

c) Vacaciones;

d) Sueldo anual complementario;

e) Preaviso e indemnización por despido;

ARTICULO 2ª.- Toda desgravación que resulte de la aplicación del artículo precedente deberá trasladarse íntegramente a la mayor remuneración derivada del sistema de incentivación.

ARTICULO 3ª.- La mayor remuneración resultante de la aplicación del nuevo sistema estará exenta del impuesto a los réditos.

ARTICULO 4ª.- Las disposiciones del presente, que revisten el carácter de legislación de emergencia y son de orden público, regirán hasta el vencimiento de los convenios colectivos de trabajo prórrogados por el Decreto Nª 324/57.

ARTICULO 5ª.- El presente decreto-ley será refrendado por el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Trabajo y Previsión, Hacienda, Comercio e Industria, Guerra, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 6ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Tristán E. Guevara - Adalbert Krieger Vasena - Julio C. Cueto Rúa - Víctor J. Majó Teodoro Hartung - Jorge H. Landaburu.-

DECRETO - LEY Nª 12.035.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 350.-

ADSCRIPCIONES - SERVICIOS ENTRE REPARTICIONES - PRESUPUESTO

MEMORANDUM Nª 1233.-

Para información del señor Subsecretario de Hacienda de la Nación

Expediente Nª 73.385 - 1957.- Referente reintegro de haberes correspondientes a personal del Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias (en liquidación) que se desempeñó en Comisión en la Dirección General Impositiva.-

Por memorándum nª 236 del 12/2/57, cuya copia se acompaña (D.M. nª 160), esta Dirección General fijó su posición frente a las gestiones de reparticiones o entidades del Estado para obtener el reintegro de haberes correspondientes a agentes de su dependencia que fueran "adscriptos" o destinados "en comisión" a otros organismos similares. Dicha opinión, que concuerda con la sostenida en la materia por la Contaduría General de la Nación y Tribunal de Cuentas, fué ratificada en fecha 20 de febrero por este Ministerio, y a través de la misma se fijó la improcedencia de tales reclamaciones. Pero en este caso el organismo recurrente es el Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias (en liquidación) con motivo del pase para prestar servicios "en comisión" en la Dirección General Impositiva, dispuesto por resolución ministerial nª 4.494/56 y ya la situación debe ser objeto, a nuestro juicio, de un análisis distinto.

En efecto, el Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias,

según lo determina el decreto nº 15.625/47, es una entidad compuesta por el Estado e instituciones bancarias particulares, que se rige por las normas generales que definen el régimen legal de las sociedades de economía mixta (art. 1ª y 2ª). Su capital está constituído en un 50% por acciones suscriptas conjuntamente por el Banco Central, el Banco de la Nación y el Banco del Crédito Industrial, en carácter de aporte estatal y el 50% restante, por los bancos particulares (art. 5ª). Las circunstancias expuestas mueven a esta Dirección General a interpretar que no puede aplicarse a esta entidad los principios invocados al considerar el caso de las reparticiones y organismos del Estado, por cuanto en aquellos se trata de servicios cumplidos dentro de la órbita estatal, los agentes dependen en última instancia del mismo patrón y los recursos para atender su haber provienen del Tesoro Nacional. El Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias, en cambio, es una unidad económica y jurídica independiente, cuyo personal ya no depende directamente del Poder Ejecutivo, sino forma parte de un organismo donde tiene iguales intereses el Estado y los particulares. De consiguiente, los servicios de esos agentes no pueden ser empleados sin cargo por una de las partes en su propio beneficio sin lesionar, paralelamente, los derechos de la otra.

En mérito a las razones que se dejan expuestas, esta Dirección General estima que la Dirección General Impositiva debe reintegrar al Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias el importe de los haberes correspondientes al personal de ésta entidad que se desempeñó "en comisión" en aquella repartición.

Ello no obstante y a fin de mejor proveer, se considera oportuna la consulta al Tribunal de Cuentas de la Nación.-

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, 27-6-1957.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General de
Contabilidad y Administración

D.A. Nº 350.-

P. Nº 1234/57.-

//nos Aires, 27 de junio de 1957.-

Pase al Tribunal de Cuentas de la Nación, solicitándole quiera tener a bien emitir opinión respecto a lo manifestado por la Dirección General de Contabilidad y Administración.-

Fdo. FRANCISCO R. AGUILAR
Subsecretario de Hacienda de la Nación

Expediente Nº 30.918 - 1957 TCN.-
Providencia Nº 10.910 - 1957
(Presupuesto e Incompatibilidad)

///nos Aires, 13 de setiembre de 1957.-

Vuelvan las presentes actuaciones al Ministerio de Hacienda para manifestarle que en opinión de este Tribunal de Cuentas de la Nación, la circunstancia de que no pertenezca a un organismo íntegramente estatal el personal cuyas adscripciones a la Dirección General Impositiva se dispuso, no hace variar el criterio sustentado en materia de adscripciones.

Ello no obsta para que, en el momento de la liquidación final del organismo, se considere el gasto derivado de la adscripción como una inversión propia del Estado y se proyecten los ajustes pertinentes.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. DAMIAN FIGUEROA
Presidente del
Tribunal de Cuentas de la Nación

///nos Aires, 7 de octubre de 1957.-

Atento lo actuado este Ministerio considera:

a) Que la Dirección General Impositiva no debe abonar al Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias (en liquidación) el cargo que éste le formula por los servicios de su personal que se desempeñó en aquella repartición en calidad de adscripto;

b) Que en cambio, al producirse la liquidación definitiva del Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias, el gasto derivado del concepto aludido en el punto anterior sea considerado como una inversión exclusiva del Estado y atendida con la parte correspondiente de sus fondos.

Pase sucesivamente a la Dirección General de Contabilidad y Administración, Dirección General Impositiva e Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias (en liquidación) para su conocimiento y demás efectos.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA
Ministro de Hacienda de la Nación

RESOLUCION Nº 7.417.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 351.-

JUBILACIONES

Buenos Aires, 8 de marzo de 1957.-

Visto el presente expediente en el cual don Vicente Guy solicita el reconocimiento de los servicios que prestó en la Administración General de Vialidad Nacional desde el mes de noviembre de 1919 hasta el 23 de junio de 1920, y

CONSIDERANDO:

Que tales servicios fueron prestados por el recurrente con anterioridad a la fecha en que cumplió 18 años de edad (27 de agosto de 1920 fs.11).

Que la computabilidad de los servicios prestados por menores de 18 años, está reglada por el art. 26 de la ley 4349, que los excluye del régimen de jubilaciones civiles, salvo que el afiliado haya aportado desde su incorporación al servicio antes de esa edad;

Que concordante con los fundamentos y conclusiones de los dictámenes legales de fs. 36/40, el principio consagrado por esa disposición se halla en plena vigencia, no pudiendo atribuirse alcance derogatorio a su respecto, a las normas de los arts. 21 de la ley 11.027, 20ª de la ley 11.260 y 9ª de la ley 11.923. En cuanto a la excepción establecida en la parte final de aquel precepto, se refiere a los menores de 18 años obligados al aporte del 5% por imperio de la ley 3976;

Que erróneas interpretaciones del art. 21 de la ley nª 11.027, llevaron a esta Caja a imponer aportes a empleados menores de 18 años, computándose en innumerables ocasiones para el otorgamiento de beneficios, servicios prestados en esas condiciones.

Que siendo evidente la responsabilidad de la Caja en los procedimientos que adoptó, no pueden incidir sobre los intereses de sus afiliados consecuencias de actos que no les son imputables;

Que entonces corresponde arbitrar una solución que, inspirada en razones de justicia, contemple esas situaciones de hecho creadas, impidiendo se restrinjan derechos ya reconocidos.

Por lo tanto, de conformidad con el dictamen del señor Asesor y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 658/55,

EL DELEGADO INTERVENTOR EN LA CAJA NACIONAL

DE PREVISION PARA EL PERSONAL DEL ESTADO

R E S U E L V E:

1ª.- Declarar que no son computables los servicios prestados por menores de 18 años de edad por expresa disposición del art. 26 de la ley 4.349 vigente en la actualidad, salvo que sobre los mismo se hubieran efectuado descuentos jubilatorios, en cuyo caso se los considerará a los fines de la ley 4.349.

2ª.- Consecuentemente, desestimar el pedido de reconocimiento de servicios prestados en esas condiciones en la Administración General de Vialidad Nacional, por Don Vicente Guy, desde noviembre de 1919 hasta el 23 de junio de 1920.

3ª.- Tome nota la Of. de Antecedentes y Jurisprudencia y pase al Departamento de Afiliados, en actividad a los fines de comunicar a las reparticiones nacionales la improcedencia del descuento jubilatorio sobre los servicios prestados por menores de 18 años, a partir de la fecha de la presente.

4ª.- Notificar al recurrente art. 13 de la ley 14.236.-

Fdo. AGUSTIN RODRIGUEZ JURADO - Raúl T.Dellepiane.-

RESOLUCION Nº383.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 352.-

JUBILACIONES - PENSIONES

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1957.-

Visto el reiterado propósito del Gobierno Provisional de contemplar las remuneraciones y asignaciones mínimas tanto en los sectores de personal en actividad como en los de la pasividad, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario actualizar, en la medida posible, los haberes mínimos de los jubilados y pensionados de las Cajas Nacionales de Previsión, modificando en tal sentido los niveles establecidos sobre el particular por el Decreto-Ley número 4.262/56;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- A partir del día primero del mes siguiente de la fecha del presente decreto-ley, fíjanse en las sumas de un mil pesos moneda nacional ($ 1.000 m/n.) y ochocientos cincuenta pesos moneda nacional ($ 850 m/n.) respectivamente, los haberes mínimos de las jubilaciones y pensiones, otorgadas o a otorgarse por las Cajas Nacionales de Previsión.

ARTICULO 2º.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, las Cajas Nacionales de Previsión procederán a reajustar los beneficios vigentes, debiendo atender con sus fondos las mayores erogaciones que demande el cumplimiento del presente decreto-ley.

ARTICULO 3º.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo.- señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Trabajo y Previsión, Hacienda, Guerra, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Tristán E. Guevara - Víctor J. Majó - Teodoro Hartung - Jorge H. Landaburu - Adalbert Krieger Vasena.-

DECRETO - LEY Nº 11.859.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - Depósito General -

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 353.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - AUDITORIAS - EMPRESAS DEL ESTADO - MEMORIA - BALANCES

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1957.-

Visto lo dispuesto por el inciso f) del artículo 84 de la Ley de Contabilidad; y

CONSIDERANDO:

Que el decreto nª 4.218/52 que dispuso la creación de la Empresa Nacional de Transportes, asigna a la misma el carácter de "Empresa de Estado Unica" -considerando tercero, del decreto- y establece en el artículo 5ª que la Junta Directiva de la E.N.T. deberá elevar al Poder Ejecutivo, dentro de los cuatro meses de cada cierre de ejercicio, la Memoria y Balance previsto en el artículo 6ª de la ley 13.653;

Que el decreto nª 5.883/55, reglamentario de la ley nª 13.653 (t.o.) dispone en el artículo 10 que las empresas del Estado, dentro de los 120 días de finalizado el ejercicio, deberán elevar al Ministerio del ramo, la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas correspondientes, debidamente intervenidos por la Contaduría General de la Nación, para su aprobación por el Poder Ejecutivo;

Que no obstante lo dispuesto en las normas referidas, la Empresa Nacional de Transportes hasta la fecha no ha cumplido con la obligación de presentar dichos documentos, no obstante los reiterados requerimientos formulados por este Tribunal de Cuentas de la Nación;

Que atento al problema que importa la administración por una sola empresa de los diferentes medios de transportes, el decreto nª 4.218/52 ha contemplado la creación de Administraciones Generales dependientes de la Empresa Nacional de Transportes, dotadas de plena autonomía técnica, económica y finan

ciera, para desarrollar su propia gestión interna (art. 10 del decreto citado), lo que les ha permitido a las mismas poder formular los balances anuales de sus respectivas gestiones, en forma independiente del ente central;

Que ante la mora incurrida por la Empresa Nacional de Transportes, el Tribunal de Cuentas se ha visto compelido a intervenir algunos balances presentados por Administraciones Generales de dicha empresa, dado que las cuestiones planteadas por las Auditorías destacadas ante dichas Administraciones al emitir su opinión en los instrumentos referidos, por la índole e importancia de las mismas, no podían ser diferidas en su consideración y planteo para su regularización;

Que en consecuencia, ante los inconvenientes que se derivan de la falta de cumplimiento por la Empresa Nacional de Transportes y teniendo en cuenta que por decreto-ley nº 8.014/57 se ha dispuesto la disolución de la citada Empresa, es indispensable fijar el procedimiento a que deberán sujetarse las auditorías destacadas en los organismos dependientes de la misma;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Las Auditorías del Tribunal de Cuentas de la Nación intervendrán la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas que presenten las Administraciones Generales dependientes de la Empresa Nacional de Transportes (en disolucion), cuando dichos documentos se ajusten a los requisitos establecidos en la resolución nº 1.195/57 (D. A. Nº 82) y los elevarán a la Auditoría General.

ARTICULO 2º.- El Tribunal de Cuentas teniendo en cuenta las opiniones producidas se pronunciará llevando a conocimiento del Ministerio del ramo las conclusiones a que arribe, sin que ello signifique el pronunciamiento definitivo a los fines de la intervención establecida en el artículo 10 del decreto nº 5.883/55, que tendrá lugar en la oportunidad en que la Empre

sa Nacional de Transportes (en disolución) presente los documentos a que le obliga dicha disposición y el decreto número 4.218/52.

ARTICULO 3ª.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a la Empresa Nacional de Transportes y sus organismos dependientes y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Antonio M. Pérez Arango - José M. Fernández Fariña Wifredo Dedeu - Eusebio E. Villar (Vocal acc.) - César Aguirre Legarreta -Secretario-

RESOLUCION Nª 1.684.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 354.-

JUBILACIONES - PENSIONES

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1957.-

Visto el propósito del Gobierno Provisional de la Nación de considerar la situación de los jubilados y pensionados amparados por los distintos regímenes nacionales de previsión social, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto-Ley Nª 4.262 del 7 de marzo de 1956 fueron mejorados los haberes de jubilados y pensionados de las Cajas Nacionales de Previsión;

Que corresponde adoptar análogas medidas con respecto a los beneficiarios de pensiones de carácter graciable a la vejez y de indemnización cuyas prestaciones se atienden directamente con fondos del Tesoro Nacional;

Que ello se impone como medida de equidad frente a una situación cuyo mantenimiento importaría una injusticia notoria;

Por lo tanto,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Reajústanse los haberes de jubilados y pensionistas, cuyos beneficios fueron acordados en virtud de la ley Nª 4.235, su decreto reglamentario Nª 10.196/43 y del Decreto Nª 33.827/44, dejándose sin efecto los suplementos y bonificaciones establecidos por los Decretos Nros. 39.204/48, 3.670/49, 7.025/51 y 6.000/52.

ARTICULO 2º.- Los haberes a que se refiere el artículo anterior serán reajustados con arreglo al procedimiento instituído por el artículo 2º del Decreto-Ley Nº 4.262/56, y comprenderán a los mismos las disposiciones de los artículos 4º y 5º del citado texto legal y del Decreto Nº 11.902/56 en todo cuanto este último sea de aplicación.

ARTICULO 3º.- Los haberes incrementados en virtud de lo determinado por el artículo 2º del presente decreto-ley no podrán exceder en su totalidad, la suma de Dos mil quinientos pesos moneda nacional (m$n. 2.500) mensuales, como tampoco para los beneficiarios de la Ley Nº 4.235 el Ochenta y dos por ciento (82%) de la remuneración total sujeta a aporte jubilatorio correspondiente al grado respectivo en actividad a la fecha del presente decreto-ley.

De igual modo el haber reajustado no podrá ser inferior al que percibía cada beneficiario al día 31 de enero de 1956.

ARTICULO 4º.- Increméntase en la suma de Ciento cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 150) las bonificaciones por costo de vida acordadas por los Decretos Nros. 7.025/51 y 6.000/52 a los beneficios instituídos o regidos por las siguientes disposiciones legales:

Ley 4.226 y sus modificatorias;
Ley 12.512 y su modificatoria;
Ley 12.821, Artículo 5º;
Decreto-Ley Nº 17.923/44, Artículo 7º, ratificado por la Ley 12.921
Ley 11.471, modificada por la 13.483; y
Ley 11.412 y su modificatoria 12.613.

Quedan igualmente comprendidas en lo dispuesto por el presente artículo las pensiones graciables regidas por la Ley Nº 13.337 y todas aquellas otras que, por su monto o tiempo, no estén comprendidas en su regímen pero cuyo origen sea graciable.

ARTICULO 5ª.- Institúyese, como bonificación mensual adicional de las acordadas por los Decretos números 7.025/51 y 7.000/52, las sumas que se indican a continuación, sobre cada una de las pensiones que establece el artículo 9ª de la Ley 13.478, reglamentado por el Decreto número 13.186/49:

I - Apartado a) - Artículo 9ª de la Ley 13.478, setenta y cinco pesos moneda nacional (m$n. 75); y

II - Apartado b) - Artículo 9ª de la Ley 13.478, ciento cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 150).

ARTICULO 6ª.- Los aumentos que incrementarán los haberes de los beneficiarios les serán liquidados mientras residan en el país y se perderá el derecho a percibir desde el día que se ausenten y mientras permanezcan en el extranjero. Los derechohabiente, cualquiera sea su nacionalidad o la del causante, gozarán de los derechos que esta ley les acuerda aunque no residan en el país.

ARTICULO 7ª.- En los casos de beneficiarios que a su vez acumulen otra u otras prestaciones acordadas por las Cajas Nacionales de Previsión e Instituto Municipal de Previsión Social, cuyos haberes fueron reajustados o se reajustan en virtud del Decreto-Ley Nª 4.262/56 y Decreto Nª 13.564/56, respectivamente, no gozarán del beneficio establecido por el presente Decreto-Ley cuando el aumento en las mencionadas instituciones fuera mayor que el que se acuerda por éste. En caso contrario, sobre la prestación comprendida en el presente Decreto-Ley se liquidará la diferencia hasta completar el monto que le corresponda por el mismo. No gozarán del aludido aumento los beneficiarios que al propio tiempo acumulen prestaciones regidas por las leyes referentes a personal militar y policial.

ARTICULO 8ª.- Las disposiciones del presente Decreto-Ley rigen desde el 1ª de febrero de 1956.

ARTICULO 9ª.- El mayor gasto emergente de las mejoras que se otorgan por este Decreto-Ley, será imputado a las respectivas

partidas del Anexo 10 -Ministerio de Hacienda- Capítulo I -B- 2 - Gastos a financiar con recursos de Cuentas Especiales, Inciso 1ª - Gastos en Personal, Item 4 - d) Pasividades, del presupuesto vigente.

ARTICULO 10ª.- El Ministerio de Hacienda de la Nación dictará las normas aclaratorias y complementarias que se requieran para el mejor cumplimiento de las disposiciones del presente Decreto-Ley.

ARTICULO 11ª.- El presente decreto-ley será suscripto por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, de Trabajo y Previsión, de Interior, de Marina, de Guerra y de Aeronáutica.

ARTICULO 12ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Adalbert Krieger Vasena - Tristán E. Guevara - Carlos R.S. Alconada Aramburú Teodoro Hartung - Víctor J. Majó - Jorge H. Landaburu.-

DECRETO-LEY Nª 11.850.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 355.-

JUBILACIONES

Buenos Aires, 18 de octubre de 1957.-

Visto la resolución nº 383/57 dictada por la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado, por la cual se declara que, en virtud de expresas disposiciones del art. 26 de la ley nº 4.349 vigente a la fecha, no son computables los servicios prestados por menores de 18 años de edad,

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

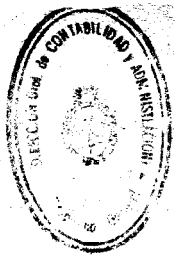
R E S U E L V E:

1º Suspender en jurisdicción de este Ministerio, a partir del 1º de noviembre de 1957, los descuentos jubilatorios sobre los servicios prestados por menores de 18 años de edad.

2º Comuníquese a quienes corresponda, y archívese.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 7.450.-



Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 356.-

CONFLICTOS LABORALES - HUELGA

Buenos Aires, setiembre 6 de 1957.-

Visto la inexistencia de normas que reglamenten en forma orgánica las relaciones obrero-patronales y prevengan y encaucen los conflictos colectivos de trabajo, y

CONSIDERANDO:

Que ese vacío en nuestra legislación constituye una realidad innegable y es causa de inconvenientes de todo orden, principalmente por la incertidumbre que ocasiona entre las partes la carencia de una reglamentación orgánica y clara de sus derechos y obligaciones en esas emergencias, así como también por la magnitud del interés social en juego, que no puede quedar librado a la acción incontrolada de las partes directamente interesadas o a la vigencia de normas inadecuadas cuando no de dudoso valor legal, como ocurre con la resolución Nº 16/44 de la entonces Secretaría de Trabajo y Previsión, la que por otra parte, tuvo carácter precario y fué dictada "hasta tanto se sancione el régimen orgánico que ha de regir en la sustanciación de las reclamaciones colectivas";

Que la huelga es un medio de lucha de la clase trabajadora y constituye hoy un derecho indiscutible en los pueblos libres, pero ello es así cuando la medida es la expresión cabal de la voluntad de los propios trabajadores, se lleva a cabo pacíficamente y obedece a la necesidad de lograr por ese medio de fuerza la conquista o defensa de una legítima mejora cuando han sido agotados los procedimientos legales previos;

Que si bien el derecho de huelga se encuentra implícitamente reconocido por la Constitución Nacional, no ha sido objeto aún de adecuada reglamentación;

Que para ser realmente eficáz, esa reglamentación debe incluír un sistema de conciliación y arbitraje voluntarios que brinden a las partes la oportunidad de resolver sus diferencias en un marco de recíproca comprensión;

Que es necesario, sin embargo, contemplar también la oportunidad de acudir al arbitraje obligatorio cuando el conflicto amenace el normal desenvolvimiento de un servicio público o atente contra la seguridad o salud de la población o tenga por efecto la privación de un artículo de primera necesidad, es decir, cuando por imperiosa necesidad de tutelar el bienestar e interés colectivos, el derecho de las partes deba ceder ante aquél;

Que debiendo precisarse los casos en que la huelga o cierre tienen carácter de legales, se hace indispensable legislar claramente sobre las consecuencias que de tal declaración deriva para las partes;

Que la responsabilidad emergente de una huelga declarada ilegal debe alcanzar también a la asociacion profesional responsable como el mejor medio de prevenir acciones sindicales que se aprten de las elevadas finalidades de progreso de las condiciones de vida de los trabajadores que esa legislacion se propone tutelar;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- El Ministerio de Trabajo y Previsión, por intermedio de la Dirección Nacional de Trabajo, intervendrá de oficio o a pedido de parte interesada en todos los conflictos colectivos que se susciten entre empleadores y sus empleados en jurisdicción nacional.

También por resolución del Ministro de Trabajo y Previsión dictada de oficio o a pedido de parte, la Dirección Nacional de Trabajo, intervendrá directamente o por intermedio de las Delegaciones Regionales de Trabajo en los conflictos laborales producidos dentro del territorio de una provincia en los casos previstos por el artículo 2ª, inc. c) del Decreto-Ley 5.205/57.

ARTICULO 2ª.- Los demás conflictos coletivos que tengan carácter local serán substanciados ante las respectivas autoridades de la provincia y conforme a sus leyes vigentes.

La intervención de las autoridades provinciales cesará únicamente cuando se produzcan los casos del artículo 1ª, apartado 2ª.

Unicamente en el caso de no existir en las provincias autoridades de trabajo, el conflicto se substanciará ante la Delegación Regional de Trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 3ª, inc. c) del decreto-ley 5.205/57.

ARTICULO 3ª.- En los casos que deba intervenir la Dirección Nacional de Trabajo o las Delegaciones Regionales conforme a este Decreto-Ley, deberán intentar una conciliación entre las partes durante la cual no se modificarán las condiciones existentes.

El funcionario estatal tratarádе inducir a las partes que acepten o busquen voluntariamente medios para resolver el conflicto, inclusive la realización de investigaciones y encuentas por medio de funcionarios que designe el Director Nacional de Trabajo o Delegado Regional. En estos casos, la autoridad estatal queda facultada para dar a publicidad las demandas y ofertas hechas por las partes y el resultado de la encuesta y sus conclusiones siempre que con ello no se violen secretos de las partes dignos de protección.

Las gestiones de conciliación o avenimiento deberán producirse en el plazo de quince días hábiles y sólo podrán prolongarse por un término igual o menor mediante resolución del Ministro de Trabajo y Previsión, la que será irrecurrible.

No dando resultado el avenimiento o conciliación, se invitará a las partes a recurrir al arbitraje ante un funcionario que designará el Ministro de Trabajo y Previsión en cada caso. La negativa de las partes a aceptar el arbitraje no será considerada como violación de un deber u obligación impuesta por el presente Decreto-Ley.

ARTICULO 4º.- El Ministro de Trabajo y Previsión puede, sin embargo, resolver el sometimiento a un arbitraje obligatorio, cuando el conflicto pueda derivar en una huelga o lock out que afecten el cumplimiento de servicios públicos o se atente contra la seguridad o la salud de la población o tenga por efecto, la privación de un artículo de primera necesidad.

En la misma resolución, el Ministro de Trabajo y Previsión designará el árbitro y le señalará el término en que deberá laudar. Dicha resolución será inapelable.

ARTICULO 5º.- Dentro de las 48 horas de notificado el laudo las partes podrán recurrir del mismo mediante recurso que se interpondrá ante el Ministro de Trabajo y Previsión, quién deberá decidir, dentro del plazo de diez días hábiles y en forma inapelable, confirmando, modificando o reemplazando el laudo.

ARTICULO 6º.- Tratándose de un conflicto colectivo para el que se establece el arbitraje obligatorio, al iniciarse el procedimiento o durante el mismo, la Dirección Nacional de Trabajo, puede intimar a las partes que omitan o hagan cesar cualquier actitud que implique coerción o cese total o parcial del trabajo o disminución voluntaria del mismo y en caso de no atender las partes a la intimación, dicha autoridad puede ordenar, proponer o iniciar las medidas necesarias, para prevenir los peligros que la huelga, el cierre u otro medio de presión signifiquen para el bienestar social.

Entre estas medidas pueden incluirse también, la satisfacción a cargo de los respectivos empleadores, de las exigencias de los trabajadores que "prima facie", parezcan justificadas

como mínimas, mediante un examen sumario y fundado, como así tambien podrá declararse la ilicitud de la huelga o del cierre o de su continuación.

Estas medidas quedarán revocadas y anuladas, si el árbitro no dicta el laudo correspondiente dentro del plazo que se le fije.

ARTICULO 7º.- Es ilicita una huelga o el cierre patronal en desconocimiento o violación de un laudo, voluntario u obligatorio, mientras el laudo esté en vigor. La ilicitud sera pronunciado por resolución del Ministro de Trabajo y Previsión previa audiencia de partes.

ARTICULO 8º.- Con excepción de las huelgas a que se refieren los artículos 4º y 7º, ninguna huelga podrá ser considerada ilicita o ilegal si cumple los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido con el procedimiento de conciliación establecido en el artículo 3º del presente decreto-ley;

b) Perseguir modificaciones de condiciones de trabajo;

c) Haberse resuelto y realizarse por decisión de la mayoria de la asamblea del personal afectado o de la o las asociaciones profesionales representativas de conformidad a sus estatutos; en ausencia de ellas o de afiliación por parte de los trabajadores interesados, haberse resuelto y realizarse por la mayoría numerica de los trabajadores de la empresa o empresas afectadas. En todos los casos deberá practicarse el voto secreto;

d) Haberse anunciado a la otra parte, con, por lo menos 3 dias hábiles de anticipación, haberse formulado por escrito las peticiones que la motivan y comunicado todos estos antecedentes a la autoridad de trabajo competente;

e) Realizarse únicamente por el abandono total de trabajo y de los lugares de trabajo.

A falta de estos requisitos o de uno de ellos, procederá la declaración de ilicitud por parte de la autoridad competente.

ARTICULO 9º.- La declaración de ilicitud de una huelga o cierre obliga a los trabajadores afectados a reanudar sus labores dentro del término que establezca la autoridad de aplicación, salvo caso de fuerza mayor, y a los patrones a admitirles nuevamente al trabajo si lo hacen dentro del plazo indicado.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado 1º trae por consecuencia, para los trabajadores, la terminación de los contratos de trabajo por el hecho del abandono injustificado; para los empleadores la obligación de pagar la remuneración durante todo el tiempo del cierre y el pago de una multa que impondrá en cada caso el Ministro de Trabajo y Previsión y que oscilará entre $ 2.000 y $ 1.000.000 m/n., y para las asociaciones profesionales, el pago de una multa que será impuesta de igual manera que la anterior y con los mismos topes.

ARTICULO 10º.- El presente Decreto-Ley será reglamentado por el Poder Ejecutivo dentro de los 30 días de la fecha.

ARTICULO 11º.- El presente Decreto-Ley será refrendado por el Excmo. Señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Trabajo y Previsión, Guerra, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 12º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac Rojas - Tristán E. Guevara - Víctor J. Majó - Teodoro Hartung - Jorge H. Landaburu.-

DECRETO-LEY Nº 10.596.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 357.-

LOCACIONES - INMUEBLES DEL ESTADO - PATRIMONIO DEL ESTADO - LEY DE CONTABILIDAD - ENTIDADES AUTARQUICAS -EMPRESAS DEL ESTADO

Expediente Nº 10.946 - 1950 - S/locaciones de lugares estatales por reparticiones administrativas para cumplir servicios públicos.-MINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS.-

Señor Ministro de Asuntos Técnicos:

La Dirección General de Migraciones ocupa en el Aeropuerto Ministro Pistarini los locales necesarios para el cumplimiento de sus funciones y utiliza también algunos servicios para su personal. Por tales causas la Dirección General del Aeropuerto pretende de aquella Repartición, por una parte, el pago del precio a título de locación por los lugares ocupados, y por otra, el relativo a los aludidos servicios.-

No se discute la procedencia del pago por servicios; pero no ocurre así respecto al precio de la pretendida locación, cuya legitimidad es negada por la Dirección General de Migraciones. Sobre este punto, una y otra Repartición, sustentan interpretaciones opuestas que aparecen concretadas en los dictámenes de fojas 65 y 24 y 75, del Director Nacional de Asuntos Legales del Ministerio de Transportes y del de igual clase del Ministerio de Asuntos Técnicos, respectivamente.-

Por tanto, el punto sobre el que exclusivamente debo expedirme consiste en establecer, si la Dirección General

de Migraciones está obligada a pagar a la del Aeropuerto, a título de locación, el precio pretendido por la última, o si por el contrario corresponde el libre uso de los locales, salvo el reintegro de gastos de conservación y administración.-

La circunstancia de que los alquileres reclamados corresponden al lapso en que el citado Aeropuerto funcionó con carácter de Dirección General, vale decir, común dependencia administrativa, y como la ocupación de los locales por la de Migraciones ha de continuar necesariamente, pero transformado ya aquél organismo en parte integrante de la recientemente creada Empresa Nacional de Transportes, la solución integral del caso hace preciso tener en cuenta a fin de determinar si el régimen de la ocupación de locales para cumplir servicios públicos debe ser distinto, según aquellos se encuentren en dependencias administrativas ordinarias o en descentralizadas, matíz que, naturalmente, obliga a referir al alcance de la autonomía que caracteriza a las Empresas del Estado. En otros términos; si así como tratándose de las primeras el uso es libre de remuneración lucrativa mediante la decisión circunstancial del Poder Ejecutivo conforme a sus facultades, respecto de las segundas debe aplicarse idéntico sistema, o por el contrario, procede la retribución por virtud de la autonomía y el principio de la onerosidad de los servicios a cargo de las Empresas del Estado.-

Adelanto mi opinión, de que tanto cuando funcionó como Dirección General como en el nuevo carácter de Empresa atribuído al Aeropuerto, esa Repartición no puede pretender a título de locación remuneración ninguna por los locales ocupados por la Dirección General de Migraciones, cuyo uso libre le corresponde a ésta en razón de ser indispensable para el cumplimiento del servicio público a su cargo.-

Por de pronto, los contratos de locación que en función de la ley Nº 13.041 el art. 18 del decreto Nº 10.177/50 autoriza a celebrar a la Dirección General del Aeropuerto, son únicamente con relación a las "empresas usuarias", es decir, exclusiva

mente locación a los particulares que utilizan las instalaciones y servicios del Aeropuerto.-

Esa exclusividad resulta no solamente del propio texto reglamentario citado, sino que aparece categóricamente certificada por el contenido de los arts. 19, 20, 21, 22, 24 y 26 del mismo decreto, ya que no se concibe que se haya supuesto para entre reparticiones del Estado contratos de locación por licitación, ni intereses por mora del pago de tarifas y multas, ni mucho menos someterlas a lo prescripto por el art. 26 que estatuye la caducidad de la concesión y pérdida de los derechos de los arrendatarios por la falta de pago de dos períodos de alquiler. Bastaría imaginar, que por cualquier circunstancia se presentará la situación prevista en último término, para rechazar la posibilidad de una locación entre ambas Reparticiones del Estado, pues si la falta de pago, dentro del juego regular de la locación puede derivar en el desalojo -substancialmente compulsivo- sería aberrante suponerlo respecto de órganos de la misma Administración Nacional.-

La locación, contrato sinalagmático y conmutativo, exige necesariamente dos partes, locador y locatario y puesto que la una se obliga a dar el uso y la otra a pagar el precio supone patrimonios distintos. Pero han de ser realmente distintos y por ende distintos los titulares, pues si la diversidad de patrimonios es sólo aparente, consecuencia de una ficta pluralidad de partes, además de operarse la inadmisible confusión de las mismas, que por sí impediría el contrato, podría aparejar situaciones de contrasentido, entre muchos, la ya aludida, de que merced a aquella ficción el verdadero y único titular del patrimonio -por ser el del bien materia de la hipotética locación- tuviere que desalojarse a si mismo.-

Claro, es posible redactar un instrumento en el que una repartición tome el carácter de locador y otra el de locatario; pero lo que interesa es la validéz de aquél como contrato, primero en cuanto a su perfección y luego respecto de su

funcionamiento, y esto sí que es imposible si las otorgantes son nada más que órganos de una misma persona jurídica.-

Es que en la locación las partes gozan de derechos y contraen obligaciones particulares al carácter de cada una, imposibles de coexistir sin pluralidad de intereses, que vale decir, de patrimonios y de titulares.-

El Estado ni nadie puede darse en arrendamientos sus propios bienes, pagarse a si mismo por el uso de ello. Esto no requiere mayor detenimiento.-

Los arts. 53 y 39 de la Ley de Contabilidad, al disponer que los bienes afectados a un servicio público se consideren concedidos en uso gratuito y administrados por el Ministerio o entidad respectivos, siendo a cargo de las reparticiones usuarias los gastos de administración y conservación que dicho uso ocasiona; al establecer que el Poder Ejecutivo podrá transferir el uso de una repartición a otra, con o sin cambio de jurisdicción y quedando los bienes sin destino pasan a la del Ministerio de Hacienda; igualmente cuando autorizan la transferencia patrimonial sin cargo de materiales en desuso y cuando estatuyen el pago de servicios y suministros entre las dependencias descentralizadas con cargo a los respectivos presupuestos (cosa ésta que se funda en que media una erogación incidente en el presupuesto de la dependencia que los presta) a excepción de los que las leyes o el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades autoricen la prestación gratuita, constituyen la expresión legal de la singularidad del dominio del Estado sobre los bienes afectados a sus reparticiones -las que por eso, sólo tienen su uso- y al propio tiempo revelan la preexistencia de facultades privativas del Poder Ejecutivo en las que se originan y fundan las que dichos preceptos le reconocen respecto a disponer las transferencias de bienes o de su uso, (punto éste que he de tratar oportunamente de manera más particular) y que evidentemente descartan la posibilidad jurídica de que los bienes estatales puedan ser objeto

de locación entre los órganos administrativos.-

El principio de la onerosidad de los servicios a que refiere el dictámen de fs.65 vinculándolo a la ley Nº 13.041 y que tanto ella como el decreto nº 10.177/50 establezcan que las contribuciones, etc. originadas en la explotación han de afectarse a la ampliación y mantenimiento de los servicios del Aeropuerto, refieren, lógicamente, a los ingresos previstos por la ley y Reglamento citados, que como lo he señalado y en especial en lo tocante a los provenientes de locaciones son exclusivamente los originados por el uso de las instalaciones por los particulares. Pero ninguna disposición de la ley y del Reglamento permitiría extender el aludido principio para alcanzar a las reparticiones públicas.-

No imagino como podría armonizarse la necesidad del uso de locales por una Repartición Administrativa para cumplir una función, un servicio típico y privativo del Estado, con la exigencia de pagar a otra, a cualquier título, el uso del espacio necesario, tanto más, si como aquí ocurre, el servicio respectivo es indispensable para el funcionamiento de la que en estas actuaciones pretende la remuneración cuestionada.-

Considero fundamental, que la ocupación de lugares del dominio del Estado requerida para la prestación de servicios públicos, no puede dar ocasión a remuneraciones lucrativas. Es principio de buen gobierno, que los servicios públicos deben ser prestados de la manera más económica para los habitantes y esto resultaría desconocido si en la prestación incidiera un lucro interadministrativo previo, que necesariamente aparejaría un mayor costo de aquéllos. Por lo demás, a esa índole de remuneraciones se opone la unidad del dominio estatal sobre los bienes afectados a todas sus reparticiones, y por otra parte, cabe señalarlo, ese lucro constituiría tan sólo un motivo de encarecimiento de los servicios, pues prescindiendo de su impropiedad jurídica sustancial, en el hecho resultaría ilusorio porque el Estado vendría a ser quien lo sirve y recibe, ya que esas retribuciones habrían de gravi-

tar en el presupuesto de la repartición ocupante, en definitiva, en el del propio Estado.-

El principio que sustento, está en la substancia y explica lo dispuesto por los arts. 53 y 39 de la Ley de Contabilidad. Si la prestación de los servicios públicos no se ajustara a él, ni los lugares ocupados por la Policía de Seguridad, Sanidad, ..., -servicios públicos también- escaparían al principio de la onerosidad de los actos de las Empresas del Estado, que se invoca para justificar el pago de las retribuciones de la índole. Si éstas se entendieran procedentes, quizás se tornaría justo reconocer en este caso a la Dirección General de Migraciones el derecho de exigir al Aeropuerto, por lo menos el reintegro de gastos por los servicios que aquélla presta y son indispensables para el funcionamiento de dicha aeroestación.-

Pero, evidentemente, el sistema sólo serviría de inútil complicación, siendo más simple y razonable reconocer, que el cumplimiento de servicios o funciones privativas del Estado en lugares de su pertenencia, no puede ser gravado por un previo tráfico comercial entre las reparticiones públicas.-

Refiriendo, pues, al lapso en que el Aeropuerto funcionó bajo una Dirección General, aparte de no estar la locación autorizada por la ley Nº 13.041 y que, por el contrario, como lo anticipé, el decreto Nº 10.177/50 la prevé exclusivamente respecto de las "empresas usuarias", el cobro aquí pretendido en concepto de alquileres es improcedente, -carece de causa legítima- siendo además contrario a la esencia del art. 53 de la Ley de Contabilidad y los que dejo enunciados acerca de la impropiedad jurídica de locaciones entre organismos de la Administración.-

Y, entiendo que esa impropiedad se ha concretado en estas mismas actuaciones; de otra manera no se explica que solicitado por el Departamento a cargo de V.E. al de Transportes de la Nación un facsímil de los contratos que el Aeropuerto otorgara

respecto a la ocupación de locales por otras dependencias, se respondiera que es innecesario formalizar contratos de locación entre las reparticiones públicas, tesis que no fué obstáculo para instar el pago de "alquileres" (fs. 54, 67 y 68).-

Aprovecho el paréntesis, para destacar que la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio a cargo de V.E. en el dictámen de fs. 75 ha rechazado categóricamente la procedencia de formalizar contrato de locación ni el pago de arrendamiento alguno, admitiendo el reintegro de gastos de administración, etc., proporcionales a los lugares ocupados, con lo que coincido, según resulta de lo que llevo expuesto.-

Y, a fs. 31/33 también concuerda sobre el libre uso la Contaduría General de la Nación, pues si bien se funda en que "tratándose de locación entre reparticiones del Estado, podría el Poder Ejecutivo autorizar se realizara sin cargo" (descartado la improcedencia de la locación y que ésta no se concibe sin precio, sin cargo) en substancia está por la libre ocupación, si bien aclara, que el pago correspondería si al Aeropuerto se acordara carácter de Empresa, por virtud de la onerosidad de sus actos, punto éste sobre el que discrepo, como más adelante se apreciará.-

Prosiguiendo pues; los principios que dejé rápidamente esbozados, son sin duda, fundamentales y decisivos de las situaciones de la índole y su fuerza no resulta enervada por la descentralización de los órganos administrativos, que llámese autarquía o autonomía, no pretende, por cierto desconocer la unicidad del dominio estatal ni de la Administración y como es bien sabido, responde a satisfacer las exigencias de la creciente extensión de las actividades del Estado.-

Derivo a este terreno, anticipando que no cambia mi opinión frente a la reciente conversión del Aeropuerto -antes

bajo una Dirección General- en parte integrante de la Empresa Nacional de Transportes (E.N.T.). Considero, que si como Dirección General, -dependencia administrativa común sometida al régimen de la ley Nº 12.961- sus bienes afectados o su uso podían ser transferidos a otra repartición por decisión del Poder Ejecutivo de acuerdo a los arts. 53 y 39 de dicha ley, la nueva conformación jurídica del Aeropuerto no impide el ejercicio de las mismas facultades por el Poder Ejecutivo, ya que si bien el art. 8º de la ley de Empresas del Estado las exceptúa de la Ley de Contabilidad, ello responde a otros fines no incompatibles con la mencionada facultad del Poder Ejecutivo, pues proviene de atribuciones más generales que le son privativas y puede por ello ejercerla aún con prescindencia de las disposiciones de la ley Nº 12.961.-

En efecto, y refiriendo primeramente al alcance de la autonomía, para hacerlo luego respecto de aquella facultad del Poder Ejecutivo. La autonomía acordada a las Empresas es sólo relativa; por razones obvias no podría ser absoluta. Aún con la más amplia concepción de la estructura autárquica, los poderes que ejercen, los bienes y los intereses que manejan conservan siempre como titular único y verdadero al Estado. Los bienes que se les asigna constituyen el generalmente denominado "patrimonio de afectación", calificativo que me parece ser el que mejor refleja la realidad, porque se trata de un patrimonio que se confía para la gestión reglada y controlada y que no muda el dominio genuino y permanente del Estado aunque le caracterice una ficta individualidad financiera, que como la propia autonomía en que se funda, obedece exclusivamente a favorecer el mejor gobierno de los servicios o negocios puestos a cargo de dichas empresas. Pero nada más. De ahí que cuando frecuentemente se dice que las entidades autónomas cuentan con recursos propios, sólo pueda aceptarse como una expresión convencional para referirse al patrimonio de afectación, pero no comprensiva del dominio. Porque, ni aún los ingresos resultantes de su actividad son "propios" de esas enti-

dades, pues tienen por fuente actividades desarrolladas en base al patrimonio originario de afectación al que vienen a incrementar siguiendo la condición jurídica de aquél, esto sin perjuicio de que es común que parte de aquellos ingresos se vuelquen en las rentas generales, corroborando así el dominio estatal.

Bielsa, el eminente tratadista, explica:

"Bajo una denominación genérica y casi siempre imprecisa, "se llama en nuestro léxico administrativo "repartición autó- "noma" a órganos a veces no descentralizados en lo administra "tivo, sino y tan sólo en lo burocrático, o bien a órganos con "patrimonio afectado a un destino o, a una gestión esto es, "que por esa afectación patrimonial y por la naturaleza de los "elementos constitutivos de ese patrimonio se los considera "con "individualidad financiera", expresión no muy propia pe- "ro significativa". (Estudios de Derecho Público, T.I, pág.136)

Para fijar el alcance de los términos "individualidad financiera", conviene señalar que el mismo autor refiriendo al contralor a que las entidades autárquicas están sujetas, expresa:

"Las entidades autárquicas son personas de derecho público, "que forman parte de la Administración Pública, (Administra- "ción descentralizada, pero administración pública siempre)". "Los recursos financieros de esas entidades son públicos, ya "se trate de asignaciones directas, ya de retribución de los "servicios que las entidades autárquicas prestan..." Es decir, "que administran bienes del Estado (poco importa que sean perso "nas distintas del Fisco Nacional, es decir, de la persona ju- "rídica Nación). Precisamente, el carácter de esa Administra- "ción de la cosa pública justifica ese especial contralor de "que se trata", agregando, "siendo públicas esas entidades, pues "to que forman parte de la Administración Pública -si bien, co- "mo dijimos, administración descentralizada- dedúcese necesa- "riamente que ellas deben someterse a un régimen general de fis

"calización o contralor propio de toda la Administración Pú-"blica". (Op.cit. T.I, pág. 409).

La misma personalidad que invisten obedece a la naturaleza de la gestión que involucra actos de administración y aún de disposición patrimonial y consulta razones de orden práctico, en especial la de la actuación en juicio, pero sin alcanzar ni pretender nunca transformarlas en entes distintos del Estado, de cuya pertenencia son.

La jurisprudencia ha establecido ocasionalmente qué entidades autárquicas determinadas son personas distintas de la Nación o del Fisco; pero esto no debe confundir, pues la diferenciación está dirigida a determinar a quién de aquéllas debe demandarse, vale decir, en relación a uno de los aspectos de la autonomía, o sea, el de la autarquía judicial.

La Corte Suprema de Justicia, abarcando aspectos más generales de la autonomía administrativa tiene declarado:

"Si bien la Nación no es distinta de las reparticiones "autárquicas, éstas se diferencian de aquéllas en cuanto a "la manera de gobernarse; al alcance de sus facultades, a la "jurisdicción a que están sometidas en sus litigios y a la "personalidad y representación con que actúan en ellos, por lo "cual la Corte ha declarado que cuando ellas litigan, la Na-"ción no es parte directa en el juicio y no procede la terce-"ra instancia ordinaria". (Fallos T. 102, pág. 20).

Es sustanciosa la doctrina de ese fallo. Al establecer la identidad de la Nación con las reparticiones autárquicas, admite, tal cono lo sustento, que éstas forman parte de aquélla. También se desprende, que la autonomía y la personalidad responden a la manera de funcionar, a lo operativo del servicio, industria, etc., y en cuanto expresa que la Nación no es parte directa en los litigios de dichas entidades, conviene advertir que ello es tan sólo y precisamente un efecto pretendido de la personalidad que se les acuerda, de la manera cómo funciona esa personalidad, pero que no significa que la Nación,

como es lógica consecuencia del dominio de los bienes e intereses en juego y la dependencia de las entidades, no sea interesada, parte substancial pase a no intervenir directamente en los litigios.

Esto se explica, porque esa personalidad "sui generis" no funciona siempre del mismo modo; produce todos los efectos propios de la personalidad jurídica en las relaciones con los terceros nacidas de las actividades confiadas a las entidades, pero no se proyecta, no podría proyectarse de igual forma respecto del Estado ni su Administración porque lo impiden el dominio de éste sobre los patrimonios de afectación y la condición de reparticiones estatales, que son causa de la dependencia y contralor ya dudidos. En esa forma de funcionar estriba también, que si en las relaciones con terceros son aplicables a dichas entidades las normas del derecho común, en las que mantiene con la Administración se rigen por las del derecho Administrativo.

Entiendo que estas consideraciones aparecen apoyadas por la indiscutida autoridad del profesor Bielsa, cuando refiriendo a la regulación y autolimitación de las atribuciones de la Administración Pública, expresa:

"Así, por ejemplo, en los servicios públicos, el Estado "al crear un servicio somete su funcionamiento a normas administrativas de dos órdenes: técnicas y jurídicas. Todo lo "que mira al funcionamiento del servicio, sin mirar a la vinculación del usuario y la entidad que lo gestiona o presta, es "materia de administración interna", agregando luego, "Pero "ese servicio público, especialmente si se descentraliza, exige una regulación jurídica. Si es establecimiento público o "entidad autárquica estará sometido, en mayor o menor grado "al contralor del Estado, mejor dicho del poder central, pues "el ente descentralizado no está fuera del Estado, sino, y antes bien, es un órgano del Estado; es el Estado mismo, aunque se hable de Administración indirecta del Estado". (Op.cit. pág. 101/2).

Vése entonces, que si como es axiomático el ente descen-

tralizado no está fuera del Estado, es órgano suyo y es el Estado mismo, esto es decisivo en la interpretación que sustento con relación al caso en consulta, vale decir, impedimiento de locaciones entre sus dependencias, porque no puede venir a ser él a la vez locador y locatario de bienes de su dominio.

Medularmente, pues, la autonomía de las dependencias administrativas -las empresas, desde luego, inclusive- constituyen una forma de cumplir servicios públicos o actividades que por razones de interés general toma el Estado progresivamente a su cargo con asignación de un patrimonio que para realizarlas se confía a la administración de aquéllas, y una personalidad jurídica necesaria a la gestión pero con distintos efectos según se la relacione al Estado o a terceros. Al fin de cuentas y por mucho que se discurra, respecto al Estado y a su Administración significa nada más que un cierto grado de libertad -quizás mejor de soltura- conveniente a los objetivos determinantes de la creación de las entidades descentralizadas, cuyo mejor logro requiere facultades de autodeterminación (nunca absolutas puesto que las delimitan la ley, reglamentos y estatutos) acordes con la índole del servicio, industria, etc. y la agilidad indispensables para su realización, que de ordinario comprende operaciones instantáneas o de rápida ejecución, de carácter comercial, que el trámite administrativo común indudablemente trabaría.

El marco de la autonomía que dejo señalado es concordante con la letra y el espíritu de la ley nª 13.653 básica de las empresas del Estado, cuyas normas se amoldan a nuestra estructura Constitucional y distan mucho de presumir ni autorizar una autonomía de límites más amplios.

Por de pronto, el art. 1ª las define, acertadamente por cierto, como "las entidades descentralizadas de la Administración Nacional, que cumplen funciones de índole comercial, industrial o de prestación de servicios públicos de carácter similar". Esto es importante, pues en armonía con esa caracterización legal, los once artículos restantes, con la sola excepción del 8ª (que las excluye del régimen de la Ley de Contabilidad y sobre cuyo alcance he de volver) y el artículo que es

de forma, todos certifican el dominio de los bienes, la dependencia y el contralor del Estado sobre sus Empresas.

En efecto, aparte de emerger del propio carácter atribuído a las Empresas por el art. 1ª, ello está reiteradamente manifiesto en los especiales poderes que se reconocen al Poder Ejecutivo, y que abarcan, desde el otorgamiento de los Estatutos, al funcionamiento bajo su control directo,la facultad de ampliaciones o reducciones presupuestarias si lo imponen necesidades financieras o económicas a consecuencia de aumentos o disminución de sus recursos, las que como los gastos por sueldos y administración se incorporan al presupuesto general de la Nación, la de dar cuenta al Poder Ejecutivo de los gastos, inversiones, etc., elevarle a la aprobación la memoria sobre la labor realizada, el estado de activo y pasivo, cuenta de ganancias y pérdidas, la fiscalización por el sistema de auditoría contable según lo reglamente el Poder Ejecutivo y llegando hasta facultarle para constituir nuevas Empresas del Estado con los servicios actualmente a su cargo.

Como puede apreciarse, la unidad substancial del patrimonio del Estado y los bienes asignados a sus Empresas no sólo radica en que se constituyen con bienes de aquél y con fondos del mismo dominio (sean producido del giro o refuerzos del Tesoro público) se cubren las contingencias del funcionamiento, sino que aquella unidad subsiste hasta el fin, ya que en el supuesto de la cesación de las actividades, los bienes hasta entonces a aquellas entidades afectadas continúan del patrimonio estatal y de igual manera los saldos negativos.

Naturalmente, por su parte, el decreto de creación de la Empresa Nacional de Transportes (E.N.T.) está amoldado a la ley básica recién comentada, y sin entrar a un innecesario análisis particular de todas sus disposiciones, por su expresividad y concordancia con la tesis que vengo sustentando cabe destacar el art. 1ª que crea el organismo, "dependiente

del Ministerio de Transportes de la Nación","conforme a la ley 13.653"; el art. 2º que pone a su cargo "la administración y explotación de todos los medios de transporte público de propiedad del Estado Nacional". El resto del artículado, al par que coloca la administración y dirección a cargo de una junta presidida por el Ministro de Transportes de la Nación, determina las facultades de la misma y somete la gestión al contralor del Poder Ejecutivo previsto por la ley 13.653, siendo de advertir, que si bien el art. 10 confiere a los administradores generales de los medios de transporte que integran el organismo "plena autonomía técnica, económica y financiera", ésa órbita de acción aparentemente absoluta está de inmediato encuadrada en sus límites adecuados por la propia disposición citada, al agregar, "con las atribuciones normales y ordinarias que los usos y costumbres comerciales acuerdan a los mandatarios que desempeñan cargos de esa naturaleza..." ajustándose en su gestión a las normas y reglamentaciones que dicte la "junta directiva", las que, va de suyo, han de acomodarse a las disposiciones de la ley básica nº 13.653.

Considero oportuno expresar, que mi relativa detención sobre los caracteres y efectos de la autonomía administrativa, aparte de ser necesaria para dilucidar el caso en consulta, responde a que la creciente estatización de servicios y actividades multiplica los asuntos de la índole reclamando un planteamiento con vistas a la solución general de los mismos, y tiende también a precaver de las interpretaciones, que en especial tratándose de Empresas del Estado, atribuyen a su autonomía una amplitud exorbitante de sus verdaderos límites y que a fuerza de persistir pueden generalizarse con el riesgo de hacer que una institución útil, sea en la práctica causa de entorpecimiento en la Administración pública. Estas razones y propósitos explican la extensión con que me expido.

En ese orden de ideas, procurando aportar elementos de juicio convenientes para fijar el cabal concepto de la autonomía, entiendo, que aparte de lo dicho, es preciso cuidarse de la asi

milación, que sin mayores reservas, suele hacerse entre las Empresas del Estado y las privadas. Prescindiendo de diferencias tan substanciales como son la manera en que unos y otros nacen a la vida jurídica, la esfera de libertad, el distinto carácter de la intervención del Estado en su funcionamiento etc., es elemento diferencial, que en tanto en la actividad comercial privada, sin perjuicio de los nobles fines que la caracterizan, como fuente de trabajo, producción y sus repercusiones sociales, el lucro ocupa relevante importancia como incentivo, mientras que en la realizada por el Estado, prevalece la satisfacción de necesidades o conveniencias públicas, sea por la prestación de servicios públicos propiamente dichos, sea fomentando la implantación de nuevas industrias o propendiendo al establecimiento de costos generales razonables mediante una prudente y honesta competencia.

Por esa substancial diferencia de objetivos, es que por principio, en las Empresas del Estado el lucro no constituye un fin sino tan solo un medio; lo prueba, que los beneficios resultantes se aplican de ordinario a incrementar su actividad, que vele decir, a satisfacer mejor la respectiva especie del interés público, lo que no se desvirtúa, si parte de aquellos beneficios -cuya razonabilidad debe ir pareja con los fines de la actividad comercial del Estado- se incorporan a rentas de la Nación, pues por esa vía también resulta de algún modo servido el interés general.

Conviene aclarar, que no afecta dichas diferencias que las entidades comerciales del Estado satisfagan impuestos y que conforme al decreto nª 26.432 del 26/12/51 hasta se las haga pasibles del recargo por mora. Pase a que es principio doctrinario y jurisprudencial, que los entes autárquicos, aunque personas distintas del Fisco (distinción fundada en la índole económica o financiera de la actividad específica de aquéllos),por su condición de órganos del Estado gozan de su inmunidad impositiva , la sujeción a los impuestos puede encontrar su justificativo cuando las entidades desarrollan

actividades comerciales y tal como lo establece el mencionado decreto, se tiende a colocarlas en igualdad de condiciones con las entidades privadas a fin de impedir que las compitan en situación de privilegio. En tal sentido la asimilación -que no refiere a lo substancial- aparece razonable porque hace a la lealtad de la competencia comercial.

Si, pues, por la índole de su actividad estas Empresas son asimilables a las particulares en sus relaciones con el público, esa identificación no cuadra en las que mantiene con el Estado. Merced al falso concepto de la semejanza podría llegarse a consideralas con una independencia de tal grado que admitiera comerciar con el Estado, dicho de otro modo, tratar a éste, su propio y genuino titular, como si no lo fuera, de la misma manera que a los particulares.

El razonable lucro, es -por sus fines- justificado en las operaciones de las empresas con la generalidad, pero no respecto a las que realiza con el Estado, pues aparte de lo que anticipé sobre su impropiedad jurídica, siendo la actividad del Estado siempre de interés público, la intervención de comercio interadministrativo tendría en el hecho a enfrentar dos especies de aquél, haciendo que un determinado interés público gravitara en otro mediante el necesario encarecimiento en la medida del lucro concurrente.

Es también primordial, que conforme al art. 40 de la Constitución, los servicios públicos pertenecen originariamente a la Nación, no pueden enajenarse ni concederse y los en poder de los particulares deben recuperarse. Y lo es, porque esto a pareja que el Estado está obligado a prestarlos, y frente a esa obligación que reviste la imponencia de su carácter constitucional, hay que reconocer, que si un determinado servicio público requiere prestársele en lugares afectados a los órganos descentralizados, la autonomía de éstos no puede gravitar en aquel servicio explotándose por las empresas la necesaria ocupación.

Esos principios no pueden subordinarse al de la onerosidad de las actividades de las Empresas, ni para satisfacer las

conveniencias contables aludidas en el dictamen de fs. 65,especialmente dirigidas a establecer el costo real de los servicios o industrias por ellas realizados, en el caso, los del mencionado Aeropuerto. Entiendo, que aparte de que como lo he reiterado, el lucro de las Empresas con el propio Estado carece de fundamento jurídico ni económico, de admitirse que las reparticiones públicas estuvieran obligadas a pagar los locales necesarios para cumplir sus funciones, los ingresos reflejarían falsas ganancias con relación al patrimonio general del Estado, ocasionando un estéril desplazamiento de fondos públicos.

Pienso que aquel costo, sobreentendida la reintegración de los gastos que la ocupación causare, puede ser establecido con exactitud, descartando aquellos impropios ingresos,en cuanto representan lucro puro. Es seguro que en los procedimientos contables ha de hallarse la fórmula adecuada para esa determinación.

Considero, que cuanto dejo expuesto acerca de la autonomía de los órganos descentralizados, las Empresas inclusive y en particular sobre la Nacional de Transportes, basta para admitir como fundamentales conclusiones; que sin perjuicio de esa autonomía y la consiguiente personalidad, el Estado conserva el dominio de los bienes afectados a sus empresas sobre las que por razón de que ejercen poderes y desarrollan antividades suyas, funcionan bajo su contralor; que siendo dicha autonomía y la personalidad, fruto de una construcción jurídica que responde a una descentralización exclusivamente funcional de los servicios públicos o actividades estatales, no relaja la unidad jurídica y patrimonial del Estado y su Administración, y que en tales condiciones de substancial unidad -base esencial de la interpretación que sustento- la autonomía, ni ninguna ficción radicada en una exagerada extensión de aquélla, justificaría que la actividad comercial del Estado a través de las Empresas gravitara en la prestación de servi-

cios públicos a cargo de otras dependencias administrativas, de manera que -en lo atinente al presente caso- tal como lo afirmé respecto de las reparticiones comunes, los lugares o locales que para cumplir aquéllos requieran las dependencias del Estado en jurisdicción de sus Empresas, no pueden ser materia de locación ni contraprestaciones lucrativas, sin perjuicio del reintegro de gastos que la ocupación causare cuando no fueran satisfechos directamente por la repartición ocupante.

Con ello queda indicado lo que hace a la substancia de la solución que el presente caso corresponde; resta entonces, establecer la vía legal por la que debe concretarse.

En tal sentido, preciso es prevenir, que a falta de una norma legal o reglamentaria estableciendo en forma directa y general el libre uso de lugares o locales de pertenencia estatal para el cumplimiento de servicios públicos por las dependencias administrativas -que además de jurídico, será lo más práctico- el objetivo se alcanza mediante la transferencia del uso, con o sin cambio en la afectación patrimonial del bien, en favor de la repartición a cargo del respectivo servicio.

Esa transferencia la prevé el art. 53 de la Ley de Contabilidad, operándose por el ejercicio de la facultad que al efecto reconoce al Poder Ejecutivo, procedimiento incuestionable, desde luego, cuando se trata de dependencias sometidas al régimen de dicha Ley. Pero, la circunstancia de que el art. 8ª de la ley posterior y básica de Empresas del Estado las excluye de la Ley de Contabilidad, impone dilucidar, si la transferencia del uso por decisión del Poder Ejecutivo, como medio de conferir el uso de lugares o locales donde cumplir servicios públicos en jurisdicción de las entidades descentralizadas -más para el caso, las Empresas- resulta o no impedida por dicha exclusión o por virtud de la autonomía de aquéllas.

En lo tocante al alcance de esa exclusión, cabe señalar que el citado artículo 8º de la Ley Nº 13.653 responde exclusivamente a facilitar el funcionamiento de las Empresas, de sus operaciones en general no típicamente administrativas, liberándolas de lo que la Ley de Contabilidad puede contener de recaudos y trámites capaces de entorpecer la agilidad y flexibilidad necesarias al giro de aquéllas. Esto es lo que resulta de la fundamentación del proyecto y los restantes antecedentes parlamentarios (V.Diario de Sesiones, Cám. de Dip. de la Nación, setiembre 29/49, pág. 4.250/51, pág.4978/80: D. de Sesiones Cám. de Sen.setiembre 30/49, pág. 2431/33).- Y pese a no haberse hecho particularización al respecto, me parece evidente que no se ha pretendido desconocer la facultad del Poder Ejecutivo a que refiere el art. 53 de la Ley Nº 12.961, porque además emergiendo originariamente de la Constitución, como lo he de explicar, resultaría írrita cualquiera disposición legal que de algún modo tendiera a dificultarla o impedirla.-

Es aparente para el caso, el siguiente juicio:

"El legislador puede dar personalidad jurídica a ciertos servicios públicos, o sea crear entes autárquicos, en cuanto a organismos administrativos que realizan actividades técnicas diferenciadas. Lo que no puede es alterar las atribuciones que el Poder Ejecutivo tiene por la Constitución, según la cual él es el Jefe supremo y tiene a su cargo la administración general del país". (Bielsa, op.cit.T.I., pág. 76/77).

De ahí, que si como ocurre, aquella facultad encuadra en las atribuciones del Poder Ejecutivo, la inaplicabilidad de la Ley 12.961 establecida de manera general por el citado artículo 8º de la Ley 13.653, no puede impedir su ejercicio, y en consecuencia, si únicamente por razones de orden práctico para ahorrar controversias doctrinarias evitables sin menoscabo de la pertinente solución del asunto, puede admitirse y es aconsejable en estos casos prescindir de la invocación del

precitado art. 53 de la Ley de Contabilidad, igualmente y por la vía directa de los preceptos constitucionales en que la citada facultad originariamente radica, puede, el Poder Ejecutivo ejercitarla, cuando la transferencia del uso se relaciona a órganos descentralizados de la Administración Nacional.-

Casi huelga aclarar, que la elección de esa vía, aparte de ser inobjetable, no importa tomar un camino de sesgo, porque no lo es fundar la resolución del asunto en la propia fuente de la competencia; y esa elección, cuyo motivo he anticipado, no pretende sortear el art. 8° de la Ley de Empresas del Estado con el propósito de reconocer para el Poder Ejecutivo una atribución que respecto de ellas no tuviere, sino que responde a evitar que lo genérico y sin distintos de los términos de dicha disposición legal pudieran confundir y en la práctica resultara desconocida la que en realidad corresponde a sus poderes constitucionales, y sin perjuicio de éstos, de los que resultan de la propia Ley 13.653.-

La facultad a que se refiere el art. 53 de la Ley de Contabilidad, que consulta la singularidad del dominio estatal, la unidad de la Administración general y la dependencia de sus órganos respecto del Poder administrador, constituye nada más que una exteriorización específica de las atribuciones inherentes al carácter acordado al Poder Ejecutivo por el art. 83, inc. 1° de la Constitución, a las que la reforma de 1949 sumó las muy especiales del inc. 23. No se trata pues, de una creación del art. 53 ni de su armónico el 39 de la Ley de Contabilidad, que en definitiva, solamente han puesto en función concreta una atribución constitucional preexistente, circunstancias que explican que existe y subsiste con prescindencia de aquellas disposiciones y el art. 8° de la Ley 13.653. Vale decir, que siendo originaria de la Constitución, dicha facultad puede ser ejercida directamente aún cuando no esté reflejada en ninguna disposición legal o reglamen-

taria.-

En efecto: por virtud del dominio del Estado sobre los bienes asignados o afectados a todos sus organismos, éstos tienen exclusivamente el uso de los mismos; esto y la gratuidad del uso se explican por la sola enunciación. Disponer pues, la transferencia del uso entre las dependencias, sean comunes o descentralizadas, cuando alguna ha de cumplir servicios públicos en lugares asignados a otras es, fuera de toda duda, un acto típico de pura administración, comprendido en las potestades implícitas e inherentes al carácter de poder administrador que el Poder Ejecutivo inviste conforme al art. 83, inc. 1º de la Constitución.-

Se trata solamente de distribuir el uso de los bienes según las necesidades de los organismos del Estado, en vista a posibilitar o favorecer la más eficiente prestación de los servicios y desarrollo de las actividades estatales, que vale decir propender a la mejor satisfacción de las necesidades públicas. Y, en el ejercicio de esa facultad, es preciso reconocer cierto grado de discrecionalidad, porque es propio de su desempeño la apreciación subjetiva y circunstancial de las razones de conveniencia, sean oportunidad, economía, etc., siempre cambiante, que por ello no pueden ser materia de previsión específica y justificar la latitud de los poderes implícitos de administración.-

No importa, entonces, que la citada facultad no esté especificada, bastando ser concerniente a los poderes emergentes de la cláusula constitucional precitada, que sin perjuicio de los expresamente establecidos, comprende en su inc. 1º los tácitos necesarios al buen funcionamiento de la Administración general, de la que el Poder Ejecutivo es Jefe superior y responsable.-

Pero es que la facultad a que vengo aludiendo reconoce además otra fuente de carácter constitucional; el inciso 23 del mismo artículo 83 introducido por la reforma de 1949, que confiere al Poder Ejecutivo la especial atribución de proveer "lo conducente al ordenamiento y régimen de los ser

vicios públicos a que se refiere el inciso 13 del art.68", precisamente, ("servicios públicos de propiedad de la Nación y explotados por sus órganos industriales"),y si como ocurre, lo relativo al "ordenamiento" se traduce en el poder de disponer por autoridad la observancia de sus resoluciones y lo referente al "régimen", el de establecer la manera de gobernarse, dictando a tal fin, reglamentos, decretos, etc., evidentemente se ha conferido al Poder Ejecutivo una atribución bien específica sobre el funcionamiento de los servicios públicos y los organismos industriales del Estado, atribución que en la amplitud de los poderes mayores que involucra, incuestionablemente comprende el que viene a ser una consecuencia de aquéllos, vale decir, la facultad de disponer cambios sobre el uso de los bienes asignados a aquellos organismos según lo exija el cumplimiento de los servicios públicos.-

Además, aparte del doble basamento que esa facultad tiene en la Constitución, y en armonía con él, la propia y ulterior ley básica de Empresas del Estado también implícitamente la comprende, pues no otra cosa resulta de los extensos poderes que respecto de ellas reconoce al Poder Ejecutivo, en cuyo análisis no me detengo por haberlo realizado anteriormente.-

Frente a dichas disposiciones, de las que dicho sea de paso, el nuevo inc. 23 del art. 83 de la Constitución y la ley básica Nº 13.653, mediante las atribuciones, intervención y contralor que confieren al Poder Ejecutivo, colocan en su cauce el sistema de la descentralización amoldándolo al principio de administración pública centralizada impreso en el art. 83, inc. 1º de la Carta Fundamental, hay que concluír, en que la autonomía de las Empresas del Estado, no es obstáculo para la facultad que vengo tratando, y que tampoco influye el carácter "reglado" que la doctrina asigna al contralor del Poder Ejecutivo, ya que las normativas de su ejercicio no podrían afectar atribuciones, que como se ha visto,

provienen de la Constitución y de los amplios poderes -precisamente normas de contralor reglado- que la ley 13.653 foneire al Poder Ejecutivo respecto de dichos organismos.-

Desde luego, tanto en lo que tengan de "reglados" y especialmente en cuanto de discrecionales, pese a su incuestionable amplitud, esas atribuciones y poderes, además de las que particularmente resulten de las normas específicas, entrañan también una lógica, esencial y tácita limitación, que de ningún modo afectan la estructura y el funcionamiento de aquellos organismos. Esto depende del prudente ejercicio de esas potestades, que debe ser materia de natural presunción. En lo que al presente caso atañe, esa condición la asegura el fin que lo inspira, es decir, resolver que la ocupación para la prestación de un servicio público se rija por los principios jurídicos pertinentes. También lo aseguran las consecuencias, pues sea que la solución se circunscriba al caso particular, en cuya hipótesis serviría de antecedente, o aprovechando la oportunidad se le dé carácter general, el ejercicio de aquella facultad proyectaría sus efectos sobre el costo de los servicios públicos cuya prestación se realiza en lugares de pertenencia del Estado, pues será mayor o menor, según incidan o nó retribuciones lucrativas por la ocupación de aquéllos, y aparejaría además, la indispensable unificación del régimen aplicable a las situaciones de la especie en toda la administración.-

Resulta, pues, que si cuando la transferencia del uso refiere a reparticiones comunes el Poder Ejecutivo la dispone por aplicación del art. 53 de la Ley 12.961; tratándose de organismos descentralizados, aquélla ha de fundarse derechamente en las atribuciones conferidas por el art. 83, inc. 1º y 23º de la Constitución y la Ley de Empresas del Estado.-

Parece impropio que para lograr idéntico efecto debe acudirse a fundamentaciones distintas, tanto más, si la fuente de la facultad que se ejercita por el Poder Ejecutivo es

substancialmente la misma. Pero pese a ello, en consideración a las razones de orden práctico que anticipé, especialmente, porque si bien los antecedentes parlamentarios autorizan a presumir que la exclusión establecida por el art. 8° de la Ley N° 13.653 no alcanza el art. 53 de la Ley de Contabilidad, el texto de aquél no hace distingos, la necesidad de resolver adecuadamente los casos de la especie justifica la distinta fundamentación, que no refiere a la esencia de la facultad misma del Poder Ejecutivo sino a los preceptos que se invocan para ponerla en función según se trate de organismos comunes o descentralizados.-

Pero, de todos modos, el remedio mismo evidencia la urgente necesidad de adoptar una norma de aplicación general en toda la Administración.-

En definitiva; mi opinión es -que para la solución concreta e integral del caso motivo de estas actuaciones-, corresponde declarar improcedente el cobro de alquiler por los locales que para la prestación de los servicios públicos a su cargo ocupa la Dirección General de Migraciones en el Aeropuerto Ministro Pistarini, tanto cuando esta aeroestación funcionó con carácter de Dirección General sometida al régimen de la Ley N° 12.961, como en el de organismo integrante de la Empresa Nacional de Transportes, sin perjuicio del reintegro de los gastos que la ocupación cumplida hubiere ocasionado y que deberán ser ajustados directamente por ambas reparticiones, y además, transferir el uso de dichos locales a la primeramente citada, sin afectación patrimonial, siendo a cargo de su presupuesto los gastos de conservación y administración de aquéllos, sea mediante el pago directo o reintegrándolos a la Empresa del Aeropuerto, si mantener la unidad administrativa de su sistema, razones de economía o simplificación de procedimientos lo hicieran conveniente, punto éste que también debe autorizarse a resolver por las propias reparticiones interesadas.-

Como en los términos que dejo aconsejados, la resolución es privativa del Poder Ejecutivo, de compartir V.E. mi opinión.

procede, que redactado y firmado el pertinente proyecto de decreto, se remita con las actuaciones a S.E. el señor Ministro de Transportes de la Nación, invitándole a adherir a aquél, y devueltas que sean, suscripto o nó el proyecto, elevarlo V.E. a consideración del Poder Ejecutivo para la correspondiente decisión.-

Sin perjuicio de ello, de lo que atañe a la resolución particular del pressnte caso, me permito sugerir la conveniencia, de que paralelamente, V.E. propicie ante el Poder Ejecutivo la adopción de una norma general para regir las situaciones de la índole en la Administración Pública, gestión que encuadra en el amplio marco de competencia atribuído al Ministerio de Asuntos Tecnicos por el artículo 32 de la Ley Nº 13.529.-

Junio 5 de 1952.-

Fdo. FAUSTO ENRIQUE CORTES
Sub-Procurador del
Tesoro de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 358.-

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO - PRESUPUESTO

Buenos Aires, 8 de octubre de 1957.-

Visto las pertinentes disposiciones de la Ley de Contabilidad de la Nación aprobada por el Decreto-Ley Nº 23.354/56, que imponen la necesidad de determinar el procedimiento más adecuado para la liquidación de la remuneración anual complementaria al personal al servicio del Estado, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de lo reglado por el artículo 1º del citado cuerpo legal, el año financiero -determinativo del ejercicio fiscal- comienza el 1º de noviembre y termina el 31 de octubre del año siguiente;

Que, al presente, por imperio de la mencionada Ley de Contabilidad (art. 144) el presupuesto general y demás planes de gastos de la Nación, en curso de ejecución, abarcan el período 1º de enero a 31 de octubre de 1957, año fiscal de excepción que se impuso como consecuencia, precisamente, de los nuevos términos fijados para el año financiero;

Que la Ley Nº 12.915 que instituyó el sueldo anual complementario para todos los servidores del Estado y su reglamentación dada por decreto Nº 37.569/47, señalan que el beneficio de que se trate estará constituído por la duodécima parte del total de remuneraciones que perciba el personal durante el respectivo año calendario, fijando como fecha para su liquidación y pago (art. 9º del decreto Nº 37.569/47 y art. 1º de la ley Nº 12.915, respectivamente) el día 31 de diciembre de cada año, excepto los casos de renuncia, retiro, jubilación o fallecimiento, en que el ti

tular o sus derecho-habientes pueden gestionar y tienen derecho a percibir de inmediato la parte de remuneración anual complementaria que corresponda;

Que el cumplimiento de las citadas disposiciones obliga a que la liquidación y pago de la asignación en cuestión, sean efectuados regularmente con posterioridad al cierre del respectivo ejercicio financiero;

Que el art. 25° de la Ley de Contabilidad, que determina que las erogaciones de cada ejercicio se apropiarán en razón de su compromiso, exceptúa del régimen señalado a aquellas cuyo monto sólo pueda establecerse al practicar la respectiva liquidación, que será la que determinará el compromiso;

Que este último procedimiento es el que resulta de aplicación para el caso de la remuneración anual complementaria que se analiza, pues de acuerdo con lo expuesto en los considerandos precedentes, recién es posible determinar el importe que corresponde a los agentes en el momento de practicarse la liquidación total y definitiva de haberes del año, a lo cual sólo puede procederse una vez elaborados los ajustes de sueldos del mes de diciembre de cada año;

Que la adopción de un temperamento que congenie con sentido práctico la diferencia de fechas que existe entre el cierre del ejercicio fiscal y el momento de la liquidación y pago del sueldo anual complementario, no viola en el presente caso los principios de la técnica presupuestaria ni transgrede tampoco las normas de la Ley de Contabilidad de la Nación;

Por todo ello, y atento a lo aconsejado por el señor Ministro de Hacienda,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO
DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1°.- La remuneración anual complementaria de los agentes al servicio del Estado será imputada a los créditos presu-

puestarios y planes de gastos correspondientes al ejercicio financiero de su liquidación.-

ARTICULO 2º.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. Señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, Guerra, Marina y Aeronáutica.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Nación, a sus efectos.-

ARAMBURU - Isaac F. Rojas - Adalbert Krieger Vasena - Victor J. Majó - Teodoro E. Hartung - Jorge H. Lamdaburu

DECRETO-LEY Nº 12.424.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 359.-

CONTRATACIONES - COMPRA-VENTA (Penalidades)

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

Expediente Nº 75.109 - 1957 M.H.
Expediente Nº 31.824 - 1957 T.C.
Providencia Nº 1.625-57
(Contrat. y Trab. Públic.)

//nos Aires, 8 de octubre de 1957.-

En virtud de las disposiciones de la reglamentación del Capítulo VI - de las contrataciones, de la ley de contabilidad aprobada por el decreto Nº 9.400 del 12 de agosto de 1957, se consulta en las presentes actuaciones sobre el temperamento a adoptar para la aplicación de sanciones en aquellas contrataciones sustanciadas y resueltas conforme al reglamento de Compra-venta aprobado por el decreto Nº 36.506 del 27 de noviembre de 1948, que fuera suplantado por el pronunciamiento arriba citado.-

Es de señalar en primer término que la misma cuestión fué planteada en oportunidad de dictarse el referido decreto Nº 36.506 del 27 de noviembre de 1948.-

En aquella oportunidad, la Contaduría General de la Nación se expidió en los informes Nos. 1.052 y 2.056/949, en los que se entendió que las cuestiones que se susciten respecto a las contrataciones sustanciadas con anterioridad al decreto Nº 36.506/948, corresponden ser resueltas en forma ajustada a lo estipulado en los pliegos de licitación y convenciones contractuales pertinentes.-

Dicha opinión concuerda con el criterio reiteradamente sustentado de que las cláusulas contractuales constituyen la

ley de las partes, y como tal las partes deben sujetarse a ellas como a la ley misma.-

Por consiguiente el Tribunal de Cuentas de la Nación entiende que la aplicación de sanciones en aquellas contrataciones sustanciadas conforme a las prescripciones del reglamento de Compra-venta deben resolverse conforme a sus disposiciones.

Por supuesto, que en cuanto al procedimiento se refiere, esto es, intervención de la Dirección General de Suministros del Estado, corresponde seguirse las disposiciones que a tales efectos establece la reglamentación del Capítulo VI - de las contrataciones, aprobado por el decreto Nº 9.400 del 12 de agosto de 1957.-

Se permite agregar el Tribunal de Cuentas de la Nación copia del dictamen de la Procuración General de la Nación de fecha 18 de junio de 1951, en el que expuso: "Si bien tanto en las prescripciones reglamentarias alusivas a la eliminación o suspensión de proveedores del Registro Nacional, como en las actuaciones administrativas a que aquéllas dan lugar, se suele calificar tales medidas como "sanciones" o " penalidades", debe señalarse que en su verdadera naturaleza no es tal, ya que se trata en realidad de decisiones que el Estado adopta en su carácter de persona jurídica de derecho privado, y cuyo único alcance es advertir a las diversas dependencias de la Administración que no han de contratar en lo sucesivo con determinadas firmas que, por su actuación en negocios con el Fisco, han demostrado carecer de la suficiente seriedad, responsabilidad o buena fé. De lo dicho se deduce que no es aplicable a estas medidas la regla contenida en el art. 2º del Código Penal. A dicha opinión me remito".

Ahora bien, siendo facultad del Poder Ejecutivo el aplicar sanciones, si se resolviese que también para las contrataciones sustanciadas con anterioridad a su vigencia, se seguirán los procedimientos que al respecto dispone la reglamentación del Capítulo VI - de las contrataciones, aprobado por el decreto Nº 9.400 del 12 de agosto de 1957, no sería motivo de repa

ros de orden legal.-

Bien entendido ello que dicha opinión sólo alcanza a la aplicación de sanciones, esto es, aperdibimientos y suspensiones del Registro de Proveedores del Estado, no así en cuanto a las penalidades - multas, pérdidas de depósitos de garantía, etc. - para lo cual debe seguirse estrictamente lo estipulado en los pliegos de condiciones que rigió la contratación.-

Para que imprima al presente el trámite pertinente, vuelva a la Delegación destacada ante el Ministerio de Hacienda.-

Fdo. DAMIAN FIGUEROA
Presidente
del
Tribunal de Cuentas de la Nación

Expediente Nº 75.109 - 1957
Expediente Nº120.795 - 1949
Informe Nº 1.052/949

S/ suspensión del Registro de Proveedores del Estado de la firma Baralia y Medina.

//mo señor Ministro de Obras Públicas:

Teniendo en cuenta que la contratación a que se refieren estos actuados fué tramitada y formalizada con anterioridad a que fuera dictado el decreto Nº 36.506 del 27 de noviembre de 1948, reglamentario del artículo 50º de la ley Nº 12.961, el caso en estudio corresponde ser analizado en base a las convenciones contractuales.-

El pliego de bases y condiciones que rigió la licitación en que recayera la adjudicación a favor de la firma Baralia y Medina, sólo estableció la eliminación del Registro de Proveedores del Estado (art. 15°), cuando se hubiera comprobado que el adjudicatario haya cometido hechos dolosos para obtener la adjudicación, o que habiéndola obtenido los cometió para darle mal cumplimiento (decreto N° 3.286 del 30 de abril de 1938).

Por consiguiente, atento que en lo actuado no se argumenta tal circunstancia, la Contaduría General de la Nación entiende que no correspondería adoptar la medida proyectada.-

Ello, sin perjuicio de la efectiva aplicación de la penalidad dispuesta por el Consejo de Administración de Obras Sanitarias de la Nación, en la primera parte de su resolución de fecha enero 4 de 1949 (fs. 214), por la cual se le formula cargo a la firma en cuestión por el importe de la garantía.-

Con lo expuesto, esta Repartición tiene el honor de elevar las presentes actuaciones al Departamento al digno cargo de V. E. a los fines que estime corresponder.-

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, abril 25 de 1949.-

Fdo. OTTO D. RASMUSSEN - D. Dallatana - J.M. Zanchetti

Expediente N° 75.109 - 1957.
Expediente N° 73.144 - 1949.
Informe N° 2.056/949.-

Suministros del Estado. S/registro Proveedores del Estado.-

//mo señor Ministro de Hacienda:

Se plantea en estas actuaciones la situación de las firmas

que por aplicación de cláusulas contractuales han sido eliminadas del Registro de Proveedores del Estado con anterioridad a la fecha en que fuera aprobado por el decreto Nº 36.506 de noviembre 27 de 1948, el Reglamento de Compra-venta de aplicación para todas las adquisiciones que efectúan las Dependencias de la Administración Nacional.-

Se proyecta un decreto por el cual los proveedores suspendidos o eliminados podrán solicitar la revisión de la causa a efecto de su nueva consideración frente a las prescripciones del actual Reglamento de Compra-ventas.-

La aplicación de penalidades por el Poder Ejecutivo en base a las cláusulas contractuales que rigieron en su oportunidad las contrataciones, han pasado a ser materia de cosa juzgada y por consiguiente opina la Contaduría General de la Nación que no corresponde su revisión, sino que han de quedar en firme hasta su total cumplimiento, desde que responden, como se dijo, a cláusulas contractuales.-

En apoyo de lo expuesto, recuerda esta Repartición que al producir informes en actuaciones cuyo trámite de contratación se había efectuado con anterioridad al decreto Nº 36.506/48, entendió que la aplicación de penalidades corresponde ser ajustada a lo estipulado en los pliegos de licitación y convenciones contractuales pertinentes (se adjunta Informe Nº 1.052/49).

Ahora bien, en aquellos casos en que no se haya estipulado un lapso determinado de duración de la suspensión del Registro de Proveedores del Estado, no existiría inconveniente en que, a presentación de la firma interesada, se limitase el período en forma determinada, para que luego de su cumplimiento pueda nuevamente participar en las contrataciones que efectúa el Estado.-

Con respecto a la nueva inscripción del Registro de Proveedores del Estado, de los propios términos suspensión y eliminación, surge que, en el primer caso, al cumplimiento de la penalidad, la firma suspendida quedará automáticamente rehabi

litada, mientras que al ser eliminado, al vencer el término de desear continuar inscripta deberá cumplir con las tramitaciones que a tal efecto fija la reglamentación.-

Por ello, estima la Contaduría General de la Nación, que no resulta imprescindible que por disposición expresa así se determine.-

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, julio 30 de 1949.-

Fdo. OTTO D. RASMUSSEN - D. Dallatana - R. Tarelli - A. Chittaroni - J.M. Zanchetti

---

Expediente Nº 75.109 - 1957
Expediente Nº151.094 - 1947

Señor Ministro:

Al dictaminar en el expediente Nº 32.689/945 de ese Departamento de Estado, tuve oportunidad de manifestar mi opinión acerca del problema que se debate en estas actuaciones, en los términos siguientes:

"Si bien tanto en las prescripciones reglamentarias alusivas a la eliminación o suspensión de proveedores del Registro Nacional como en las actuaciones administrativas a que aquellas dan lugar, se suele calificar tales medidas como "sanciones" o "penalidades", debe señalarse que su verdadera naturaleza no es tal ya que se trata en realidad de decisiones que el Estado adopta en su carácter de persona jurídica de derecho privado, y cuyo único alcance es advertir a las diversas dependencias de la Administración que no han de contratar en lo sucesivo con determinadas firmas que, por su actuación en

"negocios con el Fisco, han demostrado carecer de la suficien "te seriedad, responsabilidad o buena fé".-

"De lo dicho se deduce que no es aplicable a estas medidas la regla contenida en el artículo 2º del Código Penal".-

A dicha opinión me remito.-

BUENOS AIRES, 18 de junio de 1951.-

Fdo. CARLOS GABRIEL DELFINO
Procurador General de la Nación

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

Expediente Nº 75.109 - 1957
Providencia Nº 683/57.-

Buenos Aires, 17 de octubre de 1957.-

Con la opinión del Tribunal de Cuentas de la Nación, y como está dispuesto, vuelvan estas actuaciones a la Dirección General de Contabilidad y Administración del Ministerio de Hacienda.-

Dése a la presente el carácter de atenta nota de envío.-

DELEGACION-FISCALIA HACIENDA

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 360.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - LIBRAMIENTOS - RENDICION DE CUENTAS - RESPONSABLES - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - ENTREGA DE FONDOS

Buenos Aires, octubre 23 de 1957.-

Visto la nota que antecede de la Fiscalía General, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 98 de la ley de contabilidad determina que los responsables de las distintas jurisdicciones en los poderes del Estado, obligados a rendir cuenta, deberán presentar las rendiciones a los respectivos servicios administrativos, para su inclusión en la rendición universal que dichos servicios elevarán mensualmente al Tribunal de Cuentas;

Que el principio de la universalidad en la presentación de las rendiciones, que consagra la citada disposición legal no se cumple en forma integral en todos los servicios administrativos, habiéndose comprobado que esa norma se desvirtúa por el sistema de emitir libramientos de pago que se efectúan directamente por la Tesorería General de la Nación a favor de organismos o agentes que en definitiva, no son sino responsables de la inversión, gestión o tenencia de fondos ante los respectivos servicios administrativos;

Que ese procedimiento se aparta de la cláusula legal citada y provoca inconvenientes de orden contable, desnaturalizando el contralor de las inversiones ya que los servicios centrales al desentenderse de esas rendiciones, eluden la responsabilidad que la ley de contabilidad les fija respecto a la gestión del presupuesto jurisdiccional respectivo, creándose además problemas y dificultades conexas por la disper-

sión de los cargos;

Que iguales consideraciones caben respecto a los responsables que actúan eventualmente en ese carácter al administrar fondos destinados a realizaciones determinadas -congresos, conferencias, concursos deportivos, etc.- y las entidades privadas, provincias o municipalidades que reciben subvenciones o contribuciones con cargo de rendir cuenta, pues en esos casos y salvo aquellos en que la excepción esté justificada, no existe en principio razón que permita amparar la desvinculación de tales rendiciones de la cuenta universal;

Que en orden a lo expuesto es necesario dictar normas a que deben ajustarse las entregas de fondos para asegurar los propósitos que se dejan comentados;

Por lo tanto y en función de la facultad que le acuerda el artículo 84 inciso o) de la ley de contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Los servicios administrativos establecidos por el artículo 76 de la ley de contabilidad, cuando deban afectar créditos del presupuesto de su gestión, con destino a las finalidades a que se hace referencia en los considerandos de la presente resolución, emitirán libramientos de entrega sobre los que se formularán los respectivos cargos y se descargarán de acuerdo con las disposiciones que fija la resolución N° 94 del 22 de julio de 1957 (D.A. 73) de este Tribunal de Cuentas.-

ARTICULO 2°.- Los contadores fiscales al intervenir los libramientos vigilarán que para los casos enunciados, aquéllos no tengan carácter de pago por la Tesorería General de la Nación.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese, dése al Digesto Administrativo y solicítese su inserción en el Boletín Oficial.-

DAMIAN FIGUEROA- Antonio M. Pérez Arango - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Eusebio Villar (Vocal acc.) - Ceśar Aguirre Legarreta -Secretario.

RESOLUCION Nº 1.831.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 361.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - NOMBRAMIENTOS

Buenos Aires, octubre 29 de 1957.-

Visto el Decreto-Ley Nº 6.666/57 por el cual fué aprobado el "Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional", y

CONSIDERANDO:

Que la laboriosa y compleja tarea de preparación del reglamento que posibilitará la adecuada e integral aplicación del escalafón instituído por aquel importante instrumento regulatorio de la función pública, impone en el interín la necesidad y conveniencia de contemplar situaciones administrativas que deben ser solucionadas de inmediato, para no resentir la normal atención de servicios a cargo del Estado;

Que tales situaciones tienen origen, fundamentalmente, en la circunstancia de que, faltando el cuerpo reglamentario que deberá reglar sobre el aludido mecanismo escalafonario, carreras correspondientes y cargos en que debe operarse el ingreso de nuevos agentes al servicio del Estado, surgen inconvenientes para la provisión de cargos jerárquicos, especializados o técnicos que por sus propias características no pueden sujetarse estrictamente a la norma contemplada por el artículo 3º del decreto-ley número 6.666/57;

Que, para obviar los inconvenientes señalados se estima procedente disponer, con carácter transitorio, la suspensión del aludido artículo 3º;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY :

ARTICULO 1°.- Suspéndese la aplicación del artículo 3° del decreto-ley N° 6.666 del 17 de junio de 1957, hasta tanto se determine por vía reglamentaria los cargos inferiores de las carreras correspondientes a que se refiere dicho artículo.-

ARTICULO 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo o a las autoridades competentes para designar al personal en los organismos del Estado con sujeción únicamente a las disposiciones pertinentes del decreto-ley 23.573/56.-

ARTICULO 3°.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros Secretarios del Estado en los Departamentos de Guerra, Marina, Aeronáutica y Hacienda.-

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac F. Rojas - Adalbert Krieger Vasena - Víctor J. Majó - Teodoro Hartung - Jorge H. Landaburu.-

DECRETO N° 13.769.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 362.-

VIATICO- ADICIONAL TECNICO

Buenos Aires, octubre 8 de 1957.-

Visto lo dispuesto por el Decreto Nº 18.989 de fecha 16 de octubre de 1956, por el cual se fijan las normas a adoptar para la liquidación de viáticos, movilidad, indemnizaciones por traslado, etc., del personal de la Administración Pública Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que los distintos pronunciamientos del Poder Ejecutivo en virtud de los cuales se han instituído adicionales por escalafonamiento técnico para el personal de diversas jurisdicciones ministeriales, similares al vigente por decreto Nº 5.387/57, han determinado que los mismos serán considerados como parte integrante de la remuneración básica mensual a todos los efectos establecidos por las disposiciones en vigor;

Que en consecuencia es necesario establecer que dichos adicionales deben adicionarse al sueldo o jornal básico mensual a los fines de la determinación y liquidación del viático a que se refiere el decreto Nº 18.989/56;

Por ello, y en uso de la facultad que acuerda el artículo 13 del precitado decreto Nº 18.989/56,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Aclárase que a los efectos de determinar el viático a liquidar a los agentes del estado, en virtud de

lo establecido en el decreto Nº 18.989/56, procede adicionar a la remuneración mensual básica presupuestaria, el adicional técnico determinado por el Decreto Nº 5.387/57 u otras disposiciones que instituyan igual clase y forma de aplicación que la del adicional mencionado.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese, y archívese.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 241.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 363.-

REINTEGRO DE GASTOS DE COMIDA

Buenos Aires, octubre 11 de 1957.-

Visto lo dispuesto por el inciso d) del artículo 8º del Decreto Nº 18.989/56, en cuanto prohibe la liquidación de reintegros por "gastos de comida", toda vez que la repetición mensual de los mismos revista características de pago regular y permanente; y

CONSIDERANDO:

Que el carácter restrictivo que anima las disposiciones del citado pronunciamiento ha hecho conveniente contener la aludida repetición de gastos que necesariamente deben condicionarse a circunstancias accidentales, evitando que el reintegro pertinente sea liquidado diariamente y sin solución de continuidad;

Que sin perjuicio de ello cabe considerar con criterio diferencial situaciones determinadas, en especial aquella en que por la propia naturaleza de los respectivos servicios -ubicación desfavorable de dependencias del interior, respecto de los centros poblados o ciudades donde deban efectuarse trámites, adquisiciones, pagos, etc., dificultades viales o de otro orden, que hagan menester la acomulación de tareas menores cuya ejecución diaria resulte antieconómica- promuevan la realización de comisiones que, semanal o quincenalmente, demanden la utilización de un día completo;

Que en tales casos y a los fines de no perjudicar a los agentes que en cumplimiento de esas comisiones deban almorzar fuera de sus domicilios procede aclarar el alcance de la norma fijada por el referido artículo 8º, inciso d) del Decreto

Nº 18.989/56, ya que ésta no puede comprender a las situaciones precedentes toda vez que el cúmulo de tareas a ejecutar en forma hebdonadaria o quincenal, aún considerando el gasto de comida a reintegrar, resulte ventajoso frente a las mayores erogaciones derivables del uso de vehículos del Estado.-

Por ello, y en uso de la facultad que le confiere el artículo 13º del decreto Nº 18.989/56,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Aclárase que la norma contenida en el artículo 8º, inciso d) del decreto Nº 18.989/56, no será de aplicación cuando la repetición mensual del reintegro por "gastos de comida" se produzca como consecuencia de la realización de comisiones semanales o quincenales que, derivadas de la ubicación desfavorable de dependencias situadas en el interior del país o dificultades viales, sea necesario enviar por acumulación de tareas menores relativas a trámites oficiales, adquisiciones, pagos, etc., a efectuar en ciudades distintes a menos de 50 kilómetros, cuya ejecución diaria resulte antieconómica en razón del mayor gasto por utilización de vehículos oficiales.-

ARTICULO 2º.- Dése a la presente carácter de norma aclaratoria en función de lo dispuesto por el artículo 13º del decreto Nº 18.989/56.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Digesto de Normas y Disposiciones Reglamentarias y archívese.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 264.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 364.-

JUBILACIONES

Buenos Aires, 25 de setiembre de 1957.-

Señor
Director General de Administración del
Ministerio de Hacienda de la Nación.-
S / D.-

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director General remitiéndole copia de la Resolución recaída en el expediente nº 314.139, relacionada con la no computabilidad de los servicios prestados por menores de 18 años, salvo que sobre esos servicios se hubieran efectuado descuentos jubilatorios, en cuyo caso se los considerará a los fines de la ley 4349.

En caso de existir empleados menores de 18 años que efectuén aportes, los mismos no deberán interrumpirse, ya que los servicios correspondientes serán reconocidos.

Por lo tanto, a partir de la fecha, el señor Director General se dignará tomar las medidas que considere conveniente a fín de que los términos de la Resolución mencionada se apliquen en todas las Reparticiones de ese Ministerio, inclusive las Entidades descentralizadas, de manera que el personal que ingrese con posterioridad -y tenga menos de 18 años- no sufrirá descuentos jubilatorios hasta tal edad.

Saludo al señor Director General muy atentamente, rogándole quiera acusar recibo de la presente nota.-

Fdo. AGUSTIN RODRIGUEZ JURADO
Delegado Interventor en la
Caja Nacional de Previsión para el
Personal del Estado

RESOLUCION Nº 3.832 - 1957.- Declarar que no son computables los servicios prestados por menores de 18 años por expresa disposición del art. 26 de la Ley 4349 vigente en la actualidad.-

Señor Interventor:

Un prolijo estudio en torno a la computabilidad de los servicios prestados por los menores de 18 años hace que esta Asesoría insista en que es necesario volver a plantear la cuestión aún cuando medie el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia "in-re" Sarrabayrrouse Varangot, por haberse modificado la composición de ese Tribunal y entender que la posición de la Caja declarando su no computabilidad es la justa y legal.

En opinión de esta dependencia todo el debate en la materia gira en torno al alcance y vigencia del art. 26 de la ley 4349.

Para ello se debe repasar el panorama de las instituciones de montepío anteriores a su sanción, respecto de los empleados de la administración pública.

En una primera época los comparativamente escasos servidores del Estado, al cabo de muchos años de servicios, percibían un haber de jubilación mediante ley especial que en cada caso votaba el Congreso Nacional.

Con la sanción de la ley de educación común, ley 1420, aparece la idea de establecer un sistema, que hoy llamaríamos de previsión, organizado sobre la base de aportes de los afiliados disponiéndose en el art. 32 la formación de un fondo administrado por el Consejo de Educación constituído con el aporte del dos por ciento de los sueldos percibidos.

Mediante tal financiación, la ley 1909 organiza la jubilación para los maestros y personal del Consejo Nacional de Educación con un sistema basado eminentemente en los años de servicios prestados, sin casi tener en cuenta la edad.

Paralelamente, por ley 2.219 se establecen las pensiones que tendrán derecho a percibir los empleados de la administración nacional en las condiciones allí establecidas, dicha ley fué modificada fundamentalmente por la 3.744, pero siempre sobre la base de que las pensiones eran directamente financiadas por el presupuesto general, sin mediar para ello aporte de sus beneficiarios.

En el año 1900 se da entrada en el Congreso el primer proyecto de creación de una Caja de Jubilaciones basadas en que el pago de los beneficios estará a cargo de un fondo creado principalmente por el aporte de los afiliados, algo así como la socialización de un contrato forzoso de renta vitalicia.

Con muy aguda visión se prepara, antes de la sanción de la futura Caja, la formación de su patrimonio, para poder así permitir su inmediato funcionamiento. La ley 3.976, del 14 de noviembre de 1900, que determinó el presupuesto general de gastos para el año 1901, estableció en el art. 7º: "Desde "el primero de enero de 1901 se deducirá el 5% del sueldo de "todos los empleados civiles de la Administración y de los ju"bilados, comprendiendose los maestros y jubilados del Conse"jo Nacional de Educación.
"Mientras no se dicte la ley de montepío civil y no se refor"me la Nº 1909, se depositará en el Banco de la Nación el "descuento que corresponda a los empleados civiles y jubila"dos de la Administración y se agregará a su fondo de jubila"ciones el correspondiente a los empleados, maestros y jubila"dos del Consejo Nacional".

Las cantidades provenientes de este aporte alcanzaron en julio de 1903, época de la discusión en la Cámara de Diputados de la Ley Nº 4.349, la cantidad de $ 3.700.000.

La lectura de la sesión en que se trató la creación de esta Caja pone de manifiesto la constante preocupación de los legisladores, en especial del informante de la comisión que estudió el proyecto, diputado Gómez, acerca del cuidado de los fondos y de impedir que nadie pudiera beneficiarse inigualitariamente con ellos.

Tal prevensión se puso una vez más de manifiesto al tratar el art. 26 del proyecto. Este en su redacción originaria decia "no se computarán los servicios prestados antes de la edad de 18 años".

En el momento de su discusión, el miembro informante de la comisión dijo:

"Pido la palabra: Para proponer el siguiente agregado a es "te artículo. Salvo para los que desde su incorporación al "servicio con esa edad, hayan sufrido el descuento del 5 % "en su sueldo.

"El artículo establecía que no se computarían los servicios "prestados antes de los diez y ocho años de edad, porque "hay muchos empleados que han empezado a prestarlos a los "12 ó 14 años. La Comisión cree que es equitativo que se "les compute todo el tiempo que hayan prestado sus servi- "cios a los que hayan sufrido el descuento del 5 % en las "condiciones establecidas en el agregado que se propone". (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1903, T. 1 pág. 290)

A continuación pidió la palabra el Diputado Salas para pedir que se suprimiera todo el art. 26, manifiesta que anteriormente había estado de acuerdo con el mismo,pero una vez que en el art. 18 se estableció también el requisito de un mínimo de edad lo consideraba inadecuado por superabundante. A la observación respondió el Diputado Gómez: "Pido la palabra. El señor "Diputado, que formó parte de la Comisión de Legislación y que "firmó con todos nosotros el dictamen, no hizo, o me parece, en "el seno de la comisión ninguna observación a este artículo. "Por otra parte, yo que conozco muy bien el mecanismo de esta "ley porque la he estudiado detenidamente sostengo que el artícu "lo es muy útil en ella.

"Hay cientos de empleados que se perjudicarían si se sanciona- "ra ese artículo en la forma que está, y que se beneficiarían "para la jubilación extraordinaria, si fuera suprimido de la "ley.

"Por eso la comisión se ha puesto en un término medio, a los que "contribuyan desde los diez y ocho años con el 5 % de descuen "to, muy bien, que se les compute ese tiempo, pero a los que "no hayan contribuído, no.
"La Cámara debe tener presente que cuando se sancionó la ley "francesa del año 53 se estableció un artículo en virtud del "cual nadie tendría derecho a la jubilación sin haber contri- "buído durante 30 años con el 5 % de descuento, que es lo que "realmente debiéramos hacer nosotros, para dar una ley de jus "ticia, y sobre todo una ley que fuese una garantía para el "porvenir.
"De las listas que tengo aquí de los empleados de correos y "de la policía resulta que hay más de 300 ó 400 que han empe- "zado a servir a los 12 ó 14 años, de manera que en lugar de "computárseles 20 años de servicios para la jubilación, habría "que reconocerles treinta más o menos, y por consiguiente, la "responsabilidad y los desembolsos de la Caja serían mucho ma "yores.
"Todo lo que sea cuidar el fondo de la Caja, es beneficiar a "los empleados. Esto es de lo que yo quiero que todo el mundo "se persuada. Yo no defiendo el tesoro, sino el porvenir de "los empleados y el de sus familias, que los que protestan con "tra la ley están comprometiendo inconcientemente."

Aún a riesgo de prolongar este dictamen debe formularse una aclaración respecto de la exigencia de haber efectuado los menores de 18 años aportes "desde su incorporación al servicio". Este requisito ha perdido actualidad al modificar la ley 6.007 el art. 20 de la 4.349, pues suprimió el requisito de que los 30 años de servicios necesarios lo fueran sin interrupción, salvo el caso contemplado en el art. 24.

Recapitulando lo expuesto llegamos a las siguientes conclusiones sobre la que deberá volverse más tarde al tratar la vigencia del art. 26:

1) Que antes de la ley 4.349 solo efectuaron aportes (2%) los agentes del Consejo Nacional de Educación y a partir del 1 de enero de 1901 los restantes empleados de la administración publica.

2) Que en el momento de la sanción de la ley 4.349 se determinó que se computaban los servicios anteriores a 1901 -fecha inicial de los aportes-, aún cuando éstos no se habían efectuado. (Véase Diario de Sesiones -Cámara de Diputados 1903, T. I pág. 282)

3) Que los servicios prestados antes de los 18 años de edad son incomputables.

4) Que a fin de no perjudicar a quienes hubieran sufrido descuentos por la ley 3976, se les reconocen los servicios por los que hubieran efectuado aportes aún cuando fueren menores de 18 años.

5) Que por referirse expresamente el art. 26 que se exceptuaba su aplicación a quienes sufrieron el 5% excluye a quienes aportaron antes de 1901 el 2% de las leyes 1.420 y 1.909.

Continuemos la historia en torno a la Caja que con un fondo inicial de $ 16.100.995,39 formados por la contribución del Poder Ejecutivo ($ 10.000.000, los fondos en bonos del Consejo Nacional de Educación $ 887.921,95 y los descuentos efectuados por ley 3.976, $ 5.213.073,44; pudo soportar cómodamente el pasivo que significaba reconocer todos los años de servicios prestados sin efectuar contribución.

La razón de esta estabilidad financiera, aún con tal carga, está en las condiciones sumamente restrictivas en que se otorgaban los beneficios. Debe admitirse que muy pocos beneficios se acordarían en las condiciones tan estrictas que fijaban los arts. 18, 19, 20 y 24 de la ley 4.349 antes de ser reformados por las leyes 4870, 5143 y principalmente 6.007, pues es nuestra poco tranquila vida política bastante laborioso le sería a sus agentes del Estado no sólo alcanzar 30 años de servicios sino 30 años ininterrumpidos.

Liberalizado en 1908 el acuerdo de prestaciones por la ley 6.007 los recursos que de $ 6.800.000 en 1906 pasan a 17.500.000 en 1917 para descender a $ 13.900.000 en 1919 no son suficientes para solventar erogaciones que de $ 2.500.000 en 1906 aumen

tan a $ 16.000.000 en 1919, sobre todo en un sistema de basado en cálculos actuariales.

El vertiginoso crecimiento de las erogaciones desde 1915 que es de $9.700.000, a los $ 16.000.000 de 1919 obedece sin duda alguna al cambio en los cuadros de la administración consecuencia del advenimiento de un nuevo partido político al gobierno.

Es precisamente en 1919 en que aparece el primer déficit de consideración en las finanzas de esta institución, el anterior de 1915 fué tan sólo de $ 61.000, pero ahora frente a una diferencia negativa de $ 2.171,70 se hizo de evidente necesidad arbitrar un refuerzo que encauzara solidamente las finanzas de la Caja.

Fué así que con toda justicia en la ley de presupuesto para el año 1920, ley 11.027, se arbitrara reforzar los ingresos con la recaudación de los aportes correspondientes a servicios prestados antes de la ley 3976.

Esta concatenación de los elementos históricos permite la clara y exacta interpretación del art. 21 de la ley 11.027. Al disponer que "se formulará cargo sin intereses a los empleados jubilados y pensionistas por el importe del 5% de los sueldos no descontados en cualquier época de la prestación de servicios con excepción de los jubilados de la ley 1909" no cabe ninguna duda que lo de "cualquier época" es para los servicios prestados antes de 1901, sobre cuya computabilidad sin cargo los afiliados y los jubilados -pues habla también de estos-, ya tenían un cierto derecho adquirido por la ley 4349. Precisamente estos son los destinatarios de "cualquier época", pues los servicios con posterioridad a 1901 son de aporte obligatorio (véase especialmente el art. 62 ley 4349 y la discusión sobre su reforma en el proyecto original -Diario Sesiones citado, pág. 296.

Es necesario insistir en esto de que al referirse la ley 11.027 a "cualquier época" lo hacía respecto de los servicios prestados antes de 1901 -como se ha demostrado precedentemente- pues en el "leading case" de la Corte Suprema el funda-

mento radica en que habiendo la ley dado mandato a la Caja para formular cargo por aportes correspondientes a cualquier época forzosamente se debió referir a los menores de 18, años, pues para los mayores de esta edad como era obligatorio no necesitaba autorización especial.

Planteo como se ve erróneo precisamente por ignorarse los antecedentes de las disposiciones tratadas.

Por otra parte la excepción que la ley 11.027 hace para los jubilados de la ley 1909 no dice bien a las claras que la locución "cualquier época" es respecto de la vigencia de la ley 4349 y no de la edad del agente.

Lo dicho para la ley 11.027 vale para el art. 20 de la 11.260 que es su transcripción literal.

La ley 11.923 dictada en momentos de grave aprieto para la Caja en su art. 9º no hace sino reiterar el principio de que no se computan servicios sin aportes.

De modo que la necesidad de que todos los servicios para ser considerados necesitan su correspondiente contribución, no reza en lo más mínimo el principio fundamental en la estructura de la Caja que es el que no pueden ser considerados los servicios prestados por los menores de 18 años de edad. Fundamental porque la jubilación tiene por base el doble juego de la edad y de los años de dependencia. La vida probable del beneficiario el punto de partida de este sistema de previsión, aún cuando la ley 14.069 se apartara de ella en parte.

Por otra parte el principio de las categorías de normas nos indican que de ninguna manera puede aceptarse que una disposición contingente encaminada solo hace a los servicios anteriores al año 1901, mal puede derogar en forma implícita una disposición jerarquicamente superior como es el art. 26, a su vez consecuencia del 18.

De manera que debe concluirse lo siguiente:

1) Que el art. 26 de la ley 4349 está en plena vigencia;

2) Que no corresponde computar los servicios prestados por menores de 18 años en ningún caso, se hayan o no efectuado aportes;

3) Que los únicos servicios prestados antes de los 18 años que pueden ser reconocidos son los realizados entre 1901 y 1904 y que sufrieron en su oportunidad la deducción de 5%;

4) Que la Caja debe devolver los aportes ingresados por menores de 18 años con posterioridad a 1904.

Por ello dictamino que deben excluirse los servicios prestados por el recurrente con anterioridad al 27/8/920.

ASESORIA, 4 de diciembre de 1956.-

Fdo. HERNAN A. ALDABE

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Señor Interventor:

En términos generales, encarada como ha sido la cuestión desde un punto de vista puramente legal, comparto el criterio del señor Sub-Asesor Letrado, emitido en el dictamen que antecede, en lo tocante al planteamiento que formula y a las soluciones jurídicas que propicia.

Surge con toda evidencia del prolijo estudio de las normas implicadas que allí se hace y del acopio de los antecedentes históricos que permiten determinar las recíprocas relaciones de las mismas, que se halla en plena vigencia el principio consagrado por el art. 26 de la ley 4349, sin que pueda atribuirse alcance derogatorio a su respecto, a las disposiciones de los arts. 21 de la ley 11.027, 20 de la Nº 11.260 y 9 de la 11.923.

Queda demostrado con claridad que la excepción contenida en la parte final del aquél precepto, se encamina unicamente a la solución del problema planteado a los servidores del Estado, menores de 18 años, a quienes en virtud de la ley 3976, se les impuso la obligación de aportar el 5%.

De ello necesariamente se infiere que, en principio no corresponde el reconocimiento de servicios prestados por menores de 18 años ni, por ende, la afectación de sus haberes por descuentos destinados a engrosar el fondo de esta Caja.

Pero es el caso que por una erronea interpretación del artículo 21 de la ley 11.027, que debió comprender sólo a los servicios prestados con anterioridad a 1901, unas veces a requerimiento del propio interesado, otras a iniciativa de la Caja; pero siempre con la evidente responsabilidad del ente encargado de tutelar el derecho de sus afiliados y aplicar con justeza las normas legales que lo consagran, repetidamente se impusieron a agentes colocados en aquella situación, descuentos jubilatorios y se acordaron infinidad de beneficios en los que fueron incluídos servicios prestados en esas condiciones.

Ante una situación así, la Caja debe afrontar la necesaria secuela de los procedimientos que propició y en defensa de su prestigio moral antes que de su acervo económico, ha de impedir que incidan sobre los intereses de sus afiliados, actos que en modo alguno pueden serle imputables.

Imperiosos motivos de equidad aconseja la adopción de un criterio que contemple situaciones de hecho definitivamente creadas. Las mismas razones que inspiraron la inclusión de la partida final del art. 26 de la ley 4349, son las que imponen hoy una solución contemporizadora y digna.

Por lo expuesto dictamino que no corresponde la computabilidad de servicios prestados cuando el agente no ha alcanzado la edad de 18 años ni la formulación de cargo por los mismos; pero que si han de reconocerse los cumplidos en tales condiciones cuando ya hubieran sido pasibles del descuento jubilatorio.

ASESORIA, 5 de febrero de 1957.-

Fdo. CARLOS A. CAPPELLETTI

(Ver resolución publicada en D.A. Nº 351)

Buenos Aires, 23 de octubre de 1957.-

Señor Gerente General de la
Comisión Administradora Bienes Ley Nº 14.122,
Doctor Luis Larrosa
S / D.-

Tengo el agrado de dirigirme al señor Gerente General, acompañándole para su conocimiento y demás efectos, copia legalizada de la actuación promovida por la Intervención en la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado, registrada bajo expediente nº 42.491/57 y relacionada con la no computabilidad de los servicios prestados por menores de 18 años, salvo que sobre dichos servicios se hubieran efectuado descuentos jubilatorios, en cuyo caso se los considerará a los fines de la Ley 4349.

Aclárase, asimismo, que la suspensión de los descuentos jubilatorios respectivos, en jurisdicción de este Ministerio, dispuesta por la resolución ministerial nº 7.450/57 (D.A.Nº 355), alcanza solamente al personal menor de 18 años, que ingrese a partir del 1º de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, saludo al señor Gerente General con mi más distinguida consideración.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General de
Contabilidad y Administración

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 365.-

GABINETE DEL MINISTRO

Decreto Nº 10.252 del 30-8- 1957

ARTICULO 5º.- El personal que integre el "Gabinete del Ministro" del Departamento de Hacienda, será designado y removido directamente por el titular de esa Secretaría de Estado y gozará de todos los beneficios establecidos para los agentes de la Administración Nacional, con las limitaciones dispuestas en la parte "in fine" del artículo 4º del decreto-ley Nº 6.666/57. Las designaciones de dicho personal caducarán automáticamente al término de la gestión de la autoridad que las dispuso.-

---

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 366.-

ESCALAFON TECNICO - ESCALAFON DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Decreto Nº 5.387 del 22-5-1957

ARTICULO 9º.- Apruébase el reordenamiento escalafonario del personal del Ministerio de Hacienda y sus reparticiones, conforme a las normas que se establecen en el Reglamento anexo al presente artículo.

R E G L A M E N T O

(Anexo al Artículo 9º)

C A P I T U L O I

1º).- El personal mensualizado que revista con carácter permanente en la Partida Principal 1 del Presupuesto de Gastos en Personal de Rentas Generales y Cuentas Especiales del Ministerio de Hacienda, con excepción de la Dirección General Impositiva, de la Cuenta Especial creada por decreto Nº 23.797/56 y los organismos descentralizados, gozará de los adicionales por escalafonamiento técnico que, conforme al grupo y función de cada agente, se consigna en la planilla anexa nº 1.-

2º).- Los adicionales técnicos de que se trata el punto 1º serán considerados como parte integrante de la remuneración básica mensual a todos los efectos establecidos por las dis

posiciones en vigor.-

3°).- El cambio de función de un agente no determinará por sí la modificación del adicional técnico, el cual sólo podrá ser reajustado cuando por acto de autoridad competente se le designe en el cargo de presupuesto correspondiente a esa función y recién a partir de la fecha en que se le comience a liquidar el sueldo respectivo. Aclárase, asimismo, que a los efectos de reconocimientos por diferencias de haberes motivados por el desempeño de un cargo superior, serán de aplicación las normas contenidas por el decreto N° 10.542/46.-

4°).- Las reparticiones comprendidas en el presente, procederán a reubicar a su personal dentro de los grupos previstos en la planilla anexa N° 1, en orden a la tarea que efectivamente cumpla cada agente y su respectivo sueldo básico.-

5°).- Facúltase al Ministerio de Hacienda a modificar la nómina de funciones comprendidas dentro de cada grupo, a fin de adecuarla a las reales necesidades de sus servicios.-

C A P I T U L O II

6°).- El régimen de escalafonamiento para el personal de la Dirección General Impositiva, se ajustará a las normas que se dan a continuación y a las planillas anexas números 2 y 3.-

7°).- Quedan comprendidos en el presente escalafón, todos los agentes que revisten con carácter permanente en el Presupuesto de Gastos en Personal de la Dirección General Impositiva.-

8°).- No están comprendidos en las disposiciones de este escalafón los reemplazantes temporarios o accidentales de agentes en uso de licencia, cualquiera fuere la causa de ésta.-

En caso de que dichos reemplazantes se los designara luego con carácter permanente, les será computada la antigüedad desde la fecha de ingreso como reemplazantes.-

9°).- Sin perjuicio de los requisitos establecidos en las disposiciones vigentes, será condición indispensable para ingresar como empleado, tener idoneidad para el cargo, a cuyo efecto los

aspirantes deberán aprobar las pruebas especializadas de competencia para las funciones en que deberán actuar; además serán considerados: el título habilitante, la especialización y los antecedentes, cuando así se lo estime necesario por la índole de las funciones a desempeñar.-

Los aspirantes a formar parte del personal obrero y de maestranza serán sometidos a una prueba de suficiencia, no así los correspondientes a "Personal de Servicio", a quienes se exigirá que sepan leer y escribir.-

10º).- Los agentes técnicos y administrativos serán designados en la categoría inicial establecida para cada clase de funciones, en el cuadro anexo Nº 2.-

Los aspirantes a inspector con título de Doctor en Ciencias Económicas, Actuario o Contador Público Nacional, serán designados en la categoría superior (grupo 17, función 1).-

Los agentes de la Repartición que deseen pasar a otra clase de funciones deberán tener un (1) año de antigüedad en el cargo, -excepto los aspirantes con título habilitante- y rendir la correspondiente prueba de suficiencia.-

Al pasar a la nueva función, podrán ser mantenidos en el grupo en que revistaban si éste fuera superior al grupo que corresponde a la función inicial de la nueva clase de tarea.-

Solo excepcionalmente, y siempre que no exista personal en actividad en condiciones de ocupar cargos vacantes de responsabilidad o especializados, podrá designarse aspirantes que, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el ingreso en el punto 9º, reúnan las condiciones exigidas para desempeñar directamente funciones de mayor jerarquía que las iniciales de las respectivas categorías.-

11º).- El personal estará sujeto a un régimen de calificaciones estructurado de acuerdo con las siguientes normas generales:

a) Ponderación de sus conocimientos y condiciones, valorando su desempeño en los aspectos de competencia, rendimiento y concepto personal, mediante una escala de hasta diez (10) puntos, cuyas equivalencias serán:

Sobresaliente	Desde 9 a 10 puntos
Distinguido	" 8 a menos de 9 puntos
Muy bueno	" 7 a menos de 8 puntos
Bueno	" 6 a menos de 7 puntos
Suficiente	" 4 a menos de 6 puntos
Insuficiente	" 1 a menos de 4 puntos

b) Funcionamiento de Juntas de Calificaciones;

c) Publicidad de las calificaciones

12°).- Serán calificados los agentes hasta la categoría de Jefe Principal de Departamento inclusive, a excepción de aquéllos que, en cumplimiento del Servicio Militar, incorporación como Reservistas del Ejército, por adscripción a otras dependencias oficiales o por uso de licencias, hayan prestado servicios en el año por períodos menores de seis (6) meses. Estos últimos agentes, mantendrán hasta tanto se reintegren a su cargo titular la última calificación que les hubiere correspondido.-

13°).- A los agentes que obtengan calificación insuficiente se les acordará un plazo de seis (6) meses para mejorar el concepto.-

Si al vencimiento de ese plazo no lo lograran, podrán ser retrogradados hasta dos (2) categorías, debiéndoseles calificar nuevamente dentro de los tres (3) meses a contar de la fecha de la retrogradación. De resultar también insuficiente esta última calificación, los agentes serán declarados cesantes.-

14°).- Las promociones se efectuarán, especialmente, con los agentes que desempeñen las funciones inmediatas anteriores dentro de cada clase de tareas, atendiendo a su calificación y, subsidiariamente, a su antigüedad, salvo el caso de que el cargo

a cubrir requiriera otras condiciones de especialización o título habilitante.-

En ningún caso las promociones podrán disponerse a favor de agentes que no tengan por lo menos seis (6) meses de antigüedad en la Dirección.-

15°).- Sin perjuicio de las promociones que se efectúen de acuerdo con lo establecido en el punto anterior, el 1° de enero de cada año, el personal impositivo especializado comprendido en la planilla anexa Nº 3, que durante el curso del año anterior hubiera cumplido un (1) año en la categoría asignada con calificación de "sobresaliente", ascenderá automáticamente a la categoría inmediata superior hasta alcanzar el sueldo básico máximo dentro de su función, siempre que el mismo no exceda de TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 3.800.-) mensuales, incluído el adicional técnico.-

Se requerirán dos (2) años de antigüedad en la categoría inmediata inferior si la calificación promedio fuere de "distinguido" y tres (3) años, si el promedio fuere de "muy bueno".-

No se exigirá la prueba de suficiencia prevista en el tercer párrafo del punto 10°) a los agentes comprendidos en el grupo 16, función 2, que en virtud de lo dispuesto en el primer párrafo del presente punto corresponde ascender a la categoría inmediata superior, considerándose ésta la de Revisor Impositivo o Inspector de 3a. según hubieren desempeñado en la categoría inmediata inferior, funciones sedentarias o de inspección, respectivamente.-

Con anterioridad al 1° de enero de 1954, se considerará a los fines de este punto, la antigüedad que el agente registre en la respectiva categoría a esa fecha, computándose como un (1) año toda fracción mayor de seis (6) meses y limitándose el ascenso a una sola categoría.-

16°).- Los agentes que se hubieren hecho pasibles de medidas disciplinarias de suspensión, salvo por causas de embargo

o cesación de fianzas, no podrán ser promovidos a grupos superiores hasta no haber transcurrido por lo menos un (1) año de la fecha en que aquéllas fueron aplicadas.-

17°).- Las asignaciones por antigüedad, se determinarán en función de tiempo de prestación de servicios y de las remuneraciones básicas de que gocen los agentes.-

18°).- El monto de las asignaciones a que se refiere el punto anterior, ascenderá a las siguientes sumas mensuales:

1er. sector: VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL (M$N 25.-) cada dos (2) años, a favor de los agentes con funciones retribuídas con sueldo básico hasta CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (M$N 400.-)

2do. sector: CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (M$N 50.-) cada cuatro (4) años, a favor de los agentes con funciones retribuídas con sueldo básico de más de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (M$N 400.-) hasta OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (M$N 800.-)

3er. sector: SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (M$N 75.-) cada seis (6) años a favor de los agentes con funciones retribuídas con sueldo básico de más de OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (M$N 800.-) hasta UN MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (M$N 1.300.-)

4to. sector: CIEN PESOS MONEDA NACIONAL (M$N 100.-) cada ocho (8) años a favor de los agentes con funciones retribuídas con sueldo básico de más de UN MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (M$N 1.300.-).-

19º).- Los agentes tendrán derecho a la asignación adicional por antigüedad al vencimiento de los períodos de prestación efectiva de servicio dentro del sector respectivo.-
20º).- Los funcionarios con categoría superior a la de Jefe Principal de Departamento, gozarán de una asignación por antigüedad de CIEN PESOS MONEDA NACIONAL (M$N 100.-) por cada ocho (8) años de servicios.-.

Para el cálculo del adicional por antigüedad solo se computarán los primeros treinta (30) años de servicios.-
21º).- A los efectos del adicional se considerará como antigüedad efectiva el tiempo total de servicios prestados por los agentes en la Administración Pública Nacional y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea en forma ininterrumpida o alternada, excluyéndose de ese cómputo las licencias continuadas sin goce de sueldo mayores de quince (15) días en cada caso.-
22º).- Los adicionales por antigüedad se harán efectivo:

a) Desde el primer día del mes en cuya quincena se cumplan los años de servicios efectivos requeridos para integrar un período.

b) Desde el primer día del mes siguiente a aquél en cuya segunda quincena se cumplan dichos años de servicios.

23º).- En los casos en que el agente por haber sido promovido en su agrupación pasara a un sector superior, conservará el adicional por antigüedad ya adquirido, sumándose posteriormente a éste los que obtenga en el nuevo sector.-

Si al efectuarse el pase de un sector a otro existieran plazos de antigüedad que no completen un período de ascenso de acuerdo al sector anterior, esa antigüedad se transferirá al nuevo.

24°).- Las empresas privadas ingresarán a la Dirección General Impositiva para su posterior ingreso a la Tesorería General de la Nación (rentas generales), el importe de los haberes correspondientes al personal de Interventores Permanentes a que se refiere la ley de impuestos internos vigente.-
25°).- Los cargos de la Dirección General Impositiva son incompatibles con el desempeño de otras funciones públicas o privadas remuneradas, salvo las docentes y las expresamente autorizadas por disposiciones legales o reglamentarias.-
26°).- A los efectos de este escalafón, el presupuesto de "Gastos en Personal" de la Dirección General Impositiva deberá prever los créditos necesarios para atender:

a) Los sueldos básicos establecidos para cada función en el cuadro anexo N° 2.

b) Los adicionales por escalafonamiento técnico fijados en el cuadro anexo N° 2.

c) Las sumas necesarias para atender la promoción automática del personal impositivo especializado (cuadro anexo N° 3).

d) Los adicionales por antigüedad.

27°).- A los fines establecidos en las disposiciones en vigor, se considerará como parte integrante del sueldo básico del agente, los adicionales establecidos en los incisos b) y c) del punto que antecede.-

Las sumas que se liquiden al personal, en virtud de los establecido en los incisos b) y c) de referencia, se imputarán a las partidas globales respectivas del presupuesto de "Gastos en Personal" de la mencionada Repartición.-

En lo que respecta a los adicionales a que se refiere el inciso c), anualmente se incorporarán a partidas individuales de presupuesto, las sumas que en el año inmediato anterior se

liquidaren por partida global.-

El cambio de función de los agentes, implicará la modificación del adicional técnico, el que regirá a partir de la fecha en que el Poder Ejecutivo ratifique la remuneración básica correspondiente a la nueva función asignada.-

28º).- La Dirección General Impositiva procederá a reagrupar el personal dentro de las distintas funciones del cuadro anexo Nº 2 que forma parte de este Reglamento y en base al sueldo que le corresponda al mismo en el presente reajuste.-

La retribución que se le asigne al agente por el desempeño de las funciones que se consignan en el citado cuadro, no podrá ser disminuída, salvo lo dispuesto en el punto 13º).-

C A P I T U L O III

29º).- Determínase con carácter general, a los fines previstos por los puntos 1º) y 7º), que están comprendidos en las disposiciones de este Reglamento, los agentes que estén cumpliendo servicio militar o fueran incorporados obligatoriamente a las Fuerzas Armadas de la Nación.-

30º).- Las nuevas asignaciones que correspondan al personal en orden a lo establecido por este Reglamento, regirán a partir del 1º de junio de 1957.-

31º).- Facúltase al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Impositiva, respectivamente, para dictar las disposiciones aclaratorias y complementarias que hagan a la aplicación de los regímenes mencionados en los Capítulos I y II del presente.

PLANILLA ANEXA Nº 1

ESCALA DEL ADICIONAL TECNICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA

CORRESPONDIENTE AL CAPITULO I DEL REGLAMENTO

ANEXO AL ARTICULO 9º

SUELDO BASICO	GRUPO	FUNCION	ADICIONAL
4.700	1	Contador General de la Nación Directores Nacionales Directores Generales Presidente	2.000
4.500	2	Subcontador General de la Nación Subdirectores Nacionales Subdirectores Generales Tesorero General de la Nación	1.500
4.000/4.400	3	Administradores Asesores Técnicos Directores de Departamento Jefes de Laboratorio Central Jefe de Departamento de Primera Jefes de Departamento Principal Secretarios Generales Subadministradores Subdirectores	1.000

SUELDO BASICO	GRUPO	FUNCION	ADICIONAL
3.500/3.900	4	Administradores Asesores Técnicos Jefes de Departamento de Segunda Segundos Jefes de Departamento Principal Segundos Jefes de Departamento de Primera Subdirectores de Departamento Subtesorero General de la Nación Tesoreros Principales	800
3.000/3.400	5	Abogados Administradores Asesores Técnicos Asesores Jefes Escribanos Gerentes Generales Inspectores Aduanas y Receptorías Jefes de División Jefes de Laboratorio Jefes de Servicio Médico Jefes de Servicio Veterinario Jefes de Servicios Administrativos Jefes de Servicios Especializados Segundos Jefes de Departamento de Segunda	600

SUELDO BASICO	GRUPO	FUNCION	ADICIONAL
3.000/3.400	5	Segundos Jefes de Laboratorio Central Segundos Jefes de Laboratorios Subadministradores Subsecretarios Generales	600
2.500/2.900	6	Abogados Admmnistradores Arquitectos Asesores Auxiliares Técnicos Auxiliares Administrativos Bibliotecarios Cajeros Principales Cajeros Contadores Delegados Contadores Diagramadores Dibujantes Encargados Escribanos Gerentes Gerentes Principales Gestores Principales Habilitados Ingenieros Inspectores Intendentes Jefes de Taller Jefes de División Jefes de Servicios Técnicos Jefes de Servicios	500

SUELDO BASICO	GRUPO	FUNCION	ADICIONAL
2.500/2.900	6	Administrativos Jefes de Sección Jefes de Servicios Especializados Jefes de Vigilancia Jefes de Equipos Jefes de Brigada Liquidadores Médicos Odontólogos Pagadores Profesores de Educación Física Químicos Relatores Segundos Jefes de Laboratorio Segundos Jefes de División Segundos Jefes de Sección Segundos Jefes de Servicios Administrativos Segundos Jefes de Servicios Técnicos Secretarios de Aduana Segundos Jefes de Taller Subcontadores Subdelegados Contadores Subasesores Subhabilitados Subadministradores Subgerentes Subtesoreros	500

SUELDO BASICO	GRUPO	FUNCION	ADICIONAL
2.500/2.900	6	Supervisores Tesoreros Traductores Veterinarios Vistas de Aduana	500
2.000/2.400	7	Abogados Administradores Arquitectos Asesores Auxiliares Técnicos Auxiliares Administrativos Bibliotecarios Cajeros Principales Cajeros Contadores Delegados Contadores Diagramadores Dibujantes Encargados Escribanos Gerentes Gerentes Principales Gestores Principales Habilitados Ingenieros Inspectores Intendentes Jefes de Taller Jefes de División Jefes de Servicios Técnicos Jefes de Servicios Administrativos Jefes de Sección	400

SUELDO BASICO	GRUPO	FUNCION	ADICIONAL
2.000/2.400	7	Jefes de Servicios Especializados Jefes de Vigilancia Jefes de Equipo Jefes de Brigada Liquidadores Médicos Odontólogos Pagadores Profesores de Educación Física Químicos Relatores Segundos Jefes de Laboratorio Segundos Jefes de División Segundos Jefes de Sección Segundos Jefes de Servicios Administrativos Segundos Jefes de Servicios Técnicos Secretarios de Aduana Segundos Jefes de Taller Subcontadores Subdelegados Contadores Subasesores Subhabilitados Subadministradores Subgerentes Subtesoreros Subervisores Tesoreros	400

SUELDO BASICO	GRUPO	FUNCION	ADICIONAL
2.000/2.400	7	Traductores Veterinarios Vistas de Aduana	400
1.500/1.900	8	Adjudicadores Asesores Auxiliares de Laboratorio Auxiliares Técnicos Auxiliares Administrativos Compiladores Contadores Cajeros Codificadores Correctores Dactilógrafos Diagramadores Directores de Escuela Electricistas Encargados Especificadores Fiscalizadores Fotógrafos Gestores Informantes Impresores Instructores Inspectores Intendentes Jefes de Garage Jefes de Oficina Jefes de División Jefes de Sección Jefes de Vigilancia	300

SUELDO BASICO	GRUPO	FUNCION	ADICIONAL
1.500/1.900	8	Jefes de Departamento Kinesiólogos Liquidadores Linotipistas Maestros de Grado Maquinistas Médicos Modelistas Oficinistas Obstétricas Operadores Profesores de Educación Física Perforadores Revisores Receptores Relatores Segundos Jefes de Oficina Segundos Jefes de Brigada Segundos Jefes de Equipo Químicos Segundos Jefes de Sección Subadministradores Subasesores Secretarios de Aduana Subtesoreros Subdelegados Contadores Subdirectores de Escuela Supervisores Subencargados	300

SUELDO BASICO	GRUPO	FUNCION	ADICIONAL
1.500/1.900	8	Tenedores de Libros Taqui-dactilógrafos Traductores Tipógrafos Verificadores Veterinarios Vistas Contadores Vistas	300
Hasta 1.400	9	Aforadores Ayudantes de Laboratorio Asesores Auxiliares de Laboratorios Auxiliares Administrativos Angentes de Compras Agentes de Vigilancia Auxiliares de Recuento Auxiliares Técnicos Auxiliares Ayudantes Cruzadores Calculistas Cajeros Cadetes Cuentas Correntistas Comisionistas Codificadores Compiladores Dactilógrafos Despachantes de Aduana Dibujantes	200

SUELDO BASICO	GRUPO	FUNCION	ADICIONAL
Hasta 1.400	9	Dibujantes Gráficos Escribanos Encargados Encargados de Equipo Enfermeras Escribientes Estafeteros Especificadores Encuadernadores Facturïstas Fiscalizadores Fotógrafos Gráficos Fototransportistas Gestores Guardas Habilitadores Informantes Despachantes Inspectores Imputadores Jefes de Destacamento Jefes de Resguardo Jefes de Oficina Jefes de Sección Jefes de Registro Jefes de Resguardo de Registro Liquidadores Maestros de Grados Maestros Especiales Médicos Miembros de Brigada Maquinistas	200

SUELDO BASICO	GRUPO	FUNCION	ADICIONAL
Hasta 1.400	9	Oficinistas Operadores Operadores Mecánicos Odontólogos Procuradores Profesores Perforadores Revisores Segundos Jefes de Garage Segundos Jefes de Destacamento Segundos Jefes de Oficina Segundos Jefes de Vigilancia Subencargados Taquígrafos Tenedores de Libros Tipógragos Técnicos Radiólogos Telefonistas Traductores Verficadores Verificadores Despachantes Visitadoras Sociales Vistas Vistas Contadores	200

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

PLANILLA ANEXA Nº 2

ESCALA DEL ADICIONAL TECNICO PARA LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

CORRESPONDIENTE AL CAPITULO II DEL REGLAMENTO ANEXO AL ARTICULO 9º

Grupo	Función	Sueldo Básico	Adicional Escalafón Técnico	Denominación del cargo
1	-	450	-	Auxiliar de 5a.
2	1	600	200	Auxiliar de 4a.
	2			Dactilógrafo de 4a.
3	1	700	200	Auxiliar de 3a.
	2			Dactilógrafo de 3a.
	3			Agente Judicial de 3a.
4	1	800	300	Auxiliar de 2a.
	2			Dactilógrafo de 2a.
	3			Perforador de 2a.
	4			Taquidactilógrafo de 3a.
	5			Grabador Impresor de 4a.
	6			Auxiliar de 3a.de Asuntos Legales
5	1	900	300	Auxiliar de 1a.
	2			Dactilógrafo de 1a.
	3			Taquidactilógrafo de 2a.
	4			Perforador de 1a.
	5			Grabador Impresor de 3a.
	6			Agente Judicial de 2a.
	7			Auxiliar de 2a.de Asuntos Legales

D.L. 366.-

Grupo	Función	Sueldo Básico	Adicional Escalafón Técnico	Denominación del cargo
6	1	1.000	300	Auxiliar Principal
	2			Operador de 4a.
	3			Perforador Principal de 3a.
	4			Grabador Impresor de 2a.
	5			Impresor de 2a.
	6			Dactilógrafo Principal de 2a.
	7			Taquidactilógrafo de 1a.
	8			Agente Judicial de 1a.
	9			Verificador de 5a.
7	1	1.100	400	Oficial de 4a.
	2			Perforador Principal de 2a.
	3			Impresor de 1a.
	4			Grabador Impresor de 1a.
	5			Dactilógrafo Principal de 1a.
	6			Taquidactilógrafo Principal de 2a.
	7			Verificador de 4a.
	8			Auxiliar de 1a.de Asuntos Legales
	9			Instructor de Sumarios de 3a.
8	1	1.200	400	Oficial de 3a.
	2			Perforador Principal de 1a.
	3			Grabador Impresor Principal
	4			Taquidactilógrafo Principal de 1a.
	5			Cajero de Sellos de 3a.
	6			Operador de 3a.
	7			Impresor Principal de 3a.

D.A. Nº 366.-
- 22 -

Grupo	Función	Sueldo Básico	Adicional Escalafón Técnico	Denominación del cargo
	8			Instructor de Sumarios de 2a.
	9			Auxiliar Principal de Asuntos Legales
9	1	1.300	400	Oficial de 2a.
	2			Operador de 2a.
	3			Impresor Principal de 2a.
	4			Cajero de Sellos de 2a.
	5			Interventor Permanete de 3a.
	6			Oficial de 4a.de Asuntos Legales
	7			Verificador de 3a.
10	1	1.400	400	Verificador de 2a.
	2			Oficial de 1a.
	3			Operador de 1a.
	4			Impresor Principal de 1a.
	5			Cajero de Sellos de 1a.
	6			Oficial de 3a.de Asuntos Legales
	7			Encargado de 6a.
	8			Instructor de Sumarios de 1a.
11	1	1.500	400	Encargado de 5a.
	2			Verificador de 1a.
	3			Interventor Permanente de 2a.
	4			Operador Principal de 3a.
	5			Cajero de Sellos Principal de 2a.
	6			Oficial de 2a.de Asuntos Legales
	7			Subencargado de 4a.

D.A. Nº 367

Grupo	Función	Sueldo Básico	Adicional Escalafón Técnico	Denominación del cargo
12	1	1.600	500	Oficial Principal
	2			Operador Principal de 2a.
	3			Subencargado de 3a.
	4			Encargado de 4a.
	5			Oficial de 1a.de Asuntos Legales
13	1	1.700	500	Verificador Principal de 3a.
	2			Interventor Permanente de 1a.
	3			Operador Principal de 1a.
	4			Cajero de Sellos Principal de 1a.
	5			Encargado de 3a.
	6			Subencargado de 2a.
	7			Abogado de 4a.
	8			Oficial Principal de Asuntos Legales
	9			Instructor Principal de Sumarios de 2a.
14	1	1.800	500	Encargado de 2a.
	2			Subencargado de 1a.
	3			Verificador Principal de 2a.
	4			Interventor Permanente Principal de 2a.
	5			Cajero de Sellos Especial de 2a.
	6			Revisor de Asuntos Legales
15	1	1.900	500	Encargado de 1a.
	2			Cajero de Sellos Especial de 1a.
	3			Abogado de 3a.
	4			Encargado de 2a.de Asuntos Legales

D.A. Nº 366.-

Grupo	Función	Sueldo Básico	Adicional Escalafón Técnico	Denominación del cargo
16	1	2.000	500	2ª Jefe de Oficina de 4a.
	2			Verificador Principal de 1a.
	3			Interventor Permanente Principal de 1a.
	4			Inspector de 5a.
17	1	2.100	700	Inspector de 4a.
	2			Instructor Principal de Sumarios de 1a.
	3			Revisor de 1a.de Contencioso Administractivo
	4			Encargado de 1a. de Asuntos Legales
18	1	2.200	700	Jefe de Oficina de 4a.
	2			2ª Jefe de Oficina de 3a.
	3			Encargado General de 3a.
	4			Abogado de 2a.
	5			Revisor General de Asuntos Legales
19	1	2.300	700	Inspector de 3a.
	2			Revisor Prin.de Contencioso Administrativo
20	1	2.400	700	2ª Jefe de Oficina de 2a.
	2			Jefe de Oficina de 3a.
	3			Encargado General de 2a.
21	1	2.500	700	Inspector de 2a.
	2			Revisor Impositivo
	3			Abogado de 1a.
	4			Revisor Gral.de 2a.de Conten.Administractivo
	5			Encargado Gral.de 2a.de Asuntos Legales

Grupo	Función	Básico	Suplemento Escalafón Técnico	Denominación del cargo
22	1	2.600	1.000	Jefe de Oficina de 2a.
	2			2ª Jefe de Oficina de 1a.
	3			Encargado General de 1a.
	4			Jefe de Distrito de 3a.
23	1	2.700	1.000	Revisor General Impositivo
	2			Asesor de 2a.
	3			Asesor de 3a. Impositivo
	4			Encargado Gral.de 1a.de Asuntos Legales
24	1	2.800	1.000	2ª Jefe de División de 3a.
	2			Jefe de Oficina de 1a.
	3			Encargado Gral.Impositivo de 2a.
	4			Jefe de Distrito de 2a.
	5			Inspector de 1a.
	6			Revisor Gral.de 1a.de Conten.Administrativo
	7			Abogado Asesor de 2a.
25	1	2.900	1.100	Asesor de 2a. Impositivo
	2			Asesor de 1a.
	3			Supervisor de 3a.
	4			Encargado Gral.Impositivo de 1a.
	5			2ª Jefe de División de 2a.
26	1	3.000	1.200	Jefe de División de 3a.
	2			Supervisor de 2a.
	3			Jefe de Distrito de 1a.
	4			Asesor de 1a. Impositivo
	5			Abogado Asesor de 1a.
	6			Inspector Principal

Grupo	Función	Sueldo Básico	Adicional Escalafón Técnico	Denominación del cargo
27	1	3.100	1.200	Supervisor de 1a.
	2			2ª Jefe de División de 1a.
	3			Asesor Principal
28	1	3.200	1.300	Jefe de División de 2a.
	2			Supervisor Principal
	3			Asesor Principal Impositivo
	4			Abogado Asesor Principal
29	1	3.300	1.500	Jefe de División de 1a.
	2			Jefe de Distrito Principal
30	1	3.400	1.700	2ª Jefe de Delegación de 1a.
	2			2ª Jefe de Departamento de 1a.
31	1	3.700	1.800	2ª Jefe de Departamento Principal
	2			2ª Jefe de Delegación Principal
32	1	4.000	1.800	Jefe de Departamento de 1a.
	2			Jefe de Delegación de 1a.
33	1	4.100	2.200	Jefe de Departamento Principal
	2			Jefe de Delegación Principal
34	1	4.200	2.800	Director
	2			Asesor Técnico
35	-	4.400	3.600	Director Secretario
36	-	4.500	4.000	Subdirector General
37	-	4.700	4.300	Director General

PERSONAL OBRERO Y DE MAESTRANZA

Grupo	Función	Sueldo Básico	Denominación del cargo
1	-	1.000	Peón de Talleres
2	-	1.100	Ayudante de 2a.
3	1	1.300	Medio Oficial de 2a.
	2		Chófer de 2a.
4	1	1.400	Medio Oficial de 1a.
	2		Chófer de 1a.
5	-	1.500	Oficial de 3a.
6	1	1.600	Oficial de 2a.
	2		Chófer Principal de 2a.
7	-	1.700	Oficial de 1a.
8	1	1.800	Chófer Principal de 1a.
	2		Oficial Principal de 2a.
9	1	1.900	Oficial Principal de 1a.
10	-	2.100	Subencargado de Taller de 2a.
11	-	2.300	Subencargado de Taller de 1a.
12	-	2.500	Encargado de Taller de 2a.
13	-	2.700	Encargado de Taller de 1a.

PERSONAL DE SERVICIO

Grupo	Función	Sueldo Básico	Denominación del cargo
1	-	300	Cadete de 2a.(hasta 16 años)
2	-	450	Cadete de 1a.(de 16 a 18 años)
3	1	1.000	Ordenanza de 3a.
	2		Peón de 3a.
4	1	1.100	Ordenanza de 2a.
	2		Peón de 2a.
5	1	1.200	Ordenanza de 1a.
	2		Peón de 1a.
6	1	1.300	Ordenanza Principal
	2		Peón Principal
	3		Sereno de 2a.
	4		Telefonista de 2a.
7	1	1.400	Encargado de 2a.
	2		Sereno de 1a.
	3		Telefonista de 1a.
8	1	1.500	Encargado de 1a.
	2		Sereno Principal
	3		Telefonista Principal
9	-	1.600	Encargado General
10	1	1.700	Mayordomo de 2a.
	2		Supervisor de Teléfonos
11	-	1.900	Mayordomo de 1a.

PLANILLA ANEXA Nº 3

PLANILLA DEMOSTRATIVA DEL ASCENSO AUTOMATICO AL PERSONAL

TECNICO Y ESPECIALIZADO

FUNCION	SUELDOS BASICOS POR GRUPOS INCLUIDO ADICIONAL ESCALAFON TECNICO																							
	GRUPO 6	FUNCION	GRUPO 7	FUNCION	GRUPO 8	FUNCION	GRUPO 9	FUNCION	GRUPO 10	FUNCION	GRUPO 11	FUNCION	GRUPO 13	FUNCION	GRUPO 14	FUNCION	GRUPO 16	FUNCION	GRUPO 17	FUNCION	GRUPO 18	FUNCION	GRUPO 19	FUNCION	GRUPO 21	GRUPO 23
Verificador	1300	9	1500	7			1700	7	1800	1	1900	2	2200	1	2300	3	2500	2	(1)							
Instructor de Sumarios			1500	9	1600	8			1800	8			2200	9					2800	2						
Revisor de Asuntos Legales															2300	6					2900	5				
Revisor y Revisor Gral. Impositivo; Encargado General Impositivo de 2a.																									3200	2 3700
Revisor y Revisor Gral. Contencioso Administrativo																			2800	3			3000	2	3200	4
Inspector																	2500	4	2800	1			3000	1	3200	1

(1) – Contimía como Inspector o Revisor, según corresponda.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 367.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - JUICIO DE RESPONSABILIDAD - EMPRESAS DEL ESTADO - AUDITORIAS

Buenos Aires, 30 de octubre de 1957.-

Visto lo dispuesto por el inciso f) del artículo 84 de la ley de contabilidad y,

CONSIDERANDO:

Que la ley 13.653 (t.o.) establece en el artículo 8º que las responsabilidades de las autoridades de las empresas del Estado se determinarán según las normas aplicables a los funcionarios públicos y las que rigen para los directores de las sociedades anónimas en cuanto importen una mayor protección jurídica para el interés lesionado, concluyendo en que todo el personal de dichos organismos se halla sujeto a los juicios de responsabilidad, conforme a la ley de contabilidad;

Que el Capítulo XIII de la ley de contabilidad en vigencia, intitulado "Del juicio administrativo de responsabilidad", establece en el artículo 116 que la determinación administrativa de responsabilidad se hará mediante un juicio que mandará iniciar el Tribunal de Cuentas cuando se le denuncien o adquiera por sí la convicción de la existencia de actos, hechos u omisiones susceptibles de producir aquella responsabilidad;

Que el artículo 126 de la misma ley prescribe que, cuando en el juicio de responsabilidad no se establezcan daños para la hacienda pública pero sí procedimientos administrativos irregulares, el Tribunal de Cuentas impondrá al responsable una multa de hasta cinco mil pesos, conforme con la atribución concedida en el art. 84, inciso j);

Que este Cuerpo, a quien compete la fiscalización de las empresas del Estado conforme al artículo 84, inciso f) de la ley de contabilidad y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6ª de la ley nª 13.653 (t.o.), función reglada por los artículos 14, 15 y 16 del decreto reglamentario nª 5.883/55, debe vigilar el cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas a las autoridades de dichos organismos por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes;

Que el artículo 144 de la citada ley de contabilidad determina la vigencia integral de sus disposiciones con posterioridad al 31 de octubre del corriente año;

Que en mérito a lo precedentemente señalado resulta necesario reglamentar el procedimiento previo a la instauración del juicio de responsabilidad que permita hacer efectivas las sanciones establecidas en los artículos 116 y 126 de la ley de contabilidad;

Por todo ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1ª.- Déjase establecido que el incumplimiento por parte de las empresas del Estado a partir del 1ª de noviembre del corriente año de las obligaciones que les imponen los artículos 2ª, 4ª, 5ª y 9ª de la ley 13.653 (t.o.) y los artículos 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 13ª y 20ª del decreto reglamentario nª 5.883/55, determinará que el Tribunal de Cuentas inicie, sin más trámite, el juicio de responsabilidad contra los que resulten responsables de la administración de la empresa, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la ley de contabilidad.

ARTICULO 2ª.- Los responsables de las omisiones probadas serán pasibles de las penalidades que establece el artículo 126 de la citada ley de contabilidad.

ARTICULO 3ª.- Los jefes de las Auditorías constituídas ante

las empresas del Estado, comunicarán al Tribunal de Cuentas toda omisión al cumplimiento de las obligaciones indicadas en el artículo 1º de la presente resolución, tan pronto se opere el vencimiento de los plazos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias dictadas al efecto, adjuntando los antecedentes necesarios para su consideración.

ARTICULO 4º.- La Auditoría General practicará a su vez el análisis de las actuaciones y, con las conclusiones pertinentes, las remitirá al Servicio de Sumarios para la iniciación del juicio de responsabilidad correspondiente.

ARTICULO 5º.- Comuníquese a los ministerios y empresas del Estado, dése al Digesto Administrativo y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - César Aguirre Legarreta -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.895.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 368.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - CONTADORES FISCALES - CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO - CIERRE DE EJERCICIO

Buenos Aires, 31 de octubre de 1957.-

Visto lo dispuesto en el artículo 38 de la ley de contabilidad, acerca de la preparación de la cuenta general del ejercicio, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la citada disposición legal, las contadurías centrales de los distintos organismos deberán enviar a la Contaduría General de la Nación, antes del 15 de diciembre de cada año, los estados que reflejen el movimiento habido en la respectiva jurisdicción;

Que una vez compilada, esa documentación deberá ser remitida al Tribunal de Cuentas a efectos de su análisis, informe y posterior envío al H. Congreso;

Que para facilitar su estudio es conveniente que los estados sean verificados previamente por los respectivos representantes del Tribunal de Cuentas de la Nación, con anterioridad a su remisión a la Contaduría General;

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el inciso 2ª apartado b), artículo 85 de la ley de contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E:

ARTICULO 1ª.- Los contadores fiscales destacados ante los distintos organismos de la Administración Nacional, verificarán la exactitud contable de las cifras consignadas en los estados preparados por la contaduría central de la jurisdicción

pertinente en virtud de lo dispuesto por el artículo 38 de la ley de contabilidad, dejando constancia de su intervención en nota agregada y visando, además, los cuadros respectivos.
ARTICULO 2º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a la Contaduría General de la Nación y a los distintos responsables y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli
José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.898.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 369.-

SALARIO FAMILIAR

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1957.-

VISTO, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Provisional, consecuente con su manifesta do propósito de atender las necesidades de la población, pres tó en su oportunidad decidido apoyo a la implantación de asig naciones familiares, para quienes trabajan en la industria pri vada y a las órdenes de las empresas comerciales comprendidas en el convenio 108 -actualización 1956-;

Que medidas como la señalada cuyo hondo contenido social hace inncesarias mayores consideraciones, tienen como fin fun damental incrementar los ingresos de quienes deben soportar mayores cargas de familia;

Que es deseo del Gobierno Provisional se extienda el bene ficio de la asignación familiar a todas las actividades útiles del país, como resultado del directo entendimiento entre em- presarios y sus dependientes;

Que de conformidad a lo expuesto el Gobierno entiende de estricta justicia otorgar asignaciones familiares a todos a- quellos que presten servicios para el Estado, no obstante la situación financiera porque atraviesa el erario público;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- El personal de la Administración Nacional, en to das sus ramas y dependencias, entes autárquicos y descentrali

zados y en general todos los organismos estatales, como así también el de las empresas del Estado regidas por la Ley nª 13.653 (t.o.),percibirá, a partir del 1ª de noviembre de 1957 una asignación familiar de CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150,— m/n.) MONEDA NACIONAL por cada hijo a su cargo, menor de 15 años o incapacitado.

ARTICULO 2ª.- Las asignaciones familiares establecidas en el artículo anterior serán abonadas a los beneficiarios en forma mensual conjuntamente con su sueldo o salario. Cuando las retribuciones sean percibdidas en forma fraccionada, la asignación respectiva será satisfecha en oportunidad del último pago parcial que se efectúe cada mes.

ARTICULO 3ª.- Las sumas que se abonen en concepto de asignaciones familiares no se considerarán integrantes del sueldo o salario y en consecuencia, no estarán sujetas a aportes ni descuentos jubilatorios o de réditos, no serán tenidas en cuenta para la liquidación del sueldo anual complementario ni para el pago de indemnizaciones y son inembargables.

ARTICULO 4ª.- Las asignaciones familiares que se establecen por este decreto-ley sustituyen a las que en la actualidad se abonan por igual causa, siempre que éstas últimas fuesen inferiores a aquellas.

ARTICULO 5ª.- En los casos de agentes que desempeñen tareas en más de una actividad amparada por el beneficio de la asignación familiar de igual monto y causa que la establecida en el presente decreto-ley, el importe de la misma será abonado por el empleador de quien primero haya comenzado a percibirla.

ARTICULO 6ª.- En ningún caso el beneficio de que se trata podrá ser liquidado más de una vez por cada hijo.

ARTICULO 7ª.- Quedan excluídos del presente decreto-ley:

a) El personal cuyas asignaciones mensuales nominales incluso las que se liquiden en concepto de costo de vida, bonificaciones por antigüedad y computada la asignación familiar establecida en el presente decreto-ley superen la suma de cinco mil cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 5.400,— m/n.)

b) El personal que preste servicios fuera del territorio de la República.

c) El personal regido por contratos especiales.

d) El personal de los organismos o empresas comprendidos en el artículo 1ª que realice actividades exclusivamente rurales.

e) Las personas que desempeñen funciones por elección popular.

ARTICULO 8ª.- El personal con retribuciones mensuales nominales inferiores a las establecidas en el inciso 1ª del artículo anterior percibirá únicamente de la asignación familiar que le pudiera corresponder, la suma necesaria para alcanzar el límite fijado de CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 5.400,-) MONEDA NACIONAL.

ARTICULO 9ª.- Cuando dos cónyuges se encuentren comprendidos en el presente decreto-ley el límite fijado en el inciso 1ª del artículo 7ª se establecerá computando el total de las retribuciones de ambos.

ARTICULO 10ª.- Los organismos estatales comprendidos en las disposiciones del presente decreto-ley, proyectarán la reestructuración de sus presupuestos de manera que posibilite la liquidación y pago del beneficio que se instituye, quedando autorizado el Poder Ejecutivo para introducir en los respectivos planes de gastos las ampliaciones y modificaciones de crédito que fueran menester para atender el gasto, el cual será financiado con cargo a los correspondientes recursos.

ARTICULO 11ª.- El Ministerio de Hacienda de la Nación dictará las normas aclaratorias y complementarias que se requieran para el mejor cumplimiento de las disposiciones de este decreto-ley.

ARTICULO 12ª.- El presente decreto-ley será refrendado por el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Trabajo y Previsión, Hacienda, Guerra, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 13º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac F. Rojas - Tristán E. Guevara - Adalbert Krieger Vasena - Víctor J. Majó - Teodoro Hartung - Jorge H. Landaburu.-

DECRETO-LEY Nº 14.984.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 370.-

CONTRATACIONES - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Memorándum nº 617 - 1957 T.C.N.
Prov. dec. Prov. nº 13.414.-

M E M O R A N D U M
(Para la Presidencia de la Nación)

Se solicita la opinión del Tribunal de Cuentas de la Nación en el asunto de que trata el adjunto proyecto de decreto y sus antecedentes, en el sentido de que, si es de aplicación el criterio sustentado por el Tribunal de Cuentas de la Nación en el Memorándum nº 501/57, o corresponde la autorización del Poder Ejecutivo para la utilización del personal de que se trata, como excepción a las disposiciones del artículo 36 del decreto nº 23.573/56.

El asunto referido difiere fundamentalmente del tratado en el Memorándum nº 501/57 citado.

En efecto, éste se relaciona con la contratación de artistas, conferencistas, libretistas, relatores, etc. que en ningún caso actuaban en relación de dependencia con el Estado y sí bajo su propia y exclusiva responsabilidad.

En cambio, en el caso que se considera, el personal que se contrata se desempeñará en relación de dependencia directa. El hecho de que se trate de una tarea temporaria no modifica esa situación.

En consecuencia, su contratación corresponde ser autorizada por el Poder Ejecutivo, siguiendo las prescripciones que al efecto establecen las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia sobre el particular.-

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, octubre 28 de 1957.-

Fdo. DAMIAN FIGUEROA
Presidente

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 371.-

SEGURO DE VIDA COLECTIVO

Buenos Aires, 29 de octubre de 1957.-

El CONSEJO DE ADMINISTRACION, en sesión del 29 de octubre de 1957, teniendo en cuenta las razones puntualizadas en el respectivo memorándum del orden del día, ha resuelto modificar el artículo 1º, quinto párrafo, de las condiciones generales de póliza del seguro de vida colectivo, con arreglo al siguiente texto:

"Si el seguro tuviera carácter obligatorio, comprenderá inicialmente a la totalidad del personal al servicio del principal que perciba haberes, como así también, en forma automática, a todos los que se incorporen en lo futuro, siempre que reúnan aquellas condiciones y que, para ingresar al servicio del principal, cumplan con los requsitos médicos que se consideren suficientes para el seguro".

Pase a la GERENCIA DE SEGUROS, a sus efectos; tomen conocimiento el señor ASESOR LETRADO y los Departamentos de ASUNTOS LEGALES, de DELEGACIONES Y AGENCIAS y de ORGANIZACION; insértese en el "Boletín Administrativo"; téngase en cuenta para las reformas reglamentarias que correspondan y, cumplido, resérvese en el DEPARTAMENTO DE SEGUROS.

Fdo. EUCLIDES VENTURA CARDOSO
Presidente de la
Caja Nacional de Ahorro Postal

RESOLUCION Nº 2076/57.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 372.-

VIATICO

Buenos Aires, 28 de octubre de 1957.-

Visto la necesidad de resolver planteamientos presentados por organismos estatales en cuanto a la aplicación de las normas establecidas por la Resolución nº 55, del 8 de marzo de 1957, aclaratorias del Decreto nº 18.989/56, y

CONSIDERANDO:

Que a los fines indicados corresponde ampliar la resolución nombrada en forma tal que permita, a las Direcciones de Administración u organismos que hagan sus veces, liquidar el "Viático" estatuído por el decreto citado precedentemente con arreglo a un procedimiento que solucione, prácticamente, los problemas planteados;

Que el Artículo 13º del Decreto nº 18.989/56, faculta al Ministerio de Hacienda de la Nación a dictar las normas aclaratorias y de interpretación que fueren necesarias para su aplicación;

Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Amplíase el artículo 2º de la Resolución nº 55, de fecha 8 de marzo de 1957, el cual en consecuencia queda redactado en la siguiente forma:

"Artículo 2º.- A los fines de la aplicación de lo dispuesto en el citado artículo 2º, parte II, inciso a), déjase aclarado que el viático completo será liquidado siempre que la comisión del servicio que lo origine tenga comienzo antes de las doce (12) horas del día de salida y finalice después de dicha hora del día de regreso.

"Si la comisión del servicio no pudiera ajustarse a la norma enunciada precedentemente se liquidará medio (1/2) día de viático".

ARTICULO 2º.- Dése a la presente el carácter de resolución aclaratoria del Decreto Nº 18.989/56.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, y fecho, archívese.

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

RESOLUCION Nº 285.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 373.-

REPRESENTANTES EN JUICIO - JUICIOS - DEMANDAS - PATROCINIO - GRAVAMENES EXTRAORDINARIOS - RECARGO DE CAMBIO A LAS IMPORTACIONES - REPETICION DE PAGOS

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1957.-

Visto que corresponde perseguir judicialmente el cobro de los gravámenes extraordinarios a las importaciones y recargos de cambio establecidos por los Decretos nros. 2.001, 2.003 y 2.238/55, adeudados por los firmantes de los compromisos de pagos en cuotas, suscriptos de conformidad a los términos del Decreto número 5.152/55;

La necesidad de contestar las demandas por repetición de lo pagado por ese concepto, y lo aconsejado al respecto por el Consejo de Administración del Fondo de Restablecimiento Económico Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente, por razones de economía procesal y administrativa, la centralización y uniformidad de la representación judicial en todo cuanto se relacione con la iniciación y prosecución de las acciones legales vinculadas a los recursos del Fondo de Restablecimiento Económico Nacional;

Que la especialidad de las cuestiones que determinaron la imposición de los gravámenes extraordinarios y los recargos de cambio sobre las importaciones vinculadas a las materias de competencia del Banco Central de la República Argentina, hace, asimismo, que sea esta Institución la más indicada para representar y defender judicialmente los íntereses del Fondo;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- La representación de la Nación en los juicios por cobro de los gravámenes extraordinarios y recargos de cambio a las importaciones y en las demandas por repetición de lo pagado por esos conceptos, será ejercida en todas las instancias por el Banco Central de la República Argentina.

ARTICULO 2º.- El patrocinio legal en los referidos juicios será ejercido por los funcionarios letrados de la Asesoría Legal del Banco Central de la República Argentina.

ARTICULO 3º.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educación y Justicia, de Hacienda, de Ejército, de Marina y de Aeronáutica.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac F. Rojas - Acdel E. Salas - Víctor J. Majó - Teodoro Hartung - Jorge H. Landaburu - Adalbert Krieger Vasena.-

DECRETO - LEY Nº 14.719.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 374.-

FONDO PERMANENTE - CAJA CHICA

ORDEN DE DISPOSICION DE FONDOS Nº 100
EJERCICIO DE 1957
ANEXO 10 - Mº.DE HACIENDA DE LA NACION

Buenos Aires, 31 de octubre de 1957.-

Visto el artículo 48 de la Ley de Contabilidad, aprobada por Decreto-Ley nº 23.354/56, reglamentado por Decreto número 13.100 del 21 de octubre de 1957, el decreto nº 10.077 del 27 de agosto de 1957 y lo propuesto por el Ministerio de Hacienda,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Institúyese un régimen de "Caja Chica" en distintas dependencias del Ministerio de Hacienda, conforme a las normas establecidas en el inciso 19) del artículo 48 del Decreto nº 13.100/57 reglamentario de la Ley de Contabilidad y cuyos importes se ajustarán al monto determinado en el apartado c) del mencionado inciso.

ARTICULO 2º.- La TESORERIA GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición del MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION, hasta la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.833.500,00) con destino a la constitución de las "Cajas Chicas" a que se refiere el artículo anterior y del Fondo Permanente autorizado por Decreto nº 10.077/57, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION, orden conjunta: Director General y Jefe de la División Tesorería.

IMPUTACION:

a) ANTICIPO ARTICULO 48ª LEY DE CONTABILIDAD - FONDO PERMANENTE .....m$n. 500.000,00

b) ANTICIPO ARTICULO 48ª LEY DE CONTABILIDAD - CAJA CHICA... " 240.000,00 740.000,00

2. DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, orden conjunta: Director General y Jefe de la División Tesorería.

IMPUTACION:

a) ANTICIPO ARTICULO 48ª LEY DE CONTABILIDAD - FONDO PERMANENTE .....m$n. 500.000,00

b) ANTICIPO ARTICULO 48ª LEY DE CONTABILIDAD - CAJA CHICA .. " 48.500,00 548.500,00

3. LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS, orden conjunta: Presidente y Tesorero General.

IMPUTACION:

a) ANTICIPO ARTICULO 48ª LEY DE CONTABILIDAD - FONDO PERMANENTE .....m$n. 35.000,00

b) ANTICIPO ARTICULO 48ª LEY DE CONTABILIDAD - CAJA CHICA .. " 177.000,00 212.000,00

4. DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO, orden conjunta: Director General y Tesorero.

IMPUTACION:

a) ANTICIPO ARTICULO 48ª LEY DE CONTABILIDAD - FONDO PERMANENTE .....m$n. 250.000,00

b) ANTICIPO ARTICULO 48ª LEY DE CONTABILIDAD - CAJA CHICA .. " 83.000,00 333.000,00

1.833.500,00

ARTICULO 3º.- Déjase sin efecto el apartado a) del artículo 2º del decreto nº 10.077 de fecha 27 de agosto de 1957.
ARTICULO 4º.- Comuníquese a los respectivos servicios administrativos y previa intervención del TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION y de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION pase a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nº 14.101.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 375.-

DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES

Buenos Aires, 29 de octubre de 1957.-

Visto el régimen de declaraciones juradas patrimoniales para los funcionarios de la Administración Pública Nacional, establecido por el decreto nº 7.843/53, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2º del referido texto legal establece la obligatoriedad de presentar la correspondiente declaración jurada patrimonial, para todos los funcionarios al servicio de la Administración, con categoría superior a Subdirector, Coronel o grados equivalentes y para todos aquellos que no obstante ser de menor jerarquía desempeñen cargos o funciones que los encuadre en sus disposiciones;

Que por el artículo 5º del mismo, se determina la penalidad de exoneración para aquellos agentes que no dieran cumplimiento a dichas disposiciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal consiguiente y de las investigaciones que disponga efectuar el Poder Ejecutivo;

Que a los efectos derivados de la aplicación del régimen de que se trata, la Contaduría General de la Nación consulta acerca de la jerarquía máxima a que alcanzan las obligaciones instituídas por el mismo e informa al mismo tiempo la necesidad de fijar una graduación de las sanciones previstas.

Que en este sentido es evidente que los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación, en razón de los atributos institucionales de que estan investidos, se hallan tácitamente excluídos de las mencionadas disposiciones;

Que siendo el Poder Ejecutivo el creador de la norma y el encargado de aplicar en definitiva sus penalidades, no podría sancionarse a si mismo, aparte que tal medida administrativa no es de aplicación a dichos funcionarios, que sólo

pueden ser destituídos por el juicio político que prevé la Constitución Nacional (artículos 45ª, 51ª y 52ª);

Que con respecto a los cargos de Ministros Secretarios de Estado, atento que es facultad privativa del Poder Ejecutivo la de nombrarlos y removerlos (artículo 86ª, inciso 10 de la Constitución Nacional), nada obstará para que se los considere incluídos dentro del comentado régimen legal, a cuyo efecto la Contaduría General de la Nación deberá dar cuenta a este Poder, en los casos de incumplimiento de las obligaciones previstas por el decreto nª 7.843/53, sus complementarios y modificatorios;

Que, por otra parte y en cuanto se relaciona con la regla contenida por el recordado artículo 5ª, para el caso de falta de presentación en término de las declaraciones juradas correspondientes, se estima conveniente ajustar en forma gradual los mismos en orden a la naturaleza de la falta;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1ª.- Declárase incluídos a los señores Ministros Secretarios de Estado en las disposiciones del artículo 2ª del decreto nª 7.843/53, relacionado con el régimen de declaraciones juradas patrimoniales para el personal de la Administración Pública Nacional.

ARTICULO 2ª.- Substitúyese el texto del artículo 5ª del decreto nª 7.843/53, por el siguiente:

"La Contaduría General de la Nación, solicitará al Tribu-
"nal de Cuentas que, con intervención del Ministerio res-
"pectivo, disponga la retención de los haberes del funcio
"nario que, sin causa justificada, no presentare en térmi
"no su declaración jurada, y acordará al mismo un plazo de
"quince (15) días hábiles a partir de la fecha de notifi-
"cación para regularizar su situación. Cumplido dicho lap

"so sin haberse satisfecho la norma, solicitará de la Se "cretaría de Estado correspondiente la cesantía del cau- "sante, salvo el caso que la omisión fuera cometida por "un Ministro, en cuyo supuesto deberán elevarse los ante- "cedentes respectivos al Poder Ejecutivo.
"Los funcionarios que incurran en omisiones, ocultaciones "o falsedades acerca de su verdadera situación patrimonial "serán pasibles de la inmediata cesantía, sin perjuicio de "la responsabilidad penal consiguiente y de las investiga- "ciones que disponga efectuar el Poder Ejecutivo".-

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena - Carlos R. S. Alconada Aramburú - Julio C. Cueto Rúa - Alberto F. Mercier - Pedro Mendiondo - Sadi E. Bonnet - Jorge H. Landaburu - Víctor J. Majó - Teodoro Hartung - Angel H. Cabral - Alfonso de Laferrére - Acdel E. Salas - Francisco Martínez - Tristán Guevara.-

DECRETO Nº 13.659.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 376.-

RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEFINITIVAS - RECURSO DE RECONSIDERACION - RECURSO DE REVOCATORIA

Expediente nº 71.739 - 1955.- Recurso de reconsideración contra resolución definitiva de la Administración.- MINISTERIO DE HACIENDA.-

Señor Ministro de Hacienda:

La firma Bence y Cía. solicita a fs. 1/2 del expediente agregado nº 74.369/56, reconsideración del decreto nº 15.219/56, cuya copia corre a fs. 52/53, que no hizo lugar al recurso jerárquico deducido por dicha sociedad y mantuvo firme la multa aplicada a la recurrente, por mora en el cumplimiento de los plazos de entrega de la mercadería adquirida por orden de compra nº 4.474/51.

Con respecto a la procedencia formal del recurso de reconsideración interpuesto, esta Procuración del Tesoro, ha sostenido en reiteradas oportunidades que "contra las resoluciones que deciden recursos administrativos en última instancia, es improcedente el recurso de reconsideración o revocatoria, a menos que una norma jurídica lo acuerde, como ocurre en el orden comunal (Bercaitz, Procedimiento Administrativo Municipal, 1946, pág. 58). Esas decisiones solamente pueden ser modificadas de oficio en casos especialísimos y a instancia de parte por vía del recurso de revisión cuando se configuren algunas de las causales que la ley admite para su apertura (Villar y Romero, Derecho Procesal Administrativo, Madrir,1944, 176/7; Ragnisco, I ricorsi amministrativi, 1947, pág. 128/9; Ranelletti, Le guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione, 4 ed., págs. 234/5 y nota; Cammeo, Commenta

rio delle leggi sulla giustizia amministrativa, nº 314,pág.613. Com.Resta, la revoca degli atti amministrativi, págs. 28/9"(ver dictamen de mayo [illegible] 195 en expte. nº 6.082/53 del registro del Ministerio de Hacienda).

Por lo expuesto, es indudable que el recurso de reconsideración interpuesto, es manifiestamente improcedente como tal.

Corresponde, sin perjuicio de ello, examinar los fundamentos en que el mismo se apoya para decidir si procede la anulación de oficio del decreto nº 15.219/56.

Sobre el particular, reitero los términos del dictamen de esta Procuración del Tesoro corriente a fs. 53 y vta., según el cual se concluye que requeridos los informes a que se hace referencia a fs. 32 "no ha podido acreditarse fehacientemente que haya existido un hecho imputable a la Administración o a la destinataria de la provisión que, al impedir el cumplimiento en tiempo del contrato, pueda ser admitido como causal de excusación en favor de la firma Bence y Cía".

La posterior presentación de la recurrente (fs. 1, expte. nº 74.369/56) nada agrega en tal sentido, ya que se limita a invocar razones de equidad y a efectuar consideraciones sobre el eventual carácter de confiscatoria que pueda tener la multa aplicada, lo que no es susceptible de ser considerado en esta instancia administrativa.

Por todo lo cual soy de opinión que debe ser rechazado el recurso de reconsideración interpuesto por la firma Bence y Cía. a fs. 1/2 del expte. agregado nº 74.369/56, manteniéndose en todos sus términos el decreto nº 15.219 del 21 de agosto de 1956.-

Noviembre 12 de 1957.-

Fdo. FAUSTO ENRIQUE CORTES
Sub-Procurador del Tesoro de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 377.-

SUELDO - INDEMNIZACION POR TRASLADO - PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR - LIQUIDACION DE HABERES

Expediente nº 6.458 - 1957.-

////ñor Director General:

Frente a lo solicitado a fs. 1/2 de los presentes actuados se cumple en informar que al doctor Edgardo Grumbach, ex Jefe de Departamento de 1ra. de este Ministerio, con funciones de Consejero Financiero en Washington se le aceptó su renuncia con fecha 31 de diciembre de 1956.

Posteriormente -según manifiesta el recurrente- se le impartieron instrucciones para que permaneciera en el exterior hasta el 31 de enero de 1957, fecha en que se hizo cargo de la Consejería Financiera en Washington, el doctor Enrique García Vázquez.

En consecuencia, existiendo prestación de servicios se liquidaron haberes al Dr. Edgardo Grumbach hasta el 31/1/957 y a partir de ese día a su reemplazante Dr. García Vázquez.

Ahora bien, por cuanto la aceptación de la renuncia del Dr. Edgardo Grumbach, debió ser precedida de su traslado -requisito que no fué cumplido en su oportunidad- por decreto nº 3.671 del 5 de abril de 1957 se le consideró trasladado al país con anterioridad al 31 de diciembre de 1956, autorizándose por ese mismo acto de gobierno el pago de la pertinente indemnización y gastos de fletes y embalaje (artículos 40º y 41º de la Ley nº 12.951).

El recurrente regresó a esta Capital a mediados del mes de marzo por las causas que señala en el apartado e) del punto 3º del adjunto memorándum, solicitando por tal motivo el pago de sus haberes en dólares durante ese período, amparándose en el artículo 87º del decreto nº 5.182/48, reglamenta-

rio de la antes citada ley número 12.951.

Dicha disposición legal fija a los funcionarios trasladados un plazo de 45 días para partir de su destino.

Este Departamento en mérito a lo señalado precedentemente, dado la forma en que se ha planteado el presente caso, previo a dar curso al pedido formulado, estima conveniente conocer la opinión del Tribunal de Cuentas de la Nación al respecto.-

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, junio 19 de 1957.-

Fdo. JORGE A. PONCIO
Jefe
Departamento de Contabilidad (Int.)

Buenos Aires, junio 24 de 1957.-

Atento lo informado por el Departamento de Contabilidad, pase al Tribunal de Cuentas de la Nación.

Dése al presente el carácter de atenta nota.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRRES
Director General de
Contabilidad y Administración

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Expediente nº 30.858 - 1957 TCN
Providencia nº 11.438 - 1957.-
Presupuesto e Incompatibilidad

///nos Aires, 2 de octubre de 1957.-

Tratan las presentes actuaciones sobre la solicitud formu

lada por el ex-Jefe de Departamento de la. del Ministerio de Hacienda, doctor Edgardo Grumbach, en el sentido de que se le reconozca, además de la indemnización por traslado a Buenos Aires, el pago de sus sueldos como Consejero Financiero por el período en que debió permanecer en Estados Unidos, con posterioridad al 31 de diciembre de 1956, fecha en que presentara su renuncia a dicho cargo.

Surge de los antecedentes agregados que el referido funcionario fué considerado trasladado a este país con anterioridad a la fecha de su renuncia, por decreto nº 3.671/57, si bien, en realidad, prestó servicios en Washington hasta el 31 de enero del corriente año, regresando a Buenos Aires recién a mediados de marzo.

En consecuencia, a juicio de este Tribunal de Cuentas de la Nación, nada se opone para que al citado agente se le acuerden los beneficios previstos en los artículos 40º y 41º de la ley nº 12.951.

No obstante y con relación a su solicitud de liquidación de sueldos por los meses de febrero y marzo de 1957, cumple en señalar que la misma no debe prosperar, toda vez que su renuncia deja roto el vínculo que lo mantenía sujeto con el Estado a partir de la fecha de su presentación, quedando automáticamente excluído de los beneficios previstos en el artículo 87 del decreto nº 5.182/48, siendo la circunstancia de que continuara en ejercicio del cargo hasta el 31 de enero de 1957, causal que lo habilita únicamente para la percepción de los haberes legítimamente devengados por dicho período.

Con lo expuesto, vuelva al Ministerio de Hacienda de la Nación, sirviendo la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. DAMIAN FIGUEROA
Presidente del
Tribunal de Cuentas de la Nación

CONTRATACIONES - COMPRA-VENTA

Expediente nº 76.033 - 1957.- Interpretación art. 87 Reg. de Contrataciones.-

P. Nº 2.357/57.-

//—nos Aires, 17 de octubre de 1957.-

Vuelva al Tribunal de Cuentas de la Nación solicitándole quiera concretar su opinión acerca de la interpretación que corresponde asignar al primer párrafo del artículo 87 del Reglamento de Contrataciones, en cuanto a si el "plazo prudencial" a que alude el mismo está referido al plazo dentro del cual el organismo respectivo debe efectuar la intimación, o al que se otorga al proveedor para entregar la mercadería.

Dése a la presente carácter de atenta nota.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA
Ministro de Hacienda de la Nación

Expediente nº 31.750 - 1957.-
Informe nº 1.817 - 1957
(Cont. y Trab. Públicos).-

//ñor Ministro de Hacienda:

Con respecto a la opinión que se le solicita, este Tribunal de Cuentas manifiesta que la interprestación correcta que corresponde dar a la expresión "plazo prudencial" es de que ella está referida al término que se otorga al proveedor para la entrega de la mercadería, el que adquiere carácter de perentorio por la circunstancia de que debe otorgarse bajo apercibimiento de rescisión del contrato.

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, 14-11-57.-

Fdo. RODOLFO J. TARELLI
Presidente en Ejercicio

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 379.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - EMPRESAS DEL ESTADO - AUDITORIAS - PATRIMONIO DEL ESTADO - TRANSFERENCIA DE BIENES - ENAJENACIONES DE BIENES

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1957.-

Visto lo dispuesto por el inciso f) del artículo 84 de la Ley de Contabilidad y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 10 de la Ley 13.653 (t.o.) faculta al Poder Ejecutivo Nacional para disponer la transferencia o enajenación total o parcial del patrimonio de las empresas del Estado, cuando razones de interés general lo justifiquen, con cargo de dar cuenta al H. Congreso;

Que, por lo tanto, los actos que realicen las empresas, conducentes a los fines indicados precedentemente, deben ajustarse a pronunciamientos previos del Poder Ejecutivo, ya sea los que resulten de la aprobación del plan de acción respectivo, que también debe ser comunicado al Poder Legislativo, a que se refieren el artículo 4ª de la Ley Nª 13.653 (t. o.) y su decreto reglamentario Nª 5.883/55 (arts. 3ª y 4ª), o de decisiones posteriores del Poder Ejecutivo disponiendo en forma expresa la transferencia o enajenación de que se trate, medida ésta que por constituir un complemento del plan de acción aprobado, debe llevarse a conocimiento del H. Congreso;

Que, en consecuencia los actos tendientes a la transferencia o enajenación de su patrimonio realizados por las empresas del Estado, requieren pronunciamiento previo del Poder Ejecutivo; en caso contrario, no emanarían de autoridad competente y además, su ejecución sin la consideración

anterior de dicho Poder, puede dar lugar a erogaciones innecesarias y comprometer la seriedad del Estado ante los terceros contratantes;

Por todo ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Déjase establecido que en lo relativo a la enajenación total o parcial del patrimonio de las empresas del Estado comprendidas en el régimen de la Ley 13.653 (t.o.), las auditorías destacadas ante las mismas, procederán conforme al criterio señalado en los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- A los fines dispuestos en el artículo precedente, los Jefes de las Auditorías deberán efectuar las comunicaciones pertinentes, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 1º de la Resolución Nº 1.536 (D.A.Nº 323), de todo acto que llegue a su conocimiento ya realizado o que se realice a partir de la fecha, que no se ajuste a lo dispuesto en esta Resolución.

ARTICULO 3º.- Dése al Digesto Administrativo y, cumplido archívese.-

RODOLFO J. TARELLI -Presidente en Ejercicio- Antonio M. Pérez Arango - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Eusebio E. Villar (Vocal acc.) - César Aguirre Legarreta -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.961.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 380.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - LIQUIDACION DE HABERES - GASTOS EN PERSONAL - FISCALIZACION - INTERVENCION PREVIA - LIQUIDACION DE PASIVIDADES

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1957.-

Visto las actuaciones interpuestas por el Ministerio de Educación y Justicia y la representación destacada ante el Consejo Nacional de Educación, con relación a la liquidación de las planillas de haberes de sus dependencias, y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente y necesario perfeccionar las normas en vigencia y las instrucciones dadas a las delegaciones de este Tribunal sobre la materia;

Que las normas de verificación de las planillas de haberes deben basarse en la intervención previa, llevada a cabo sobre los documentos y en los momentos más oportunos;

Que es preciso tomar en consideración los modernos sistemas de liquidación de tales haberes, implantados en la administración nacional;

Que tales sistemas de liquidación permiten realizar un control eficaz mediante el procedimiento de verificación de las novedades de altas, bajas y de liquidaciones adicionales, debiéndose interpretar que el resto del personal no ha sufrido variación en sus haberes respecto de la última liquidación intervenida;

Que es preciso dejar sentado que las funciones de este Tribunal y sus delegaciones, deben reducirse al control y ve

rificación de las liquidaciones de referencia, sin que,en ningún caso y de ningún modo, implique participar en estas últimas operaciones;

Que para ello y a fin de evitar duplicidad de tareas, las delegaciones de este Tribunal deben aprovechar al máximo, todos los controles de orden interno que funcionen en los organismos a los cuales fiscalicen;

Que la conformidad debe prestarse con la reserva de los artículos 93ª y 95ª de la ley de contabilidad;

Que para adoptar el temperamento expuesto en los considerandos anteriores no hay inconveniente de orden legal o técnico, máxime teniendo en cuenta la sujeción a la jurisdicción y competencia de este Tribunal de todo agente o pensionista que, por errónea o indebida liquidación, adeuden sumas que deban reintegrarse a la Nación, de acuerdo a lo establecido por el artículo 88 de la ley de contabilidad;

Por todo ello y, en uso de la facultad que le acuerda el inciso c), artículo 84,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1ª.- Las representaciones de este Tribunal requerirán, de acuerdo con los respectivos sistemas imperantes en los organismos ante los cuales se hallen destacados, los partes por duplicado de novedades de altas, bajas y de liquidaciones adicionales, juntamente con la documentación que corresponda. Dichos partes deberán ser enviados a medida que se confeccionen.

Una vez intervenidos, devolverán el original al organismo con la constancia de que las planillas definitivas de haberes deberán reflejar tales novedades, a exclusiva cuenta y riesgo del mismo, reteniendo el duplicado con destino al archivo.

A tal efecto, insertarán un sello con la siguiente leyenda: "Con las reservas de los artículos 93ª y 95ª de la ley "de contabilidad, esta delegación interviene el presente par"te de novedades, dejando expresa constancia que las plani"llas defintitivas de haberes deberán ajustarse exactamente "a los datos contenidos en éste, figurando el resto del per"sonal sin alteración en su situación de revista, con respec"to a la última modificación intervenida".

ARTICULO 2ª.- La intervención de las liquidaciones relativas a retiros, pensiones, indemnizaciones, derecho a sueldo de retiro y adelantos, que produzcan los distintos organismos específicos de la administración nacional, será realizada por las respectivas delegaciones ajustándose a idéntico procedimiento que el determinado por el artículo anterior.

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, dichas representaciones deberán efectuar, en forma exclusiva, como tareas complementarias para el respectivo control, las relacionadas con la previa intervención de las actuaciones por las cuales se disponga el otorgamiento de tales beneficios con la excención de las vinculadas a pensiones y adelantos que serán analizadas directamente por el servicio de Pasividades.

ARTICULO 3ª.- En materia de sueldo anual complementario las representaciones de este Tribunal, utilizando los elementos de control en uso en los organismos que fiscalicen, prestarán su conformidad mediante el análisis de muestras selectivas de los referidos elementos de control, suscribiendo los resúmenes de imputación insertando un sello con el siguiente texto: "Con las reservas de los artículos 93ª y 95ª de la "ley de contabilidad, esta delegación interviene el presente "resumen de imputación, dejando expresa constancia que pres"ta su conformidad sobre la base de que el mismo incluye la "doceava parte de los haberes sobre los cuales se calcula el "sueldo anual complementario y de acuerdo con los partes de "novedades oportunamente intervenidos".

ARTICULO 4ª.- Las representaciones de este Tribunal conven-

drán directamente con los organismos que fiscalicen, las fechas hasta las cuales remitirán y despacharán los partes de novedades referidos.

ARTICULO 5º.- Los originales de los partes a que hace mención el artículo 1º, integrarán la respectiva rendición de cuentas.

ARTICULO 6º.- Déjase sin efecto las resoluciones nros. 238/57 (D.A.Nº 192) y 731/57 (D.A.Nº 60).

ARTICULO 7º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA -Presidente-
Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango -Vocales- Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 2.000.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 381.-

REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS - OBRAS PUBLICAS

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1957.-

Visto el expediente nº 3.291/57 referente a la organización del Registro de Constructores de Obras Públicas, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 13 de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 dispone la creación de un Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y encomienda al Poder Ejecutivo dictar el reglamento que lo rija;

Que es a todas luces conveniente para la mejor ejecución de obras públicas que la Administración tenga cabal conocimiento de la capacidad técnico-económica y solvencia moral de los aspirantes a contratar con ella, para que las adjudicaciones recaigan en quienes efectivamente sean los mejores proponentes;

Que la falta de una adecuada clasificación y calificación de las empresas constructoras, torna difícil cumplir la exigencia de que la adjudicación, en las licitaciones públicas o privadas, recaiga siempre en la propuesta "más conveniente", como dispone la ley (artículo 18 - Ley 13.064), porque el único elemento de juicio objetivo con que comúnmente se cuenta para la apreciación, es el monto de las propuestas, elemento éste que, por sí solo, es insuficiente y a veces hasta contraproducente para una acertada e inobjetable selección;

Que por la naturaleza y finalidad del organismo que se crea, conviene sea dirigido por una autoridad colegiada dependiente del Ministerio de Obras Públicas, con la participación minoritaria de las empresas constructoras;

Que conviene, asimismo, en la primera etapa del funcionamiento del Registro, no someterlo a normas reglamentarias detallistas, dejándole en cambio una discreta libertad de movimientos que le permita tomar el rumbo más acertado en el cumplimiento de sus funciones, quedando siempre a salvo para los afectados por sus resoluciones, la posibilidad de recurrir de las mismas ante la autoridad competente;

Por ello y atento lo propuesto por el señor Secretario de Estado en el Departamento de Obras Públicas,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A

ARTICULO 1ª.- Abrese el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas creado por el artículo 13 de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064. Este Registro será único para toda la Administración Nacional y se regirá por las normas contenidas en el presente decreto.

T I T U L O I

DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 2ª.- Estarán sujetas a inscripción en el Registro, las personas físicas o jurídicas que deseen desarrollar cualesquiera de las actividades mencionadas en el artículo 1ª de la expresada ley y en el Decreto Aclaratorio Nº 19.324 del 13 de agosto de 1949 y que quieran contratar obras o trabajos con la Administración Nacional.

La Administración Nacional deberá contratar las obras y/o trabajos que ejecute, únicamente con los inscriptos, con las excepciones que establece el artículo 26ª.

ARTICULO 3ª.- El Registro, cuando proceda, inscribirá a las personas físicas o jurídicas que así lo soliciten, con la calificación y capacitación que se les asigne. Al efecto el Registro constará de 2 Secciones: a) Sección obras de Ingeniería y b) Sección Obras de Arquitectura.

ARTICULO 4º.- El Registro ajustará su funcionamiento a las determinaciones del Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, que se crea por el presente decreto, el que dependerá directamente del Ministerio de Obras Públicas.

T I T U L O II

DEL CONSEJO DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS

a) COMPOSICION:

ARTICULO 5º.- El Consejo estará integrado por 7 (siete) miembros: el Subsecretario de Obras Públicas y 6 (seis) que designará el Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Obras Públicas. Cuatro de ellos serán funcionarios públicos y los dos restantes serán designados por dos años a propuesta de los inscriptos en el Registro, pudiendo ser reelectos.

Por primera vez y hsta tanto funcione el Registro, estos dos miembros serán también propuestos por el Ministerio de Obras Públicas.

El Consejo será presidido por el Subsecretario de Obras Públicas quien ejercerá la representación del mismo. El Consejo elegirá de entre sus miembros un Vicepresidente que reemplazará al Presidente en caso de ausencia o impedimento.

Actuará como Asesor Letrado el Secretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas o su reemplazante legal, quien concurrirá al seno del Consejo cada vez que éste lo conceptúe necesario, a cuyo fin será invitado con la debida antelación, o producirá dictamen por escrito en los casos en que así se le requiera.

b) FUNCIONAMIENTO:

ARTICULO 6º.- El Consejo actuará con quórum de cinco miembros y podrá resolver por simple mayoría. En caso de empate, el presidente del Consejo tendrá doble voto.

ARTICULO 7º.- El Consejo realizará una sesión ordinaria por mes, y las extraordinarias que resulten necesarias.

ARTICULO 8º.- Las reuniones extraordinarias podrán ser solicitadas por cualquiera de los miembros del Consejo al Presidente, fundamentando la petición.

ARTICULO 9º.- Las tareas técnico-administrativas que requiera el funcionamiento del Registro, estarán a cargo de una dependencia que organizará el Consejo y dependerá del mismo.

ARTICULO 10º.- Los procedimientos serán escritos o verbales según lo determine el Consejo, quien deberá ordenar su instrucción en forma que se respete el derecho de las partes a ser oídas y a producir pruebas dentro de los términos que señale el Consejo antes de formalizar su decisión. Los procedimientos podrán ser impulsados a pedido de parte, o de oficio.

Cuando se utilice el procedimiento verbal, se dejará constancia de lo actuado en un acta levantada al efecto.

c) ATRIBUCIONES Y DEBERES:

ARTICULO 11º.- Son atribuciones y deberes del Consejo:

a) Disponer la inscripción en el Registro de las empresas que lo soliciten, cuando así proceda con la calificación y capacitación que respectivamente les asigne, y la formación del legajo correspondiente con todos los antecedentes.

b) Entender en la actualización de los antecedentes de las empresas inscriptas, en orden a su desarrollo y actuación en obras y tomar razón de la naturaleza y monto de las obras contratadas por cada empresa.

c) Recabar de las dependencias de la Administración Pública, de las Instituciones de crédito estatales y privadas, de las Entidades profesionales, de los interesados y de cualquier otra persona real o ideal, las informaciones que considere necesarias para formar juicio sobre las empresas inscriptas, o que hayan solicitado inscripción. Al efecto todas las Reparticiones de la Administración Nacional quedan

obligadas a suministrar toda información que sobre el particular les sea requerida por el Consejo.

d) Calificar el comportamiento de los inscriptos, en las obras por ellos contratadas, sean estas públicas o privadas teniendo en cuenta las informaciones a que se refiere el inciso c) y sin perjuicio del examen directo que considere oportuno efectuar.

e) Notificar de oficio a las Reparticiones de la Administración Nacional acerca de las sanciones que se apliquen a los inscriptos.

f) Informar acerca de las constancias del Registro a las reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales que lo soliciten, y comunicarles las modificaciones que se produzcan.

g) Aplicar por sí, o proponer, las sanciones que a su juicio y con arreglo a lo establecido en el artículo 12ª deban ser impuestas a los inscriptos.

h) Notificar a los inscriptos sobre los decretos, resoluciones y disposiciones referentes a dichas sanciones.

i) Resolver en las reclamaciones que sobre sus resoluciones efectúen los inscriptos, o las entidades con personería para representarlos.

j) Entender en los pedidos de rehabilitación que los sancionados formulen.

k) Convocar a los inscriptos en el Registro para elección de sus representantes.

l) Dictar su propio reglamento interno para su funcionamiento.

m) Proponer al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Obras Públicas las modificaciones del presente reglamento, cuando lo estime conveniente.

Sin perjuicio de las notificaciones personales o por nota que se efectúen a los interesados, las inscripciones y sus modificaciones, como también las sanciones que se apliquen a los inscriptos, se publicarán en el Boletín Oficial.

ARTICULO 12º.- El Consejo podrá, en caso de incumplimiento por las empresas de sus obligaciones contractuales o las que impone el presente decreto:

a) Aplicar apercibimientos.

b) Suspender el registro hasta por un año.

c) Proponer al Ministro de Obras Públicas la suspensión por otras causales que las indicadas en el inciso anterior, hasta por un plazo de dos años.

d) Proponer al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas la suspensión por un plazo mayor al fijado en el inciso anterior, hasta un término máximo de cinco años.

En todos los casos el imputado deberá ser previamente oído.

Las firmas suspendidas por un término no mayor de dos años, quedarán automáticamente rehabilitadas para contratar con el Estado, con todos los derechos que la inscripción les da, una vez cumplido el término de la sanción; y el Consejo, de oficio o a pedido del interesado, ordenará la publicación pertinente en el Boletín Oficial. Las que fueren suspendidas por un término mayor de dos años, deberán solicitar su rehabilitación, dando cumplimiento a las condiciones y requisitos señalados para la inscripción. La resolución respectiva será dictada por el Poder Ejecutivo previo dictamen del Consejo.

T I T U L O III

DE LAS GESTIONES DE INSCRIPCION

ARTICULO 13º.- Las solicitudes de inscripción deberán presentarse en los formularios que oportunamente apruebe el Consejo. Los

datos que los interesados consignen en la solicitudes revistirán el carácter de declaración jurada y secreta y no podrán ser utilizados para otros fines que los previstos en este decreto.

ARTICULO 14º.- Sólo serán inscriptas en el Registro las empresas legalmente capacitadas para contratar y que a juicio del Consejo acrediten condiciones técnicas y solvencia económica y moral suficientes para desempeñarse como contratistas del Estado. Contra las resoluciones denegatorias se podrá recurrir ante el Tribunal Arbitral previsto por el artículo 55 de la Ley 13.064. Mientras no funcione dicho Tribunal se recurrirá ante el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Obras Públicas.

ARTICULO 15º.- Las empresas podrán ser inscriptas en una o en ambas secciones del Registro según lo soliciten, pero lo serán separadamente en cada una de ellas, de acuerdo con los antecedentes que ofrezcan.

ARTICULO 16º.- El Consejo podrá requerir de las empresas que soliciten su inscripción, o la ampliación o la modificación de su calificación y capacitación, todos los datos que estime necesarios a tales fines. La negativa infundada a este requerimiento, motivará la suspensión del trámite respectivo, y eventualmente el archivo de las actuaciones. Las solicitudes de modificación de la calificación y capacitación sólo podrán presentarse una vez por año.

ARTICULO 17º.- El trámite de inscripción así como los pedidos de ampliación o modificación de la calificación y capacitación serán substanciados en un lapso máximo de 90 (noventa) días laborables contados desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva y deducidas las demoras atribuibles al peticionante. Transcurrido ese plazo sin que el Consejo se haya expedido, las propuestas de dichas empresas a licitaciones o concursos de precios podrán ser admitidas e incluso las empresas podrán resultar adjudicatarias, si al momento de pronunciarse la adjudicación por la autoridad competente, ésta

no hubiera sido notificada de lo resuelto por el Consejo.
ARTICULO 18º.- Denegada a una empresa la inscripción o la ampliación o la modificación de su calificación y capacitación, ella no podrá repetir la instancia hasta transcurrido el lapso mínimo de un año desde la resolución denegatoria del Consejo.
ARTICULO 19º.- Concedida la inscripción, se otorgará a cada empresa la correspondiente credencial con el número de orden en el Registro, indicación de la sección o secciones en que se haya inscripto y la capacidad de ejecución anual asignada por el Consejo.

Asimismo y en la misma credencial se dejará constancia del monto de obra anual comprendida en la forma que se indica en el artículo 22º.

T I T U L O IV

DE LA CALIFICACION Y CAPACITACION

ARTICULO 20º.- Las empresas constructoras serán calificadas y capacitadas según el sistema que establece el presente reglamento, a los fines de fijar la aptitud y capacidad de las mismas dentro de la sección o secciones en que hayan solicitado su inscripción.
ARTICULO 21º.- Denomínase capacidad de ejecución anual de una empresa al monto anual máximo de obra que se estima puede construir normalmente. Este valor, expresado en pesos moneda nacional se determinará como sigue:

a) Se asignará a cada empresa una capacidad básica equivalente al monto anual de obras ejecutadas, públicas y privadas que se le hayan certificado por cualquier concepto en los doce meses corridos de mayor producción tomados dentro de los cinco años de actuación anteriores a la fecha en que el Registro determine su capacidad.

b) La capacidad básica así determinada deberá afectarse por un factor que contemple la fluctuación de los precios, factor que será determinado periódicamente por el Consejo.

c) La capacidad resultante en b) deberá afectarse a su vez por un factor que determinará el Consejo que no excederá de 10 y que tendrá en cuenta lo siguiente:

1.- El estado económico de cada empresa a la fecha de la determinación de la capacidad, para lo cual la empresa deberá presentar el último balance general en regla y los correspondientes a los tres ejercicios anteriores a aquel, certificados por contador público nacional, así como la declaración sobre equipos y toda otra información que puede ilustrar sobre su crédito.

En lo sucesivo las empresas quedan obligadas a presentar anualmente su balance general y las modificaciones que se produzcan en su plantel y equipo.

2.- El cumplimiento de las obligaciones por cada empresa.

3.- La antigüedad de cada empresa en el país.

4.- Las posibilidades de crecimiento o decrecimiento general de la capacidad básica de cada empresa indicada en a).

ARTICULO 22º.- Denomínase monto anual de obra comprometida, a la cifra en pesos moneda nacional que resulte de la suma de los cocientes entre la obra que falta ejecutar de cada contrato en curso y el saldo del plazo de ejecución expresado en años. Esta cifra admitirá corrección en los casos que se concedan prórrogas por la Administración.

ARTICULO 23º.- Denomínase capacidad de contratación anual de cada empresa, a la que resulta de la diferencia entre la ca-

pacidad de ejecución anual y el monto anual de obra comprometida.

No serán admitidas en las licitaciones las ofertas de proponentes cuya capacidad de contratación anual sea inferior a la cifra que resulta de dividir el presupuesto oficial de la obra que se licita por el plazo de ejecución expresados en años. En caso de empresas que se presenten transitoriamente unidas para contratar determinada obra, se sumará la capacidad de contratación anual de cada una para establecer la capacidad de contratación anual del consorcio.

ARTICULO 24ª.- A los efectos previstos en los artículos anteriores, las empresas inscriptas en el Registro deberán comunicar al Consejo toda contratación de obra pública, nacional, provincial o municipal, así como todo otro compromiso de obra, que contraiga con entidades privadas o con particulares, dentro de los diez (10) días de contraído el compromiso de que se trate. Asimismo una vez por año deberá comunicar las certificaciones de obras y toda otra obligación o circunstancia que de alguna manera influya en su capacidad de contratación y cualquier modificación que se produzca en orden a las declaraciones formuladas al Registro con anterioridad. Las omisiones serán sancionadas con las penalidades que establece el artículo 12ª, con la graduación que el Consejo estime justa.

T I T U L O V

DE LA DIRECCION TECNICA

ARTICULO 25ª.- Las empresas que soliciten su inscripción en el Registro deberán probar que cuentan con los servicios permanentes de por lo menos un profesional técnico universitario en el ramo de su especialidad, legalmente habilitado para el ejercicio de su profesión. Las empresas comunicarán dentro del término de treinta (30) días de producido el hecho, el cese de los servicios del profesional aludido, y el nombre del que lo reemplace.

T I T U L O VI

DE LAS EXCEPCIONES

ARTICULO 26º.- Excepcionalmente el Consejo podrá autorizar la concurrencia de empresas no inscriptas, pero con antecedentes verificables en el país, o en el extranjero, que las hagan acreedoras a ser consideradas con capacidad técnica y financiera, suficiente por una obra cada vez.

Para concurrir a licitaciones de obras o trabajos de hasta Quinientos Mil Pesos Moneda Nacional de Curso Legal ($ 500.000 m/n.) no es obligatoria la inscripción en el Registro.

ARTICULO 27º.- El Reglamento que se aprueba por el presente decreto, empezará a regir a los ciento veinte (120) días de publicado en el Boletín Oficial la constitución del Consejo.

ARTICULO 28º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de Obras Públicas a sus efectos.-

ARAMBURU - Pedro Mendiondo

DECRETO Nº 14.692.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 382.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - PAGOS - TRANSFERENCIA DE CREDITOS - FONDOS - IMPUTACION

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1957.-

Vista la nota adjunta dirigida por la Contaduría General de la Nación y en uso de la facultad que le acuerda el artículo 84, inciso o) de la ley de contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente aclarar las normas a adoptarse en el futuro con respecto a las modificaciones o transferencias de créditos de presupuesto de una jurisdicción a otra, así como a los pagos o afectaciones de créditos presupuestarios que no den lugar a extración de fondos de la Tesorería General de la Nación;

Que en este último caso corresponde adecuar el modelo de libramiento aprobado por la reglamentación del artículo 33ª de la ley de contabilidad;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- En los casos de modificaciones de créditos de presupuesto que den lugar a correlativos cambios de imputación, los servicios administrativos comunicarán a la Contaduría General de la Nación, con la conformidad del delegado del Tribunal de Cuentas de la Nación, las operaciones que deberán realizarse.

Si las modificaciones se refieren a transferencias de créditos de una a otra jurisdicción ministerial, la comunicación a que se refiere el párrafo anterior deberá hacerse simultáneamente por los servicios administrativos que intervengan in

dicando las cuentas a debitar y acreditar respectivamente y las órdenes de disposición que deberán afectarse y desafectarse.

ARTICULO 2º.- Los pagos o afectaciones de créditos de presupuesto, que no den lugar a egreso de fondos de la Tesorería General de la Nación, se dispodrán mediante la emisión del libramiento de entrega reglamentario, en el que constarán los requisitos pertinentes, cruzado con una leyenda que exprese "para contabilidad".

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá admitirse la afectación de órdenes de disposición e imputación correlativa a créditos del presupuesto, sin la previa liquidación del gasto en base al compromiso definitivo que corresponda.

ARTICULO 4º.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y, cumplido, archívese.-

RODOLFO J. TARELLI -Presidente en Ejercicio - Antonio M. Pérez Arango - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Eusebio E. Villar (Vocal acc.) - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.988 -BIS-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 383.-

INCOMPATIBILIDADES - LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1957.-

Visto que por decreto nª 3.601 del 15 de marzo de 1954, se declaró excluído de las prescripciones del régimen de incompatibilidades, al personal jornalizado por reunión de carreras de los hipódromos de Palermo y San Isidro, desde la fecha de nacionalización de los mismos; y

CONSIDERANDO:

Que al respecto, es dable destacar que existen otros agentes en distintos organismos de la Administración Nacional que se desempeñan en días considerados como no laborables para la misma y que son titulares a su vez, de otros puestos en el orden nacional, provincial o municipal;

Que no obstante el carácter restrictivo que debe privar en las excepciones al citado régimen, teniendo en cuenta que la situación del personal en cuestión guarda similitud con la de los empleados de los hipódromos referidos, corresponde hacer extensiva la franquicia otorgada por el recordado decreto nª 3.601/54, a todos aquellos agentes que presten servicios en otras jurisdicciones de la Administración Nacional, los días considerados como no laborables para la misma;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1ª.- Exclúyese, a partir de la fecha del presente decreto, de las prescripciones del régimen de incompatibilida-

des, al personal que se desempeñe en distintos organismos de la Administración Nacional en días considerados como no laborables para la misma.

ARTICULO 2ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación para su conocimiento y demás efectos.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nª 15.443.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 384.-

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS - CONTABILIZACION DE RECURSOS

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1957.-

Visto el Expediente nº 45.060/55, por el cual la Dirección Nacional de Aduanas dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación, solicita la modificación del procedimiento de contabilización de los ingresos que recauda en concepto de "Impuestos Aduaneros", que se ha venido registrando en forma discriminada, tal como lo estableció en su momento el Cálculo de Recursos de Rentas Generales aprobado por la Ley Nº 14.395 de Presupuesto General de la Nación, para los años 1955 y 1956, y

CONSIDERANDO:

Que la variante introducida por la Repartición requirente en la contabilización de aquellos ingresos, constituye una mera cuestión de técnica contable que en nada afecta específicamente el Cálculo de Recursos de los presupuestos nacionales;

Que la modificación de que se trata permite cumplimentar adecuadamente las tareas a cargo de la Dirección Nacional de Aduanas, sin que la misma se vea precisada a distraer mayor número de agentes para las laboriosas tareas contables de discriminación de las sumas que se recaudan, lo cual representa un beneficio en favor de la administración, sin perjudicar la registración de las operaciones respectivas;

Que distintos trámites administrativos han dilatado hasta el presente la concreción de esta medida, sin que tal retraso sea imputable al organismos solicitante, ya que este último inició a su debido tiempo las actuaciones del rubro;

Por todo ello, y atento a la opinión favorable vertida en su momento por la Contaduría General de la Nación, sobre el nuevo sistema propuesto,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1ª.- Apruébase y autorízase el procedimiento contable seguido por la Dirección Nacional de Aduanas a partir de enero de 1955, de registrar los ingresos de Recaudación Aduanera en concepto de Derechos de Importación, en cifras globales en el rubro "Derechos ad-valorem y específicos", sin tener en cuenta para ello la discriminación que determinó el Cálculo de Recursos de Rentas Generales aprobado por la Ley Nº 14.395.

ARTICULO 2ª.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, de Guerra, de Marina y de Aeronáutica.

ARTICULO 3ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase a sus efectos al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación.

ARAMBURU - Isaac Rojas - Adalbert Krieger Vasena - Víctor J. Majó - Teodoro Hartung - Jorge H. Landaburu.-

DECRETO-LEY Nº 14.794.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 385.-

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS - SUPLEMENTO POR ZONA

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1957.-

Visto el presente Expediente nº 554.838/56 en el que el Ministerio de Hacienda de la Nación solicita se acuerde un suplemento sobre la remuneración mensual para el personal de la Dirección Nacional de Aduanas destacado en determinadas zonas del territorio de la República, y

CONSIDERANDO:

Que la medida propuesta se funda en razones de estricta justicia, por cuanto tiende a compensar las dificultades que debe afrontar el personal que presta servicios en regiones situadas al sur del país, en lugares apartados de la pre-cordillera o en zonas tórridas, donde se acentúan los problemas del mayor costo de la vivienda, alimentación o calefacción;

Que es equitativa la asignación de tales suplementos teniendo en cuenta que los mismos ya rigen para las zonas al sur del paralelo 42ª;

Que, corresponde asimismo reconsiderar estas asignaciones y fijar los percentajes que se deben liquidar a todas las regiones del país que ofrezcan similares características;

Que al acordar esta retribución se han tenido presentes las normas que en materia de contención de gastos establece el Decreto-Ley Nº 23.573 del 31 de diciembre de 1956;

Que asimismo es de tener en cuenta que otros ministerios han adoptado regímenes especiales para el personal destacado en las zonas de que se trata;

Por todo ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- El personal de la Dirección Nacional de Aduanas que preste servicios en el lugar que en cada caso se indica, gozará de un suplemento mensual de acuerdo con la siguiente escala:

a) 10% al que se desempeña en las Aduanas de Posadas, Formosa e Ibicuy; en la Receptoria de Puerto Bermejo; en los Resguardos de Santa Ana y Candelaria, de Posadas; Paso de la Patria, Itatí, Italbate e Ituzaingó, de Corrientes; y San Antonio Oeste, de Madryn; y Destacamento El Ceibo, de Monte Caseros.

b) 20% el que se desempeña en las Aduanas de Santo Tomé e Iguazú, en las Receptorias de San Javier, Alvear, San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Las Lajas, Chos Malal, Malarüe, Jáchal, Vinchina, Tinogasta, y Cachi, y en los Resguardos de Eldorado, de Posadas; Herradura, de Formosa; Rodeo, Iglesia, Calingasta, Barreal y Las Flores, de San Juan; Las Palmas, de Puerto Bermejo, y San Isidro e Itacaruré, de San Javier.

c) 30% al que se desempeña en las Aduanas de Pocitos, Paso de los Libres, Madryn, y Comodoro Rivadavia; en las Receptorias de Puerto Deseado, San Julián, Cieneguillas y Yaví; en los Resguardos de Las Cuevas, de Mendoza; El Soberbio, Alba Posse y Panambí, de San Javier; en los Destacamentos de El Portillo, Cruz de Piedra, de Mendoza; Hua-Hum y El Tromen, de San Martín de los Andes; Pino Hachado y El Arco, de Las Lajas; Las Lagunas y Pichachen, de Chos Malal; La Poma y Los Molinos, de Cachi.

d) 40% al que se desempeña en las Aduanas de La Quiaca, Clorinda, Rio Gallegos y El Turbio; en las Receptorias de Santa Victoria, Santa Cruz, Río Grande, Ushuaía, Perito Moreno, Río Mayo y Esquel; en los Resguardos de San Antonio de los Cobres y Socompa de Salta; en los Destacamentos de Bernardo de Irigoyen y San Antonio,de Posadas.

ARTICULO 2º.- Las erogaciones emergentes de la aplicación del presente decreto serán solventadas con partidas propias del presupuesto de la Dirección Nacional de Aduanas y liquidadas sobre las remuneraciones que se perciban en concepto de sueldos básico y adicionales por antigüedad y funcional si los hubiere.

ARTICULO 3º.- Las disposiciones del presente decreto comenzarán a regir a partir del 1º del mes siguiente al de la fecha del mismo.

ARTICULO 4º.- Derógase lo dispuesto en el Decreto nº 29.081 del 18 de noviembre de 1949.

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda de la Nación a sus efectos.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nº 14.590.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 386.-

LEGALIZACION DE DOCUMENTOS

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1957.-

CONSIDERANDO:

Que la Ley 44 de fecha 12 de agosto de 1863, y su modificatoria, Ley 5.133 de fecha 12 de setiembre de 1907, no llenan en la actualidad las necesidades para las que fueron sancionadas;

Que es imprescindible, por tanto, sustituir el rígido sistema adoptado por dichas leyes, por otro que permita agilitar el trámite de las legalizaciones;

Que es necesario asimismo, reconocer a las provincias el derecho de dictar su propia legislación en la materia;

Que todo ello reportará beneficios, tanto en el orden nacional como en el provincial;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO
DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1º.- Serán tenidos por auténticos los actos y decretos de los Poderes Ejecutivos de cada provincia y los actos y leyes de sus respectivas Legislaturas, siempre que se hayan publicado o comunicado en la forma que cada una de dichas provincias hubiere adoptado para su promulgación y ejecución.

ARTICULO 2º.- Serán igualmente tenidos por auténticos los actos, procedimientos judiciales, sentencias y testimonios y demás documentos emanados de organismos provinciales, que se

hallaren legalizados conforme a las Reglamentaciones que al efecto dicte cada provincia.

ARTICULO 3º.- La legalización de los instrumentos públicos, certificados, copias y demás documentos emanados de organismos u oficinas de la Nación, como así los autos, procedimientos judiciales, sentencias, testimonios y documentos de los Tribunales de Justicia de la Nación, estará a cargo de las autoridades que determine la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que reglamentará el procedimiento que debe observarse en la materia.

Los documentos legalizados de acuerdo al presente artículo, serán tenidos por auténticos en todo el territorio de la Nación.

ARTICULO 4º.- Los actos públicos, procedimientos, sentencias y demás documentos de que se habla en los artículos anteriores, autenticados en la forma que en ellos se determina, merecerán plena fe y crédito y surtirán tales efectos ante todos los tribunales y autoridades dentro del territorio de la Nación, como por uso y ley corresponde ante los tribunales y autoridades de la provincia de donde procedan.

ARTICULO 5º.- Lo dispuesto en el presente decreto-ley no obsta a la aplicación del artículo 44, inciso b) de la Ley número 12.990, ni a la del artículo 57 del Decreto número 26.655/51, relativos a la legalización de los documentos notariales por el Colegio de Escribanos.

ARTICULO 6º.- Derógase las Leyes 44 y 5.133 y cualquier otra disposición que se oponga al presente decreto-ley.

ARTICULO 7º.- El presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Educación y Justicia, Guerra, Marina y Aeronáutica.

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Isaac F.Rojas - Acdel E.Salas
Víctor J. Majó - Teodoro Hartung - Jorge

DECRETO-LEY Nº 14.983.-H. Landaburu.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 387.-

LICENCIAS

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1957.-

Visto la gestión interpuesta por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública en el Expediente Nº 64.727/53 y agregados números 37.688/54 y 65.728/56, propiciando el reconocimiento de los servicios prestados en el orden nacional, provincial o municipal, con carácter "ad honorem" por personal de la Administración Nacional, a los efectos de que los mismos le sean computados a estos agentes para la licencia anual por descanso, vacaciones;

CONSIDERANDO:

Que tal petición se fundamenta, teniéndose en cuenta que la licencia por el motivo señalado, tiene el sano propósito de asegurar al agente del Estado, un descanso anual reparador del esfuerzo desarrollado;

Que con respecto al reconocimiento de los servicios desempeñados en forma honoraria, reiteradamente se ha tratado la situación del personal en estas condiciones y no se encontró impedimento legal para rechazar tales servicios, si en cada caso se logra reunir la fehaciente documentación, expedida por autoridad competente que acredite la real y efectiva prestación de éstos;

Que el hecho que sirve de antecedente para el usufructo de licencia, vale decir, la prestación real y efectiva de los servicios, nó varía siendo los mismos de carácter rentados u honorarios;

Que el artículo 7ª del Decreto nº 12.720/53 modificado por el Decreto nº 13.800/56 al establecer las bases para el cómputo de los servicios, a los fines de determinar la antigüedad del empleado, no hace distinción y en el orden jurídico vigen-

te y dentro del juego de las normas que apunta valoraciones análogas los servicios efectuados honorariamente hacen acreedor al agente de los derechos comunes a los funcionarios y empleados rentados, tal como acaece en el régimen de previsión social (Ley número 14.069, artículo 9º);

Que razones de equidad y justicia, aconsejan adoptar una medida que concrete, en el aspecto en cuestión, un tratamiento uniforme para todos los agentes al servicio de la Administración Pública Nacional;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Establécese que los servicios prestados en el orden nacional, provincial o municipal, con carácter "ad honorem" por personal de la Administración Pública Nacional y que tengan origen en la autorización emanada de autoridad competente, serán reconocidos a los fines del cómputo para la otorgación de la licencia anual por descanso, vacaciones.

ARTICULO 2º.- Es indispensable que todo lapso de antigüedad de servicios desempeñados honorariamente, esté reconocido en forma fehaciente por el Ministerio Nacional o Provincial, Municipalidades o Reparticiones pertinentes. Presentada la certificación a quien corresponda antes del día 30 de noviembre, tendrá validez para el año en que se hace tal presentación y para el subsiguiente, cuando la misma se efectúe con posterioridad a esa fecha.

ARTICULO 3º.- Los certificados de tareas prestadas con carácter "ad honorem" en el orden nacional, provincial o municipal, deben ser expedidos por organismos competentes (Direcciones Generales, Direcciones o Jefaturas de Personal, según la organización de éstos), suscriptos por sus titulares o autoridades superiores de quienes dependan, constando las fechas de alta y baja de los distintos períodos, el cómputo

real de las prestaciones con deducción de los lapsos acreditados y el decreto, resolución o disposición autorizante.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Asistencia Social y Salud Pública, de Interior y de Hacienda.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Francisco Martínez - Carlos R. S. Alconada Aramburú - Adalbert Krieger Vasena.-

DECRETO Nº 15.142.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 388.-

INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1957.-

Visto el Expediente número 29.160 T 1957, en el que el señor Gobernador del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, solicita la excepción pertinente al Decreto número 1.134, dictado con fecha 23 de marzo de 1932, sobre incompatibilidades, a fin de poder designar sin esas restricciones al personal que ha de colaborar en su gestión administrativa, y

CONSIDERANDO:

Que la citada disposición se opone a la acumulación de más de un empleo por una misma persona, a ejercer en el orden nacional, provincial o municipal, con la salvedad de los casos especificados en la misma;

Que las autoridades locales, se hallan abocadas al grave problema que significa la designación del personal administrativo, técnico, profesional, de servicio y obrero y maestranza que ha de cooperar en la función pública, como consecuencia de la imposibilidad de lograr el concurso de personas interesadas en ocupar esos cargos, que no desean trasladarse al mencionado Territorio, porque desempeñan otro empleo público que le impide la acumulación emergente;

Que debe tenerse en cuenta, asimismo, la ubicación geográfica de ese Territorio, situado en las regiones más australes del país, como también su escasa densidad de población, todo lo cual aumenta las dificultades que se presentan para concretar esas designaciones;

Que, por lo expuesto, la gestión de gobierno no puede materializarse en la medida deseada, fundamento que justifica la excepción solicitada;

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Declárase excluído del régimen vigente sobre incompatibilidades, al personal administrativo, técnico, profesional, de servicio y obrero y maestranza de la administración pública nacional, provincial o municipal, que deba ser designado para ocupar cargos o desempeñar funciones en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Carlos R.S. Alconada Aramburú.-

DECRETO Nº 14.803.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 389.-

EMPRESAS DEL ESTADO - CONTRATACIONES

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1957.-

Visto la necesidad de adoptar medidas conducentes a una mayor utilización de materia prima de producción nacional, y

CONSIDERANDO:

Que entre tales materias se encuentran las provenientes de las explotaciones forestales y de combustibles sólidos minerales, que por diversas causas, no se aplican para satisfacer las necesidades de las Empresas del Estado y/o entidades autárquicas en la medida que lo permitiría la producción de las industrias existentes;

Que esta circunstancia, sumada a la ya precaria situación del mercado de los productos forestales, conduce a precitar la paralización de esa importante rama de la industria nacional de gran capacidad productiva, con los quebrantos consiguientes de las empresas privadas que la desarrollan y del numeroso personal obrero que las mismas emplean, siendo de señalar la gravedad que tales hechos revestirían dado que, por lo general, dichas industrias constituyen casi la única posibilidad inmediata de inversión productiva y por lo tanto la única fuente de trabajo de extensas zonas de nuestro territorio;

Que la actividad comercial e industrial del Estado tiene, entre otras, su razón de ser en la posibilidad que ella le ofrece de conjurar situaciones como las que se prevé, mediante la absorción de toda o buena parte de la producción de industrias nacionales, sometidas por circunstancias eventuales, a la presión de distintos factores que inciden negativamente,

no ya sobre su desarrollo, sino incluso sobre su misma subsistencia;

Que, en este orden de ideas se impone como solución transitoria de la inminente crisis de la industria forestal argentina, que las empresas del Estado y/o entidades autárquicas, en especial los ferrocarriles, consuman los productos de aquéllas en la medida de sus reales necesidades;

Que para lograr ese fin es necesario proveer a tales empresas de la norma administrativa que les permita adquirir ágilmente los productos referidos;

Por ello y atento a lo propuesto por el señor Ministro de Transportes,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1ª.- Autorízase a las Empresas del Estado y/o entidades autárquicas, en especial a la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino, para que como régimen de excepción a las normas legales o estatutarias que rigen para sus compras y contrataciones, adquieran productos nacionales forestales (leña, durmientes, maderas, briquetas de carbón vegetal, etc.) y carbón mineral y asfaltita, mediante el sistema de compra directa y/o fijación de precios básicos generales, que contemplen los costos de producción y la situación de la industria del ramo.

ARTICULO 2ª.- El Ministerio de Comercio e Industria fijará el término de duración de este régimen, contemplando la situación de las industrias aludidas.

ARTICULO 3ª.- El presente decreto-ley será refrendado por el señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Transportes, de Hacienda, de Comercio e Industria, de Guerra, de Mari-

na y de Aeronáutica.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Comercio e Industria a sus efectos.-

ARAMBURU - Isaac F. Rojas - Sadi E. Bonnet - Adalbert Krieger Vasena - Julio C. Cueto Rúa - Víctor J. Majó - Teodoro Hartung Jorge Landaburu.-

DECRETO-LEY Nº 15.618.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 390.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - RESIDUOS PASIVOS - CONTADORES FISCALES

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1957.-

Visto la necesidad de dictar normas para las representaciones de este Tribunal, en lo que respecta a la intervención que les compete en los estados de residuos pasivos, confeccionados por los servicios administrativos, en función de lo dispuesto por el artículo 36 de la ley de contabilidad y su reglamentación, y

CONSIDERANDO:

Que tales estados deben contener un detalle por acreedor, así como un resumen por imputación presupuestaria;

Que el detalle por acreedor tiene por objeto que los residuos pasivos se refieran, concreta y exclusivamente, a los compromisos no librados, evitando la inclusión global de gastos que no hayan llegado a esta etapa;

Que tales nóminas pueden ser, en muchos casos, extensas o referirse a operaciones practicadas directamente por responsables dependientes de los respectivos servicios administrativos centrales;

Que, en tales supuestos, la verificación "a priori" por parte de los representantes de este Tribunal se tornaría materialmente imposible o demoraría el trámite ulterior de dichos residuos pasivos, máxime teniendo en cuenta los plazos perentorios fijados para tal tramitación;

Que el control "a priori", puramente contable puede llevarse a cabo verificando e interviniendo el resumen por imputación presupuestaria, único estado necesario a los fines de

la registración pertinente por parte de la Contaduría General de la Nación, dejando para la oportunidad de la emisión de los respectivos libramientos o del examen de la rendición de cuentas, la verificación de las nóminas de acreedores con la documentación correspondiente;

Que en el mismo caso, se hallan todos aquellos organismos ante los cuales este Tribunal no mantiene delegaciones permanentes;

Que, no obstante ello, si las circunstancias lo permiten la intervención preventiva debe extenderse a la verificación de las citadas nóminas de acreedores,

Por todo ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1ª.- Los representantes de este Tribunal ajustarán su intervención en los estados de residuos pasivos a las normas y procedimientos señalados en los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO 2ª.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli
José M. Fernández Fariña - Wilfredo
Dedeu - Antonio M. Pérez Arango -
Juan Carlos Pastene -Secretario-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 391.-

PAGOS - DEUDAS - FACILIDADES - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1957.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que es necesario ordenar y adecuar a las actuales modalidades de la Administración Nacional, las disposiciones en virtud de las cuales el Poder Ejecutivo acuerda facilidades de pago para la amortización de deudas con el fisco;

Que las citadas deudas, responden a distintas fuentes de origen: déficits, multas, reintegros, etc., algunas de las cuales están regladas por leyes especiales o sus reglamentaciones respectivas, por lo que debe determinarse un procedimiento para los casos no comprendidos en disposiciones en vigencia hasta la fecha;

Que las normas contenidas en el Acuerdo de Gobierno del 12 de junio de 1928 y posteriores modificaciones, decretos números 7.271/49 y 12.433/53, si bien obtuvieron la finalidad perseguida, de centralizar en un solo organismo el trámite y resolución de los asuntos de que se trata, traen como consecuencia una dilación que perjudica la agilidad en el desarrollo administrativo;

Que el artículo 22ª de la Ley de Contabilidad y su reglamentación, al fijar el procedimiento a seguir en los casos de deudas con el Estado, establece una serie de normas y requisitos, cumplidas las cuales se obtienen al mismo tiempo elementos de juicio suficientes para resolver acerca de la forma de pago, de manera que si se los faculta para ello, los organismos de la Administración se encuentran en condiciones

de resolver por sí, sin perjuicio de las limitaciones necesarias y contralor a cargo del Ministerio de Hacienda, previendo la posible incidencia de tales actos en el Tesoro Nacional;

Que la centralización contable y las funciones de contralor interno asignadas por la Ley de Contabilidad a la Contaduría General de la Nación, permiten la permanente fiscalización y la obtención de las informaciones necesarias para el cumplimiento del cometido específico del Ministerio de Hacienda en lo que atañe a su competencia, satisfaciendo ampliamente y con mayores ventajas los propósitos que dieron origen al acuerdo del 12 de junio de 1928,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Facúltase a los Jefes de los Servicios Administrativos de los Ministerios y entidades descentralizadas a resolver, ad-referendum del Ministerio de Hacienda, toda solicitud de pago para cancelar con facilidades deudas contraídas con el Fisco, en su jurisdicción, no regladas por leyes especiales, con arreglo a lo dispuesto por el presente decreto.

ARTICULO 2º.- El otorgamiento de las facilidades, será acordado teniendo en cuenta las condiciones de solvencia del deudor que deberá demostrar fehacientemente en cada caso su imposibilidad de amortizar inmediatamente el total de la deuda.

ARTICULO 3º.- Cuando el solicitante sea un estipendiario, el importe de las cuotas no podrá ser inferior al que resulte de aplicar la escala establecida en el artículo 2º de la Ley nº 9.511. En los demás casos, la determinación de dicho importe se hará en función de los bienes e rentas del deudor y demás circunstancias atendibles a juicio del organismo de aplicación.

ARTICULO 4º.- Cuando por el origen de la deuda, resulta evidente mala fé o negligencia imputable al deudor, se le exigirá un interés anual equivalente al aplicado en el momento por el Banco de la Nación en sus operaciones de crédito documentadas.

ARTICULO 5º.- Los respectivos servicios administrativos, llevarán un registro de las deudas que se satisfagan con facilidades, en la forma dispuesta en el punto 5), inciso b), de la reglamentación del artículo 22º de la Ley de Contabilidad, comunicando mensualmente a la Contaduría General de la Nación el movimiento operado.

ARTICULO 6º.- Una vez acordado el pago en cuotas, las mismas deberán hacerse efectivas mensualmente en la tesorería que corresponda, del 1º al 10 de cada mes. El incumplimiento de dos cuotas consecutivas o alternadas sin causa debidamente justificada, anulará automáticamente la facilidad acordada y hará exigible de inmediato el saldo pendiente, aplicándose en todas sus partes y tramitación el artículo 22º de la Ley de Contabilidad.

ARTICULO 7º.- La documentación y elementos de juicio relativos a cada caso, será enviado, a los fines de su contralor y registro a la Contaduría General de la Nación, que propondrá al Ministerio de Hacienda la ratificación o anulación del procedimiento, reintegrando luego lo actuado al organismo de origen.

ARTICULO 8º.- Si, atento lo dispuesto en el artículo anterior, no resultare ratificado el otorgamiento de facilidades, el deudor deberá cancelar el saldo pendiente dentro de un plazo improrrogable de treinta días hábiles a contar desde su notificación.

ARTICULO 9º.- En los casos en que el Tribunal de Cuentas de la Nación no intervenga por sí, en uso de sus facultades de contralor externo, el Ministerio de Hacienda por intermedio de la Contaduría General de la Nación, podrá solicitar su audiencia o dictámen, de conformidad con lo previsto en el artículo 84º, apartado p), de la Ley de Contabilidad.

ARTICULO 10ª.- Los casos de denegatoria o falta de ratificación de facilidades acordadas, se regirán, una vez resuelta la circunstancia, por el artículo 22ª de la Ley de Contabilidad y su reglamentación.

ARTICULO 11ª.- Cancelada totalmente la deuda, los servicios administrativos dejarán la debida constancia en las actuaciones respectivas y lo comunicarán a la Contaduría General de la Nación.

ARTICULO 12ª.- Lo dispuesto en el presente decreto no rige para la condonación de deudas, en cuyo caso, la resolución deberá ser adoptada dentro de sus atribuciones por el Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda.

ARTICULO 13ª.- Facúltase al Ministerio de Hacienda para dictar las normas de aplicación, interpretación o aclaratorias que fueren necesarias.

ARTICULO 14ª.- Deróganse los decretos números 7.271/49 y 12.433/53.

ARTICULO 15ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda, a sus efectos.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena

DECRETO Nª 16.168.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 392.-

BOLETIN OFICIAL

Buenos Aires, 14 de enero de 1947.-

Visto lo dispuesto en el Artículo 2º de la Ley Nº 697, del 15 de octubre de 1874; y

CONSIDERANDO:

Que el Boletín Oficial de la República Argentina es una publicación que debe ser modernizada, para que llene los fines específicos que informaron su creación y para que los actos oficiales del Poder Ejecutivo Nacional encuentren la adecuada publicidad, tal como corresponde a nuestro sistema democrático de gobierno;

Que, el Registro Nacional creado por S. D. de enero 28 de 1825, mayo 16 de 1860 y abril 12 de 1862, fué editado por licitaciones adjudicadas a particulares hasta el segundo tomo del año 1883 y en adelante hasta 1906 por la Penitenciaría Nacional;

Que a partir de esa fecha su publicación experimentó notables atrasos hasta el extremo que los tomos correspondientes al año 1911 ven la luz recién en el año 1938, desde cuya fecha ha cesado totalmente la publicación;

Que, no existe en nuestro país un organismo encargado oficialmente de recopilar y publicar la jurisprudencia administrativa, y que los "Informes de los Consejeros Legales del Poder Ejecutivo" cuyos diez tomos publicados abarcan el período que va desde 1851 a 1893, no era en realidad una publicación jurisprudencial pues en ellos se insertaban resúmenes de los expedientes dictaminados por el Procurador General de la Nación, del Tesoro y Auditor General de Guerra y Marina;

Que la protocolización, archivo y custodia de los documentos originales que emite el Poder Ejecutivo Nacional, no se realiza con las formalidades que corresponde a actos del tal magnitud y trascendencia, encontrándose esta documentación, en la actualidad, dispersa, agregada a expedientes o archivada en distintas oficinas de la Administración Nacional;

Que, el Estado dispone de los medios necesarios para normalizar las publicaciones a que se refieren los considerandos que anteceden, así como también para asegurar la clasificación, archivo y custodia de los documentos originales que emite el Gobierno Nacional; y

Atento a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 11.672, edición 1943;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- A partir del 1º de enero de 1947, el actual Registro Nacional dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y el Boletín Oficial de la República Argentina se refundirán en una sola repartición que se denominará Dirección General del Registro Nacional, con dependencia directa de la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, la cual tomará las providencias que correspondan para que a partir de la fecha fijada y en un plazo no mayor de treinta días, quede totalmente constituída y funcionando la Dirección General que se crea por este artículo.

ARTICULO 2º.- Incorpóranse a la Dirección General del Registro Nacional, el personal, muebles, útiles y archivo del actual Registro Nacional, que se refunde por el artículo 1º del presente decreto, a cuyo efecto se transferirán también las partidas de sueldos y gastos correspondientes.

ARTICULO 3º.- La Dirección General del Registro Nacional, tendrá por misión:

a) Registrar las leyes nacionales de carácter público y darlas a publicidad, editando periódicamente el Registro Nacional;

b) Registrar y publicar en el Boletín Oficial, diariamente, los actos del Poder Ejecutivo Nacional que tengan carácter público;

c) La publicación del Registro Nacional no publicado desde el año 1912 inclusive, hasta ponerlo al día;

d) Confección y publicación del repertorio legislativo a partir del año 1810, hasta ponerlo y llevarlo al día;

e) Clasificar y publicar aparte de los volúmenes del Registro Nacional, toda la jurisprudencia administrativa que sea conveniente para mayor ilustración del público y que sirva como elemento de consulta a los funcionarios de la Administración Nacional.

ARTICULO 4º.- Los documentos originales una vez firmados por el Poder Ejecutivo Nacional, quedarán para su archivo y custodia en la División Despacho de la Presidencia de la Nación, dependencia ésta que expedirá copias fotográficas de los mismos con destino a los Ministerios y Secretarías de donde procedan y para la Dirección General del Registro Nacional. La misma dependencia quedará encargada de expedir las copias autenticadas que sean requeridas oficialmente o por autoridad judicial.
ARTICULO 5º.- La Dirección General del Registro Nacional, editará todos los días hábiles el Boletín Oficial de la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires, publicando en él el texto oficial de las leyes que hayan sido promulgadas por el P.E. y los decretos, resoluciones, informes y demás datos que las Instituciones Oficiales le envíen con la finalidad de hacer conocer el estado y movimiento de la Administración Nacional y lo ordenado por las leyes y decretos especiales.
ARTICULO 6º.- Los documentos que se insertan en el Boletín

Oficial de la República Argentina, serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación, y, por comunicados y suficientemente circulado, dentro de todo el Territorio Nacional.

ARTICULO 7º.- La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación (Dirección General del Registro Nacional) queda autorizada para remitir "sin cargo" el Boletín Oficial de la República Argentina, a las reparticiones de los tres poderes del Estado, a los Gobiernos de Provincia, a las representaciones diplomáticas y consulares de la República en el extranjero; a las embajadas, legaciones y consulados acreditados en el país; a los periódicos nacionales y extranjeros, por canje, y resolver sobre los reclamos que le formulen los suscriptores particulares.

ARTICULO 8º.- Los avisos que se publiquen en el Boletín Oficial de la República Argentina, en virtud de lo ordenado por las leyes y/o decretos especiales deberán ser pagados previamente a su publicación, salvo lo dispuesto en el artículo 9º y las suscripciones particulares se cobrarán por adelantado.

ARTICULO 9º.- La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación (Dirección General del Registro Nacional) queda autorizada para abrir cuenta corriente a todas las dependencias de la Administración Nacional, incluso las autárquicas, para la publicación de avisos que deban insertarse en el Boletín Oficial de la República Argentina, por cuenta de ellas, entendiéndose que en ningún caso dependerá su pago de las resultas de algún juicio.

Los edictos ordenados en los juicios en que la Nación sea parte actora, serán debitados en la cuenta del Ministerio por intermedio del cual el juicio se ordenó.

ARTICULO 10º.- El importe de la publicación de los edictos ordenados por jueces federales de la Capital Federal y Territorios Nacionales, en juicios criminales iniciados o seguidos por el Ministerio Público Fiscal, serán debitados en cuenta especial al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Cuando hubiera condenación por costas contra particulares, los importes de los edictos serán reintegrados al Ministerio

ARTICULO 11º.- Se insertarán en el Registro Nacional los documentos a que hace referencia el artículo 5º del presente decreto, con excepción de las publicaciones ordenadas por las leyes y decretos especiales, salvo que fueren de interés general o establezcan normas de administración o precedentes.

Podrán insertarse también los documentos oficiales que faciliten la mayor inteligencia de aquéllos.

El Registro Nacional se editará periódicamente, en tomos manuables, con índices analíticos y alfabéticos, de correlación de disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias y cronológicas sin perjuicio de otros que faciliten la búsqueda de antecedentes.

La jurisprudencia administrativa se editará en tomo aparte, con las mismas características que el anterior, y en ellos se incluirán también los dictámenes de los Asesores Legales del Gobierno que sienten doctrina administrativa.

Son Asesores Legales del Gobierno: el Procurador Gemeral de la Nación; el Procurador del Tesoro; el Auditor General de Guerra y Marina y el Presidente de la Contaduría General de la Nación.

ARTICULO 12º.- La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación (Dirección General del Registro Nacional) queda autorizada para destinar a la venta las publicaciones a su cargo, así como a imprimir con igual fin los folletos conteniendo leyes, decretos y todo otro documento oficial que haya publicado de acuerdo a la tarifa que con precios especiales para revendedores, someterá para la aprobación por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 13º.- La publicación de los actos del Poder Ejecutivo Nacional que deben ser insertos en el Boletín Oficial de la República Argentina, se realizará inmediatamente que sean expedidos, pero cuando se crea conveniente a los intereses del Estado, emitir temporalmente la publicación de algunos de naturaleza especial, el Ministerio a que pertenezca el documento

lo dispondrá así, comunicándolo directamente a la Dirección General del Registro Nacional, hasta que desaparezcan las causas que hubiesen aconsejado la reserva.

ARTICULO 14º.- El Registro de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Industría y Comercio, remitirá directamente a la Dirección General del Registro Nacional, para su publicación diaria en el Boletín Oficial de la República Argentina una relación sucinta de las Patentes de Invención y Marcas de Fábricas, Comercio y Agricultura, que hayan sido concedidas, denegadas, desistidas, transferidas y abandonadas.

ARTICULO 15º.- Deróganse los artículos 5º del S.D. Nº 31.636, de noviembre 23 de 1933 y 42 del S.D. Nº 41.233 de mayo 3 de 1934.

ARTICULO 16º.- La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, elevará al Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio del Interior, la reglamentación del presente decreto, antes del día 30 de enero de 1947.

ARTICULO 17º.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.-

ARTICULO 18º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº 659.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 393.-

BOLETIN OFICIAL

Buenos Aires, 25 de enero de 1957.-

Visto los decretos números 659/47 y 10.001/48, por los cuales se crea y modifica el funcionamiento de la ex-Dirección General del Registro Nacional; y

CONSIDERANDO:

Que por el decreto nº 7.120/56 se crea la Dirección General del Boletín Oficial, en la que se han refundido las funciones relacionadas con el registro de las leyes nacionales y de los actos del Poder Ejecutivo que tengan carácter público;

Que también es necesario determinar el organismo que tendrá bajo su custodia los decretos originales de carácter "Secreto",

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 4º del decreto Nº 659 de fecha 14 de enero de 1947, en la siguiente forma:

"Artículo 4º.- Los decretos originales de carácter "Público una vez firmados por el Poder Ejecutivo, quedarán para su archivo y custodia en la Secretaría de Decretos de la Presidencia de la Nación, dependencia ésta que expedirá copias fotográficas, debidamente autenticadas, con destino al Ministerio o ministerios que corresponda y a la "Dirección General del Boletín Oficial".

Los decretos originales, de carácter "Secreto", una vez firmados por el Poder Ejecutivo, quedarán bajo la directa cus

todia del Secretario de Decretos de la Presidencia de la Nación, expidiéndose copia autenticada al Ministerio o ministerios que correspondan.

Dentro de los tres primeros meses de cada año, la Secretaría de Decretos de la Presidencia de la Nación, hará entrega al Archivo General de la Nación de los decretos originales de carácter "Público", que obran en su poder, y que correspondan al año anterior.

ARTICULO 2º.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por todos los Ministros Secretarios de Estado en Acuerdo General de Ministros.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - L. Landaburu - A.Osorio Arana - T. Hartung - J.C. Krause - E. A. Blanco - F. Martínez - C. Adrogué - A. Mercier - P. Mendiondo - L.A. Podestá Costa - Sadi E. Bonnet - R. Martínez - M. Igartúa.-

DECRETO Nº 883.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 394.-

CONVENIOS DE TRABAJO

Buenos Aires, 26 de abril de 1954.-

Visto la promulgación de la Ley 14.250 relativa a las convenciones colectivas de trabajo, y

CONSIDERANDO:

Que dicho ordenamiento legal, atendiendo a la naturaleza de la institución que regula, contiene disposiciones cuya integración se hace necesaria a los efectos de su adecuada aplicación;

Por ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 inciso 2 de la Constitución Nacional,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

DE LA HOMOLOGACION

ARTICULO 1º.- (Art. 3º - Ley 14.250) "Las convenciones colectivas deberán ser homologadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión".

A los efectos de la homologación de una convención será necesario:

a) Que conjuntamente con la solicitud se presente el texto original del acuerdo, indicándose nombre y domicilio de los firmantes del mismo;

b) Que los firmantes del acuerdo comparezcan a ratificarse de la firma y contenido del mismo. La incomparecencia injustificada se sancionará en la forma prevista por el Decreto Nº 21.877 (Ley 12.921);

c) Que la misma contenga los requisitos formales a que se refiere la ley;

d) Que se acredite la personería de las partes intervinientes;

e) Que atendiendo a la personería de las partes, la actividad a que se refiere la convención puede ser legitimamente representada por las mismas, como así también que la zona de aplicación de la convención no exceda de aquella donde ejerce representación las partes;

f) Que no contenga cláusulas violatarias de disposiciones legales dictadas en protección del interés general, como así tampoco que la vigencia de la misma, afecte la situación económica de determinados sectores de la actividad o bien signifique un detrimento en las condiciones de vida de la población consumidora.

ARTICULO 2º.- El otorgamiento de la homologación o la negativa de la misma se efectuará por medio de una resolución motivada, suscripta por el Ministro de Trabajo y Previsión.

Antes de dictarse resolución denegando la homologación se hará saber a las partes cual es la causa que determinará la negativa.

La denegación sólo procederá en el supuesto de que las partes no salven el impedimento dentro del plazo que se señale al efecto.

ARTICULO 3º.- La homologación de las convenciones suscriptas por un empleador producirá como efecto el de ser obligatorio para todos los trabajadores ocupados por el mismo.

ARTICULO 4º.- (Art. 3º - Ley 14.250) " Las convenciones que se celebren ante el Ministerio de Trabajo y Previsión se considerarán, por ese solo hecho, homologadas".

Para tener por celebrada una convención colectiva ante el Ministerio de Trabajo y Previsión, será necesario que las negociaciones se hayan realizado de conformidad con las disposi

ciones del reglamento de dicho Ministerio que apruebe el Poder Ejecutivo y ante el funcionario que determine el citado reglamento.

DEL REGISTRO

ARTICULO 5º.- (Art. 4º - Ley 14.250) "El Ministerio de Trabajo y Previsión llevará un registro de las convenciones colectivas, a cuyo efecto el instrumento de las mismas quedará depositado en el mencionado Departamento de Estado".

En el registro que se llevará, en el Ministerio de Trabajo y Previsión, en la Capital Federal, se inscribirán:

a) Las convenciones colectivas homologadas y las resoluciones que las homologuen;

b) Las convenciones colectivas celebradas ante el Ministerio;

c) Las resoluciones por las que se disponga extender la obligatoriedad de una convención a zonas no comprendidas en el ámbito territorial de la misma;

d) Las resoluciones que adopten las comisiones paritarias y que por su naturaleza deban producir iguales efectos que las convenciones colectivas.

ARTICULO 6º.- Los instrumentos previstos en los incisos a), b) y d) del artículo anterior, que se refieran a zonas donde tenga competencia territorial una Delegación Regional del Ministerio indicado, también se inscribirán en los registros que deberán llevarse en cada una de las citadas Delegaciones Regionales.

ARTICULO 7º.- El registro se llevará por duplicado, para cada actividad o rama de actividad reguladas por convenciones colectivas de trabajo, debiéndose inscribir éstas por orden cronológico. El funcionario a cuyo cargo esté el mismo deberá firmar cada hoja.

DE LA PUBLICACION POR LAS PARTES

ARTICULO 8ª.- (Art. 4ª - Ley 14.250) "El texto de las convenciones colectivas será publicado por el Ministerio de Trabajo y Previsión dentro de los diez días de suscriptas u homologadas, según los casos. Vencido este término, la publicación efectuada por cualquiera de las partes en la forma que fije la reglamentación, surtirá los mismos efectos legales que la publicación oficial".

El texto de la convención que se publique por las partes será autenticado por el Ministerio de Trabajo y Previsión y contendrá el número de inscripción en el Registro a que se refiere el Art. 5ª del presente decreto.

DE LA EXTENSION A ZONAS NO PREVISTAS EN LA CONVENCION

ARTICULO 9ª.- (Art. 10 - Ley 14.250) "El Ministerio de Trabajo y Previsión a pedido de cualquiera de las partes, podrá extender la obligatoriedad de una convención colectiva a zonas no comprendidas en el ámbito de la misma en la forma y condiciones que establezca la reglamentación".

La extensión de la convención a zonas no comprendidas por la misma se hará por resolución del Ministerio de Trabajo y Previsión, siempre que se reunan las siguientes condiciones:

a) Que en la zona en la cual se aplicará la convención no exista asociación profesional representativa de los trabajadores con personería gremial;

b) Que de las investigaciones que se realicen resulte que la convención es adecuada para regular las relaciones de trabajo en la zona. Al efectuar esas investigaciones se tendrá en cuenta:

1) Las condiciones técnicas y económicas en que se desenvuelve la actividad y, en particular, tratando-

se de actividades comerciales o industriales si los productos son colocados en mercados donde concurren artículos producidos en zonas en las que ya se aplica la convención;

2) Particularidades de la zona y modalidades de la prestación de los servicios.

ARTICULO 10ª.- La extensión podrá hacerse excluyendo de la convención aquellas cláusulas que sin modificar su economía, se consideren inadecuadas para la zona donde deberá aplicarse.

DE LA PERSONERIA DE LAS ASOCIACIONES DE EMPLEADORES

ARTICULO 11ª.- (Art. 9ª - Ley 14.250) "La convención colectiva celebrada por una asociación profesional de empleadores representativa de la actividad, será obligatoria para todos los empleadores de la misma comprendidos en la zona a que se refiere la convención, revistan o no el carácter de afiliados".

Se tendrá por asociación de empleadores representativa de la actividad a aquella que goce de personalidad gremial de conformidad con lo dispuesto por la ley nª 14.295.-

ARTICULO 12ª.- A falta de asociación y ante un petitorio que persiga concertar una convención, el Ministerio de Trabajo y Previsión invitará a los empleadores de la actividad que actúen en la zona donde regirá la convención a que comparezcan a asumir la representación de la actividad. Esta invitación se efectuará mediante edictos, los que se publicarán durante cinco días en dos diarios de la localidad.

Si los presentantes fueran más de cinco el Ministerio podrá disponer que la representación sea atribuída por los mismos a una cantidad de personas que no excedan de ese número.

sión, dentro del plazo que fije la reglamentación. En el caso de haber sido adoptadas por unanimidad, solamente se admitirá el recurso, fundado en incompetencia o exceso de poder".

La comisión al dictar resolución indicará en la misma si ella es o no adoptada por unanimidad.

Las resoluciones dictadas en virtud de lo previsto por el inciso b) del artículo 15ª de la Ley 14.250 sólo serán apelables, fundándose en que la comisión ha actuado fuera de los límites de su competencia o ha incurrido en exceso de poder. El recurso será procedente aún cuando la resolución se hubiera adoptado por unanimidad.

ARTICULO 17ª.- El recurso de apelación deberá interponerse en forma fundada indicándose cuales son los elementos probatorios en que se basa. El término para interponerlo será de cinco días hábiles y correrá a partir de la notificación.

En los supuestos a que se refiere el inciso a) del artículo 15ª de la Ley 14.250, conocerá en el mismo el Ministerio de Trabajo y Previsión. En los casos previstos en el inciso b) entenderá en la apelación el Director Nacional de Trabajo y Acción Social Directa si la resolución hubiere sido dictada por una comisión con sede en la Capital o el Delegado Regional que corresponda cuando la comisión funcione fuera de la Capital Federal. La decisión que se dicte será irrecurrible.

DEL CAMPO DE APLICACION DE LA LEY

ARTICULO 18ª.- (Art. 19ª - Ley 14.250) "La reglamentación determinará en qué medida la presente ley se aplicará a actividades que, dadas sus características particulares, tengan en vigencia ordenamientos legales o reglamentarios vinculados con la misma materia".

Hasta tanto nuevas circunstancias hagan aconsejable su regulación por el régimen de la Ley 14.250, continuarán regiéndose por los sistemas adoptados en los ordenamientos en vigencia las siguientes actividades:

1) La prestación de servicios a que se refiere el Decreto Nº 28.169/44 (Ley 12.921);

2) Las actividades cuyo régimen prevé la Ley 13.020;

3) Las remuneraciones de los trabajadores a domicilio (Ley 13.713)

4) El régimen de trabajo de los choferes particulares.

ARTICULO 19º.- No se regulará mediante convenciones colectivas el régimen de trabajo del personal ocupado por la Administración Pública -Nacional, Provincial o Municipal- con excepción del de aquellas actividades donde por acto expreso del poder público, en cada caso, se admita su aplicación.

ARTICULO 20º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Trabajo y Previsión, de Justicia, de Asuntos Económicos y de Asuntos Técnicos.

ARTICULO 21º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.-

DECRETO Nº 6.582.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 395.-

EJERCICIO - FONDO DE ESTIMULO - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

MEMORANDUM Nº 2.162

Para información del señor Director General
de Contabilidad y Administración

El artículo 108ª de la Ley nº 11.683 (t.o. 1956), determina en lo relacionado con el "fondo de estímulo" que "se rendirá cuenta en las fechas fijadas para el cierre del ejercicio, procediéndose dentro de los quince días, a la devolución del sobrante, si lo hubiere, a la Tesorería General de la Nación".

Frente a esta norma y atento lo prescripto en materia de cierre de ejercicio por la Ley de Contabilidad y disposiciones concordantes dictadas por el Tribunal de Cuentas, la gestión promovida por la Dirección General Impositiva solo podría ser resuelta mediante el dictado de un decreto-ley modificatorio del citado artículo 108ª.

Pero al margen de dicho aspecto que es meramente formal, y en cuanto al fondo del problema planteado, este Departamento, entiende que no existen razones suficientes, o por lo menos ellas no surjen de la presentación en estudio, que justifique, el dictado de un acto de tal naturaleza, cuyo único objeto sería permitir que las liquidaciones del "fondo de estímulo" se continúen practicando en el mes de diciembre de cada año y no en el de octubre como correspondería en virtud de las nuevas disposiciones. En efecto, si los ingresos por las recaudaciones fiscales se efectúan con sujeción al régimen del ejercicio financiero, no se ve la causa por la cual la liquidación del fondo de estímulo no puede efectuarse sobre la base de los ingresos que se produzcan durante ese período o sea, desde el 1ª de noviembre al 31 de octubre. La anualidad de la

distribución se mantiene de todas maneras inalterable y sin desmedro de lo estipulado por el artículo 7ª de la citada ley nª 11.683.

Por ello este Departamento no considera necesario el pronunciamiento solicitado, sin perjuicio de lo cual y en razón de la índole de la cuestión planteada aconseja oir la opinión de la Dirección General de Finanzas y del Tribunal de Cuentas de la Nación.-

Buenos Aires, octubre 1 de 1957.-

Fdo. NORBERTO P. DENARI
Jefe de Departamento

P. nª 2.163/57

///nos Aires, 2 de octubre de 1957.-

De acuerdo con el informe que antecede, pase a la Dirección General de Finanzas, solicitándole quiera emitir su opinión.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General
de Contabilidad y Administración

MEMORANDUM PARA LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Con referencia al problema planteado por la Dirección General Impositiva a fs.1 de las presentes actuaciones, esta Dirección General debe manifestar que comparte -sobre el par-

ticular la opinión que sostiene esa Dirección General de Contabilidad y Administración. En efecto, si el artículo 108º de la Ley nº 11.683 determina que en lo referente al fondo estímulo, se rendirá cuenta de su inversión en las fechas establecidas para el cierre del ejercicio- que en la actualidad es el 31 de octubre de cada año, se entiende que en ese aspecto corresponde adecuar la distribución de tales beneficios a las nuevas normas establecidas por el Decreto-Ley nº 23.354/56, más aún si se tiene en cuenta que las recaudaciones fiscales -sobre cuya base se liquida el fondo estímulo- se ajustan al régimen legal que rige el término del ejercicio financiero.-

Fdo. ALVARO OSCAR VISCARGUENAGA
Subdirector General de Finanzas

Expte. nº 7.980/57 - D.G.Impositiva
Ref. Liquidación Fondo Estímulo.-

P.Nº 2.677/57

///nos Aires, noviembre 18 de 1957.-

Pase al Tribunal de Cuentas de la Nación estimándole quiera servirse emitir opinión.
Dése a la presente carácter de atenta nota de envío.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA
Ministro de Hacienda de la Nación

Expediente Nº 32.224 - 1957 TCN
Providencia Nº 13.644 - 1957
Presupuesto e Incompatibilidades

///nos Aires, 11 de diciembre de 1957.-

Tratan las presentes actuaciones acerca del planteo formulado por la Dirección General Impositiva, vinculado con la liquidación del "fondo estímulo" previsto por las leyes nos. 11.672 (edición 1943) y 11.683 (t.o. 1956) y decreto-ley número 23.653/56. Sobre el particular, la aludida repartición entiende que, a fin de evitar los inconvenientes que podrían derivarse de la diferencia entre la fecha de clausura del período de recaudación y la del cierre del ejercicio, correspondería que por conducto del Ministerio citado, se dicte una disposición legal autorizando la liquidación de aquel beneficio tomando por base el año calendario.

Este Tribunal de Cuentas de la Nación al ponderar las argumentaciones formuladas en las presentes actuaciones por los organismos intervinientes, frente a las determinaciones de la Ley nº 11.683 (t.o. 1956) y de la Ley de Contabilidad, como así también con relación a los inconvenientes que según la Repartición mencionada emergerían del cumplimiento estricto de las citadas normas legales, comparte por sus fundamentos los informes de la Dirección General de Contabilidad y Administración (fs. 7) y de la Dirección General de Finanzas (fs. 9), cuyos términos se dan aquí por reproducidos en obsequio a la brevedad.

Con lo expuesto, vuelvan estas actuaciones al Ministerio de Hacienda de la Nación, asignando a la presente el carácter de atenta nota de envío.-

Fdo. DAMIAN FIGUEROA
Presidente del
Tribunal de Cuentas de la Nación

Expediente nº 7.980/57 - Dirección General Impositiva - Liquidación "Fondo de estímulo".-

///nos Aires, 23 de diciembre de 1957.-

Visto y de conformidad con lo manifestado por la Dirección

General de Contabilidad y Administración a fojas 7/8, la Dirección General de Finanzas a fojas 9 y el Tribunal de Cuentas de la Nación a fojas 11, vuelva a la Dirección General Impositiva llevando a su conocimiento que, en mérito a las conclusiones a que han arribado los referidos organismos, este Ministerio considera que la distribución de los beneficios del "fondo de estímulo" debe adecuarse a las nuevas normas establecidas por el decreto-ley nº 23.354/56, en materia de cierre de ejercicio.-

Fdo. FRANCISCO R. AGUILAR
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 396.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - ORDENES DE DISPOSICION - LIBRAMIENTOS

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1957.-

Visto lo dispuesto en la resolución nº 997/57 (D.A.M.H. 286), y

CONSIDERANDO:

Que por dicha resolución se establece que "las entregas de fondos dispuestas por el Poder Ejecutivo, cualquiera sea su origen y beneficiario, deberán ser caracterizadas como órdenes de disposición, pero deberán contener, cuando con cargo a las mismas no corresponda la emisión de libramientos, todos los requisitos que para éstos prescriba el artículo 33 de la ley de contabilidad";

Que por decreto nº 13.100/57 se ha reglamentado, entre otros, el capítulo II de la ley de contabilidad;

Que como anexos de dicho reglamento se han aprobado los modelos de las distintas órdenes de disposición y libramientos que deben ser utilizados, según su naturaleza, para hacer efectivos los créditos del presupuesto general;

Que el artículo 31 de la ley de contabilidad dispone: "Las órdenes de disposición de fondos caducarán en su disponibilidad en cuanto a los saldos no comprometidos en el ejercicio y no podrán ser rehabilitadas o prorrogadas";

Que el segundo párrafo del artículo 37 de la misma ley determina que los libramientos caducarán al año de su entrada en la Tesorería General;

Que las órdenes de disposición a que se refiere la resolución nº 997 pueden ser, como ya se puntualizó, de características singulares, cuando con cargo a las mismas no corresponda la emisión de libramientos;

Que en tales casos se exige que las órdenes de disposición contengan todos los requisitos que para los libramientos prescribe el artículo 33 de la ley de contabilidad;

Que las formas y términos distintos fijados para el cómputo de la caducidad de las órdenes de disposición y de los libramientos hace necesario determinar el criterio que se ha de seguir en el caso particular referido;

Que las órdenes de disposición con todos los requisitos de los libramientos sólo pueden emitirse cuando han sido liquidadas las respectivas erogaciones;

Por ello y en uso de la facultad acordada por el artículo 84, inciso o) de la ley de contabilidad;

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Las órdenes de disposición con cargo a las cuales no corresponda la emisión de libramientos, pero que contengan todos los requisitos exigidos por el artículo 33 de la ley de contabilidad, caducarán al año de su entrada en la Tesorería General.

ARTICULO 2º.- Hágase conocer esta resolución a los servicios administrativos; dése al Digesto Administrativo y cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli
José M. Fernández Fariña - Wifredo
Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan
Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 2.150.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 397.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - AUDITORIAS - EMPRESAS DEL ESTADO - BALANCES

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1957.-

Visto lo dispuesto por el inciso f, del artículo 84 de la ley de contabilidad y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7º del decreto nº 5.883/55, reglamentario de la ley 13.653 (t.o.) establece que con conocimiento de la Contaduría General de la Nación, las empresas del Estado deberán elevar al ministerio del ramo;

a) Antes del 15 de cada mes el balance de sumas y saldos correspondiente al mes anterior, y

b) Trimestralmente, un estado de ejecución del presupuesto de explotación y un informe sucinto de la marcha de las actividades y de la situación económico-financiera de la entidad.

Que a los efectos de agilitar la intervención de este Tribunal, que ha sustituído a la Contaduría General de la Nación, en cuanto a la fiscalización de las empresas del Estado, de acuerdo con la disposición mencionada de la ley de contabilidad, resulta conveniente que el documento a que se refiere el punto a) del artículo 7º referido, se diligencie directamente por el Servicio de Auditoría General sobre la base de la información producida por la Auditoría respectiva;

Por todo ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Déjase establecido que la intervención del Tribunal de Cuentas en el instrumento que prescribe el apartado a) del artículo 7º del decreto nº 5.883/55, reglamentario de la ley 13.653 (t.o.), será llevada a cabo por intermedio del Servicio de Auditoría General, a cuyo efecto las actuaciones remitidas a su consideración por la Auditoría actuante, serán devueltas con el informe pertinente por el citado Servicio a la representación respectiva para su traslado a la empresa del Estado o entidad dependiente de la misma, según sea el caso, a los fines del trámite que prescribe el artículo 7º citado.
ARTICULO 2º.- Dése al Digesto Administrativo y, cumplido, archívese.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli
José M. Fernández Fariña - Wifredo
Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - César Aguirre Legarreta -Secretario-

RESOLUCION Nº 2.158.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 398.-

COEFICIENTES

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1957.-

Visto que por Decreto-Ley número 8.841 dictado el 31 de julio de 1957 se creó la Embajada de la República en Indonesia, y

CONSIDERANDO:

Que con arreglo a lo dispuesto por la Ley nº 13.570 procede fijar el coeficiente aplicable a las remesas de haberes y gastos de los agentes del Estado que sean destinados a prestar servicios en dicho país;

Que conforme con los antecedentes que obran en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, corresponde establecer el coeficiente a aplicarse a las citadas remesas;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Fíjase en seis con treinta (6,30) el coeficiente para Indonesia e incorpórese dicha disposición al artículo 1º del Decreto nº 11.919 del 4 de julio de 1956.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Relaciones Exteriores y Culto y de Hacienda de la Nación.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Alfonso de Laferrére - Adalbert Krieger Vasena.-

DECRETO Nº 15.647.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 399.-

VIATICOS - IMPUTACION - REINTEGRO DE GASTOS - GASTOS EN PERSONAL

Expediente Nº 5.175 - 1957.-

///nos Aires, 13 de diciembre de 1957.-

Visto el planteo formulado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería respecto a la imputación de las erogaciones resultantes de aplicar la Resolución nº 105/57 (D.A.M.H.248) de este Ministerio (fs.6), que admite el reintegro de gastos, sin perjuicio de la asignación que corresponde en concepto de viático, cuando el agente comisionado deba desplazarse fuera de un centro urbano en el que se halla desempeñando sus funciones, y atendiendo a las disposiciones del Decreto número 18.989/56 y a las atribuciones que el mismo le acuerda en su artículo 13, este Departamento es de opinión que el gasto en cuestión debe imputarse a la partida "viáticos y movilidad".

Con la constancia de que la presente tiene carácter de resolución aclaratoria en los términos del artículo 13 del Decreto nº 18.989/56, vuelva al Tribunal de Cuentas de la Nación a los fines que estime corresponder.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA
Ministro de Hacienda de la Nación

RESOLUCION Nº 314.-

Poder Ejecutivo Nacional
MINISTERIO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 400.-

BANCOS - FISCALIZACION - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1957.-

Visto los decretos leyes 13.126, 13.128, 13.129 y 13.130, de fecha octubre 22 de 1957, que aprueban las cartas orgánicas de los bancos: Central, Hipotecario, de la Nación e Industrial, respectivamente y,

CONSIDERANDO:

Que en general dichas cartas orgánicas acuerdan a sus respectivos directorios la facultad de aprobar sus propios presupuestos y sus balances y memorias y en particular determinan, que al Banco Central no le comprenden las disposiciones de la ley de contabilidad y que el Banco Industrial, a los efectos de la nombrada ley, sólo estará sometido al examen anual de la cuenta de inversión;

Que, en consecuencia, con excepción del Banco Central, la fiscalización de los demás organismos del sistema bancario continúa a cargo del Tribunal de Cuentas, pero deberá ser ejercida "a posteriori".

Que con respecto al problema de fondo que plantean dichas disposiciones, el Tribunal ya ha hecho conocer sus puntos de vista por memorándum elevado al Poder Ejecutivo;

Que hasta tanto se dicten por autoridad competente las disposiciones pertinentes, corresponde suprimir las delegaciones permanentes de este Tribunal destacadas ante los referidos organismos, toda vez que las particularidades señaladas en el primer considerando torna inncesario su mantenimiento;

Que, en su lugar, procede crear una fiscalía para el despacho de las cuentas de esos organismos, como así también para las intervenciones que requieran a este Tribunal por diversas causas y en particular, cada vez que necesiten retirar fon

dos de la Tesorería General de la Nación;

Que la carta orgánica de la Caja Nacional de Ahorro Postal coloca a este organismo en las mismas condiciones de los demás que integran el sistema bancario oficial;

Por ello y de conformidad con la acordada de la fecha,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Suprimir las delegaciones permanentes destacadas ante los bancos: Central de la República Argentina, Hipotecario Nacional, de la Nación Argentina e Industrial de la República Argentina, como así también la fiscalía permanente ante la Caja Nacional de Ahorro Postal.

ARTICULO 2º.- Crear la fiscalía SISTEMA BANCARIO OFICIAL para el despacho de las rendiciones de cuentas de los organismos citados en el artículo anterior, con excepción del Banco Central de la República Argentina.

ARTICULO 3º.- Las intervenciones que, por diversas causas, requieran dichos organismos estarán a cargo de la nombrada fiscalía.

ARTICULO 4º.- Comunicar la presente resolución, darla al Digesto Administrativo y archivarla.-

DAMIAN FIGUEROA - Rodolfo J. Tarelli - José M. Fernández Fariña - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 2.261.-

Centro de Documentación e Información

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
Presidencia de la Nación

Este documento fue digitalizado por el
Centro de Documentación e Información
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Ciudad Autónoma de Bs. As. 2016

http://cdi.mecon.gob.ar/